

Máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios Accesibles para la Sociedad de la Información

Trabajo Fin de Máster		
Título	La creación de la Compañía Telefónica Nacional de España vista a través de su Consejo de Administración	
Autor	Luis Blanco Domínguez	
Tutor	Antonio Pérez Yuste	VºBº.
Ponente		
Tribunal		
Presidente	Florentino Jiménez Muñoz	
Secretario	Irina María Argüelles Álvarez	
Vocal	César Briso Rodríguez	
Fecha de lectura	01-Jul-2011	
Calificación		

El Secretario: Irina María Argüelles Álvarez

A mi abuela Esperanza.



Agradecimientos

A mi tutor Antonio, por haberme ofrecido este proyecto, por presentarme una historia que me atrapó desde el principio, por haberme servido de inspiración.

A María Victoria Cerezo, por sus gestiones en Telefónica para poder consultar las actas; a Lucía Rey, por habérmelas facilitado siempre con una sonrisa; a la empresa, por haberme permitido el acceso a unos documentos con tanto valor histórico.

A mi hermano y a mi cuñada por su apoyo y por sus consejos, por haberme dado la mayor alegría de estos meses.

A mis padres, por haber vivido conmigo todo este proceso, por su confianza y cariño y por haberme enseñado la importancia del esfuerzo; por la lectura del Trabajo y las correcciones.

A todos los amigos que me han dado ánimos, me han ayudado a “desconectar” algún rato e incluso me han hecho regalos de cumpleaños relacionados con la investigación. Son muchos, pero quiero acordarme especialmente de Elizabeth, Fran, Germán, Igor, Irene, Kris, Laura, María Eugenia, Patri, Raúl, Sara Díaz y Sara Núñez.

A Ángela, por haber estado ahí durante todo este tiempo, por escuchar mis historias sobre Telefónica y por sus palabras de aliento en los momentos difíciles.

¡Gracias!

Índice

Agradecimientos	i
Índice	iii
Índice de figuras	xvii
Resumen	xix
Summary	xxi
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1. Motivación y objetivos del Trabajo	3
1.2. Estructura del Trabajo Fin de Máster	5
2 CONTEXTO	9
2.1. Los primeros años de la telefonía	11
2.2. El teléfono en España	14
2.2.1. Legislación telefónica en el siglo XIX	16
2.2.2. La Ley de Telecomunicaciones de 1907	19
2.2.3. Legislación entre 1907 y 1923	21
2.2.4. Los proyectos frustrados	24
2.2.5. Las compañías telefónicas	27
2.2.6. Las demandas del Cuerpo de Telégrafos	31
2.2.7. Resumen del caso español	36
2.3. La ITT y su llegada a España	37
2.3.1. Sosthenes Behn	37

2.3.2. El nacimiento de la ITT	42
2.3.3. Los proyectos de Gumersindo Rico	45
2.3.4. Los viajes de Sosthenes Behn a Europa	49
2.3.5. Los primeros pasos de la ITT en España	51
2.4. Septiembre y octubre de 1923	57
2.4.1. El golpe de Estado de Primo de Rivera	57
2.4.2. El nuevo Director General	61
2.4.3. La actitud de la ITT con el nuevo régimen	64
3 CRONOLOGÍA	67
3.1. Viernes, 26 de octubre de 1923	69
3.2. Sábado, 27 de octubre de 1923	74
3.3. Martes, 30 de octubre de 1923	80
3.4. Sábado, 3 de noviembre de 1923	82
3.5. Lunes, 5 de noviembre de 1923	84
3.6. Martes, 6 de noviembre de 1923	88
3.7. Martes, 13 de noviembre de 1923	89
3.8. Martes, 20 de noviembre de 1923	91
3.9. Viernes, 30 de noviembre de 1923	95
3.10. Lunes, 10 de diciembre de 1923	98
3.11. Jueves, 13 de diciembre de 1923	102
3.12. Sábado, 15 de diciembre de 1923	105

3.13. Jueves, 20 de diciembre de 1923	107
3.14. Viernes, 21 de diciembre de 1923	109
3.15. Lunes, 24 de diciembre de 1923	109
3.16. Domingo, 30 de diciembre de 1923	115
3.17. Martes, 1 de enero de 1924	117
3.18. Miércoles, 2 de enero de 1924	119
3.19. Jueves, 10 de enero de 1924	120
3.20. Sábado, 12 de enero de 1924	122
3.21. Jueves, 17 de enero de 1924	123
3.22. Lunes, 21 de enero de 1924	129
3.23. Miércoles, 30 de enero de 1924	132
3.24. Sábado, 2 de febrero de 1924	138
3.25. Domingo, 3 de febrero de 1924	140
3.26. Miércoles, 20 de febrero de 1924	142
3.27. Miércoles, 27 de febrero de 1924	143
3.28. Sábado, 1 de marzo de 1924	144
3.29. Sábado, 8 de marzo de 1924	145
3.30. Jueves, 20 de marzo de 1924	146
3.31. Viernes, 28 de marzo de 1924	148
3.32. Sábado, 5 de abril de 1924	150
3.33. Lunes, 7 de abril de 1924	153
3.34. Martes, 8 de abril de 1924	154

3.35. Lunes, 14 de abril de 1924	156
3.36. Sábado, 19 de abril de 1924	158
3.37. Lunes, 21 de abril de 1924	168
3.38. Viernes, 25 de abril de 1924	171
3.39. Viernes, 9 de mayo de 1924	172
3.40. Domingo, 11 de mayo de 1924	174
3.41. Lunes, 12 de mayo de 1924	178
3.42. Martes, 20 de mayo de 1924	180
3.43. Domingo, 25 de mayo de 1924	181
3.44. Sábado, 31 de mayo de 1924	183
3.45. Domingo, 1 de junio de 1924	186
3.46. Sábado, 21 de junio de 1924	186
3.47. Sábado, 28 de junio de 1924	188
3.48. Domingo, 29 de junio de 1924	192
3.49. Jueves, 3 de julio de 1924	192
3.50. Viernes, 11 de julio de 1924	193
3.51. Lunes, 14 de julio de 1924	194
3.52. Viernes, 25 de julio de 1924	197
3.53. Jueves, 31 de julio de 1924	199
3.54. Lunes, 11 de agosto de 1924	203
3.55. Miércoles, 13 de agosto de 1924	209
3.56. Jueves, 14 de agosto de 1924	211

3.57. Sábado, 16 de agosto de 1924	216
3.58. Lunes, 18 de agosto de 1924	218
3.59. Miércoles, 20 de agosto de 1924	220
3.60. Jueves, 21 de agosto de 1924	223
3.61. Lunes, 25 de agosto de 1924	226
3.62. Miércoles, 27 de agosto de 1924	229
3.63. Viernes, 29 de agosto de 1924	230
3.64. Lunes, 31 de agosto de 1924	244
3.65. Miércoles, 3 de septiembre de 1924	245
3.66. Viernes, 12 de septiembre de 1924	247
3.67. Sábado, 13 de septiembre de 1924	250
3.68. Lunes, 15 de septiembre de 1924	252
3.69. Viernes, 19 de septiembre de 1924	254
3.70. Viernes, 26 de septiembre de 1924	255
3.71. Sábado, 27 de septiembre de 1924	257
3.72. Martes, 30 de septiembre de 1924	258
3.73. Miércoles, 1 de octubre de 1924	259
3.74. Viernes, 3 de octubre de 1924	262
3.75. Sábado, 4 de octubre de 1924	263
3.76. Martes, 7 de octubre de 1924	265
3.77. Miércoles, 8 de octubre de 1924	267
3.78. Viernes, 10 de octubre de 1924	271

3.79. Domingo, 12 de octubre de 1924	272
3.80. Miércoles, 15 de octubre de 1924	273
3.81. Jueves, 16 de octubre de 1924	275
3.82. Sábado, 18 de octubre de 1924	276
3.83. Lunes, 20 de octubre de 1924	279
3.84. Miércoles, 22 de octubre de 1924	281
3.85. Jueves, 23 de octubre de 1924	283
3.86. Lunes, 27 de octubre de 1924	283
3.87. Miércoles, 29 de octubre de 1924	285
3.88. Sábado, 1 de noviembre de 1924	287
3.89. Lunes, 3 de noviembre de 1924	288
3.90. Miércoles, 5 de noviembre de 1924	290
3.91. Jueves, 6 de noviembre de 1924	292
3.92. Miércoles, 12 de noviembre de 1924	293
3.93. Martes, 18 de noviembre de 1924	295
3.94. Miércoles, 19 de noviembre de 1924	296
3.95. Jueves, 20 de noviembre de 1924	301
3.96. Sábado, 22 de noviembre de 1924	302
3.97. Miércoles, 26 de noviembre de 1924	302
3.98. Viernes, 28 de noviembre de 1924	311
3.99. Domingo, 30 de noviembre de 1924	312
3.100. Lunes, 1 de diciembre de 1924	314

3.101. Miércoles, 3 de diciembre de 1924	318
3.102. Jueves, 4 de diciembre de 1924	320
3.103. Viernes, 5 de diciembre de 1924	321
3.104. Jueves, 11 de diciembre de 1924	322
3.105. Viernes, 12 de diciembre de 1924	323
3.106. Lunes, 15 de diciembre de 1924	324
3.107. Martes, 16 de diciembre de 1924	326
3.108. Miércoles, 24 de diciembre de 1924	327
3.109. Jueves, 25 de diciembre de 1924	329
3.110. Domingo, 28 de diciembre de 1924	330
3.111. Lunes, 29 de diciembre de 1924	331
3.112. Miércoles, 31 de diciembre de 1924	333
3.113. Sábado, 3 de enero de 1925	336
3.114. Miércoles, 7 de enero de 1925	337
3.115. Miércoles, 14 de enero de 1925	339
3.116. Miércoles, 21 de enero de 1925	341
3.117. Jueves, 22 de enero de 1925	341
3.118. Miércoles, 28 de enero de 1925	344
3.119. Jueves, 29 de enero de 1925	345
3.120. Viernes, 30 de enero de 1925	346
3.121. Sábado, 31 de enero de 1925	349
3.122. Lunes, 2 de febrero de 1925	353

3.123. Miércoles, 4 de febrero de 1925	355
3.124. Sábado, 7 de febrero de 1925	358
3.125. Lunes, 9 de febrero de 1925	359
3.126. Miércoles, 11 de febrero de 1925	362
3.127. Jueves, 12 de febrero de 1925	363
3.128. Viernes, 13 de febrero de 1925	368
3.129. Martes, 17 de febrero de 1925	369
3.130. Miércoles, 18 de febrero de 1925	371
3.131. Jueves, 26 de febrero de 1925	372
3.132. Miércoles, 4 de marzo de 1925	376
3.133. Miércoles, 11 de marzo de 1925	378
3.134. Martes, 17 de marzo de 1925	378
3.135. Miércoles, 18 de marzo de 1925	379
3.136. Viernes, 20 de marzo de 1925	382
3.137. Sábado, 21 de marzo de 1925	384
3.138. Lunes, 23 de marzo de 1925	388
3.139. Miércoles, 25 de marzo de 1925	391
3.140. Jueves, 26 de marzo de 1925	392
3.141. Lunes, 30 de marzo de 1925	394
3.142. Martes, 31 de marzo de 1925	396
3.143. Miércoles, 1 de abril de 1925	396
3.144. Miércoles, 8 de abril de 1925	398

3.145. Miércoles, 15 de abril de 1925	399
3.146. Sábado, 18 de abril de 1925	402
3.147. Martes, 21 de abril de 1925	403
3.148. Miércoles, 22 de abril de 1925	406
3.149. Viernes, 24 de abril de 1925	411
3.150. Lunes, 27 de abril de 1925	414
3.151. Martes, 28 de abril de 1925	416
3.152. Miércoles, 29 de abril de 1925	417
3.153. Domingo, 3 de mayo de 1925	418
3.154. Lunes, 4 de mayo de 1925	420
3.155. Martes, 5 de mayo de 1925	422
3.156. Miércoles, 6 de mayo de 1925	423
3.157. Viernes, 8 de mayo de 1925	426
3.158. Domingo, 10 de mayo de 1925	427
3.159. Miércoles, 13 de mayo de 1925	427
3.160. Sábado, 16 de mayo de 1925	430
3.161. Miércoles, 20 de mayo de 1925	431
3.162. Martes, 26 de mayo de 1925	433
3.163. Lunes, 1 de junio de 1925	435
3.164. Martes, 2 de junio de 1925	436
3.165. Viernes, 5 de junio de 1925	438
3.166. Lunes, 8 de junio de 1925	439

3.167. Miércoles, 10 de junio de 1925	440
3.168. Miércoles, 17 de junio de 1925	441
3.169. Miércoles, 24 de junio de 1925	442
3.170. Viernes, 26 de junio de 1925	443
3.171. Domingo, 28 de junio de 1925	443
3.172. Martes, 30 de junio de 1925	444
3.173. Miércoles, 1 de julio de 1925	445
3.174. Viernes, 3 de julio de 1925	446
3.175. Miércoles, 8 de julio de 1925	447
3.176. Miércoles, 15 de julio de 1925	448
3.177. Miércoles, 22 de julio de 1925	450
3.178. Jueves, 23 de julio de 1925	455
3.179. Lunes, 27 de julio de 1925	456
3.180. Miércoles, 29 de julio de 1925	458
3.181. Viernes, 31 de julio de 1925	461
3.182. Sábado, 1 de agosto de 1925	461
3.183. Miércoles, 5 de agosto de 1925	464
3.184. Miércoles, 12 de agosto de 1925	465
3.185. Lunes, 17 de agosto de 1925	466
3.186. Jueves, 20 de agosto de 1925	470
3.187. Viernes, 21 de agosto de 1925	475
3.188. Jueves, 27 de agosto de 1925	475

3.189. Sábado, 29 de agosto de 1925	478
3.190. Lunes, 31 de agosto de 1925	478
3.191. Martes, 1 de septiembre de 1925	481
3.192. Miércoles, 2 de septiembre de 1925	481
3.193. Domingo, 6 de septiembre de 1925	482
3.194. Lunes, 14 de septiembre de 1925	483
3.195. Jueves, 17 de septiembre de 1925	486
3.196. Domingo, 20 de septiembre de 1925	486
3.197. Jueves, 24 de septiembre de 1925	487
3.198. Viernes, 25 de septiembre de 1925	488
3.199. Jueves, 1 de octubre de 1925	489
3.200. Viernes, 2 de octubre de 1925	491
3.201. Lunes, 5 de octubre de 1925	491
3.202. Jueves, 8 de octubre de 1925	494
3.203. Miércoles, 14 de octubre de 1925	495
3.204. Viernes, 16 de octubre de 1925	495
3.205. Miércoles, 21 de octubre de 1925	497
3.206. Lunes, 26 de octubre de 1925	498
3.207. Miércoles, 28 de octubre de 1925	506
3.208. Jueves, 29 de octubre de 1925	516
3.209. Domingo, 1 de noviembre de 1925	516
3.210. Miércoles, 4 de noviembre de 1925	518

3.211. Jueves, 5 de noviembre de 1925	519
3.212. Miércoles, 11 de noviembre de 1925	521
3.213. Viernes, 13 de noviembre de 1925	522
3.214. Sábado, 14 de noviembre de 1925	524
3.215. Martes, 17 de noviembre de 1925	526
3.216. Miércoles, 18 de noviembre de 1925	527
3.217. Sábado, 21 de noviembre de 1925	528
3.218. Miércoles, 25 de noviembre de 1925	530
3.219. Jueves, 26 de noviembre de 1925	532
3.220. Lunes, 30 de noviembre de 1925	533
3.221. Miércoles, 2 de diciembre de 1925	536
3.222. Miércoles, 9 de diciembre de 1925	537
3.223. Miércoles, 16 de diciembre de 1925	540
3.224. Jueves, 17 de diciembre de 1925	542
3.225. Martes, 22 de diciembre de 1925	543
3.226. Miércoles, 23 de diciembre de 1925	544
3.227. Lunes, 28 de diciembre de 1925	545
3.228. Miércoles, 30 de diciembre de 1925	545
3.229. Jueves, 31 de diciembre de 1925	546
4 CONCLUSIONES	549
4.1. Conclusiones finales del Trabajo	551



4.2. Líneas de trabajo futuras	561
5 BIBLIOGRAFÍA	565
5.1. Archivos	567
5.2. Libros	567
5.3. Tesis doctorales	569
5.4. Artículos y conferencias	569
5.5. Periódicos y revistas	571
5.6. Documentos	573
5.7. Páginas web	575

Índice de figuras

Figura 1.	Teléfono manual de sobremesa, 1885. Fuente: Cambio tecnológico en la telefonía de Cataluña, Ángel Calvo Calvo, 2008.	16
Figura 2.	Sosthenes Behn. Fuente: Electrical Communication, volumen 34, nº 2, junio 1957.	38
Figura 3.	Viñeta de la novela gráfica “Chico & Rita” ambientada en La Habana de finales de los años 40. Uno de los locales que aparece en el fondo se llama “Two Broders Bar” o “Bar Dos Hermanos”, que no eran otros que Hernand y Sosthenes Behn, conocidos empresarios del área del Caribe. Fuente: Chico & Rita, Javier Mariscal y Fernando Trueba, 2010.	40
Figura 4.	El rey Alfonso XIII y el general Miguel Primo de Rivera	60
Figura 5.	José Tafur Funés. Fuente: Electra, nº 3, 30 de noviembre de 1923	62
Figura 6.	Primer teléfono previo pago en el “Viena Park” del Parque del Retiro, 1928. Fuente: Telefónica	90
Figura 7.	Aspecto de la torre de cables de la antigua central de la calle Mayor de Madrid durante su desmontaje. Fuente: Telefónica.....	198
Figura 8.	Edificio de la avenida Conde de Peñalver, número 5, sede de la CTNE desde 1924 a 1929. Fuente: España y el teléfono, ITT, 1925.....	261
Figura 9.	Amarre del primer cable telefónico entre Algeciras y Ceuta, 1924. Fuente: Breve cronología de la telecomunicación española, Domingo Martín de la Vega.	330
Figura 10.	a) Logotipo de la CTNE. Fuente: ABC, 31 de julio 1925, p. 15. b) Logotipo de la ITT. Fuente: España y el teléfono, ITT, 1925.....	340
Figura 11.	“La ciudad Telefónica”. Composición hecha con los nuevos edificios construidos y en construcción por la CTNE, 1928.....	386
Figura 12.	Junta general de accionistas de la CTNE, 1926. Fuente: Telefónica....	390

Figura 13. Instalación de líneas interurbanas, 1925. Fuente: Telefónica.	419
Figura 14. Proyecto ganador del concurso del edificio para la plaza de Cataluña en Barcelona: “Emisor”, obra de Aguirre y de los Santos.....	453
Figura 15. Obras del edificio de la compañía en la Gran Vía, Madrid. Fuente: Telefónica.	514
Figura 16. El edificio Telefónica de Gran Vía recién terminado, finales de 1929. Fuente: Telefónica.	515
Figura 17. Obras del edificio Telefónica de la Gran Vía, 1926. En la parte derecha se puede apreciar el edificio provisional que alberga la primera central automática. Fuente: Telefónica.....	524
Figura 18. Canalización de cables para el servicio automático en Madrid, 1926. Fuente: Telefónica.	543

Resumen

La creación de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), en abril de 1924, y la concesión del sistema telefónico nacional a esta compañía, cuatro meses más tarde, es asunto que sigue despertando el interés de los investigadores, por cuanto ésta se produjo mediante adjudicación directa, sin subasta ni concurso, a partir de la intervención directa de la multinacional americana ITT, presidida por Sosthenes Behn.

El Trabajo examina la cronología de los hechos desde el punto de vista de las actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la CTNE, correspondientes a los años 1924 y 1925, tratando de abarcar un periodo de tiempo crucial para la historia de las telecomunicaciones de nuestro país. Este periodo comprende desde la llegada de Sosthenes Behn, en 1923, hasta finales de 1925, momento en el cual la CTNE había adquirido los derechos de explotación de la mayor parte de las redes telefónicas que se encontraban anteriormente en manos públicas y privadas.

Quedan documentadas todas las visitas de Sosthenes Behn a España durante aquel tiempo y las gestiones que llevó a cabo en cada una de ellas para la consecución de sus objetivos. El Trabajo estudia el proceso inicial de creación de la empresa española y de adjudicación del servicio telefónico nacional, examinando con detenimiento los contratos privados suscritos entre la ITT y la CTNE. Se adentra además, de mano de las actas de sus órganos directivos, en la primera etapa del negocio de la compañía, poniendo en contexto la información que ya se conocía sobre la marcha de sus proyectos y que hasta ahora había sido estudiada por medio de otros documentos históricos. Las actas han permitido conocer las decisiones tomadas por la Dirección de la compañía durante estos primeros meses de actividad y los motivos que llevaron a emprender cada una de estas acciones.

Summary

The creation of the *Compañía Telefónica Nacional de España* (CTNE), in April of 1924, and the concession of the national telephone system to this company, four months later, is a subject that continues being of interest to investigators, inasmuch as this one took place by means of direct awarding, without auction nor selection process, from the direct intervention of the American multinational ITT, presided over by Sosthenes Behn.

The Piece examines the chronology of the facts from the point of view of minutes of the Council of Administration and the Executive Committee of the CTNE, corresponding to the years 1924 and 1925, trying to include a period of time crucial to the history of the telecommunications in Spain. This period includes from the arrival of Sosthenes Behn, in 1923, to the end of 1925, moment when the CTNE had acquired the rights of operation to most of the wire nets that were previously in public and private hands.

All the visits from Sosthenes Behn to Spain during that time and the procedures that were carried out in each one of them for the attainment of their objectives are documented. The Piece studies the initial process of creation of the Spanish company and awarding of the national telephone service, examining with thoroughness private contracts subscribed between the ITT and the CTNE. In addition it goes into depth, following the minutes of the supervising agencies, in the first stage of the company's business, putting in context the information that was already known during its projects and that until now had been studied by means of other historical documents. The minutes have allowed to know the decisions taken by the Management of the company during these first months of activity and the reasons that took to take each one of these actions.

1

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación y objetivos del Trabajo

Si hubiera que señalar una entidad que haya marcado más que ninguna otra los designios de las telecomunicaciones en España, ésta ha sido sin duda la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), más tarde rebautizada simplemente como “Telefónica”. Sin embargo, poco se conocía sobre la fundación de la misma y sobre aquellos primeros hombres que hicieron posible su creación en 1924, hasta que en la pasada década, distintas investigaciones llevadas a cabo, han demostrado la hipótesis de que la empresa estadounidense *International Telephone and Telegraph Corporation* (ITT) estuvo activamente involucrada en la creación de la CTNE y de que controló sus movimientos y sus finanzas durante muchos años.

Esta hipótesis ha sido confirmada también gracias a las actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la compañía. Estos documentos, que se encuentran en posesión de la propia Telefónica, se habían mantenido en la más estricta reserva hasta hace pocos años y ha sido gracias al esfuerzo de investigadores como Adoración Álvaro Moya, Ángel Calvo Calvo o Antonio Pérez Yuste, que han podido salir a luz pública.

Este Trabajo Fin de Máster nació con la intención de estudiar el proceso de fundación y consolidación empresarial de la Compañía Telefónica Nacional de España, vistos a través de su Consejo de Administración y de su Comité Ejecutivo. A través de estas actas y de otros documentos históricos, así como de una bibliografía seleccionada, se ha querido reconstruir de la manera más precisa no sólo la creación de la CTNE, sino también su primer año y medio como concesionaria del sistema telefónico nacional. Junto a estas actas también se encuentran unos documentos de gran valor: los contratos privados firmados entre la CTNE y la multinacional estadounidense en abril y agosto de 1924.

Estas dos fechas son clave. El 19 de abril de 1924, un grupo de cinco empresarios españoles con experiencia prácticamente nula en el sector de las telecomunicaciones creaban la Compañía Telefónica Nacional de España, con un capital social de un millón de pesetas. Detrás de esta operación se encontraba la ITT, que durante un año estuvo estableciendo contactos al más alto nivel mientras desarrollaba un proyecto de telefonía para el país. Tras la convocatoria de una especie de concurso público para la valoración de proyectos para la reforma y modernización de la red telefónica y de un proceso de negociación que duró apenas cinco meses, el Estado firmó un contrato con la jovencísima CTNE el día 29 de agosto de 1924.

Gracias a este convenio, la compañía consiguió la adjudicación del servicio nacional en régimen de monopolio, con el fin de organizar, ampliar y reformar el precario servicio telefónico español. Ese mismo día, el capital social de la empresa ascendió a 115 millones de pesetas y la multinacional ITT se hizo con el control absoluto de la CTNE mediante la firma de dos nuevos contratos privados.

Las investigaciones que hasta el momento se han realizado contando con la valiosa información contenida en las actas del Consejo y del Comité Ejecutivo centran su estudio en esta primera etapa de la historia de la Telefónica, comprendida en los meses de primavera y verano de 1924: su fundación, el “concurso” convocado por el Estado, las negociaciones llevadas a cabo entre los directivos de la ITT y el Gobierno y la concesión final. No obstante, el auténtico trabajo de la CTNE comenzó después de aquella firma del contrato el día 29 de agosto de 1924, y los avatares por los que pasó la compañía durante sus primeros meses de verdadera vida empresarial no fueron pocos.

Este Trabajo Fin de Máster ha querido estudiar todo ese proceso inicial, pero también adentrarse, de la mano de las actas de estos órganos y de otros documentos históricos, en la primera etapa del negocio de la compañía, cuando sus planes comenzaron a despegar y tuvo que enfrentarse por fin al reto de hacerse con el control de la red telefónica española. Fue un periodo apasionante en el que la CTNE puso en práctica el proyecto de telefonía que la ITT había desarrollado meses antes, que además se pudo llevar a cabo de una manera más o menos cómoda para la empresa, ya que el contrato que había firmado con el Estado le otorgaba casi todos los derechos y le imponía muy pocos deberes.

Gracias a las actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo se han podido conocer las decisiones tomadas por la Dirección de la compañía durante estos primeros meses de actividad y los motivos que llevaron a emprender cada una de estas acciones. Esto nos ha permitido poner en contexto toda la información que ya se conocía sobre la empresa y la evolución de sus proyectos y que hasta ahora había sido estudiada gracias a otros muchos documentos históricos: prensa, revistas, memorias, artículos científicos, documentos oficiales del Estado y la Administración o incluso apuntes personales de los protagonistas. En esta investigación hemos querido ver esta marcha de la empresa “de puertas hacia dentro”, entendiendo el porqué de aquellas decisiones y el momento en el que se adoptaron. Este ha sido el motivo de haber empleado una estructura de estricto recorrido cronológico durante la elaboración de este Trabajo Fin de Máster, para entender a la perfección el verdadero desarrollo

que siguió cada uno de estos procesos en los que estuvo inmersa la compañía durante los años 1924 y 1925.

Esta investigación también ha querido profundizar en la influencia que en todo este proceso tuvo un personaje clave de la historia: el presidente de la ITT y auténtico cerebro de toda la operación, Sosthenes Behn. Diversos documentos históricos nos han permitido conocer las visitas que realizó a nuestro país durante el tiempo en el que se desarrolla nuestra investigación y las operaciones que realizó en cada una de ellas para hacerse con el negocio telefónico español y desarrollar su ambicioso plan. No en vano, el recorrido cronológico de nuestro trabajo comienza el día 26 de octubre de 1923, fecha en la que se produjo la primera reunión conocida entre el coronel Behn y el general Primo de Rivera, que había llegado al poder apenas un mes antes.

1.2. Estructura del Trabajo Fin de Máster

El Trabajo comienza con un capítulo en el que hemos querido poner en contexto todos los acontecimientos que vendrían después y que constituyen el núcleo de la investigación. Nuestro recorrido comienza en 1876, año en el que Alexander Graham Bell patentó el primer aparato comercial y continúa exponiendo el proceso de crecimiento de la telefonía a nivel mundial, para centrarnos después en el caso español. La llegada del teléfono a nuestro país fue muy temprana pero la reglamentación no ayudó a que el negocio prosperase como en otras naciones de nuestro entorno. Las normas no sólo tardaron en llegar, sino que además fueron de lo más erráticas, demostrando una clara desorientación en materia telefónica por parte de los gobiernos de la Restauración. En este capítulo hemos querido detenernos en la Ley de Telecomunicaciones de 1907 y en el Reglamento telefónico de 1920, que constituían el marco legislativo vigente cuando la ITT llegó a España, creó la CTNE y consiguió la adjudicación del servicio nacional. También se han dedicado dos apartados a dos de los protagonistas del mapa telefónico español: las compañías privadas que operaban redes antes de 1923 y el Cuerpo Nacional de Telégrafos.

Cincuenta años después de su invención, el teléfono en España se encontraba en un estado muy precario: el mercado se encontraba muy fragmentado, la interconexión entre las distintas redes era prácticamente nula y las condiciones de las líneas y centros telefónicos era lamentable, debido a la falta de inversiones. No es de extrañar entonces que el mercado español fuera un fruto apetecible para empresarios extranjeros que contaban con el capital, la tecnología y la experiencia para sacar al país del atraso telefónico.

En este punto entramos en la segunda parte del capítulo “Contexto” donde hemos querido contar la historia de Sosthenes Behn y el nacimiento de la ITT y su “International System”. También conoceremos la figura de Gumersindo Rico, un joven emprendedor que se puso en contacto con el presidente de la ITT y atrajo su interés hacia el mercado telefónico español, lo que provocó la llegada de la multinacional a nuestro país. Se han documentado los viajes que Sosthenes Behn realizó a Europa durante el verano de 1922 y la primavera de 1923, aunque nada parece indicar que llegara a cruzar los Pirineos. Quien sí llegó a Madrid muy pronto fue Lewis J. Proctor, hombre de la más absoluta confianza de Behn y vicepresidente de la ITT. Dos de los hallazgos más importantes de las investigaciones que se presentan en este Trabajo Fin de Máster nos han permitido saber que Proctor llegó a España en marzo de 1923, mientras que el presidente de la ITT lo haría un tiempo más tarde, en el mes de octubre.

Mientras tanto, la situación política en nuestro país sufría una época de grandes cambios: en la madrugada del 12 al 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera daba un golpe de Estado que ponía fin a la Restauración e instauraba un Directorio Militar que en principio no iba a durar más que unos meses. Para cuando Sosthenes Behn llegó a España, Gumersindo Rico y Lewis J. Proctor habían desarrollado ya un completo proyecto de telefonía para sacar a España del atraso en el que se encontraba y habían tenido oportunidad de presentárselo al último gobierno democrático y a las “fuerzas vivas” del país. Éste fue el plan que Sosthenes Behn llevó a Miguel Primo de Rivera en su primera reunión, celebrada el día 26 de octubre de 1923.

Esta fue la fecha elegida para comenzar el recorrido cronológico que constituye la parte central de esta investigación y que está desarrollado en el capítulo tercero de este Trabajo Fin de Máster. La estructura que se ha seguido para la elaboración de esta parte ha sido estrictamente cronológica para mantenernos fieles a la intención original de poner en su contexto todas las decisiones y acciones que se tomaban en las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo.

Este capítulo se podría dividir a su vez en dos partes, con tres hitos que marcan su comienzo y fin. El punto de partida de la primera parte sería, como ya se ha explicado, aquella primera reunión entre Sosthenes Behn y Primo de Rivera y se prolongaría durante diez meses. Durante este tiempo se fundó la Compañía Telefónica Nacional de España, se convocó una especie de concurso para evaluar los proyectos que distintas empresas presentaron al Gobierno y finalmente se adjudicó el sistema

telefónico español a la empresa que había creado la ITT para servir como “máscara” nacional de los proyectos de la multinacional.

El día de la fundación de la CTNE se firmó un contrato privado entre las dos compañías, transcrito junto a la primera acta de su Consejo de Administración, que establecía las relaciones entre ambas y ponía de relieve el grado de dependencia de la empresa española frente a la ITT. El 29 de agosto de 1924, sólo unas horas después de que la CTNE firmara el contrato de concesión con el Estado, las dos empresas volvieron a firmar unos convenios privados, también recogidos en las actas del Consejo, que se desarrollaban en términos muy similares a aquel primero de abril, convirtiendo a la Telefónica en una auténtica filial de la International. Estos dos contratos son ampliamente comentados en este Trabajo Fin de Máster.

Esta primera parte de nuestra cronología finalizaría aquí, el día 29 de agosto de 1924, con la adjudicación de la telefonía española a la CTNE con unas condiciones tan favorables a la empresa privada como perjudiciales para el Estado. En aquella jornada el capital social de la empresa creció hasta los 115 millones de pesetas y dio comienzo su verdadera actividad empresarial, poniendo en práctica el proyecto que la ITT había desarrollado para nuestro desastrado servicio telefónico. En esta parte de la investigación hemos querido examinar todas las actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo y las hemos relacionado con las circunstancias que rodeaban a la compañía. El periodo estudiado transcurre hasta el fin del año 1925, es decir, durante los primeros 16 meses de trabajo de la CTNE.

Durante este tiempo, la empresa se hizo con las redes telefónicas del Estado y la mayor parte de las propiedades que se encontraban en manos de otros concesionarios. Con respecto a estas últimas, la adquisición más importante fue la Compañía Peninsular de Teléfonos y sus filiales, que controlaban casi todas las líneas interurbanas y no pocos centros municipales, aunque también se compraron muchas otras redes urbanas de cuyas licencias disfrutaban pequeños empresarios, ayuntamientos o diputaciones provinciales. Antes de que llegara la CTNE, la tercera entidad del mapa telefónico español en importancia era la Mancomunidad de Cataluña, que había construido una red más que decente que llegaba a muchos pueblos y zonas rurales de la región. La adquisición de los activos telefónicos de la Mancomunidad no fue una tarea fácil, pero la promulgación del Estatuto Provincial en marzo de 1925 ayudó a que el día 5 de noviembre se pudiera firmar el contrato de compra de la red, pasando ésta también a manos de la CTNE. Este es el tercer hito de nuestro recorrido cronológico, el momento en el que la compañía pudo decir que

controlaba todas las redes telefónicas importantes de España, aunque algunos pequeños concesionarios todavía se le resistirían algún tiempo. No obstante, finalizamos la investigación el 31 de diciembre de 1925, para completar el segundo ejercicio social de la Compañía Telefónica Nacional de España.

Para terminar, se incluye un capítulo de conclusiones a las que hemos llegado una vez finalizado todo el trabajo, que también comprende unas notas sobre posibles líneas de investigación que podrían seguirse en el futuro.

2

CONTEXTO

2.1. Los primeros años de la telefonía

La historia de la invención del teléfono es un relato apasionante, digno de una gran novela o un guión cinematográfico. Se trata de una historia con muchos protagonistas, algunos de los cuales quedaron prácticamente olvidados durante décadas, mientras que otros supieron aprovecharse de las circunstancias y consiguieron, no sólo enriquecerse con su invención, sino que sus nombres permanecieran grabados para siempre en los libros de historia. En este episodio destaca la figura de Alexander Graham Bell (1847-1922), al que hoy en día no se considera ya como el verdadero inventor del teléfono, sino como el primero en patentar un aparato comercial en 1876.

En aquellos primeros momentos, el teléfono era visto con prudencia, tanto por los gobiernos, que intentaban proteger el servicio de telégrafos explotado por entidades gubernamentales (los Cuerpos de Telégrafos), como el público en general, que consideraban esta nueva invención más bien como un “divertimento”, una tecnología innecesaria teniendo en cuenta que los telégrafos ya cumplían absolutamente sus necesidades de transmisión de mensajes a distancia. Los primeros empresarios de la telefonía se vieron, por lo tanto, muy limitados en sus pretensiones de expansión y se enfrentaron a no pocas dificultades para conseguir que el negocio telefónico fuera rentable.

En un principio, las comunicaciones telefónicas eran de carácter privado y se realizaban “punto a punto”, es decir, uniendo solamente dos aparatos que se encontraban en ambos extremos de una línea; pero pronto se empezaría a instalar las centrales telefónicas, que permitían la interconexión de todos los abonados entre sí, y con ellas nacerían las primeras redes telefónicas. Éstas eran de carácter urbano y se encontraban aisladas del exterior, en el sentido de que permitían únicamente la comunicación entre usuarios dentro del área metropolitana de las ciudades. Esta situación era debida a la ya mencionada política proteccionista de los Estados con respecto a la telegrafía, que en algunos países se acentuó más que en otros, y a que la tecnología existente por aquel entonces no permitía todavía la transmisión de la voz a grandes distancias con una calidad suficiente. El fuerte carácter urbano de aquellos primeros años de la telefonía se pone de relieve con el hecho de que, una década después de su invención y en el contexto europeo, las capitales nacionales reunían por sí solas la mayor parte de los teléfonos del país. Ninguno de los casos documentados baja del 25% en cuanto a concentración telefónica de la capital con

respecto al total nacional, llegando incluso a superar el 55% en el caso de París. En España, un caso especial en tanto en cuanto el poder económico e industrial se encontraba repartido entre dos ciudades y no sólo centralizado en la capital; Madrid y Barcelona podían presumir de alcanzar, entre las dos, más del 80% de los teléfonos instalados en la totalidad del territorio¹.

La interconexión de estas redes municipales o incluso su expansión a las áreas rurales no llegarían hasta finales del siglo XIX. Esto fue debido gracias sobre todo a la invención de las bobinas de Pupin, que redujeron notablemente las pérdidas de los circuitos telefónicos, al sistema de multiplexado de François Van Rysselberghe, que permitía utilizar los hilos telegráficos para las comunicaciones telefónicas, y a la tendencia natural de cualquier tecnología de comunicación a crecer en forma de red. De esta forma nacieron las redes nacionales y con ellas el verdadero concepto de transmisión de la voz humana a grandes distancias. El papel dominante de Estados Unidos en todo este proceso de desarrollo y expansión es incuestionable: todas las estadísticas telefónicas de la época arrojan datos que demuestran su superioridad, tanto en grado de penetración relativa como en desarrollo tecnológico.

Como no podía ser de otra forma, tanto el impulso del teléfono durante los primeros años como su posterior crecimiento en forma de sistemas de comunicación a nivel nacional, presentaron enormes diferencias de unos países a otros, provocando circunstancias de lo más variadas que han sido ampliamente estudiadas por otros investigadores. Así, Londres, una de las metrópolis con mayor peso del mundo, veía como otras muchas ciudades, más humildes y con menos importancia, superaban sus datos de implantación telefónica en términos relativos². A nivel nacional ocurría algo parecido: fueron los países pequeños de industrialización temprana, como Bélgica o Suiza, y los países nórdicos los que más rápidamente instalaron densas redes interurbanas, mientras que países extensos como Francia, Rusia o España, que necesitaban un sistema de comunicaciones eficiente para controlar su aparato administrativo, se quedaban por detrás en las estadísticas del continente³. Como se puede comprobar, la expansión de esta nueva tecnología, como ha ocurrido casi con cualquier otra, no siguió un proceso lineal y no puede explicarse únicamente en

¹ Datos extraídos de Calvo-1999, pp. 3-4.

² En este sentido destacaban capitales del norte de Europa como Estocolmo o Cristianía (actual Oslo)

³ Calvo-1998, pp. 60-62.

términos de progreso tecnológico o de poder económico de las naciones. También se deben estudiar otros muchos factores y circunstancias que rodean al hecho tecnológico para explicar su crecimiento y difusión entre los habitantes de un país.

En cuanto a la política que siguió cada nación y la fórmula que adoptaron para explotar el servicio telefónico dentro de sus fronteras, también existen importantes diferencias. En el último cuarto del siglo XIX no fueron pocos los países que comenzaron explotando el servicio a través de los cuerpos de telégrafos dependientes de los Estados, para luego conceder permisos a empresas privadas autorizando concesiones urbanas o interurbanas; cosa que luego también habría de cambiar años más tarde, en algunos casos, cuando los gobiernos volvieron a comprar todas las redes para su control absoluto por parte del Estado. Otros países, como EEUU, se decantaron desde el principio por el capital privado, dejando la cuestión telefónica en manos de varias empresas que construían y explotaban las redes; si bien poco a poco el mapa de las compañías telefónicas se iba simplificando, reduciendo el número existente, en una clara inclinación hacia el monopolio de una gran empresa que absorbía a todas las demás. Esta trayectoria se trata de otra tendencia natural de la explotación de sistemas de red: la unificación del negocio bajo el control una misma entidad, con el fin de reducir costes de interconexión, de información, etc.

En Europa, a principios del siglo XX existían dos tendencias claras en la forma de solucionar la cuestión de la explotación telefónica: los países que habían tendido hacia un monopolio estatal (Alemania, Suiza, Bélgica, Italia y otros) y los que, a pesar del importante control desde los gobiernos, no habían llegado al monopolio (Reino Unido, los países nórdicos o España)

2.2. El teléfono en España

La llegada del teléfono a España fue muy temprana⁴, quizá porque los primeros ensayos fueron en una ciudad, por aquel entonces española, muy cercana a la principal potencia tecnológica del mundo: La Habana. Las primeras experiencias telefónicas tuvieron lugar el 31 de octubre y el 20 de noviembre de 1877 (la patente de Bell es de 1876) y consistieron en la comunicación entre el cuartel de los Bomberos del Comercio (en la Habana Vieja) y la residencia del vicejefe de dicho cuartel.

Animados por las experiencias en territorio cubano, telegrafistas de la península pidieron les fueran enviados aparatos para realizar pruebas. Los primeros ensayos realizados en territorio peninsular se llevaron a cabo en las últimas jornadas de aquel año en Barcelona, utilizándose líneas telegráficas ya existentes. El día 30 de diciembre se consiguió conversar entre el Castillo de Montjuic y la Ciudadela, los días 31 de diciembre de 1877 y 1 de enero de 1878 se estableció contacto telefónico con Tarragona, Gerona e incluso con Zaragoza y el día 2 de enero se probó en dependencias del gobierno en Madrid⁵. Estos primeros pasos de la telefonía nacional están unidos al apellido Dalmau, de la firma comercial “Dalmau e hijo”, ya que fueron estos empresarios catalanes, grandes emprendedores, los que obtuvieron la licencia para la introducción del aparato y sembraron las primeras semillas del negocio telefónico en España⁶.

Enseguida se instalaron las primeras líneas, privadas o de organismos públicos, y poco después nacerían las redes urbanas e interurbanas, más o menos a la vez que en el resto del continente. Sin embargo, desde el principio, la penetración de los teléfonos en España estuvo muy por debajo de la media de los países de su entorno, tal y como evidenciaban todas las estadísticas. Este atraso en materia telefónica se explica por muy diversos motivos, que iremos desgranando poco a poco en el desarrollo de este capítulo así como en el resto del Trabajo Fin de Máster, pero se puede resumir atendiendo a las condiciones económicas, políticas y sociales que caracterizaron a España durante el medio siglo que transcurrió entre la invención del teléfono y la concesión del sistema nacional a la CTNE en agosto de 1924. España

⁴ Aspecto que contrasta con el retraso con el que España adoptó otros dos importantes avances tecnológicos del siglo XIX: el ferrocarril y el telégrafo.

⁵ Gutiérrez-1997, pp. 103-104.

⁶ Calvo-1998, p. 63.

había perdido, durante el siglo XIX, la hegemonía de la que había disfrutado como gran potencia mundial durante siglos, había visto como su poder pasaba a manos de otros países como Reino Unido o Estados Unidos y vivía un proceso de independencia colonial coronado por el “Desastre del 98”, cuando se perdió el control de las últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Todo ello había sumido al país en una crisis monumental sin precedentes en nuestra historia.

La política nacional no ayudaba a mejorar la situación: el caciquismo, la inoperancia e incapacidad de los gobiernos de turno y la corrupción fueron constantes durante la Restauración. Desde el pronunciamiento del general Martínez Campos, que puso fin a la I República en diciembre de 1874, se sucedieron uno tras otro, varios Gobiernos mediante un sistema de turnos similar al inglés, donde todo estaba pactado y donde rara vez se buscaban soluciones reales para la superación de la crisis y el atraso que caracterizaba al país. Esta situación se fue agravando con el paso de los años hasta que en las décadas de 1910 y 1920 era evidente que el sistema era insostenible, provocando a la postre el golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923.

En materia telefónica, los políticos de la Restauración tampoco supieron dar con la solución adecuada para sacar a España de los últimos puestos de las estadísticas europeas. Al observar la legislación a este respecto desde la perspectiva histórica actual, uno tiene la sensación de que los gobiernos de la época se encontraban dando palos de ciego, tomando medidas en un sentido y cambiándolas sin el menor reparo en cuanto el partido de la oposición volvía al poder poco más tarde. No es de extrañar tampoco este hecho, dado que los encargados de estudiar, redactar y votar aquellas medidas no tenían, la mayoría de las veces, ningún conocimiento real sobre la explotación de las telecomunicaciones, mucho menos experiencia profesional en el sector o formación tecnológica apropiada.

La consecuencia, como no podía ser de otra forma, fue una red telefónica ruinoso e ineficaz que adolecía de casi todos los problemas que se le podrían presentar: mala calidad del servicio, interconexión prácticamente nula entre redes, tiempos excesivamente largos para establecer las comunicaciones, largas listas de espera para darse de alta en el servicio, penetración mínima en áreas rurales, tarifas abusivas, etc.

Veamos, en los siguientes apartados, los hitos legislativos más importantes dados por los gobiernos españoles antes de la llegada de Primo de Rivera y como

esos pasos legislativos afectaron a las corporaciones, públicas o privadas, que quisieron entrar en el negocio telefónico. Dos de esos protagonistas fueron, por un lado las compañías privadas, y por el otro, el Cuerpo de Telégrafos. Ambos sectores fueron favorecidos o perjudicados en distintos momentos y de distinta forma, pero tanto empresarios como telegrafistas sufrieron el continuo vaivén de las disposiciones legales y no tuvieron más remedio que adaptarse a la realidad nacional con el fin de lograr sus propósitos. Los apartados 2.2.5 y 2.2.6 están dedicados a la historia de estos dos actores de la historia telefónica española desde finales del siglo XIX hasta la fundación de la CTNE. Sirva también este capítulo para pintar el mapa de la telefonía en nuestro país tal y como se lo encontró la ITT cuando “desembarcó” en España a principios de 1923.



Figura 1. Teléfono manual de sobremesa, 1885. Fuente: Cambio tecnológico en la telefonía de Cataluña, Ángel Calvo Calvo, 2008.

2.2.1. Legislación telefónica en el siglo XIX

En contraste con la rapidez con la que el teléfono llegó a España y se realizaron las primeras pruebas, las normas que habrían de regular este nuevo sistema de comunicaciones tardaron en llegar, debido sin duda a que la clase dirigente navegaba en un mar de dudas con respecto al enfoque que imprimir a la explotación telefónica: el monopolio estatal o la concesión a empresas privadas. Mientras en Europa ya comenzaban a darse los primeros pasos en una u otra dirección, en nuestro país se tardaron casi cuatro años en publicar la primera medida legislativa a este respecto; lo que provocó que durante todo ese tiempo, la explotación telefónica se realizara sin una base legal sobre la que soportarse. Irónicamente, en la exposición

que escribió el Ministro de la Gobernación, Venancio González, para esta disposición hablaba de la “urgencia reconocida por la opinión de establecer el servicio telefónico”.

Este primer movimiento normativo en materia telefónica se trata del Real Decreto de 16 de agosto de 1882⁷, promulgado durante un gobierno presidido por el liberal Práxedes Mateo Sagasta, en el que se concedía a las empresas privadas el derecho de construir y explotar redes telefónicas, si bien el propio documento ya previene de la temporalidad de esta medida y de que los concesionarios que se aventuren en el negocio tendrán que asumir la legislación que pueda generarse en el futuro. El Real Decreto se redactó de una manera tan atropellada que se publicó sin base jurídica en la que apoyarse. El reglamento para la aplicación del Real Decreto de 16 de agosto se redactaría casi mes y medio después, el 25 de septiembre de 1882⁸.

Con arreglo a estos decretos, el Ministerio de la Gobernación procedió a anunciar el concurso para el establecimiento y explotación de las redes telefónicas urbanas de Madrid⁹, Barcelona¹⁰ y Bilbao¹¹. A estas convocatorias concurrieron muy pocos interesados, por lo que se declararon “sin resultado aceptable” y desde entonces únicamente se concedieron licencias para líneas particulares. Sólo nueve meses después, el 16 de mayo de 1883, el mismo gobierno expresaría su cambio de parecer en un dictamen del Consejo de Estado¹².

Sin embargo, habría de esperarse todavía un año más hasta que el siguiente gobierno, presidido por el conservador Antonio Cánovas del Castillo, redactara un nuevo Real Decreto¹³ que concediera al Estado los derechos para el establecimiento y explotación de las redes telefónicas. El organismo encargado para llevar a cabo esta

⁷ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 16 de agosto de 1882. Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1882, nº 230, p. 539.

⁸ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 25 de septiembre de 1882. Gaceta de Madrid, 26 de septiembre de 1882, nº 269, p. 877.

⁹ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 26 de septiembre de 1882. Gaceta de Madrid, 27 de septiembre de 1882, nº 270, p. 887.

¹⁰ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 27 de septiembre de 1882. Gaceta de Madrid, 29 de septiembre de 1882, nº 272, p. 905.

¹¹ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 1 de noviembre de 1882. Gaceta de Madrid, 5 de noviembre de 1882, nº 310, p. 339.

¹² Gutiérrez-1997, p. 106.

¹³ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 12 de agosto de 1884. Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1884, nº 228, pp. 526-527.

tarea era el Cuerpo de Correos y Telégrafos. Un día antes de la firma de dicho decreto, el Ministro de Hacienda ya había ordenado se concediera un crédito extraordinario de 280.000 pesetas al Ministerio de la Gobernación para correr con los “gastos que ocasione el establecimiento de redes telefónicas en las capitales de provincia”¹⁴. En su artículo 2º decía:

El importe de dicho crédito extraordinario se cubrirá con los mayores productos que ha de ofrecer el impuesto de Timbre con la instalación de este nuevo servicio.

Los cálculos realizados por este gobierno no fueron del todo acertados y pronto se comprobó que el impuesto de Timbre no cubría con los gastos de los teléfonos y que estos eran deficitarios. Llegado el siguiente gobierno de corte liberal en 1886, la balanza volvería a inclinarse hacia el lado de la explotación en manos privadas, perdiendo de esta forma el Cuerpo de Telégrafos su primera oportunidad de mantener el servicio bajo control estatal. Lo que sí consiguió la corporación pública fue el control de las inspecciones, un arma muy poderosa si se sabía utilizar adecuadamente, ya que les permitía ejercer una vigilancia rigurosa de los concesionarios privados, dificultando su desarrollo¹⁵. Fue durante esta época cuando se concedieron las licencias para organizar las redes urbanas de las principales ciudades españolas.

Quizá la más conocida de todas las normativas en materia telefónica del siglo XIX es el conocido como “Decreto Silvela” de 1890¹⁶. Durante otro gobierno conservador de Cánovas del Castillo, el Ministro de la Gobernación Francisco Silvela redactaría un nuevo decreto que trataba de armonizar las dos tendencias: la pública y la privada, creando un sistema mixto. Otras novedades de esta norma fueron la clasificación de las líneas y redes telefónicas, lo que dio origen a la telefonía interurbana, así como la posibilidad de que los ayuntamientos también pudieran

¹⁴ Real Decreto del Ministerio de Hacienda, de 11 de agosto de 1884. Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1884, nº 228, p. 525.

¹⁵ Real Orden del Ministerio de Gobernación, de 13 de junio de 1886. Gaceta de Madrid, 15 de junio de 1886, nº 166, pp. 768-769.

¹⁶ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 11 de noviembre de 1890. Gaceta de Madrid, 13 de noviembre de 1890, nº 317, pp. 506-507.

acceder a la gestión de la red de su municipio. A este decreto le sucedería un reglamento dos meses más tarde¹⁷.

Tal y como indicaría Francos Rodríguez en su proyecto de 1917¹⁸, “los reglamentos se suceden casi con la misma celeridad que los gobernantes encargados de refrendarlos. Indudablemente se busca con ello la perfección en la obra legislativa, pero el resultado actual es un desbarajuste, un caos”. Efectivamente, cuando el “Siglo del Progreso” tocaba a su fin, el servicio telefónico español seguía padeciendo las consecuencias de la inestabilidad política, lo que evidentemente no favorecía ni la explotación estatal ni animaba a entidades públicas, como ayuntamientos, o privadas a embarcarse en el incierto negocio telefónico.

2.2.2. La Ley de Telecomunicaciones de 1907

Durante los primeros años del siglo XX, los reglamentos siguieron realizando sucesivas modificaciones al Decreto Silvela, sin variar sustancialmente el espíritu de la norma original, aunque sí que sirvieron para reglamentar a favor del Estado en algunos aspectos como una posible incautación de las redes privadas si algún día la economía lo permitía o como la creación de los “grupos telefónicos”. Esta nueva figura surgía de la ampliación del radio de cobertura de las centrales telefónicas, servía para fomentar la telefonía rural y además tiene una gran importancia como embrión de lo que más tarde serían las redes provinciales.

Hasta entonces, toda la legislación en materia telefónica se había realizado a golpe de decretos de los gobiernos de turno desde 1882, sin que las Cortes hubieran tenido oportunidad de debatir sobre el tema. No obstante, esto habría de cambiar en 1907 cuando el Ministro de la Gobernación del “Gobierno largo” de Antonio Maura, Juan de la Cierva y Peñafiel, se propuso redactar y sacar adelante una Ley de Telecomunicaciones. Los debates en el Congreso de los Diputados fueron intensos pero la norma fue finalmente sancionada en octubre de aquel año¹⁹ y se convirtió de

¹⁷ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 2 de enero de 1891. Gaceta de Madrid, 6 de enero de 1891, nº 6, p. 52.

¹⁸ Francos-1917, p. 8.

¹⁹ Ley autorizando al gobierno para que proceda a plantear o desarrollar los servicios de radiotelegrafía, cables y teléfonos, de 26 de octubre de 1907. Gaceta de Madrid, 28 de octubre de 1907, nº 301, p. 359.

esta forma en la primera ley española en materia telefónica, así como de telecomunicaciones en general.

Esta ley, en el artículo 1º, autorizaba al Gobierno para que procediera “a plantear o desarrollar, valiéndose de entidades nacionales, los servicios de telegrafía, cables o teléfonos”. Como se puede apreciar, el término “entidades” es tan amplio como indeterminado, lo que permitía que el Estado pudiera realizar concesiones de telecomunicaciones a cualquier corporación privada o pública, ya fuera municipal, provincial o estatal (como el propio Cuerpo de Telégrafos) No cabe duda de que la palabra fue convenientemente elegida, ya que a partir de la promulgación de la ley, el panorama telefónico español siguió presentando una enorme cantidad de protagonistas, a los que habrían de incorporarse muchos más, como las diputaciones, una mancomunidad de diputaciones y hasta una empresa estadounidense tras una fachada de compañía de capital nacional. Todo ello amparado por la Ley De la Cierva y a la sutil elección del término “entidades”.

Algunas investigaciones²⁰ afirman que el ministro estaba pensando realmente en las empresas privadas como verdadera solución al problema nacional, si bien se sirvió de este rodeo lingüístico para no referirse a ellas claramente. Lo que sí especificaba la norma sin ninguna duda era el carácter nacional que tenía que cumplir cualquier concesionario, fuera del tipo que fuera.

La Ley De la Cierva no consiguió modernizar el sistema telefónico nacional, que siguió sufriendo los mismos problemas que antes de su promulgación. Un posible motivo lo apunta Yuste en su tesis de 2004 cuando dice que esto fue debido “tal vez, porque una de las premisas fundamentales que venía aplicándose en los países europeos de nuestro entorno, como era la unificación de la (sic) toda la red telefónica, no quedaba contemplada en España a corto plazo.”²¹

Si bien la Ley no tuvo los resultados deseados por De la Cierva, sirvió para sentar una base legal que regularizaba adecuadamente los servicios de telecomunicaciones y que estuvo vigente durante 80 años hasta la sanción de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 18 de diciembre de 1987. Es por ello que es de suma importancia para los acontecimientos que habrían de sucederse años

²⁰ Yuste-2004, p. 19-20.

²¹ Yuste-2004, p. 26.

después, ya que esta norma formaba el marco legislativo vigente cuando la CTNE logró la concesión del servicio telefónico nacional. Además, cabe destacar otros dos aspectos meridianos en esta ley: se abre la posibilidad de que corporaciones municipales, provinciales o regionales pudieran instalar y explotar redes telefónicas en sus áreas administrativas y se establece la subasta pública como sistema para realizar las adjudicaciones. Este último punto tiene un significado especial, como veremos más adelante, pues la adjudicación a la CTNE del servicio telefónico se realizó sin subasta, a pesar de la Ley de las Telecomunicaciones vigente en aquel momento, lo que tendría que haber deslegitimizado automáticamente todo el proceso.

2.2.3. Legislación entre 1907 y 1923

El mismo día que se publicaba la Ley De la Cierva en la Gaceta de Madrid, se publicaba también un Real Decreto²² en el que se declaraba de interés nacional la construcción de cuatro redes telefónicas interurbanas: Noreste (incluyendo la conexión con Francia), Noroeste²³, Sur y Sureste. La adjudicataria de la subasta de las cuatro redes interurbanas fue la Compañía Peninsular de Teléfonos.

Otro Real Decreto de gran trascendencia y que se promulgó poco después fue el de 18 de septiembre de 1908²⁴, por el cual se permitía a los ayuntamientos “concurrir a las subastas de las redes telefónicas urbanas, con el derecho de tanteo sobre el mejor licitador a fin de que puedan establecer y explotar por su cuenta el indicado servicio.” Esta normativa fue a la que recurrieron varios ayuntamientos para construir y explotar sus propias redes municipales, como fue el caso de San Sebastián y Santander, poco tiempo después.

No fueron estos los últimos decretos firmados por el ministro De la Cierva en materia telefónica, ya que ordenó la subasta de algunas redes urbanas e interurbanas, consiguió que el Congreso aprobara la ley por la que se concedía a la Diputación de Guipúzcoa la instalación y explotación de la red provincial y legalizó un nuevo

²² Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 23 de octubre de 1907. Gaceta de Madrid, 28 de octubre de 1907, nº 301, pp. 359-360.

²³ Existe una errata en el Real Decreto publicado por la Gaceta de Madrid. Se refiere a la segunda red como “Red del Nordeste”, si bien unía Madrid con todas las ciudades importantes del noroeste peninsular como La Coruña, Oviedo, Valladolid, León, etc.

²⁴ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 18 de septiembre de 1908. Gaceta de Madrid, 20 de septiembre de 1908, nº 264, p. 1227.

reglamento telefónico. Éste, aprobado de manera definitiva el 4 de mayo de 1909, venía a sustituir al último publicado en 1903²⁵.

Unos años más tarde, en 1914, a propuesta del Ministro de la Gobernación de uno de los gobiernos liberales de Eduardo Dato, José Sánchez Guerra²⁶, se publicaría un nuevo reglamento²⁷, también muy interesante por el giro que supone, en tanto en cuanto el Estado se atribuye el establecimiento y la explotación del servicio telefónico por medio del Cuerpo de Telégrafos, si bien se permite la cesión de este derecho a otras corporaciones o entidades particulares si se considera oportuno, lo que también se puede entender como “si no se dispone de los recursos económicos necesarios”. En resumen, el Estado administra, pero las compañías o corporaciones públicas de menor nivel explotan.

Indudablemente, este reglamento tuvo que ser fruto de las presiones ejercidas por el sector de los telegrafistas que, como veremos más adelante, luchaban por la reversión de todas las concesiones y abogaban por un monopolio estatal que gestionara la red desde su instalación hasta su explotación. El término “entidades” que aparecía en la Ley de Telecomunicaciones de 1907 había dejado la cuestión de las concesiones telefónicas tan abierta que su aprobación no tuvo que pasar desapercibida para el Cuerpo de Telégrafos, que a buen seguro generaría un debate sobre la cuestión y elevaría las correspondientes quejas hasta las más altas esferas del Estado. De la misma forma, los Reales Decretos de 23 de octubre de 1907 y 18 de septiembre de 1908 tampoco tuvieron que sentar bien en el seno del gremio de los telegrafistas, que veían como después de la ley de 1907, el Gobierno legislaba en contra de sus intereses: convocando concursos para la concesión de las redes interurbanas a corporaciones privadas o favoreciendo que los ayuntamientos entraran en el negocio telefónico.

²⁵ Yuste-2004, p. 26.

²⁶ José Sánchez Guerra (1859-1935) sería, años más tarde, presidente del penúltimo gobierno de la Restauración, que duraría únicamente unos meses del año 1922 y que se vino abajo por las discusiones en torno al Expediente Picasso sobre el Desastre de Annual. Era, además, amigo íntimo de Antonio Barroso y Castillo, otro importante político cordobés que dio el salto a la escena nacional, si bien militaría en el partido contrario. Antonio Barroso se casó con la hermana de José Sánchez Guerra, por lo que este último fue tío de Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra, personaje al que nos referiremos en capítulos posteriores. Sirva este breve apunte como muestra de otro de los males de la política española de la Restauración: la endogamia dentro de los círculos de poder, llegando a ser, en algunas ocasiones, literal.

²⁷ Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 30 de junio de 1914. Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1914, nº 191, pp. 82-89.

Este nuevo reglamento de 1914 daba un respiro al Cuerpo de Telégrafos, concediéndoles el control de las redes telefónicas, aunque por el momento tuvieran que cederlo a otras corporaciones. No obstante, dicho reglamento también contenía un factor contrario a los anhelos del sector: la reafirmación de la Compañía Peninsular de Teléfonos como concesionaria del servicio interurbano, gozando desde ese momento del monopolio de esta red. No sería éste el único varapalo sufrido por los telegrafistas durante este tiempo a raíz de la legislación vigente, ya que un año más tarde habrían de ver como el Estado concedía la autorización a la Mancomunidad de Cataluña para el establecimiento y la explotación de una red telefónica en las cuatro provincias de la región²⁸.

En los años posteriores, la I Guerra Mundial traería suerte dispar a la economía española, que vivió momentos de gran crecimiento, sobre todo en algunos territorios de alto desarrollo industrial como Cataluña, seguidos de una enorme crisis a partir de 1918. El paro y los precios ahogaban a la sociedad española, que vieron como las tarifas telefónicas también subieron notablemente en un breve periodo de tiempo, lo que provocó que, una vez más, el negocio telefónico no sólo se estancara sino que retrocediera posiciones.

En 1920 y bajo estas circunstancias, se publicó un nuevo reglamento en materia telefónica²⁹ durante el tercer gobierno de Eduardo Dato, esta vez con Francisco Bergamín García como Ministro de la Gobernación. Si bien la importancia de este reglamento radica en el hecho de que se trata de las normas que se encontraban en vigor cuando la CTNE obtuvo la concesión del servicio telefónico, en realidad no se trata más que de una reedición del de 1914 promovido por Sánchez Guerra, con pocos cambios significativos. Debido a las escasas diferencias, algunos historiadores se refieren al reglamento de 1914 cuando en realidad y desde un punto de vista estricto deberían aludir al de 1920.

En cuanto a los aspectos normativos primordiales de este reglamento se destacan los siguientes:

²⁸ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 9 de septiembre de 1915. Gaceta de Madrid, 11 de septiembre de 1915, número 254, pp. 697-698.

²⁹ Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 28 de junio de 1920. Gaceta de Madrid, 2 de julio de 1920, nº 184, p. 18.

- El servicio telefónico se establecerá y explotará por el Estado, a través del Cuerpo de Telégrafos.
- Sin embargo, el Estado podrá ceder la instalación, la explotación o ambas a corporaciones públicas de menor nivel o a entidades privadas. En el caso de que esto ocurriera, la Ley de Telecomunicaciones de 1907 establecía que la concesión debía realizarse mediante subasta pública.
- Las líneas interurbanas debían ser subastadas de igual forma, siempre sin perjuicio de la Compañía Peninsular de Teléfonos, que tenía preferencia.
- Las concesiones urbanas también debían realizarse por subasta pública, a la que podían concurrir los ayuntamientos, gozando además del derecho de tanteo sobre el mejor licitador. Al terminar el plazo de concesión de 20 años, toda la red urbana pasaba a poder del Estado.
- El Estado podría incautarse temporalmente de las redes por razones de defensa nacional o de interés general, previo pago de su valor.
- Los concesionarios estaban exentos de cualquier gravamen no contemplado en el reglamento.

2.2.4. Los proyectos frustrados

Un recorrido a través de la legislación española previa a la aparición en escena de la CTNE no estaría completo si no se hiciera referencia, aunque sea de manera resumida, a dos proyectos de telefonía, desarrollados con auténtica voluntad de cambio y de atajar verdaderamente los problemas del sistema; si bien, por motivos distintos, nunca llegaría a materializarse en forma de disposición legal y quedarían archivados para siempre. Nos referimos al Proyecto de Telefonía Nacional de 1917 y al Proyecto de Ley de Telecomunicaciones de 1921.

El Proyecto de Telefonía Nacional de 1917³⁰ fue redactado durante el gobierno del liberal Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, con Santiago Alba

³⁰ Francos-1917.

Bonifaz como Ministro de la Gobernación y el periodista José Francisco Rodríguez al frente de la Dirección General de Correos y Telégrafos. El ministro encargó a su Director General realizar una profunda reforma de la telefonía nacional, perjudicara a quien perjudicara. Para esta labor contó con el asesoramiento de la prometedora primera promoción de estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación³¹, lo que sin duda aportaría un valor añadido al proyecto, ya que se tenía en cuenta el sentir de los futuros profesionales del sector³².

El Proyecto de Francos Rodríguez, presentado a Santiago Alba el día 17 de marzo de 1917, estaba claramente inspirado en el modelo francés: los *départements* (entidades provinciales) se encargaban de la instalación de las redes dentro de su territorio, corriendo con los gastos, mientras que la administración central interconectaba dichas redes en los límites provinciales y se encargaba de la explotación y el mantenimiento de todo el sistema nacional a través de su organismo de Correos, Telégrafos y Teléfonos (PTT, por sus siglas en francés) La elección del modelo del país vecino no era una decisión tomada a la ligera, sino ampliamente meditada y después de no pocos estudios, que comprendieron que la situación francesa no se había diferenciado mucho de la española durante muchos años, padeciendo problemas similares, debido en parte a las similitudes de los dos países en cuanto a tamaño, modelo de administración, etc. Si Francia había conseguido, mediante este sistema basado en redes provinciales interconectadas, una mejora importante, se consideró que el mismo modelo podría aplicarse al caso español con la ayuda de las Diputaciones como células básicas de la red³³. El organismo que gestionaría el sistema telefónico nacional se llamaría Instituto Nacional de Teléfonos y el presupuesto total del proyecto ascendía a 67 millones de pesetas.

Este Proyecto incluía también un preámbulo, muy interesante de leer, que realiza un repaso de los pasos que había dado la telefonía española desde sus comienzos y la situación desastrosa a la que se había llegado después de 25 años de

³¹ Entre estos estudiantes había nombres que más tarde ocuparían puestos de importancia en el sector de las telecomunicaciones de nuestro país, como es el caso de Luis Alcaraz Otaola, personaje al que nos volveremos a referir en los siguientes capítulos.

³² Yuste-2004, p. 30.

³³ El sistema se basaba en los ejemplos ya desarrollados de redes telefónicas provinciales: Guipúzcoa, Vizcaya, Ciudad Real, Islas Baleares y las cuatro provincias catalanas a través del gobierno de la Mancomunidad.

legislación peregrina. Esta introducción se podría considerar como un auténtico compendio, sincero y sencillo, de la auténtica realidad telefónica española.

No obstante, el Proyecto de Francos Rodríguez nunca llegaría a convertirse en nada más, ya que las presiones de la Compañía Peninsular de Teléfonos, concesionaria de las líneas interurbanas, y de otros concesionarios de redes urbanas, hicieron primar sus intereses frente al bien nacional y dieron al traste con el plan. Tampoco ayudó el escenario bélico de la Guerra Mundial en Europa y las huelgas convocadas por los telegrafistas durante aquel año y parte del siguiente.

El año 1921 fue fatídico para la política española, ya de por sí desastrosa y errática, marcado por dos días negros de nuestra historia: el día 8 de marzo era asesinado el Jefe del Gobierno, Eduardo Dato, en la Plaza de la Independencia de Madrid, y el 22 de julio mueren más de 10.000 soldados españoles en lo que vendría a conocerse como “Desastre de Annual”, asaltados y aplastados por las tropas de Abd el-Krim en el Protectorado español en Marruecos.

Fue en esta situación de inestabilidad cuando el Ministro de la Gobernación Gabino Bugallal encargó a su Director General de Correos y Telégrafos, Fernando Barón, conde de Colombí, la redacción de un proyecto de mejora de las comunicaciones españolas. La elección del momento no había sido casual, pues se hacía necesaria una legislación adecuada para atender un problema que se presentaba al Gobierno en un futuro muy cercano: la posible reversión al Estado de redes urbanas tan importantes como la de Barcelona³⁴. Este proyecto habría de discutirse en el Congreso de los Diputados para pasar a convertirse en una nueva Ley de Telecomunicaciones en sustitución de la de 1907 y fue presentado a las Cortes para su debate el 22 de junio de 1921.

El Proyecto de Colombí infería “a los servicios de telecomunicación una consideración aparentemente estatal”³⁵, en clara contraposición a la Ley De la Cierva, evitando el ya famoso término “entidades”. Además, consciente del problema de falta de recursos económicos, el plan de 1921 proponía un importante desembolso

³⁴ Cuestión que generó acalorados enfrentamientos entre el Gobierno central y la Mancomunidad de Cataluña, en un debate bajo el que subyacía la cuestión regionalista y de traspaso de competencias.

³⁵ Yuste-2004, p. 47.

económico³⁶ para la modernización del sistema y planteaba un plan de crédito para la obtención de ese dinero.

Desgraciadamente, el proyecto de ley fue presentado en el peor momento posible: un mes después se produciría el Desastre de Annual y la modernización de la telefonía española quedaría relegada, como tantas otras cosas, a un segundo plano, esperando tiempos más adecuados.

2.2.5. Las compañías telefónicas

Tal y como apunta Calvo en su artículo “El teléfono en España antes de Telefónica”³⁷:

Un marco regulador oscilante, no poca incertidumbre y riesgo elevado fueron los ingredientes del negocio telefónico en esta etapa. Por supuesto, los inversores tenían un margen de maniobra nulo cuando el Estado se reservaba la titularidad de las redes.

Efectivamente, incluso aunque en muchas ocasiones parecía que la legislación beneficiaba a la iniciativa privada, la escasa duración de las concesiones no anima a las empresas a concurrir a los concursos públicos. Todo ello acentuó el carácter heterogéneo del sistema español, formado por una amalgama de concesionarios públicos de distinto nivel (local, provincial, regional o estatal) y privados. Dentro de este grupo convivían igualmente iniciativas de muy diversa naturaleza: desde los pequeños empresarios locales con concesiones de municipios de poca envergadura a planes de gran magnitud a nivel nacional.

Las primeras compañías con intereses telefónicos fueron las catalanas “Sociedad Española de Electricidad” (SEE) y “Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica”, creadas en 1881; si bien la primera que consiguió una concesión urbana importante fue la “Sociedad de Teléfonos de Madrid”, del también catalán Bosch y Barrau, que se hizo con la red de la capital en 1886, si bien no consiguió mantener el negocio y tuvo que ceder el control a otra compañía (una filial del conglomerado de la Peninsular) años más tarde.

³⁶ El coste total era de 164.875.234,37 pesetas.

³⁷ Calvo-1998, p. 68.

“Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica” nunca llegó a tener trascendencia en el negocio telefónico nacional, pero SEE se hizo con la red telefónica de Barcelona, apoyada por el soporte financiero del Crédito Español. Cuando la compañía se especializó en el sector de la energía, los teléfonos de la ciudad condal quedaron en poder del organismo de crédito, que creó una empresa para hacerse cargo del negocio telefónico que había dejado la SEE: la “Sociedad General de Teléfonos” (SGT), fundada en 1890.

Por aquel entonces ya destacaba en estos círculos empresariales el nombre de Enrique Parellada Pallás, un miembro de la burguesía catalana que se estaba enriqueciendo gracias a su dinamismo e iniciativa en todo negocio de nuevo cuño: ferrocarriles, gas, electricidad, telefonía, etc. Parellada había sido uno de los fundadores de “Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica” unos años antes y había tomado ahora las riendas de la SGT, que ya nacía con el control de la red urbana española que se prometía más productiva y rentable: Barcelona.

Este grupo de burgueses liderados por Enrique Parellada, entre los que también figuraba el nombre de Martí-Codolar, no se limitaron a los negocios dentro de Cataluña. En 1894 también fundaron la “Compañía Peninsular de Teléfonos” (CPT), que más tarde tendría una importancia vital en el mapa del sistema telefónico español. Esta nueva sociedad, si bien compartía planteamiento y grupo de poder con la SGT, tenía unas miras mucho más amplias y aspiraba a hacerse con el poder de la telefonía interurbana y a formar una red nacional que alcanzara todos los rincones del país. Fue este grupo empresarial el que compró la red urbana de la capital a la “Sociedad de Teléfonos de Madrid” y cedió su explotación a una nueva empresa, gestionada por el mismo emporio: la “Compañía Madrileña de Teléfonos” (CMT)

Hacia finales del siglo XIX, la crisis azotó a los inversores catalanes, por lo que muchas empresas tuvieron que buscar capitales en el extranjero. Las compañías del grupo Parellada (CPT, SGT y CMT) no fueron la excepción y pronto algunos accionistas ingleses con experiencia en el sector se incorporaron al grupo de inversores de la compañía catalana. Mientras, otras empresas menores comenzaron a crearse en esta región y en toda España como fue el caso de “Telefonía del Vallés”.

Por aquel entonces, el papel protagonista de Enrique Parellada y de su círculo era indudable dentro de los negocios telefónicos españoles. Las tres compañías, aunque independientes en la teoría, eran controladas por las mismas manos y su dinamismo marcaba las pautas del sector a su antojo. A través de estas sociedades,

Parellada y su entramado de conexiones familiares y financieras controlaba las redes urbanas de Madrid y Barcelona, así como muchos otros centros municipales³⁸ y líneas interurbanas, en un claro ejemplo de concentración con tendencia al monopolio. Se trata esta dinámica de una inclinación natural de los negocios basados en redes, como son las telecomunicaciones, una vez los distintos grupos primigenios, aislados e independientes, se comienzan a interconectar.

El hecho de que el grupo Parellada tuviera tanto poder en el sector telefónico nacional, le otorgaba una ventaja indudable frente a sus competidoras cuando el gobierno dividió la geografía española en cuatro redes interurbanas y las sacó a concurso público³⁹. Curiosamente, la intención del Estado era evitar la concentración de todas las líneas en una sola empresa, pero, como no podía ser de otra forma, la adjudicataria de los cuatro concursos fue la Compañía Peninsular de Teléfonos, que se convirtió *de facto* en la compañía concesionaria de la red interurbana española. Aunque no era éste el espíritu perseguido por la Real Orden de 1907, es también justo destacar que la concentración de las cuatro redes en un mismo grupo empresarial (que tenía además el control de importantes redes urbanas) sí ayudó a solucionar, por lo menos en parte, uno de los problemas de la telefonía española: la interconexión. No en vano y aunque hoy nos parezca increíble, es importante apuntar que las redes no se encontraban conectadas entre sí y la mayor parte de las veces era imposible comunicarse con otros abonados si estos pertenecían a otra red distinta a la propia. El control de la telefonía interurbana por parte de la CPT permitió que todos los usuarios de la misma, así como los conectados a los grupos y redes de la SGT y de la CMT, pudieran hablar entre sí. Estas circunstancias *de facto* de las que se ha hablado se convirtieron en una situación *de iure* cuando el Real Decreto de 1914⁴⁰ reafirmó a la sociedad como concesionaria del servicio interurbano.

La Compañía Peninsular de Teléfonos continuó adquiriendo redes y líneas a lo largo y ancho de España según la teoría ya mencionada de “monopolio natural”, para lo que tuvo que recurrir a diversas ampliaciones de capital y al mercado financiero,

³⁸ Calvo-1998, p. 72: “Al poco de ser creada, la Compañía Peninsular de Teléfonos adquirió, como mínimo, las redes de Bilbao, Santander, Madrid, Zaragoza, Sabadell-Terrassa y Mataró, ejemplos documentados de un movimiento de concentración más amplio.”

³⁹ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 23 de octubre de 1907. Gaceta de Madrid, 28 de octubre de 1907, nº 301, pp. 359-360.

⁴⁰ Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 30 de junio de 1914. Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1914, nº 191, pp. 82-89.

nacional e internacional. El 21 de junio de 1919 Parellada fundó también una empresa de material telefónico, la “Telecomunicación y Electricidad, S.A.”, con la intención de integrar verticalmente el negocio telefónico del país, consiguiendo así que el grupo que dirigía se encargara de todas las etapas del sector: desde la producción del material telefónico, la instalación de las redes y su explotación. De esa forma se reducían los costes, al no tener que comprar los suministros a otras empresas, por lo general extranjeras, ni tener que transportarlos desde Europa.

Mientras, muchas redes telefónicas, tanto en manos de la CPT como de otras muchas concesionarias locales, estaban caducando y por lo tanto revirtiéndose al Estado en aquella época.

Las circunstancias de esas reversiones fueron de lo más variopinto y muchos investigadores han documentado casos singulares o que trascendieron políticamente, como fue el caso de Barcelona. Sin embargo, la mayoría se caracterizó por entregar las redes al Estado en un estado deplorable. En un lógico intento de maximizar beneficios, los empresarios se negaban a realizar inversiones en la modernización y mejora de la red cuando ésta se encontraba próxima a su reversión al Estado, ya que estos últimos gastos no se traducirían en mayores beneficios para sus bolsillos. La legislación española siempre había establecido que las concesiones fueran entregadas sin ningún tipo de indemnización al concesionario, en el convencimiento de que así todas las redes privadas acabarían en manos estatales tarde o temprano. Sin embargo y a pesar de los avisos ya realizados por algunas voces, el Estado siguió con esta política, que provocaba que la situación de las redes cuando eran entregadas al Cuerpo de Telégrafos fuera tan lamentable que hubiera que invertir igualmente una gran cantidad de dinero para mantenerlas en funcionamiento adecuado.

Cuando la Compañía Peninsular de Teléfonos fue adquirida, junto al resto de empresas del grupo, por la ITT en 1924 daba servicio telefónico a la cuarta parte de los usuarios. Si a esto se añaden los abonados de las redes urbanas de la SGT y la CMT, el porcentaje aumenta hasta superar el 50%⁴¹. El resto se encontraba en manos del Cuerpo de Telégrafos (aquellas redes que habían revertido al Estado por la finalización de su concesión o por la incautación por parte de éste), de organismos públicos de diverso nivel (ayuntamientos, diputaciones y la Mancomunidad de

⁴¹ Calvo-2010, p. 76.

Cataluña) y de otros pequeños grupos empresariales en posesiones de redes municipales o grupos telefónicos de menor importancia.

2.2.6. Las demandas del Cuerpo de Telégrafos

El Cuerpo de Correos y Telégrafos se constituyó oficialmente a través de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados y firmada por la reina Isabel II el 22 de abril de 1855⁴². De esta forma, se regulaba el servicio telegráfico español y quedaba bajo el control del Estado desde el principio, casi en los primeros momentos posteriores a su invención y difusión.

Sin embargo, como ya hemos visto, el teléfono no corrió la misma suerte y las normas que lo regulaban eran erráticas y sin una intención clara de que el servicio se estatalizara bajo el control de alguna corporación pública como podía ser el Cuerpo de Telégrafos. Los telegrafistas tuvieron una oportunidad, tras la promulgación del Real Decreto de 1884, de mantener el servicio telefónico en manos del gobierno, pero aquella oportunidad o no se supo o no se pudo aprovechar. Quizá era demasiado pronto.

Sea como fuera, los telegrafistas tuvieron que ver como en los años posteriores los teléfonos quedaban bajo el control de un variado grupo de concesionarios, que iban desde compañías privadas de muchos tamaños hasta entidades públicas de nivel local, provincial o regional. La legislación cambiante nunca prohibió a los telegrafistas instalar y explotar sus propias redes, si bien se reconocía la escasez del erario público y se permitía a otras entidades acometer las actividades en su nombre durante un determinado periodo de concesión. El Cuerpo de Telégrafos, en su condición de administrador de la red y propietario último de la misma, también supo aprovecharse de la situación y llevó a cabo alguna incautación forzosa, que en algún caso ocasionó roces entre los concesionarios y el Gobierno.

Según iban caducando las licencias para la explotación de las redes, éstas pasaban a manos del Estado, que a partir de entonces se tenía que hacer cargo de ellas y las explotaba bajo su control directo. Estas reversiones se realizaban sin ningún tipo de indemnización al concesionario original, por lo que la situación en la que eran

⁴² Ley autorizando al Gobierno para plantear un sistema completo de líneas electro-telegráficas que pongan en comunicación a la Corte con todas las capitales de provincia y departamentos marítimos, del 22 de abril de 1855. Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1855, nº 843, p. 1.

entregadas distaba mucho de ser la adecuada y la mayor parte de las veces el Cuerpo de Telégrafos tenía que invertir grandes cantidades de dinero con el fin de renovar la red.

A pesar de la mala situación económica por la que atravesaba el Estado durante estos años, los telegrafistas nunca abandonaron sus pretensiones de que todo el sistema telefónico nacional pasara a manos del Cuerpo; para lo que sería necesario incautarse de todas las redes que en aquellos momentos se encontraban en manos privadas o de ayuntamientos y diputaciones. Esto hubiera provocado un proceso largo y costoso, en el que se intuían muchos conflictos con todos aquellos concesionarios que vieran vulnerados sus derechos al ser incautadas sus redes antes del fin de la licencia. En vista de que esta posibilidad parecía difícil de asumir por un Estado en crisis, muchos esperaban que los distintos gobiernos dejaran de realizar concesiones y aguardar pacientemente hasta que todas las licencias fueran caducando poco a poco en los años venideros. Sin embargo, esto no ocurría. Es más, el fin de las concesiones provocaba muchas veces enfrentamientos entre las partes implicadas e incluso a veces entraba en escena un tercer elemento en discordia.

Muy polémico fue el caso de la red de Barcelona⁴³ cuando ésta hubo de revertir al Estado en 1921 tras el fin de la concesión que tenía la Sociedad General de Teléfonos. Cuando el horizonte del fin de la concesión de esta ciudad, así como las de Mataró y Denia, se encontraba cercano⁴⁴, el gobierno quiso evitar que ocurrieran situaciones un tanto bochornosas para el Estado como las acontecidas en la provincia de Ciudad Real en 1916⁴⁵. Sin embargo, la Mancomunidad de Cataluña no estaba dispuesta a ver como las redes de dos ciudades tan importantes como Barcelona y Mataró pasaban a manos estatales sin que ella tuviera oportunidad de hacerse con estos centros telefónicos.

Las diputaciones catalanas habían transformado el mapa telefónico de la región al construir una red en 1916, que a pesar de su eficiencia, implicaba grandes desembolsos económicos que a veces eran difíciles de equilibrar con las ganancias moderadas de la explotación. La Mancomunidad esperaba que la incorporación de los

⁴³ Yuste-2004, pp. 48-51.

⁴⁴ Denia, 5 de julio de 1921; Barcelona, 9 de diciembre de 1921; Mataró, 18 de febrero de 1922. Yuste-2004, p. 45.

⁴⁵ Ver Yuste-2004, p. 45.

centros telefónicos de las grandes ciudades aportaran los beneficios para compensar el déficit de las líneas y los centros telefónicos rurales. Por ello, el presidente Puig i Cadafalch solicitó que los centros urbanos de las provincias catalanas cuyas licencias fueran caducando se entregasen a la Mancomunidad.

Por supuesto, el Cuerpo de Telégrafos y el Consejo de Estado emitieron informes desfavorables a dicha solicitud, mientras que las Cortes trataron de bloquear cualquier intento del nuevo gobierno de José Sánchez Guerra de realizar concesiones a la Mancomunidad de Cataluña. La trifulca telefónica y la polémica nacionalista estaban servidas. Finalmente y después de no pocos debates parlamentarios, la red de Barcelona fue incautada por el Estado, que la entregó al Cuerpo de Telégrafos, provocando el descontento de la clase política catalana.

La actitud hostil del Cuerpo de Telégrafos hacia las compañías privadas también era manifiesta. La corporación hacía uso de su derecho a auditar las redes y en alguna ocasión llegaba a incautarlas si se demostraba que el concesionario no estaba cumpliendo con el contrato firmado con el Estado. Este fue el caso de Sevilla, que tenía una red explotada por un concesionario particular, y que pasó a manos estatales en 1922. Las revistas telegráficas no ahorraban tinta en la publicación de extensos manifiestos en los que criticaban a los distintos gobiernos por su actitud sumisa a los intereses del capital privado, reclamaban la incautación total de todas las redes telefónicas y solicitaban la unificación de todos los servicios de telecomunicación bajo una misma corporación pública:

No debió éste [el Estado] jamás consentir que de su poder saliesen las comunicaciones telefónicas y radiotelegráficas. El Estado no debió nunca entregar en manos industriales particulares -y por industriales, codiciosas- el elemento de gobierno y de seguridad nacional que supone la telecomunicación. [...]

Y todavía tuvieron el buen cuidado de colocar a la cabeza y en sus Consejos de Administración a los personajes políticos que pudieran amparar en todo momento sus extralimitaciones y sus faltas frecuentes por incumplimiento de los contratos. [...]

La incautación es legal y fácil. El Cuerpo de Telégrafos puede demostrarlo así en el momento en que se le indique.

*Ahora que hable quien hablar pueda.*⁴⁶

Por supuesto, para el Cuerpo de Telégrafos, la concesión del sistema telefónico nacional a una empresa extranjera era vista como el peor escenario posible, en tanto en cuanto no sólo iba en contra de sus reivindicaciones para estatizar el servicio, sino que además suponía la entrega de la seguridad y soberanía nacionales a una entidad extranjera. Como veremos más adelante, estos miedos no eran del todo injustificados, ya que Estados Unidos había iniciado unos años antes un proceso doble con respecto a sus telecomunicaciones: proteger su sistema nacional frente a injerencias extranjeras y apoyar la entrada de capitales norteamericanos en intereses del sector en otros países.

Contrariamente a la opinión generalizada, el fantasma de una hipotética empresa extranjera que viniera a hacerse cargo de nuestra red telefónica ya había hecho saltar la voz de alarma en el sector de los telegrafistas mucho antes de la llegada de la ITT. Ya en 1886, después de la promulgación del Real Decreto de junio de ese año en el que se optaba de nuevo por la explotación por particulares y compañías, la publicación de tendencia conservadora “Las Ocurrencias”, en una serie de artículos titulados “La cuestión de los Teléfonos”, arremetían contra el ministro Venancio González y le acusaban de tener la intención de ceder el sistema telefónico nacional a una entidad extranjera⁴⁷. Su argumentación se fundaba en la imposibilidad de cualquier empresa española para hacerse cargo de la telefonía interurbana, por lo que habría que recurrir a compañías de otros países:

Hemos insistido en afirmar que por ningún estilo debe tolerar el Consejo de Ministros que el proyecto del Sr. González pase a vías de hecho sin oír previamente al Consejo de Estado, por para nosotros es evidente de todo punto que sólo una Compañía extranjera puede hacerse cargo de la telefonía en toda España y bajo este punto de vista, hecha una sangría por la que han de escapar cuantiosos capitales que vayan a engrosar el río de oro español

⁴⁶ El Electricista, 25 de septiembre de 1923, nº 798, p. 6549.

⁴⁷ Gutierrez-1997, pp. 107-109.

que por otras concesiones, tan desdichadas como esta que proyecta, afluye a París, Londres o Bruselas.

La Empresa que se quede con la explotación de la telefonía en nuestra patria, ha de ser necesariamente extranjera. Los capitalistas españoles desconocen casi por completo este negocio, que bien administrado es indudablemente fuente de importantes rendimientos, pero que acometido sin los elementos necesarios, puede ocasionar un fracaso lamentable.

Parece que los ríos de oro de la telefonía española nunca fluyeron en dirección a París, Londres o Bruselas; pero, según las investigaciones realizadas por Adoración Álvaro Moya, el mercado español atraería unas décadas después el interés del capital estadounidense⁴⁸:

ITT no era la primera empresa estadounidense interesada en el mercado español. Su homóloga AT&T ya solicitó en 1911 información al cónsul americano en Barcelona sobre el sector, y el propio Departamento de Estado dio instrucciones con el mismo fin a la embajada en Madrid en 1920.

Los momentos más críticos dentro del Cuerpo de Telégrafos desde su creación en 1855 se vivieron a principios de 1918, cuando los telegrafistas decidieron declararse en huelga y el gobierno tuvo que militarizar el servicio. Las condiciones laborales de los telegrafistas eran cada vez peores, el volumen de trabajo cada vez mayor pero los sueldos se mantenían congelados. La reacción del gobierno de García Prieto fue quizá exagerada, en tanto en cuanto la Guardia Civil tomó las oficinas de telégrafos y se autorizó al Ministro de la Guerra para disolver el Cuerpo y destituir a los funcionarios que no acudieran a trabajar. La opinión popular se puso del lado de los telegrafistas y todo este conflicto acabó con arrastrar al gobierno, que presentó su dimisión el 20 de marzo de 1918. El siguiente gabinete, presidido de nuevo por Antonio Maura, inició conversaciones con los trabajadores y pronto se puso fin a las hostilidades, desmilitarizando el servicio y devolviendo los puestos de trabajo a los telegrafistas cesados⁴⁹.

⁴⁸ Álvaro-2005, p. 21.

⁴⁹ Yuste-2004, p. 36.

2.2.7. Resumen del caso español

Muchos fueron los factores que contribuyeron a arrastrar a los teléfonos españoles a la desastrosa situación en la que se encontraban casi cincuenta años después de su invención y difusión.

La telefonía nacional nació prácticamente a la vez que el periodo histórico conocido como “la Restauración”, caracterizado por los continuos cambios de gobierno y la penuria de las arcas del Estado, hechos que llevaron al país a una crisis generalizada en todos los aspectos de la vida social española. Todo ello habría de marcar el sistema telefónico nacional con una legislación inconsistente y vacilante, escaso interés gubernamental y una clara falta de fondos públicos para instalar y explotar el servicio adecuadamente.

Cuando la Restauración llegaba a su fin, el teléfono en España se encontraba en un estado lamentable. La estructura del mercado estaba formada por un agregado de monopolios locales privados, redes municipales o provinciales públicas, un monopolio privado de la telefonía interurbana y alguna red perteneciente al Estado. Esta fragmentación tenía una consecuencia inmediata: la interconexión era prácticamente nula, lo que choca con la lógica que gobierna en las industrias de red, que tiende a que sus células se conecten progresivamente. Además, la mayor parte de las redes se encontraban en un estado lamentable, debido sobre todo a la legislación vigente, que obligaba a los propietarios a entregar sus concesiones, incluyendo todo el material, sin que recibieran ninguna compensación, por lo que, en un lógico ejercicio contable, la mayor parte de ellos no realizaban ninguna inversión durante los últimos años con el fin de mejorar o modernizar el servicio.

El negocio telefónico, tal y como estaba planteado, tenía un componente de riesgo importante, por lo que pocos empresarios se aventuraban en él. Por su parte, las administraciones locales o provinciales que instalaron sus propias redes contaban, por lo general, con un servicio más eficiente, ya que no pretendían maximizar beneficios, o por lo menos no tanto como las empresas privadas. Estas redes públicas también planteaban serios quebraderos de cabeza para los gobiernos centrales, al provocar debates espinosos en materia de traspaso de competencias.

La automatización de las centrales brillaba por su ausencia y la calidad del servicio era muy deficiente, pese a lo cual las tarifas eran muy elevadas en la mayoría de los casos. Todo ello provocaba que la tasa de penetración telefónica de nuestro país fuera de las más bajas de los países de nuestro entorno.

Ante esta situación, no es de extrañar que el mercado español fuera un fruto succulento para empresarios extranjeros, que contaban con el capital, la tecnología y la experiencia que permitirían sacar al país del subdesarrollo telefónico. Un proyecto ambicioso de modernización de la red nacional aportaría grandes beneficios a la compañía que lo ejecutara, ya que las necesidades de España en este sector eran grandes y el mercado estaba lo suficientemente liberalizado.

2.3. La ITT y su llegada a España

2.3.1. Sosthenes Behn⁵⁰

Hablar de la creación de la *International Telephone and Telegraph Corporation* (ITT) es hablar de Sosthenes Behn. La empresa, que luego todo el mundo reconocería como una de las multinacionales más importantes, nació de un concepto, el “International System”, una idea sólo presente en la cabeza de Behn, que se empeñó en hacer realidad mediante un gran esfuerzo personal. En origen se trataba de una sencilla sociedad de cartera, casi un negocio familiar con colaboradores de confianza, a la que imprimió, desde la gestación, su carácter personal fuerte, atrevido y seductor. Hacer negocios con la ITT era como tratar con Sosthenes Behn, que más tarde sería conocido como el “Príncipe de los Teléfonos, un brillante diplomático de la industria”. Algún autor ha llegado a afirmar que la ITT creó un nuevo estilo de hacer negocios e incluso un nuevo estilo de hacer diplomacia⁵¹.

Louis Richard Sosthenes Behn nació el 30 de enero de 1884 en Santo Tomás, una isla del Caribe, que en aquel momento era colonia danesa, si bien pronto pasaría a control estadounidense, formando parte del territorio “no incorporado” que hoy se conoce como Islas Vírgenes. Su padre era de ascendencia alemana, nacido en Venezuela, y su madre de origen francés, fue educado en un ambiente políglota, estudió en Córcega y en París y siendo un adolescente tuvo que mudarse de nuevo, esta vez a Nueva York. Por todo ello, no cabe ninguna duda de que, desde bien pequeño, aprendió lo que significaba ser un “ciudadano del mundo”, sin echar raíces en ningún sitio concreto, característica esta que también estampó en su creación personal: la ITT siempre se consideró una empresa “anacional”.

⁵⁰ Buena parte de los datos que aparecen en este apartado y muchos más sobre la vida de Sosthenes Behn están recogidos en Sobel-2000, p. 14-32, y en Yuste-2004, pp. 55-62.

⁵¹ Sampson-1973, p. 24.

Sosthenes tuvo dos hermanos mayores: Guillermo, que murió joven a causa del tétanos, y Hernand, con el que habría de fundar la ITT años después. Hernand y Sosthenes eran muy distintos, pero se compenetraban a la perfección y fueron precisamente esas diferencias las que llevaron sus negocios al éxito internacional. Hernand era tranquilo, comprensivo y reflexivo y prefería mantener un perfil bajo. Sosthenes, por su parte, era extrovertido y deseaba hacerse notar, pero también era inflexible y obstinado. A éste le gustaba contar como en España le apodaron “Behn el malo”, mientras que se referían a su hermano como “Behn el bueno”⁵². Sosthenes tenía una personalidad fuerte y enérgica, que despertaba cariño y temor a partes iguales, le gustaba exhibir su riqueza, agasajar a sus invitados en fiestas lujosas y refinadas y entretenía con su conversación amena e inteligente y las bromas que evidenciaban una gran agilidad mental. El hermano mayor era un administrador nato y se encargaba de la gestión diaria de las empresas, mientras que el hermano menor destacaba por su manejo de las relaciones públicas y su capacidad negociadora.



Figura 2. Sosthenes Behn. Fuente: Electrical Communication, volumen 34, nº 2, junio 1957.

⁵² Sampson-1973, p. 27.

Sosthenes Behn se graduó y trabajó durante algunos años en Nueva York. Fue allí donde se encontraba cuando Estados Unidos declaró la guerra a España en Cuba en 1898 y desde donde siguió todos los acontecimientos que habrían de cambiar el panorama de hegemonía mundial. El enfrentamiento entre EEUU y España que se había ido fermentando imperceptiblemente durante décadas había desembocado en guerra. Antes de que terminara aquel año, España tuvo que rendirse y firmar el Tratado de París, por el que perdió sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. La paz y los años que seguirían a aquel 1898 evidenciaron aún más quiénes fueron los vencedores y quiénes los vencidos en aquella guerra. La historia española se refiere a estos eventos como el “Desastre del 98” y significó el fin del poder del que había gozado durante siglos, si bien ya se encontraba en decadencia desde hacía mucho tiempo y se había acentuado con la independencia de la mayor parte de las colonias americanas a principios del siglo XIX. España recibió un golpe que afectó a la economía y a la política de la Restauración, un golpe del que tardaría muchos años en recuperarse totalmente y que marcaría profundamente a la sociedad española mientras entraba en el nuevo siglo. Para Estados Unidos, la guerra contra España significó todo lo contrario: el comienzo de una nueva era en la que la balanza del poder mundial, tanto político como económico, se inclinaba de su lado. Las cuatro colonias cedidas por España se convirtieron en colonias o “neo-colonias” estadounidenses y aunque el devenir de los tiempos haya provocado que en la actualidad tengan relaciones muy dispares con EEUU, dos de ellas (Puerto Rico y Guam) siguen asociadas con la metrópoli como territorios de ultramar (el término exacto en la administración estadounidense es el de “territorios no incorporados”)

En el Caribe, la descolonización española de las dos islas abrió enormes perspectivas de negocio para Estados Unidos, que rápidamente entró en Cuba y Puerto Rico para explotar sus recursos naturales y sus plantaciones de azúcar, café, tabaco, etc. Sosthenes y Hernand Behn, que se encontraban en Nueva York, fueron espectadores de aquella fiebre de los empresarios estadounidenses por enriquecerse en los nuevos mercados, por lo que también tomaron la decisión de probar fortuna y emprender allí sus propios negocios. Viajaron a San José, capital de Puerto Rico, donde fundaron la firma *Behn Brothers* en 1904 y comenzaron su carrera tocando no pocas actividades comerciales. Tuvieron bastante éxito y pronto comenzaron a ser conocidos dentro del mundo empresarial caribeño, pasando a ser conocidos como “los dos hermanos”. Aún hoy quedan reminiscencias que nos recuerdan el poder comercial que la firma Behn llegó a tener en las islas. Si bien la Revolución Cubana borró cualquier rastro del pasado capitalista y de pleitesía a su vecino del norte (incluyendo,

por supuesto, a los hermanos Behn), en Puerto Rico no ocurrió tal cosa y todavía se conserva el nombre “Dos Hermanos” para referirse a un puente que la empresa Behn Brothers construyó en la capital.

En vista de lo bien que marchaban sus negocios y a pesar de no contar con ninguna experiencia en el sector telefónico, pero con intenciones de diversificar sus inversiones, adquirieron una compañía que explotaba los teléfonos en el sur de Puerto Rico. La buena marcha de la compañía y su demostrada solvencia en el negocio telefónico llamaron la atención de no pocos empresarios, incluyendo a los directivos de la otra compañía estadounidense, mucho más grande, que explotaba el servicio en el norte de la isla, incluyendo San José. Los hermanos iniciaron conversaciones con los accionistas de esa empresa, la *Porto Rico General Co.*, con el fin de fusionar las dos compañías y explotar el negocio a través de una única sociedad. La fusión se llevó a cabo en 1914 y de ella nació la *Porto Rico Telephone Co.*, en la que los hermanos Behn desempeñaron pronto importantes puestos de gobierno⁵³.



Figura 3. Viñeta de la novela gráfica “Chico & Rita” ambientada en La Habana de finales de los años 40. Uno de los locales que aparece en el fondo se llama “Two Broders Bar” o “Bar Dos Hermanos”, que no eran otros que Hernand y Sosthenes Behn, conocidos empresarios del área del Caribe. Fuente: Chico & Rita, Javier Mariscal y Fernando Trueba, 2010.

⁵³ Sobel-2000, p. 26.

Mientras que Sosthenes y Hernand extendían sus negocios en Puerto Rico y se convertían en dos de los empresarios más importantes de la isla⁵⁴, en Cuba se trataba de reorganizar el sistema telefónico. El 9 de septiembre de 1909, una empresa norteamericana fundada en 1908, la *Cuban Telephone Co.*, se hizo con el monopolio de la telefonía en la isla por tiempo indefinido. En vista de que los resultados no estaban siendo todo lo satisfactorios que se esperaba y conocida la excelente gestión que los Behn estaban desarrollando en la isla vecina, los accionistas de la *Cuban* hicieron llamar a estos para administrar la empresa en 1916. Tal y como indica José Altshuler en su artículo “Cuba, plataforma de lanzamiento y polígono de pruebas de la ITT”⁵⁵:

La primera tarea abordada por los Behn con relación a la Cuban Telephone fue reestructurar la deuda de ésta y a la vez tomar las medidas de organización necesarias para aumentar su eficiencia económica y mejorar el servicio. Como resultado, hacia 1917 el ingreso neto aumentó hasta 1,7 millones de dólares, los dividendos comunes se triplicaron con respecto a 1913, y se pagaron los atrasos de las acciones preferidas. Pese a que se estableció un fondo de depreciación, la compañía pudo contar por primera vez con una sustancial reserva en efectivo.

En 1917, Sosthenes Behn fue llamado a filas debido a la entrada de EEUU en la contienda mundial y pronto fue enviado a Francia como parte del Cuerpo de Señales del Ejército. Permaneció en el frente hasta 1919 y alcanzó el grado de Teniente Coronel, a pesar de que nunca llegó a entrar en batalla. Desde entonces, orgulloso por su participación en la campaña bélica, haría que todo el mundo se refiriera a él como “coronel Behn” y se rodeó de amistades nacidas durante aquellos dos años de paso por el Ejército estadounidense. Mientras, Hernand permaneció en el Caribe y continuó administrando las empresas telefónicas de Cuba y Puerto Rico.

Parece que fue a raíz de su paso por el cuerpo de comunicaciones durante la I Guerra Mundial cuando empezó a cambiar su idea de negocio y a gestar el nacimiento del “International System” y de lo que más tarde sería la *International Telephone and Telegraph Company*. Durante su estancia en Europa pudo intercambiar opiniones con técnicos e ingenieros de varios países, así como comprobar el enorme potencial del

⁵⁴ Sobel-2000, p. 35.

⁵⁵ Altshuler-1991, p. 2.

mercado del Viejo Continente, que se encontraba mucho menos desarrollado que el estadounidense, además de parcialmente destruido por la guerra, y que ofrecía un terreno mucho más propicio para abrir nuevos negocios⁵⁶.

2.3.2. El nacimiento de la ITT

Cuando Behn regresó a sus negocios en las Antillas, se propuso resucitar un viejo proyecto, iniciado en 1917, pero que se había puesto bajo suspenso debido a la participación de EEUU en la contienda mundial: el tendido de un cable telefónico submarino que permitiera comunicar Cuba con el continente. Para ello se pusieron en contacto con la *American Telephone and Telegraph Co.* (AT&T) de Theodore Vail e iniciaron una serie de contactos con el fin de llevar a cabo el proyecto de forma conjunta. Años antes, en 1916, se había creado la *Cuban-American Telephone and Telegraph Co.*, empresa cuyo fin era la instalación y explotación del cable submarino que habría de tenderse entre La Habana y Key West en Florida. La comunicación telefónica entre los dos países se consiguió finalmente el día 11 de abril de 1921, materializándose con una conversación entre los presidentes de los dos países, y tres días más tarde se inauguró también el servicio entre Cuba y Canadá.

El gran logro de los hermanos Behn fue el haber conseguido llegar a un acuerdo de iguales con la mayor empresa de telecomunicaciones de EEUU y del mundo, no subordinándose a ésta y consiguiendo que la empresa resultante estuviera participada a partes iguales por las dos firmas. No en vano, los activos con los que contaba la *Behn Brothers* en aquellos momentos para asegurar su solvencia no pasaban de sus acciones en la *Porto Rico* y en la *Cuban Telephone*. A pesar de ello, la habilidad negociadora de Sosthenes Behn consiguió un acuerdo sin precedentes.

Mientras, durante la década de 1910, Theodore Vail había iniciado un plan de adquisición de compañías telefónicas locales o regionales por todo el territorio estadounidense, para luego unir las mediante una red nacional y configurar así su “American System”, escudándose en las teorías de “monopolio natural” inherente en los negocios de redes. El lema de la corporación norteamericana era “one policy, one system, universal service”. Los acontecimientos de la Gran Guerra hicieron ver a EEUU el increíble poder estratégico de las telecomunicaciones y se acentuaron los esfuerzos por parte del gobierno y de los empresarios por invertir en el sector y por

⁵⁶ Sobel-2000, p. 34.

blindar su mercado frente a injerencias extranjeras. Irónicamente, también promovió la entrada de capitales estadounidenses en los mercados de comunicaciones de otros países. La administración norteamericana estaba, por lo tanto, dispuesta a apoyar planes de expansión fuera de sus fronteras nacionales como los que se estaban gestando en la cabeza de Sosthenes Behn.

Tal y como explica Yuste en su tesis de 2004⁵⁷:

Sosthenes Behn siempre se miró en el espejo de Theodore Vail y, tal vez, pensó que adquiriendo compañías telefónicas de distintos países, podría reproducir a nivel transnacional el modelo que la ATT estaba implantando en los Estados Unidos. Frente al “Bell System” de Vail se trataba de construir el “International System” de los Behn. [...]

La oportunidad de negocio era más que evidente, pero chocaba con una dura realidad. Las redes telefónicas europeas eran propiedad de los Estados que, bien explotaban directamente el servicio a través de los departamentos ministeriales vinculados a los servicios postales y telegráficos, o bien lo arrendaban a compañías privadas por un plazo de tiempo limitado. De modo que sí el coronel Behn pretendía entrar en el mercado europeo, iba a necesitar una fuerte influencia política; influencia que [...] sabría ejercer en cada momento a través de las personas más adecuadas.

Sosthenes Behn pensaba que su “International System” debía construirse a partir de una confederación de compañías telefónicas nacionales, distintas e independientes, unidas entre sí mediante líneas de larga distancia. A su vez, era de la opinión de que dicha confederación tenía que estar controlada y coordinada por una única corporación norteamericana de capital privado: “su” corporación. Acababa de sentar las bases de lo que, poco después, sería la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT Corp.).

Dicho y hecho. Behn inició entonces sus gestiones con la banca de Nueva York⁵⁸ con el fin de crear una sociedad de cartera (*holding*) que se hiciera cargo de la administración de las empresas de su órbita y que los activos de la sociedad

⁵⁷ Yuste-2004, pp. 64-65.

⁵⁸ Sosthenes Behn tenía importantes contactos en la Banca Morgan y en el National City Bank. Sobel-2000, pp. 30, 31, 35-38, 40 y 42.

estuvieran formados únicamente por un local en Nueva York, unos pocos muebles y las acciones que los hermanos Behn poseían en la *Porto Rico*, la *Cuban* y la *Cuban-American*. Es decir, su idea era comprar sus propias acciones en estas tres compañías con acciones de la nueva sociedad, que pasaría a ser la nueva propietaria de sus intereses en las empresas caribeñas. Esta acción aportaría valor a la sociedad de cartera, que utilizarían para ampliar el capital y continuar adquiriendo intereses o incluso el control de la telefonía en otros países. Al seguir incorporando compañías nacionales a la esfera de los hermanos Behn, su sociedad lograría cada vez un valor más elevado, que les permitiría seguir creciendo.

De una manera tan sencilla, mediante la creación de una humilde sociedad de cartera y del traspaso de las acciones de una firma a otra, nació la *International Telephone and Telegraph Corporation* en 1920. En año y medio, la ITT ya controlaba casi la totalidad de la *Porto Rico* y de la *Cuban* y la mitad de la *Cuban-American*⁵⁹. La elección del nombre tampoco parece casual, puesto que no pocos investigadores han afirmado que fue “deliberadamente elegido para que se la confundiera con la gran empresa AT & T”⁶⁰.

La ITT siguió ampliando su capital y sacando acciones a la venta, consiguiendo el apoyo de importantes grupos financieros de Nueva York, lo que le aseguró la salida a bolsa el 25 de abril de 1923. Para entonces, el nombre de la empresa ya empezaba a sonar con fuerza en los círculos empresariales de EEUU y ya no era ningún secreto que estaba iniciando contactos en diversos estados con el fin de adquirir o establecer empresas telefónicas con las que empezar a tejer su red de compañías bajo el “International System”.

La oportunidad de la ITT residía en el subdesarrollo telefónico que existía en la mayor parte del mundo fuera de Estados Unidos y en ese punto de debilidad nacional era donde sembraba la semilla de sus planes de adquisición de bienes telefónicos en distintos países. Behn habría de chocar, muchas veces, con el obstáculo del nacionalismo y con el proteccionismo que los estados imprimían a sus sistemas de telecomunicación. Su primer punto de mira se encontraba en los países latinoamericanos y así realizó un acercamiento a varios intereses telefónicos en esa

⁵⁹ Yuste-2004, p. 68.

⁶⁰ Sampson-1973, p. 25.

región como fueron los casos de Chile, Montevideo y México⁶¹; si bien no obtuvo, por el momento, el éxito deseado.

Sin embargo, pronto habría de llegar su primer gran éxito. Como ya sabemos, España se convirtió en la joya del imperio de la ITT cuando consiguió, a través de la CTNE, el monopolio de la red nacional en 1924. Nuestro país fue además la puerta de entrada de la multinacional en el mercado europeo.

A principios de 1923, a través de sus contactos con la Banca Morgan, llegaría a oídos del coronel Behn los proyectos de un joven español que pretendía modernizar el sistema telefónico español. Se presentaba de esta forma para la ITT una oportunidad única para dar su primer golpe de efecto. Ese joven se llamaba Gumersindo Rico y aquellos proyectos serían los que más tarde habrían de marcar los designios de las telecomunicaciones españolas durante la mayor parte del siglo XX.

2.3.3. Los proyectos de Gumersindo Rico

La llegada de la ITT a España es un aspecto que ha sido estudiado por varios investigadores a lo largo de los años, publicándose obras de unos y otros que a menudo son contradictorias entre sí. Un interesante resumen de los puntos de vista argumentados por los distintos estudios publicados hasta la fecha pueden encontrarse en la tesis de Antonio Pérez Yuste⁶². El motivo de estas diferencias e inexactitudes ha sido provocado, sin duda, por la falta de documentación sobre estos personajes históricos en estas fechas de gran interés. Tanto los hermanos Behn como sus colaboradores más fieles eran empresarios que comenzaban a leer sus nombres en los periódicos y en las crónicas de los círculos financieros de la época, pero no tenían todavía la importancia que más tarde habrían de alcanzar y que entonces sí provocaría una buena cantidad de documentación que nos permite estudiar sus acciones y su importancia en estos acontecimientos históricos.

Las averiguaciones realizadas por Yuste durante la elaboración de su tesis de 2004, así como varios documentos encontrados en el transcurso de las investigaciones de este Trabajo Fin de Máster, nos han permitido determinar y documentar debidamente la llegada de la ITT a España con bastante exactitud. De

⁶¹ Sobel-2000, pp. 37 y 46.

⁶² Yuste-2004, p. 73-74.

esta forma se ha podido confirmar alguna teoría que existía al respecto y también desmentir otras y asimismo se ha conseguido explicar el porqué y no sólo el cuándo.

La tesis de Yuste nos permitió rescatar un nombre que había quedado olvidado o relegado a un segundo plano, el de Gumersindo Rico González, a la postre Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España y el auténtico creador original de la idea, desde sus orígenes hasta el éxito de sus gestiones en agosto de 1924. Los archivos de la familia Rico, sacados a la luz por este investigador, han sido cruciales en todo este proceso⁶³.

Gumersindo Rico González era asturiano, nacido en Lluarca el 23 de agosto de 1981, y se caracterizaba por su espíritu emprendedor y su gran inteligencia. Se estableció en Madrid en 1921, trabajando en una empresa madrileña de material telefónico y pronto adquirió grandes conocimientos del sector, comprobando rápidamente que la red española estaba necesitada no sólo de una amplia reforma sino de un lavado de cara general que permitiera modernizar el servicio por completo. Muchos fueron los que ya antes habían apuntado los males de la red telefónica del país y reclamaban una mejora general en la calidad del servicio, pero fue Gumersindo Rico el que realmente tuvo la ambición y el acierto de luchar por un proyecto personal y que no escatimó recursos para hacerlo realidad.

En sus primeros años en Madrid, Rico también desarrolló cierta vida política como miembro de un partido político reformista y su nombre comenzó a escucharse en los círculos intelectuales de la capital⁶⁴. La compañía para la que empezó a trabajar como Director-gerente fue la “Telecomunicación y Electricidad, S.A.” (TESA), fundada por Enrique Parellada⁶⁵ con el fin de producir el material telefónico de la Compañía Peninsular de Teléfonos y del resto de empresas de su grupo, en un intento de imitar la política de otras grandes sociedades telefónicas que buscaban una integración vertical de los negocios como la AT&T en Estados Unidos o la sueca L.M. Ericsson.

⁶³ Yuste-2004, capítulo 3.4. La fuente para la obtención de estos datos sobre la vida de Gumersindo Rico se ha encontrado en dicha tesis doctoral, que sacó a la luz interesantes averiguaciones gracias a los archivos de la familia Rico.

⁶⁴ Mucho tiempo después Gumersindo Rico fue diputado durante la segunda legislatura de la II República (1933-1936), tras ganar un escaño por la provincia de Lugo en las primeras elecciones que contaron con sufragio femenino (noviembre de 1923) Esta información se puede consultar en la página web del Congreso de los Diputados: www.congreso.es

⁶⁵ Ver capítulo 2.2.5 del presente Trabajo Fin de Máster.

A raíz de su paso por la gerencia de una de las empresas del grupo de Parellada, Gumersindo Rico pudo comprobar el estado desastroso del sistema telefónico español y se convenció de la necesidad de una reforma total del mismo. Para ello comenzó a vislumbrar un proyecto que, por otra parte, no coincidía en absoluto con las reclamaciones del Cuerpo de Telégrafos que reclamaban la reversión al Estado de todas las líneas y centros telefónicos. Rico era partidario, como muchos otros, de una solución al problema basada en el capital privado, preferiblemente nacional. También entendía que no sólo bastaba con una reforma tecnológica, sino también política, desterrando todas las medidas legislativas que, por su carácter vacilante, no habían hecho más que favorecer la crisis general que sufría el sector.

En 1921 el espíritu inquieto y decidido de Gumersindo Rico le llevó a organizar la primera demostración de un sistema de telefonía automática en España, en la sede de la compañía para la que trabajaba y a la que asistió el rey Alfonso XIII en persona. Aunque el monarca se mostró impresionado por la exhibición, todo parece apuntar que Parellada no terminó de ver la necesidad de modernizar todas sus centrales manuales y convertirlas en automáticas. En este momento es interesante señalar que el sistema automático llevaba 29 años funcionando en EEUU y 20 en Europa (en Alemania, más concretamente)

Decidido a convertir en realidad su proyecto de reorganización del sistema telefónico español, poco tiempo después inició una ronda de contactos con importantes empresarios y financieros del país. A ellos les presentó su idea de reformar la red a través de un sistema similar al que la AT&T estaba desarrollando en Estados Unidos, con una única entidad nacional, que otorgara homogeneidad a sistemas y procedimientos, y que tomara parte activa en el desarrollo tecnológico del país y en las negociaciones con el poder político.

Entre aquellos hombres de negocios se encontraban dos personajes que poco más tarde alcanzarán también notoriedad en la historia de la telefonía española: Julián Cifuentes y Valentín Ruíz-Senén. Julián Cifuentes era un abogado con un gran poder dentro de los círculos financieros españoles y ostentaba los cargos de presidente del “Consejo Superior Bancario”, director general del “Banco Hispano Americano”, además de ser miembro del Consejo de Administración de varias empresas de ferrocarriles, electricidad, etc. En cuanto a Valentín Ruíz Senén, se le puede considerar como uno de los hombres más influyentes del país en aquellos momentos, una de las personalidades más notables en la vida económica española. Era presidente de la sociedad “Española de Comercio Exterior”, director general del “Banco Urquijo”,

director gerente de “Unión Eléctrica Madrileña” y miembro de no menos de veinte Consejos de Administración o juntas directivas de compañías españolas relacionadas con la banca, la electricidad, el gas, etc. Ruíz Senén también ocupó, entre 1920 y 1923, un escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Álava. Como veremos más adelante, estos dos personajes que en aquellos momentos no se mostraron muy entusiasmados con las ideas de Rico, formarían un tiempo después parte del núcleo duro que fundó la Compañía Telefónica Nacional y los bancos de su órbita, Urquijo e Hispano Americano, serían los principales accionistas españoles de la compañía. Tanto Cifuentes como Ruíz Senén fueron nombrados vicepresidentes del Consejo de Administración y presidían las reuniones del Comité Ejecutivo en turnos mensuales.

Después de aquellas reuniones, Rico dejó la dirección de la “Telecomunicación y Electricidad” e inició contactos con la *International Western Electric Company* (IWECC). Esta empresa era filial de la AT&T de Theodore Vail y estaba encargada de la producción de material telefónico para el mercado internacional. En un claro intento por explotar el mercado español, tal y como ya hacía en otros países, la IWECC creó una sociedad, la “Teléfonos Bell, S.A. Manufacturas Eléctricas”, que abrió una fábrica en Barcelona y estableció una delegación comercial en Madrid, de la que se encargó Gumersindo Rico. Las avatares de la historia querrían que poco después, en 1925, la AT&T se tuviera que deshacer de la IWECC por culpa de un proceso antimonopolio iniciado en EEUU y que el comprador fuera la ITT, que convirtió a la *Western Electric* en su brazo productor y cambió su nombre por el de *Standard Electric*. Durante muchos años, la filial española de esta compañía, la “Standard Eléctrica” ostentó el monopolio de la producción nacional de material telefónico, incluso durante décadas después de que la ITT fuera apartada de la Compañía Telefónica Nacional de España.

Rico pudo entonces conversar sobre sus planes con Douglas Brooks Baker, gerente de la fábrica barcelonesa e importante directivo de la IWECC. Esta compañía no estaba interesada, en principio, en proyectos que implicaran la instalación o explotación de redes telefónicas ya que su actividad se ceñía a la producción de material. Sin embargo, lo que sí pudo hacer Brooks Baker por Rico, a principios de 1923, fue ponerle en contacto con un tal Seaborn, directivo de la Banca Morgan-Harjes en París⁶⁶, que era una delegación de la Banca Morgan de Nueva York. No es

⁶⁶ Yuste-2004, p. 95.

difícil por lo tanto establecer el siguiente paso que dio Seamborn una vez conocida la noticia de que un directivo español estaba buscando capitales y apoyos para la reforma del sistema telefónico español.

2.3.4. Los viajes de Sosthenes Behn a Europa

Como ya hemos visto, cuando Sosthenes Behn volvió al Caribe y EEUU tras su participación en la I Guerra Mundial dedicó todos sus esfuerzos a la creación de la *International Telephone and Telegraph Corporation* y una vez conseguido, se centró en la búsqueda y adquisición de intereses telefónicos en países latinoamericanos y europeos. En apartados anteriores se ha indicado como realizó una serie de tentativas para la consecución de la concesión de explotación de varias redes del continente americano. En cuanto a Europa, parece demostrado que su primer punto de mira se encontraba en Francia.

El coronel Behn era un apasionado de todo lo francés, enamorado especialmente de su gastronomía (viajaba siempre con un cocinero de esa nacionalidad) y de la forma de socializar y de hacer negocios de sus gentes. No en vano, Sosthenes Behn había estudiado durante su adolescencia en Córcega y en París y más tarde pasó dos años combatiendo en suelo francés. A más honra, llegó a ser nombrado Caballero de la Legión francesa. Durante la contienda había servido en el *US Signal Corps*, por lo que tuvo una oportunidad única para estudiar el mercado francés, oportunidad que por supuesto no desaprovechó, tratándose Behn de un espíritu emprendedor e inquieto. El desarrollo telefónico francés tampoco se caracterizaba, en aquella época, por su calidad ni por su penetración relativa. Aunque mejor situada que España, Francia tampoco alcanzaba puestos muy altos en las estadísticas telefónicas europeas. No es de extrañar, por lo tanto, que Behn se sintiera interesado por explotar un mercado tan jugoso como el francés y convertir a esta potencia mundial en el primer satélite de su corporación internacional.

El investigador Ángel Calvo ha constatado dos viajes que Behn realizó en el verano de 1922 y en la primavera de 1923⁶⁷ gracias a las crónicas de sociedad del *New York Times*.

⁶⁷ Calvo-2010, p. 98.

Sin embargo, ampliando las averiguaciones de Calvo gracias a documentación inédita obtenida para la realización de este Trabajo Fin de Máster, parece que el viaje realizado en 1922 se inició, no en verano, sino en el invierno inmediatamente anterior. Las “Social Notes” del *New York Times* de 21 de febrero de 1922 indican que el matrimonio Behn partió desde Estados Unidos hacia París y que se quedarían allí “varios meses”. El 21 de julio volverían a aparecer en prensa para indicar que a pesar de haber anunciado su próximo regreso, que más tarde se sabría estaba previsto inicialmente para el 29 de julio, habían decidido quedarse en París el resto del verano. El artículo de 4 de agosto de 1922 explicaba el cambio de planes de los Behn: permanecerían en Europa hasta el 15 de agosto y luego pasarían un mes en Nueva York antes de volver a Cuba para pasar el invierno.

El regreso al continente americano se realizó finalmente el 19 de agosto, tal y como quedó recogido en las “Social Notes” del *New York Times* del día siguiente. Curiosamente, en este artículo se refiere al empresario como “el señor Sosthenes Behn de Filadelfia”. En estas notas del verano de 1922 también se puede leer que tras su viaje a Europa pasaron por Nueva York, donde coincidieron con Hernand Behn y señora, que venían desde La Habana, indicando que se quedarían un tiempo hasta que regresaran a Cuba juntos⁶⁸.

No hay pruebas documentales de que estos viajes a Europa en 1922 y 1923 le llevaran al sur de los Pirineos. De lo que sí se tiene constancia es que, a principios de 1923, cuando se encontraba intentando colocar 50.000 nuevas acciones de la ITT que le permitirían poner en marcha su plan de adquisición de empresas de telefonía en países extranjeros, fue informado por la Banca Morgan-Harjes francesa de un interesante proyecto en España. Un directivo que la IWECC tenía en su filial en España, de nombre Gumersindo Rico, había viajado a París en busca de los apoyos económicos que no había encontrado en el mercado español para hacer realidad su proyecto de modernización del sistema telefónico nacional. Esta noticia tuvo que entusiasmar inmediatamente a Sosthenes Behn ya que esta oportunidad cumplía a la perfección con los planes de expansión que buscaba para su “International System”. No en vano, España tenía una penetración de teléfonos muy baja, contaba con un marco legislativo liberalizado y con la baza del idioma, que dominaba a la perfección

⁶⁸ New York Times, 21 de febrero de 1922, “Social notes”; 21 de julio de 1922, “Social notes”; 4 de agosto de 1922, “Social notes”; 20 de agosto de 1922, “Social notes”; 22 de agosto de 1922, “Social notes”.

(al igual que su hermano Hernand y muchos de sus más cercanos colaboradores en compañías cubana y portorriqueña)

*Todas estas razones debieron convencer muy rápidamente a Sosthenes Behn porque, a los pocos días, la Banca Morgan-Harjes contestó al directivo español, que había permanecido en París esperando una respuesta, que el asunto interesaba a la ITT y que, en un breve plazo de tiempo, una persona de esta organización viajaría hasta Madrid para estudiar el proyecto y tomar las acciones pertinentes para llevarlo a cabo.*⁶⁹

Esta persona sería Lewis J. Proctor, vicepresidente de la ITT y hombre de absoluta confianza de Sosthenes Behn.

2.3.5. Los primeros pasos de la ITT en España

Proctor llegó a España en marzo de 1923, tal y como se desprende de una referencia, que se presenta de manera inédita en este Trabajo Fin de Máster, aparecida en el diario “La Época” en su edición de 20 de marzo de 1923⁷⁰. En este pequeño artículo de corte social se habla de la tradicional costumbre de una tal señora de Bauer de pasar la tarde en su mansión de la calle San Bernardo con parte de la alta sociedad española y extranjera afincada en Madrid. A continuación indica:

Entre las personalidades que acudieron a la recepción figuraban el notable pintor francés León Scot, quien ha regresado de su excursión de Andalucía; míster y mistress Proctor, distinguido matrimonio norteamericano que viene a instalarse en Madrid; la princesa Pía de Saboya; duquesas de Pinohermoso, Unión de Cuba y Ahumada [...]

El artículo sigue enumerando personalidades de la aristocracia española, así como otros miembros de la sociedad madrileña, que asistieron a dicha reunión. Se confirma de esta forma la tesis de varios investigadores que afirmaron en sus escritos⁷¹ que fue Lewis J. Proctor el primer directivo de la ITT en llegar a España a principios de 1923 y no un grupo más numeroso liderado por Logan N. Rock tal y

⁶⁹ Yuste-2004, p. 75.

⁷⁰ La Acción, 20 de marzo de 1923, p. 5. Documento inédito.

⁷¹ Yuste-2004, p. 75.

como indican otros historiadores⁷². Todo parece indicar que el grueso de colaboradores de la ITT llegaría a principios de 1924, cuando las labores realizadas por Proctor durante 1923 y las reuniones llevadas a cabo por Behn a finales de aquel año ya parecían indicar que la ITT iba por el buen camino para conseguir la concesión del sistema telefónico español.

Proctor se mudó inmediatamente a una casa en calle Serrano⁷³, número 9, e instaló su despacho en las oficinas de la compañía “Teléfonos Bell”, en la Plaza de la Independencia, número 2, donde Gumersindo Rico trabajaba al frente de la delegación comercial. Proctor y Rico se pusieron a trabajar rápidamente en sus planes de negocio, empezando por recabar la opinión de las fuerzas vivas españolas en materia telefónica y desplegando sus mejores habilidades sociales por hacerse un hueco dentro de los círculos financieros y políticos españoles.

Con respecto a esta segunda “misión”, Proctor no escatimó en apariciones públicas y pronto era ya un personaje habitual en las notas de sociedad de los periódicos madrileños. No había semana que no apareciese su nombre o el de su mujer⁷⁴ en algún artículo, cuando no en varios, en relación a una fiesta distinguida, un estreno de una importante obra de teatro o una reunión para tomar el té en la mansión de algún personaje de rancio abolengo. Además, cabe destacarse en un tono más personal que a finales del mes de junio nacería en Madrid su primer y único hijo⁷⁵.

Sus contactos dentro de la sociedad española eran importantes y no tuvo ninguna dificultad para mantener y fomentar dichas amistades en cuanto se hubo instalado en Madrid. Sólo dos días después de su primera aparición en prensa, el 22 de marzo de 1923, los Proctor ofrecieron un té en su casa de la calle Serrano en honor al infante don Fernando⁷⁶, al que habían conocido un tiempo antes en Venezuela al regresar éste de un viaje oficial por Sudamérica. Tal y como indican las notas

⁷² Calvo-2010, p. 98.

⁷³ El Sol, 23 de marzo de 1923, p. 4.

⁷⁴ Proctor se había casado con una señorita venezolana de buena familia.

⁷⁵ El Globo, 23 de junio de 1923, p. 2; La Voz, 23 de junio de 1923, p. 2.

⁷⁶ El infante don Fernando era primo-hermano del rey Alfonso XIII (ambos eran nietos de la reina Isabel II), pero también cuñado por casamiento con la segunda hermana del rey, María Teresa de Borbón. María Teresa murió en 1912 y don Fernando casó en segundas nupcias con Doña María Luisa de Silva y Fernández de Henestrosa. Alfonso XIII, muy cercano a don Fernando, estuvo de acuerdo con esta segunda boda, ella fue nombrada duquesa de Talavera y se le concedió el título de Alteza Real.

aparecidas en prensa⁷⁷, a esta reunión asistieron muchas más personalidades, como diplomáticos españoles y extranjeros y otras personas conocidas de la sociedad madrileña.

No sería ésta la única reunión organizada en honor al infante don Fernando, ya que justo dos meses más tarde, el 22 de mayo, se invitó de nuevo a importantes figuras españolas y extranjeras para tomar el té y jugar al bridge en casa del matrimonio Proctor⁷⁸. A esta segunda celebración asistió un variopinto grupo de personalidades entre las que se encontraba el infante y su mujer, Gumersindo Rico y el nuevo embajador plenipotenciario de Estados Unidos, Alexander P. Moore. Éste último fue el representante estadounidense en España desde 1923 a 1925 y una figura clave en el juego de apoyos y contactos al más alto nivel que se desarrollaría un año más tarde cuando la CTNE intentaba hacerse con el control de la telefonía española. Sus sucesores en el cargo, Ogden H. Hammond e Irwin B. Laughlin, también realizaron una intensa labor diplomática a favor de los intereses de la ITT en España.

Durante aquella primavera de 1923, Proctor desarrolló una intensa labor diplomática tal y como atestiguan sus múltiples apariciones en las notas de sociedad de la época. No cabe duda de que en estas reuniones conocería a importantes personalidades de la burguesía financiera e industrial de la capital y haría importantes contactos que habrían de servirle en el futuro para llevar a cabo sus planes de negocios.

Pero las veladas sociales y las recepciones oficiales no serían el único campo de acción de Proctor. Junto a Rico, inició contacto con el que sería el último gobierno de la Restauración, el de Manuel García Prieto, al que expuso su plan para construir y organizar en España un sistema telefónico moderno y eficaz. Todo parece indicar que los contactos se alargaron demasiado y que el Presidente del Consejo de Ministros no se mostró muy interesado en la cuestión telefónica, apremiado como estaba por solucionar otros problemas mucho mayores como las revueltas sociales o la agitación rifeña⁷⁹. Sí parece que sus palabras fueron escuchadas por el Subsecretario de la

⁷⁷ El Sol, 23 de marzo de 1923, p. 4; La Acción, 23 de marzo de 1923, p. 5; La Voz, 23 de marzo de 1923, p. 2.

⁷⁸ La Época, 23 de mayo de 1923, p. 2; El Sol, 24 de mayo de 1923, p. 4; La Correspondencia de España, p. 24; La Voz, 24 de mayo de 1923, p. 2.

⁷⁹ Yuste-2004, p. 77; Calvo-2010, p. 99.

Presidencia, Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra, como veremos en capítulos posteriores.

Otra tarea a la que se dedicaron con ahínco fue a la incorporación de técnicos e ingenieros de renombre, con sobrada experiencia en el negocio de las comunicaciones, dentro de su equipo de colaboradores. De esta forma, Proctor y Rico organizaron un grupo de trabajo, formado por profesionales de prestigio dentro del sector, así como una importante lista de abogados, contables y otros trabajadores, todos ellos bajo las órdenes de la ITT y encomendados a la labor de desarrollar el proyecto que habría de hacerse con el control de la red nacional de teléfonos. Así, un nombre como el de Pedro Pérez Sánchez ya sonaba dentro de las filas de la multinacional americana desde muy temprano. Pedro Pérez había sido Jefe de sección de primera clase en el Cuerpo de Telégrafos y allí alcanzó gran notoriedad, por lo que la sección madrileña de la compañía “Teléfonos Bell”, dirigida por Gumersindo Rico, le contrató en marzo de 1923 y de ahí pasó a obedecer órdenes de la ITT⁸⁰. En un artículo de la revista *El Electricista* de mayo de 1923 ya se menciona que el antiguo telegrafista se encontraba trabajando dentro de la plantilla de la *International* en España⁸¹. No cabe duda de que Pedro Pérez aportó valiosos conocimientos y datos de orden administrativo de su paso por el Cuerpo de Telégrafos, además de información sobre los planes de la corporación estatal, así como sus impresiones ante la reversión de las líneas, tanto la opinión oficial que expresaba a los medios y a la sociedad como sus valoraciones de puertas hacia dentro.

Con respecto a su interés por recabar la opinión de las fuerzas vivas españolas en la cuestión telefónica y de conseguir su apoyo y aprobación para hacerse con el control de la red nacional, Proctor redactó una carta de dos folios con el membrete de la ITT, fecha el día 7 de mayo, y que envió a todas las fuerzas vivas españolas: “a todas las Diputaciones Provinciales, Corporaciones Municipales, Cámaras de Comercio, Cámaras de la Propiedad Urbana, Asociaciones Agrarias, Sociedades Económicas de Amigos del País, Círculos Mercantiles y, en general, a todas las agrupaciones que en aquel momento tenían algún tipo de influencia política, social o

⁸⁰ Calvo-2010, p. 99.

⁸¹ *El Electricista*, 25 de mayo, nº 786, p. 6459.

económica en cada uno de los pueblos y ciudades de España”⁸². La carta iba acompañada por una memoria de seis hojas en la que se detallaba la necesidad de modernizar totalmente el sistema telefónico español y la capacidad tecnológica y financiera que tenía la ITT para llevar a cabo esta reforma.

Proctor, en nombre de la ITT, explicaba que la multinacional llevaba años (!) siguiendo con interés la legislación y el desarrollo de la telefonía en nuestro país y que para continuar con este estudio se habían desplazado a España. Declaraba que contaban con “la colaboración de algunas de las personas más competentes en cuestiones telefónicas de este país, y con la cooperación y el apoyo de importantes elementos bancarios españoles”. El proyecto que se presentaba reformaría toda la red nacional, implantando un “sistema perfecto completamente nuevo” y sin coste alguno para las arcas del Estado.

La compañía española que pretendían crear se llamaría “Red Telefónica Nacional de España”, estaría formada por todas las entidades nacionales interesadas en el negocio telefónico, y contrataría con el Gobierno la instalación de un sistema telefónico moderno para toda España en un plazo de ocho años, que incluiría los últimos avances tecnológicos, como las centrales automáticas o repetidores en las líneas de gran distancia. Para ello, el Estado tendría que entregar a la compañía todas las redes y líneas existentes, incluyendo las que se encontraban en manos de concesionarios privados. Durante el tiempo que dure la construcción y reforma de la red, así como la formación del personal español que trabajaría en ella, la empresa tendría a su cargo el sistema telefónico nacional, pero pagaría al Estado “un tanto por ciento de las entradas íntegras”⁸³.

Cabe destacar, en este punto, el término “Red” que aparece en el nombre de la hipotética empresa que habría de crear la ITT con capital español, que un año más tarde, en el proceso de fundación de la CTNE, cambiaría por el de “Compañía”. Se puede apreciar que el término original se ajustaba a los planes que Proctor presentaba en su carta de 1923, ya que la palabra “red” sugiere que la empresa se encargaría de las obras de construcción (en un plazo de ocho años según sus cálculos iniciales),

⁸² Yuste-2004, p. 77.

⁸³ Carta enviada por Lewis J. Proctor el 7 de mayo de 1923 a todas las “fuerzas vivas” españolas. Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, legajo 689, expediente 19.

cediendo luego la explotación al Estado. No cabe duda de que las intenciones de la ITT crecerían con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que el vocablo “compañía” insinúa una amplitud de miras mucho mayor, enfocada no sólo en la construcción, sino también en la explotación del servicio, tal y como finalmente consiguieron con la firma del contrato con el Estado en agosto de 1924.

Unos meses más tarde, durante el verano de 1923, Proctor y Rico se embarcaron en un viaje por España con el fin de reunirse con todos aquellos personajes relevantes de la política y la economía españolas que quisieran recibirles, con el fin de contarles, en persona y con más detalle, el proyecto de telefonía que ya habían relatado en su carta de mayo. Este viaje les sirvió, por lo tanto, para establecer contactos en otros niveles distintos a los que venían tratando en Madrid, pero también necesarios, y para estudiar las características de cada región. Además, abordaron, con poco éxito, algunos intereses telefónicos con el fin de iniciar un proceso de adquisición de líneas y redes, si bien se tuvieron que contentar con obtener los datos de contacto y sembrar la semilla que habría de germinar unos meses después cuando toda la maquinaria negociadora de la ITT se pusiera en acción.

No cabe duda de que tanto la carta enviada en mayo como las reuniones mantenidas durante los meses de verano provocaron reacciones de lo más diversas, teniendo en cuenta la cantidad de variables que intervenían en la opinión que cada representante de alguna corporación o entidad del país tenía sobre el teléfono y la forma de abordar la solución a los problemas de los que adolecía. Seguramente recibirían manifestaciones de apoyo, aunque posiblemente la CTNE exageraría un poco cuando afirmó que Proctor recibió tres mil cartas de apoyo a los proyectos presentados por la ITT en 1923⁸⁴.

Del otro lado también recibieron reacciones negativas y de oposición a sus planes. Así ocurrió con la Diputación de Guipúzcoa, iniciándose de esta forma una tensa relación entre la ITT/CTNE y esta corporación provincial, que no habría de normalizarse hasta más de un año después cuando el Marqués de Urquijo intercedió y demostró la cordialidad de la que hacía gala la compañía telefónica. Un mes después del envío de la primera memoria en mayo de 1923, los responsables de la ITT se volvieron a dirigir a esta diputación (se desconoce si insistieron también a alguna otra entidad) solicitando su opinión sobre los proyectos de la multinacional. El 19 de junio,

⁸⁴ Yuste-2004, p. 79.

Ignacio María Echaide⁸⁵, Ingeniero Director de la red provincial desde 1909, contestó personalmente a Proctor con otra misiva, a la que se adjuntó un folleto explicativo del grado de desarrollo de la provincia de Guipúzcoa en telefonía y declarando que “no necesitaba colaboración de empresas extranjeras”. Unos días más tarde, el 28 de junio, la Comisión de Teléfonos de la Diputación acordó contestar en términos similares⁸⁶.

Así se encontraban las cosas cuando en la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera protagonizó un golpe de Estado que pondría fin a cincuenta años de Restauración y abriría una nueva etapa en la historia española.

2.4. Septiembre y octubre de 1923

2.4.1. El golpe de Estado de Primo de Rivera

El sistema político implantado con la Restauración monárquica en 1874 ya había dado muestras de cansancio mucho antes, sobre todo a raíz de los acontecimientos de 1898 y de las continuas crisis de gobierno que caracterizaron el primer cuarto del siglo XX. Sin embargo, fue en la década de 1920 cuando la situación se hizo ya insostenible y era evidente que la clase política de los partidos tradicionales no podría solucionar los graves problemas a los que se enfrentaba el país: la crisis económica, la crispación social, el asunto marroquí, el enfrentamiento de los gobiernos centrales con los nacionalismos, etc. El sistema necesitaba reformarse por completo y no había dirigente, empezando por el propio Alfonso XIII, que no sospechara un cambio radical en un horizonte cercano.

El autor Jordi Casassas i Ymbert, en la introducción de un libro con textos escritos por Miguel Primo de Rivera durante la Dictadura⁸⁷, explicaba los motivos del golpe de Estado en los siguientes términos:

⁸⁵ Ignacio María Echaide ostentó el cargo de Ingeniero Director de la red provincial de Guipúzcoa desde el 9 de marzo de 1909 hasta que en 1944 pasó a manos de la CTNE. Echaide también desarrolló una intensa labor de escritura de manuales y compendios sobre telefonía y telegrafía de gran valor técnico e histórico.

⁸⁶ Gutiérrez-1997, p. 239.

⁸⁷ Casassas i Ymbert-1983, pp. 19-20.

Si entre la prosa barroca de Primo de Rivera se entresacan los elementos que para éste venían a justificar el golpe de Estado de septiembre de 1923, veremos que fundamentalmente se quería contrarrestar: una situación de crisis social con la manifestación externa del terrorismo; la creciente agresividad de los nacionalismos, especialmente el catalán; el proceso de responsabilidades abierto por el desastre de Annual (1921); un estado de corrupción y relajamiento administrativo; la acción, considerada escandalosa, de los “políticos profesionales”, y, con esta crítica, la denuncia del callejón sin salida en que había desembocado el sistema parlamentario, y la acción de un movimiento obrero, en especial la del anarcosindicalismo, progresivamente agresivo y al que de forma sistemática se confunde con el terrorismo. En definitiva, unos problemas de fondo que se combinaran, de forma crítica, con una manifestaciones más coyunturales entre 1920 y 1923.

El golpe de Estado se llevaba fraguando desde hacía tiempo en Madrid, pero finalmente se eligió al capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, para que lo ejecutara desde Barcelona, dada su popularidad dentro del Ejército y en muchos otros sectores de la sociedad española. De hecho, Primo de Rivera tenía, por aquel entonces, un trato muy cordial con los movimientos regionalistas de aquella región.

De entre el grupo de militares movilizados durante el verano de 1923, el rey, convencido de la necesidad del golpe, creía que el menos indicado para dirigirlo era Primo de Rivera. No obstante, tras el recibimiento que éste tuvo en Barcelona el 23 de junio, de regreso de su viaje conspirador a Madrid, el monarca se convencería de lo factible del golpe. Este (sic) se produjo la noche del 12 al 13 de setiembre, instaurándose un Directorio provisional en la capital en el que figuraba la plana mayor de los generales conspiradores: Primo de Rivera, Cavalcanti, Federico Berenguer, Saro y Dabán, etc. El día 15 se constituyó el Directorio Militar definitivo bajo la presidencia de Primo de Rivera.⁸⁸

El día 14 de septiembre se publicaría en la prensa el famoso “Manifiesto al País y al Ejército españoles” donde repasaba los males del país y daba cuenta de sus intenciones. A través de éste declaraba: “Pues bien, ahora vamos a gobernar nosotros

⁸⁸ Casassas i Ymbert-1983, p. 31.

u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin poner remedio a nada, dañan tanto y más.”

El golpe de Estado no contó con oposición notable; más al contrario, recibió el apoyo de buena parte de la sociedad española. Incluso algunos sectores liberales, de los que se podría haber esperado una actitud mucho más crítica, tuvieron una actitud, si no a favor del levantamiento, por lo menos de respetuosa cautela. Uno de los motivos de esta falta de oposición fue el hecho de que Primo de Rivera asegurara que la instauración del Directorio Militar sería un estado transitorio, con la intención de realizar las acciones necesarias para sanear el sistema, y devolver el poder a un gobierno democrático lo antes posible.

Tal era el grado de hastío hacia el sistema corrupto y la necesidad de cambio que incluso el movimiento catalanista “saludó” al nuevo régimen, aunque con prudencia⁸⁹. En un principio nada parecía indicar que el Directorio fuera a acometer una política centralizadora, si bien no habría que esperar muchos días para comprobar que estaban equivocados. Ironías del destino, el mismo día que los periódicos catalanes anunciaban que el Gobernador civil de Barcelona, Carlos de Lossada, prohibía la exhibición de cualquier bandera que no fuera la nacional, el presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Puig i Cadafalch publicaba un manifiesto por el que tendía la mano al nuevo régimen, siempre y cuando fuera reconocida la pluralidad regional del país:

*En estos términos, nuestra adhesión pasaría fácilmente a ser de la precisa y estricta que tenemos para el poder constituido, a la más íntima y cordial, base de la actividad fecunda, con la que colaboraríamos a la obra generosa realizada.*⁹⁰

⁸⁹ Gómez Pedreira-2009, p. 157.

⁹⁰ La Vanguardia, 19 de septiembre de 1923, p. 5. En esta misma página, tras la noticia del Gobernador civil de Barcelona y la nota de Puig i Cadafalch, se informaba de que el alcalde de Tarrasa había sido destituido por leer “una poesía original, que es abiertamente antiespañola”.



Figura 4. El rey Alfonso XIII y el general Miguel Primo de Rivera

La Constitución de 1876 no fue derogada oficialmente, pero se declaró el estado de guerra y con ello quedaron suspendidas las libertades de expresión, reunión y asociación y se instauró la censura de prensa. El gobierno del Directorio Militar no estaba formado por ministros, sino por vocales nombrados por Primo de Rivera, todos ellos generales del Ejército. El dictador, como Ministro único, concentraba el poder ejecutivo y legislativo en su persona y tenía todas las facultades inherentes a un gobierno en su conjunto. Las Cortes fueron disueltas y se suprimieron los altos cargos institucionales.

La gestión de los asuntos de Estado se realizaba mediante un curioso sistema de “ponencias”. Dado que no existían carteras ministeriales, los vocales del Directorio no tenían una materia concreta a la que consagrarse y cada cuestión era tratada por uno (o, en ocasiones, dos) de ellos en lo que se conocía como una “ponencia”. Cuando a un vocal se le encargaba una ponencia concreta era habitual que éste tratara el tema de principio a fin y preparara la resolución correspondiente para someterla a la firma del rey.

2.4.2. El nuevo Director General

En materia de telefonía y telecomunicaciones, el nuevo régimen también abrió una etapa de esperanzas renovadas. Todos los agentes y protagonistas del mapa telefónico nacional (los ayuntamientos, el Cuerpo de Telégrafos, las compañías concesionarias, las Diputaciones, las compañías extranjeras que pretendían el mercado español, etc.) advirtieron la oportunidad de recuperar sus reivindicaciones pendientes y no tardaron en acercarse al régimen para ver sus demandas cumplidas. Dado que muchas de estas exigencias eran contradictorias entre sí, era evidente que el Directorio no podía satisfacer todas ellas y, mientras algunos salieron altamente beneficiados, otros tuvieron que abandonar el escenario cuando el nuevo régimen les cerró las puertas. En este sentido, los telegrafistas se mostraban optimistas por los aires de cambio, tal y como se desprende de las palabras de un articulista de la revista *Electra*⁹¹:

Un ciclón providencial se llevó el tinglado de la farsa. España entró hace tres meses en un nuevo periodo de renovación, de resurgimiento, de despertar en las conciencias ciudadanas, y el telegrafista -el funcionario del Estado que más ha sufrido- respiró fuerte. Ahora, ahora sí que va de verás -pensó-. Telégrafos ha dejado de ser la Cenicienta. A Telégrafos ya no se le perseguirá. Telégrafos será al fin grande, se le dará una organización adecuada, los elementos de trabajo necesarios, se le considerará, se incautará de los teléfonos, de la radiotelegrafía, saldremos de nuestro atraso y podremos pasearnos orgullosos por Europa. ¡Albricias, albricias, ya tenemos Gobierno!

En la revista *El Electricista* se llegó a publicar un artículo, titulado “Hosanna”⁹², en el que casi se demostraba devoción religiosa al nuevo régimen, declarando que éste “salvará a la nación”. Los telegrafistas deseaban que se abordara por fin la unificación de todos los servicios de telecomunicaciones bajo el control del Cuerpo de Telégrafos y “rezaban” por ello:

Vengan todos, absolutamente todos los servicios que integran el enunciado del Cuerpo. (Todos los servicios de telecomunicación para el Cuerpo de Telégrafos.) [...]

⁹¹ *Electra*, 20 de diciembre de 1923, nº 5, p. 99.

⁹² *El Electricista*, 5 de octubre de 1923, nº 799, p. 6561.

Hagamos llegar al Directorio militar los anhelos de los amantes de una España grande e integra, pidiendo que el cargo de Director general de Telégrafos recaiga en un telegrafista sano de cuerpo y de alma. El, solo el, puede hacer la labor grande que todos esperamos.

Sus “plegarias” fueron escuchadas, por lo menos en parte, y el mismo día que este artículo salía publicado, Primo de Rivera nombraba Director General de Correos y Telégrafos a José Tafur y Funés (1861-1930), Jefe del Centro Electrotécnico de Comunicaciones y Coronel de Ingenieros⁹³. El Cuerpo de Telégrafos tenía motivos para mostrarse esperanzado al haber recaído el puesto, por fin, en una persona con gran experiencia en el sector y que podría entender y atender sus reivindicaciones. De las crónicas y los artículos de la época se puede apreciar que Tafur Funés era un hombre prudente y reflexivo con el que se podía dialogar.



Figura 5. José Tafur Funés. Fuente: Electra, nº 3, 30 de noviembre de 1923

⁹³ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 5 de octubre de 1923. Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 1923, nº 279, p. 67. Tafur Funés ocuparía el cargo de Director general de Correos y Telégrafos (puesto que pasaría a denominarse “Director general de Comunicaciones” unos meses más tarde) hasta su muerte el 13 de febrero de 1930.

Los telegrafistas le dedicaron no pocas palabras de reconocimiento y agasajo durante los días posteriores a su nombramiento. Así, muchas revistas del sector como El Electricista o Electra, publicaron varias notas en las que se reconocía su pasado como telegrafista y se confiaba en su labor al frente de la Dirección. No obstante, también manifestaban su cautela por lo que habría de venir:

El referido colega se muestra extremadamente entusiasmado por tal nombramiento. Por nuestra parte confesamos notablemente que todas las referencias coinciden en hacer constar que el señor Tafur y Fulnes (sic) es un caballero en su trato; culto, muy culto; bueno, muy bueno. Hombre honrado y leal. Ya es mucho, pero entendemos que los entusiasmos deben quedar en actitud expectante hasta conocer las obras del nuevo Director.

Porque creemos que el hecho de haber firmado el Directorio el nombramiento de un Director general cuando se han suprimido todos los que había, supone, indudablemente, el propósito de acometer grandes reformas en Comunicaciones.

¿Cuáles serán estas?... Esta es la incógnita del problema y ello es lo que intriga a la corporación telegráfica.

Puede el Sr. Tafur provocar el entusiasmo delirante en la familia telegráfica y dejar huella imperecedera de su paso por la Dirección, dictando una medida o llevándola, mejor dicho, a la inmediata aprobación del Directorio. Esta: INCAUTACION.

Y teniendo la seguridad de que, al hacerlo así, sirve extraordinariamente a su Patria. La telecomunicación es patrimonio de la soberanía del Estado, y no puede YA tolerarse abdicaciones de la soberanía.

El Electricista saluda con todo respecto al nuevo Director general y le desea tantos triunfos como para nosotros queremos.

Bienvenido sea el caballero modesto y bueno de quien tanto esperamos.⁹⁴

⁹⁴ El Electricista, 15 de octubre de 1923, nº 800, p. 6564.

2.4.3. La actitud de la ITT con el nuevo régimen⁹⁵

Mientras estos acontecimientos sacudían la historia española, Sosthenes Behn se encontraba en París. El coronel no había abandonado sus aspiraciones de hacerse un hueco en el mercado telefónico francés y acababa de fundar una empresa allí. A requerimiento de éste, Gumersindo Rico viajó hasta la capital del país vecino en una fecha que no ha podido determinarse con exactitud. Sin embargo, bien podría haber sido después de conocerse en Francia las noticias del levantamiento militar.

Es lógico pensar que el presidente de la ITT estuviera muy interesado por los cambios políticos del país, ya que su equipo llevaba meses trabajando en el proyecto para hacerse con la telefonía nacional y estableciendo los contactos oportunos con el último gobierno democrático de la Restauración, si bien todavía no habían dado los frutos deseados. De ahí que quisiera conocer, de la mano de Gumersindo Rico, cómo podía afectar el nuevo orden político y social a sus aspiraciones y establecer un nuevo plan de acción.

Seguramente, y lejos de echarse para atrás, la mente dinámica del coronel comenzó a barruntar un viraje en sus planes. Como tantos otros componentes del mapa telefónico español, vio en el nuevo régimen una oportunidad única para conseguir sus objetivos. Sin embargo, para ello era primordial actuar con rapidez y no dejar que otros agentes se adelantaran en sus pretensiones. La dictadura se encontraba en estado embrionario, todavía insegura en cuanto a la forma de proceder en muchas cuestiones, entre las que se encontraba el asunto telefónico. De nada serviría mantener una actitud cauta y prudente a la espera del examen de los acontecimientos, porque para cuando se quisiera actuar sería demasiado tarde y otros habrían ganado ya el favor del poder.

Sosthenes Behn era un hombre de acción, un negociador nato, y nadie como él manejaba las relaciones públicas y los negocios al más alto nivel, incluso en las situaciones más adversas. El coronel sabía que tenía que viajar a España muy pronto para desplegar sus artes negociadoras y convencer al nuevo orden político de la necesidad de llevar a cabo su plan de modernización telefónica. Así se lo indicó a Gumersindo Rico en su viaje a París, quedando “en visitar Madrid en breve para

⁹⁵ Los datos que aparecen en este apartado se deben a la investigación realizada por Antonio Pérez Yuste en los archivos de Gumersindo Rico (Yuste-2004, p. 82)

abordar la preparación técnica y económica del negocio que ya, definitivamente, parecía decidido a establecer en España”.

El coronel cumpliría su palabra. Sólo un mes después del levantamiento del general Primo de Rivera, Sosthenes Behn se encontraba en Madrid dispuesto a que el proyecto de la ITT en España se convirtiera en su primer gran éxito internacional.

3

CRONOLOGÍA

3.1. Viernes, 26 de octubre de 1923

Sosthenes Behn llega a Madrid y se reúne con Primo de Rivera

Varias notas en periódicos generalistas⁹⁶, así como otras referencias en revistas especializadas de la época⁹⁷, han permitido saber que el Jefe del Directorio Militar, general Miguel Primo de Rivera, mantuvo en la mañana del 26 de octubre de 1923 una entrevista con el coronel Behn. Dicha reunión se celebró en los despachos del Ministerio de la Guerra, situado en el Palacio de Buenavista, en la plaza de Cibeles, después de haber mantenido el Marqués de Estella conversación también con los subsecretarios de Estado y Gobernación, dos generales y los alcaldes de San Sebastián y Barcelona. También se sabe que a esta entrevista asistió el embajador de Estados Unidos en España⁹⁸, Alexander P. Moore, demostrando así, desde el principio, su apoyo incondicional a la Internacional y a los objetivos que pretendía alcanzar en nuestro país.

Sosthenes Behn era, en aquellos momentos, una personalidad desconocida en el país, si bien se trataba de un empresario que ya empezaba a despuntar dentro del mercado telefónico mundial. Presidía, junto a su hermano mayor Hernand, la corporación norteamericana *International Telephone and Telegraph* (ITT), que poseía el control de la telefonía en las repúblicas de Cuba y Puerto Rico (a través de la *Cuban Telephone Co.* y la *Porto Rico Telephone Co.*), así como la mitad de las acciones de la *Cuban-American Telephone and Telegraph Company* (que explotaba el cable telefónico submarino entre Cuba y Estados Unidos). No era ninguno secreto, por lo menos en los círculos empresariales internacionales, que estos dos hermanos pretendían extender los brazos de su sociedad al mayor número de países posible, implantando lo que vinieron a definir como el “International System”. Esta idea, gestada a imagen y semejanza del “American System” que la todopoderosa AT&T explotaba en los Estados Unidos, pretendía crear una red internacional de

⁹⁶ La Correspondencia de España, 26 de octubre de 1923, p. 8; 23 10 26 La Voz, 26 de octubre de 1923, p. 8; El Sol, 27 de octubre de 1923, p. 2. Documentos que se consideran inéditos en el ámbito de investigación en el que se desarrolla este Trabajo.

⁹⁷ El Electricista, 5 de noviembre de 1923, nº 802, p. 6583; Electra, 10 de noviembre de 1923, nº 1, pp. 17-18; El Electricista, 25 de noviembre de 1923, nº 804, pp. 6598-6599.

⁹⁸ Electra, 20 de noviembre de 1923, nº 2, p. 33.

concesiones telefónicas en distintos países, interconectadas entre sí y gobernadas todas ellas desde la empresa matriz con sede en Nueva York.

A este respecto, el coronel Behn, su hermano Hernand y otros altos ejecutivos de la compañía se encontraban tanteando diversos intereses telefónicos en Sudamérica, área del Caribe y Europa. En lo que respecta al Viejo Continente, parece claro que los esfuerzos estaban ahora centrados en España, dadas las especiales circunstancias que convergían en el país⁹⁹, así como la existencia de un idioma conocido tanto por los hermanos Behn como por sus más allegados colaboradores.

Uno de estos colaboradores, Lewis J. Proctor, llevaba en España desde marzo de este año¹⁰⁰, analizando la situación de los teléfonos a lo largo y ancho de la geografía nacional, reuniéndose con personalidades de las más altas esferas, estableciendo contactos y en definitiva trazando un proyecto para la modernización del sistema de comunicaciones telefónicas y bajo el control de la corporación estadounidense. Para esta labor contó con la inestimable colaboración de, entre otros, Gumersindo Rico, un joven asturiano, entusiasta y emprendedor, con alguna experiencia profesional en el sector en España y que venía gestando un proyecto para modernizar la red telefónica nacional y convertirse en uno de los empresarios que sacaran al país del atraso en el que se encontraba sumido.

No es, por lo tanto, casual que el coronel Behn llegara a España en estas fechas: había encargado a Proctor que explorara las posibilidades de negocio y que cultivara los contactos con las personalidades adecuadas; para entonces, los trabajos de éste tenían que estar ya bien avanzados. Los recientes avatares políticos ocurridos debieron también acelerar la presencia del empresario en nuestro país, con la clara intención de que el cambio en el gobierno no diera al traste con sus planes; más al contrario, que los nuevos aires que se respiraban fueran incluso más propicios para su proyecto.

Behn llegó a España unos días antes, si bien no se conoce con precisión la fecha exacta, así como tampoco si se trató ésta de su primera visita al sur de los Pirineos. Gracias a los ecos de sociedad del New York Times, se tiene constancia, al menos, de dos visitas del matrimonio Behn al viejo continente en el año 1922 y

⁹⁹ Ver apartado 2.2.7 del presente Trabajo Fin de Máster.

¹⁰⁰ Ver apartado 2.3.5 del presente Trabajo Fin de Máster.

también a principios de 1923, pero nada hace pensar que esos viajes les hubieran llevado hasta nuestro país. Se sabe, sin embargo, que con esta visita inició una tradición que caracterizaría la personalidad de Behn durante los tiempos venideros: se alojó en el hotel Ritz de la capital, aspecto que no es de extrañar, conocido el gusto del coronel por el lujo y el refinamiento y por hacer gala de su fortuna.

Sorprende en primer lugar la aparente facilidad con la que el empresario consiguió audiencia con Primo de Rivera, teniendo en cuenta que hacía apenas un mes que había llegado a la Jefatura del Gobierno y que tanto su agenda como sus obligaciones debían estar muy por encima de su capacidad. No en vano, la noticia que aparece en *La Correspondencia de España* de este mismo día indicaba que “es tan abrumador el número de los visitantes, que a pesar de su vehemente deseo de recibir a cuantos se le acerquen, se ve en el caso de prevenir que aquellos que no tengan más objeto que entregar algún documento, lo hagan en Secretaría”.

Parece evidente que Sosthenes Behn contaba con importantes influencias dentro de la esfera política. La labor diplomática del embajador norteamericano, también presente en aquella reunión, tuvo que ayudar a que ésta se celebrara. Sin embargo, algunas fuentes¹⁰¹ se refieren a Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra como la persona de contacto con el Gobierno de Primo de Rivera y la llave que le abrió las puertas de tan importantes despachos. Eugenio Barroso¹⁰² era abogado de formación y un político liberal que alcanzó el cargo de Subsecretario de la Presidencia del Gobierno en el último ejecutivo de la Restauración presidido por García Prieto. Las reuniones mantenidas entre Lewis J. Proctor y Barroso y Sánchez-Guerra y los planes que le fueron presentados cuando todavía formaba parte del Gobierno, debieron ser

¹⁰¹ Yuste-2004, p. 78; Álvaro-2005, p. 10; Calvo-2010, p. 104.

¹⁰² Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra era hijo de Antonio Barroso y Castillo (1854-1916), abogado y político cordobés, que desarrolló una intensa labor política a principios de siglo, llegando a ocupar, en numerosas ocasiones, el cargo de Ministro (de Gracia y Justicia, de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Gobernación). Barroso y Castillo tuvo tres hijos varones: Eugenio, Antonio y Javier. Antonio Barroso y Sánchez-Guerra (1893-1982) inició carrera militar y tras el levantamiento de 1936 se incorporó al bando nacional, convirtiéndose en uno de los más fieles colaboradores de Franco hasta el punto de ocupar el cargo de Ministro del Ejército entre 1957 y 1962. Javier (1903-1990), por su parte, estudió Arquitectura, profesión que ejerció durante toda su vida. Sin embargo, fue quizá más conocido por su faceta como futbolista (en el Real Madrid primero y en el Atlético de Madrid después), entrenador, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (entre 1941 y 1946) y presidente del Atlético de Madrid (entre 1955 y 1964), bajo cuyo mandato se iniciaron las obras del Estadio Vicente Calderón (Estadio del Manzanares entonces)

de su agrado, lo que habría permitido que la multinacional norteamericana mantuviera los contactos en las más altas órbitas, a pesar del cambio de régimen.

Las fuentes antes referidas también ponen de manifiesto el hecho de que Barroso y Sánchez-Guerra fue algún tiempo después contratado como abogado de la ITT en España, en recompensa por su valiosa actuación de intermediación¹⁰³. Aún habría de llegar una distinción mayor ya que años más tarde fue nombrado Secretario del remozado Consejo de Administración surgido tras la contienda civil española, en sustitución de Gumersindo Rico (que había sido apartado de la compañía)

Volviendo a la reunión de Sosthenes Behn con Primo de Rivera, se sabe que el empresario quería tratar sobre “asuntos relacionados con las comunicaciones telefónicas” y por las referencias que aparece en las revistas *El Electricista* de 25 de noviembre y *Electra* de 10 y 20 de noviembre se tiene constancia a su vez que Primo de Rivera recibió, de manos del empresario, una memoria que contenía el proyecto de telefonía de la compañía norteamericana.

No cabe duda de que dichos asuntos no podían ser otros que el interés de la ITT por hacerse con el control de la telefonía en España, tal y como ya había hecho en Cuba y en Puerto Rico e intentado alcanzar en otros lugares como Chile, México o Montevideo. No obstante, diversas investigaciones han señalado que los planes que tanteaba la ITT en estas fechas diferían notablemente con respecto a lo que finalmente se logró unos meses más tarde. No era ningún secreto tampoco que la multinacional consideraba como objetivos primeros aquellos países donde el negocio de los teléfonos se encontraba en un estado errático y necesitado de amplias reformas como era el caso español¹⁰⁴.

En cuanto a la memoria presentada al Jefe del Directorio Militar tuvo que ser fruto, necesariamente, del trabajo realizado por Proctor y por las personas que habían colaborado con éste desde su llegada a España en marzo de 1923. Esta memoria no ha podido ser encontrada y por lo tanto se desconocen los términos exactos en los que se desarrolla, aunque los aspectos fundamentales fueron resumidos por la revista *Electra* en su edición de 20 de noviembre, por lo que deducimos que los telegrafistas tuvieron acceso directo a la memoria que Behn presentó a Primo de Rivera el día 26

¹⁰³ Yuste, p. 78.

¹⁰⁴ ITT-1925, pp. 4-8.

de octubre¹⁰⁵. Además, en el primer número de noviembre de la revista *El Electricista*, en un interesantísimo artículo titulado “¿Nos despojan de la Telefonía?”¹⁰⁶, el autor también se refería al proyecto presentado por la ITT al Gobierno.

El Cuerpo de Telégrafos sabía que la corporación estadounidense pretendía impulsar el teléfono en España según un plan de automatización, estímulo de la red rural, refuerzo de las líneas interurbanas, etc. Para ello sería necesario, en primer lugar, entregar todas las propiedades telefónicas a la ITT. Una vez finalizadas las obras, que habrían de durar 10 años y alcanzarían un coste total de 1.200 millones de pesetas¹⁰⁷, el servicio en nuestro país, se decía, pasaría a ser el más desarrollado de Europa. Sin embargo, parece que el proyecto presentado en octubre difería bastante con respecto al que la ITT había enviado en mayo, sólo cinco meses antes. A este respecto, la revista *Electra* decía:

El proyecto que ahora ha presentado de nuevo la citada entidad extranjera difiere grandemente de aquel otro que ella nos dio a conocer en fecha no lejana, patrocinado por el Sr. Pérez Sánchez, y del que mister Proctor, Vicepresidente de aquella Compañía, envió a las fuerzas vivas del país en expresiva y atenta carta circular. Todos los telegrafistas recibieron tales interesantísimos documentos. Pues bien, de aquello queda muy poco, según hemos podido averiguar. El proyecto que hoy tiene el Gobierno es otro.

Si nos atenemos a las palabras de la revista, el proyecto que Behn presentó a Primo de Rivera a finales de octubre mantenía viva la idea de reconstruir las redes telefónicas españolas, si bien ya se dejaba intuir también la posibilidad de hacerse con la explotación.

¹⁰⁵ *Electra*, 20 de noviembre de 1923, nº 2, pp. 33-37.

¹⁰⁶ *El Electricista*, 5 de noviembre de 1923, nº 802, pp. 6583-6585.

¹⁰⁷ Para entender mejor los enormes costos del proyecto de la ITT baste apuntar que el PIB español en 1923 rondaba los 27.000 millones de pesetas (referencia: Carreras y Tafunell-2005, p. 1339). Es decir, con el fin de modernizar el sistema telefónico nacional, la empresa norteamericana proponía al Estado un desembolso de casi un 4,5% de su PIB anual. Sirva también la comparación con los presupuestos de otros proyectos previos para la reorganización telefónica en España. El Proyecto de Colombí de 1921 (Bugallal-1921) se había valorado en 164.875.234,37 pesetas, unas 7 veces menos lo presupuestado por la ITT. El Proyecto de Francos Rodríguez de 1917 (Francos-1917), por su parte, se evaluó en 67.157.873,89 pesetas, es decir, casi 18 veces menos que el de la ITT. Si bien a los costes de estos dos planes españoles habría que aplicarles un corrector como consecuencia del crecimiento de la inflación desde 1917 y 1921 a 1923, no cabe duda de que las diferencias seguirían siendo notables.

3.2. Sábado, 27 de octubre de 1923

Primo de Rivera se reúne con la directiva del Centro Telegráfico Español

Sólo un día después de su reunión con el presidente de la ITT, el general Primo de Rivera tenía en su agenda otra con la directiva del Centro Telegráfico Español¹⁰⁸. En esa tarde, el Jefe del Directorio Militar había celebrado encuentros con otras cincuenta comisiones y ésta, con los representantes de los telegrafistas, habría de ser la última, efectuándose a las 9 de la noche, por lo que inevitablemente hubo de ser corta.

El Centro Telegráfico Español era una asociación formada por telegrafistas que se había “refundado” a finales de agosto de 1922, a pesar de haber sido creada varios años antes, habiendo pasado por épocas de muy poca actividad e inestabilidad. La finalidad de este organismo era el de defender los derechos e intereses del sector¹⁰⁹, si bien la imagen que el mundo telegráfico tenía de esta asociación no siempre fue positiva. Gracias a los esfuerzos que sus Juntas directivas venían desarrollando desde 1922, su figura había mejorado mucho, hasta el punto de que tomaron la iniciativa en lo que respecta a las negociaciones con el nuevo Directorio Militar, reuniéndose primero con varios miembros del mismo, luego con Primo de Rivera y días más tarde con el nuevo Director General de Correos y Telégrafos, José Tafur y Funés. De los asistentes a aquella primera reunión se sabe de la presencia del entonces presidente de la sociedad, José Montón.

Se tiene constancia, gracias a la revista *El Electricista*¹¹⁰, de otra reunión anterior a ésta, en la que conversaron con varios miembros del Directorio, entre los que se destacaba al general Muslera y al coronel Nouvilas, secretario este último de Primo de Rivera. En esta entrevista, que fue bastante extensa, se expusieron las cuestiones más importantes que preocupaban al sector de los telegrafistas en aquellos momentos, entre las que se encontraba la política de concesión de servicios de telecomunicación a empresas privadas y su deseo de que el Estado se hiciera cargo de todos ellos.

¹⁰⁸ *El Electricista*, 5 de noviembre de 1923, nº 802, p. 6583; *Electra*, 10 de noviembre de 1923, nº 1, pp. 17-18; *El Electricista*, 25 de noviembre de 1923, nº 804, pp. 6598-6599.

¹⁰⁹ Villacorta-1989, p. 408

¹¹⁰ *El Electricista*, 25 de octubre de 1923, nº 801, p. 6579.

Sirvan estas reuniones y las que habrían de venir como muestra de la celosa actividad que desarrollaron todos los actores del escenario telefónico español cuya finalidad era obtener el favor del nuevo régimen y resucitar las reclamaciones pendientes.

En la reunión con Primo de Rivera, la directiva del Centro Telegráfico Español le hizo entrega de una memoria en la que trataban el asunto telefónico, así como otras cuestiones con respecto a las escalas del Cuerpo de Telégrafos que venían levantando un agrio debate dentro del sector en aquellos momentos. En lo que respecta a los teléfonos, la sociedad era firme defensora de las demandas generales de los telegrafistas: la pretensión de que el servicio telefónico español quedara completamente en manos estatales una vez todas las concesiones, públicas o privadas, fueran caducando¹¹¹.

El Jefe del Gobierno no se anduvo con rodeos y nada más iniciarse la reunión preguntó: “¿Qué opinan ustedes de ese proyecto de telefonía de una casa norteamericana?”. Los telegrafistas no desconocían las intenciones de la ITT; no en vano habían recibido, como muchas otras corporaciones a lo largo y ancho de la geografía española, la memoria que Proctor había redactado en mayo de este mismo año¹¹². El señor Montón se expresó, sin ninguna duda, en contra de este proyecto y de todo aquel que supusiera la explotación de las redes telefónicas por manos privadas. Además, “dudaba de la sinceridad del proyecto y se dolía de que tuviéramos que seguir siendo feudatarios de capitales extranjeros o nacionales que van a su negocio sin atender al fin primordial de realizar un buen servicio y ampliarlo a toda España”. Se felicitaba la redacción de *El Electricista*, en sus números de 5 y 25 de noviembre, de la rotundidad y sinceridad con la que el presidente de la asociación había expresado el sentir de todo el Cuerpo de Telégrafos.

La reunión no pudo extenderse mucho, lamentándose el Jefe del Directorio por ello y prometiendo para fechas próximas una segunda entrevista con el Centro Telegráfico Español. Mientras tanto, aseguró, se leería ambas memorias (la que Behn

¹¹¹ Un resumen de las conclusiones de este informe presentado a Primo de Rivera puede leerse en *Electra* de 10 de noviembre de 1923, nº 1, p. 17, y en *El Electricista* de 25 de noviembre de 1923, nº 804, p. 6598.

¹¹² *El Electricista*, 25 de mayo de 1923, nº 786, p. 6459.

había entregado un día antes y la de los telegrafistas) y emitiría una opinión más fundada ante un asunto de la importancia de las comunicaciones telefónicas.

Parece que la noticia de la reunión mantenida entre Primo de Rivera y Sosthenes Behn causó cierto revuelo dentro de los círculos telegráficos, llegándose incluso a pensar que el Estado ya se había comprometido con la ITT, si bien la revista también se hizo eco de unas “oportunas y tranquilizadoras manifestaciones del Director General [de Correos y Telégrafos, Tafur Funés, que] apaciguaron los soliviantados ánimos”. Éste desmintió tales afirmaciones y declaró que el Directorio Militar nunca tomaría una decisión tan importante sin antes realizar un correcto estudio de la situación.

El artículo “¿Nos despojan de la Telefonía?” al que ya se ha hecho referencia con anterioridad se mostraba optimista ante esta polémica, a la vez que alababa los conocimientos en el campo de las telecomunicaciones con los que contaba su Director General, en el que depositaban todas sus esperanzas.

La concesión a perpetuidad de la red telefónica de San Sebastián

La ciudad de San Sebastián disfrutaba, según algunos estudios¹¹³, del primer puesto en la clasificación mundial de tasa de penetración telefónica, medida en número de abonados por habitante. Si bien esta estadística parece un poco exagerada, no cabe duda de que la capital donostiarra gozaba de una de las redes más desarrolladas del continente. Aunque todavía no había automatizado su red, cosa que ya se estaba realizando en todas las grandes urbes norteamericanas y no en pocas europeas, el grado de implicación del Ayuntamiento en la instalación y constante mejora de las instalaciones telefónicas habían conseguido que San Sebastián gozara de un servicio sobresaliente, sobre todo si se compara con el resto del país.

El Ayuntamiento de San Sebastián logró la concesión de la red urbana en 1908, siendo alcalde don José de Larrumbide, aprovechando que la legislación en aquel momento favorecía y fomentaba la entrada de las corporaciones municipales en

¹¹³ Gutiérrez-1997, p. 273.

el negocio telefónico¹¹⁴. El municipio supo ver la potencialidad del teléfono: su importancia estratégica en las comunicaciones tanto gubernativas como comerciales, así como la expansión que habría de experimentarse en los siguientes años. La concesión otorgada por el gobierno tenía una duración de 15 años, aunque luego se amplió a 20 años gracias al Reglamento de 1914; pasado este tiempo, la red revertiría al Estado, como ya lo habían hecho otras concesiones, en manos públicas o privadas.

La red telefónica de la ciudad creció durante la década de 1910 muy por encima de los cálculos iniciales estimados por el consistorio y no pocos medios apuntaban a la gestión de esta red como ejemplar y digna de imitarse. En la memoria que Lewis J. Proctor envió en mayo de 1923 a las fuerzas vivas españolas con la intención de tantear la opinión general del país en el asunto telefónico, se podía comprobar la supremacía de San Sebastián con respecto al resto de ciudades españolas de importancia. Con una población de 62.200 habitantes y 2.679 teléfonos (en 31 de diciembre de 1921) alcanzaba una tasa de penetración del 4,3%, seguida por Bilbao, segunda en la lista con un 3,65%, y muy alejada de las cifras relativas que manejaban Madrid y Barcelona, que ni siquiera llegaban al 1,5%¹¹⁵.

No es de extrañar, por lo tanto, que teniendo en cuenta el éxito con el que el Ayuntamiento estaba gestionando los teléfonos en la ciudad, valorando el dinero invertido hasta ese momento y observando también las perspectivas de aquellos momentos en el resto de España con respecto a este asunto, se decidieran a solicitar ampliaciones en la concesión del servicio o incluso la explotación a perpetuidad, es decir, que la red nunca revertera al Estado.

Los primeros pasos se tomaron a finales de 1919 cuando los ayuntamientos de Santander, Pamplona y San Sebastián, que tenían en su poder los teléfonos de sus áreas metropolitanas, decidieron crear un frente común para alcanzar una prórroga indefinida de la concesión que habían adquirido del Estado años antes. Entre sus argumentos se encontraba el hecho de haber invertido grandes sumas de dinero para el correcto funcionamiento de estas redes y veían próximos nuevos desembolsos para que se mantuvieran en buen estado. Se adivinaba una vez más el fantasma del fin de

¹¹⁴ Real Orden del Ministerio de Gobernación, de 18 de septiembre de 1908. Gaceta de Madrid, 20 de septiembre de 1908, nº 264, p. 1227.

¹¹⁵ Datos extraídos de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923, a todas las “fuerzas vivas” de España.

la concesión, que tanto daño hubo de hacer a la telefonía nacional, en la lógica del nulo rendimiento que se obtendría en caso de invertir en la mejora de las redes cuando la caducidad estaba próxima.

El 11 de febrero de 1920 se presentaba en las Cortes una proposición de Ley en la que se regulaba las concesiones telefónicas municipales. La intención de los diputados que secundaron dicha proposición era que los derechos adquiridos por parte de las ciudades que quisieran explotar el servicio no revertieran nunca al Estado y que ello tuviera carácter retroactivo, para asegurar las concesiones de las tres ciudades que originaron estos movimientos legislativos¹¹⁶.

La proposición de Ley no fue aprobada. Lejos de caer en el desánimo, el consistorio donostiarra inició una nueva ronda de gestiones para alcanzar el derecho de concesión a perpetuidad de su red. Para ello y aprovechando la cambiante legislación española en materia telefónica en el primer cuarto de siglo, se acogieron a la ley de 25 de noviembre de 1908¹¹⁷, en la que se otorgaba la concesión a la Diputación de Guipúzcoa, en cuyo artículo 3º se podía leer lo siguiente:

Al vencer el plazo marcado en el artículo 1º revertirán al estado todas las líneas interurbanas, y en cuanto a las urbanas, cada diez años los municipios que han renunciado a establecerlas podrán obligar a la Diputación [de Guipúzcoa] a la reversión de la respectiva mediante abono del valor de la misma en tasación pericial. A la expiración de los 35 años, las redes urbanas revertirán a los municipios, en el caso de que quieran explotarlos y en caso contrario, al Estado.

De la lectura de este artículo se entiende que el municipio de San Sebastián (así como cualquier otro de la provincia) podía explotar el teléfono urbano a perpetuidad hasta que decidiera lo contrario, en periodos de 10 años. Las voces más críticas a este respecto venían, como es de suponer, del Cuerpo de Telégrafos, que luchaba por una red telefónica nacional estatalizada y bajo su control.

Muchas fueron las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de San Sebastián durante los años siguientes, incluyendo solicitudes a ministros de los distintos

¹¹⁶ Gutiérrez,-1997, pp. 287-291.

¹¹⁷ Ley de 25 de noviembre de 1908. Gaceta de Madrid, 16 de diciembre de 1908, nº 351, p. 1067.

gobiernos¹¹⁸. Algunos concesionarios, públicos y privados, intentaron aprovechar el cambio de régimen para tratar de nuevo algunas reclamaciones que no habían sido satisfechas por los últimos gobiernos de la Restauración. Este fue el caso de San Sebastián, que utilizó la coyuntura para recuperar sus reivindicaciones apoyándose en la referida ley de 25 de noviembre de 1908.

También fue el caso de la Diputación de Guipúzcoa, como demuestra un artículo aparecido en la revista *El Electricista* en julio de 1923¹¹⁹, en el que se afirmaba que “una Comisión de diputados provinciales se encontraba en Madrid gestionando varios asuntos relacionados con el servicio de la red telefónica provincial”. El autor hacía referencia a una nota publicada en un periódico de San Sebastián unos quince días antes. El telegrafista, que firmaba como “X. X.”, alarmaba de las concesiones que la Red Telefónica de la provincia estaba logrando en materia de telegramas, adentrándose en el terreno que pertenecía al servicio público explotado por el Cuerpo de Telégrafos. Asimismo, dicho artículo finalizaba con una afirmación que no deja de sorprender por lo acertado de sus presagios:

Ahí está, finalmente, ese optimismo, esa casi seguridad que el Ayuntamiento de la misma capital tiene de que, al caducar en el año próximo la concesión de la red urbana, no revierta al Estado, como debe ser, sino que les sea concedida graciosamente a perpetuidad.

Tales eran los sentimientos de certeza del consistorio donostiarra durante el verano de aquel año. Luego habría de venir un golpe de Estado y un cambio de régimen; pero finalmente, el 27 de octubre de 1923, el Subsecretario de Gobernación Martínez Anido firmó la Real Orden por la que se concedía a San Sebastián la explotación del servicio telefónico urbano sin fecha de reversión al Estado¹²⁰. Esta resolución, que chocaba frontalmente contra los anhelos del Cuerpo de Telégrafos, es de una importancia indudable, creando una situación hasta entonces desconocida en la historia telefónica española, si bien no deja de ser un ejemplo más de la inconsistencia legislativa en esta materia y que todavía habría de aportar alguna circunstancia peculiar en los siguientes meses. Además, esta gracia a la ciudad de

¹¹⁸ Gutiérrez-1997, p. 292.

¹¹⁹ *El Electricista*, 25 de julio de 1923, nº 792, p. 6506.

¹²⁰ Real Orden del Subsecretario de la Gobernación, de 27 de octubre de 1923. No se publicó en la Gaceta de Madrid ni en el Boletín Oficial del Cuerpo de Telégrafos.

San Sebastián¹²¹ no deja de levantar conjeturas en relación al papel que Alfonso XIII pudo tener en esta concesión, dado el aprecio que el rey tenía por la ciudad, que era residencia real durante el verano¹²².

En los mismos artículos de 26 de octubre de 1923 que hacían referencia a la reunión del Jefe del Directorio Militar con el coronel Behn¹²³ también se informaba de sendas visitas de los regidores municipales de Barcelona y San Sebastián. No es de extrañar, por lo tanto, que las conversaciones con el representante de la ciudad donostiarra, don Antonio Vega de Seoane, giraran en torno a la concesión que habría de materializarse al día siguiente en forma de Real Orden. De hecho, en el periódico ABC de 30 de octubre de 1923, como se verá más adelante, apareció una nota que hacía referencia al viaje del regidor a la capital y que indicaba de manera explícita que su misión había sido la de conseguir la tan ansiada explotación de la red a perpetuidad.

3.3. Martes, 30 de octubre de 1923

ABC se hace eco de la noticia de la red urbana de San Sebastián

A pesar de la enorme importancia de la Real Orden de 27 de octubre de 1923 en la que se otorgaba a perpetuidad la concesión telefónica de San Sebastián, la trascendencia mediática de esta noticia fue prácticamente nula. La única referencia que se ha encontrado a este respecto es una nota aparecida en el periódico ABC tres días después¹²⁴, que por su brevedad, podemos reproducir aquí:

Intereses de Guipúzcoa

El alcalde de San Sebastián ha conseguido en su visita a Madrid que se conceda autorización al Ayuntamiento de aquella capital para continuar la explotación de los teléfonos urbanos.

¹²¹ Gracia de la que no gozó, por el contrario, la ciudad de Santander, como se verá más adelante.

¹²² Yuste-2004, p. 114.

¹²³ La Correspondencia de España, 26 de octubre de 1923, p. 8; 23 10 26 La Voz, 26 de octubre de 1923, p. 8.

¹²⁴ ABC, 30 de octubre de 1923, p. 7.

La noticia sorprende tanto por su cortedad como por la imprecisión con la que trata el asunto. En primer lugar, el titular da lugar a confusión ya que los intereses a los que se refiere son los de la ciudad de San Sebastián, no los de la Diputación de Guipúzcoa; que por otro lado también se encontraba en un proceso de intento de concesión a perpetuidad de su propia red provincial. Hubiera sido más apropiado escribir “Intereses de San Sebastián” o incluso, aunque no del todo correcto, “Intereses guipuzcoanos”.

Pero lo más significativo es que el artículo no hace referencia al hecho de que la ciudad consiguiera la explotación sin límite de caducidad, que era el verdadero quid de la cuestión, sino que se refiere a que tenía la autorización “para continuar la explotación de los teléfonos urbanos”. De esta afirmación parece entenderse que el Ayuntamiento mantenía el control de la telefonía durante algún tiempo más, no lo que verdaderamente ocurría: que esa “continuación” era una prórroga indefinida.

Esta escasa repercusión en los medios escritos se puede relacionar también con el hecho de que este Real Decreto no fuera publicado ni en la Gaceta de Madrid ni en el Boletín Oficial del Cuerpo de Telégrafos. Si bien la no publicación en la Gaceta pudo deberse a un “traspapelado”, es más difícil de pensar lo mismo con respecto al Boletín del Cuerpo de Telégrafos, que publicaba escrupulosamente todo lo referente a las comunicaciones eléctricas y la legislación relacionada.

No existe ninguna prueba sobre la intencionalidad de estas omisiones, pero se puede intuir que el Gobierno intentó que la publicidad de este acontecimiento fuera mínima, dada la enorme sensibilidad en torno a estas decisiones, y así sorteó un debate incómodo que a buen seguro habría de generarse desde las filas de los telegrafistas. No hay que olvidar que la primera medida tomada por el general Primo de Rivera tras el golpe de Estado fue la suspensión de varios derechos fundamentales, incluyendo el de libertad de prensa. La censura era una práctica tan habitual en aquellos tiempos que muchas publicaciones de la época mencionaban claramente que sus números habían sido revisados por la censura.

Donde sí se quiso dejar constancia de este acontecimiento fue en el acta de la sesión municipal del ayuntamiento de San Sebastián de 21 de noviembre de 1923. El

consistorio expresó su satisfacción por la concesión telefónica y el reconocimiento al Jefe del Directorio Militar por la gracia concedida a la localidad¹²⁵.

3.4. Sábado, 3 de noviembre de 1923

Reuniones para la instalación de una central automática en San Sebastián

La automatización del servicio telefónico en España era un ejemplo más del atraso tecnológico del que adolecía el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país. Mientras la mayor parte de los países desarrollados de nuestro entorno ya estaba transformando sus redes urbanas más importantes, en España no se contó con la primera centralita automática hasta agosto de 1923. Ni siquiera se trataba de una red para uso público, sino que formaba parte de una red privada del tipo “Relais”¹²⁶ que la Diputación de Guipúzcoa puso en funcionamiento en la sede central de la Caja de Ahorros Provincial. La empresa que fabricó e instaló esta central automática fue la *New Antwerp Telephone and Electric Works*, una sociedad belga que más tarde reaparecería en otro episodio importante de la historia de la telefonía española.

Un mes más tarde, en septiembre, y visto el excelente resultado que esta central estaba ofreciendo, la Diputación de Guipúzcoa reservó, en los presupuestos para 1924, una cantidad de 60.000 pesetas para la instalación de una central similar en Tolosa¹²⁷.

Sin embargo, el proyecto más importante vendría de la mano del alcalde de San Sebastián unas semanas más tarde. Recién concedida la prórroga indefinida de la red de la ciudad, lo que aseguraba que las inversiones económicas en la red estaban justificadas espantando de esta forma el miedo a la reversión al Estado, el consistorio inició una ronda de contactos con la Diputación con el fin de estudiar la mejora de las dos redes y su interconexión. Fruto de estos contactos fue la reunión celebrada el día 3 de noviembre de 1923 en el Palacio Provincial de la ciudad, a la que estaban convocadas la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, las Comisiones de Hacienda

¹²⁵ Yuste-2004, pp. 114-115.

¹²⁶ Este modelo de centrales automáticas consistían en un sistema de matrices de relés. Para profundizar en los modelos de los primeros sistemas automáticos de conmutación se recomienda consultar Carrasco-2001.

¹²⁷ Gutiérrez-1997, p. 241.

y de Teléfonos de la Diputación Provincial y los Directores de las dos redes¹²⁸. En este encuentro se comprendió rápidamente la necesidad de automatizar el sistema urbano y del extrarradio como único medio posible para la reforma y modernización de los teléfonos en el área metropolitana de San Sebastián. Se acordó asimismo que los Directores redactaran un informe y un plan de trabajos.

Dicho informe fue presentado durante el mes de noviembre de 1923 y en él se analizaban todos los sistemas de conmutación existentes en aquel momento: manuales (de batería local y de batería central), semiautomáticos y automáticos. La preferencia por la automatización era clara, así como el ánimo de realizar estos trabajos de manera conjunta con el fin de que las diferencias entre la capital y su área de influencia fueran mínimas y de que las comunicaciones fueran lo más eficientes posibles. En este sentido, se decidió instalar una central en San Sebastián y centrales “satélite” en Pasajes, Rentería, Hernani y otros municipios de la zona.

En cuanto al plan de trabajos, se propuso en primer lugar que los Directores de las redes iniciaran un viaje por Europa con el fin de estudiar los sistemas en explotación en las principales ciudades del continente, para posteriormente presentar un informe comparativo, estudiando las mejores soluciones. Este viaje se inició de inmediato y duraría hasta principios del mes siguiente. A partir de este informe, se presentaría un proyecto y pliego de condiciones para un concurso público, que habría de aprobarse por las dos instituciones. El concurso se llevaría a cabo durante la primera mitad de 1924 y, de cumplirse los plazos, el comienzo de instalación del sistema automático de la ciudad y alrededores comenzaría el 1 de octubre de 1924¹²⁹.

De esta forma y en colaboración con la Diputación provincial, la ciudad de San Sebastián se convirtió en la primera ciudad importante española que iniciaba un plan para la automatización de su red telefónica, si bien en Europa nos llevaban una importante ventaja en este aspecto¹³⁰. Este proyecto urbano, si bien se trata del primero para una capital de provincia, cuenta con un predecesor en la localidad de Balaguer, en Lérida. La Mancomunidad de Cataluña había aprobado el plan para la

¹²⁸ Yuste-2004, p. 330.

¹²⁹ Gutiérrez-1997, pp. 242-243.

¹³⁰ Sirva como ejemplo la nota aparecida el 5 de septiembre de 1923 en *El Electricista* (p. 6537): “Se acerca a 200.000 el número de abonados cuyas líneas son servidas por automáticas en Alemania. El éxito logrado hace esperar que ese número crezca rápidamente en fecha próxima.”

sustitución de la central urbana de ese municipio por un sistema automático, que fue probado a finales de septiembre¹³¹ y puesto en marcha definitivamente el 15 de diciembre de 1923¹³².

3.5. Lunes, 5 de noviembre de 1923

Tafur Funés se reúne con el Centro Telegráfico Español

Después de la breve entrevista mantenida entre el Jefe del Directorio Militar y la directiva del Centro Telegráfico Español, representada por su presidente José Montón, la asociación se consagró a la redacción de un proyecto de telefonía para España, tal y como los telegrafistas entendían que debía procederse para la reorganización de la red nacional. Este proyecto sería entregado a Primo de Rivera en caso de celebrarse la prometida segunda reunión para tratar con más detenimiento el problema telefónico. Aunque aquel encuentro nunca llegó a producirse, el Centro Telegráfico Español sí tuvo la oportunidad, unos días más tarde, de reunirse con el recientemente nombrado Director General de Correos y Telégrafos, José Tafur y Funés, en el Palacio de Comunicaciones¹³³.

Esta entrevista, celebrada el día 5 de noviembre de 1923, fue de mayor duración que la mantenida días antes con Primo de Rivera, por lo que los telegrafistas tuvieron más tiempo para explicar la naturaleza de la asociación, los problemas que aquejan al sector y para exponer sus puntos de vista sobre el asunto fundamental sobre el que versaba la reunión: el asunto telefónico. Tanto en la nota redactada por el Centro Telegráfico Español el día 6 de noviembre para su publicación en el siguiente número de *El Electricista*¹³⁴, como en el artículo ya más extenso publicado a finales de mes, se destaca la cordialidad con la que se desarrollaron las conversaciones y la buena voluntad de Tafur Funés hacia los intereses expuestos por los representantes de la asociación, si bien el Director General declaraba que ignoraba la existencia de la

¹³¹ ABC, 29 de septiembre de 1923, p. 22. Documento que se considera inédito en el ámbito de investigación en el que se desarrolla este Trabajo.

¹³² Marín-1924, p. 228.

¹³³ También conocido como Palacio de Correos y Telégrafos, está situado en la Plaza de Cibeles de Madrid, y fue inaugurado en 1909. En la actualidad acoge la sede de la Alcaldía de la ciudad.

¹³⁴ *El Electricista*, 15 de noviembre de 1923, nº 803, p. 6594. *El Electricista*, 25 de noviembre de 1923, nº 804, pp. 6598-6599.

misma. Así mismo, tanto en estos artículos como en muchos otros aparecidos en otras publicaciones especializadas durante aquellas semanas¹³⁵, se celebraba la elección del coronel Tafur Funés como Director General de los telegrafistas, aplaudiendo el hecho de que por fin se hubiera designado para este puesto a una persona familiarizada con las telecomunicaciones y no a cualquier político, desprovisto de conocimientos técnicos, designado por el partido político de turno y alejado de los problemas que afectan al Cuerpo. Confiaban plenamente en que esta nueva designación sirviera para “devolver a Telégrafos la eficiencia que le hicieron perder los profesionales de la política, [...] más atentos a conservar el cargo indebidamente ocupado, que a laborar en beneficio de la colectividad y del servicio.”

En aquella reunión de 5 de noviembre, los telegrafistas tuvieron la oportunidad de entregarle una copia del proyecto, redactado por la asociación y entregado a Primo de Rivera unos días antes, donde resumían, en siete peticiones, su opinión sobre las telecomunicaciones españolas¹³⁶: necesidad inmediata de que revirtieran todos los servicios al Estado, automatización de la telegrafía y la telefonía en toda España, necesidad de aumentar el personal, etc. Las opiniones en materia telefónica expresadas por Tafur Funés en aquella entrevista fueron de su agrado, ya que coincidían sustancialmente con sus pretensiones de reversión al Cuerpo de Telégrafos de las redes según fueran caducando las concesiones. Según el artículo publicado en *El Electricista*, el Director General declaró que se disponía incautar las líneas interurbanas con la mayor rapidez posible con el fin de que pronto quedaran, todas ellas, en manos del Cuerpo de Telégrafos.

Discreparon, sin embargo, en la cuestión de las redes urbanas. Tafur Funés se declaró partidario de que éstas fueran explotadas por los Ayuntamientos, mientras que los telefonistas se mostraban también firmes con respecto a la necesidad de que también las redes de todos los municipios pasaran a manos públicas, en la convicción de que eran éstas las que proporcionaban mayores beneficios económicos, lo que serviría para compensar el déficit que generan las líneas interurbanas, que sin dejar de ser necesarias para el bien público, eran mucho menos rentables. En su opinión, la

¹³⁵ Algunos ejemplos: *El Electricista*, 15 de octubre de 1923, nº 800, p. 6565. *El Electricista*, 15 de noviembre de 1923, nº 803, p. 6589-6590. *Electra*, 10 de diciembre de 1923, nº 10, pp. 73-74.

¹³⁶ *Electra*, 10 de noviembre de 1923, nº 1, p. 17. Otra nota en *El Electricista* de 15 de noviembre de 1923, nº 803, p. 6595, indicaba que el proyecto presentado constituía “un folleto en cuarto mayor, de 38 páginas, con abundantes gráficos demostrativos”.

correcta alianza entre el servicio urbano y el interurbano era la clave del éxito en la reorganización telefónica nacional en manos públicas.

A pesar de esta diferencia, parece que las coincidencias de criterio entre el Director y el presidente de la asociación fueron enormes; de ahí que el Centro Telegráfico Español emitiera una nota en la que se mostraban “satisfechísimos y muy esperanzados”. No es de extrañar, por tanto, que los telegrafistas se mostraran sorprendidos ante la Real Orden aparecida un día después en la Gaceta de Madrid y que pone en evidencia las amables palabras dirigidas por Tafur Funés el día 5 de noviembre.

Más opiniones de los telegrafistas en El Electricista

Al mismo tiempo que esta reunión tenía lugar y en una línea temática afín a la misma, la revista *El Electricista* publicaba sendos artículos sobre la cuestión telefónica y los rumores, ya de dominio público, sobre el proyecto entregado por la ITT al mismísimo Primo de Rivera.

El primero, titulado “¡¡No, no y no!!”, se trata de una contundente manifestación en contra de las pretensiones de la multinacional estadounidense¹³⁷. Mediante este artículo, la redacción de *El Electricista* expresa por primera vez su opinión con respecto a la memoria enviada por Proctor y sus colaboradores a todas las “fuerzas vivas” del país, entre las que se encontraba el Cuerpo de Telégrafos. La revista ya había dado cuenta de la recepción de dicha carta en su número de 15 de mayo de 1923, si bien declaraba que se disponía a estudiar el proyecto con detenimiento para dar una opinión detallada en uno de sus siguientes números. El prometido informe nunca llegó a ser presentado a los lectores, aunque en un artículo de 25 de agosto se referían a “ciertos cantos de sirena que están en plena circulación en estos momentos”, sin entrar en más detalles¹³⁸. La causa de la demora se intuye en este artículo de noviembre: “Cautos nosotros, no solemos hacernos cargo de ellas [las habladurías] por estar plenamente convencidos de que en la inmensa mayoría de los casos carecen aquéllas de fundamento serio, y que las circunstancias abonan hoy todo género de fantasías.”

¹³⁷ *El Electricista*, 5 de noviembre de 1923, nº 802, pp. 6581-6582.

¹³⁸ *El Electricista*, 25 de agosto de 1923, nº 795, p. 6530.

Sin embargo, dado que el acercamiento de la ITT al Directorio Militar había pasado de rumor a preocupante realidad, se vieron en la obligación, esta vez sí, de hacer un claro alegato en contra de que se conceda a una empresa extranjera la responsabilidad de modernizar la telefonía nacional. La redacción de la revista acusaba a la corporación de Sosthenes Behn de perseguir un monopolio intolerable. Insistían también con rotundidad en un principio que ellos consideraban axiomático, absoluto: que la telefonía de un país, al tratarse de un servicio al servicio de la defensa y la soberanía nacional, no podía de ninguna forma entregarse a una compañía extranjera, viniera de un país amigo o enemigo.

Finalizaban su artículo con la ingenua convicción de que el asunto, a pesar de los activos intentos realizados por la ITT, no se trataba más que de un atrevido intento y que por ello no se le debería prestar mucha más atención.

El segundo artículo, firmado por Baldomero Morales y titulado “¿Nos despojan de la telefonía?”, ya ha sido mencionado en este Trabajo con anterioridad. El autor se extendía ampliamente en su teoría de que, si bien la telefonía en nuestro país adolecía de un atraso considerable, no era éste tanto si se comparaba en términos relativos con respecto a otros servicios públicos como los ferrocarriles, las carreteras, la educación o los servicios sanitarios. Declaraba que la escasa penetración del teléfono era producto del subdesarrollo del país y que por lo tanto primero habría de invertir (haciendo referencia a aquellos 1.200 millones que costaría el proyecto de la ITT) en servicios primordiales y que la mejora telefónica vendría después, naturalmente desarrollada gracias al progreso en otras áreas. Afirmaba, también, que seríamos el hazmerreir de Europa si nos convertíamos en la primera nación del continente en cuanto a redes telefónicas se refiere pero, por otro lado, continuábamos a la cola en otros tantos asuntos de mucha mayor significancia.

Después de ilustrar sus teorías con un esclarecedor ejemplo sobre el caso telefónico en la localidad madrileña de Chinchón, cerraba su artículo con las siguientes palabras:

Si se llega a caer en las redes de la [International] Telephone [and Telegraph Corporation], se sabrá, a punto fijo, cuándo cede el Estado la telefonía; pero saber la fecha o época en que la va a recobrar positivamente, es cosa que sólo compete a los altos designios de la Providencia.

Tal y como el curso de los acontecimientos posteriores nos ha mostrado, no le faltaba razón al señor Morales, en tanto en cuanto la entrega de los teléfonos a la ITT

se hizo meses después sin el mínimo conocimiento de cuándo volvería el control a ser de capital nacional, ya fuera estatal o privado.

3.6. Martes, 6 de noviembre de 1923

Concurso de la línea Salamanca – Matilla de los Caños

A pesar de las palabras de tranquilidad que el Director General de Correos y Telégrafos había dirigido a los representantes de los telegrafistas un día antes, la Gaceta de Madrid publicaba el día 6 de noviembre de 1923 una Real Orden que suponía un nuevo golpe contra las intenciones del Cuerpo de Telégrafos. Se trataba ésta de la convocatoria de un concurso público para la construcción de la línea telefónica interurbana entre Salamanca y Matilla de los Caños (situado a un 30 kilómetros de la capital provincial), con sujeción al pliego de condiciones que, aprobado, se acompañaba¹³⁹. Esta Real Orden había sido firmada por el propio Tafur Funés el 29 de octubre anterior, es decir, menos de una semana antes de la reunión celebrada con el Centro Telegráfico Español.

La convocatoria de este concurso no tuvo que sentar bien dentro de los círculos telegráficos, si bien no hace más que evidenciar que, en materia telefónica, el Directorio Militar no actuaba de una manera muy distinta a como lo hicieran los gobiernos de la Restauración: intentando satisfacer a todas las partes implicadas, en la medida de lo posible, legislando de manera errática, evidenciando una desorientación y una falta de visión clara con respecto a cómo sacar al país del atraso telefónico en el que se encontraba sumido. A su vez, intentaban ganar tiempo atendiendo amablemente a los representantes de cada una de las partes, manifestando lo que querían escuchar, sin llegar a concretar nada; por lo menos por el momento.

¹³⁹ Real Orden de la Subdirección general de Telégrafos, de 29 de octubre de 1923. Gaceta de Madrid, 6 de noviembre de 1923, número 310, p. 549.

3.7. Martes, 13 de noviembre de 1923

Real Orden que regula la instalación de equipos previo pago

Un inventor español, de nombre Francisco Martín López, había registrado la patente de un aparato telefónico de previo pago (cabina telefónica) que denominó “Martín”. Dicha invención quedó registrada en la Oficina Española de Patentes el día 19 de abril de 1923 y la patente fue concedida oficialmente el 21 de mayo con el número de registro 85.231¹⁴⁰.

Martín López, una vez aceptada su patente, envió una instancia para que se autorizase la instalación de estos teléfonos previo pago en las redes telefónicas urbanas. En respuesta a su solicitud, el Subsecretario de Gobernación, Martínez Anido, firmó el día 13 de noviembre de 1923 la Real Orden¹⁴¹ que regulaba el montaje y régimen de explotación y tarifas de estos aparatos. De la lectura de esta norma se conoce que el interesado hubo de ensalzar enormemente su ingenio, prometiendo “fructuosos resultados”. Si bien la Real Orden no ocultaba sus dudas con respecto al enorme alcance vaticinado por su inventor, también indicaba que este sistema previo pago no se oponía a ninguna disposición vigente en la materia y se consideraba un buen intento para facilitar la difusión del teléfono a toda la población. También indicaba que podría incluso servir para reducir el “uso abusivo que en la práctica viene haciéndose de determinados abonos”, reconociendo de esta forma que algunos concesionarios no tenían precisamente unas tarifas competitivas aprovechándose del régimen de monopolio local que existía en cada municipio.

Por todo ello se legislaba en seis artículos con el fin de que, aquellos que lo desearan, instalaran un aparato automático de previo pago estilo “Martín” o similares, asegurándose en todo momento de que los fabricantes, los concesionarios y los abonados que los pusieran en marcha informaran convenientemente a la Delegación del Estado de los teléfonos instalados y las conferencias realizadas. El Estado se reservaba igualmente una sobretasa correspondiente al 25% de la tarifa correspondiente, en concepto de canon por la explotación de este nuevo sistema.

¹⁴⁰ Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, número de patente 85231, fecha de solicitud: 19 de abril de 1923. Tipo de patente: de invención. Solicitante: Martín López, Francisco.

¹⁴¹ Real Orden de la Subsecretaría de Gobernación, de 13 de noviembre de 1923. Gaceta de Madrid, 14 de noviembre de 1923, número 318, pp. 656-657.

Esta Real Orden tiene un gran valor, ya que se trata de la primera normativa sobre aparatos previo pago de la que se ha tenido constancia durante las investigaciones realizadas para este Trabajo Fin de Máster. Las dudas con respecto al éxito que el señor Martín López auguraba a esta especie de cabinas primitivas no iban del todo desencaminadas: los dos primeros aparatos particulares, que funcionaban con fichas, no se instalaron hasta cinco años después. Uno se encontraba en el Viena Park, un salón de fiestas situada en el Paseo de Coches en el Parque del Retiro, y el otro en el bar Regio. No en vano y sin desmerecer el valor de la temprana patente concedida a Francisco Martín, los ingenieros de la *International Standard Electric* afirmaban en un artículo escrito en 1927 que los aparatos previo pago se encontraban aún en fase embrionaria y que todavía quedaba mucho por hacer hasta que el sistema fuera “perfecto”, incluso en Estados Unidos¹⁴².



Figura 6. Primer teléfono previo pago en el “Viena Park” del Parque del Retiro, 1928. Fuente: Telefónica

¹⁴² McLarn-1927, p. 179.

Por su parte, en un artículo escrito varios años más tarde por dos ingenieros de la CTNE y publicado en la revista *Electrical Communication* se entiende que la compañía estaba, en 1931, preparando su red interurbana para la instalación de cabinas que funcionaban con monedas¹⁴³.

En relación a esta Real Orden de 13 de noviembre de 1923, el Subsecretario de Gobernación tuvo que publicar otra¹⁴⁴, unas semanas más tarde, para aclarar algunas cuestiones que no habían quedado claras en la primera con respecto a los abonados que podían instalar un aparato previo pago en la ciudad de Barcelona.

3.8. Martes, 20 de noviembre de 1923

Electra publica la segunda memoria del Centro Telegráfico Español

La revista *Electra* había sido fundada por los redactores y colaboradores de “El Telégrafo Español”, otra publicación especializada que había desaparecido recientemente por decisión de la empresa editorial propietaria. Su primer número vio la luz el 10 de noviembre de 1923 y desde el principio se caracterizó por adoptar una posición más combativa a favor de los derechos de los telegrafistas que otras publicaciones similares como *El Electricista*. En su segunda edición, de 20 de noviembre, dedicó seis páginas a tratar el asunto telefónico, dando su opinión con respecto a la propuesta entregada por Sosthenes Behn al Gobierno unas semanas antes y presentado el segundo proyecto que había redactado el Centro Telegráfico Español¹⁴⁵. Una copia de este informe también fue entregada a Tafur Funés en la reunión que la asociación tuvo con él a finales de mes, aunque el Director General expresó que ya había “ojeado” el texto antes de la celebración de aquella entrevista.

Como ya hemos apuntado anteriormente, la revista informaba de que el proyecto de la ITT había cambiado notablemente con respecto al primero que había enviado Lewis J. Proctor a todas las “fuerzas vivas” del país en el mes de mayo. Según su opinión, la multinacional utilizaba la reconstrucción de la red telefónica española como pretexto para hacerse con la explotación, “evitando un saneado

¹⁴³ Warren y Parsons-1931, p. 245.

¹⁴⁴ Real Orden de la Subsecretaría de Gobernación, 5 de diciembre de 1923. *Gaceta de Madrid*, 8 de diciembre de 1923, número 342, p. 1109.

¹⁴⁵ *Electra*, 20 de noviembre de 1923, nº 2, pp. 33-38.

ingreso al Tesoro español y un arma defensiva al Estado”. Se resaltaban además las influencias internacionales con las que contaba la ITT y la acusaba de formar parte “de esa moderna masonería financiera que hace del negocio su único credo religioso y político” y de querer convertirse en los dueños del mundo, extendiendo sus tentáculos allá “donde puedan invertirse unos cuantos dólares”. Aseguraban también que la International se había hecho con el negocio telefónico italiano e iba camino de hacer lo mismo con el francés y con el español:

Hemos podido averiguar que se ha firmado ya entre Mussolini y la International un contrato de cesión a esta Compañía de los teléfonos de Italia, a resultas tan sólo de lo que digan los peritos del Gobierno fascista. Se trata de convencer en igual sentido a Francia. En España, valga la frase vulgar y castiza, nos la quieren dar con queso.

Efectivamente, Sosthenes Behn se encontraba también en negociaciones con los gobiernos de estos dos países vecinos, aunque no era cierto que hubiera firmado acuerdo alguno con Benito Mussolini.

La revista animaba entonces a los telegrafistas a seguir trabajando para que el Gobierno atendiera a sus aspiraciones, siempre contando con el capital español, “impidiendo que de aquí se vaya una peseta y las ganancias se repartan entre nosotros”. A continuación, reproducía el informe que había redactado el Centro Telegráfico Español durante aquel mes y que presentarían a Tafur Funés en unos días.

El texto comenzaba refiriéndose a los proyectos de telefonía de Francos Rodríguez y de Colombí, en cuya redacción habían tomado parte activa el Cuerpo de Telégrafos, y que no habían sido aprobados, según su opinión, por culpa de “las corruptelas y vicios del antiguo régimen”. Culpaban también a las empresas privadas que contaban con concesiones telefónicas a lo largo y ancho de la geografía española y a los Directores Generales que habían ocupado el despacho en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, que nunca habían gozado de su aprobación. Según la asociación de telegrafistas, al frente del Gobierno se encontraban ahora hombres honrados y justos que a buen seguro tomarían la decisión adecuada para “la reorganización -más bien creación- del servicio en nuestra patria”. Después de exponer los males de la telefonía española, declaraban el principio básico de su plan:

El Estado debe proceder urgentemente unificando los elementos y la dirección. Y esta dirección debe corresponder íntegramente al Estado en bien de su

propia seguridad, conveniencia y decoro y para el mejor desarrollo del servicio. [...] La única solución posible es una intervención del Estado, hoy más capacitado para ello que nunca.

El Centro Telegráfico Español proponía a su vez la creación de un Consejo Superior de Telefonía, autónomo y constituido por representantes del Cuerpo de Telégrafos, del Estado Mayor Central y de las fuerzas vivas del país. Este órgano se encargaría de adquirir los materiales, construir o reformar las redes y explotar el servicio. De una manera modesta planteaban encargar al Consejo Superior el plan de creación y ampliación del sistema telefónico que proponía el Proyecto de Ley de Colombí de 1921. Para ello, sería necesario incautarse de la Compañía Peninsular y de todas las redes urbanas en manos de concesionarios.

No obstante, el informe de los telegrafistas reconocía que, “de preferir el Poder público una red telefónica con todos los adelantos y lujo hasta hoy alcanzados en las más prósperas naciones, ya sería indispensable la colaboración en gran escala del capital privado”. Reconocían por lo tanto que el Estado no disponía de medios económicos para grandes “adelantos y lujos”, entre los que suponemos que se encontraría la automatización de las redes, ya que no hacían mención a ella en ningún punto de su argumentación. Por lo tanto, si quería alcanzar a otros países en los que la telefonía estaba muy desarrollada, sería necesario llegar a un acuerdo con alguna empresa privada. Para ello, habría que sacar las obras a pública subasta, pero el Consejo Superior de Telefonía tendría que conservar en todo momento la dirección de los trabajos y la explotación del servicio, independientemente de con quién se firmara el contrato para la reforma de las redes.

Otro procedimiento, aún más perjudicial, pasaría porque esa construcción fuera no sólo realizada sino dirigida por una empresa privada que asumiera los aspectos técnico y financiero del proyecto. Según los telegrafistas, el proyecto presentado por la ITT respondía a este modelo nada deseable. Como ejemplo de lo inapropiado que resultaba este tipo de contrato con una empresa privada, el informe resumía el estado del servicio explotado por la Compañía Peninsular de Teléfonos, que por lo menos se trataba de una sociedad española. En un interesante y profético párrafo declaraban:

Prescindiendo de aquellas consideraciones, más propias a tener en cuenta por el poder público, como son las que se refieren a la intervención de una Compañía extranjera en un servicio tan nacional y que tanta relación guarda con la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden, está el grave

inconveniente de que alguien podría suponer que el Estado no tiene la suficiente fuerza moral para conceder una exclusiva importantísima sin que a una pública subasta pudieran concurrir otras casas también acreditadas en materia de construcciones telefónica, ni muchísimo menos para imponer, a un actual concesionario, que ceda su explotación a una Empresa.

Según sus cálculos, las redes urbanas explotadas por el Estado aportaban unos beneficios de 3.600.000 pesetas anuales, mientras que el canon pagado por los concesionarios de redes urbanas había sido de unas 2.300.000 pesetas en el último año. La mayoría de estos centros telefónicos municipales revertían en un plazo inferior a cinco años. La ITT proponía reconstruir la red telefónica nacional, pero también explotar el servicio durante diez años, lo que le aportaría unos beneficios enormes, “en contra, naturalmente, del Tesoro que de una u otra forma había de sufragarlo”, más teniendo en cuenta que el canon que proponía pagar la multinacional era de un ridículo 4% de la recaudación bruta (algunos concesionarios privados pagaban en 1923 un canon del 33%) Cuanto más se demorase una hipotética incautación de las redes instaladas y reformadas por la ITT, mayores serían las ganancias para la empresa y las pérdidas para el Estado.

En caso de querer firmarse un acuerdo con la ITT, la única solución que los telegrafistas veían viable era la de encargarse de la explotación de las redes según la empresa las fuera finalizando. Por supuesto, todo ello tenía que venir precedido de la subasta pública a la que estaba obligado el Gobierno según la legislación vigente.

El Centro Telegráfico Español finalizaba su informe exhortando al Directorio Militar que escuchara las voces de los telegrafistas a la hora de tomar una decisión con respecto a la solución del problema telefónico español. A pesar de las buenas intenciones iniciales de la Dirección General y de algunos miembros del Gobierno, la Historia nos ha demostrado que estas voces no fueron convenientemente atendidas. Para mayor ahondamiento en los problemas que la explotación privada ocasionaba en la telefonía, este artículo de la revista venía seguido por uno muy crítico con la Compañía Peninsular de Teléfonos, a la que acusaban de atender “al reparto codicioso de dividendos” antes que al buen funcionamiento del servicio o al bienestar de sus empleados.

3.9. Viernes, 30 de noviembre de 1923

Nueva reunión de Tafur Funés con el Centro Telegráfico Español

El día 27 de octubre de 1923 se celebró una primera reunión entre el nuevo Director General de Correos y Telégrafos, Tafur Funés, y los representantes del Centro Telegráfico Español. Se tiene constancia además de una segunda entrevista celebrada un mes después gracias a un extenso artículo aparecido en la revista *Electra* de 30 de noviembre. También se publicó, unos días después, una breve nota en la revista *El Electricista* y más tarde una crónica detallada sobre el encuentro¹⁴⁶. La fecha exacta no ha podido ser determinada, si bien tuvo que producirse necesariamente a finales de noviembre, ya que la memoria redactada por la asociación y publicada en la edición de *Electra* de 20 de noviembre había sido “ojeada” por Tafur para esta reunión y este artículo en el que se relata lo acontecido en el encuentro fue publicado antes de que terminara el mes.

El presidente de la asociación José Montón y el resto de representantes se mostraron “complacidos y muy satisfechos” por el resultado de la misma y por el hecho de que por fin un Director General prestara atención al Centro Telegráfico Español y escuchara sus sugerencias y advertencias. Los miembros de la asociación no escatimaron en elogios hacia la persona de Tafur Funés del que destacaban su discreción, sencillez en el trato y modestia. De hecho, el Director solicitó que nada de lo hablado en la reunión trascendiera a la prensa, aunque el autor del artículo consiguió hacerse con la información, según relata, escondiéndose detrás de una cortina, pensando “en los socios de provincias, que, siendo también hijos de Dios, no deben ignorar cuanto en la corte se habla”.

Tafur Funés declaró haberse leído, aunque con poco detenimiento, los proyectos de telefonía de Francos Rodríguez de 1917 y del Conde de Colomby de 1921, así como las dos memorias del Centro Telegráfico Español, la entregada en la primera reunión de 27 de octubre y la entregada en esta segunda reunión, que había sido publicada por *Electra* unos días antes y que estaba centrada en la cuestión telefónica. El Director General indicaba que, efectivamente, el mayor problema de las comunicaciones eléctricas era la telefonía. Reconocía que la telegrafía no había

¹⁴⁶ *Electra*, 30 de noviembre de 1923, nº 3, pp. 54-58; *El Electricista*, 5 de diciembre de 1923, nº 805, p. 6612; *El Electricista*, 15 de diciembre de 1923, nº 806, pp. 6614-6615.

encontrado su máximo desarrollo, pero “de telefonía, en España, por desgracia, no hay nada, porque lo poquísimos que contamos es tan malo que es peor, mil veces peor que no tener nada absolutamente”.

Como consecuencia, Tafur Funés declaraba que su proyecto más urgente era desarrollar un plan completo de impulso y modernización del sistema telefónico, “que si no nos coloca a la altura de los Estados Unidos, nos saque, al menos, del vergonzoso lugar que en las estadísticas ocupamos”. Sin embargo, no se encontraba del todo de acuerdo con la idea de la asociación de crear un Consejo Superior de Telefonía con atribuciones para construir y explotar todas las redes, mientras él abogaba por la unificación de todas las telecomunicaciones bajo el control de un solo organismo. Un representante del Centro le explicó entonces que entendían que la telefonía necesitaba un empuje especial y que por ello querían desvincular su desarrollo de los largos procesos burocráticos que caracterizaban las concesiones telegráficas. Ese Consejo de Telefonía contaría también con representantes de otras fuerzas del país que no dispusieran de tanta burocracia, como la Banca, lo que permitiría dar un impulso y conseguir más rápidamente el capital necesario para reformar el sistema. Después de esta explicación, Tafur Funés se mostró un poco más receptivo a la idea, pero solicitaba de todas formas una nueva memoria en la que expresaran mejor sus reflexiones con respecto a este tema.

El Director pasaba a continuación a resumir los dos males primordiales que se encontraban a la hora de reformar el servicio telefónico:

La primera [dificultad], y más importante de todas, la situación angustiosa del Tesoro español, que por ahora no puede facilitarnos el dinero que necesitamos para nuestros proyectos, y sin él no es posible dar un paso; la segunda, los intereses creados por concesiones ya otorgadas. Esta dificultad puede salvarse más fácilmente; hay que incautarse, cuanto antes mejor, de todas, absolutamente de todas las líneas interurbanas, de cuya posesión no ha debido desprenderse nunca el Estado, porque es algo consubstancial con su propia soberanía, y necesita para su defensa. Esta es una opinión que me había formado no ahora, sino antes, mucho antes de ocupar este cargo.

Nada parece indicar que las palabras del señor Funés durante aquellas primeras jornadas como Director General no fueran sinceras. Es más, conocido su pasado como telegrafista, posiblemente participara de la opinión generalizada en ese sector de que la única solución al problema telefónico pasaba por la incautación de

todas las concesiones y la unificación de todas las comunicaciones eléctricas. Sin embargo, los acontecimientos posteriores hacen ver que, o bien Tafur Funés cambió de opinión rápidamente una vez se hubo acomodado en su despacho del Palacio de Comunicaciones, o bien fue una víctima más de las presiones ejercidas por la ITT y su círculo de apoyos en España. Las investigaciones realizadas por estudiosos de este episodio de nuestra historia parecen indicar que la segunda opción es más probable.

Durante esta reunión de noviembre, el Director se mostraba nuevamente partidario de que las redes urbanas quedaran bajo la administración de los ayuntamientos, siempre y cuando dieran pruebas de su solvencia y correcta administración. En cuanto a las redes interurbanas y rurales, si bien deberían ser explotadas siempre por el Cuerpo de Telégrafos, se iba a convocar un concurso para la construcción de las mismas, al que concurrirían empresas extranjeras, con la intención de introducir en España los últimos adelantos de esta tecnología. Las sociedades que en principio participarían en este concurso con sus proyectos eran la *International* de Sosthenes Behn, cuyo interés por el mercado español ya era conocido dentro de los círculos telegráficos, y la sueca *Ericsson*, aunque le gustaría que hubiera alguna más. Según la empresa adjudicataria fuera construyendo las líneas, las iría entregando al Estado para su explotación. De todas formas, Tafur Funés aclaraba que esto no pasaba de ser, por el momento, una opinión personal suya y que el Directorio tenía todavía que tomar una decisión teniendo en cuenta los intereses generales del país.

La idea de Tafur Funés de encargar solamente la construcción de las redes interurbanas a una corporación extranjera difería ya de la propuesta que por aquel entonces manejaba la ITT, que pasaba más por la instalación de una red nacional, que incluía también los centros urbanos, y la explotación de la misma durante el tiempo que duraran las obras, que todavía estaba por discutir. Sin embargo, estos dos planes tenían mucho más en común que con el sistema que finalmente fue implantado en agosto de 1924: un monopolio de toda la red nacional, controlado por una empresa extranjera bajo una máscara de falsa españolidad, sin un límite claro para el fin de la concesión.

La reunión terminó con el Director General expresando una vez más su condición de telegrafista y su simpatía hacia el sector del que se consideraba un miembro más. Trataron igualmente de la mala imagen del Cuerpo después de las huelgas de 1917 y 1918 y de las consecuencias de éstas, así como de las sanas

intenciones del nuevo Directorio para acabar con todas las lacras de la sociedad española.

De este artículo se deduce otro hecho muy interesante: que la empresa sueca *L.M. Ericsson* también había iniciado un acercamiento al Gobierno y le había planteado sus intenciones de participar en la modernización del sistema telefónico español. La empresa *Ericsson* era una auténtica veterana del negocio telefónico europeo y mundial. Fundada en 1876, había constituido el 5 de diciembre de 1922 la “Compañía Española de Teléfonos Ericsson” con el objetivo de entrar en el negocio nacional, ya fuera como productor (construyó una fábrica de material telefónico en Getafe) o como instalador y concesionario de redes (adquirió el centro telefónico urbano de Valencia a principios de 1924) Más adelante veremos como la firma sueca fue la principal rival de la ITT en el “concurso” convocado por Primo de Rivera para la reorganización del sistema telefónico español.

3.10. Lunes, 10 de diciembre de 1923

El servicio de la Compañía Peninsular de Teléfonos

La Compañía Peninsular de Teléfonos y la Compañía Madrileña de Teléfonos, sociedad del grupo empresarial de Enrique Parellada, concesionarias de gran número de redes urbanas y de la totalidad de la red interurbana de España, habían elevado dos instancias al Gobierno con fechas 14 de septiembre y 20 de octubre de 1921. En ellas solicitaban la autorización del Estado para subir las tarifas de las conferencias interurbanas y alegaban para ello que la implantación de cierto régimen de retiro obrero obligatorio, establecido en 1921, había ocasionado un perjuicio a las compañías que valoraban en casi 100.000 pesetas. Además, reclamaban permiso para la implantación de un servicio conocido como “conferencias interurbanas de carácter urgente” que tendría un coste de tres veces la tarifa de las conferencias interurbanas corrientes.

No cabe duda de que la Compañía Peninsular de Teléfonos (y sus filiales) fue otro de los agentes del sector que aprovechó el cambio de régimen para recuperar reivindicaciones pendientes y no tardaría en recordar al Ministerio de la Gobernación que todavía tenía dos instancias pendientes de resolución. Sin embargo, no todos los que se acercaron al nuevo Directorio con la intención de ver sus demandas cumplidas corrieron la misma suerte. En este sentido, las empresas de Enrique Parellada fueron una de las más agraviadas, empezando por estas solicitudes elevadas al Ministerio de

la Gobernación. El 29 de septiembre de 1923, el Subsecretario Martínez Anido firmaba una Real Orden desestimando en todas sus partes las instancias promovidas por las compañías¹⁴⁷.

Estas solicitudes eran desestimadas basándose en los informes emitidos por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de varias provincias en los que se pronunciaban unánimemente en contra de la implantación del nuevo servicio de conferencias urgentes. En cuanto a la subida de las tarifas, recordaban a las dos compañías que éstas ya habían sido elevadas en 1919 y en 1920, y que, a pesar de ello, el servicio telefónico era muy deficiente. No contento con denegar todas las reivindicaciones de la Peninsular, Martínez Anido llamaba “la atención de las mencionadas compañías sobre las imperfecciones y defectos de que se lamentan las Cámaras de Comercio, para que en su vista adopten las medidas convenientes para su remedio”.

Se sabe, por un artículo de la revista *Electra* que a continuación desgranaremos, que el Inspector general de Teléfonos de la Compañía Peninsular de Teléfonos, Eduardo Estelat y Torres, se había reunido con Primo de Rivera en el mes de octubre o noviembre, si bien se desconocen los términos en los que se desarrolló la conversación. Esta reunión viene a confirmar la hipótesis de que la Peninsular, como protagonista que era del mapa telefónico español, también acudió al nuevo Directorio con la intención de solicitar su apoyo en sus propias reivindicaciones, como también hicieron la ITT a través de Sosthenes Behn, el Cuerpo de Telégrafos a través del Centro Telegráfico Español y el ayuntamiento de San Sebastián, por nombrar sólo los más importantes¹⁴⁸.

De esta Real Orden de septiembre de 1923 se hizo eco la revista financiera “*Gaceta Banca, Industria y Comercio*”, que publicó una serie de artículos sobre la Compañía Peninsular de Teléfonos, mostrándose claramente en contra de ésta y de sus “atropellos e ilegalidades”. La revista *Electra*, en su número de 10 de diciembre de 1923, reproducía estos artículos por su interés con respecto a las demandas del

¹⁴⁷ Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 29 de septiembre de 1923. *Gaceta de Madrid*, 4 de octubre de 1923, nº 277, pp. 46-47.

¹⁴⁸ Otro ejemplo fue el del concesionario del centro telefónico urbano de Gijón, que el día 29 de septiembre de 1923 presentó dos recursos ante la Administración y ambos fueron desestimados en noviembre por el Subsecretario de Gobernación Martínez Anido. Se puede profundizar sobre este asunto en la tesis de Pérez Yuste. Yuste-2004, pp. 111-112.

Cuerpo de Telégrafos¹⁴⁹. Los autores querían ocuparse “de esta fuerte entidad que ha sabido acallar las pocas voces que en la prensa se han levantado contra su implacable tiranía y cruel explotación”, llamando la atención del Directorio para que pusiera fin a los supuestos abusos que la Peninsular venía cometiendo con el consentimiento de la clase política de la Restauración. A su vez, felicitaban al señor Martínez Anido y al Gobierno en general por desestimar las solicitudes y por reprochar la mala gestión de las compañías.

El artículo detallaba a continuación los males que, a juicio de los telegrafistas y de las Cámaras de Comercio, caracterizaban a la Compañía Peninsular de Teléfonos. El primero de ellos era la tasación que se había llevado a cabo de las líneas interurbanas responsabilidad de la compañía. Se daba el caso de que esta valoración había aumentado en un 20% en los últimos ocho años, a pesar de que las redes se encontraban, como es natural, en peor estado debido al paso del tiempo y de que no se habían realizado mejoras para su modernización. En caso de que el Estado quisiera incautar estas redes y si no se hacía nada para remediarlo, el erario público tendría que hacerse cargo de esta sobretasación artificial.

En cuanto a la situación del personal de la compañía, se calificaba a ésta de “explotación”, apuntando los sueldos tan bajos que cobraba el personal técnico cualificado, así como la falta de higiene en sus instalaciones. Sobre el servicio telefónico tampoco tenían ninguna palabra positiva y reprochaban a la Madrileña de tener más de 2.000 solicitudes de alta sin satisfacer. Aseguraban que esa lista de espera era premeditada, dado que la red telefónica urbana iba a revertir al Estado (en poco más de dos años) y que la compañía se negaba a invertir ya dinero en sus líneas, con la clara intención de maximizar los ingresos en esta última etapa de la concesión.

El artículo finalizaba animando a los empleados de la empresa a organizarse para reclamar sus derechos y recordando al Gobierno que “por razones de orden militar, económico y político, la red interurbana, previa tasación, debe pasar a ser propiedad del Estado, procediendo, en caso de buscadas dilaciones, a la incautación, no dando lugar a que el acentuadísimo malestar reinante en el personal dependiente de tan repetida Compañía, impelido por las vejaciones, burlas y escasos sueldos, se

¹⁴⁹ Electra, 10 de diciembre de 1923, nº 4, pp. 62-64.

manifieste, ocasionando cuantiosos, lamentables e irreparables perjuicios, de los que los empleados no serían causantes.”

En este mismo número de la revista *Electra*, sólo unas páginas después, se publicaba una nota en la que se reincidía en las buenas impresiones que el nuevo Director General Tafur y Funés estaban causando dentro de los círculos telegráficos. Se alegraban de que por fin se hubiera colocado en ese puesto a una persona con conocimientos técnicos y conocedor de la realidad del sector y no a cualquier político “incapaz, terco, informal” entre los que mencionan a Francos Rodríguez, al Conde de Colombí o a Francisco Silvela¹⁵⁰. A todos ellos les valoran las buenas intenciones imprimidas en sus proyectos, pero les reprochan su inoperancia y los nulos resultados de sus gestiones cuando se encontraban en el poder.

La memoria de los representantes de San Sebastián y Guipúzcoa¹⁵¹

Tras la reunión mantenida el día 3 de noviembre entre el ayuntamiento de San Sebastián y la diputación de Guipúzcoa en la que ambas corporaciones decidieron unir sus recursos y esfuerzos para la automatización del servicio telefónico en la capital de y alrededores, el Director de la red urbana y el Jefe de construcciones de la red provincial iniciaron un viaje por Europa con el fin de estudiar el “estado del arte” en el continente. Tras este periplo, realizado durante el mes de noviembre, volvieron a España y el día 10 de diciembre de 1923 presentaron un informe técnico muy detallado en el que recogían sus averiguaciones más importantes en materia de automatización telefónica.

Durante el viaje visitaron Bruselas, Luxemburgo, las tres grandes ciudades holandesas y Zúrich. El Estado belga era el que explotaba la red telefónica nacional y cuando la corporación guipuzcoana llegó a su capital ya contaba con dos centrales automáticas de la *Western Electric* en funcionamiento. En La Haya el servicio telefónico era propiedad del ayuntamiento de la ciudad y contaba con una central automática, también de la *Western Electric*. No era el caso de la vecina Rotterdam, que se había decantado por los sistemas automáticos de la casa Ericsson.

¹⁵⁰ Ver apartados 2.2.3 y 2.2.4 del presente Trabajo Fin de Máster.

¹⁵¹ Gutiérrez-1997, pp. 243-254.

Ámsterdam, por su parte, prefirió el sistema “Strowger”, basado en relés, de la marca Siemens. La ciudad de Luxemburgo contaba con el sistema desarrollado por la firma francesa *Thomson-Houston*. Por último, en Suiza visitaron Zúrich, donde la red también era propiedad del municipio y habían instalado una central de la *Western* similar a las de Bruselas y La Haya.

En las conclusiones de dicho informe se destacaba la “gran orientación hacia la telefonía automática, por ser la que en la actualidad presenta el mayor número de garantías unidas a la rapidez en las comunicaciones y economía en la explotación”.

3.11. Jueves, 13 de diciembre de 1923

El general Muslera se reúne con Eduardo Estelat de la Peninsular

En la edición de La Vanguardia de 13 de diciembre de 1923¹⁵² se podía leer que el general Muslera, uno de los vocales del Directorio Militar, se reunió en aquella jornada con Eduardo Estelat y Torres, Inspector general de Teléfonos y directivo de la Compañía Peninsular de Teléfonos. Estas conversaciones se produjeron pocas semanas después de que este mismo representante del grupo Parellada se reuniera también con el Jefe del Directorio, suponemos con la intención de interpelar por las peticiones de su compañía. Es interesante destacar en este momento las investigaciones llevadas a cabo en torno a este personaje para la elaboración de este Trabajo Fin de Máster, con el fin de entender mejor su figura.

Se sabe de Eduardo Estelat y Torres nació en Granada en 1859, inició su carrera en el sector de las telecomunicaciones a principios de 1877 cuando solicitó el acceso al Cuerpo de Correos y Telégrafos¹⁵³ y casi tres más tarde era nombrado “Oficial segundo” al haber aprobado todas las asignaturas que se exigían para el ascenso a esa clase¹⁵⁴. Primero fue destinado a la central de Málaga pero se trasladó a Madrid en 1883¹⁵⁵. En la capital iría, poco a poco, adquiriendo notoriedad, participando en congresos internacionales y publicando artículos en revistas

¹⁵² La Vanguardia, 13 de diciembre de 1923, p. 15.

¹⁵³ Revista de Telégrafos, 1 de febrero de 1877, nº 14, p. 228.

¹⁵⁴ Revista de Telégrafos, 1 de diciembre de 1879, nº 49, p. 191.

¹⁵⁵ Revista de Telégrafos, 1 de diciembre de 1883, nº 98, p. 412.

especializadas¹⁵⁶. El salto definitivo llegaría en 1897, cuando fue nombrado con 37 años de edad Inspector general de la Red telefónica en el grupo empresarial de la Compañía Peninsular de Teléfonos de Enrique Parellada¹⁵⁷, cargo que ostentaba indistintamente en representación de cualquiera de las sociedades que lo componían: la Peninsular, la Madrileña o la General de Teléfonos.

Fue durante aquella época cuando Estelat inició también carrera política, primero como concejal en el ayuntamiento de Madrid a principios de siglo y luego como senador por la provincia de Granada. Fue elegido como representante en la Cámara Alta en cuatro ocasiones: en la legislatura 1918-1919, en la legislatura 1919-1920, en la legislatura 1921-1922 y en la de 1923. En las cuatro ocasiones en las que tuvo que tomar posesión de su escaño como senador, presentó, junto al resto de documentación necesaria, dos certificados del secretario del Consejo de Administración de la Compañía Peninsular de Teléfonos: uno de ellos especificaba que Eduardo Estelat era Director de la compañía y el otro servía para declarar las acciones de la sociedad que se encontraban en su poder¹⁵⁸. En 1922 llegaría a ser nombrado Ministro suplente del Tribunal de Cuentas del Reino¹⁵⁹.

Lo que más sorprende de la figura de Eduardo Estelat y Torres es el halo de oficialidad estatal que se pretendía dar a su cargo como Inspector general de la Compañía Peninsular de Teléfonos. En numerosas referencias aparecidas en prensa en aquellos años, su nombre aparecía siempre acompañado por la coletilla de “inspector general de telefonía interurbana”, como si se tratara de un cargo oficial del Cuerpo de Correos y Telégrafos o incluso del Gobierno. Este grado no existía como tal en ninguna corporación pública, como tampoco existía el de “Inspector general de Teléfonos”. Sí existía, por el contrario, el cargo de Inspector general de Telégrafos, que por supuesto nunca ostentó el señor Estelat, que era a todos los efectos representante de una compañía privada.

Este intento de dotar al cargo de una envoltura oficial se vio reforzado cuando en 1914 se publicó el Real Decreto por el que se establecía un nuevo reglamento para

¹⁵⁶ El Telégrafo Español, 9 de diciembre de 1892, nº 34, p. 527.

¹⁵⁷ Electrón, 5 de abril de 1897, nº 42, p. 130.

¹⁵⁸ Expediente personal del Senador D. Eduardo Estelat y Torres, por la provincia de Granada. Signatura HIS-0155-06. Disponible en <http://www.senado.es/historia/index.html>.

¹⁵⁹ Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 4 de abril de 1922. Gaceta de Madrid, 5 de abril de 1922, nº 95, pp. 46-47.

la explotación del servicio telefónico. Con esta nueva normativa, la Compañía Peninsular de Teléfonos consiguió un éxito importante: la reafirmación de la sociedad como adjudicataria de todas las líneas interurbanas de España¹⁶⁰. El artículo 18 decía:

Las líneas generales interurbanas constituyen hoy una sola concesión adjudicataria a la Compañía Peninsular de Teléfonos, cuya explotación está sujeta a los respectivos pliegos de condiciones de subasta y al Real decreto de 18 de Marzo de 1912.

El hecho de que la explotación de las líneas interurbanas fuera ahora una especie de monopolio de una empresa privada no convertía a los directivos de esa sociedad en cargos públicos, ni a los trabajadores en funcionarios del Estado. Sin embargo, el cargo de Estelat, muy parecido en su formulación a uno público de alto rango, hacía que en muchas ocasiones la verdadera relación entre la empresa y el Estado quedara diluida en una especie de “pseudo-estatalidad” de la compañía privada.

Es más, el proceso de documentación realizado para este Trabajo Fin de Máster ha arrojado pruebas de que el Estelat no era siempre bien recibido dentro de los círculos del Cuerpo de Telégrafos. Se sabe, por ejemplo, que durante las huelgas de 1918, la Junta de Defensa de Telégrafos redactó una propuesta en la que solicitaban una incautación inmediata de varios servicios de telecomunicación, entre los que se encontraban las líneas telefónicas interurbanas, con la incorporación inmediata del personal a cargo de esos servicios, a excepción del Inspector general de la Peninsular, Eduardo Estelat¹⁶¹. Asimismo, en el artículo de la revista Electra de 10 de diciembre de 1923 al que ya nos hemos referido con anterioridad se expresaban en unos términos poco afectuosos hacia él:

Cuando hace días el Sr. Estelat visitó el Presidente del Directorio, aún sabiendo que éste ha venido para que la moralidad, la justicia y toda clase de valores y virtudes cívicas triunfasen, temimos que la sugestiva y al parecer bonachona elocuencia de dicho señor causase efecto en el ánimo del Sr. Primo de Rivera.

¹⁶⁰ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, del 30 de junio de 1914. Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1914, nº 191, pp. 82-89.

¹⁶¹ Villacorta-1989, p. 392.

Para completar el cuadro de Eduardo Estelat es importante apuntar también que la telefonía no fue el único sector empresarial que tocó, ya que también se conoce su participación en negocios de ferrocarriles y de radiotelegrafía. Fue también miembro de la Cámara Oficial de Industria de Madrid. Con respecto a su participación en la radiotelegrafía española, formó parte en 1910 de la fundación de la “Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos”, cuyo objeto era “tomar a su cargo la construcción y la explotación del servicio público español de telegrafía sin hilos”. En el primer Consejo de Administración de esta sociedad coincidió con otros personajes de la historia telefónica española como José Sánchez Guerra, al que ya nos hemos referido en el apartado 2.2.3 de este Trabajo Fin de Máster, o José Bertrán y Musitu, abogado que formaría parte más tarde de la plantilla de la CTNE, como veremos más adelante¹⁶².

Eduardo Estelat sufrió un accidente el día 13 de noviembre de 1924¹⁶³, justo cuando acababa de jurar un cargo palatino en la Cámara Regia y moriría pocos días después. En la nota que publicó el diario ABC con motivo de su muerte se destacaban sus trabajos en materia telefónica, así como sus logros como periodista y político en varios cargos públicos, en los que desarrolló una “perseverante gestión en pro de la Alhambra”¹⁶⁴.

3.12. Sábado, 15 de diciembre de 1923

Puesta en marcha de la central automática de Balaguer

Como ya se ha indicado, la primera central automática en territorio español se puso en marcha, en agosto de este mismo año, en la Caja de Ahorros Provincial en San Sebastián, si bien se trataba de un sistema de uso privado para las comunicaciones de la Diputación. Por su parte, la Mancomunidad de Cataluña, que contaba con la concesión de las redes de las cuatro provincias catalanas¹⁶⁵, llevaba trabajando desde 1922 en la instalación de una central automática en Balaguer (Lérida), que habría de convertirse en la primera de uso público en territorio español.

¹⁶² Sánchez Miñana-2004, p. 96.

¹⁶³ ABC, 14 de noviembre de 1924, p. 16.

¹⁶⁴ ABC, 16 de noviembre de 1924, p. 31.

¹⁶⁵ Un poco más adelante, en la crónica correspondiente al 24 de diciembre de 1923, se tratará con mayor detenimiento la historia de la Mancomunidad y de su red telefónica.

La Mancomunidad sacó a concurso público la instalación de la central automática, al que se presentaron dos empresas extranjeras: la firma alemana Siemens-Halske, que propuso un sistema “paso a paso” (tipo “Strowger”) y la firma estadounidense International Western Electric Co. (IWECC), que propuso el sistema “Rotary”, desarrollado en sus laboratorios.

La adjudicataria fue la empresa alemana, que fue elegida sobre todo por el precio, que suponía, a igualdad de condiciones, la mitad que el ofertado por la IWECC. Las propuestas fueron examinadas por el ingeniero de la Mancomunidad Esteban Terradas y la compra fue aprobada por el Consejo Permanente por 85.936 pesetas¹⁶⁶. Los trabajos comenzaron en 1922 y no fue hasta finales de 1923 cuando las primeras pruebas pudieron ser realizadas. En un artículo aparecido en ABC¹⁶⁷ se informa de que el día 28 de septiembre de 1923 se realizaron las pruebas de la central automática, con la presencia del obispo de la Seu de Urgel y los diputados provinciales. Esta nota, si bien pone de manifiesto que no se realizó una inauguración oficial, sino que se trató más bien de una demostración para las autoridades presentes, deja entender que la central estaba casi completada y que su puesta en marcha sería cuestión de semanas.

Con respecto a la fecha de su puesta en marcha definitiva existe cierta confusión entre las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha. Si bien existen estudios¹⁶⁸ que apuntan al 15 de septiembre de 1923 como fecha de inicio del funcionamiento de la centralita, hoy se sabe que no fue así, gracias al artículo de Marín de 1924 en la revista Ibérica (sacado a la luz en la tesis doctoral Yuste-2004, p. 330) y al referido artículo de ABC (sacado a la luz en el presente Trabajo Fin de Máster) Ha quedado demostrado que dos semanas después de la fecha propuesta por algunos historiadores todavía se encontraba la central en pruebas. La fecha real en la que se puso en marcha el primer sistema automático a servicio público en España fue el 15 de diciembre de 1923¹⁶⁹.

En relación a este momento de nuestra historia telefónica, cabe destacarse también el interesante hecho de que la Mancomunidad, después de un minucioso

¹⁶⁶ Yuste-2004, p. 330.

¹⁶⁷ ABC, 29 de septiembre de 1923, p. 22.

¹⁶⁸ Martín de la Vega-2006, p. 436; Romero-1994, pp. 60-61.

¹⁶⁹ Marín-1924, pp. 228.

estudio llevado a cabo por una persona de los conocimientos en la materia como era el ingeniero y científico Estaban Terradas, se decantara por el modelo presentado por la firma Siemens-Halske, basándose principalmente en su precio, ostensiblemente más barato que el de la Western Electric. Esta última era, por aquel entonces, filial de la American Telephone and Telegraph Co. (AT&T) de Theodore Vail y se trataba del brazo encargado de la producción de material telefónico destinado al negocio internacional. En un interesante capítulo que se tratará más adelante, veremos como la AT&T se tuvo que deshacer de la IWECC como resulta de la aplicación de las leyes “antitrust” (antimonopolio) americanas y la empresa que adquirió dicho negocio de producción de material en verano de 1925 fue la International Telephone and Telegraph Co. de Sosthenes Behn.

Año y medio más tarde, en aquel verano, cuando la Compañía Telefónica Nacional de España tuvo que decantarse por un sistema automático para su instalación en el territorio nacional, eligió, sin lugar a dudas, el sistema “Rotary” de la IWECC, sistema descartado por la Mancomunidad de Cataluña por su elevado costo frente al de sus competidoras.

3.13. Jueves, 20 de diciembre de 1923

El primer aparato telefónico español

En su habitual ronda de reuniones y visitas en el Palacio de Buenavista, el general Primo de Rivera recibió en este día al “consejero-secretario de una compañía de teléfonos, que le presentó el primer aparato telefónico de producción nacional”. La nota¹⁷⁰, brevísima, no aporta ningún dato más sobre la compañía ni sobre el aparato en cuestión, pero no deja de sorprender, ya que difícilmente se podría tratar del primer teléfono de producción española.

Es cierto que nuestro país no se distinguió por la producción de material telefónico, que más bien se solía importar de empresas europeas como la Ericsson, pero sí hubo algún ejemplo de compañía, anterior a 1923, que quiso entrar en el mercado telefónico como fabricante de equipamiento. Así, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la “Compañía de Telecomunicación y Electricidad”, del grupo empresarial de Enrique Parellada, dedicada a la industria de material eléctrico, en especial,

¹⁷⁰ La Vanguardia, 20 de diciembre de 1923, p. 15.

telefónico y telegráfico. Parellada, que, al igual que Sosthenes Behn, también se miraba en el espejo de Theodore Vail, pretendía imitar el “American System” y construir su propio “Sistema Peninsular”. Para ello ya contaba con las concesiones de muchas redes, así como el control de las líneas interurbanas, necesario para la interconexión de las células básicas. Sin embargo, para completar el modelo industrial de integración vertical (fabricación de equipos e instalación y explotación de las redes bajo el control de un mismo grupo empresarial) que reinaba en aquella época era necesario contar con un “brazo productor”, como los Laboratorios Bell de la AT&T en Estados Unidos. Para ello creó la “Compañía de Telecomunicación y Electricidad” y se embarcó en el negocio del material telefónico¹⁷¹. Años más tarde, un joven Gumersindo Rico trabajaría en la sección madrileña de esa compañía.

Cuando dejó la “Compañía de Telecomunicación y Electricidad”, Rico entró a trabajar en la empresa “Teléfonos Bell, S.A. Manufacturas Eléctricas”, una filial de la *International Western Electric Company* que había decidido extender su negocio de producción de aparatos telefónicos a España. En 1922 instaló una fábrica en Barcelona y una delegación comercial en Madrid¹⁷². Aquel centro catalán sería el que más tarde, cuando la ITT adquirió la IWEC en 1925, pasaría a denominarse “Standard Eléctrica” y se convertiría en la fábrica “madre” que habría de proveer a España de material telefónico durante varias décadas.

La empresa sueca L.M. Ericsson también constituyó la “Compañía Española de Teléfonos Ericsson”, a finales de 1922, con la intención de hacerse un hueco en el mercado español, tanto como instalador y operador de redes, como productor de equipamiento. En este sentido construyó una fábrica en Getafe, que también elaboraba material telefónico¹⁷³.

Se podría meditar si los aparatos producidos por la Bell y por la Ericsson se pueden considerar “de producción nacional”, teniendo en cuenta que eran compañías de capital extranjero; pero no hay lugar a duda de que la “Compañía de Telecomunicación y Electricidad” se trataba de una sociedad española, aunque parte de su accionariado fuera extranjero. Una posible explicación del error de esta nota

¹⁷¹ Yuste-2004, p. 89.

¹⁷² Yuste-2004, p. 94.

¹⁷³ Yuste-2004, p. 172.

puede ser que el periodista quisiera referirse en realidad a un “aparato telefónico de creación española”.

3.14. Viernes, 21 de diciembre de 1923

Resolución del concurso de la línea Salamanca – Matilla de los Caños

Con fecha 29 de octubre de 1923 se había firmado la Real Orden por la que se sacaba a concurso público la línea telefónica interurbana de Salamanca a Matilla de los Caños. El 21 de diciembre de ese mismo año se resolvía el concurso, quedando adjudicada al único solicitante: la Liga de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Salamanca, en cuyo nombre actuaba Graciliano Pérez Tabernero. Así quedaba registrado en la Real Orden¹⁷⁴ firmada por el Subsecretario de Gobernación, general Martínez Anido, y que obligaba a la construcción de dicha línea por la cantidad de 36.838,81 pesetas.

3.15. Lunes, 24 de diciembre de 1923

Puig i Cadafalch abandona la presidencia de la Mancomunidad

La Mancomunidad de Cataluña nació como un proyecto del político barcelonés y dirigente de la Liga Regionalista Enric Prat de la Riba y venía a satisfacer las reclamaciones nacionalistas que, desde finales del siglo XIX, habían surgido en Cataluña y crecían cada vez con más fuerza. Prat de la Riba, que era por aquel entonces presidente de la Diputación de Barcelona y uno de los personajes más influyentes de la sociedad catalana, había iniciado conversaciones con los Gobiernos de la Restauración, si bien sería durante el mandato de Eduardo Dato cuando se promulgó el Real Decreto¹⁷⁵ por el cual se permitía a las diputaciones unirse (mancomunarse) entre sí “para fines exclusivamente administrativos que sean competencia de las provincias”. Esta norma, conocida como “Decreto de Mancomunidades Provinciales”, estuvo vigente desde diciembre de 1913 hasta la promulgación del Estatuto Provincial el 20 de marzo de 1925 y si bien se podía haber

¹⁷⁴ Real Orden de la Subsecretaría de Gobernación, de 21 de diciembre de 1923. Gaceta de Madrid, 28 de diciembre de 1923, número 362, p. 1444.

¹⁷⁵ Real Decreto del Ministerio de Gobernación, 18 de diciembre de 1913. Gaceta de Madrid, 19 de diciembre de 1913, número 353, pp. 815-816.

puesto en práctica para cualquier agrupación de provincias españolas, las únicas que se mancomunaron en estos 12 años fueron las cuatro catalanas.

Unos meses más tarde, el Ministro de Gobernación José Sánchez Guerra¹⁷⁶ firmaba un Real Decreto¹⁷⁷, en cumplimiento con el anterior, que aprobaba “el Estatuto por el que ha de regirse la Mancomunidad catalana, compuesta de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona”. Ésta quedaría oficialmente constituida el 6 de abril de 1914, en la sala Sant Jordi de la diputación de Barcelona.

El primer presidente de la Mancomunidad de Cataluña fue el propio Prat de la Riba, pero murió de manera prematura tres años más tarde, el 1 de agosto de 1917, y fue sustituido por el arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, que sería nombrado el 29 de noviembre de ese mismo año.

Si bien las mancomunidades no tenían capacidad legislativa propia y únicamente disponían de los recursos económicos de las diputaciones que las componían, el caso catalán tuvo una trascendencia meridiana, sobre todo leída en términos nacionalistas, en tanto en cuanto la Mancomunidad supuso la primera agrupación de las cuatro provincias bajo una organización regionalista desde la que demandar sus reivindicaciones y fomentar la cultura y el sentir catalanes. Se iniciaba de esta forma una tímida descentralización, que se vería truncada años más tarde durante la Dictadura de Primo de Rivera.

A pesar de las limitaciones políticas y presupuestarias, la Mancomunidad realizó una intensa labor de reformas, centrada sobre todo en el ámbito de la educación y la cultura y en las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, etc.) Enmarcado dentro de este segundo grupo de reformas, uno de los mayores esfuerzos realizados por las diputaciones fue la creación y explotación de una red telefónica catalana, al amparo del Real Decreto de 26 de marzo de 1914 y del Reglamento telefónico vigente (de junio de 1914), que permitían que las diputaciones instalaran un sistema propio dentro de los límites de la provincia.

Un informe previo realizado por los técnicos de la Mancomunidad resaltaba el estado deficiente en el que se encontraba la telefonía catalana, en consonancia con el

¹⁷⁶ Sobre José Sánchez Guerra, ver apartado 2.2.2 del presente Trabajo Fin de Máster.

¹⁷⁷ Real Decreto del Ministerio de Gobernación, 26 de marzo de 1914. Gaceta de Madrid, 27 de marzo de 1914, número 86, pp. 750-751.

resto del país, y las enormes diferencias existentes entre los grandes centros industriales de la costa y las zonas rurales del interior. Además, la presencia de otras compañías concesionarias dentro del territorio, la Compañía Peninsular y la Telefónica del Vallés¹⁷⁸, complicaba los deseos de crear esa red propia y obligaba a recurrir a convenios de explotación.

El Cuerpo de Telégrafos, como no podía ser de otra forma, se opuso frontalmente a la concesión de dicha red a una corporación pública pero no estatal, pero sus esfuerzos fueron en vano ya que el 11 de septiembre de 1915 se publicaba en la Gaceta de Madrid el Real Decreto¹⁷⁹ por medio del cual se autorizaba “a la Mancomunidad para la instalación y explotación de una red telefónica interurbana que pueda unir varios o todos los pueblos de las cuatro provincias mancomunadas”.

Aunque las competencias de las diputaciones en materia telefónica se limitaban a las líneas interurbanas, en un claro intento de la legislación para llevar los teléfonos a las áreas rurales, la Mancomunidad también adquirió e incorporó a su red las redes urbanas de algunos municipios importantes como Lérida, Figueras, Puigcerdá y Vic. Pronto se inició un plan de construcción y reformas para la instalación de numerosas líneas interurbanas y para mejorar el estado general de la red. La Mancomunidad entendía que el servicio telefónico no debía reportar beneficios, aunque tampoco generar déficit, y en esta línea comenzó la instalación de líneas en zonas rurales aisladas como los Pirineos.

A pesar de la inestabilidad política y de las pugnas que la cuestión telefónica despertó entre el Estado español y la Mancomunidad de Cataluña¹⁸⁰, lo cierto es que la concesión de la red a las cuatro provincias catalanas duró 10 años (de 1915 hasta 1925) y que durante este tiempo el desarrollo tecnológico en este ámbito vio notables mejoras, sobre todo en lo que respecta a las zonas rurales. Si bien las expectativas iniciales no fueron alcanzadas, la red telefónica de la Mancomunidad se puede

¹⁷⁸ Gutiérrez-1997, pp. 353-354. La Telefónica del Vallés fue comprada finalmente el 7 de diciembre de 1916 por 157.090 pesetas.

¹⁷⁹ Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 9 de septiembre de 1915. Gaceta de Madrid, 11 de septiembre de 1915, número 254, pp. 697-698.

¹⁸⁰ Estos enfrentamientos fueron especialmente duros cuando hubo de tratarse la cuestión de la reversión de la red de Barcelona primero (1921), ya estudiada en el apartado 2.2.6 de este Trabajo, y las redes de Reus y Tarragona después (1924), capítulo que se tratarán un poco más adelante.

considerar como un ejemplo de lo que podría haber sido (y no fue) de haberse puesto en marcha el proyecto de Francos Rodríguez de 1917.

Volviendo al ámbito político y a los acontecimientos ocurridos después del golpe de Estado, es importante hacer notar que éste se acogió con cierto entusiasmo dentro de la política catalana, aunque también con prudencia. No en vano, Primo de Rivera, era el Capitán general de Cataluña en el momento del pronunciamiento, que se llevó a cabo en Barcelona, aunque inmediatamente habría de trasladarse a Madrid, y se confiaba en que el nuevo régimen apoyaría la descentralización del Estado. El Marqués de Estella había fomentado durante años sus contactos dentro de la burguesía política de Cataluña y defendió los intereses de la región frente al Gobierno de Madrid en varias ocasiones¹⁸¹. Aún más, se sabe que Francisco Cambó, líder de la Liga Regionalista tras la muerte de Prat de la Riba, había colaborado con Primo de Rivera antes del levantamiento con el fin de estudiar una posible participación en el poder y una consecución de mayor autonomía para Cataluña.

Sin embargo, en un giro tan inesperado como decepcionante para la política catalana, Primo de Rivera pronto haría ver que sus intenciones eran bien distintas, mostrando un carácter hostil hacia los regionalismos y aplicando políticas cada vez más centralizadoras. Así, unos meses más tarde, en enero de 1924 quedarían destituidas las diputaciones provinciales, acción que vendría sucedida por muchas otras que habrían de recortar las competencias y concesiones territoriales; aunque el punto culminante de estas medidas habría de llegar todavía un año más tarde cuando en marzo de 1925, por medio del Estatuto Municipal, Primo de Rivera daría el golpe definitivo y liquidaría la Mancomunidad de Cataluña.

Sin embargo, no hace falta adelantarse a los acontecimientos para acusar las fricciones, ya que en los últimos meses de 1923 una serie de gestos del Jefe del Directorio Militar ya habían sembrado la desconfianza, e incluso la irritación, dentro de la política catalana. Quizá la muestra más clara de la nula intención que tuvo Primo de Rivera, desde los primeros momentos, de estrechar lazos con los movimientos nacionalistas se encuentre en el conocido como “Decreto contra el Separatismo”¹⁸², redactando por él mismo únicamente cuatro días después del golpe de Estado. En

¹⁸¹ Yuste-2004, pp. 161-162; Gutiérrez-1997, p. 352.

¹⁸² Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 18 de septiembre de 1923. Gaceta de Madrid, 19 de septiembre de 1923, número 262, p. 1146.

esta norma, el general afirmaba que “de los males patrios que más demandan urgente y severo remedio es el sentimiento, propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías”. En su artículo 1 legislaba:

Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por la palabra, por escrito, por la imprenta u otro medio mecánico gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o manifestaciones. No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, de la provincia o del Municipio, ni en lugar alguno sin más excepción que las Embajadas, Consulados, hospitales o escuelas u otros centros pertenecientes a naciones extranjeras.

Tan evidente fue el ataque y la hostilidad manifiesta que Francisco Cambó decidió abandonar la política y el país para hacer turismo en el extranjero.

Puig i Cadafalch, entonces Presidente de la Mancomunidad, pronto seguiría un camino similar al emprendido por Cambó. El arquitecto tuvo desde el principio una mayor paciencia hacia los gestos de Primo de Rivera, llegando incluso a publicar una nota en los diarios de Barcelona apoyando al nuevo Directorio Militar¹⁸³, a pesar del Decreto contra el Separatismo que había sido promulgado un día antes. También se manifestó, en no pocas ocasiones, a favor de encontrar una solución dialogada ante las diferencias existentes.

No obstante, el 11 de diciembre sería el día en el que incluso la firmeza y voluntad de Puig i Cadafalch habrían de sucumbir definitivamente, después de una serie de incidentes ocurridos en aquella jornada en la que el dictador se encontraba en Barcelona. El Jefe del Gobierno estaba de regreso de un viaje oficial a Italia, realizado en compañía de los reyes, en el que había conocido las políticas de Benito Mussolini (que llevaba ya más de un año en el poder). Con este motivo se realizaron varios actos en la ciudad condal a los que asistió, entre otras autoridades, el presidente de la Mancomunidad. Todo ello quedó recogido en una serie de artículos escritos por el

¹⁸³ La Vanguardia, 19 de septiembre de 1923, p. 5

propio Puig i Cadafalch un tiempo más tarde¹⁸⁴ y en los que se refería a este día como aquel en el que “finalizaron las relaciones de la Mancomunitat de Catalunya con el dictador.”

El presidente realiza una crónica de los hechos acontecidos en esa jornada, entre los que destaca una acalorada conversación mantenida con el propio dictador en la que se trataron temas sensibles como el verdadero espíritu del nacionalismo o el uso de la lengua catalana. El contenido de este pequeño pero intenso debate no ha podido ser confirmado o desmentido, ya que, tal y como indica Puig i Cadafalch, el único presente, además de ellos dos mismos, fue el cardenal arzobispo de Tarragona, que también tomó parte e intentaba combatir las “afirmaciones fantásticas” del Marqués de Estella. No obstante, de ser exactas todas las palabras reproducidas por el presidente catalán, no queda ninguna duda entonces del grave sentimiento anti-regionalista de Primo de Rivera y de los sentimientos que habrían de plasmarse tiempo después en sus políticas centralistas y de represión de cualquier movimiento o manifestación catalanista.

Tan frustrado quedó Puig i Cadafalch después de aquellos actos que esa tarde decidió no asistir a la fiesta organizada en honor del rey y destinó el resto de la jornada a un último intento por normalizar las relaciones con el Estado:

Por la noche fue entregada a Su Majestad –y mal recibida por el dictador– una instancia solicitando la derogación del decreto contra el separatismo [...] firmada por 61 sociedades económicas y profesionales, 18 entidades culturales, 51 sociedades musicales, 2 sociedades deportivas y 78 sociedades agrícolas catalanas. Nunca la voz de un pueblo había hallado tanta acogida.

El Marqués de Estella hizo caso omiso de dicha instancia y como resultado de todo ello, durante la jornada de Nochebuena de 1923, Puig i Cadafalch, cansado e irritado, abandonó la presidencia de la Mancomunidad y dejó los designios de ésta en manos de su vicepresidente Santiago Estapé i Pagès. Dos días más tarde abandonaría el país y viajaría a Francia para estudiar los orígenes de la arquitectura románica.

¹⁸⁴ Estos artículos se encuentran transcritos en los apéndices de Muniesa-1985, p. 259 y siguientes.

3.16. Domingo, 30 de diciembre de 1923

Sobre el Consejo Superior de Telefonía

Durante la última reunión mantenida entre el Director General de Correos y Telégrafos, José Tafur Funés, y la Junta directiva del Centro Telegráfico Español se acordó que los telegrafistas remitirían un nuevo informe en el que explicaran más detalladamente sus opiniones con respecto al hipotético Consejo Superior de Telefonía que, en opinión de la asociación, debería controlar el sistema telefónico nacional. En los términos en los que se había expresado, el Director General se mostraba partidario de la unificación de todas las telecomunicaciones bajo un mismo organismo estatal, sin seccionar ningún sistema del Cuerpo de Telégrafos.

En respuesta a dicha solicitud, el Centro Telegráfico Español envió, en diciembre de 1923, una carta al señor Tafur Funés con las directrices que marcarían el funcionamiento y las atribuciones de ese Consejo de Telefonía. Dicha carta fue publicada íntegramente en la edición de la revista *Electra* del día 30 de diciembre de 1923¹⁸⁵.

Exponía la asociación que la necesidad más apremiante de la telefonía española era una fuente de ingresos que permitiera realizar una potente inversión inicial, con el fin de evitar los trámites lentos a los que obligaba la vigente legislación en materia económica y que facilitara una serie de obras que se consideraban urgentes. Según los telegrafistas, la explotación de las redes urbanas por parte de los ayuntamientos tampoco era la solución, ya que los municipios tampoco disponían de los recursos monetarios suficientes para llevar a cabo las obras de construcción y reforma y sólo tres en todo el país habían conseguido un servicio verdaderamente eficiente¹⁸⁶.

Por todo lo expuesto consideraban que había que modificar radicalmente el modo de explotación y que el “mejor procedimiento [...] es la explotación por el Estado de toda la telefonía interurbana y urbana, salvo casos muy excepcionales, y la intervención del Estado en las condiciones técnicas y facultativas de toda obra que por

¹⁸⁵ *Electra*, 30 de diciembre de 1923, nº 6, p. 117-118. También apareció en *El Electricista*, 5 de enero de 1924, nº 808, pp. 6631-6632.

¹⁸⁶ Entendemos que se referían a Santander, San Sebastián y Pamplona, aunque Las Palmas también fue otro ejemplo de capital provincial que controlaba su propia red telefónica.

él no sea realizada”. La asociación de telegrafistas basaba su plan de telefonía en los proyectos de Francos Rodríguez de 1917 y de Colombí de 1921. Es más, argumentaban que no habría necesidad de redactar uno nuevo, ya que simplemente habría que retocar algunos detalles de este último y presentarlo para su aprobación.

En este sentido recuperaban la idea del Consejo Superior de Telefonía, perteneciente a la Dirección General de Comunicaciones y presidido por su Director, donde tendrían representación funcionarios públicos, pero también delegados de otras corporaciones o entidades que el Estado considerara conveniente.

La misión de este Consejo Superior sería la intervención y revisión de proyectos principalmente en la parte económica y administrativa; percepción de ingresos y administración de fondos; emisión de empréstitos; incautación de servicios explotados por particulares; cesión a empresas privadas, en casos excepcionales, de algunas redes urbanas con el control técnico y administrativo del Estado; contrata por pública subasta o concurso privado de adquisición de material o realización de obras parciales; convenios con los Ayuntamientos y Diputaciones sobre el auxilio prestado por éstos para la construcción de sus estaciones, C. T. U. [centrales telefónicas urbanas] o redes provinciales, etc.

De esta forma razonaban que podría construirse y explotarse una red telefónica con los medios propios del Estado, sin necesidad de acudir al capital privado nacional o extranjero y evitar así la cesión de la soberanía y la seguridad de nuestras telecomunicaciones. El rendimiento económico estaría asegurado a medio-largo plazo cuando la explotación de las redes urbanas comenzara a arrojar los importantes beneficios que se esperaban de ellas.

El pesimismo de los telegrafistas ante el nuevo año

En un premonitorio artículo de opinión aparecido en el último número de 1923 de la revista *Electra*¹⁸⁷ se lamentan los telegrafistas de que el año que terminaba no les había traído nada bueno, pero se mostraban aún más pesimistas con respecto al que comenzaba: “el pesimismo nos invade y la fe nos falta al despuntar la aurora de otro nuevo. ¡Qué la Providencia nos ayude!”

¹⁸⁷ *Electra*, 30 de diciembre de 1923, nº 6, p. 122.

La revista *El Electricista* se mostraba quizá un poco más optimista con respecto al nuevo año ya que “no les ofrece [a los telegrafistas] una nota de desesperanza y amargura, aun cuando los momentos actuales ofrezcan tales desoladores aspectos. Esperemos confiados en la justifica de nuestras aspiraciones y de nuestros merecimientos.”¹⁸⁸

No le faltaban motivos al Cuerpo de Telégrafos para mostrar sus miedos con respecto al año 1924 pues las perspectivas de que sus reivindicaciones tradicionales fueran escuchadas eran más bien escasas y los “cantos de sirena” sobre posibles concesiones contrarias a sus anhelos eran de sobra conocidos. Como vamos a relatar a continuación, los acontecimientos acaecidos durante 1924 habrían de cambiar para siempre el panorama de las telecomunicaciones de nuestro país, conformando un mapa en el que había un claro vencedor y varios perdedores, entre los que se encontraban, como ellos mismos temían a finales de 1923, los telegrafistas.

3.17. Martes, 1 de enero de 1924

El sistema telefónico en 1924 y la llegada de la “delegación americana”

A pesar de que existen estadísticas contradictorias¹⁸⁹, se podría estimar que, al comienzo de 1924, España contaba con unos 75.000 abonados al servicio telefónico, lo que suponía una tasa de penetración relativa inferior al 0,5% (medida en teléfonos por cada 100 habitantes), más baja que en casi todos los países de nuestro entorno. Casi un tercio de la red nacional estaba en manos del Estado, que controlaba, a través del Cuerpo de Telégrafos, un total de 147 redes municipales, 14 de las cuales correspondían a capitales de provincia¹⁹⁰, las redes provinciales de Vizcaya y Ciudad Real, unos cuantos circuitos interurbanos (algunos todavía en construcción) y la red internacional con Francia.

Por otro lado, tres redes municipales de capitales de provincia estaban explotadas por sus consistorios (Santander, San Sebastián y Pamplona), una diputación mantenía el control de su red (Guipúzcoa) y la Mancomunidad de Cataluña

¹⁸⁸ *El Electricista*, 25 de diciembre de 1923, nº 807, p. 6621.

¹⁸⁹ Martín de la Vega-2006, p. 437; Olivé-1999, pp. 131-132; Yuste-2004, p. 119-120; *El Electricista*, 5 de noviembre de 1923, p. 6586.

¹⁹⁰ Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Logroño, Lugo, Las Palmas, Soria, Segovia, Sevilla, Teruel y Zamora.

hacia lo propio con las líneas provinciales de la región y algún que otro centro urbano, aunque sólo uno era capital provincial (Lérida). Otros ayuntamientos menos importantes también conservaban sus centros urbanos. Los abonados de estas redes en manos públicas aunque no estatales suponían en torno al 10% del total nacional.

El resto se encontraba explotado por distintos concesionarios, que formaban un grupo de lo más variopinto, que incluía desde los pequeños empresarios que explotaban la red municipal de su municipio al poderoso grupo empresarial de Parellada y la Compañía Peninsular de Teléfonos. Las 34 capitales de provincias restantes (incluyendo Ceuta y Melilla) estaban por lo tanto en manos privadas: 24 eran explotadas por concesionarios particulares (la más importante era Valencia, gestionada por Antonio Mompó) y 10 por la Peninsular (la más importante era Madrid, que era operada a través de su filial, la Madrileña de Teléfonos)

Estos son los datos absolutos en cuanto a distribución de la red telefónica, pero también es interesante conocer la proporción de tráfico real que cada grupo gestionaba. Algunos estudios han apuntado que es probable que la Peninsular (y subsidiarias) cursara alrededor del 50% del tráfico urbano y de un 70 a un 80% del interurbano¹⁹¹, de lo que se deduce que el grupo de Parellada tenía mucho mayor peso cualitativo en el panorama telefónico español que las redes públicas y el resto de compañías explotadoras.

Por otro lado, la expiración de la mayoría de estas concesiones se encontraba ya muy cercana y el Directorio Militar no podía aplazar por mucho tiempo más la toma de una decisión firme y contundente que solucionara el problema telefónico nacional de una vez por todas. La política mantenida por los últimos Gobiernos de continuar sacando a concurso la construcción y cesión de intereses telefónicos no era sostenible. A pesar de que, como ya hemos visto, una de las primeras medidas tomadas por Tafur Funés fue la convocatoria de un concurso público para la construcción de una línea interurbana en Salamanca, a estas alturas ya nadie en el poder consideraba que esa fuera la solución óptima para una situación cada vez más alarmante. El propio Primo de Rivera declararía en esta época que se estaba estudiando un proyecto para reformar y modernizar la red telefónica nacional por completo.

¹⁹¹ Carballo-1979, p. 581.

Este era el escenario del sistema telefónico español cuando comenzaba 1924 y así es como se lo encontraron los directivos de la ITT que, por órdenes de Sosthenes Behn, “desembarcaron” en nuestro país a principios de este año. La maquinaria de la multinacional se encontraba ya a pleno funcionamiento, con el objetivo de convertir a España en el primer país de la órbita del “International System”. Varios investigadores han fechada la llegada de la “delegación americana” en el mes de enero o febrero¹⁹², una vez la tarea encomendada a Proctor estaba ya bastante avanzada y las reuniones de finales de 1923 entre el coronel Behn y el Directorio Militar hacían pensar que su proyecto tenía posibilidades de hacerse con el control de la telefonía española.

Esta grupo de americanos estaría formada por un equipo de altos ejecutivos de la ITT como Geoffrey Ogilvie, Fred T. Caldwell, Logan N. Rock, Roy A. Walker y Walter F. Cahir. Entre sus misiones más inmediatas se contaba el perfilar el proyecto para la monopolización del sistema telefónico español, continuar las negociaciones con la burguesía financiera y el poder político nacional, formar un equipo de trabajo con profesionales españoles cualificados y comenzar la adquisición de intereses telefónicos a lo largo y ancho de la geografía del país¹⁹³.

3.18. Miércoles, 2 de enero de 1924

Informe de la Comisión de Teléfonos de la Diputación de Guipúzcoa

El Director de la Red telefónica municipal de San Sebastián, Vicente Prado, y el Jefe de instalaciones de la Red telefónica provincial, Jenaro Michelena, presentaron en diciembre de 1923 un informe en el que recogían las conclusiones más importantes de su viaje por Europa, en el que estudiaron las soluciones de automatización que se habían implantado en ciudades extranjeras de importancia. El texto concluía que la telefonía urbana en los países de nuestro entorno se estaba orientando hacia las centrales automáticas, por ser éstas más rápidas, seguras y económicas, y recomendaba la instalación de un sistema de estas características que diera servicio a San Sebastián y a su área metropolitana.

Tras la lectura del informe presentado por los técnicos de las dos corporaciones guipuzcoanas, la Comisión de Teléfonos de la Diputación provincial en

¹⁹² Carballo-1979, p. 584; Yuste-2004, p. 126.

¹⁹³ Yuste-2004, p. 126.

su reunión del día 2 de enero de 1924 se declaró favorable a la adopción del sistema automático y encargó a los directores de las redes que presentaran un pliego de condiciones para el concurso de las centrales. Asimismo dejaban constancia en acta del “espíritu progresivo de esta provincia que en todos sus medios de comunicación quiere figurar en el puesto más honroso”. Tampoco se resistían a hacer referencia a las noticias que circulaban sobre la posibilidad “de encomendar a una compañía extranjera la transformación, tan necesaria, del servicio telefónico en España entera”, razón de más, a ojos de esta diputación, para enorgullecerse de su empeño por modernizar las redes sin necesidad de intervención de capitales extranjeros¹⁹⁴.

3.19. Jueves, 10 de enero de 1924

Las reclamaciones de los empleados de la Peninsular

Mientras el Inspector general de Teléfonos Interurbanos de la Compañía Peninsular, Eduardo Estelat, mantenía reuniones con los altos cargos del nuevo Directorio Militar¹⁹⁵, en las que suponemos que tratarían de las reivindicaciones de la Dirección de la compañía, los empleados de su sección, el Cuerpo de Teléfonos Interurbanos de la compañía, dirigían una gran cantidad de cartas a Primo de Rivera denunciando su situación laboral y la del servicio interurbano. Parece claro que los trabajadores de la empresa de Parellada se organizaron, aprovechando también las nuevas circunstancias políticas, para hacer valer sus derechos y elevaron sus quejas al Gobierno militar. En los fondos documentales del Archivo Histórico Nacional¹⁹⁶ se conserva un gran número de misivas, enviadas a finales de 1923, por muchos empleados de esta sección. Todas ellas fueron escritas a título personal, pero su coincidencia en el tiempo, entre sí y con las reuniones de Estelat con el Gobierno, indica que se encontraban claramente coordinados.

En todas estas cartas denuncian sus pésimas condiciones laborales y reclaman humildemente al general Primo de Rivera la incautación de todas las redes interurbanas como única solución posible al problema de la telefonía nacional. Hacían

¹⁹⁴ Gutiérrez-1997, pp. 254-255.

¹⁹⁵ Se reunió en una fecha indeterminada de octubre o noviembre con Primo de Rivera (ver crónica de 10 de diciembre de 1923) y con el general Muslera (ver crónica de 13 de diciembre de 1923)

¹⁹⁶ Archivo Histórico Nacional, fondos de la Presidencia del Gobierno de Primo de Rivera, legajo 52, expediente 296, 1923.

mención igualmente a la imposibilidad de dirigir todas estas quejas a través de la unión de trabajadores de la propia compañía, la Asociación General de Empleados y Obreros de la Red Telefónica Interurbana General de España, ya que no podían “confiar nunca en dicha Junta puesto que siempre se opuso a cuantas peticiones hicieron sus asociados”, recalcando el hecho de que muchos de los miembros de dicha unión de trabajadores gozaban también de un segundo sueldo público como funcionario del Estado.

Todas estas reclamaciones del Cuerpo de Teléfonos Interurbanos no parecen injustificadas. Unos meses antes, cuando el Subsecretario de la Gobernación Martínez Anido firmó la Real Orden de 29 de septiembre de 1923, no se limitó únicamente a justificar la decisión del Gobierno de rechazar las dos solicitudes de la Peninsular, cosa que hubiera bastado para emitir dicha norma, sino que también se extendió unos cuantos párrafos explicando a la compañía la insatisfacción general ante la calidad del servicio telefónico interurbano. La Real Orden hacía referencia a los informes emitidos por 18 Cámaras Oficiales de Comercio de todo el país en los que se declaraban en contra de las subidas de tarifas y se mostraban muy críticos con respecto al rumbo empresarial que estaban tomando la Compañía Peninsular y sus filiales. Martínez Anido terminaba llamando “la atención de las mencionadas Compañías sobre las imperfecciones y defectos de que se lamentan las Cámaras de Comercio, para que en su vista adopten las medidas convenientes para su remedio”.

Además, como ya hemos visto, a principios de diciembre se publicaban una serie de artículos en la revista financiera “Gaceta Banca, Industria y Comercio” y en la revista “Electra” en la que se criticaban ampliamente a la Peninsular. No sólo trataban las cuestiones de la penosa situación laboral de sus trabajadores, los sueldos bajos o la pésima calidad del servicio, sino que también incidían en la sobretasación que se estaba realizando de las líneas interurbanas en caso de una hipotética incautación estatal de las mismas.

Finalmente, el día 10 de de enero de 1923, la revista Electra publicaba una nota¹⁹⁷ en la que se indicaba que los empleados de la Compañía Peninsular de Teléfonos se habían unido para firmar, de manera conjunta, un escrito entregado al Directorio en el que pedían que el Estado se incautara de todos los servicios telefónicos existentes. En caso de que el Gobierno no hiciera caso a dicha solicitud,

¹⁹⁷ Electra, 10 de enero de 1923, nº 7, pp. 161-162.

esperaban que por lo menos se practicara “una investigación encaminada a mejorarlos [los servicios telefónicos] en cuanto al público se refiere, y en lo que la personal, tan pésimamente retribuido, afecta.”

De esta forma, los trabajadores de la mayor empresa telefónica de España hacían frente común con los telegrafistas del Cuerpo nacional en el sentir de que la solución al problema partía de la incautación por parte del Estado de todas las redes.

3.20. Sábado, 12 de enero de 1924

Disolución de las Diputaciones provinciales

El general Primo de Rivera había iniciado un giro hacia la centralización del Estado, temiendo que los movimientos regionalistas o nacionalistas representaran una amenaza seria a sus planes de reforma y “saneamiento” político, económico y social. En este sentido y durante sus primeros meses de gobierno, había tomado una serie de medidas destinadas a reducir el poder y la representación de las administraciones públicas provinciales, iniciando así un movimiento que alcanzaría su punto álgido un año más tarde cuando se promulgara el Estatuto Provincial.

Uno de estos pasos fue el Real Decreto redactado por el propio Primo de Rivera el 12 de enero de 1923 mediante el cual se declaraban disueltas las actuales Diputaciones provinciales de España¹⁹⁸. No es difícil llegar a la conclusión de que las diputaciones que realmente preocupaban al marqués de Estella eran aquellas con cierta inclinación hacia el nacionalismo o al separatismo, en las que podían existir diputados que plantearan polémicas y debates en contra del Gobierno central. De esta forma disolvía los parlamentos provinciales, se deshacía de los políticos con tendencias contrarias al nuevo régimen y conformaba unas cámaras “depuradas” con miembros de su elección.

El artículo 2º dejaba en manos de los Gobernadores civiles la designación de los nuevos diputados provinciales interinos, elegidos “libremente” entre los habitantes de la provincia. El artículo 3º establecía que el día 20 de enero se constituirían las nuevas Diputaciones provinciales bajo la presidencia del Gobernador civil.

¹⁹⁸ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 12 de enero de 1923. Gaceta de Madrid, 13 de enero de 1923, nº 13, pp. 202-203.

Una consecuencia directa, claramente pretendida por el Jefe del Directorio Militar, era que la Mancomunidad de Cataluña se veía seriamente afectada por este Real Decreto, en tanto en cuanto estaba compuesta por diputados de las cuatro diputaciones y sus recursos económicos provenían de éstas. Ahora que los componentes de los parlamentos provinciales eran designados directamente por el Gobernador civil, la Mancomunidad quedaba privada de sustancia democrática y, dado que estos gobernadores eran personalidades afectas al nuevo régimen, cabe pensar que los nuevos representantes de la Mancomunidad no serían continuadores del espíritu que esta corporación había mantenido hasta el momento. La Mancomunidad seguía existiendo, pero su esencia era claramente distinta y pronto perdería todo su significado inicial.

Irónicamente, el Real Decreto de 12 de enero de 1923 recordaba en su artículo 6º que las diputaciones provinciales podrían mancomunarse si así lo deseaban tal y como establecía el Real Decreto de 18 de diciembre de 1913¹⁹⁹. Es cuanto menos notable que Primo de Rivera animara en este artículo, perfectamente omisible, a la unión de las provincias españolas en mancomunidades ahora que sus diputados ya contaban con el beneplácito del Gobierno central.

3.21. Jueves, 17 de enero de 1924

La solicitud de Santander es desestimada

En un apartado anterior hemos analizado el proceso que llevó a San Sebastián a conseguir la concesión a perpetuidad de su red urbana a finales de octubre de 1923. Las primeras medidas que tomó esta ciudad para conseguir una prórroga en la licencia fueron llevadas a cabo de manera conjunta con los otros dos ayuntamientos del norte de España que controlaban el sistema telefónico en sus municipios: Santander y Pamplona. Las reuniones entre los consistorios comenzaron a finales de 1919, pero no fue hasta febrero de 1920 cuando se presentó en las Cortes una proposición de ley en la que se regulaba las concesiones telefónicas municipales con la intención de que los derechos adquiridos por parte de las ciudades que quisieran explotar el servicio no revertieran nunca al Estado. Aquella proposición fue desestimada, pero San Sebastián

¹⁹⁹ Hay una errata en la publicación de este Real Decreto de 12 de enero de 1923 al referirse al Real Decreto por el cual se permitía a las diputaciones mancomunarse entre sí. Se indica que la norma se firmó el 18 de noviembre de 1923, cuando en realidad fue un mes más tarde: el 18 de diciembre de 1923.

y Santander no se vinieron abajo y abrieron nuevos frentes, ya por separado pero de manera paralela, para alcanzar sus pretensiones. Sin embargo, la suerte que corrió la ciudad cántabra fue bien distinta.

La red de Santander fue adquirida por la Compañía Peninsular de Teléfonos de Enrique Parellada al poco tiempo de fundarse ésta (en 1895) por la compra a su anterior concesionario. En 1909 la red volvería a cambiar de manos cuando el ayuntamiento de la ciudad se hizo cargo de ella en aplicación del Real Decreto de 18 de septiembre de 1908, por medio del cual se permitía a los ayuntamientos establecer y explotar por su cuenta el servicio telefónico²⁰⁰.

El consistorio santanderino fue una más de las entidades que vio en el Directorio Militar la oportunidad para ver satisfechas sus reivindicaciones pendientes. La proposición de ley de 1920 había sido desestimada, pero nada le impedía alzar de nuevo sus demandas, aprovechando la coyuntura del nuevo régimen. En principio, Santander partía con desventaja con respecto a San Sebastián ya que, como hemos visto, la capital donostiarra jugó la carta de la ley de 25 de noviembre de 1908, por la que se otorgaba la concesión a la Diputación de Guipúzcoa, en cuyo artículo 3º se hacía referencia a la posibilidad que tenían los municipios de esta provincia de explotar sus redes de manera indefinida si así lo deseaban²⁰¹. Santander, muy a su pesar, no contaba con ninguna norma parecida.

Por ello, el alcalde de Santander solicitó al Gobierno una prórroga de 25 años argumentando que la explotación de la red permitiría al ayuntamiento compensar la deuda que le habían ocasionado dos créditos solicitados años antes para tomar el control de la red y realizar las mejoras necesarias para su correcta explotación. Tal y como apunta Pérez Yuste en su tesis doctoral, los fundamentos esgrimidos no fueron quizá los más acertados, ya que se reconocía que el empeño del ayuntamiento por controlar el servicio telefónico había provocado un déficit en las arcas municipales.

El día 17 de enero de 1924, el Subsecretario de la Gobernación firmaba la Real Orden por la que se denegaba la ampliación de la concesión de la red urbana, provocando que el ayuntamiento tuviera que ceder su control al Estado cuando

²⁰⁰ Yuste-2004, p. 89.

²⁰¹ Ver apartado 3.2 de este Trabajo Fin de Máster.

finalizara la licencia²⁰². La disposición declaraba que todos los concesionarios tenían que cumplir estrictamente el contrato firmado con el Estado, fueran del tipo que fueran, incluso si se trataba de un municipio que se había endeudado a causa de los teléfonos y aunque la reversión causara perjuicios económicos, desligándose la Administración central de toda responsabilidad con respecto a la mala gestión consistorial. Sin embargo, la historia de la telefonía en España otorga muchos ejemplos de concesionarios a los que les fue concedida una o varias prórrogas por distintos motivos, a pesar del contrato firmado entre estos y el Estado.

Esta resolución contrasta además con la Real Orden firmada el 27 de octubre anterior, sólo tres meses antes, por la que se concedía una prórroga a perpetuidad para el ayuntamiento de San Sebastián. Si bien algunos investigadores han apuntado a una posible mediación del rey Alfonso XIII en el caso de la ciudad donostiarra, hecho que no ha podido ser comprobado por el momento, estas incongruencias legislativas sí que demuestran las dudas que el gobierno de Primo de Rivera seguía teniendo en el asunto telefónico. Parece claro que todavía no se había tomado una decisión firme con respecto al camino a seguir para la modernización del sistema telefónico español y por el momento seguían escuchando los proyectos de unos, respondiendo a las reivindicaciones de otros y tomando algunas decisiones, un tanto desorientadas. Esta medida tomada con respecto a Santander también contradice las palabras que rondaban por la cabeza de Tafur Funés en noviembre de 1923, si nos atenemos a las opiniones vertidas en las dos reuniones que celebró en aquel mes con los representantes del Centro Telegráfico Español, en las que se declaraba partidario de que fueran los ayuntamientos los que gestionaran sus propias redes. Pero aún se crearía aún más confusión cuando dos meses más tarde, en marzo de 1924, se promulgara el Estatuto Municipal y se proclamara que las concesiones municipales pasaban a estar bajo control de los consistorios. Vista la respuesta que recibió en enero, el ayuntamiento santanderino tuvo, por lo menos, que sorprenderse al ver dicha normativa publicada en la Gaceta de Madrid sólo unas semanas después.

Ahondando aún más en el asunto de las contradicciones, la Real Orden por la que denegaban la solicitud a Santander incluía también un párrafo confuso, peregrino y totalmente innecesario en una ordenanza como ésta en la que los motivos expuestos anteriormente bastaban para justificarla:

²⁰² Real Orden de la Subsecretaría de la Gobernación, de 17 de enero de 1924. Gaceta de Madrid, 20 de enero de 1924, nº 20, p. 337.

Considerando que la prórroga constituye una verdadera novación del contrato, es decir, que por ella se extingue el primero y nace otro nuevo; ahora bien, con las condiciones de publicidad, subasta y demás solemnidades que caracterizan la contratación administrativa, son garantías de los intereses públicos, lógicamente cabe concluir que la prórroga del contrato vendría a ser un modo de eludir el cumplimiento de las disposiciones que regulan la contratación administrativa.

Por un lado, parece que la Real Orden avisa a otros concesionarios a través de este texto de que el Gobierno aplicará los contratos firmados entre estos y el Estado de manera rigurosa, siendo el caso de San Sebastián una excepción que no ha lugar a repetirse. Por otro, se intuye que el Directorio va a continuar, por el momento, con el régimen de concesiones telefónicas que se había llevado a cabo hasta entonces, ya que la inclusión de esta “manifestación de intenciones” no era relevante para el resultado final de la ordenanza²⁰³.

El concurso para la automatización de San Sebastián

Los directores de las redes municipal de San Sebastián y provincial de Guipúzcoa habían sido encargados de redactar el pliego de condiciones del concurso para la automatización de la ciudad y su extrarradio. El Director de la red urbana, Vicente Prado, y el Director de la red provincial, Ignacio María Echaide, presentaron, el día 17 de enero de 1924 y de manera conjunta, este pliego de condiciones y bases de inteligencia²⁰⁴.

Quedaba de esta forma convocado el concurso público para que toda aquella compañía que estuviera en disposición de instalar adecuadamente un sistema automático en la ciudad de San Sebastián presentara un proyecto, siguiendo las disposiciones establecidas, con el fin de conseguir la adjudicación. Es interesante apuntar en este momento el hecho de que todas las empresas que se presentaran a este concurso tendrían que ser irremediabilmente extranjeras, teniendo en cuenta que

²⁰³ Yuste-2004, pp. 115-116.

²⁰⁴ Gutiérrez-1997, p. 254.

ninguna sociedad de capital español estaba en disposición de instalar un sistema automático ni contaba siquiera con las licencias para hacerlo.

Destitución de Puig i Cadafalch como presidente de la Mancomunidad

Ya hemos visto como el presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Josep Puig i Cadafalch, abandonó su puesto el día 24 de diciembre de 1923 y dejó el mando en manos del vicepresidente Santiago Estapé i Pagès. A pesar de cierto optimismo inicial, no tuvieron que pasar muchas semanas desde el golpe de Estado para que las relaciones entre el nuevo Directorio Militar y la Mancomunidad se vieran seriamente deterioradas. Primo de Rivera había dado un giro brusco e inesperado hacia la centralización del Estado y tanto las medidas legislativas adoptadas como los continuos desplantes hacia esta corporación regional habían exasperado a Puig i Cadafalch hasta el extremo. Impotente y desmoralizado, perdidas las esperanzas de que el nuevo régimen cambiara sus políticas antinacionalistas, el presidente desertó de su cargo. Llevaba como presidente de la Mancomunidad desde el 29 de noviembre de 1917 y había venido a sustituir al fallecido Prat de la Riba.

Los últimos días de 1923, así como las primeras jornadas de 1924, habían sido especialmente tensos debido a las detenciones de varios alcaldes y concejales de municipios catalanes llevadas a cabo por orden del Gobierno central. El motivo de dichas detenciones era la adhesión realizada por muchos de estos regidores a un manifiesto denominado “Cataluña nación” que había sido proclamado en octubre de 1922. El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, una asociación de empresarios catalanes, había enviado este manifiesto de corte independentista a todos los municipios de la región, invitando a sus representantes a adherirse al mismo y reclamando un “gobierno propio para la nación catalana”²⁰⁵. El acto oficial de pronunciamiento y firma del manifiesto tuvo lugar en Barcelona el día 22 de octubre de 1922. Más de un centenar de municipios apoyaron el ideario del Centro de Dependientes del Comercio y la Industria, acto que no provocó ninguna detención en su momento. Sin embargo, Primo de Rivera no estaba dispuesto a que ningún ayuntamiento de España estuviera ligado a un movimiento independentista y ordenó la detención de todos aquellos regidores que hubieran firmado el manifiesto.

²⁰⁵ La Vanguardia, 21 de septiembre de 1922, p. 7.

Estas detenciones comenzaron a finales de diciembre de 1923²⁰⁶ y se alargaron durante varias semanas. Durante una visita a Madrid del general Barrera, capitán general interino de Cataluña, Primo de Rivera declaraba que había dado instrucciones a las autoridades de la región para proseguir con la labor judicial, pero además consideraba que había “que hacer algo más hondo e intenso y atacar la falacia de ciertas propagandas y actuaciones que a título de catalanizadoras van desespañolizando solapadamente todos los sentimientos en aquella tierra”²⁰⁷.

Las noticias de un posible procesamiento del todavía presidente Puig i Cadafalch corrieron como la pólvora en las jornadas del 10 y 11 de enero de 1924²⁰⁸. El presidente de la Diputación de Barcelona, el señor Vallés y Pujals, desmentía al día siguiente este rumor en unas declaraciones públicas y añadía que no sabía nada sobre la cesantía de Puig i Cadafalch. Sin embargo, el diario ABC indicaba que sus informes particulares le permitían asegurar que el juez “había dado orden a la Policía para que detuviese al Sr. Puig i Cadafalch, en méritos de la causa que instruía por el manifestó del Centro [de Dependientes del Comercio y la Industria] de referencia. La orden no se cumplimentó por estar ausente el señor Puig, y, además, porque precisamente en aquellos mismos días se dieron instrucciones para poner en libertad a la casi totalidad de los detenidos por dicho motivo.”²⁰⁹

Fuera como fuese, estaba claro que el clima de tensión entre la Mancomunidad y el Gobierno no iba por el camino de calmarse y la ausencia del presidente no ayudaba a apaciguar los ánimos. En estas circunstancias, el Directorio Militar dio órdenes el día 16 de enero de cesar a Puig i Cadafalch como presidente, cargo que ejercía en funciones el vicepresidente Estapé i Pagès, igualmente destituido. El gobernador civil, general Lossada, ocupó el cargo de presidente de la Mancomunidad de Cataluña de manera interina a las 4 de la tarde del 17 de enero de 1923²¹⁰. En declaraciones a la prensa ese mismo día, el general Lossada indicaba que el 30 de enero tendría lugar la reunión para la constitución de la Cámara de diputados de la

²⁰⁶ La Vanguardia, 20 de diciembre de 1923, p. 6.

²⁰⁷ La Vanguardia, 29 de diciembre de 1923, p. 15.

²⁰⁸ ABC, 11 de enero de 1924, p. 10.

²⁰⁹ ABC, 13 de enero de 1924, p. 18.

²¹⁰ La Vanguardia, 17 de enero de 1924, p. 6.

Mancomunidad de Cataluña y para la designación del nuevo presidente de la misma²¹¹.

3.22. Lunes, 21 de enero de 1924

Los Lunes del Ritz y los contactos de la ITT

El Hotel Ritz de Madrid fue inaugurado por el rey Alfonso XIII el 4 de octubre de 1910, convirtiendo así en realidad el sueño de dotar a la capital española de un hotel ilustre y distinguido, al estilo de las grandes ciudades europeas. Situado en la Plaza de la Lealtad, número 4, desde el principio se convirtió en el alojamiento elegido por diplomáticos, jefes de Estado y de Gobierno, miembros de grandes familias y, en general, personalidades de importancia en sus visitas a Madrid. Notables hombres de negocios como Sosthenes Behn tampoco desaprovechaban la oportunidad de alojarse en él, haciendo gala así de su fortuna (real o pretendida) e impresionando con sus fiestas lujosas y refinadas.

Durante los primeros años de existencia del Hotel Ritz se organizaban, semanalmente, unas veladas conocidas como los “Lunes del Ritz”, donde se daban cita personalidades destacadas de la élite madrileña para socializar, hacer negocios en un ambiente distendido, bailar, jugar al bridge, etc. Algunas notas de sociedad de la época se referían a estas fiestas como “la comida de moda [a la que asistía] toda la aristocracia y muchos altos diplomáticos”²¹². Desgraciadamente, el hotel no conserva los registros de huéspedes de aquellos años, así como tampoco documentación sobre los Lunes del Ritz. Sin embargo, los periódicos de la época aportan mucha información sobre los asistentes a tan ilustres actos, ya que todas las semanas publicaban una nota en la que describían someramente la velada y a continuación pasaban a enumerar los personajes más distinguidos que desfilaban por sus salones.

No es de extrañar, por lo tanto, que Lewis J. Proctor, conocido su gusto por las reuniones sociales y por dejarse ver en los círculos más distinguidos, acudiera en no pocas ocasiones a las fiestas organizadas por el Ritz los lunes por la noche. Se ha documentado, gracias a las hemerotecas de los diarios ABC, La Acción, La Época y otros, que durante los últimos meses de 1923 y los primeros de 1924, Proctor asistió

²¹¹ La Vanguardia, 18 de enero de 1923, p. 6.

²¹² La Acción, 18 de diciembre de 1923, p. 5.

religiosamente a la mayoría de estas veladas, así como a la fiesta de Año Nuevo organizada por el hotel²¹³.

Los Lunes del Ritz congregaban también a muchas personalidades del entramado empresarial de la capital y no cabe duda de que Proctor también sabría emplear su tiempo en estas reuniones para establecer contactos al más alto nivel y hacer negocios con grandes figuras de la aristocracia y la burguesía financiera de Madrid. No en vano, la ITT se encontraba en aquellos momentos redefiniendo su plan de acción para hacerse con el sistema telefónico y buscaba capitales con el fin de crear una compañía nacional que diera a su proyecto una falsa apariencia de españolidad. Los Lunes del Ritz eran una oportunidad perfecta para ponerse en contacto con esos inversores nacionales y plantearles sus ideas de modernización y reforma de la telefonía en nuestro país. Se sabe, por ejemplo, que en alguna de aquellas veladas coincidió, entre otros, con Primo de Rivera y con el embajador estadounidense Alexander P. Moore²¹⁴ y que entabló conversaciones con miembros de la familia Urquijo²¹⁵.

Los Urquijo formaban parte, por derecho propio, del sector financiero más influyente del país. Habían conseguido construir un entramado empresarial gracias a la inversión de importantes capitales en multitud de compañías y eso les había permitido entrar en sus Consejos de Administración, extendiendo así su poder y su influencia por sectores comerciales de lo más diverso. Todo ello era controlado desde los despachos de su buque insignia: el poderoso Banco Urquijo.

Este emporio había nacido como una humilde sociedad de crédito creada por el I Marqués de Urquijo a finales del siglo XIX, que poco a poco fue creciendo gracias, sobre todo, a los esfuerzos y a la visión de negocio del III Marqués de Urquijo, Estanislao de Urquijo y Ussía (1872-1948). Los hijos varones del II Marqués, Estanislao, Juan Manuel y Luis, sabían que la participación política era fundamental para la buena marcha de las finanzas y los contactos empresariales, de tal forma que los tres fueron elegidos diputados en varias legislaturas. El mayor fue el más precoz, entrando en el Congreso con sólo 26 años de edad y representando a la provincia de

²¹³ La Época, 1 de enero de 1924, p. 1.

²¹⁴ La Acción, 18 de diciembre de 1923, p. 5; La Correspondencia de España, 18 de diciembre de 1923, p. 6; La Época, 18 de diciembre de 1923, p. 2.

²¹⁵ La Época, 22 de enero de 1924, p. 2; 29 de enero de 1924, p. 2; La Libertad, 23 de enero de 1924, p.5; 7 de febrero de 1924, p. 5.

Álava en seis ocasiones. Sin embargo, cuando su padre murió en 1914, heredó no sólo el título nobiliario, sino también el control de todos los negocios familiares, por lo que abandonó su escaño y fue sustituido por su hermano menor, Luis, que lo ocuparía hasta el fin de la Restauración en 1923. Juan Manuel sólo fue congresista en una ocasión²¹⁶.

Estanislao tenía un gran ojo para los negocios, sobre todo para los de nuevo cuño y pronto inició una estrategia basada en la inversión de importantes capitales en compañías de ferrocarriles, gas, electricidad, comercio marítimo, etc. El Banco Urquijo era el accionista principal de muchas de esas sociedades, lo que le concedía el control de las mismas. El fuerte crecimiento de estos negocios hacía crecer el valor y el poder de su entramado empresarial, hasta convertirlo en uno de los más importantes del país.

Como veremos a continuación, el Marqués de Urquijo también supo ver el enorme potencial que representaba el control del negocio telefónico a nivel nacional y se convirtió en uno de los primeros contactos financieros que la ITT estableció en España. Unos meses más tarde, el Banco Urquijo sería, junto al Banco Hispano Americano, el principal accionista nacional de la nueva Compañía Telefónica, que, con un capital social inicial de un millón de pesetas, necesitaba mostrar una fachada de accionariado español para el proyecto que la ITT intentaba desarrollar en nuestro país.

Todos estos encuentros entre la multinacional y los banqueros españoles no se mantuvieron precisamente en secreto, ya que hasta los periódicos de provincias relativamente incomunicadas con la capital se hacían eco de la llegada de la ITT y de sus movimientos. A este respecto, el diario La Voz de Menorca publicaba la siguiente información en una sección de noticias que llegaban a la isla por servicio telegráfico:

Una sociedad norteamericana, que tiene un capital de 25 millones de dólares, se ha puesto al habla con elementos bancarios españoles con objeto de dotar a España de amplísima red telefónica, estableciendo teléfonos automáticos en las grandes poblaciones, preparando servicio completo para el extranjero. Cree que pueden invertirse en España mil millones de pesetas, gastando cincuenta

²¹⁶ Índice histórico de Diputados, www.congreso.es.

*anualmente. Dicha sociedad ha instalado ya este servicio en Cuba y Puerto Rico.*²¹⁷

3.23. Miércoles, 30 de enero de 1924

La red telefónica de Valencia: su situación y la llegada de la Ericsson

La revista *Electra*, en su edición de 30 de enero de 1924, dedicó un extenso artículo a la historia y estado de la red telefónica urbana de la ciudad de Valencia²¹⁸. Ésta había sido establecida por el Cuerpo de Telégrafos durante los primeros años de la telefonía en España, pero su explotación y desarrollo pronto tuvieron que ser cedidos al capital privado, en vista de la imposibilidad del Estado de hacerse cargo de su mantenimiento. Esta concesión se hizo con arreglo al pliego de condiciones generales para la construcción y explotación de redes urbanas de la Real Orden de 13 de junio de 1886, por medio de la cual el Estado autorizaba al Cuerpo de Telégrafos, administrador de las redes, a ceder la explotación a las empresas que estuvieran interesadas y que cumplieran con las disposiciones establecidas. Para ello, el Gobierno firmaba un contrato con la compañía, según las bases dispuestas en la Real Orden, que por supuesto ambas partes tenían que cumplir.

El contrato del Estado con el concesionario se firmó en 1886 y la duración de la licencia era de 20 años, por lo que ésta tendría que haber caducado en 1906. Sin embargo, Antonio Mompó, empresario que gozaba del permiso de explotación de la red había solicitado varias prórrogas, que fueron concedidas por los distintos gobiernos de la Restauración como “compensación de daños y perjuicios sufridos”. En consecuencia, el fin de la licencia se había retrasado hasta el 1 de octubre de 1929, por lo que todavía restaban seis años de concesión.

Sin embargo, Mompó no llegó a ver como la licencia caducaba en sus manos, ya que a principios de 1924 vendió su concesión de explotación del centro urbano de Valencia a la filial española de la empresa sueca L.M. Ericsson. Este artículo de *Electra* ya se hacía eco de las noticias de compra de la red, que no venía sino a confirmar la opinión del autor de que “los negocios son los negocios” y que la mayor

²¹⁷ La Voz de Menorca, 8 de abril de 1924, p. 2.

²¹⁸ *Electra*, 30 de enero de 1923, nº 9, pp. 131-135.

parte de las veces prevalecen sobre el interés público, ya estén en manos de un empresario español o de una poderosa compañía extranjera.

En aquella época, la Ericsson era una de las empresas telefónicas más importantes del mundo. Había sido fundada en 1876 y dos años más tarde ya había producido sus primeros teléfonos propios. Comenzó su andadura en el negocio más como productora de material que como operadora, pero después de la I Guerra Mundial inició un cambio de política empresarial con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos, siempre dentro del sector telefónico, pero adquiriendo a la vez intereses de otros tipos. El primero de esos objetivos era, sin duda, ampliar el número de concesiones de instalación y explotación de redes, ya fuera en territorio sueco o extranjero, fomentando su papel de operador que tan buenos resultados económicos estaba dando a otras compañías similares. Además, intensificó su estrategia en la construcción de centrales telefónicas automáticas.

En su proceso de internacionalización, L.M. Ericsson también puso su punto de mira en el mercado español y el 5 de diciembre de 1922 fundó la “Compañía Española de Teléfonos Ericsson”. Desde hacía muchos años, los sucesivos gobiernos centrales andaban detrás de un proyecto que consiguiera sacar al país del atraso telefónico en el que se encontraba y aunque todos ellos mostraban una actitud titubeante, era cuestión de tiempo que alguno de ellos diera un paso al frente. La Ericsson conocía esta situación y por ello se decidió a entrar en el negocio de nuestro país e inició un proceso de adquisición de intereses telefónicos.

La situación de la telefonía en nuestro país era tan desafortunada que la estrategia empresarial de la firma sueca podía extenderse de manera completa en el mercado telefónico: como productor de material construyó una fábrica de equipamiento eléctrico en Getafe, como instalador de centrales telefónicas participó en el concurso convocado por el ayuntamiento de San Sebastián y la diputación de Guipúzcoa (ver crónica del día 17 de enero de 1924) y como operador de redes adquirió el sistema urbano de Valencia²¹⁹.

Esta penetración en el sector telefónico nacional le otorgaba, sin duda, una posición de ventaja frente a sus competidoras en un hipotético concurso de la Administración española para modernizar la red del país. El nuevo régimen dictatorial

²¹⁹ Yuste-2004, pp. 170-172.

también demostró desde el principio una clara intención de reformar el sistema, pero todavía no había decidido cuál sería la fórmula elegida para llevar a cabo esa transformación. A finales de 1923 ya no era ningún secreto que, en caso de que el Directorio Militar se decantara por convocar un concurso para la reforma de la red nacional, la Ericsson estaría interesada en participar. Teniendo en cuenta que ninguna empresa española contaba con la tecnología o el capital para entrar en ese concurso y que la firma extranjera con una mayor penetración en el mercado español era la sueca, cualquiera hubiera pensado que el sistema español estaba casi en manos de la L.M. Ericsson.

Volviendo al centro telefónico urbano de la ciudad levantina, no cabe duda de que su compra se trataba del primer paso en un proceso de adquisición de redes municipales, con el fin de extender su poder por la geografía española y demostrar su solvencia como operador. Valencia era la ciudad española más importante cuya red no se encontraba en manos de alguna administración pública o del grupo empresarial de la Peninsular y por eso es razonable pensar que la Ericsson comenzara su estrategia en este enclave.

El artículo de la revista *Electra* de 30 de enero describe el pésimo estado en el que se encontraba la red valenciana justo antes de que la Ericsson se hiciera con ella. La central, situada en la calle Embajador Vich, número 9, se trataba de un edificio muy antiguo, que había sufrido un incendio unos cuantos años antes y en el que las condiciones higiénicas no eran las más adecuadas. Lo peor era el mal servicio que ofrecía la central como consecuencia de contar con muchas más líneas instaladas de las que podía soportar, que según cálculos del autor eran ocho veces las recomendadas en una central de esas dimensiones y con esa tecnología. Eso implicaba que cualquier ampliación o remodelación fuera más costosa de lo normal y que por ello el número de abonados fuera menor que el que se podría esperar de una ciudad del tamaño y el desarrollo industrial de Valencia. Si durante tanto tiempo no se habían llevado a cabo reformas ni en la central, ni en las subcentrales, ni en las líneas, no se esperaba que en los últimos seis años de concesión se fuera a cambiar de estrategia, más cuando el fin de la licencia se encontraba tan cercano.

El contrato con el Estado se incumplía en varias de sus condiciones, por lo que podría declararse liquidada la concesión e incautarse toda la red, de una manera sencilla. Sin embargo, la empresa de Antonio Mompó “en cuanto se cree perjudicada en lo más mínimo, entabla reclamación y consigue compensaciones en forma de prórrogas, no consintiendo, en lo más mínimo, la merma de ninguno de sus derechos;

pero que no se hable para nada de sus deberes, pues como fácilmente puede comprobar todo el mundo, pues está a la vista de todos, esos deberes quedan sistemáticamente incumplidos años y años, dando lugar a la situación actual en que se encuentra la red". Aún va más allá el articulista, reclamando no sólo la incautación, sino que el concesionario entregara una red urbana adecuada y en las debidas condiciones.

Declaraciones de Primo de Rivera en materia telefónica

El mismo número de la revista *Electra*²²⁰ recogía la información de que el general Primo de Rivera había concedido una entrevista a un diario cubano, en la que había declarado que se estaba estudiando con mucho interés la mejora del servicio telefónico. Para ello, decía, el Director General de Telégrafos estaba redactando un proyecto que se decantaba por la implantación del sistema automático. Los telegrafistas consideraban que estas manifestaciones dejaban ver la importancia que el Directorio concedía a los asuntos de telefonía:

Por esto, por el nombramiento de una comisión de telegrafistas para que estudien esta materia y por la premura con que el Sr. Tafur está trabajando en asuntos de teléfonos, podemos deducir que no sería difícil la aparición inmediata en la Gaceta de unas disposiciones de ordenación en materia telefónica con arreglo a las necesidades de España.

Las labores de investigación realizadas no nos permiten conocer a qué se refería el autor cuando hablaba de una comisión de telegrafistas que estaban estudiando esta materia, ya que no tenemos constancia de que fuera nombrado ningún grupo de técnicos para evaluar la cuestión telefónica. De todas formas, no iban muy desencaminados los telegrafistas en sus suposiciones. Efectivamente, el Directorio se encontraba en esos momentos estudiando el sistema telefónico y valorando las distintas opciones.

Lo que no sabían, o por lo menos no del todo, era que la maquinaria de la ITT ya se encontraba a pleno funcionamiento en España. Las conversaciones entre la multinacional y distintos grupos de poder se encontraban bastante avanzadas, los

²²⁰ *Electra*, 30 de enero de 1923, nº 9, p. 141.

primeros acuerdos ya estaban encima de la mesa y la diplomacia empezaba a dar sus frutos. La aparición de unas disposiciones de ordenación en materia telefónica no sería “inmediata”, pero tampoco habría que esperar mucho: la resolución que habría de cambiar para siempre el panorama telefónico de España se publicaba en la Gaceta de Madrid el día 15 de mayo de 1924.

El nuevo presidente de la Mancomunidad de Cataluña

El artículo 4º del Real Decreto de 12 de enero de 1924 por el que se disolvían las diputaciones provinciales vigentes indicaba que:

Dentro de los diez días siguientes a la constitución de las nuevas Corporaciones provinciales, se reunirá en Barcelona la Asamblea plena de la Mancomunidad catalana, previa convocatoria y bajo la presidencia del Gobernador civil de aquella provincia. En dicha Asamblea será nombrado el Consejo permanente de la Mancomunidad.

El día 30 de enero se cumplía dicho plazo y fue la fecha elegida por el presidente interino de la Mancomunidad de Cataluña, el general Llossada, para reunir a la nueva asamblea y nombrar al presidente. Dicha reunión comenzó con la lectura del decreto por el que se disolvía la anterior Mancomunidad y continuó dando a conocer los nombres de los nuevos parlamentarios por Diputaciones, elegidos por los Gobernadores civiles de sus correspondientes provincias.

Por último, se eligió al nuevo presidente de la Mancomunidad, Alfonso Sala, en una votación que arrojó un resultado de 86 votos a favor y uno en blanco. Alfonso Sala i Argemí (1863-1945) había iniciado su carrera como diputado provincial, pero pronto dio el salto a la política nacional, siendo elegido diputado en el Congreso de los Diputados en un total de trece legislaturas de la Restauración²²¹. Durante todos estos años siempre había demostrado una clara ideología conservadora, "anticatalanista" y monárquica, llegando a fundar la Unión Monárquica Nacional, un partido que pretendía aglutinar al sector conservador de la región, enfrentándose a la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y a los movimientos nacionalistas e independentistas. Además, Sala había sido consejero de la Compañía Peninsular de Teléfonos.

²²¹ Índice histórico de Diputados, www.congreso.es.

Era claro por lo tanto que Primo de Rivera había colocado a un hombre de su confianza, cercano a su ideología, al frente de una corporación tan incómoda como la Mancomunidad de Cataluña. El resultado de la votación para la elección de Alfonso Sala como presidente es un indicativo del tipo de diputados provinciales que representaban a las provincias catalanas en la Mancomunidad: políticos de tendencia centrista o derechista, conservadores y contrarios a la descentralización del Estado. Por lo tanto, este organismo quedaba totalmente desvinculado del espíritu con el que nació y se conformaba así una mancomunidad, que si bien mantenía el nombre original, nada tenía que ver con lo que había sido unos meses antes. Algunos diputados destituidos declaraban que “dejaban un cuerpo sin alma”.

En aquel acto de constitución de la nueva Mancomunidad, “el general Llossada, en nombre del Directorio, y en el suyo propio, después de felicitar al nuevo presidente, hizo votos para que la Corporación siga el rumbo próspero que ha tenido hasta aquí, dándole nueva vida, y dijo que la constitución de la Mancomunidad es la mejor prueba de que el gobierno no quería suprimirla, como por parte de alguno se ha venido diciendo”. Cuando el nuevo presidente tomó la palabra, expuso que sería “la más grande de sus tristezas si no supiera o no pudiera corresponder a los legítimos anhelos de paz y de concordia que inspiran y alientan a todos los buenos catalanes” y seguía entre aplausos y ovaciones de los nuevos diputados:

Nuestra responsabilidad es grande, la mía es inmensa, pero confío en vuestro concurso, en vuestras luces, en vuestros consejos, en vuestros votos para que salgamos airoso de nuestro cometido, en bien de Cataluña y de España.

No sólo hemos de conservar, sino también de enaltecer todas las instituciones genuinamente catalanas y que en nada afectan a la soberanía del Estado ni a la unidad de la nación española.

Demostrémosles nosotros [a los que decían que dejaban un cuerpo sin alma] que queda aquí el alma catalana, reflexiva, tenaz, amorosa, que les espera con los brazos abiertos para continuar juntos la obra de la Mancomunidad, por la paz, la prosperidad, la grandeza y la gloria de Cataluña y de España.²²²

²²² La Vanguardia, 31 de enero de 1923, p. 6.

La Historia ha venido a demostrar que las palabras de Alfonso Sala estaban vacías, puesto que su misión fue dismantelar la Mancomunidad, desproveyéndola de poder e iniciativa propios, poco a poco hasta su supresión total en marzo de 1925. En agradecimiento a su labor, Sala fue premiado con un asiento en la Asamblea Nacional cuando ésta fue constituida en 1927.

3.24. Sábado, 2 de febrero de 1924

Reorganización de la Dirección General de Correos y Telégrafos

José Tafur y Funés, Director General de Correos y Telégrafos, estaba dispuesto a reorganizar las comunicaciones españolas. Para ello había iniciado una ronda de contactos con todas las “fuerzas vivas” del sector, varios de los cuales ya han aparecido en capítulos anteriores de este Trabajo Fin de Máster, y había tomado algunas medidas fulminantes como la convocatoria de la “Conferencia Nacional de Telegrafía sin Hilos”, con el fin de resolver las cuestiones que afectaban también a la radiotelecomunicación.

En esta serie de acciones de reorganización, Tafur también había suprimido, el día 30 de diciembre de 1923, el Boletín Oficial de Correos y el Boletín Oficial de Telégrafos, sustituyéndolos por un único “Diario Oficial de Comunicaciones”. Como veremos a continuación, esta medida fue el preludio de una más importante con intención de congregar todos los servicios de comunicación de España bajo una misma denominación y un mismo cuerpo oficial.

Los telegrafistas también reclamaban una reorganización. En un artículo aparecido en *Electra* a finales de enero de 1924 declaraban²²³:

Estamos cansados de repetirlo: mientras no se reorganice la Dirección general no podremos dar un paso hacia adelante en Telégrafos. Es el problema fundamental nuestro. Renovación, renovación y renovación. Reorganizada más adecuadamente la Dirección, ya es más fácil llegar a la de los servicios.

Parece como si el Gobierno hubiera leído este artículo, porque sólo tres días después, el 2 de febrero de 1924, Primo de Rivera firmaba el Real Decreto²²⁴ por el

²²³ *Electra*, 30 de enero de 1923, nº 7, p. 140.

cual la Dirección General de Correos y Telégrafos se denominaba a partir de entonces “Dirección General de Comunicaciones”. Además se creaba una Secretaría general de Comunicaciones, que se encargaría de los asuntos más burocráticos y de trámite de la Dirección²²⁵. Quedaban suprimidas las Subdirecciones generales de Correos y Telégrafos, de cuyas responsabilidades se encargarían los nuevos cargos de Inspector general de Correos, Jefe de explotación de Correos, Inspector general de Telégrafos y Jefe de explotación de Telégrafos.

El cargo de Secretario General de Comunicaciones recayó en Luis Castañón y Cruzada²²⁶, Teniente Coronel de Ingenieros y antiguo compañero y colaborador en el Centro Electrotécnico de José Tafur y Funés²²⁷.

En la “Exposición” que sirve de preámbulo a este Real Decreto se indicaba que:

Los servicios de Correos y Telégrafos han alcanzado tal desarrollo y son tantos los asuntos que, relacionados con ellos, han de resolverse diariamente, que el Director general de los mismos, con sólo el despacho ordinario de los que corresponden a su firma, tiene invertidas todas las horas hábiles del día, no siéndole posible dedicar al estudio de los problemas que de continuo se presentan el tiempo suficiente para resolverlos con la rapidez y el acierto que sólo pueden obtenerse cuando no se está bajo el agobio de una labor de trámite que no parece debe corresponder al que, como su nombre lo indica, tiene la misión de dirigir los servicios y llevar a ellos las medidas que sirvan a su mejor aplicación y rendimiento al país, reorganizándolos e implantando aquellas reformas que le sugiera la observancia de su marcha actual. [...]

Por todo lo anterior [...] se impone la creación de un organismo dentro de la Dirección general de Correos y Telégrafos que, encargado del despacho de los

²²⁴ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 2 de febrero de 1924. Gaceta de Madrid, 5 de febrero de 1924, nº 36, pp. 627-628.

²²⁵ La noticia de la creación de esta Secretaría ya la adelantaba El Electricista en su edición de 15 de enero de 1924, nº 809, pp. 6637-6638.

²²⁶ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 3 de febrero de 1924. Gaceta de Madrid, 5 de febrero de 1924, nº 36, p. 633.

²²⁷ Electra, 10 de febrero de 1924, nº 10, p. 202.

asunto de trámite de ambos servicios, para que el Director general pueda dedicar a los de trascendencia sin regateos todo el tiempo necesario.

De estos párrafos se entiende que la inspiración de este Real Decreto es simplemente la creación de una Secretaria que se encargue de despachar las cuestiones de trámite de la Dirección General, para que el Director pueda dedicarse a los asuntos más trascendentales. Sin embargo, Tafur también quiso aprovechar la coyuntura para cambiar el nombre de su cargo y darle una denominación mucho más amplia, que incluyera todos los servicios de comunicación del país. Se entiende por ello que las palabras que Tafur Funés repetía a los telegrafistas sobre sus intenciones de unificar todos los sistemas bajo un mismo organismo no eran en vano, puesto que la denominación de la propia Dirección General ya preveía esta unión bajo su mando. Esta exposición también mencionaba su intención de “reorganizar” los servicios y de aplicar las reformas necesarias para el mayor rendimiento al país de los mismos. Nada parecía intuir, por el momento, el giro que el asunto telefónico iba a dar en los siguientes meses. Más bien todo lo contrario.

3.25. Domingo, 3 de febrero de 1924

La central automática de Balaguer es inaugurada oficialmente

La primera central automática de uso público instalada en España fue la de Balaguer, en la provincia de Lérida, cuya construcción y puesta en servicio corrió a cargo de la Mancomunidad de Cataluña²²⁸. Aunque la central ya se encontraba en funcionamiento desde el día 15 de diciembre anterior, la inauguración oficial tuvo lugar el día 3 de febrero de 1924, aprovechando la visita del general subsecretario de Fomento con motivo de otra inauguración, la de la línea de ferrocarril de Lérida a Balaguer²²⁹.

La central era del tipo “Strowger”, un sistema desarrollado por la firma alemana Siemens-Halske, elegida por su mejor precio frente a la otra oferta que se presentó a concurso: un modelo “Rotary” de la *International Western Electric*, filial de la AT&T norteamericana. La capacidad de la central era de 200 abonados, aunque se podía ampliar fácilmente hasta los 1000.

²²⁸ Ver crónica del día 15 de diciembre de 1923 en el presente Trabajo Fin de Máster.

²²⁹ Yuste-2004, p. 330.

La empresa alemana Siemens-Halske había sido creada, el 12 de octubre de 1847, por dos jóvenes estudiantes berlineses llamados Werner von Siemens y Johann Georg Halske con el fin de producir aparatos telegráficos. Sólo un año después ganaron el concurso para la instalación de la primera línea de larga distancia en Europa, entre Berlín y Frankfurt am Main, y pronto se convirtieron en una de las compañías de producción e instalación de material eléctrico más importantes del mundo. Entre los éxitos más importantes de Siemens-Halske se cuenta la instalación de la línea telegráfica entre Reino Unido e India en 1870 y la construcción del primer tranvía subterráneo en Budapest en 1896. Su área de negocio no sólo se limitaba a la telegrafía primero y a la telefonía después, sino que abarcaba otras grandes invenciones basadas en la electricidad, como los tranvías, el “metro” o la iluminación.

La Siemens-Halske entró en el mercado español en 1862, comercializando aparatos de Morse, aunque no establecería una delegación permanente hasta 1895. La “Sociedad Anónima Española Siemens y Halske” se fundó finalmente en Madrid en 1902 y de esta forma comenzó a operar oficialmente como una compañía española, filial de la empresa madre alemana. En 1910 fundó una fábrica de material en Cornellá (Barcelona), que producía motores, generadores y transformadores y que se convertiría en una de las más importantes de España y de Europa. Además de suministrar material telegráfico y telefónico (que se importaba de otras factorías europeas) y eléctrico en general, la Siemens también participaba en concursos convocados por las administraciones españolas para la instalación de alumbrado público, tranvías eléctricos (como en Mallorca en 1913) o centrales telefónicas (como este caso de Balaguer), todo ello usando sistemas propios desarrollados en sus laboratorios²³⁰. Como veremos un poco más adelante, la firma alemana también presentaría un proyecto para la reorganización del sistema telefónico español cuando el Gobierno publicó la Real Orden de 11 de mayo de 1924, entrando así también en el grupo de empresas extranjeras que opusieron competencia al tándem ITT/CTNE. No obstante, el proyecto de Siemens y Halske fue rápidamente descartado por el Directorio, aduciendo que había llegado fuera de plazo.

Volviendo a la cuestión de la central automática de Balaguer, cabría destacar que a la inauguración asistieron el presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Alfonso Sala, el Capitán general de la región, el alcalde de la localidad, varios obispos,

²³⁰ Datos extraídos de la página web de Siemens: <http://www.siemens.com/history/en/>

así como otros cargos públicos de diversa importancia. Con motivo de este acto solemne, Sala envió tres telegramas para informar de la puesta en funcionamiento de la central: a Primo de Rivera, al Mayordomo Mayor de Palacio y al Director General Tafur Funés²³¹. Varios meses más tarde, en una visita oficial que el rey Alfonso XIII realizó por varias comarcas leridanas, la comitiva se detuvo para visitar el sistema automático de Balaguer, contando con las explicaciones del director de la obra, Manuel Marín²³². Los periódicos de la época destacarían unos días después que la central era “la primera de esta clase que se ha montado en España para el servicio público” y que “su instalación la ha realizado la Sociedad Anónima Española Siemens y Halske, de Madrid”²³³.

La dirección de la obra de instalación y puesta en marcha de la central recayó en Manuel Marín Bonell (1892-1973), Jefe de Explotación del Servicio de Teléfonos de la Mancomunidad de Cataluña. Natural de Morella (Castellón), de Manuel Marín se puede decir que estuvo en muchos de los episodios importantes de la historia de las telecomunicaciones en nuestro país. Fue también un importante autor de literatura técnica que publicó artículos en revistas especializadas (como aquel en *Ibérica* en el que detallaba el funcionamiento de la central de Balaguer), un magnífico manual de telefonía en 1939 y las entradas de los términos “telefonía” y “telegrafía” para la *Enciclopedia Universal Espasa*²³⁴. También pasaría a la historia como el creador de la idea de introducir publicidad en las guías telefónicas con el fin de cubrir los gastos de su publicación.

3.26. Miércoles, 20 de febrero de 1924

El servicio telefónico en Bilbao

La revista telegráfica *Electra*, siguiendo con su ya tradicional campaña de denuncia del estado de las redes telefónicas explotadas por la Peninsular, publicaba el día 20 de febrero de 1923 un breve artículo en el que se centraba en el caso de Bilbao. Este centro urbano, explotado desde 1897 por la compañía de Enrique

²³¹ La Vanguardia, 5 de febrero de 1924, p. 8.

²³² ABC, 6 de julio de 1924, p. 22; ABC, 7 de julio de 1924, p. 10.

²³³ ABC, 8 de julio de 1924, p. 19.

²³⁴ Yuste-2004, p. 330.

Parellada, había ido acumulando prórrogas en su concesión del mismo modo que Valencia y otras muchas ciudades españolas.

La revista apuntaba que la interconexión con Madrid era tan mala que las comunicaciones se tenían que realizar muchas veces a través de otras capitales provinciales en lugar de usarse la línea directa entre la capital y Bilbao. Además, apuntaban que el servicio urbano también acusaba análogas deficiencias de “cuyo deplorable funcionamiento se reciben en nuestra Redacción constantes quejas.”

Se preguntaban los telegrafistas si sus quejas volverían a caer en vacío, si lograrían “a fuerza de machacar, que nuestras lamentaciones, reflejo de las del público, lleguen a quien las atienda y dé la debida satisfacción.”

3.27. Miércoles, 27 de febrero de 1924

Las diputaciones de Córdoba y Albacete y sus redes provinciales

En la edición del diario ABC de 27 de febrero de 1923 aparecía un artículo sobre la audiencia extraordinaria que el general Primo de Rivera concedió a los representantes de las diputaciones de Sevilla, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz y Ciudad Real²³⁵. De manera conjunta entregaron al Jefe del Directorio Militar dos solicitudes que afectaban a estas provincias en términos generales: en una se pedía la construcción del ferrocarril Córdoba-Puertollano y la otra se refería a la canalización del río Guadalquivir.

Los representantes cordobeses quisieron aprovechar la ocasión para realizar otras peticiones al general Primo de Rivera más relacionadas con esta provincia, entre las que se encontraba la solicitud de “varios créditos para la red telefónica provincial”. Esta demanda, que en otras circunstancias no hubiera pasado de ser un hecho casi anecdótico, no deja de sorprendernos por el momento en el que se produce. De todas formas, no fue la de Córdoba la única diputación que trataba con el Gobierno este tema, ya que un par de semanas después, el 14 de marzo, Primo de Rivera se reunía con otra comisión de Albacete, que también quería conversar sobre la “construcción de la red telefónica provincial”²³⁶.

²³⁵ ABC, 27 de febrero de 1924, p. 9.

²³⁶ ABC, 14 de marzo de 1924, p. 11.

Es interesante comprobar cómo algunas diputaciones todavía se estaban planteando la posibilidad de establecer una red provincial propia, mientras todos los indicios parecían apuntar que el nuevo mapa telefónico nacional se estaba dibujando en otra dirección. En lo que respecta a las redes telefónicas provinciales que habían sido controladas en el pasado por sus respectivas diputaciones (Vizcaya, Guipúzcoa, Ciudad Real e Islas Baleares) se encontraban actualmente en manos del Cuerpo de Telégrafos, con la excepción de la red de Guipúzcoa que seguía bajo control de la corporación provincial, no sin pocas polémicas. La Mancomunidad de Cataluña había conservado asimismo el poder de su red regional, también después de intensos debates, aunque todo apuntaba a que el Gobierno no veía con buenos ojos esta transferencia de competencias.

Por otro lado, ya era de dominio público que la ITT y el Gobierno se encontraban discutiendo un posible plan de reforma general de la red que había desatado el fantasma del monopolio privado en el país. Aunque el Directorio hubiera tomado una decisión diferente a la que alcanzó sólo unos meses después, no parecía éste el momento más propicio para que una diputación se embarcara en el dudoso negocio de establecer una red provincial propia, dado el clima de dudas que se percibía en la cuestión telefónica nacional.

3.28. Sábado, 1 de marzo de 1924

El Gobierno pide se intensifiquen las inspecciones en la Peninsular

La Real Orden de 29 de septiembre de 1923 por la que se rechazaban dos solicitudes de la Compañía Peninsular de Teléfonos también se hacía eco de las quejas y críticas que en muchos sectores de la sociedad se estaban levantando en contra de las empresas del grupo Parellada. No sólo los telegrafistas reclamaban la incautación de todas sus líneas y redes, alegando el incumplimiento de los contratos firmados con el Gobierno; también las Cámaras de Comercio de muchas ciudades habían emitido informes en los que se mostraban muy críticos con respecto al sistema interurbano e incluso algunos diarios generalistas se habían apuntado a la campaña de denuncia, como veremos un poco más adelante. Parece claro que estas compañías no pasaban por su mejor momento, ni en cuanto a calidad del servicio ni en cuanto a la imagen que proyectaban de cara a la opinión pública.

En este sentido y ante las críticas generalizadas, el Gobierno decidió dar un paso más allá. El recientemente elegido Secretario General de Comunicaciones envió,

el día 1 de marzo de 1924, una circular solicitando a los jefes de los servicios telefónicos interurbanos que intensificaran la inspección de las líneas de la Compañía Peninsular de Teléfonos, cuya responsabilidad era, en último término, del Inspector general de Teléfonos Interurbanos de esta sociedad, Eduardo Estelat y Torres.

3.29. Sábado, 8 de marzo de 1924

El Estatuto Municipal de Primo de Rivera

Las instancias dictatoriales fueron [...] contrarias a los formalismos heredados de la Restauración y los muchos años de predominio de la rigidez en los postulados y los procedimientos. En sus inicios, la Dictadura proponía un cambio en la dirección y en la manera de entender la política y su ejercicio, así como una inmediatez en la toma de decisiones [...] La regla que imperaba en la gestión de los asuntos políticos podría resumirse en la máxima “lo importante es que las cosas se hagan”, sin importar el cómo se hicieran. El nuevo régimen se inspiró en una política de los hechos que pretendía superar los formalismos de la Restauración con actuaciones inmediatas y más eficaces.

Es en este contexto en el que Primo de Rivera encargó a Calvo Sotelo la elaboración de un texto sobre la Administración Local [...] El Régimen trató de depurar los criterios legales y políticos que habían marcado la pauta de Ayuntamientos y Diputaciones que eran fuente del poder del caciquismo durante la Restauración. [...]

Era preciso poner orden en la estructura administrativa local; en su funcionamiento y en la designación de sus miembros.²³⁷

El Estatuto Municipal que reorganizaba el funcionamiento de los ayuntamientos y pretendía sanear las haciendas locales fue aprobado, por Real Decreto-ley, el día 8 de marzo de 1924²³⁸. La importancia de esta norma para el presente Trabajo Fin de Máster estriba en una serie de artículos que venían a regular el sistema de concesiones telefónicas, otorgando un gran poder a las administraciones locales.

²³⁷ Gómez Pedreira-2009, pp. 77-78.

²³⁸ Real Decreto-ley del Presidente del Directorio Militar, de 8 de marzo de 1924. Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1924, nº 69, pp. 1218-1302.

En materia telefónica, el Estatuto Municipal, en su artículo 150, punto 8º, regulaba que la instalación y concesión de líneas telefónicas se convertían en competencias municipales. Es decir, que los ayuntamientos pasaban de ser meros concesionarios que firmaban un contrato con el Estado a ser ellos mismos los encargados de gestionar su red urbana, otorgando licencias a terceros si así lo consideraban oportuno. Además, al finalizar las concesiones, éstas podían revertir al propio ayuntamiento y no al Estado, como se venía haciendo hasta el momento.

Otros artículos del Estatuto Municipal venían a reforzar esta idea de los ayuntamientos como verdaderos administradores de las redes e incluso se permitía la constitución de mancomunidades de municipios para llevar a cabo la municipalización del servicio telefónico.

Como se puede apreciar, esta norma suponía un cambio profundo en la forma de realizar las concesiones telefónicas. Sin embargo, este régimen de licencias era ya tan complejo que, como apunta Pérez Yuste en sus tesis, visto a posteriori, realmente sirvió para introducir un elemento más de confusión en el sistema de explotación existente²³⁹.

Una de las voces más críticas con el nuevo sistema que regulaba el Estatuto Municipal era la del Cuerpo de Telégrafos, que seguían reclamando la unificación de todos los servicios de telecomunicaciones bajo el control único del Estado. Sin embargo, nada parece indicar que la nueva normativa modificara lo más mínimo los planes de Sosthenes Behn, si bien tenía motivos sobrados para inquietarse, ya que el Estatuto Municipal, de haberse puesto verdaderamente en práctica en lo que respecta a materia telefónica, hubiera supuesto el final del proyecto de la ITT de hacerse con el sistema telefónico español.

3.30. Jueves, 20 de marzo de 1924

El Cuerpo de Telégrafos contrario al Estatuto Municipal

Los telegrafistas, como no podía ser de otra forma, se mostraron contrarios a la promulgación del Estatuto Municipal. La nueva norma, aprobada el día 7 de marzo, implicaba que el control de las concesiones telefónicas municipales quedaba en

²³⁹ Yuste-2004, p. 119.

manos de los ayuntamientos, pudiendo estos explotarlos directamente o conceder una licencia a otra sociedad. De esta forma, el Estado perdía el poder que hasta ahora había ejercido en cuestión de concursos, concesiones y reversión de redes telefónicas caducadas. A ojos de los telegrafistas, el apartado 8º del artículo 150 del Estatuto se podía resumir en “los dueños de las redes urbanas son ahora los municipios”.

En este sentido, no fueron pocos los artículos que se escribieron en revistas especializadas criticando la medida del Directorio Militar y argumentando los problemas que habría de traer al sistema telefónico español. Por mencionar sólo algunos ejemplos, nos podemos referir a los textos aparecidos en *Electra* o en *El Electricista* poco después de la publicación del Estatuto Municipal en la Gaceta de Madrid. La Redacción de *Electra* expresaba, en su edición de 20 de marzo, la necesidad de la unificación para conseguir la interconexión absoluta de todas las redes²⁴⁰:

Pero, en lo que concierne a los [servicios] telefónicos, existen razones poderosas, de todos los órdenes, tanto técnicas como económicas y políticas, que inducen, si no obligan, a no considerarlos como municipales, ni aún en el caso de ser urbanos. Técnicamente, existe la razón poderosa y definitiva, verdaderamente aplastante, de la unificación. Esta es precisa e indispensable. [...] Localidades en que un vecino -valga la pequeña hipérbole- puede hablar a gritos desde la puerta de su casa con el vecino del otro extremo del pueblo, ¿para qué diantres precisan el teléfono urbano? Pero llevemos el interurbano hasta sus puertas; digamos a los habitantes de Calatayud y Hellín que podrán conferenciar con Madrid y entonces el lujo desaparece para convertirse en necesidad, en conveniencia práctica y positiva. Esto, sin unificación, es técnicamente imposible.

En su edición de 30 de marzo, *Electra* valoraba otros problemas que, según su opinión, se derivarían de la aplicación estricta del Estatuto Municipal, como por ejemplo los tiempos extremadamente largos que tardaría una avería en solucionarse, consecuencia directa de depender el servicio técnico de un municipio con escasos recursos económicos. Continuaban apuntando que el problema de base y fundamental, las concesiones a empresas privadas, no se iba a solucionar, ya que muy pocos consistorios recurrirían a la instalación de su propia red y siempre optarían

²⁴⁰ *Electra*, 20 de marzo de 1924, nº 14, pp. 275-277.

por el arrendamiento del servicio: “Lo esencial, lo imprescindible, lo urgente era variar los viejos procedimientos de explotación; es decir el arriendo de servicios públicos a empresas particulares.”²⁴¹

Igualmente se recordaba que la telefonía automática sólo se conocía en España a través de los “libros de ciencia”, ya que la instalación de una central automática era lo suficientemente costosa como para que una empresa privada no estuviera interesada en construirla durante los tiempos tan cortos que se otorgaban a las concesiones.

Ninguna de las razones que aquí aducimos es nueva. Y, sin embargo, se insiste en el procedimiento. Con la nueva ley lo único que se hace es cambiar el sujeto propietario, que deja de serlo el Estado para disfrutar de tal cualidad el Municipio; pero el procedimiento es el mismo de antaño. [...] Pues renuncie entonces definitivamente, de una vez para siempre, a la propiedad de los teléfonos; pero no legislando, como lo hace ahora, en forma ambigua que no renueva los procedimientos y no evita los enormes, los garrafales defectos del sistema antiguo. [...] El servicio -insistimos una vez más- seguirá siendo malo, malo y malo.

La revista El Electricista se mostraba igualmente crítico en su edición de 5 de abril de 1924, expresándose en términos similares a como lo habían hecho sus compañeros de Electra²⁴².

3.31. Viernes, 28 de marzo de 1924

Exención de subasta de una línea telefónica

Poco después de acceder al poder, Primo de Rivera redactó un Real Decreto por el se autorizaban unas compras de Guerra y Marina sin que mediara el concurso público que imponía la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública²⁴³. Si bien esta norma no tiene que ver con la cuestión telefónica, sirve como ejemplo de que el marqués de Estella no tuvo reparos, ni siquiera en sus primeros días al frente

²⁴¹ Electra, 30 de marzo de 1924, nº 15, pp. 297-299.

²⁴² El Electricista, 5 de abril de 1924, nº 817, pp. 6704-6705.

²⁴³ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 18 de septiembre de 1923. Gaceta de Madrid, 19 de septiembre de 1923, nº 262, p. 1146.

del Gobierno, a la hora de adjudicar obras o compras sin hacer uso de la subasta que establecía la ley vigente.

Pero el ejemplo que habría de confirmar que esta política también se podía aplicar a la telefonía llegó cuando Alfonso XIII firmó el día 28 de marzo de 1924 un Real Decreto por el que se autorizaba “la exención de las formalidades de subasta y concurso para la instalación de la comunicación telefónica entre el cuartel de Figueirido y la red urbana de la plaza de Pontevedra”²⁴⁴. Este Real Decreto no sólo era contrario a la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, sino que también se oponía a la Ley de Telecomunicaciones (Ley De la Cierva) de 1907 vigente en aquellos momentos y que establecía que toda concesión telefónica se adjudicaría mediante subasta pública. Era una medida claramente ilegal.

La promulgación de esta normativa contrasta con otras medidas tomadas por el Gobierno de Primo de Rivera por las que sí se convocaba un concurso para la adjudicación, como en el caso de la línea entre Salamanca y Matilla de los Caños de noviembre de 1923. Esto viene a demostrar, una vez más, la inconsistencia de las políticas seguidas por el Directorio en materia telefónica, no diferenciándose, por el momento, de los gobiernos de la Restauración, que igual legislaban en un sentido que en el contrario.

Sin embargo, lo que más llama la atención de esta medida es que fue tomada sólo mes y medio antes de la convocatoria del “concurso” de todo el sistema telefónico nacional que “ganó” la CTNE. Podía haberse hecho lo mismo que con esta línea de Pontevedra, pero no se hizo. En su lugar, se anunció algo que quería parecer un concurso, pero que no lo era, y se adjudicó la concesión a la empresa que supuestamente había cumplido con los requerimientos expresados en la Real Orden de convocatoria y que había sido designada como ganadora.

²⁴⁴ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 28 de marzo de 1924. Gaceta de Madrid, 29 de marzo de 1924, nº 89, p. 1639.

3.32. Sábado, 5 de abril de 1924

La International adquiere la Compañía Peninsular de Teléfonos y filiales

En una breve nota en la revista El Electricista el día 5 de abril de 1924 se podía leer la siguiente información²⁴⁵:

Ha pedido quedar supernumerario en el Cuerpo el Jefe de Sección D. Alejandro Soriano y Ángel de la Cruz.

Según manifestaciones del interesado, marcha, en unión del Sr. Pérez Sánchez, al servicio de la ya famosa -telegráficamente hablando- Compañía norteamericana, la cual, dice, ha comprado la Interurbana de Teléfonos, las redes urbanas de la Compañía general de Teléfonos, etc.

Al margen de la noticia de la nueva contratación por parte de la ITT, que, como seguía explicando el artículo, supuso otra enorme pérdida para el Cuerpo de Telégrafos a favor de la multinacional, es importante destacar que el señor Soriano aprovechó su dimisión para comunicar la noticia de que la “famosa compañía norteamericana” había comprado las redes de la Peninsular de Teléfonos. La revista ni confirma ni desmiente la información, pero ésta era totalmente cierta.

Durante los primeros meses de 1924, Behn había retomado con más fuerza sus planes de adquisición de intereses telefónicos nacionales, entre los que por supuesto se encontraba el grupo empresarial de Parellada. Esta acción buscaba un triple objetivo. Por un lado, adquirir la Peninsular suponía tomar control de la misma y de todas sus filiales, lo que evitaba el obstáculo de una posible oposición a los planes monopolistas de la ITT. Además, allanaba el terreno para cuando meses más tarde tuviera que interconectar y unificar todas las redes de España: el Cuerpo de Telégrafos y la Peninsular eran las entidades que controlaban la casi totalidad del sistema nacional. Por último, y quizá más importante de todo, el control de la compañía de Parellada le serviría para dar el golpe de efecto definitivo ante el todavía dubitativo grupo de banqueros españoles que habrían de ofrecer su apoyo al proyecto de la ITT.

²⁴⁵ El Electricista, 5 de abril de 1924, nº 817, p. 6708.

Como veremos un poco más adelante, el nombre de la ITT empezaba a escucharse con fuerza en los círculos internacionales gracias a sus ágiles movimientos en los mercados estadounidenses. Tal y como cuenta Altshuler en uno de sus artículos, la ITT no tenía “verdaderamente nada preciso que ofrecer”²⁴⁶: era una pequeña operadora que explotaba el servicio en Cuba y Puerto Rico, pero poco a poco los esfuerzos de Behn comenzaban a dar frutos. Sin embargo, en Europa y más concretamente en España, sus contactos todavía se resistían a entregarse a sus “encantos” y a embarcarse en un proyecto que todavía ofrecía una dudosa rentabilidad. El Coronel necesitaba una demostración de fuerza que le permitiera conseguir el apoyo de los banqueros del país, que a su vez le proporcionaría la apariencia de españolidad necesaria para que el Gobierno se decantara por su proyecto de telefonía “nacional”.

Toda la maquinaria negociadora de la ITT se volcó en la figura de Enrique Parellada, para lo que contó con la inestimable ayuda de José Bertrán y Musitu (1875-1957). Éste, abogado de profesión, fue un ilustre político catalán, dirigente de la Lliga Regionalista, que ocupó cargos de gran importancia durante la Restauración: fue diputado en Cortes en diez ocasiones y Ministro de Gracia y Justicia en 1922 en el Gobierno presidido por José Sánchez Guerra. También había sido dirigente del Somatén de Barcelona que alentó el “pistolerismo derechista” en los años previos al golpe de Estado de Primo de Rivera.

Bertrán y Musitu fue el encargado de “hacer el vacío” a Parellada, acercándose al resto de accionistas de la Peninsular a los que explicaba las bondades de la multinacional estadounidense. Las presiones tuvieron los resultados esperados y el dirigente del grupo español accedió a reunirse con Behn y otros dirigentes de la ITT en París. Allí se acordaron las condiciones para la compra de la totalidad de las acciones ordinarias de la Peninsular, que a su vez tenía en su poder todas las acciones ordinarias de la Sociedad General de Teléfonos y de la Compañía Madrileña de Teléfonos²⁴⁷.

La compra de este tipo de acciones, que en realidad sólo constituían el 4% de todo el capital social de la Peninsular, otorgaba el control de la sociedad española en tanto en cuanto eran éstas las que daban derecho a voto en las Juntas generales. La

²⁴⁶ Altshuler-1991, p. 16.

²⁴⁷ Yuste-2004, p. 131.

Compañía Peninsular de Teléfonos clasificaba sus acciones en dos tipos: ordinarias y preferentes. Todas conferían derechos sobre una parte igual (250 pesetas) del capital social de la empresa, pero la diferencia estribaba en ese poder que otorgaban las primeras frente a las segundas. Tal y como explicaba Pérez Yuste en su tesis de 2004:

*Esta doble clasificación de las acciones no era exclusiva de la Compañía Peninsular de Teléfonos. Muchas sociedades anónimas, con necesidad de recursos propios, que no deseaban aumentar más la base de accionistas ordinarios recurrían -tanto entonces como en la actualidad- a su normal empleo.*²⁴⁸

Como veremos un poco más adelante, ésta también fue la táctica que utilizó la ITT para mantener el control de la CTNE durante años. Cuando se hacía necesario aumentar el capital social de la empresa, se hacía a través de acciones preferentes, manteniendo casi inalterable el número de acciones ordinarias, que por supuesto se encontraban en su poder. De esta forma, la descompensación entre unas y otras alcanzó cotas inadmisibles, lo que provocó no pocos debates políticos durante los últimos años de la Dictadura y los primeros de la II República.

Con esta maniobra tan eficaz, Sosthenes Behn adquirió el control de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de sus filiales, aunque el pago que tuvo que hacer sólo fue de 10 millones de pesetas (4000 acciones ordinarias a 250 pesetas cada una) Además, también adquirió otras redes urbanas, que hasta el momento se encontraban en manos de concesionarios privados de menor importancia (Zaragoza, Málaga, Córdoba, Granada y Almería) e incluso de un ayuntamiento que había visto frustrados sus intentos de conseguir una prórroga en su licencia (Santander)²⁴⁹

La burguesía financiera española tuvo que ver todas estas acciones con buenos ojos, ya que poco después un reducido grupo de banqueros dio el apoyo necesario a la ITT para fundar una compañía de capital nacional bajo cuyas siglas podría presentarse el proyecto que la multinacional estaba desarrollando para España.

²⁴⁸ Yuste-2004, p. 132.

²⁴⁹ Yuste-2004, pp. 132-133.

3.33. Lunes, 7 de abril de 1924

La Embajada estadounidense y los acuerdos ITT-CTNE

Las investigaciones llevadas a cabo por la investigadora Adoración Álvaro en el *National Archives and Records Administration* (NARA) de Estados Unidos nos permiten conocer un poco más del papel fundamental que jugó la Embajada de este país en el proceso de concesión del sistema telefónico español a la ITT. A este respecto se sabe que Sosthenes Behn solicitó, desde muy pronto, la ayuda del embajador Alexander P. Moore para que desplegara el poder de la diplomacia a su favor e intercediera por la ITT ante el Gobierno español. De hecho, la primera reunión que mantuvieron Sosthenes Behn y el general Primo de Rivera el día 26 de octubre de 1923 contó ya con la presencia del plenipotenciario norteamericano.

Como parte de su labor como embajador, Alexander Moore tenía que informar al Departamento de Estado norteamericano sobre las actividades que desarrollaba la Embajada en España y sobre los acontecimientos más destacables ocurridos en el país que pudieran afectar a los intereses estadounidenses. En uno de estos cables enviados por el embajador, fechado el día 7 de abril de 1924 y conservado en dicho Archivo de la Administración de EEUU, se informaba de la existencia de un acuerdo entre la ITT y la nonata Compañía Telefónica Nacional de España²⁵⁰.

Esto significa que casi dos semanas antes de la firma del contrato privado entre la multinacional estadounidense y la compañía española, todavía teórica pues no había sido constituida oficialmente, el embajador estadounidense ya había sido notificado convenientemente de estos pactos. El Gobierno de Estados Unidos leería estos informes y, aunque se declaraba públicamente en contra de los monopolios, ya fuera en territorio nacional o extranjero, no tuvo que poner muchos inconvenientes a la labor de mediación del embajador a favor de la ITT, ya que éste continuó haciendo uso de su condición diplomática durante los meses siguientes, especialmente durante el verano de aquel año. No en vano, ya hemos visto como Estados Unidos respaldaba, desde hacía años, a aquellas empresas que quisieran entrar en mercados de telecomunicaciones extranjeros, visto el poder que tenían éstas en la seguridad nacional de los países.

²⁵⁰ Álvaro-2005, p. 21.

3.34. Martes, 8 de abril de 1924

Estaban Terradas abandona la Mancomunidad de Cataluña

Una de las tareas que llevó a cabo el equipo de la ITT durante las primeras semanas de 1924 fue la elaboración de un equipo de destacados profesionales españoles que pusieron a sus órdenes, con el fin de dar forma a su proyecto de telefonía nacional. Así, Pedro Pérez Sánchez pasó a la plantilla de la ITT en fechas tan tempranas como marzo de 1923 y el papel de intermediario con el Gobierno desplegado por el abogado Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra también ha sido analizado en capítulos anteriores. El elenco de juristas contratados por la multinacional contaba con otros nombres importantes como el de Melquiades Álvarez y González-Pasada, José Bertrán y Musitu y José Antonio Primo de Rivera. Sobre la figura del hijo del Dictador volveremos más adelante.

En cuanto al cuerpo técnico, después de la llegada de Pedro Pérez, la contratación más valiosa fue sin duda la del ingeniero catalán Esteban Terradas Illa (1883-1950). Se trataba éste de uno de los ingenieros y científicos más reputados en aquellos momentos y contaba con gran experiencia en el sector de la telefonía. Terradas era Doctor en Ciencias Exactas, Doctor en Ciencias Físicas, Ingeniero de Caminos e Ingeniero Industrial. Empezó trabajando para la Compañía Peninsular de Teléfonos, pero el día 2 de marzo de 1916 fue nombrado Director de la Red Telefónica de la Mancomunidad de Cataluña, tras superar un examen en el que tuvo que justificar sus conocimientos en materia telefónica²⁵¹.

El día 8 de abril de 1924 presentó la dimisión de su puesto en la Mancomunidad para entrar a trabajar en el equipo que Sosthenes Behn estaba organizando en Madrid. La pérdida para la corporación catalana era grande, tanto como la ganancia que había conseguido la ITT con su “fichaje”. Se desconocen los términos del contrato, pero la oferta tuvo que ser generosa puesto que unos años

²⁵¹ Yuste-2004, p. 127: “Según consta en el expediente del concurso, los méritos específicos que Terradas presentó fueron los siguientes: ser el autor de una memoria sobre catenarias y cálculo de tensiones en hilos, publicada en la Revista “Anales de Física y Química”; ser el autor de un libro de corrientes alternas, dedicado a las necesidades de las altas tensiones y la telefonía, editado en Barcelona en 1910; ser el autor de una fórmula y de métodos de medidas de potenciales con el electrómetro de cuadrantes, publicada en los “Archivos del Instituto de Ciencias”; ser el autor de un cálculo original de la derivación para hallar las intensidades en las redes eléctricas publicado en los “Anales de Física y Química”; y haber prestado servicio en la Compañía Peninsular de Teléfonos.”

antes, en noviembre de 1917, Terradas había elaborado un informe en el que criticaba al Estado por ceder concesiones telefónicas a capitales privados, cuyo único fin era el ánimo de lucro y la inversión en intereses rentables (urbanos). La red a la que aspiraba Terradas en 1917 tenía que cumplir tres condiciones: ser completa (llegar al último pueblo de la geografía española), acabada (servicio eficaz) y popular (con tarifas asequibles para las clases modestas)²⁵². Es curioso contrastar estas declaraciones del ingeniero con el paso dado en abril de 1924 en la dirección de la compañía que pretendía monopolizar el mercado telefónico español.

La noticia de la renuncia causó malestar en el seno de la comunidad catalana y sus representantes declararon sentirse extrañados de que esta dimisión se formulara en “los momentos en que la Mancomunidad está gestionando cerca del Gobierno la resolución del importante problema que tiene planteado sobre su red telefónica, y que la causa de la renuncia sea por pasar al servicio de una Compañía cuyos intereses se hallan en pugna con los de esta Corporación, precisamente respecto a [el] problema que tanto afecta a la Mancomunidad.”²⁵³

Sin embargo, las desavenencias entre Terradas y sus antiguos compañeros de la Mancomunidad no habrían de terminar con la dimisión de éste. Cuando la CTNE fue creada y consiguió la concesión del sistema telefónico nacional, el ingeniero sería el encargado de tramitar todas las cuestiones que tenían que ver con la red catalana, incluyendo las ofertas de compra, las tasaciones y su adquisición final. No cabe duda de que Terradas aportó valiosos conocimientos y datos de orden administrativo de su paso por la Mancomunidad, como ya hiciera Pedro Pérez con el Cuerpo de Telégrafos un año antes.

En la Compañía Telefónica Nacional de España ocupó el cargo de Consejero técnico y más tarde sería nombrado Director General de la compañía el 1 de mayo de 1929²⁵⁴, un cargo que en realidad estaba vacío de contenido, como demuestra el hecho de que estuviera vacante durante tres años, tras la renuncia de Javier Martí-Codolar en 1926.

²⁵² Gutiérrez-1997, pp. 354-355.

²⁵³ ABC, 11 de abril de 1924, p. 9.

²⁵⁴ Yuste-2004, p. 272.

Esteban Terradas también ocupó un asiento en la Asamblea Nacional constituida en 1927 y en ella tuvo que defender, en varias ocasiones, la labor de la CTNE y la supuesta legitimidad de su contrato con el Estado cuando las primeras voces críticas se empezaron a escuchar en los últimos momentos de la Dictadura²⁵⁵. Fue miembro también de la Real Academia Española, ocupó cátedras de física y matemáticas en varias universidades españolas y extranjeras y fue el ingeniero encargado de diseñar el Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (el “metro”) y de otras líneas de trenes en Cataluña.

3.35. Lunes, 14 de abril de 1924

Behn se deja ver en los Lunes del Ritz

Tras su paso por España a finales de 1923, Sosthenes Behn volvió a América para atender sus negocios en aquel continente. En ese sentido, la ITT se encontraba en un proceso de revalorización de la empresa, buscando nuevas formas de financiación. No les estaba yendo mal. Mientras su hermano Hernand seguía en el Caribe administrando sus compañías telefónicas en Cuba y Puerto Rico, Sosthenes Behn trabajaba incansablemente en Nueva York, consiguiendo apoyos en Wall Street y haciendo que el nombre de la corporación empezara a sonar con fuerza en los círculos de negocios estadounidenses. No en vano, el día 25 de abril de 1923, la ITT empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York²⁵⁶.

En España había dejado al vicepresidente de la multinacional, Lewis J. Proctor, al mando de sus operaciones, aunque, consciente de la necesidad de imprimir un ritmo mucho mayor al proyecto de telefonía, envió a un grupo formado por hombres de su más absoluta confianza. Entre ellos se encontraba Roy A. Walker, encargado de redactar la memoria técnica, que luego se entregaría al Gobierno de Primo de Rivera como propuesta para la reorganización del sistema telefónico nacional. Mientras la delegación americana “desembarcaba” en nuestro país, Sosthenes Behn fundaba en Nueva York la *International Telephone Securities Corporation*, una filial de la ITT creada como brazo financiero de la corporación²⁵⁷.

²⁵⁵ Yuste-2004, pp. 264-265.

²⁵⁶ Yuste-2004, p. 69.

²⁵⁷ Sobel-2000, p. 38.

En esta misma época se trasladaron las oficinas que la ITT tenía en Madrid. Hasta entonces, la empresa compartía oficina con la Compañía de Teléfonos Bell en la Plaza de la Independencia; pero teniendo en cuenta el ritmo de sus actividades y la cantidad de personal contratado a su servicio, se vieron obligados a mudarse. El lugar elegido fue el primer piso del número 6 de la Plaza de las Cortes²⁵⁸, junto al Congreso de los Diputados y justo enfrente del Hotel Ritz. El contrato de arrendamiento se encontraba a nombre de Lewis J. Proctor²⁵⁹.

Era precisamente en este hotel donde Sosthenes Behn se alojaba siempre que visitaba nuestro país y además gustaba de hacer gala de su riqueza. A este respecto, Sampson, en su libro “El estado soberano de la ITT”, decía que Behn se “instaló con gran ostentación en el Hotel Ritz, aparentando ser mucho más rico de lo que era”²⁶⁰.

Carballo apunta que el Coronel viajó de nuevo a España en el mes de marzo de 1924²⁶¹, cosa que nos parece razonable, teniendo en cuenta el estado frenético que empezaban a adquirir las negociaciones. De hecho, esas investigaciones mencionan nuevas reuniones con Tafur y Funés, aunque no ha sido posible encontrar evidencias documentales que las confirmen. Sin embargo, la primera prueba de su vuelta a nuestro país la encontramos en las ediciones de los diarios de 15 de abril. En ellos se indicaba que Behn había participado, un día antes, en la fiesta que el Ritz organizaba todos las semanas y que se conocía como “Los Lunes del Ritz”²⁶². No cabe duda de que Behn se encontraría en su ambiente y aprovecharía para agasajar al resto de asistentes y establecer nuevos contactos dentro de la alta sociedad y la burguesía financiera del país. Todos estos movimientos eran muy importantes ya que sólo cinco meses después se fundaría la Compañía Telefónica Nacional de España y la carrera definitiva para la concesión del sistema telefónico daría comienzo.

²⁵⁸ Yuste-2004, pp. 129-130.

²⁵⁹ Acta nº 2 del Comité Ejecutivo, 3 de septiembre de 1924, libro 1, p. 1.

²⁶⁰ Sampson-1973, p. 25.

²⁶¹ Carballo-1979, p. 584.

²⁶² La Acción, 15 de abril de 1924, p. 5; La Época, 15 de abril de 1924, p. 2.

3.36. Sábado, 19 de abril de 1924

Se crea la Compañía Telefónica Nacional de España

La compañía Telefónica es, hoy en día, la quinta empresa de telecomunicaciones del mundo, con unos ingresos anuales que superan los 60.000 millones de euros²⁶³, y opera en más de una veintena de países de todo el mundo. Sin embargo, la Compañía Telefónica Nacional de España nació el 19 de abril de 1924 con un capital social de un millón de pesetas y su subsistencia se condicionaba a la conquista del monopolio de la telefonía española; de no conseguirse, la empresa quedaría automáticamente disuelta y su nombre se perdería para siempre en la Historia. Sin embargo, esto no ocurrió; la Telefónica consiguió su objetivo unos meses más tarde y por eso hoy podemos decir, sin miedo a exagerar, que el día 19 de abril de 1924 es una de las jornadas más importantes de la historia de las telecomunicaciones en nuestro país.

Tal y como explica Antonio Pérez Yuste en su tesis doctoral de 2004²⁶⁴:

Al iniciarse abril de 1924, Walker había culminado con éxito la redacción de la memoria técnica para el proyecto de reorganización del sistema telefónico español y únicamente quedaba decidir la forma de presentárselo al Gobierno. Se consideró la posibilidad de utilizar a la Peninsular o a la ITT pero, tras examinar sus ventajas e inconvenientes, Behn acordó en su lugar la constitución de una nueva empresa, de capital enteramente nacional, modesta en su origen pero con una médula estatutaria adaptable a escenarios más ambiciosos, si es que todo culminaba con éxito al final. Esta empresa sería la que debía presentar públicamente, como suyo, el proyecto realizado por la ITT.

El impetuoso nacionalismo económico que comenzaba a demostrar Primo de Rivera a los pocos meses del golpe de Estado, hizo comprender a Behn que la mejor estrategia pasaba porque no apareciera ningún foráneo en el accionariado de la nueva compañía. Según el Coronel, éste debía estar formado, exclusivamente, por elementos nacionales influyentes, cuya sola

²⁶³ Telefónica-2010, p. 2.

²⁶⁴ Yuste-2004, pp. 133-138.

presencia contribuyera a remover los obstáculos que pudieran presentarse en las etapas iniciales.

Gumersindo Rico había iniciado, a finales de 1922, contactos con representantes de dos importantes grupos financieros de España, los bancos Urquijo e Hispano Americano. Sin embargo, en aquella ocasión, no se mostraron muy entusiasmados con los proyectos de aquel joven para modernizar el sistema telefónico nacional. Un año más tarde volvería a acercarse a estas entidades para solicitar de nuevo su colaboración en sus planes, pero esta vez venía acompañado de una multinacional estadounidense que contaba con cierta experiencia en el sector de la telefonía y unos directivos que podían ser muy persuasivos. De esta forma se retomaron las conversaciones, aunque a buen seguro que los banqueros españoles todavía no las tenían todas consigo. Cuando Proctor envió su carta a todas las “fuerzas vivas” del país en mayo de 1923 aseguraba contar “con la cooperación y el apoyo de importantes elementos bancarios españoles”. Sin embargo, cuesta creer que estas dos entidades hubieran ya asegurado su apoyo a la ITT en fechas tan tempranas como aquellas, teniendo en cuenta que la multinacional tenía todavía pocos éxitos que certificaran su fuerza.

Las negociaciones continuarían durante los primeros meses de 1924 y el golpe de efecto llegaría, sin duda, cuando la ITT se hizo con el control de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de todas sus filiales. Esto debió dar el espaldarazo definitivo al proyecto de la multinacional y los banqueros españoles comenzarían a creer en las posibilidades de los planes de Behn. Asimismo, la presencia del Coronel en Madrid desde el mes de marzo tuvo que ayudar bastante a convencer a los inversores, dadas sus excelentes dotes para hacer negocios y vender sus proyectos a las personas adecuadas.

Finalmente, Behn convenció a cuatro empresarios y financieros españoles para que participaran como accionistas, a título personal, en la fundación de la Compañía Telefónica Nacional de España, todos ellos españoles y cuyos nombres, por sí solos, daban consistencia económica a cualquier proyecto que dicha empresa pudiera presentar. Estos cuatro hombres fueron Julián Cifuentes Fernández y Amadeo Álvarez García del Banco Hispano Americano, Valentín Ruiz Senén del Banco Urquijo y José López Nieulánt, Marqués de Perijáa y Conde de Atarés con Grandeza de España y persona cercana al rey Alfonso XIII. A este cuarteto se unió también Gumersindo Rico, que no venía de ningún grupo financiero influyente ni tenía contactos con los altos cargos del Estado, pero había sido el padre de la idea y se reconocía así su labor.

El 19 de abril de 1924, víspera de Domingo de Ramos se constituyó oficialmente la Compañía Telefónica Nacional de España, mediante escritura pública otorgada por el notario madrileño Alejandro Roselló y Pastors. Los estatutos de la nueva empresa establecían que se trataba ésta de una sociedad mercantil anónima por acciones. Como ya hemos visto en el capítulo 2.3.5 de este Trabajo, Proctor había valorado el nombre de “Red Telefónica Nacional de España” para la sociedad que habría de lograr la concesión para la reforma y modernización del sistema telefónico español. Sin embargo, visto que las expectativas crecían, se sustituyó el término “red” por el más ambicioso de “compañía”.

La Compañía Telefónica Nacional de España se constituyó con un capital social de un millón de pesetas, divididas en dos mil acciones de 500 pesetas cada una. Esta cantidad puede parecer incluso ridícula si se compara con los fines sociales que declaraba la compañía en el artículo 4º de sus estatutos:

El objeto social es la instalación, refacción, mejora, adquisición, enajenación, explotación y administración de toda clase de redes, líneas y servicios de telefonía y de cualquier otro procedimiento de telecomunicación empleado en la actualidad o que pueda descubrirse en lo sucesivo; la prestación de otros servicios auxiliares de dichas telecomunicaciones; la adquisición, enajenación y gravamen de toda clase de bien muebles, inmuebles, derechos y concesiones; y la fabricación, arreglo, compraventa, negociación, importación y explotación de materiales adecuados, máquinas y utensilios sin excepción alguna, que puedan ser útiles para la realización de los expresados fines.

Como se puede apreciar, la compañía ambicionaba no sólo modernizar la red telefónica española, sino ocuparse de su explotación y hasta fabricar el material necesario. Tal y como apunta Pérez Yuste:

Esta circunstancia, que puede resultar contradictoria, adquiere toda su lógica cuando se piensa en la Telefónica Nacional como un instrumento al servicio de la Internacional. La ITT tenía previsto realizar y suscribir una ampliación de capital de la CTNE, una vez que ésta hubiera obtenido la concesión del sistema telefónico –como así sucedió. En tanto no se produjera esa coyuntura, la CTNE sería tan solo una sociedad mercantil sin valor de ninguna clase, en la cual no merecía la pena invertir más de lo estrictamente necesario.

En los estatutos también quedaba constituido el Consejo de Administración de la empresa, formado por los cinco fundadores antes mencionados, pero podía éste

aumentarse hasta un máximo de veintiuno. Dentro del Consejo de Administración se reservaban tres asientos para Delegados del Estado, que serían nombrados directamente por el Gobierno. Esta medida, reflejada en el artículo 26, da una idea de los planes de la nueva sociedad, que no ocultaba su intención de convertirse en la concesionaria de todo el sistema telefónico español, ya que no se entiende de otra forma sino la conexión de tres plazas al Gobierno en una sociedad mercantil anónima como ésta.

En el artículo 32 también se establecía que se podría crear un Comité Ejecutivo, formado por entre tres y siete miembros del Consejo de Administración. Este comité tendría las mismas facultades y atribuciones que el Consejo de Administración, pero permitía descargar de las tareas más cotidianas y de índole burocrática al máximo órgano de gobierno de la empresa. Como veremos en los capítulos siguientes, una de las primeras medidas que tomó el Consejo de Administración de la CTNE cuando ésta firmó el contrato con el Estado fue conformar un Comité Ejecutivo, al que pertenecía el “núcleo fuerte” de los consejeros, incluyendo por supuesto a Lewis Proctor y a Sosthenes Behn en representación de la ITT, que cuidaban que los intereses de la multinacional no se vieran amenazados. En la práctica, el Comité Ejecutivo no sirvió sólo para descargar al Consejo de las tareas más cotidianas, sino que se utilizaba como auténtico grupo de gobierno de la empresa, dejando al Consejo de Administración como un títere que se limitaba a aprobar todas las medidas tomadas por aquel.

En cuanto al accionariado de la empresa, los estatutos de la sociedad establecían, como en la Compañía Peninsular de Parellada, una doble clasificación de las participaciones: ordinarias y preferentes. Las ordinarias, mucho menos numerosas, tenían derecho a voto en las Juntas Generales y por lo tanto otorgaban una parte del gobierno de la empresa. Las preferentes, que en proporción eran muchas más, contaban con un dividendo asegurado del 7% anual, pero en contraposición no tenían derecho a voto ni otorgaban ningún tipo de derecho de gobierno de la empresa. No es difícil pensar, a estas alturas, que los planes de la ITT pasaban por hacerse con la mayoría de las acciones ordinarias, para disponer del mando de la empresa, dejando las acciones preferentes para los grupos financieros españoles.

Así, en estas condiciones, fue como la Compañía Telefónica Nacional de España se fundó el 19 de abril de 1924, dando comienzo a una de las historias empresariales más apasionantes de nuestro país.

Primera reunión del Consejo de Administración de la CTNE²⁶⁵

Una vez la Compañía Telefónica Nacional de España fue constituida oficialmente en la notaria de Alejandro Roselló, los cinco miembros del Consejo de Administración decidieron celebrar su primera sesión inmediatamente. De esta forma tuvo lugar la primera reunión de la nueva sociedad, a las 10 de la noche y con la intención “de adoptar aquellas medidas de carácter urgente que consideren indispensables para la buena marcha de la Sociedad”.

El primer acuerdo tomado fue ampliar el Consejo de Administración con la incorporación de cuatro nuevos hombres: Estanislao de Urquijo y Ussía, Marqués de Urquijo, Sosthenes Behn, su hermano mayor Hernand y Lewis J. Proctor, vicepresidente de la ITT y hombre de absoluta confianza del Coronel. De esta manera tan sencilla consiguió la multinacional que la creación de la CTNE tuviera únicamente nombres nacionales en sus estatutos sociales, lo que le otorgaba una apariencia de españolidad tan necesaria para la consecución de sus objetivos, pero a la vez contara desde el primer momento con la presencia de los tres hombres fuertes de la empresa estadounidense en el Consejo de Administración de la sociedad española.

La siguiente medida fue nombrar al Marqués de Urquijo como presidente del Consejo de Administración, a Julián Cifuentes como vicepresidente y a Gumersindo Rico como secretario.

Hecho esto, el coronel Behn toma las riendas de la reunión y presenta al resto de consejeros un Proyecto de contrato y una solicitud o instancia al Gobierno que acompaña a dicho Proyecto de contrato. Tal y como se indica en el texto de la reunión, una copia de ambos documentos quedarían unidos al acta, pero o nunca se llegaron a adjuntar o se perdieron en algún momento entre 1924 y el momento actual.

El Proyecto de contrato que Behn presentó al Consejo de Administración no ha podido ser encontrado en nuestra labor de investigación y su contenido exacto no se conoce. Sin embargo, gracias a las referencias que se hacen a él en otros registros históricos a los que sí se ha tenido acceso, se entiende que se trataba de un documento con una serie de bases que serviría como borrador del contrato que, llegado el momento, se firmaría entre el Gobierno y la CTNE. Es decir, que el

²⁶⁵ Acta nº 1 del Consejo de Administración, 19 de abril de 1924, libro 1, p. 1.

“Proyecto de contrato para contratar con el Estado un completo servicio de comunicaciones telefónicas” que Behn y sus colaboradores habían redactado y que se presentaba en ese momento al Consejo iba a servir como base para el acuerdo oficial y concluyente entre las dos partes. Ciertamente, como veremos en capítulos posteriores, este Proyecto, que sin duda se habría expresado en términos favorables a la compañía, fue el utilizado por el Gobierno de Primo de Rivera unos meses más tarde para redactar el pliego de Bases del Contrato definitivo, que quedó modificado en muy pocos aspectos con respecto al original.

La solicitud o instancia al Gobierno que acompañaba al Proyecto de contrato, al que en otras ocasiones se refieren como “proyecto” para mayor confusión²⁶⁶, sí ha podido ser localizado gracias a la labor de investigadores como Antonio Pérez Yuste o Ángel Calvo. Una copia del mismo se encuentra en el Archivo Histórico de la Fundación Telefónica y su contenido se describirá en el apartado siguiente.

En la reunión del Consejo de Administración se aprobaron los dos documentos con las firmas de Julián Cifuentes, Sosthenes Behn y Gumersindo Rico y se autorizaba al vicepresidente para que presentara al Gobierno “lo antes posible” estos escritos. El Directorio Militar recibió el Proyecto de contrato y el informe dos días después de manos de Cifuentes.

Como última medida de esta primera reunión se procedió a presentar y aprobar un “Memorándum con las estipulaciones entre la Compañía Telefónica Nacional de España y la International Telephone and Telegraph Corporation para el caso de que el Gobierno de España otorgue a la primera la concesión para reorganización de los servicios telefónicos de España conforme a los términos y condiciones detallados en la solicitud y proyecto de contrato”. Este memorándum no es otra cosa que el convenio privado entre las dos empresas por el cual la CTNE quedaba bajo el control de la ITT sin que el nombre de la multinacional apareciera públicamente en ningún sitio. La CTNE era la cara, con capital nacional, del proyecto que en realidad era diseñado, redactado y dirigido por los representantes de la International.

Este acuerdo entre las dos compañías fue aprobado por unanimidad con la excepción de los votos de los representantes de la ITT, que se abstuvieron por

²⁶⁶ En el presente Trabajo Fin de Máster nos referiremos a estos documentos como “Proyecto de contrato”, el primero, e “informe” o “proyecto” a secas, el segundo.

“razones de delicadeza”. El convenio quedó firmado por Julián Cifuentes en nombre de la compañía española, por Sosthenes Behn como representante de la International y por Gumersindo Rico como secretario de aquella reunión. Una copia de dicho contrato privado se adjuntó al acta número 1 del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España.

El convenio privado entre la CTNE y la ITT²⁶⁷

Este mismo día la ITT y la CTNE firmaron un convenio privado que quedaba sujeto a que el Gobierno otorgara la concesión para la reorganización telefónica a la empresa española en un plazo de treinta días. En caso de no lograrse, la ITT podía rescindir el acuerdo de manera unilateral en cualquier momento, una vez pasado ese mes. Como veremos a continuación, este plazo era demasiado corto y la concesión todavía tardaría cuatro meses en llegar, pero la idea de cancelar el convenio con la CTNE no entraba para nada dentro de sus planes. De hecho, suponemos que el límite de un mes impuesto al contrato se trataba más bien de otra estrategia de la ITT para cubrirse las espaldas en caso de que las cosas no salieran como deseaban. Efectivamente, el acuerdo caducaba en treinta días, pero siempre y cuando la multinacional quisiera; si las aguas no se salían de su cauce, no había motivo alguno que justificara la rescisión del convenio. De hecho, como ya se ha indicado, Behn no tenía en mente cancelar el contrato; más bien al contrario, puesto que el acuerdo definitivo entre la ITT y la CTNE firmado el 29 de agosto de 1924, una vez la concesión había sido otorgada por el Gobierno, difiere muy poco de este primero del mes de abril.

El convenio privado establecía que, una vez el objetivo primero de la sociedad hubiera sido logrado, el capital de la CTNE sería elevado a la suma de 10 millones de pesetas en acciones ordinarias y de cincuenta millones de pesetas en acciones preferentes. De esta forma, con un capital social de 60 millones, sí se entiende una empresa cuyos fines eran tan ambiciosos como los expresados en el artículo 4º de sus estatutos²⁶⁸, mientras que el millón inicial y depositado en su fundación unas horas

²⁶⁷ Acta nº 1 del Consejo de Administración, 19 de abril de 1924, libro 1, p. 2-4.

²⁶⁸ Yuste-2004, p. 135: “Baste recordar que la Compañía Peninsular de Teléfonos tenía en esas mismas fechas un capital social de veinticinco millones de pesetas.”

antes se podía entender más bien como una “cantidad simbólica”. En esta ampliación de capital a realizar en el futuro se comprueba ya la política que la ITT habría de imprimir a la emisión de acciones, donde las ordinarias, las que otorgaban el verdadero poder de la empresa, eran siempre muy pocas con respecto a las preferentes. Según este convenio, en el momento en el que la CTNE consiguiera la concesión del servicio telefónico nacional, la proporción entre unas y otras sería ya de 1:5. Como veremos más adelante, cuando el día 29 de agosto se firmó el contrato entre la compañía y el Estado, el capital social aumentó aún más de lo previsto inicialmente, hasta los 115 millones, y la proporción entre un tipo de acciones y otras sería de 3:20.

La parte de acciones ordinarias, las que verdaderamente importaban, serían suscritas por bancos y grupos industriales españoles y por la ITT. El número de accionistas españoles, entre los que por supuesto se contaba con el Banco Urquijo y con el Banco Hispano Americano, no podían superar el número de siete, y cada uno de ellos podía suscribir acciones por valor máximo de 300.000 pesetas. La parte que no compraran los bancos o grupos industriales españoles, sería tomada en firme por la multinacional norteamericana. En la práctica esto significa que el capital español con acciones de gobierno no podía superar los 2,1 millones de pesetas, frente a los 10 millones totales. La ITT se aseguraba, de esta forma, el control de casi el 80% de las acciones ordinarias de la CTNE y por lo tanto se convertían en los auténticos propietarios de la empresa y en los responsables de tomar todas las decisiones de negocio.

En cuanto a las acciones preferentes y aunque éstas no otorgaban voto en las Juntas Generales, la ITT también se hizo con el poder de las mismas. Para ello, se comprometía a aportar todas las acciones ordinarias de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de sus filiales, de las que era dueño por compra, a cambio de los 50 millones de pesetas en acciones preferentes de la Compañía Telefónica Nacional de España, totalmente liberadas. Esto es, cedía sus derechos sobre las empresas del grupo de Parellada, se lo entregaba a la CTNE, que pasaba a ser la dueña de estas empresas, y a cambio recibía todas las acciones preferentes de la empresa española.

Pero aún había más. La CTNE debía aportar a la ITT una comisión del 10% sobre las acciones preferentes (es decir: 5 millones de pesetas) en pago de las “aportaciones” de la International. A cambio, la ITT entregaría de manera gratuita a cada banco español suscriptor una cantidad nominal de pesetas igual a la de sus acciones ordinarias. De esta forma, se podría decir que los inversores españoles

realmente no aportaban capital a la empresa, ya que la primera cantidad entregada para la compra de acciones ordinarias les era devuelta íntegramente en metálico.

El convenio privado continuaba haciendo referencia a la cláusula tercera del Proyecto de contrato que se iba a entregar al Estado. Según este convenio privado, en esta cláusula se especificaba que la CTNE habría de “satisfacer al Gobierno de España la suma de Diez millones de pesetas en efectivo”. Esta cantidad, que no se especifica en concepto de qué habría de ser entregada al Gobierno, estaría aportada por la ITT, aunque evidentemente la entidad que haría la entrega al Estado sería la empresa española. A cambio de los 10 millones (“o la que en definitiva se establezca de acuerdo con el Gobierno”), la ITT recibirá nuevas acciones preferentes de la CTNE completamente liberadas por la misma cantidad que la aportada para satisfacer al Gobierno. Por ello, la CTNE tendría que aumentar de nuevo su capital social, para poder hacer frente a este nuevo pago.

Más adelante, el contrato hace referencia a los estudios, investigaciones y gestiones que la ITT ha realizado en España para la CTNE, así como al traspaso de las compañías Peninsular, Madrileña y Sociedad General de Teléfonos a manos de la nueva empresa española. Como compensación por estas acciones, el texto establece que la Telefónica estará obligada a contratar con la International la prestación de los servicios de asesoría técnica y de adquisición de material, por el tiempo mínimo de la concesión y con arreglo a las tres bases que a continuación se indicaban. Es importante, en este punto, subrayar el término “tiempo mínimo de la concesión”, ya que efectivamente la CTNE contrató los servicios de la ITT durante el tiempo que ésta última tuvo el control de la primera, pero en cuanto a la adquisición de material eléctrico se refiere, la Telefónica continuó siendo dependiente durante muchos más años del brazo productor de la ITT en España: la Standard Eléctrica.

En lo que respecta a las bases, la primera establecía que era responsabilidad de la International aconsejar técnica y financieramente a la CTNE, inspeccionar su organización y desarrollo, completar los estudios iniciales de oficinas, revisar los presupuestos anuales, preparar los planos de las plantas para los edificios telefónicos, comunicar los resultados de sus investigaciones sobre ciencia telefónica, preparar los estudios para el desarrollo de las redes, representar a la CTNE en los mercados extranjeros y mantener en Madrid a su propio costo al personal necesario con el fin de prestar los servicios enumerados. En lo que respecta a esta última responsabilidad, la ITT se reservaba varios puestos de importancia en la empresa española: un

vicepresidente, que luego sería Lewis J. Proctor, un Ingeniero Jefe, Roy A. Walker, un Contable, Logan Rock, y otros técnicos necesarios.

La base 2ª del convenio declaraba que, como remuneración por todo lo anteriormente expresado, la ITT percibiría un 4,5% de los ingresos brutos de la CTNE. Expresado en otras palabras: cualquier ingreso que realizara la Telefónica en sus cuentas no sería cargado en su totalidad, sino que un 4,5% de la cantidad tendría que pagarse directamente a la International. Ni siquiera se trataba de un porcentaje sobre los beneficios netos, algo que ya de por sí sería ventajoso para la multinacional, sino sobre los ingresos brutos. En contrapartida, la ITT sólo cobraría esta remuneración si los beneficios totales permitían pagar los intereses de las acciones preferentes; en caso de que esto no fuera posible, el pago de esta comisión quedaría aplazado hasta que fuera posible cobrarlo.

La base 3ª del contrato re incidía en la obligación adquirida por la ITT de mantener “a su propia costa un personal adecuado en las oficinas que le serán proporcionadas por la Compañía Telefónica Nacional de España para” comprar los materiales, dirigir las inspecciones, examinar los edificios que habían de ser construidos o reconstruidos y conseguir los precios más bajos para materiales y enseres.

Por si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, la International percibiría una comisión del 5% sobre el importe de todos los materiales y enseres comprados, así como sobre el coste de los edificios construidos, adquiridos o reconstruidos. Expresando nuevamente este concepto con otras palabras: cualquier pago de material destinado a redes o edificios costaría a la empresa española un 5% más que el valor que pagaba a su proveedor, ya que tenía por un lado que costear el material adquirido y por otro entregar un 5% del valor pagado a la ITT. Este importe sería abonado regularmente a la cuenta de la multinacional, aunque no podría disponer de esa cantidad mientras la CTNE no se encontrara al corriente en el pago de los intereses de sus obligaciones y de los dividendos de las acciones preferentes (como ocurría con la otra comisión del 4,5% de los ingresos brutos de la Telefónica)

Este contrato privado quedaba sujeto, como ya se ha dicho, a que el Gobierno español otorgara a la CTNE la concesión expresada dentro de un plazo de treinta días, vencido el cual la ITT podía decidir si mantener el convenio o rescindirlo cuando lo considerara oportuno. El texto fue firmado por Sosthenes Behn, en representación de

la ITT, Julián Cifuentes, en representación de la CTNE, y Gumersindo Rico, como secretario de la reunión.

Como vemos, la Compañía Telefónica Nacional de España nació como una humilde sociedad mercantil, formada por cinco accionistas españoles y con un capital ridículo para los fines que en teoría perseguía. Sin embargo, esto se entiende cuando se lee el convenio privado firmado entre la ITT y la CTNE el mismo día en el que ésta fue constituida, ya que es así donde se vislumbran los verdaderos planes de la multinacional de Sosthenes Behn para cuando la compañía española consiguiera finalmente la concesión del sistema telefónico nacional.

En este contrato hemos visto como la ITT se hacía con el control real de la sociedad española, como suscriptora de casi todas las acciones de gobierno, e incluso de todas las acciones preferentes. Además, obligaba a la CTNE a contratar sus servicios de asesoría técnica, financiera y de adquisición de material a cambio de unas suculentas comisiones del 4,5% de los ingresos brutos de la compañía y del 5% de todos los gastos de material para redes y edificios. A cambio, la CTNE pasaba a controlar la Compañía Peninsular de Teléfonos y sus subsidiarias, hacía suyo el proyecto de telefonía desarrollado durante aquellos meses por la ITT y obtenía el apoyo técnico y administrativo de la multinacional estadounidense.

3.37. Lunes, 21 de abril de 1924

La CTNE presenta su proyecto al Gobierno de Primo de Rivera

En la primera reunión celebrada por el Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España en el día de su constitución se aprobaron los documentos que el coronel Behn había presentado: el Proyecto de contrato y el informe que habían de entregarse al Gobierno lo antes posible. Gracias a una mención realizada al respecto en el acta de la segunda reunión del Consejo de Administración sabemos que Primo de Rivera en persona recibió estos documentos dos días después, el 21 de abril de 1924, de manos de Julián Cifuentes²⁶⁹.

El primero, el Proyecto de contrato, no ha podido ser encontrado y por lo tanto se desconoce su contenido exacto. Sin embargo, gracias a otros documentos que sí

²⁶⁹ Acta nº 2 del Consejo de Administración, 21 de agosto de 1924, libro 1, p. 5.

han llegado hasta nuestros días, disponemos de alguna información sobre los asuntos de los que trataba. Así, por ejemplo, se sabe que este texto incluía una cláusula tercera en la que se establecía que la CTNE habría de satisfacer al Gobierno de España la suma de 10 millones de pesetas en efectivo, información que quedó registrada en el convenio privado firmado por las dos empresas el 19 de abril²⁷⁰ y en las ponencias del Gobierno de Primo de Rivera del mes de agosto²⁷¹. Además, se conoce que dicho Proyecto de contrato sirvió para redactar el pliego de Bases del convenio definitivo entre el Gobierno y la CTNE en agosto de 1924 y que éste fue poco modificado con respecto al original que se había presentado en abril.

En cuanto al proyecto o informe que acompaña al Proyecto de contrato, del que sí se ha conservado una copia en los archivos de la Fundación Telefónica, hay que destacar, en primer lugar, que tenía éste fecha de marzo de 1924 a pesar de haber sido presentado a finales de abril. En contraposición con la carta de Proctor de mayo de 1923, éste documento se presentaba con el membrete de la recientemente creada Compañía Telefónica Nacional de España y en él se omitía intencionadamente el nombre de la ITT. De todas formas, no cabe ninguna duda de que este proyecto era el que la multinacional llevaba un año desarrollando en España y es difícil pensar que el Gobierno de Primo de Rivera desconociera esta información. Nadie pudo ser tan ingenuo como para pensar que la ITT desistió, de repente, de sus pretensiones en el mercado telefónico español mientras una sociedad española aparecía de la nada con un proyecto tan parecido al de la compañía de Behn. Era de sobra conocido que una empresa que aspirara a modernizar completamente la red telefónica nacional tenía que ser, necesariamente, de otro país o, como mucho, española pero con gran apoyo de una sociedad extranjera. Lo que no se sabe, empero, es si Primo de Rivera conocía hasta qué punto la compañía española no era más que un títere en las manos de la ITT y los términos en los que se había firmado el convenio privado entre las dos sociedades.

Agustín Muro Abad, en uno de los artículos que publicó en la revista Telégrafos en 1932 iba aún más allá, afirmando que en realidad la creación de la CTNE había sido orquestada por la ITT en connivencia con Primo de Rivera. Es decir, que el propio

²⁷⁰ Acta nº 1 del Consejo de Administración, 19 de abril de 1924, libro 1, pp. 2-4.

²⁷¹ Ponencias del Gobierno de Primo de Rivera sobre el proyecto de contrato de servicios telefónicos con la CTNE, agosto de 1924. Archivo Histórico Nacional, caja nº 223-1, expediente 6.

Gobierno había participado y recomendado la fundación de una sociedad española para evitar sospechas, extremo éste que no ha podido ser comprobado:

*El Gobierno de la Dictadura tuvo desde el primer momento plena conciencia de que iba a tratar con la International Telephone and Telegraph Corporation, de New York, y conviene con ella, para evitar el escándalo público que de ser conocido el hecho se suscitase, la precipitada formación de una compañía española que en realidad sería una mandataria de aquella, teniendo muy buen cuidado de que en el acta de formación de la misma no figurase ningún apellido americano de los sobradamente conocidos como dirigentes de aquella entidad extranjera.*²⁷²

Volviendo al proyecto que nos ocupa, en la introducción de este informe presentado al Gobierno se resaltaban tres cuestiones por las que la CTNE entendía que su propuesta era la más adecuada “para obtener un completo y moderno servicio telefónico”:

- La necesidad sentida de mejorar el estado de la telefonía en España: para ilustrar este aspecto, el proyecto ofrecía a continuación gran cantidad de datos que, a sus ojos, demostraban la exigencia de reformar y modernizar el servicio inmediatamente.
- La disponibilidad de cuantiosas sumas de dinero: para ello se contaba con “la cooperación y ayuda de los elementos financieros de España”, que estaban en condiciones de proveer todas las inversiones de capital necesarias en la primera instalación, pero también en el futuro. De ahí que el Estado no tendría que realizar ningún desembolso monetario.
- La intensificación de los trabajos para que estos durarán el menor tiempo posible.

En el texto expositivo del proyecto se reincidía en todos los aspectos negativos ya conocidos de la telefonía española: escasa penetración con respecto a nuestros vecinos europeos, políticas ineficaces, mal estado de las líneas como consecuencia de las reversiones gratuitas para el Estado, etc. Según la CTNE, había una “necesidad unánime sentida por la sociedad española” de modernizar el sistema telefónico,

²⁷² Revista Telégrafos, 15 de enero de 1932, nº 13, p. 6.

opinión que, como ya sabemos, no era compartida por otras voces como las que venían del Cuerpo de Telégrafos.

A continuación se resumían las obras que sería preciso realizar de una manera urgente. En lo que respecta a las redes urbanas, se imponía la automatización inmediata de 19 ciudades importantes²⁷³ y en cuanto a las líneas interurbanas, se consideraba la instalación de nuevos circuitos y la reforma de los ya existentes gracias a los nuevos adelantos de la tecnología. Por último, también se hacía referencia a la construcción de una línea internacional con Portugal (Madrid-Lisboa) y la conexión telefónica de la península con las posesiones africanas en Marruecos a través de dos cables submarinos.

En este punto es interesante llamar la atención sobre unas palabras del informe cuando trata la cuestión portuguesa: “lo cual implica la presunción general de que tengamos que hacernos cargo de la concesión portuguesa en su totalidad en cuanto nos parezca comercialmente propio hacerlo”. No puede menos que sorprender la naturalidad con la que se afirma, sin ningún reparo, que en algún momento se adquirirá la red telefónica del país vecino, convirtiéndola en propiedad de la compañía española siempre y cuando sea comercialmente interesante. A este respecto, Pérez Yuste afirma:

*Al referirse al tendido de la línea telefónica entre Madrid y Lisboa, se dejan escapar conjeturas que más parecen el reflejo de la idiosincrasia particular de Sosthenes Behn, que la estrategia comercial de un grupo de financieros españoles recién llegado al negocio de la telefonía.*²⁷⁴

3.38. Viernes, 25 de abril de 1924

Fallo del concurso para instalar la central automática de San Sebastián

El día 17 de enero de 1924 se había presentado el pliego de condiciones y bases de inteligencia para la instalación de la central automática de San Sebastián y

²⁷³ Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Santander, San Sebastián, Málaga, Murcia, Vigo (Pontevedra), Oviedo, Zaragoza, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Granada, Cartagena (Murcia), Gijón (Asturias) y Valladolid.

²⁷⁴ Yuste-2004, p. 152.

su extrarradio, tal y como habían especificado los directores de las redes urbana y provincial, Vicente Prado e Ignacio María Echaide respectivamente.

El día 25 de abril de 1924 se celebró el concurso y el resultado se falló, resultando adjudicataria la empresa Compañía Española de Teléfonos Ericsson²⁷⁵. El modelo elegido había sido el “AGF”, desarrollado por esta empresa, y que se basaba en un sistema rotatorio. Aunque en España sólo se optó en esta ocasión por un modelo de central automática de la marca Ericsson, en el resto de Europa estuvo bastante extendido, sobre todo en los países nórdicos²⁷⁶.

De esta forma, la firma sueca Ericsson tomaba también posiciones en el mercado telefónico español ya que contaba con una fábrica para producir material en Getafe, era la concesionaria de la red urbana de Valencia y se disponía a instalar la primera central automática de España situada en una capital provincial. Sin embargo, los pasos de la ITT estaban siendo, como ya hemos visto, mucho más enérgicos. A estas alturas, la Compañía Telefónica Nacional de España ya estaba creada, se habían hecho con el control del grupo Peninsular y de todas sus líneas y redes y habían presentado al Gobierno, sólo cuatro días antes, un Proyecto de contrato para la concesión del sistema telefónico nacional.

3.39. Viernes, 9 de mayo de 1924

Propuesta de compra de la red de la Mancomunidad de Cataluña

Como ya hemos visto, en esta época la ITT estaba desarrollando también una intensa labor de adquisición de intereses telefónicos a lo largo y ancho de la geografía española, con la clara intención de reforzar su posición en el mercado telefónico español y demostrar su solvencia como operador de redes. En estado sentido, su mayor logro había sido lograr el control de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de sus filiales a través de la compra de todas las acciones ordinarias de esa compañía a principios de 1924. Gracias a esta adquisición se convertía en el concesionario de la mayoría de las redes interurbanas del país, así como de algunos centros urbanos de gran importancia como Madrid o Bilbao.

²⁷⁵ Gutiérrez-1997, pp. 254-255.

²⁷⁶ Carrasco-2001, p. 5.

En cuanto a las redes explotadas por el Cuerpo de Telégrafos, habría que esperar a las decisiones que el Gobierno tomara con respecto al proyecto presentado por la CTNE y al conjunto de negociaciones llevadas a cabo por los representantes de la ITT y de su filial española.

Por orden de importancia, el tercer explotador de redes telefónicas en España era la Mancomunidad de Cataluña, que tenía el control de las líneas interurbanas de las cuatro provincias y de algunos centros municipales de cierta importancia como Lérida, Figueras, Puigcerdá o Vic. La mirada de Sosthenes Behn se dirigió entonces hacia la región catalana y encargó a Esteban Terradas, antiguo Director de la Red Telefónica Provincial de la Mancomunidad, que iniciara las negociaciones para la adquisición de la red telefónica de esta corporación.

Terradas envió un escrito al Presidente de la Mancomunidad, Alfonso Sala, con fecha de 9 de mayo de 1924, en el que se hacía una oferta de 2.050.000 pesetas por la compra de toda la red catalana. No obstante, esta vez las negociaciones no fueron tan positivas para los planes de Behn como en el caso de la Compañía Peninsular, ya que Sala respondió decidido que “no ha lugar a discutir sobre este particular”²⁷⁷.

La oportunidad para hacerse con la red telefónica catalana llegaría, sin embargo, un año más tarde, cuando el Estatuto Provincial de marzo de 1925 anuló el de la Mancomunidad de Cataluña y se creó una comisión para decidir qué hacer con los servicios a cargo de la corporación regional.

De todas formas, la no consecución de este acuerdo en mayo de 1924 no parece que afectara mucho a los planes del Coronel, que ya había conseguido el golpe de efecto definitivo con la compra de la Peninsular y eso le había granjeado los apoyos nacionales necesarios para la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España. De hecho, Behn se mostraba tan optimista a estas alturas que llegó a declarar que pronto anunciaría en los mercados bursátiles neoyorkinos “la adquisición de importantes intereses en los sistemas telefónicos de un país europeo y uno latinoamericano”²⁷⁸.

²⁷⁷ Gutiérrez-1997, p. 358.

²⁷⁸ Sobel-2000, p. 38.

3.40. Domingo, 11 de mayo de 1924

La convocatoria del “concurso”

El día 11 de mayo de 1924, Primo de Rivera firmó la Real Orden por la que se nombraba una Comisión para examinar, estudiar y proponer “al Gobierno la solución más conveniente al objeto de dotar a España de un moderno y completo servicio telefónico”²⁷⁹. Esta acción, tomada por el Directorio Militar, supone el primer gran paso dado por un Gobierno español desde la invención del teléfono 50 años antes con el fin de reorganizar definitivamente el desafortunado sistema nacional. Las condiciones de esta medida no fueron, como estamos viendo, las más adecuadas, pero lo que no se puede negar es que Primo de Rivera supo romper con todas las políticas anteriores y dar un impulso real a las telecomunicaciones de nuestro país.

Estos aspectos positivos contrastan, desafortunadamente, con el hecho de que el proceso fuera, a todas luces, ilegal y que estuviera motivado directamente por las pautas de una sociedad extranjera cuyo único interés era el lucro económico. Un año más tarde, en un artículo aparecido en la Revista Telefónica Internacional, editada por la ITT, se reconocía sin ningún pudor que esta Comisión había sido nombrada, a propósito, para estudiar el proyecto que la multinacional había presentado al Gobierno a través de la CTNE²⁸⁰. No hace falta alejarse tanto en el tiempo para obtener otra confirmación similar para esta circunstancia: en el informe que el general Mayandía, vocal del Directorio Militar, redactó para la ponencia sobre telefonía en 11 de agosto de 1924 se explicaba abiertamente que la Real Orden fue producto de la propuesta que la CTNE había entregado a Primo de Rivera. Por lo tanto, la creación de la comisión no tuvo otra explicación más que la de envolver bajo un marco de aparente legalidad las negociaciones entre el Gobierno militar y la Compañía Telefónica Nacional. Es de suponer que el hecho de que se permitiera a otras sociedades exponer sus proyectos también responda a ese intento de pretendida rectitud, haciendo que la medida adquiriera la apariencia de un concurso público.

La sola lectura y análisis de la Real Orden de 11 de mayo ya nos otorga varias pistas que vendrían a confirmar esta teoría, puesto que Primo de Rivera no se molestó

²⁷⁹ Real Orden de la Presidencia del Directorio Militar, de 11 de mayo de 1924. Gaceta de Madrid, 15 de mayo de 1924, nº 136, p. 828.

²⁸⁰ Revista Telefónica Internacional, marzo 1925, p. 4.

mucho en redactar un texto original y casi se podría decir que estamos leyendo las palabras de Sosthenes Behn publicadas en la Gaceta de Madrid. Así, en el proyecto presentado por Cifuentes el día 21 de abril, veinte días antes, se podía leer, en su primera “consideración importante”:

La necesidad sentida y la demanda para obtener un completo y moderno servicio telefónico.

Por su parte, la Real Orden comienza con la expresión:

Necesidad unánimemente sentida es la de dotar a España de un moderno y completo servicio telefónico.

Como se puede apreciar, ni siquiera hubo un intento por cambiar las palabras que la CTNE había hecho suyas sólo unas semanas antes y se transcribían de manera casi literal. De una manera más explícita, el texto reconocía que “importantes Compañías que en otros países han hecho grandes instalaciones y vienen presentando al Gobierno proyectos y presupuestos para hacerlas en España”, cosa que no sorprende en exceso ya que la empresa que reorganizara el servicio nacional tenía que ser, necesariamente, extranjera, o española pero con el apoyo constante de una corporación extranjera.

Esta Comisión estaría presidida por el Director General de Comunicaciones, que podría delegar en su Secretario general²⁸¹, y formada por seis vocales, tres con un historial más técnico y tres especialistas en asunto económicos y financieros: los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos Antonio Nieto y Gil, Jefe de Centro, y Manuel González Salom²⁸², Jefe de Sección de primera; el Ingeniero militar Rudesindo Montoto y Barral, Coronel del primer Regimiento de Telégrafos; el miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Emilio Miñana Villagrosa; el Inspector regional de la Hacienda pública Antonio Carrillo de Albornoz; y el Contador de primera del Tribunal de Cuentas del Reino Joaquín Arnal. La labor de la Comisión sería la de

²⁸¹ Varias revistas especializadas de aquellas semanas hacen referencia a una enfermedad de Taurín Funés, que le mantuvo apartado de sus obligaciones como Director general durante el mes de abril.

²⁸² Como veremos a continuación, la designación de Manuel González Salom como vocal de la Comisión fue una decisión desafortunada, que tuvo que ser corregida días más tarde.

estudiar las propuestas ya conocidas y cualquier otra que fuera merecedora de ser tomada en consideración y que se presentara durante el tiempo que durara su labor.

Tal y como indicaba en su apartado tercero, “esta Real orden no significa la apertura de un concurso ni obliga a elección de ninguna de las proposiciones presentadas”. Es decir, que esto no suponía la convocatoria de un concurso ni en la forma ni el fondo, por mucho que intentaran presentar ante la opinión pública esta decisión como si se tratara de un proceso legal. No lo era. La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública vigente en aquel momento establecía claramente que “los contratos por cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras públicas se celebrarán por remate solemne y público y previa la correspondiente subasta”, que por supuesto debería tener una fecha límite, una dirección a la que dirigir las propuestas, una fianza para los licitadores, etc. Esta normativa sobre concursos públicos venía a confirmarse, en el caso concreto de las concesiones telefónicas, en la Ley de Telecomunicaciones de 1907, que tampoco había sido derogada. Por supuesto, la elección de una compañía para controlar todo el sistema nacional se encuentra dentro del terreno de la citada ley.

Lamentablemente no se han encontrado declaraciones públicas realizadas por ningún miembro del Gobierno ni de la Dirección General durante aquellas semanas, cosa que posiblemente fuera provocada a conciencia con el fin de no tener que contestar a preguntas que se intuían incómodas o entrar en debates de gran sensibilidad. No en vano, Tafur Funés se había manifestado, meses antes, en contra de acciones similares y había declarado estar a favor de la reversión de las redes y la unificación de todos los servicios de telecomunicación bajo el mando de su Dirección.

Para confirmar aún más la teoría de que este “concurso” era una consecuencia directa de las negociaciones mantenidas entre la ITT y el Gobierno durante los meses anteriores, no hay más que leer algunas de las condiciones esenciales que, a juicio de Primo de Rivera, tendrían que satisfacer las proposiciones presentadas. Algunas de ellas parecen sacadas directamente de la documentación presentada por la CTNE el día 21 de abril. Así, la primera se refiere al “carácter nacional, en cuanto a sumisión a las leyes y Tribunales del Estado, a su constitución jurídica y a su intervención en la aprobación de tarifas”, aspecto que, como sabemos, cumplía a la perfección la compañía española. La última condición “muy recomendable” de la Real Orden hablaba de la conexión telefónica con los países vecinos y con las plazas de África, tal y como también estaba recogido en el proyecto de la CTNE. Éste hacía referencia a la necesidad de construir una línea Madrid-Lisboa y a tender dos cables submarinos para

salvar el estrecho de Gibraltar y permitir a la península hablar con sus posesiones del Protectorado español en Marruecos. El guiño de la ITT al Gobierno de Primo de Rivera en este sentido era muy importante, ya que el dictador consideraba fundamental que las comunicaciones con África fueran completas, dado el clima de tensión que se respiraba en el Rif y al que estaba dedicando importantes esfuerzos personales.

Por lo general, las condiciones que estipulaba la Real Orden parecen un tanto difusas y no servían para entender las intenciones del Gobierno: los términos “examinar” y “estudiar” eran conceptos demasiado generales que podían decirlo todo o nada. Para más confusión, dos meses antes se había promulgado el Estatuto Municipal y todo apuntaba a que las conclusiones de la comisión irían en contra de dicha norma. Sin embargo, y a pesar del desatino del proceso seguido, bien se podría haber hecho uso de la expresión “proponer la solución más conveniente”, que también aparecía en la introducción de la Real Orden, para que la Comisión emitiera un informe valorativo que serviría para convocar un verdadero concurso un tiempo más tarde. Es decir, que esta medida supusiera un primer paso para que el Gobierno entendiera el problema telefónico, en el que era evidente que se encontraba bastante desorientado, para después entregar el sistema nacional, si se consideraba oportuno hacerlo, en unas condiciones más favorables para el Estado²⁸³.

El informe del general Mayandía de 11 de agosto al que ya nos hemos referido también desvela que el Gobierno era plenamente consciente de que esta Real Orden de mayo no se trataba de un concurso formal y que por ello tendrían que recurrir a digresiones legislativas en caso de querer otorgar el servicio telefónico nacional a alguna de las empresas en liza:

Igualmente, aun cuando la Real Orden de 11 de Mayo último anunciaba una especie de concurso de proyectos de contrato de servicio telefónico, con sujeción a unas normas, en realidad no ha tenido la formalidad de tal, pues ni ha procedido el informe del Consejo de Estado que dispone el Apartado cuarto del artículo 52 de la vigente ley de Contabilidad, ni a los licitadores se les exigía fianza alguna, ni el Estado por su parte adquiría ningún compromiso para aceptar cualquiera de las proposiciones que se presentasen.

²⁸³ Yuste-2004, pp. 152-164.

3.41. Lunes, 12 de mayo de 1924

Los vocales de la Comisión para la reorganización del sistema telefónico

Gracias a la labor de investigación realizada por Antonio Pérez Yuste²⁸⁴ se han podido conocer unos documentos de gran valor histórico que se conservan en el Archivo Histórico Nacional y que nos permiten entender los movimientos llevados a cabo por el Gobierno para la designación de los miembros de la Comisión nombrada en la Real Orden de 11 de mayo de 1924²⁸⁵. El vocal del Directorio Militar encargado de la ponencia para redactar dicha medida fue el general Mario Muslera, que ya había tratado los asuntos telefónicos en anteriores reuniones del Gobierno²⁸⁶. En un borrador previo al texto definitivo, se aprecian importantes diferencias, con respecto a la Real Orden que fue publicada finalmente, en los párrafos que tratan sobre el nombramiento de la Comisión. En esta versión se indica:

Aún cuando la Dirección de Comunicaciones ha hecho un detenido examen de aquellos, la importancia del asunto requiere mayor estudio y asesoramiento y a tal fin se nombra una comisión que bajo la presidencia del Director General, que podrá delegar en el Secretario General, examine, estudie y proponga al Gobierno la solución más conveniente. De esta comisión formarán parte dos funcionarios de Telégrafos, un Ingeniero Militar y tres personas más especializadas en asuntos económicos y financieros.

El texto incluye alguna corrección manuscrita que luego sería añadida en la Real Orden, como el interés por resaltar que la importancia del asunto era, sobre todo, “en su aspecto financiero” o la aclaración de que el presidente de la Comisión debería ser, evidentemente, el Director General de Comunicaciones y no cualquier otro director.

Pero la diferencia más notable entre los dos textos estriba en el hecho de que en el borrador aparezca tachada la última frase, donde se indica, sin especificar

²⁸⁴ Yuste-2004, pp. 157-158.

²⁸⁵ Ponencia del general Muslera sobre la dotación de un moderno y completo servicio telefónico, mayo de 1924. Archivo Histórico Nacional, caja 240-2, expediente 35.

²⁸⁶ Mario Muslera y Planes (1873-1936) era natural de Leganés y fue miembro del Directorio Militar durante más de dos años, hasta diciembre de 1925. Durante la insurrección militar de julio de 1936 se alineó con el bando nacional y murió en San Sebastián ese mismo mes como consecuencia de los primeros sucesos de la Guerra Civil.

nombres, cómo estaría constituida esta comisión, y que luego sería sustituida por un nuevo párrafo donde sí aparecen los seis nombres de los vocales. Se sabe que dichos hombres fueron elegidos, de una manera un tanto precipitada, por el Directorio Militar.

En este expediente del Archivo Histórico Nacional también se conservan tres tarjetas con membrete del Directorio Militar donde hay algunas notas manuscritas que versan sobre las deliberaciones para la designación de los miembros de la Comisión. Ninguna de ella cuenta con fecha y están escritas por la misma persona, a juzgar por la caligrafía, aunque no están firmadas. En la primera de ellas se especifica que los tres especialistas en materia económica serían designados por el Gobierno, haciendo referencia ya al Jefe de Administración e Inspector regional de la Hacienda pública Antonio Carrillo de Albornoz, mientras que los dos funcionarios del Cuerpo de Telégrafos y el Ingeniero Militar serían nombrados por Tafur y Funés. Por su parte, en la segunda tarjeta aparece el vocal del Tribunal de Cuentas designado, Joaquín Arnal. En la tercera tarjeta se hace referencia al Ingeniero Militar que finalmente formaría parte de la Comisión: Rudesindo Montoto y Barral.

La elección de este último nombre es una prueba más de la celeridad y urgencia con las que fue constituido este comité. En la primera tarjeta manuscrita se puede leer que los tres vocales con formación técnica serían designados por Tafur Funés y suponemos que los dos miembros del Cuerpo de Telégrafos fueron elegidos sin muchos problemas, de tal forma que sus nombres serían comunicados al Directorio unos días antes. Sin embargo, con respecto al último tuvieron que realizarse algunas consultas, ya que en los fondos del Archivo Histórico Nacional también se puede consultar una carta de Tafur Funés dirigida al general Muslera y fechada el 12 de mayo de 1924, es decir, un día después de que la Real Orden fuera firmada:

Excmo. Señor Don Mario Muslera.

Mi querido General y amigo: En contestación a su carta referente a los funcionarios de Telégrafos e Ingeniero militar que han de formar parte de la Junta para estudiar los proyectos de instalación telefónica en España, tengo el gusto de participarte que son el Coronel de Ingenieros Don Fermín Sojo Lomba, el Jefe de Centro de Telégrafos Don Antonio Nieto y Gil y el Jefe de Sección de 1ª de dicho Cuerpo Don Manuel González Salom.

Además, en el pie de la carta se incluía otra nota manuscrita en la que se puede leer:

El nombre del Ingeniero Militar ha sido dado por el fiel (¿?) Jefe de la Sección de Ingenieros.

De todo esto se deduce que Tafur y Funés tuvo que estudiar el nombre del ingeniero con dicho Jefe de la Sección de Ingenieros del Ejército y que por ello se demoró en la respuesta. El general Muslera, en su impaciencia, no esperó a la decisión del Director General y nombró a Rudesindo Montoto y Barral como miembro de la Comisión, tal y como se recoge en la tercera tarjeta a la que ya hemos hecho referencia.

3.42. Martes, 20 de mayo de 1924

Electra da su opinión con respecto a la Real Orden de 11 de mayo

En el número de la revista *Electra* de 20 de mayo de 1924²⁸⁷ se hacen eco de la noticia de la formación de una comisión para el estudio de los proyectos de telefonía presentados al Gobierno, mencionando el nombre de los telegrafistas que habían sido nombrados vocales de dicho comité y refiriéndose a las dos propuestas que por el momento se conocían: “el de la International Telegraph and Telephone Co. (sic) y el de la Compañía sueca Ericsson”. Es decir, que el Cuerpo de Telégrafos o bien no sabía de la existencia de la CTNE o simplemente despreciaba su creación y entendía que Behn seguía al frente del proyecto que llevaba meses defendiendo.

Los redactores de *Electra* se lamentaban de que ninguna de las propuestas fuera española, incidiendo aún más en el hecho que ya nadie dudaba: que la sociedad española había sido una maniobra orquestada por la ITT y que la multinacional seguía detrás de todas las decisiones y movimientos de la CTNE. Si el Estado hubiera tomado las medidas apropiadas cuando todavía estaba a tiempo, decían, “hoy tendríamos teléfonos sin necesidad de que ninguna entidad extranjera viniera a España a hacer un saneado negocio”. Para ello recordaban, sin mencionar su nombre, el Proyecto de Francos Rodríguez que planteaba una red nacional basada en células provinciales interconectadas entre sí e insistían en la necesidad de limpiar el camino de trabas legales, de trámites innecesarios y de dotar de autonomía al servicio telefónico nacional.

²⁸⁷ *Electra*, 20 de mayo de 1924, nº 20, pp. 408-409.

Electra recordaba a la comisión nombrada que todavía estaban a tiempo de dar un giro, reorientar la dirección de las medidas legales que se estaban tomando y no ceder los intereses telefónicos nacionales a una sociedad extranjera, más cuando se trata de algo “que el Estado puede hacer por sí mismo”.

Pero la revista telegráfica aún iba a expresarse mucho más extensamente diez días después, cuando publicó un artículo de cinco páginas en las que planteaba, no sólo su opinión con respecto a la posibilidad de que la telefonía española quedara en manos extranjeras, sino que esbozaban además las líneas generales de un proyecto que habría de salir del Cuerpo de Telégrafos²⁸⁸. Las conclusiones fundamentales son las ya conocidas reivindicaciones propias del organismo público: reversión de todas las redes, que pasarían a estar en manos del Estado, modernización de centrales y todo tipo de instalaciones, adecuación de la legislación a los tiempos modernos, etc. No obstante, recuerdan que si bien en el pasado presentaron interesantes proyectos para la reforma de la telefonía nacional, “hoy que el problema viene desde fuera planteado con enorme fuerza, he aquí que la Corporación no presenta ninguno, porque no lo tiene”.

Los autores del artículo se mostraban pesimistas, reconociendo que las aguas no parecían discurrir por los cauces que ellos deseaban. No en vano, parece que los telegrafistas iban poco a poco perdiendo la esperanza de que un día el Cuerpo llegara a controlar un sistema telefónico unificado y eficiente, teniendo en cuenta el cariz que estaba adquiriendo el asunto.

3.43. Domingo, 25 de mayo de 1924

El Electricista da su opinión con respecto a la Real Orden de 11 de mayo

En la revista El Electricista también dedicaron un espacio para tratar el tema de la comisión nombrada unos días antes, aunque de una manera mucho más sucinta que Electra²⁸⁹. Los redactores de El Electricista prefirieron reproducir la Real Orden de 11 de mayo en su totalidad, para luego añadir:

²⁸⁸ Electra, 30 de mayo de 1925, nº 21, pp. 425-429

²⁸⁹ El Electricista, 25 de mayo de 1924, nº 822, p. 6743.

Grande es la competencia y probado el amor telegráfico de los señores Nieto Gil y González Salom; pero las condiciones arriba señaladas nos inclinan a suponer que sus mejores deseos han de ser esterilizados por el previo concepto de arriendos telefónicos que implican las cláusulas e y f de la Real orden.

Creemos que les esperan muchas amarguras en la difícil misión que se les ha confiado; pero tenemos también esperanzas en su energía y decisión para la defensa de los intereses corporativos.

¡Ojala que el mayor éxito acompañe a sus gestiones!

Si bien confiaban en que Nieto Gil y González Salom defenderían los intereses del Cuerpo de Telégrafos en dicha comisión, también intuían que iba a ser una tarea muy complicada, teniendo en cuenta la cuestión a la que se enfrentaban. A buen seguro que la labor realizada por estos dos telegrafistas no decepcionó en el seno de la corporación pública, como veremos en capítulos posteriores, si bien la carrera que luego habría de seguir el primero no tuvo que entusiasmar a sus compañeros.

Antonio Nieto Gil era, por aquel entonces, Jefe de Centro del Cuerpo de Telégrafos y, a tenor de los halagos que le dispensaban el resto de funcionarios, una personalidad querida dentro de la entidad, del que se resaltaba su “competencia y probado amor telegráfico”. Era además hermano de Modesto Nieto Gil, último subdirector de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña hasta su venta a finales de 1925²⁹⁰. Sin embargo, cuando la CTNE se hizo con el monopolio de la red nacional, ambos pasaron a desempeñar cargos en la misma, dejando atrás su pasado como telegrafistas y defensores del carácter público de la telefonía.

Antonio, como veremos más adelante, formó parte también de la comisión que hizo una valoración económica de las redes del Estado y por las que la CTNE tuvo que pagar una suma de dinero muy por debajo de lo que podría haber sido una tasación justa para el erario público. Durante las deliberaciones de aquella comisión, Antonio Nieto Gil fue nombrado además Consejero delegado del Estado en la Compañía Telefónica sin que nadie se cuestionara la incompatibilidad de ambas funciones²⁹¹.

²⁹⁰ Yuste-2004, p. 276.

²⁹¹ Yuste-2004, p. 222.

Tanto él como los otros dos consejeros del Estado tuvieron una actitud más bien sumisa durante el tiempo que duró su paso por el Consejo de Administración, planteando muy pocos inconvenientes al correcto funcionamiento de los planes de la ITT, incluso cuando las extralimitaciones de la Compañía Telefónica eran flagrantes.

Por su parte, el trabajo de Modesto Nieto Gil no cambió sustancialmente, ya que pasó de la subdirección de la red de la Mancomunidad de Cataluña a la dirección del segundo distrito de la CTNE, el que correspondía a las provincias del nordeste peninsular²⁹², con centro en Barcelona.

3.44. Sábado, 31 de mayo de 1924

Primo de Rivera modifica la Ley de la Hacienda pública de 1911

Cuando el marqués de Estella llegó al poder en septiembre de 1923 se encontraba vigente la Ley de Administración y Contabilidad de Hacienda pública de 1911²⁹³, por la que se establecía que todos los contratos de obras, servicios y compras del Estado debían realizarse por medio de subasta o concurso público, prescindiéndose de estas formalidades en algunos casos muy concretos recogidos en sus artículos 55 y 56. Estas excepciones no incluían ciertas medidas que el Gobierno de Primo de Rivera estaba tomando desde el comienzo de su mandato y que por lo tanto se situaban en el terreno de la ilegalidad.

Aunque Primo de Rivera estaba libre del control de las Cortes, quiso modificar el artículo 55 de dicha ley con el fin de que los contratos que firmara su Gobierno sin mediar el concurso oportuno fueran todos legales a ojos de la administración pública. Para ello promulgó el Real Decreto de 31 de mayo de 1924²⁹⁴. En la exposición de los motivos del mismo manifestaba que estos cambios se hacían necesarios porque entre las excepciones de la ley no había ninguna “que se refiera a obras y servicios que, por la naturaleza de los mismos y por los importantes medios auxiliares de que disponga la Administración, pudieran quedar igualmente exceptuados de las indicadas

²⁹² Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza, Huesca, Teruel, Castellón de la Plana, Valencia e Islas Baleares.

²⁹³ Ley de la Hacienda Pública, de 1 de julio de 1911. Gaceta de Madrid, 4 de julio de 1911, nº 185, pp. 41-50.

²⁹⁴ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 31 de mayo de 1924. Gaceta de Madrid, 1 de junio de 1924, nº 153, pp. 1090-1091.

formalidades de subastas o concurso, con gran beneficio para el Estado". Por este Real Decreto, el artículo 55 de esta ley quedaba redactado de la siguiente forma:

Quedan exceptuados de las solemnidades de subasta o concurso, y podrán ser concertados directamente con la Administración, los contratos siguientes:

Primero. Los que se refieren a operaciones de deuda flotante y a las negociaciones de efectos públicos, descuentos y traslación material de fondos.

Segundo. Los en que por versar sobre efectos o materias cuyos productos disfruten privilegio industrial o sobre cosas de que haya un solo productor o poseedor debidamente justificado en el expediente, no sea posible promover concurrencia en la oferta.

Tercero. Lo (sic) contratos de reconocida urgencia que, por circunstancias imprevistas, demandaran un pronto servicio que no dé lugar a los trámites de la subasta.

Cuarto. Los que en la seguridad del Estado exijan garantías especiales o gran reserva por parte de la Administración.

Quinto. Las obras y servicios en cuyo coste, por Administración, comparado con los de subasta o concurso, pueda lógica y razonadamente presumirse que se obtenga una economía no inferior al 20 por 100 del importe del presupuesto, a consecuencia de los materiales y medio auxiliares de que disponga dicha Administración.

Para celebrar cualquier contrato de los mencionados en los números del segundo al quinto de este artículo, deberá preceder un Real decreto de autorización, expedido con acuerdo del Gobierno; y en cuanto a los comprendidos en los números segundo, tercero y quinto, el dictamen del Consejo de Estado.

Se ha reproducido la nueva redacción del artículo en su totalidad dada la importancia que tiene para la presente Trabajo, más teniendo en cuenta que no se ha encontrado ninguna mención a este respecto en otras investigaciones anteriores a ésta. Sin duda, estos cambios no fueron inspirados únicamente por el asunto telefónico y la inminencia de la concesión del sistema nacional, ya que otras cuestiones similares también causaban preocupación al Gobierno en aquellos

momentos, como se desprende de la exposición de esta norma, en la que hace mención a ciertas obras de las Juntas de Puertos.

Sin embargo, no podemos dejar de apuntar que este Real Decreto de 31 de mayo de 1924 crea el marco normativo que habría de rodear de legalidad al contrato que meses más tarde se firmaría entre el Gobierno y la Compañía Telefónica Nacional. En caso de que alguna voz crítica se alzara en contra de dicha concesión por la ausencia del concurso público, el Gobierno no tendría más que hacer referencia al nuevo artículo 55 de la Ley de Administración y Contabilidad de Hacienda pública y escudarse en las excepciones que el Estado podría realizar en algunos casos señalados para abstenerse de las formalidades de subasta o concurso.

Si bien el Directorio Militar podría incluir el contrato telefónico en el tercer tipo (aquellos que tenían “una reconocida urgencia”), parecería más lógico que lo clasificaran dentro del cuarto tipo: “los que en la seguridad del Estado exijan garantías especiales”. Nadie dudaba ya por aquel entonces de la importancia de las telecomunicaciones en la seguridad nacional, puesto que incluso el Cuerpo de Telégrafos había hecho numerosas manifestaciones refiriéndose a la telefonía en términos de garante de la defensa y la soberanía del Estado. Además, la Real Orden de 11 de mayo de 1924 advertía la condición muy recomendable que tendría que cumplir el proyecto elegido de unir la península con las posesiones españolas en África, como medio indispensable que permitiría garantizar la seguridad y la dominación españolas en aquellos territorios.

Además, la nueva redacción del artículo 55 indicaba, para este caso (el cuarto), que sería suficiente, para realizar la contratación, con la autorización mediante un Real Decreto, expedido con acuerdo del Gobierno, y sin necesidad de un dictamen del Consejo de Estado. Esto es lo que ocurriría, tres meses más tarde, cuando el Gobierno firmó el contrato con la CTNE para la reorganización del sistema telefónico nacional: se promulgó un Real Decreto, aunque el Consejo de Estado no tuvo voz en todo este asunto. La medida tomada por Primo de Rivera en este 31 de mayo de 1924 otorgaba un marco de legalidad a una concesión, que, de otra forma, hubiera sido totalmente ilícita.

3.45. Domingo, 1 de junio de 1924

Rectificación de la Real Orden de 11 de mayo de 1924

Otra muestra del atropello con el que parece que fue redactada y publicada la Real Orden de 11 de mayo de 1924 fueron los fallos cometidos con respecto a la designación de Manuel González Salom como miembro de la Comisión encargada de examinar, estudiar y proponer una solución para dotar a España de un moderno y completo servicio telefónico. Manuel González Salom, que sí perteneció al Cuerpo de Telégrafos, había fallecido justo dos meses antes de la firma de dicho decreto, el 11 de marzo de 1924, y además en vida no llegó a ocupar el cargo de Jefe de Sección de Primera, ya que era Auxiliar de Oficinas²⁹⁵.

La confusión se debía a que el hermano de Manuel, Juan González Salom, que no había muerto todavía, sí era Jefe de Sección de Primera en el Cuerpo de Telégrafos y, sin duda, Tafur Funés querría designar a éste como vocal de la comisión. Para deshacer la confusión, la Gaceta de Madrid publicó, el día 1 de junio de 1924, una rectificación a la Real Orden de 11 de mayo²⁹⁶, redactando de nuevo el texto completo y sustituyendo el nombre de Manuel por el de Juan.

3.46. Sábado, 21 de junio de 1924

La red urbana de Tánger

El Desastre de 1898 había despojado a España de sus últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas) y aquellos acontecimientos llevaron al país a una crisis sin precedentes. España había perdido el poder hegemónico mundial del que había disfrutado durante siglos y ahora se tenía que conformar con ver como otros se repartían “el pastel colonial” durante la primera mitad del siglo XX. En este sentido, España firmó con Francia un acuerdo por el que se repartían el territorio marroquí bajo una forma jurídica denominada “protectorado”: una pequeña franja en el norte, con capital en Tetuán, sería controlado por los españoles, mientras que la mayor parte de lo que hoy es Marruecos, lo que quedaba al sur del río Uarga, pasaba a manos francesas.

²⁹⁵ Yuste-2004, pp. 158-159.

²⁹⁶ Gaceta de Madrid, 1 de junio de 1924, nº 153, pp. 1095-1096.

La ciudad y alrededores de Tánger también formaron parte durante años del Protectorado Español, aunque más tarde, en 1925, pasaría a convertirse en territorio internacional, dada su enorme importancia estratégica en la costa del Atlántico y en la entrada del mar Mediterráneo. Los Gobiernos españoles siempre habían visto con buenos ojos la inversión empresarial en sus territorios africanos, con la intención de afianzar su poder y control de la región. La telefonía tenía un gran valor, no sólo por tratarse de un aporte de capital importante, sino por su poder estratégico y de apoyo a la seguridad de la región.

En ese sentido, como ya estaba ocurriendo con muchos otros países con intereses coloniales o neo-coloniales, el Estado español colaboró, cuanto pudo, en el fortalecimiento de las telecomunicaciones en suelo marroquí y entre la Península y éste. No obstante, los rebeldes rifeños también supieron ver esa importancia estratégica de las comunicaciones españolas y destruían las líneas en pequeñas escaramuzas. Tal y como atestiguan las crónicas que aparecían en la prensa nacional durante aquellos años, los telégrafos y los teléfonos eran objetivo fundamental de las guerrillas marroquíes y provocaban que ciertas regiones o acuartelamientos españoles quedaran totalmente incomunicadas con el resto del protectorado y con Madrid.

Un empresario español llamado Emilio Rotondo Nicolau estableció, en 1883, el servicio telefónico en la ciudad de Tánger, que además se trataba del primero de Marruecos. Rotondo había sido requerido por su hermano Adriano, que era vicecónsul en la ciudad y que quería construir una línea punto-punto que comunicara su domicilio con la sede de la legación española²⁹⁷. A pesar del recelo inicial de la población y las autoridades marroquíes, la red pronto se extendió y Rotondo se convirtió en el concesionario de la red durante más de cuarenta años, “no habiendo querido nunca que el servicio público local, de tanta importancia, dejara de ser español”, tal y como explicaban los periódicos de la época.

Su hijo, también llamado Emilio Rotondo, había continuado su labor, haciéndose cargo de la licencia de explotación e incorporando los últimos avances tecnológicos del momento. En este sentido, en 1923 firmó un contrato con la empresa Ericsson para la instalación de una central automática que diera servicio a toda la ciudad. La inauguración de la nueva central tuvo lugar el día 21 de junio de 1924 y provocó las felicitaciones de las autoridades españolas allí presentes, debido al

²⁹⁷ ABC, 11 de octubre de 1957, pp. 19 y 22.

“patriotismo demostrado, poniendo este servicio español a la altura de los mejores de su género”. La central costó más de un millón de pesetas y tenía una capacidad inicial para 1.500 líneas, aunque ese número se podía aumentar fácilmente hasta las 10.000²⁹⁸.

El ejemplo de Tánger nos sirve para comprobar cómo, ante marcos reguladores más favorables, los propietarios de redes españoles tomaban decisiones empresariales más propicias a la innovación. En España, la legislación referente a la reversión de las redes desanimaba a todos los concesionarios privados a instalar centrales automáticas o a realizar casi cualquier inversión, como demuestra el hecho de que, hasta esos momentos, ningún empresario nacional se hubiera animado a dotar sus instalaciones de un servicio automático en territorio nacional. Ni siquiera Enrique Parellada, que estaba al frente de la compañía de telefonía más importante del país, consideraba que fuera necesario invertir una cantidad de dinero tan importante en una mejora de esas características. Sin embargo, en territorio marroquí, y con una legislación totalmente distinta en ese sentido, los empresarios veían con buenos ojos la telefonía automática y no dudaban en incorporarla en sus redes.

Emilio Rotondo y su red automática de Tánger ganaba, de esta forma, la carrera a cualquier empresario que tuviera el control de una red urbana en territorio nacional, lo que demuestra que no faltaba visión de negocio en la mentalidad española con respecto a los teléfonos, sino una regulación adecuada con respecto a las licencias.

3.47. Sábado, 28 de junio de 1924

Las propuestas presentadas y el informe de la Comisión

Tras la promulgación de la Real Orden de 11 de mayo de 1924 por la que se nombraba una Comisión para estudiar las propuestas de telefonía presentadas, el número de empresas que participaron en dicho “concurso” fueron cuatro, si bien una entregó su proyecto fuera de plazo y por eso fue descartada automáticamente. Las tres primeras fueron la Compañía Telefónica Nacional de España, la Compañía Española de Teléfonos Ericsson y la compañía belga *New Antwerp Telephone and Electric Works*.

²⁹⁸ ABC, 22 de junio de 1924, p. 25.

Gracias a la ponencia del general Mayandía de 11 de agosto de 1924 sabemos que hubo una cuarta empresa, la alemana *Siemens & Halske*, pero que fue descartada por haberse recibido su propuesta cuando la comisión de valoración ya había sido disuelta²⁹⁹. Sorprende, no obstante, la afirmación de que había enviado su proyecto fuera de plazo, teniendo en cuenta que la Real Orden no establecía ninguna fecha límite, como tampoco seguía ninguna de otra de las estipulaciones para la convocatoria formal de un concurso público.

Un artículo del periódico *La Vanguardia* que a continuación analizaremos nos aporta la información sobre los trabajos llevados a cabo por la comisión creada el 11 de mayo. Los seis vocales se dividieron en dos subcomisiones, que trabajaron de manera independiente y que se reunieron una única vez a finales de junio o principios de julio para evaluar los resultados y convenir un resultado definitivo. El investigador Roberto Carballo afirma que el 28 de junio de 1924 es la fecha en la que fue emitido un informe final, tal y como se expresa en el acta de la reunión de aquel día³⁰⁰. Desgraciadamente, esta acta de la sesión plenaria no ha podido ser encontrada, aunque se conocen sus conclusiones más importantes gracias a las referencias que otros documentos realizaron sobre dicho dictamen final.

En este sentido, se sabe que la comisión examinó todos proyectos presentados “dentro de plazo” y que, no pareciéndole aceptable ninguno de ellos, se rechazaron los tres. Además, los miembros propusieron unas bases para la convocatoria de un verdadero concurso. Una nota publicada en la revista *El Electricista* en su edición de 15 de julio indicaba³⁰¹:

La Comisión nombrada para dictaminar sobre las propuestas de distintas sociedades para la nueva concesión del servicio telefónico nacional, ha emitido ya su dictamen. En el informe se estudian las proposiciones que son tres: una norteamericana, otra sueca y otra belga, y no pareciendo aceptable ninguna de ellas (en un detallado estudio cláusula por cláusula), se proponen las bases para la celebración de un concurso.

²⁹⁹ Ponencia del general Mayandía sobre el proyecto de contrato de servicios telefónicos con la Compañía Telefónica Nacional, 11 de agosto de 1924, p. 2. Archivo Histórico Nacional, caja nº 223-1, expediente 6.

³⁰⁰ Carballo-1979, p. 586.

³⁰¹ *El Electricista*, 15 de julio de 1924, nº 827, p. 6786.

Se ha localizado también un artículo publicado en el diario La Vanguardia diez días antes, en el que también se informaba, con las mismas palabras, sobre este dictamen final (entendemos que El Electricista copió su comunicado del periódico barcelonés), pero añadía éste información reveladora sobre las divisiones de opinión dentro de la propia comisión³⁰²:

Esta comisión está formada por seis vocales: tres para el estudio de la parte económico-financiera de los proyectos y tres para el de la parte técnica, y la preside el director general de Comunicaciones, señor Tafur.

Ambas subcomisiones realizaron separadamente sus trabajos y terminados estos se celebró una reunión plenaria para el acoplamiento en un solo dictamen, pero al procederse a su estudio se vio que eran totalmente incompatibles porque el trabajo de los técnicos no se contraía a los límites que le son propios, sino que era la expresión de las aspiraciones de siempre mantenidas por el cuerpo de telégrafos en relación con el servicio telefónico.

Dado el número para y la distribución de los vocales surgió el empate que rompió el señor Tafur con su voto, aceptando el informe de la subcomisión económico-financiera, aunque espiritualmente se inclinaba a satisfacer las aspiraciones del cuerpo que rige. Entonces quedó convertido en dictamen el que logró el voto presidencial y en voto particular el informe de la subcomisión técnica.

Tal y como explica el periodista, los tres vocales con perfil técnico se extralimitaron en su misión de evaluar los proyectos presentados y se decantaron por dar su opinión como telegrafistas. No parece extraño, de todas formas, que tomaran esta actitud, ya que todo el Cuerpo de Telégrafos tenía puestas sus esperanzas en estos tres representantes de sus derechos, que veían como el Gobierno tomaba la determinación de entregar la telefonía nacional al capital privado y, para más inri, extranjero. La subcomisión técnica adquirió la actitud que se esperaba de ellos: “las aspiraciones de siempre mantenidas por el Cuerpo”.

Por su parte, los vocales con perfil económico-financiero no se salieron de la misión impuesta por la Real Orden y por ello se limitaron a rechazar las tres

³⁰² La Vanguardia, 5 de julio de 1924, p. 12.

propuestas. Tafur y Funés decantó la balanza hacia este lado con su voto y la Comisión emitió el informe que ya se ha explicado. A pesar de que el Director General siempre se había expresado en términos fraternos y de avenencia con el Cuerpo de Telégrafos y sus aspiraciones tradicionales, tampoco extraña que tomara esta decisión en esta comisión. Parece que a estas alturas el Directorio ya había emprendido el camino de la concesión a una compañía, apartándose de las reivindicaciones de los telegrafistas. Por eso, haber votado por la opinión presentada por la subcomisión técnica hubiera supuesto un paso hacia atrás en el ya difícil proceso de reorganización de la telefonía nacional. De ahí que rompiera el empate, mirara adelante, hacia el horizonte de la solución definitiva al problema, aunque se lamentara de esta decisión y “espiritualmente se inclinara a satisfacer las aspiraciones del cuerpo que rige.”

El voto presidencial convirtió en dictamen la decisión de la subcomisión económico-financiera, aunque se acompañó por un voto particular de la subcomisión técnica hacia la opción, no valorada, de que el Cuerpo de Telégrafos se incautara de todas las redes y pasara a explotarlas bajo su dirección.

Esta información viene a confirmar lo expresado por Agustín Muro Abad en una serie de artículos que publicó en la revista Telégrafos en 1932 y que son analizados ampliamente en la tesis doctoral de Antonio Pérez Yuste³⁰³. En lo único en lo que no coincide con la información aparecida en La Vanguardia es en el voto unánime que, según Muro, se dio al dictamen, con un único voto particular presentado por González Salom, aunque “contrario también a las proposiciones presentadas”. Como ya hemos visto, los tres telegrafistas no estuvieron de acuerdo ni si quiera con la decisión de no aceptar las propuestas y mucho menos con proponer unas bases para la celebración de un hipotético concurso en el futuro.

Otro aspecto que destacar de los artículos publicados en El Electricista y en La Vanguardia es que, de las tres propuestas evaluadas, ninguna aparece como española. El proyecto de la CTNE se clasifica, sin ningún pudor, como una proposición norteamericana. Esto demuestra que no había ninguna duda ya con respecto al papel que la ITT estaba desarrollando en la historia, lo cual era conocido por la prensa, el Gobierno, el Cuerpo de Telégrafos (como ya hemos visto con anterioridad) y, por supuesto, la Comisión encargada de estudiar los proyectos.

³⁰³ Yuste-2004, pp. 164-174.

3.48. Domingo, 29 de junio de 1924

Primo de Rivera se lamenta del atraso telefónico en Andalucía

El periódico La Vanguardia publicaba el día 29 de junio de 1924 una nota oficial facilitada por la Presidencia del Gobierno en la que Primo de Rivera se refería al viaje recientemente finalizado por Andalucía y en la que exponía sus impresiones al respecto. Por supuesto, el Dictador se mostraba orgulloso del “entusiasmo fervoroso” con el que había sido recibido en todas las ciudades y pueblos y aseguraba que podían estar satisfechos de lo que él conocía como el “estado espiritual del país” ante la nueva organización política.

No obstante, también expresaba su tristeza al observar el estado de las necesidades públicas básicas como los caminos, las escuelas, las obras de riego, etc. También hacía referencia a que no había visto “ni teléfonos ni telégrafos en bastante número”. No extraña que Primo de Rivera notara esa carestía de aparatos telefónicos en Andalucía, ya que, según las estadísticas, esta región se contaba como una de las menos desarrolladas en esta materia, con una tasa de equipamiento media de sólo 2 abonados por cada 1000 habitantes. Estos valores únicamente eran superados por regiones todavía más atrasadas como Galicia, León y Extremadura. En la región andaluza, sólo la provincia de Cádiz podía presumir de una penetración superior a la media nacional con datos de 5,4 abonados por cada mil ciudadanos. La estadística era especialmente bochornosa para Sevilla, que antes del monopolio de la CTNE no llegaba a 1,5 aparatos por millar de habitantes³⁰⁴, a pesar de contar con más de 200.000 ciudadanos y ser la cuarta ciudad más importante de España (Cádiz tenía sólo 75.000)³⁰⁵

3.49. Jueves, 3 de julio de 1924

Firma del contrato entre la Ericsson y las autoridades guipuzcoanas

El día 3 de julio de 1924 se firmó el contrato entre la Compañía Española de Teléfonos Ericsson, el ayuntamiento de San Sebastián y la diputación de Guipúzcoa para la instalación de una central telefónica que automatizara el servicio en la ciudad y

³⁰⁴ Datos extraídos de Calvo-1998, pp. 64-65.

³⁰⁵ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

su extrarradio³⁰⁶. El concurso, que había sido fallado el día 25 de abril, dio como ganadora a la firma sueca, que había propuesto un sistema de conmutación AGF, desarrollado en sus laboratorios y que ya se estaba instalando en otras ciudades, sobre todo de la Europa nórdica. El plazo de obras estimado era de dos años, que se cumplió escrupulosamente, ya que la central fue inaugurada en junio de 1926³⁰⁷.

Situada en la céntrica calle de San Marcial, a dos pasos de la playa de la Concha, la central estaba equipada para 5.500 abonados y contaba con cuatro centrales “satélite” en Miracruz, Pasajes, Rentería y Hernani. El sistema automático de San Sebastián instalado y puesto en marcha por la sueca Ericsson fue, durante muchos años, un ejemplo de perfección en su funcionamiento, como demuestra el hecho de que prestara servicio ininterrumpido hasta noviembre de 1987³⁰⁸.

3.50. Viernes, 11 de julio de 1924

La reversión de la red de Elche

En el comienzo del verano de 1924, el gobierno de Primo de Rivera veía con preocupación la reversión, muy próxima en el tiempo, de los centros telefónicos de varias ciudades de relativa importancia: Elche (11 de julio de 1924), Gandía (12 de octubre de 1924), Oviedo (18 de diciembre de 1924), Tarragona y Reus (4 de septiembre de 1926)³⁰⁹. En algunos casos, como el de las ciudades catalanas, la cuestión de la incautación llevaba ligada una agria polémica política; pero lo que más inquietaba en todas las situaciones, y mucho, era el estado lamentable en el que dichas redes revertían al Estado.

La revista *El Electricista*, en un número de agosto de 1924³¹⁰, explicaba el “estado verdaderamente deplorable, tanto en lo que se refiere a centrales como a líneas” en el que se encontraba el grupo telefónico de Elche cuando finalizó el plazo de explotación por parte del concesionario anterior. El día 11 de julio el Estado procedió a la incautación del grupo telefónico que comprendía a la ciudad alicantina y

³⁰⁶ Gutiérrez-1997, p. 255.

³⁰⁷ Yuste-2004, p. 173.

³⁰⁸ Yuste-2004, p. 328.

³⁰⁹ Yuste-2004, pp. 161-163.

³¹⁰ *El Electricista*, 15 de agosto de 1924, nº 830, pp. 6807-6808.

a otros pueblos de su área de influencia y a juzgar por el informe del oficial de la Dirección General de Comunicaciones encargado de realizar esta gestión, Ervigio Blanco, las condiciones no podían ser más nefastas. La situación era tal que se declaraba imprescindible enviar inmediatamente gran cantidad de material y numerosos técnicos para reparar la red y poder reorganizar el servicio. Una de las primeras acciones tenía que ser, necesariamente, proceder a atender las numerosas peticiones de nuevos abonos que estaban en lista de espera.

El caso de Elche es sólo un ejemplo de lo que ocurría a lo largo y ancho de la geografía española. A este respecto, Pérez Yuste apunta:

Ante esta situación desesperada, es muy probable que la oferta de la CTNE resultara demasiado deslumbrante para un Directorio nada versado en cuestiones telefónicas, pero muy concienciado con la necesidad urgente de resolver un mal que estaba alcanzando la categoría de endémico. El deficiente desarrollo de la telefonía era, primero de todo, un serio obstáculo para las exigencias de mantenimiento del orden público que demandaba la Dictadura; y segundo, constituía una rémora muy importante para el crecimiento del capitalismo español de la postguerra mundial, base fundamental para la consolidación de un nacionalismo económico poderoso.

3.51. Lunes, 14 de julio de 1924

El Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales

Uno de los objetivos fundamentales de la Dictadura de Primo de Rivera fue acabar con el caciquismo inherente a la política de ayuntamientos y diputaciones. Para ello, era necesario poner orden en la estructura administrativa local y provincial, depurando todas las normas y criterios legales que habían protagonizado el funcionamiento de estas corporaciones durante la Restauración. El Estatuto Municipal promulgado por Decreto-ley en marzo de 1924 supuso el primer paso para conseguir ese “saneamiento” de la política local y regional. Cuatro meses después, el 14 de julio de 1924, se dictaba además el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales³¹¹, que venía a reforzar los términos en los que se había expresado dicho

³¹¹ Real Decreto del Presidente del Directorio Militar, de 14 de julio de 1924. Gaceta de Madrid, 16 de julio de 1924, nº 198, pp. 363-374.

estatuto y constituía un marco formalizado para todas las obras que los ayuntamientos hubieran de realizar u otorgar en materia de servicios y bienes locales.

Ya vimos como, en materia telefónica, el Estatuto Municipal se expresaba claramente a favor de ceder el control de las redes telefónicas a los consistorios, convirtiéndose estos en los auténticos gestores de la telefonía en los municipios españoles. Los ayuntamientos adquirirían el derecho de instalar y explotar sus propias redes urbanas o de otorgar una concesión a otra entidad si así lo consideraban oportuno. Por así decirlo, los dueños pasaban a ser los municipios, en detrimento del Estado. El nuevo Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales insistía en esta idea a través de la sección cuarta del capítulo segundo titulada “De las redes telefónicas”:

Artículo 84. En virtud de lo dispuesto en el apartado 8.º del artículo 150 del Estatuto, corresponderá en lo sucesivo a los Ayuntamientos la concesión de líneas telefónicas que no rebasan los límites del término municipal, respetando los derechos adquiridos y los preferentes por el Estado para el desarrollo de planes de conjunto. Los Ayuntamientos podrán construir y explotar por sí mismos las líneas y redes telefónicas urbanas, o bien otorgar su establecimiento y explotación, cuando el Estado renuncie a ello, a Sociedades, Empresas o particulares, mediante las condiciones que se especificarán al otorgar la respectiva concesión.

Artículo 85. Continuará vigente el Reglamento para el establecimiento y explotación del servicio telefónico, aprobado por Real decreto de Gobernación de 30 de Junio de 1924³¹², con las siguientes salvedades: [...]

c) Que al terminar el plazo de concesión, las nuevas redes y su material no pasarán al Estado, sino a los municipios respectivos. [...]

Si ya sorprendía que el Directorio se expresara en estos términos en materia telefónica en el mes de marzo de 1924, choca aún más que se reafirmara en esta idea de municipalización de la telefonía durante el verano de aquel año. En abril, la CTNE había sido constituida y había entregado un proyecto de reforma del sistema nacional,

³¹² Se refiere a la Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 30 de junio de 1914. Gaceta de Madrid, 10 de julio de 1914, nº 191, pp. 82-89. Ver apartado 2.2.3 del presente Trabajo Fin de Máster.

lo que provocó que en mayo fuera nombrada una comisión para examinar aquella proposición y otras que pudieran presentarse, todo ello por supuesto en contra del Estatuto Municipal que se había sancionado un par de meses antes. Por si todo ello no fuera suficientemente contradictorio, el Directorio promulgaba este Reglamento un poco después de que la comisión (encargada de estudiar la reorganización de todo el sistema nacional, incluyendo las redes municipales) hubiera emitido su informe, mientras las negociaciones con la ITT se encontraban en su momento álgido y sólo un mes antes de que el Gobierno tomara la decisión definitiva de entregar el monopolio de la telefonía española a la CTNE. Por supuesto, estas normativas de marzo y julio de 1924 tocaban otros muchos temas de la vida municipal del país, pero, en lo que respecta a materia telefónica, bien se podrían haber ahorrado el articulado, ya que carecía totalmente de sentido o aplicación práctica, viendo los designios que estaba siguiendo el proceso.

Algunos investigadores han apuntado que esta manera de actuar tan contradictoria pudo responder o bien a la intención de crear una “cortina de humo” mientras el Gobierno negociaba con la CTNE o bien a que el Directorio “navegaba en un mar de dudas sobre la mejor forma de resolver el atraso telefónico de España”³¹³. Pérez Yuste indica que la segunda parece más probable. Las contradicciones se sucedían una tras otra: primero Tafur Funés se declaraba favorable a la municipalización de la telefonía, para luego denegar una prórroga en su concesión a la ciudad de Santander, mientras que unas semanas más tarde se publicaba el Estatuto de 8 de marzo que se acercaba a la opinión del Director General, seguido por la convocatoria de un “concurso” para la reorganización de todo el servicio telefónico nacional y poco después por un Reglamento que venía a remachar lo dicho en el Estatuto Municipal. Quizá porque la comisión nombrada en mayo declaró “inaceptables” todos los proyectos presentados, Primo de Rivera se decantó por mantener su idea de entregar la telefonía urbana a los ayuntamientos. No obstante, en poco más de un mes, la proposición de la CTNE pasaría de “inaceptable” a “conveniente” gracias a las escasas modificaciones que el Gobierno consiguió introducir en el Proyecto de contrato de Sosthenes Behn.

Una vez más, parece que la publicación de este Real Decreto no causó gran preocupación en la figura del Coronel, que si bien se mantenía prudente ante la actitud

³¹³ Yuste-2004, p. 123.

titubeante de Primo de Rivera en materia telefónica, no dejó de aplicar todas sus artes negociadoras para la consecución de sus objetivos.

Irónicamente, en el Real Decreto de 25 de agosto de 1924 por el que se otorgaba a la CTNE la misión de organizar el servicio telefónico nacional, se tuvieron que declarar como “no aplicables al contrato” todas las normativas (¡incluyendo aquellas de rango superior!) que entraran en contradicción con el mismo, como la Ley de Administración y Contabilidad Pública de 1907, el Estatuto Municipal de marzo de 1924 y hasta este Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales que tenía sólo un mes de vida.

3.52. Viernes, 25 de julio de 1924

Los planes del Cuerpo de Telégrafos para Madrid

En la edición de *El Electricista* de 25 de julio de 1924 se publicaba un breve artículo en el que se informaba sobre los planes del Cuerpo de Telégrafos para la central telefónica de Madrid cuando esta red revertiera al Estado³¹⁴. La revista hacía referencia a la Real Orden de 25 de junio de 1923 en la que se disponía “que el edificio propiedad del Estado, sito entre las calles de San Ricardo, Paz y plaza de Pontejos, se designe a la instalación de la Central telefónica de la red urbana de Madrid y servicios anejos, dependientes de la Dirección general de Telégrafos”³¹⁵. Cuando la compañía concesionaria hiciera entrega del centro telefónico urbano el 4 de septiembre de 1926³¹⁶, los telegrafistas se encargarían de sustituir la vieja central telefónica situada en el número 1 de la calle Mayor por una nueva, que se encontraba muy cerca de la anterior. Este “nuevo” edificio, que era propiedad del Estado y se encontraba en la plaza de Pontejos, había albergado, en el pasado, la central telegráfica de la ciudad. La Real Orden indicaba que, dada la proximidad de los dos inmuebles, “sería de gran sencillez técnica y económicamente la nueva instalación, pudiendo afirmarse que el servicio de los abonados no se interrumpiría ni un minuto”.

³¹⁴ *El Electricista*, 25 de julio de 1924, nº 828, p. 6794.

³¹⁵ Real Orden del Ministerio de la Gobernación, de 25 de junio de 1923. *Gaceta de Madrid*, 29 de junio de 1923, nº 180, p. 1226.

³¹⁶ Existe una errata en el artículo publicado por *El Electricista*, ya que indicaba que la fecha de reversión de la red se realizaría en el año 1925.

El redactor de *El Electricista* llamaba la atención al Director General de Comunicaciones sobre este asunto, instándole a hacer las gestiones necesarias, “con antelación bastante, para que, al llegar el día, no existan dificultades en este importante asunto”. Como se puede apreciar, el Cuerpo de Telégrafos todavía albergaba esperanzas de que sus demandas se vieran satisfechas y que todas las líneas y centros telefónicos fueran poco a poco pasando a sus manos. En este sentido, esperaban con impaciencia la llegada de la reversión de la red de Madrid, la más rentable y quizá también la más necesitada dada su importancia estratégica, y meditaban planes para la reforma de las propiedades telefónicas que habrían de incautarse en septiembre de 1926. En el siguiente apartado vamos a ver como las preocupaciones de Tafur Funés se encontraban, en aquellos momentos, muy lejos de estas cuestiones que *El Electricista* se encargaba de recordarle. Como sabemos, todos estos proyectos dejarían de tener significado sólo un mes más tarde cuando el rey firmara el Real Decreto de 25 de agosto de 1924 por el que se entregaba el servicio telefónico nacional a la CTNE, incluyendo todas las redes del Estado y las que habrían de revertir en el futuro.



Figura 7. Aspecto de la torre de cables de la antigua central de la calle Mayor de Madrid durante su desmontaje. Fuente: Telefónica.

3.53. Jueves, 31 de julio de 1924

Las negociaciones del verano de 1924

La publicación de la Real Orden de 11 de mayo de 1924, por la que se nombraba una comisión para estudiar, examinar y proponer al Gobierno la solución más adecuada para la reorganización de la telefonía española, dio comienzo también a una etapa de intensa negociación entre Sosthenes Behn y su círculo de colaboradores y las autoridades del Estado español, desde el Director General de Comunicaciones hasta el mismísimo rey Alfonso XIII.

Durante todo este tiempo, el Coronel se instaló en el hotel Ritz de Madrid, donde organizaba fiestas fabulosas y otras reuniones sociales a las que asistía la alta sociedad madrileña. Behn desarrolló una intensa vida social, rodeándose de las personalidades adecuadas que le sirvieran como canal de influencia para conseguir sus objetivos. En este sentido, algunos de aquellos invitados terminaron siendo destacados colaboradores de la CTNE con el paso del tiempo³¹⁷.

Sosthenes Behn era consciente de que tenía que desplegar todo su poder de negociación al más alto nivel y no escatimó en esfuerzos. Todo parece indicar que su contrincante sueco, la firma Ericsson, y su opositor español, el Cuerpo de Telégrafos, no le preocupaban tanto como las interminables dudas que parecían atormentar a Primo de Rivera en la cuestión telefónica, que provocaban que no se decidiera por una solución concluyente y definitiva. Para luchar contra esa actitud dubitativa, y ya de paso contra el poder de la Ericsson y la actitud hostil de los telegrafistas, se reunió, a lo largo del verano de 1924, con Tafur Funés y con varios miembros del Directorio Militar en varias ocasiones.

Behn jugaba fuerte. Maurice Deloraine, un antiguo directivo de la ITT, apuntaba en su libro que aquellas reuniones del Coronel llegaron incluso a un nivel superior y que se entrevistó más de una vez con el propio rey Alfonso XIII. Como nota anecdótica, el autor relataba que en una de esas audiencias, ante la actitud desconfiada de Behn, el monarca le espetó: “Mientras hablamos, usted no ha dejado de mirar por esa ventana, desde la que se ve la entrada de palacio, para ver si llegan

³¹⁷ Yuste-2004, pp. 164-165.

sus competidores y para espiar mis visitas”³¹⁸. No es descabellado pensar que estas reuniones tuvieron lugar, ya que entre los miembros del Consejo de Administrador se contaba con dos personas cercanas al monarca y que pudieron interceder para que el Coronel consiguiera audiencia real: el Marqués de Urquijo, que ya era Presidente de la compañía, y el Marqués de Perijáa, a la postre Tesorero general de la CTNE. Los investigadores Ángel Calvo Calvo y Adoración Álvaro Moya también defienden la teoría de que Behn se reunió en aquellos días con Alfonso XIII y con el general Primo de Rivera³¹⁹.

En estos momentos también contó con la ayuda del embajador estadounidense en Madrid, Alexander P. Moore, que habría de desplegar también el poder de la diplomacia internacional a favor de la ITT, intercediendo por los intereses de ésta ante el Gobierno español, a pesar de que, oficialmente, el Gobierno de Estados Unidos era contrario a los monopolios empresariales³²⁰. La embajada no dudó en defender la superioridad del sistema telefónico norteamericano, desprestigiando también el buen funcionamiento del material telefónico producido por la Ericsson³²¹. Ya hemos visto, además, como el plenipotenciario estaba al tanto de todos los movimientos con respecto al asunto telefónico y se los comunicaba puntualmente al Departamento de Estado del Gobierno en Washington. Además, Behn también tuvo que hacer uso de sus contactos en Estados Unidos para acallar una serie de historias aparecidas en periódicos norteamericanos sobre la desastrosa situación de los teléfonos en España y el interés que la multinacional estaba demostrando para solucionarlo. El Coronel tenía miedo de que el orgullo nacionalista de Primo de Rivera se viera herido³²².

De todos los contactos, el que sin duda fue más útil fue el del Director General de Comunicaciones. Gracias a las ponencias del Directorio Militar que a continuación pasaremos a analizar y a otros documentos históricos³²³, se sabe que las reuniones entre los representantes de la CTNE y Tafur fueron numerosas durante aquellos

³¹⁸ El País, 18 de julio de 1982. El autor del artículo hace referencia al libro que Maurice Deloraine escribió en 1974 (“Des ondes et des hommes: jeunesse des télécommunications et de l'ITT”) y al que desgraciadamente no hemos podido tener acceso en esta investigación.

³¹⁹ Álvaro-2005, p. 10; Calvo-2010, p. 127.

³²⁰ Álvaro-2005, p. 10.

³²¹ Yuste-2004, p. 174.

³²² Yuste-2004, p. 175.

³²³ Acta nº 2 del Consejo de Administración, 21 de agosto de 1924, libro 1, p. 5.

meses de verano. Fruto de estas entrevistas fue el apoyo manifiesto que el Director General dio a los planes de la CTNE y que sin duda ayudó a inclinar la balanza de los generales del Gobierno a favor de la concesión del sistema nacional al proyecto de Sosthenes Behn. No hay que olvidar tampoco que sería Tafur Funés el que desestimó las proposiciones de la Siemens-Halske y de la New Antwerp Telephone y el que rechazó la convocatoria de un verdadero concurso según las bases recomendadas por la Comisión en su informe final de 28 de junio de 1924.

El Ministro de Comunicaciones de la II República, Diego Martínez Barrios, uno de los personajes más críticos con la concesión realizada por el Estado español a la CTNE, daba cuenta de una carta enviada por Sosthenes Behn al coronel Tafur el 31 de julio de 1924. La existencia de dicha misiva ha podido ser confirmada gracias a los archivos de Gumersindo Rico, si bien no ha podido ser encontrada³²⁴. En ella el presidente de la ITT supuestamente informaba al Director General de que aquel mismo día se habían producido una serie de cambios en el Consejo de Administración de la compañía: se habían nombrado cuatro nuevos consejeros (el Marqués de Urquijo, Sosthenes Behn, Hernand Behn y Lewis J. Proctor) y se había designado Presidente al Marqués de Urquijo. La carta adjuntaba la certificación de los acuerdos, firmada por el Secretario general de la CTNE, Gumersindo Rico.

Con respecto a esta carta, en primer lugar es importante apuntar que todos aquellos cambios en el Consejo de Administración de la sociedad se produjeron no el día 31 de julio de 1924, sino, como ya sabemos, el 19 de abril de 1924, en la jornada en la que la CTNE fue creada. De esto se deduce que o Sosthenes Behn mentía en su carta (y por lo tanto tuvo que falsificar los certificados) o Martínez Barrios cometió una equivocación al referirse a dicha información. Sea como fuere, no deja de sorprender que este tipo de información dirigida al Director General no fuera comunicada por el nuevo presidente de la compañía, sino por un vocal de su Consejo de Administración. En este sentido, Martínez Barrios se expresaba así en 1931:

No se entiende el Director General de Comunicaciones con el Marqués de Urquijo, Presidente de la flamante Compañía Telefónica Nacional, según dicha carta, que da el detalle de su Consejo de Administración, ni con ninguno de los Consejeros españoles. Se entiende con Mr. Sosthenes Behn, Presidente de la citada International.

³²⁴ Yuste-2004, p. 168 y pp. 174-175.

Este descubrimiento, que para aquel ministro de la II República tuvo que ser un hallazgo sorprendente, se entiende a la perfección hoy en día, ya que, como hemos visto, el auténtico interlocutor de las negociaciones fue Sosthenes Behn, presente en España durante todo aquel tiempo. El papel del Marqués de Urquijo en la compañía, tanto en aquellos primeros momentos como en todos los que habrían de venir después, era más bien “decorativo” y carecía de poder ejecutivo real. Su función durante las negociaciones previas a las firmas del contrato se limitó, sin duda, a servir de contacto para llegar a las personas adecuadas, dejando a Sosthenes Behn la labor representante de la sociedad española.

En aquella carta, el presidente de la ITT también declaraba que las intenciones de la multinacional no pasaban más que por ayudar técnica y financieramente a la CTNE, dejando sólo una representación americana igual a la tercera parte del Consejo de Administración de la compañía española. Además incidía en la capacidad económica de la ITT, que contaba con el capital necesario para llevar a cabo todos los proyectos que se había propuesto. De esta forma parecía apartarse de lo manifestado en la proposición que había sido presentada al Gobierno en abril, con la intención, suponemos, de que el Directorio escuchara lo que quería oír y de no despertar demasiadas sospechas en el espíritu nacionalista de Primo de Rivera. Con respecto a estas manifestaciones sí podemos decir que Behn no contó toda la verdad en la carta dirigida a Tafur Funés: los acontecimientos posteriores demuestran que los planes de la ITT no eran tales y que el Coronel no tuvo ningún miramiento a la hora de reeditar a finales de agosto el contrato privado entre las dos compañías, cambiando muy pocos términos de los expresados en aquel primero de 19 de abril.

Sobre la influencia que Behn y su equipo ejercieron en el coronel Tafur para conseguir el apoyo explícito al proyecto de la CTNE da cuenta el archivo de Gumersindo Rico al que tuvo acceso el investigador Antonio Pérez Yuste durante las investigaciones realizadas para su tesis doctoral de 2004³²⁵:

Celebramos numerosas entrevistas a petición del digno, competente y caballeroso coronel Tafur, que a la sazón desempeñaba el cargo de Director de Comunicaciones [...]. En todas aquellas gratas reuniones tuvimos oportunidad de demostrar la flexibilidad de nuestra adaptación a los requerimientos de carácter oficial conforme al recto criterio que los inspiraba, y ese mismo espíritu

³²⁵ Yuste-2004, p. 175.

nos animó más tarde, cuando aceptamos todas las modificaciones explanadas por los miembros del Directorio Militar, en el curso de las audiencias que a esos fines tuvo la gentileza de concedernos.

Estas palabras demuestran la excelente relación entre Tafur y la CTNE y contrastan ampliamente con todas las manifestaciones públicas que el Director General había realizado mostrándose a favor de las reivindicaciones del Cuerpo de Telégrafos. El Director General sí se había mostrado, en su segunda reunión con el Centro Telegráfico Español a finales de noviembre, partidario de convocar un concurso para la reconstrucción de las redes interurbanas, al que concurrirían empresas extranjeras, con la intención de introducir en España los últimos adelantos de esta tecnología. Por aquel entonces era su opinión que, según la empresa adjudicataria fuera construyendo las líneas, las iría entregando al Estado para su explotación. No obstante, los proyectos que se estaban moviendo por los despachos del Gobierno en aquel verano de 1924 ya distaban mucho de aquella primera idea de los últimos meses de 1923, en tanto en cuanto las discusiones no trataban únicamente de la reconstrucción de las líneas interurbanas, sino de la reorganización y explotación de todo el sistema telefónico nacional. Tafur Funés o bien cambió de parecer en aquel tiempo transcurrido o bien hubo de ceder ante las negociaciones y presiones de la ITT.

3.54. Lunes, 11 de agosto de 1924

Primer informe del general Mayandía

Según el curioso sistema de “ponencias” por las que se regía el funcionamiento del Directorio Militar de Primo de Rivera, fueron dos los generales que se encargaron de presidir la ponencia para estudiar la adjudicación del servicio telefónico nacional: Antonio Mayandía Gómez y Francisco Ruíz del Portal y Martínez. Los informes de dicha ponencia se han conservado en el Archivo Histórico Nacional y arrojan datos muy interesantes con respecto a las deliberaciones del Gobierno durante el mes de agosto de 1924 en la cuestión de la concesión a la Compañía Telefónica Nacional³²⁶.

El primer documento, fechado el 11 de agosto de 1924 y firmado por el general Mayandía, se titula “Informe relativo a los proyectos de contrato de servicio telefónico

³²⁶ Ponencias del Gobierno de Primo de Rivera sobre el proyecto de contrato de servicios telefónicos con la CTNE, agosto de 1924. Archivo Histórico Nacional, caja nº 223-1, expediente 6.

presentados por varias Sociedades, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de la Presidencia de 11 de Mayo último”. Este texto abre con la confirmación explícita de una hipótesis que se dibujaba como única explicación posible para todo este proceso, si bien no estaba probada documentalmente: que la convocatoria del “concurso” del mes de mayo y la creación de la comisión habían sido motivadas por el proyecto que la CTNE presentó a Primo de Rivera en abril³²⁷. De esta forma se indicaba:

El Directorio Militar tomó en consideración la aludida proposición, dictándose la Real orden de 11 de Mayo último en la que se nombró una Comisión especial para que llevase a cabo el estudio de la misma, especialmente desde el punto de vista financiero, ya que desde el técnico, el problema está suficientemente claro. Al propio tiempo que la Comisión llevase a cabo dicho estudio, en la citada Real orden se disponía que podrían admitirse todas las proposiciones que se presentasen con arreglo a determinadas condiciones que la Soberana disposición citada menciona.

El Gobierno reconocía el grave problema telefónico que había en España y que la Compañía Telefónica Nacional de España se había ofrecido a firmar un contrato con el Estado a fin de llevar a cabo la instalación de una “red completa y moderna”, recalcando que el erario público no tendría que realizar ningún desembolso. Más al contrario, el Estado podría “obtener participación inmediata en los ingresos de la compañía”.

Al “concurso especial de proposiciones libres” se habían presentado cuatro proyectos: el de la Compañía Telefónica Nacional de España, el de la Compañía de Teléfonos Ericsson, el de la Siemens-Halske (presentada por un tal Guillermo Zimmoseck) y el del llamado “Grupo Belga”. A pesar de que el informe final de la comisión estableció que ninguna era aceptable, el general Mayandía indicaba que sólo las dos últimas fueron rechazadas por la Dirección General, por lo que se concedió una segunda oportunidad a las dos primeras.

Con respecto a la propuesta de la New Antwerp Telephone and Electric Works, el “Grupo Belga”, fue rechazada por la Dirección General de Comunicaciones a

³²⁷ Según el general Mayandía, el proyecto fue presentado a Primo de Rivera el 19 de abril de 1924, si bien en el acta número 2 del Consejo de Administración de la CTNE se indica que fue el día 21 de abril. Posiblemente el general Mayandía se confundió con la fecha de constitución de la CTNE.

principios de verano porque no se ajustaba a ninguna de las “condiciones esenciales” que estipulaba la Real Orden de 11 de mayo. En unas frases un tanto confusas se añadía que la compañía no dejaba del todo claro sus intenciones “acerca de la organización que se intenta”, ya que en algunos puntos se consideraba a sí misma como constructora, mientras que en otros se atribuía el carácter de explotadora. No obstante, a continuación decía que la empresa pretendía conseguir plena libertad para la explotación del servicio telefónico, que, según palabras del general Mayandía, sería contraria a la soberanía del Estado “tan importante de las comunicaciones”. Es interesante hacer notar en este punto que esta libertad absoluta fue precisamente lo que consiguió la CTNE cuando firmó el contrato con el Estado dos semanas más tarde. Este acuerdo era tan favorable a los intereses de la compañía que en algunos aspectos llegaba a situarse al margen de la ley, circunstancia que aprovechó la Telefónica durante años para actuar con total impunidad.

El proyecto de la alemana Siemens y Halske fue rechazado, también por Tafur Funés a principios de verano, porque fue presentado fuera de plazo, cuando la comisión ya había emitido informe y había sido disuelta. Por si esta explicación no fuera suficiente, el general Mayandía hacía también constar que la Dirección General de Comunicaciones se había manifestado en contra de dicho proyecto por varios motivos: “no se cita ni el capital social, ni los Bancos que han de garantizarlo, ni la constitución de Compañía solvente que garantice el cumplimiento”. Este último argumento no puede ser más peregrino, ya que la firma Siemens se trataba de una empresa competente y experimentada, una de las más importantes del mundo en el sector telefónico, con más de 75 años de historia, más de 50 años en el mercado español y que había sido constituida oficialmente en nuestro país en 1902. Es decir, de las cuatro empresas que presentaron sus proyectos, la Siemens se trataba de la participante más potente, la que contaba con mayores éxitos nacionales e internacionales que garantizaban su solvencia y la más veterana en los círculos empresariales españoles. Contaba además con varias fábricas en territorio nacional, experiencia demostrada en la instalación de centrales automáticas y varios contratos con administraciones públicas españolas para la instalación de servicios tan diversos como los tranvías o el alumbrado público.

Comparada con la Siemens, la Compañía Telefónica Nacional no tenía absolutamente nada que ofrecer, más que el contar con el apoyo técnico y económico de una empresa norteamericana con ¡cuatro! años de historia, en plena etapa de crecimiento, con poca experiencia como explotadora de redes y ninguna experiencia

como productora de material telefónico. La CTNE, que había sido creada sólo un par de meses antes, no disponía si quiera del capital social necesario para emprender una tarea como la que se proponía ya que, en estos momentos, dicho capital ascendía a la ridícula cantidad de 1 millón de pesetas. Se desconocen, por lo tanto, las condiciones que, en opinión del Director General de Comunicaciones, tenían que cumplir estas empresas para contar con “la constitución de Compañía solvente que garantice el cumplimiento” del contrato.

Descartadas las firmas belga y alemana, quedaban dos proyectos a tener en cuenta, el de la CTNE y el de la casa Ericsson. Decía Mayandía que estas dos propuestas habían sido estudiadas por la comisión primero y por la Dirección General de Comunicaciones después y que, como consecuencia de las observaciones formuladas, los licitadores habían modificado “por propia voluntad” los proyectos iniciales. Así es como habían llegado dichas proposiciones a mano del Directorio Militar, para su examen y estudio.

No obstante, aún habían pasado un último filtro: un estudio comparativo realizado por Tafur Funés en relación con trece epígrafes o “características esenciales”. En base a este nuevo análisis, el Director General se declaraba partidario del proyecto de la CTNE, por lo que el vocal del Gobierno declaraba que “la proposición más ventajosa es sin duda alguna, la presentada por la Compañía Telefónica Nacional”. Como ya hemos visto con anterioridad, los archivos de Gumersindo Rico demuestran que las reuniones entre los representantes de la CTNE y el Director General fueron numerosas durante aquel verano, celebrándose incluso “a petición del coronel Tafur”, pero ningún documento ha manifestado que éste se entrevistara también con la Directiva de la Ericsson para conversar en los mismos términos. Las negociaciones se estaban llevando a cabo únicamente con Sosthenes Behn y sus colaboradores, así que el único “enemigo” que éstos tenían que batir eran las dudas en las que parecía sumido el Directorio Militar. No había ya motivo para seguir tratando con la firma sueca, así que fue necesario hacerla desaparecer del panorama gracias a este estudio comparativo.

Estos trece aspectos comparados fueron: constitución y garantías, incautación de las redes actuales, plazo de concesión, reversión, redes urbanas que se proponen establecer, redes interurbanas a establecer, tarifas, indemnización por incautación, concierto telegráfico con el Estado, canon a percibir por el Estado, intervención del Estado, personal telefónico actual, sanciones por incumplimiento y contabilidad. Según el Director General, la CTNE mejoraba a la Ericsson en todos los trece puntos, aunque

de la lectura crítica de algunos de ellos no termina de entenderse por qué la firma española se encontraba mejor preparada en ese aspecto que la sueca. En algunos puntos da la sensación de que Tafur Funés inclina la balanza del lado de la CTNE de una manera un tanto artificiosa, sin razones de peso importantes.

De las trece características comparadas vamos a detenernos un instante, por su importancia posterior, en la valoración que Tafur Funés hace de la “constitución y garantías” que ofrece la CTNE. Aquí se indica que la sociedad está constituida y domiciliada en Madrid, sujeta a las leyes españolas, y que ofreció constituir una fianza de cinco millones de pesetas “para garantizar el pago de las actuales redes propiedad del Estado”. Es decir, que en el proyecto que a estas alturas se encontraba en manos de la Dirección General y del Gobierno existía una cláusula que indicaba que esta cantidad se entregaría como fianza por la compra de todos los centros telefónicos y líneas que en aquellos momentos se encontraban en manos del Cuerpo de Telégrafos.

Si bien el estudio se inclina por la propuesta de la CTNE, destacando no pocos aspectos negativos del proyecto de la firma sueca, nada parece indicar que a ésta se le diera la oportunidad de mejorar su proposición, corrigiendo aquellas “características esenciales” en las que había quedado por debajo de la sociedad española. El general Mayandía, una vez detallados los trece temas comparando ambas propuestas, descartaba automáticamente el proyecto de la Ericsson y procedía a comentar las mejoras a introducir por la compañía española:

Expuesto lo que antecede, respecto al estudio comparativo de ambas proposiciones, la Ponencia de acuerdo con el parecer de la Dirección General de Comunicaciones estima que la proposición Telefónica Nacional es superior y ofrece mucho (sic) más garantías que la presentada por la Ericsson. Sin embargo aun cuando en la proposición presentada por la Telefónica Nacional han sido ya tenidas en cuenta las observaciones formuladas por la citada Dirección General de Comunicaciones, la Ponencia después de detenido examen del asunto, considera conveniente llamar la atención sobre algunos extremos que son de excepcional importancia.

De esta manera tan sutil se da carpetazo al proyecto de la Ericsson, sin darle oportunidad si quiera de introducir las mejoras necesarias, quedando únicamente la CTNE como la única empresa en liza, aunque a ésta sí se le dio la oportunidad de corregir algunos aspectos que no eran del agrado del Directorio.

El primer extremo que el Gobierno consideraba de excepcional importancia modificar era aquel relacionado con el pago que el Estado debería realizar en el momento en el que éste quisiera incautarse de la red telefónica. Este desembolso, de producirse, tenía que ver con un concepto denominado cantidad neta invertida, que se calculaba en función de todos los pagos en los que hubiera incurrido la compañía desde el inicio del contrato con el Estado hasta la incautación de las líneas. El general Mayandía consideraba que “no puede admitirse de ninguna forma [...] que en la cuenta de la cantidad neta invertida incluya la Compañía sumas que aunque las haya pagado realmente lo han sido de un modo indebido”. Como veremos más adelante, lejos de modificarse este punto tan desfavorable para los intereses del Estado, el contrato final firmado entre éste y la Telefónica Nacional fue redactado de tal forma que permitió que la compañía inflara artificialmente el valor de la cantidad neta invertida, provocando a la postre que el desembolso del erario público en el momento de la reversión fuera mucho mayor a lo que debería. El general Mayandía incidía en otros aspectos que no deberían incluirse en la cantidad neta invertida, como las mejoras o ampliaciones que se efectuaran en el servicio o los gastos por sustitución de material, ya que no correspondían estos a una inversión de primer establecimiento.

La cláusula 22 del Proyecto de contrato, que se refería a la incautación por el Estado en caso de guerra o de grave alteración de orden público, también era objeto de controversia, considerándose como inadmisibles. Mayandía argumentaba que “el Estado, en caso de guerra, no puede en forma alguna comprometerse a indemnizar a la Compañía todos los perjuicios y daños que ocasione la explotación en el caso de que el Estado la tome temporalmente a su cargo. Esta industria, como las demás, sufrirá los perjuicios correspondientes”. Por último se reseñaban otras observaciones de menor importancia, pero que, a juicio de la ponencia, debían tenerse en cuenta.

A continuación, el informe recuerda que la subcomisión financiera de la comisión nombrada por la Real Orden de 11 de mayo había “redactado unas bases que podrían servir para un concurso en el caso de que no aceptase ninguna de las proposiciones presentadas”. Ya hemos visto como el Gobierno se encontraba, desde hacía semanas, inmerso en un proceso de intensa negociación con la ITT/CTNE para otorgarle a ésta el control de la telefonía española, por lo que no entraba en sus planes convocar un concurso según las bases propuestas por los tres vocales de la subcomisión financiera en su informe final del día 28 de junio. Así que el general Mayandía dedica unos párrafos a explicar los motivos por los cuales no se consideraban admisibles las condiciones propuestas por la comisión, realizando un

importante esfuerzo argumentativo, que llega a ser un tanto confuso en algunos puntos. La conclusión final era que no se iba a convocar un concurso porque las bases sugeridas no eran de su agrado y que se iba a continuar con el proceso de negociación con el proyecto que se consideraba más positivo: el de la Compañía Telefónica Nacional.

Para terminar, la ponencia hacía presente que la celebración de este contrato entre el Estado y la empresa conllevaría que no pocas normativas legales vigentes tendrían que dejarse en suspenso, ya que iban en contra de los términos que se firmarían en ese convenio. Mayandía nombra el Estatuto Municipal de marzo de ese mismo año, el Reglamento promulgado sólo un mes antes y la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911. Es decir, el Gobierno reconocía de esta forma que la celebración de este contrato no era todo lo legal que debería y que además se oponía a varias medidas llevadas a cabo por el propio Directorio Militar con el fin de mejorar la vida social y política del país. Por todo ello, el informe advertía que, “de llevarse adelante este asunto, sería preciso la publicación de un Real Decreto ley, en el que se autorizase al Gobierno para celebrar este contrato de servicio telefónico, sin las solemnidades de subasta o concurso que fija la Ley de Contabilidad”, tal y como ya se habían encargado de especificar en la modificación del artículo 55 de dicha ley en el Real Decreto de 31 de mayo de 1924.

3.55. Miércoles, 13 de agosto de 1924

Informe del general Ruíz del Portal

El otro vocal del Directorio Militar encargado de presidir la ponencia para estudiar la adjudicación del servicio telefónico nacional fue Francisco Ruíz del Portal y Martínez, que emitió un nuevo informe dos días después del redactado por el general Mayandía. Los términos en los que se expresaba eran muy similares a los del primero, de lo que se intuye que a los dos miembros del Gobierno les fue encomendada la tarea a la vez, contaron con la misma documentación proporcionada por Tafur Funés y que las conclusiones a las que llegaron fueron muy parecidas, como no podía ser de otra forma, vista la clarísima predisposición de la Dirección General de Comunicaciones a otorgar la concesión a la Compañía Telefónica Nacional.

Este texto de Ruíz del Portal realiza una exposición aún mayor del asunto que se estaba estudiando en aquella ponencia, reproduciendo en primer lugar el contenido del proyecto presentado por la CTNE en el mes de abril: sus apoyos bancarios, la

constitución del Consejo de Administración, el estado desastroso de la telefonía española, lo que ofrecía la compañía, etc. Se reconoce igualmente que la Real Orden de 11 de mayo fue dictada como consecuencia directa de esta proposición realizada al Estado y que los otros tres proyectos fueron presentados por la publicación de esta norma. Cuando el general Ruíz del Portal argumenta por qué los proyectos del “Grupo Belga” y de la Siemens fueron descartados expone unos motivos similares a los ya ofrecidos por Mayandía dos días antes. Sin embargo, aporta un dato interesante:

Como del estudio de este proyecto [el de la Siemens] se deduce su inferioridad con respecto al presentado por la Casa Ericsson, la Ponencia entiende que procede desecharlo, quedando por consiguiente reducida su misión al estudio comparativo de este último proyecto y el presentado por la Compañía Telefónica Nacional de España.

Se entiende entonces que la Dirección General de Comunicaciones y la ponencia del Gobierno no trataban de valorar los cuatro proyectos por igual, sino que primero se elegía el mejor de los tres extranjeros, para luego comparar el ganador con el de la CTNE. La evaluación no trataba a los cuatro por igual ya que se otorgaba a la sociedad española una posición de ventaja, quizá “otorgada” por haber sido la inspiradora de la Real Orden y de la creación de la comisión valorativa.

Después de repasar, de nuevo, los trece aspectos comparados por Tafur Funés entre el proyecto sueco y el español, descartaba también la proposición de la Ericsson y se decantaba por la de la CTNE. Una vez el proyecto a valorar era sólo uno, se procedía a comentar algunas mejoras que, a su juicio, deberían introducirse en el Proyecto de contrato. Estas observaciones venían a completar las que el general Mayandía había hecho en su informe de 11 de agosto, aunque eran menos significativas que las primeras.

Cierra Ruíz del Portal su estudio en los mismos términos que su compañero de Gobierno, recalcando que la formalización del contrato, que parece que ya se daba por supuesto, entraba dentro del territorio de la ilegalidad, o por lo menos, de la “alegalidad”. Se requeriría la publicación de un decreto que autorizase al Gobierno a llevarlo a cabo sin las formalidades previstas en la vigente Ley de Contabilidad y en el que habría que advertir que no se aplicarían otras disposiciones que se opusieran a su cumplimiento, “como ocurre con el vigente Estatuto Municipal, que concede a los Ayuntamientos ciertas facultades que por virtud del contrato quedarían sin efecto”.

3.56. Jueves, 14 de agosto de 1924

Las modificaciones realizadas en el Proyecto de contrato

Siempre con el Proyecto de contrato de Sosthenes Behn como base de trabajo, el Gobierno negociaba con la CTNE las condiciones que habrían de firmarse en el convenio final entre la compañía y el Estado. El hecho de que éste fuera redactado partiendo del proyecto presentado por el Coronel en el mes de abril es de vital importancia ya que aquella primera versión sería redactada en términos muy favorables a los intereses de la sociedad, de tal forma que el Directorio no tuvo fácil acercar las cláusulas a entornos mucho más beneficiosos para el Estado español. No siendo suficiente con ello, Behn no fue especialmente flexible a la hora de realizar modificaciones al Proyecto de contrato inicial, tal y como vamos a comprobar a continuación.

El día 14 de agosto redactaba el general Mayandía un nuevo informe en el que se explicaban las modificaciones realizadas en el proyecto de contrato “como resultado de las conferencias celebradas con el Gerente de la Compañía Telefónica Nacional, atendiendo a las indicaciones hechas por la Ponencia”. Entendemos que el gerente al que se refiere es el propio Sosthenes Behn, ya que en aquellos momentos tan cruciales era el verdadero interlocutor de la CTNE en las negociaciones con el Gobierno. El informe de Mayandía viene acompañado por un libreto de cuatro páginas en el que se explicaban también estas modificaciones y, aunque no va acompañado de firma alguna, suponemos que fue redactado por la Dirección General de Comunicaciones como fruto de las reuniones realizadas con el Coronel.

Las enmiendas realizadas no eran realmente las estimadas como “indispensables” por los vocales de la ponencia unos días antes, sino que habían sido mermadas sustancialmente por el representante de la CTNE. Mayandía se justificaba diciendo que habían sido aceptadas “sino literalmente, en esencia”. Las modificaciones que se realizaron finalmente fueron más bien secundarias, por mucho que el informe tratara de engrandecer la importancia de estos cambios y lo convenientes que estos resultaban para el Gobierno. Los aspectos fundamentales del proyecto de contrato, los que hacían que éste fuera claramente desfavorable para los intereses del Estado, no fueron modificados de forma alguna.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la corrección realizada en la cláusula número 25 que hablaba de sanciones. Se consiguieron aumentar las cuantías

de las multas a la compañía de los ridículos valores iniciales, entre 25 y 2.500 pesetas, a un límite superior pero casi igual de risible: de 25 a 25.000 pesetas. Teniendo en cuenta el capital social que la CTNE adquirió el mismo día que el convenio con el Estado fue firmado, las multas de 25.000 pesetas a las que podía enfrentarse en caso de incumplimiento del contrato seguían siendo indiscutiblemente absurdas.

El único punto que sí podría considerarse muy interesante para el bien nacional y que había sido rectificado gracias a la labor de la ponencia fue el referido a la producción nacional de los materiales en la cláusula número 19. Ésta quedaba redactada de la siguiente manera, de forma que se concedía preferencia al mercado nacional en lo que a adquisición de equipamiento se refería:

La Compañía se obliga a emplear en sus construcciones y en sus instalaciones, materiales de producción nacional, siempre que reúnan las condiciones técnicas de las especificaciones hechas por la Compañía y pueda ésta adquirirlos en España en cantidades suficientes y a precios equitativos.

Puede parecer que esta cláusula supone una importante victoria para el Directorio, asegurando de esta forma la producción nacional de materiales y equipamiento eléctrico; pero los acontecimientos posteriores han venido a demostrar que la CTNE no hizo mucho caso a esta imposición del contrato, saltándosela siempre que lo consideraba oportuno. La coletilla de “siempre que reúnan las condiciones técnicas y puedan ser adquiridos en cantidades suficientes y a precios equitativos” fue empleada en multitud de ocasiones por la Dirección de la compañía para justificar la adquisición de materiales en el extranjero, obviando el mercado español.

Para mayor ahondamiento en la inflexibilidad de Behn a la hora de realizar concesiones a su proyecto de contrato, una de las condiciones que el Gobierno había considerado como indispensable, no se vio modificada en absoluto. Era la referida a la cláusula 22 sobre las indemnizaciones en caso de guerra o graves alteraciones de orden público. Según el libreto adjunto al que hemos hecho referencia, este punto quedaba redactado de la siguiente manera:

En caso de guerra con otra nación o por graves alteraciones de orden público, el Estado podrá tomar temporalmente a su cargo, mientras dure la anormalidad, la explotación de todos o de cualquier parte de los centros telefónicos y líneas que posea la Compañía.

En caso de guerra el Estado indemnizará a la Compañía de todos los daños y perjuicios que en justicia le corresponda.

Es decir, que la Compañía Telefónica Nacional no sufriría como las demás empresas los perjuicios correspondiente, tal y como había recomendado el general Mayandía unos días antes, sino que recibiría la indemnización pertinente para compensar las pérdidas ocasionadas por la guerra.

El informe de Mayandía concluye que la ponencia para estudiar la adjudicación del servicio telefónico nacional no tenía ya nada más que objetar al proyecto de contrato, de lo que se entiende que daba vía libre al Gobierno para efectuar la firma del contrato con la Compañía Telefónica Nacional de España cuando considerara oportuno. Se cerraba recomendando al Directorio que llevara a cabo dicho convenio “en atención a los grandes beneficios que reportaría al país la celebración de este contrato”.

La cláusula tercera del contrato con el Estado

En el convenio privado firmado entre la International Telephone and Telegraph Corporation y la Compañía Telefónica Nacional de España el día 19 de abril de 1924 se hacía referencia a una cantidad de 10 millones de pesetas que ésta última había de satisfacer al Estado español, si bien no se especificaba a qué concepto respondía:

En la cláusula tercera del proyecto de contrato mencionado, se establece que; la Compañía Telefónica Nacional de España habrá de satisfacer al Gobierno de España la suma de Diez millones de pesetas en efectivo.

El contrato también explicaba que ese capital era, en realidad, aportado por la ITT, aunque fuera la CTNE la que ingresaba el dinero en las arcas del Estado. Por otra parte, junto al resto de documentos de la ponencia sobre telefonía que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, se halla también un libreto de cuatro hojas titulado “Modificaciones al proyecto de contrato de concesión del servicio telefónico de España, pedidas por el Director General de Comunicaciones y por los secretarios de los vocales ponentes del Directorio y aceptadas por la Compañía Telefónica Nacional de España”. Gracias a este documento se conoce el contenido de dicha cláusula tercera a la que hacía mención el contrato de abril:

*Cláusula 3ª.-**El tercer párrafo quedará redactado en la forma siguiente:**En el acto de la firma de este Contrato, la Compañía estará obligada a depositar 5.000.000 (cinco millones) de pesetas en las Arcas del Tesoro para responder y a cuenta del importe de la valoración.*

Es decir, este punto hacía referencia a la suma que la CTNE debía depositar como fianza por el pago de las redes y líneas en posesión del Estado. Primero ingresaría esa cantidad como aval y, una vez las posesiones del Cuerpo de Telégrafos hubieran sido valoradas convenientemente, la compañía tendría que pagar el resto de la tasación. La cantidad aportada por la CTNE no era lo que había sido modificado con respecto a la versión anterior, sino el momento del pago, ya que ahora tenía que realizarse cuando tuviera lugar la firma del contrato. De hecho, en el informe del general Mayandía de 11 de agosto ya se apuntaba que el valor de la fianza era de cinco millones de pesetas.

Sorprende, por lo tanto, cómo esta cantidad que en abril era de diez millones, se corrigió, en el transcurso de las negociaciones, para pasar a ser justo la mitad. Los motivos de esta alteración no son explicados en ninguno de los documentos históricos que se han consultado en esta investigación, pero hemos realizado una serie de reflexiones a este respecto. No se entiende como el valor de una fianza, que en principio fue propuesta por voluntad propia de la CTNE, pudo verse reducida en 5 millones. Es evidente que el Estado no se beneficia en nada por este cambio, ya que cuanto mayor sea el aval que una empresa ofrece para cualquier adquisición, mayores son las garantías que ofrece y por lo tanto es más positivo para el bien nacional. De hecho, la empresa Ericsson no había ofrecido fianza alguna en su proyecto, por lo que se consideraba inferior a la propuesta de la Telefónica.

Lo que también parece claro es que la ITT no salía especialmente beneficiada por este cambio, ya que la diferencia de cinco millones no era relevante en comparación con la enorme inversión de capital que estaba a punto de realizar en España. Aún más, la reducción de una fianza no implica una reducción del gasto total, ya que la diferencia ahorrada en un principio tendrá que ser satisfecha igualmente cuando se conozca el importe final, como ocurriría meses más tarde a la hora de pagar al Estado por las redes públicas. ¿Qué motivos explican entonces esta disminución del garante que la compañía ofrecía al Estado en cinco millones de pesetas?

Por otro lado, no podemos evitar recordar el rumor del famoso cheque de 600.000 dólares que la ITT pudo haber entregado a algún alto cargo del Estado español para terminar de inclinar la balanza hacia sus intereses. Para explicar este supuesto caso de cohecho, nos remitimos a las palabras de Antonio Pérez Yuste en su tesis doctoral:

Pero hay quienes también sostienen que el Presidente de la ITT llegó todavía más lejos a la hora de utilizar sus influencias. En una conocida conferencia pronunciada por Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid, el 15 de abril de 1930, el destacado político socialista se refirió a la existencia de un delito de cohecho en el proceso de adjudicación del sistema telefónico nacional:

Lo más delicado del sistema nervioso de un Estado, lo más sensible, que son las comunicaciones, de las cuales en un momento determinado puede depender con su seguridad la vida del Estado mismo, se ha entregado a un sindicato extranjero en unas condiciones tan onerosas que ni siquiera se podrían explicar con ese cheque de 600.000 dólares de que se habla, y cuyo cobrador seguramente no ha aparecido con su verdadera cara en la ventanilla del Banco.

En esa misma hipótesis se reafirma Antonio Ramos Oliveira quien se atreve, incluso, a señalar directamente a la persona del Rey como el supuesto “cobrador del cheque”; acusación ésta que es rechazada categóricamente por el historiador contemporáneo Ricardo de la Cierva, que justifica su postura diciendo que unos años después del discurso de Indalecio Prieto en el Ateneo, pudo éste haber hallado las pruebas necesarias para sostener su denuncia cuando, siendo Ministro de Hacienda, tuvo a su disposición el archivo de Palacio con todos los documentos sobre la fortuna personal del Rey; pero no encontró nada digno de mención.³²⁸

Sobre el gusto de Sosthenes Behn por repartir dinero para conseguir sus objetivos también se expresaba Maurice Deloraine en su libro de 1974³²⁹, así como

³²⁸ Yuste-2004, pp. 175-176.

³²⁹ El País, 18 de julio de 1982.

otros historiadores como Anthony Sampson, que se refiere a la “tela de araña de corrupción” de Sosthenes Behn³³⁰.

Un folleto que la ITT editó en castellano en 1925, titulado “España y el teléfono”, ha aportado un dato muy interesante para esta investigación: el cambio peseta-dólar que se aplicaba, de manera aproximada, en aquella época. En la página 25 se indica que 25.000 millones de pesetas eran aproximadamente 3.600 millones de dólares, lo que arroja un cambio de casi 7 pesetas el dólar. Un poco más adelante, en la misma página, se indica que 700 millones de pesetas eran unos 100 millones de dólares, que implicaría un cambio algo superior de 7,5 pesetas el dólar. Si aplicamos estos cálculos al famoso cheque de 600.000 dólares del que hablaba Indalecio Prieto resultaría una cantidad de entre 4,2 y 4,5 millones de pesetas, muy cercana al valor de 5 millones del que venimos hablando en este apartado.

Por supuesto, no existe ninguna prueba documental, ni creemos que se llegue a encontrar nunca, que demuestre que el supuesto cheque tiene algo que ver con la cantidad de 5 millones de pesetas que desapareció de la fianza que la CTNE entregó al Estado. No obstante, no deja de sorprender este cambio en el contrato, que en realidad no beneficiaba ni a unos ni a otros y que únicamente servía para retrasar en unos meses el pago de la diferencia introducida. Se sabe que el aval fue ingresado puntualmente en las arcas del Tesoro Público cuando el contrato fue firmado, pero se desconoce si la diferencia de 5 millones entre la primera versión del contrato y el firmado finalmente fue a parar a manos de algún alto cargo del Estado, tal y como apuntaron Indalecio Prieto o Antonio Ramos, o simplemente no llegaron a salir de las cuentas de la ITT, como asegura Ricardo de la Cierva.

3.57. Sábado, 16 de agosto de 1924

Reunión del Gobierno y las últimas modificaciones del contrato

Por una nota aparecida en prensa al día siguiente se sabe que el Gobierno se reunió el día 16 de agosto de 1924 a las 7 de la tarde y que “ampliamente se estudió la concesión del teléfono en España a la Compañía Telefónica Nacional Española (sic),

³³⁰ Sampson-1973, p. 25.

exponiendo el director de Comunicaciones, Sr. Tafur, cuantos antecedentes conocía sobre el particular³³¹.

Como se puede apreciar, la cuestión de la adjudicación del sistema telefónico nacional ya había trascendido a la prensa y se daba por hecho a estas alturas que la empresa que lograría dicha concesión sería la CTNE. No se hace referencia a ninguna otra, ni siquiera a la Ericsson, hecho que no es de extrañar ya que, gracias a los documentos localizados en el Archivo Histórico Nacional, sabemos que las empresas belga y alemana habían sido apartadas del concurso por Tafur Funés a principios de verano, mientras que la firma sueca fue descartada en los primeros informes de la ponencia de 11 y 13 de agosto redactados por Mayandía y Ruiz del Portal, si bien se basaban también en un estudio realizado por el Director General.

En esta ocasión, Tafur Funés asistió a la reunión de Gobierno para exponer sus opiniones con respecto a la concesión del sistema telefónico español y al proyecto que había presentado la CTNE. Por otra parte, el general Mayandía ya había indicado, un par de días antes, que no consideraba que hubiera ya nada que objetar al contrato una vez realizadas las modificaciones oportunas.

El mismo día que se celebró este Consejo de Gobierno, Ruiz del Portal también había redactado un texto parecido al informe de Mayandía de 14 de agosto y que sin duda sería presentado al resto del Directorio en la reunión de aquella tarde. En él se indicaba que la CTNE había aceptado las modificaciones propuestas por él en su escrito de 13 de agosto, que, como ya vimos, no suponían cambios especialmente significativos a la sustancia del contrato que se iba a firmar días después. Dado que estos cambios habían sido aprobados por la compañía, Ruiz del Portal también indicaba, como ya hiciera el otro vocal encargado de esta ponencia, que no tenía “nada nuevo que oponer a la celebración del contrato y en su vista lo somete a la aprobación del Consejo, considerándolo muy conveniente y necesario”.

Suponemos entonces que en esta reunión del Gobierno de 16 de agosto de 1924 se aprobaría finalmente el contrato a firmar entre el Estado y la CTNE. Tanto los ponentes encargados del asunto, generales Mayandía y Ruiz del Portal, habían dado su visto bueno a las modificaciones y a la versión que se manejaba en esos momentos. Por su parte, no cabe duda de que Tafur Funés, partidario desde hacía

³³¹ ABC, 17 de agosto de 1924, p. 17. Documento inédito.

semanas de otorgar la concesión a la CTNE, se expresó en términos favorables a dicha adjudicación también. Por lo tanto, todo parece indicar que el Gobierno daría carpetazo al asunto, autorizaría la firma del contrato y dejaría cerrado el asunto, pendiente de una última reunión con la compañía, que, como veremos a continuación, se celebró cuatro días después.

3.58. Lunes, 18 de agosto de 1924

El Gobierno desestima las solicitudes de la Mancomunidad de Cataluña

La pronta reversión al Estado de algunas redes urbanas como consecuencia del fin de las concesiones suponía un problema para el Gobierno de Primo de Rivera, que tenía que tomar decisiones contundentes si no quería encontrarse con dificultades similares a los que se habían presentado en el pasado con casos como los de Ciudad Real y Puertollano, Santander, San Sebastián, Gijón, etc. El caso de Barcelona fue especialmente conflictivo por su componente política y, aunque no había afectado al Gobierno del Marqués de Estella directamente, conocía el caso a la perfección, puesto que había sido Capital General de Cataluña y había colaborado durante años con los políticos de aquella región.

La concesión de la red urbana de Barcelona, en manos de la Sociedad General de Teléfonos, una empresa subsidiaria de la Peninsular, caducaba el 9 de diciembre de 1921³³² y supuso un auténtico quebradero de cabeza para los gobiernos del momento. Como cualquier otra reversión, ésta debía realizarse a manos del Estado, que pasaría a explotar dicha red urbana bajo el control del Cuerpo de Telégrafos. Sin embargo, la Mancomunidad de Cataluña, que explotaba las líneas interurbanas de las cuatro provincias de la región, así como algunos centros telefónicos menores, no estaba dispuesta a ver como un sistema tan rentable como el barcelonés pasaba a poder del Estado sin que tuviera oportunidad de hacerse con él. Esteban Terradas, Director de la Red Telefónica de la Mancomunidad por aquel entonces, defendía su derecho a explotar los grandes centros urbanos de la región, principalmente el de Barcelona, para compensar las inversiones realizadas en telefonía rural, que no arrojaba los beneficios necesarios.

³³² Yuste-2004, p. 45.

A este respecto, el presidente de la Mancomunidad Puig i Cadafalch presentó un escrito al Gobierno de la época en el que se recordaba el trabajo realizado por la Mancomunidad en telefonía y se reclamaba la cesión de la explotación de la red de Barcelona y de todos los centros telefónicos de las cuatro provincias que fueran venciendo (la licencia de Mataró también estaba a punto de caducar) e incluso de aquellos que el Estado llevaba explotando desde hacía mucho tiempo. De esta forma se inició un debate en el que intervinieron no sólo el Gobierno central y la Mancomunidad de Cataluña, sino que también se avivó con la participación del Cuerpo de Telégrafos y el Consejo de Estado de un lado y del Colegio de Abogados de Barcelona y los parlamentarios catalanes del otro. La cuestión llegó incluso al Congreso de los Diputados. Finalmente, la red de la ciudad condal pasó a manos del Estado, que la entregó al Cuerpo de Telégrafos y la cuestión quedó zanjada, aunque el orgullo nacionalista catalán quedó considerablemente herido³³³.

La Mancomunidad no cejó en su empeño de hacerse con las concesiones de redes urbanas que fueran llegando a su fin y en el año 1924, en vista de que las licencias de Tarragona y Reus estaban próximas a caducarse, envió sendas solicitudes al Gobierno central, que luego se resumieron en una única presentada el 23 de julio. Primo de Rivera denegó esta petición por Real Orden el día 18 de agosto de 1924³³⁴, como no podía ser de otra forma dado el estado de las negociaciones con la Compañía Telefónica Nacional para la concesión de todo el sistema nacional. En el texto de la Real Orden se puede apreciar la seguridad con la que el Marqués del Estella se refiere a la cuestión telefónica y a su decisión de no admitir la solicitud de la Mancomunidad, seguridad que no se apreciaba en otras declaraciones realizadas de una u otra forma durante los meses anteriores. A estas alturas, Primo de Rivera ya contaba con la certeza de que la telefonía nacional iba a ser concedida a una empresa dispuesta a emprender una reforma general y absoluta, por lo que no había necesidad de desviarse de ese camino y entrar de nuevo en divagaciones y dudas con respecto a las reclamaciones del resto de protagonistas del panorama telefónico español. Así razonaba:

Siendo absolutamente preciso resolver el importante problema telefónico nacional de un modo amplio y definitivo, con miras no sólo a la actualidad, sino

³³³ Yuste-2004, pp. 48-51.

³³⁴ Real Orden de la Presidencia del Directorio Militar, de 18 de agosto de 1924. Gaceta de Madrid, 27 de agosto de 1924, nº 240, pp. 1040-1041.

también a un futuro remoto, y en forma que se evite la persistencia de un sistema que producía una serie de instalaciones aisladas, sin unidad técnica ni económica, con tal variedad de concesiones que dificultan grandemente el establecer de modo unificado servicios tan importantes:

Considerando que para obviar este inconveniente, hasta hoy insuperable, para el progreso telefónico de España, el Directorio Militar dictó la Real orden de 11 de Mayo de 1924, con el espíritu y deseo de establecer el servicio telefónico nacional en las debidas condiciones que su importancia requiere: [...]

Ante la imperiosa necesidad de no complicar más, sino antes bien, de simplificar, el problema administrativo, para poder resolver de modo terminante y ventajoso el técnico y económico,

S. M. el Rey [...] se ha dignado resolver que se desestimen dichas instancias, y especialmente la de 23 de Julio último.

Parece que por fin un Gobierno había tomado una decisión firme con respecto al problema de la telefonía nacional y había sido consecuente con dicha solución, llevándola hasta las últimas consecuencias, no dudando en rechazar otras propuestas que se opusieran a dicha determinación, aunque esto fuera a provocar agrios debates políticos. Como ya se ha indicado con anterioridad, si bien las condiciones de la adjudicación de la red española a la CTNE no fueron las más adecuadas, hay que valorar que estas medidas tomadas por Primo de Rivera pusieron fin a todas las políticas anteriores, erráticas e inconsistentes, dando un auténtico impulso a las telecomunicaciones en nuestro país. De esta forma se confirma, también en materia telefónica, la intención del Marqués de Estella de romper con todo lo anterior y de “no complicar más, sino antes bien, de simplificar” el conjunto de la Administración española.

3.59. Miércoles, 20 de agosto de 1924

Reunión del Gobierno con un representante de la CTNE

El día 16 de agosto se celebró una reunión del Gobierno en la que los dos generales encargados de la ponencia para la adjudicación del servicio telefónico nacional habían dado su visto bueno a las modificaciones introducidas en el proyecto de contrato, contando también con la presencia del Director General de Comunicaciones, que a buen seguro dio opinión favorable a la firma de dicho contrato

con la Compañía Telefónica Nacional. Habiendo aprobado el Consejo los términos en los que habría de concretarse el acuerdo entre el Estado y la empresa, es lógico pensar que el Gobierno convocaría una última vez a la Dirección de la sociedad con el fin de comunicarle la decisión y de discutir los pormenores del nuevo acuerdo que habría de unir a las dos entidades. Gracias a dos documentos consultados en el transcurso de esta investigación, hoy sabemos que dicha reunión se produjo el día 20 de agosto y que a ella asistieron varios miembros del Gobierno, Tafur Funés como Director General de Comunicaciones y Sosthenes Behn en representación de la CTNE.

Un artículo de La Vanguardia de ese mismo día³³⁵ informa sobre la reunión del “consejillo” de generales del Directorio en el Ministerio de la Guerra, en la madrileña plaza de Cibeles. Antes del consejo, uno de los vocales del Gobierno, el general Adolfo Vallespinosa, manifestó que “cambiarían impresiones sobre los asuntos de Marruecos, como ocurre en todas las reuniones que se celebran, y que después de dedicarían a estudiar el asunto relativo al arriendo de líneas telefónicas a la Compañía de Telefonía Nacional Española (sic).” Para informar sobre este proyecto asistió a la reunión el director general de Comunicaciones, coronel Tafur.

Según explica el periodista del diario barcelonés, la reunión terminó a las 9 de la noche y, una vez terminada, el general Vallespinosa volvió a dirigirse a la prensa para informar sobre algunos detalles del consejo celebrado:

El general Vallespinosa dijo al salir que se había tratado exclusivamente de la proposición para adjudicación del servicio telefónico, con la asistencia del director de Comunicaciones y de un representante de la Sociedad que ha hecho la proposición más ventajosa.

La proposición ha sido estudiada artículo por artículo, pues se trata de un asunto importantísimo que aún no ha quedado resuelto.

Como vemos, la reunión trató exclusivamente el asunto de la concesión del sistema telefónico nacional a la CTNE y se repasó punto por punto el convenio que habría de firmarse sólo nueve días después en el Palacio de Comunicaciones. Vista la forma en la que se habían desarrollado las negociaciones a lo largo de aquel verano

³³⁵ La Vanguardia, 20 de agosto de 1924, p. 12.

de 1924, es fácil intuir que el representante de la sociedad que acudió a la cita con el Gobierno no pudo ser otra persona más que el propio Sosthenes Behn. No en vano, esta reunión se trataba del paso previo a la firma del convenio y aquí se discutirían los últimos detalles sobre la forma en la que el Estado contrataría la reforma y modernización del sistema telefónico español. Después de haber realizado, durante semanas, un increíble trabajo de negociación en los despachos más importantes del país, es difícil pensar que el Coronel confiara en otra persona de la compañía para representar los intereses de ésta en tan importante entrevista final. Gracias al acta de la reunión celebrada por el Consejo de Administración de la CTNE al día siguiente podemos confirmar esta teoría: el asistente a la reunión con el Gobierno fue Sosthenes Behn, que oficialmente no se trataba más que de un vocal de dicho Consejo, aunque nadie dudaba ya que el presidente de la ITT era el auténtico cerebro de toda la operación.

Según las declaraciones del general Vallespinosa a la salida del “consejillo”, la cuestión telefónica era un “asunto importantísimo”, pero que aún no había quedado resuelto. Los informes de Mayandía y de Ruiz del Portal nos indican que esto no es del todo cierto, ya que ambos se habían declarado favorables a que el concierto entre el Estado y la compañía se celebrara lo antes posible, “considerándolo muy conveniente y necesario”. Sin embargo, bien es cierto que podrían haber surgido nuevos puntos de fricción entre el Directorio y el coronel Behn y que efectivamente aquella reunión no hubiera servido para dejar el asunto resuelto de manera definitiva. Nuevamente, gracias al acta de la reunión del Consejo de Administración de la CTNE del día 21 de agosto sabemos que el general Vallespinosa no contó la verdad a los medios. Al día siguiente, Sosthenes Behn presentó a la Dirección de la compañía el contrato “aprobado por el Gobierno”, hecho que fue ampliamente celebrado por el resto de consejeros de la sociedad, dando las gracias a todos los que habían intervenido en las negociaciones. Es decir, el día 20 de agosto el Gobierno no sólo informó oficialmente al presidente de la ITT de que se había considerado adecuada esta última versión del convenio; además Behn salió de la reunión con una copia del texto bajo el brazo, copia que compartiría al día siguiente con el resto de directivos de la CTNE.

Una vez informada la compañía sobre la aprobación del contrato y estudiados los pormenores del mismo, no quedaba más que publicar el correspondiente decreto que sancionara el convenio entre las dos partes y proceder a su firma oficial. Primo de Rivera rubricó la norma el día 25 de agosto de 1924, que quedaría publicada en la Gaceta de Madrid tres días después, y el contrato se firmó en el Palacio de

Comunicaciones tan pronto como una Real Orden autorizó a Tafur Funés para representar al Estado en dicho convenio, el 29 de agosto de 1924.

3.60. Jueves, 21 de agosto de 1924

Segunda reunión del Consejo de Administración de la CTNE³³⁶

El día 21 de agosto de 1924 se celebró la segunda reunión del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España, con la presencia de siete de los nueve consejeros, incluyendo al hermano de Sosthenes Behn, Hernand, que indudablemente se desplazaría a Madrid para participar en esta fase final de las negociaciones entre la ITT y el Gobierno de Primo de Rivera. No pudieron asistir a la sesión ni Julián Cifuentes ni el Marqués de Urquijo, razón por la que la presidencia fue ocupada por Valentín Ruiz Senén.

Sosthenes Behn procedió inmediatamente a informar al Consejo de toda la tramitación llevada a efecto desde que el proyecto de la CTNE fue presentado al Estado el día 21 de abril, que incluía, como sabemos, numerosas reuniones celebradas con el Director General de Comunicaciones y los vocales ponentes del Directorio Militar. A continuación leyó la versión definitiva del contrato aprobado por el Gobierno, que mereció “la más unánime aprobación de este Consejo y la más sincera felicitación del mismo al Sr. Behn por el acierto y rapidez con que ha llevado a cabo todas las gestiones”. Todos los consejeros se congratulaban por el éxito obtenido y se hacía constar en acta el agradecimiento a todos los que habían intervenido en la preparación del contrato y del proyecto presentado por la CTNE.

Para la firma del convenio con el Gobierno se acordó designar al vicepresidente de la compañía Valentín Ruiz Senén y al secretario Gumersindo Rico, que habrían de representar a la sociedad y tenían “cuantas facultades en derecho sean necesarias para llevar a cabo dicha formalización sin restricción ni limitación alguna”. Ellos serían los que una semana después firmarían el contrato con el Estado por el que se otorgaba la concesión para la reorganización del servicio telefónico nacional.

³³⁶ Acta nº 2 del Consejo de Administración, 21 de agosto de 1924, libro 1, pp. 4-6.

Seguidamente y a propuesta de Lewis J. Proctor se acordó la creación del Comité Ejecutivo de la compañía, que según el artículo 32 de los estatutos de la sociedad, estaría formado por entre tres y siete miembros del Consejo de Administración y contaría con las mismas facultades y atribuciones, pero permitía descargar a éste de las tareas más cotidianas y de índole burocrática. El primer Comité Ejecutivo de la Compañía Telefónica Nacional de España estaría formado por Julián Cifuentes, Valentín Ruiz Senén, Sosthenes Behn, Lewis J. Proctor y Gumersindo Rico, el auténtico núcleo duro de la empresa. Es importante hacer notar la ausencia del Marqués de Urquijo, presidente del Consejo, en la formación de este primer Comité Ejecutivo, lo que viene a demostrar el papel más bien decorativo del empresario y banquero español en la presidencia de la sociedad, que en realidad sirvió para colocar un nombre con enjundia que otorgara un valor añadido a la compañía.

También quedó establecido que el Comité Ejecutivo estaría presidido alternativamente por Julián Cifuentes, del Banco Hispano Americano, y Valentín Ruiz Senén, del Banco Urquijo, en turnos mensuales. Asimismo se nombraba oficialmente a Ruiz Senén como vicepresidente del Consejo de Administración, aunque el acta ya se había referido a éste en estos términos con anterioridad. Se acordaba también que José López Nieulánt, Marqués de Perijáa, sería el Tesorero General de la compañía.

En vista de que el contrato con el Estado estaba a punto de ser firmado y que por lo tanto en breve se iniciaría la auténtica obra de la Compañía Telefónica Nacional, no tenía sentido ya que el capital social de la empresa estuviera formado por la ridícula cantidad de 1 millón de pesetas. Por ello se acordó elevar este capital a 115 millones, es decir, 55 millones más que lo estipulado en los primeros acuerdos del mes de abril, que estimaban unas inversiones iniciales de 60 millones³³⁷. Para mayor seguridad, se especificaba que este acuerdo no tendría efectividad hasta después de firmado con el Estado el convenio de concesión. Las acciones estaban repartidas en una proporción de 3:20, 15 millones en acciones ordinarias (las que otorgaban el poder de la empresa) y 100 millones en acciones preferentes. Cuando en abril se preveía aumentar el capital a 60 millones, la proporción era de 1:5, 10 millones en acciones ordinarias y 50 millones en preferentes. Las previsiones financieras se habían visto superadas y parece claro que en estos meses se vio la necesidad de que los recursos

³³⁷ Ver crónica del día 19 de abril de 1924 sobre el convenio firmado entre la ITT y la CTNE aquel día.

de la compañía fueran mayores, quizá no sólo por la magnitud de las obras que era necesario emprender, sino por el interés de la ITT en inflar artificialmente desde el principio el verdadero valor de la Compañía Telefónica Nacional.

Por último se convino que los depositarios de los fondos de la compañía fueran el Banco de España, el Banco Hispano Americano, el Banco Urquijo, la International Banking Corporation, la International Telephone Securities Corporation, el banco Morgan-Harjes de París y el Morgan-Grenfell de Londres. El tesorero quedaba autorizado para abrir cuentas en dichos bancos y para depositar en ellos los fondos con destino al crédito de la CTNE. Estos bancos acreditarían y cobrarían igualmente toda clase de fondos a favor de la compañía, en efectivo, pagarés, cheques o cualquier otra forma. Por último se autorizaba al presidente, vicepresidentes y secretario para que firmaran, junto al tesorero o uno de los vicetesoreros, cualquier cheque, giro u orden de pago de la compañía.

Alarma en la Diputación de Guipúzcoa

A mediados de agosto ya era bien conocida la intención de Primo de Rivera de entregar el sistema telefónico español a la CTNE, una vez el resto de competidores habían sido eliminados de la carrera y las viejas reivindicaciones del Cuerpo de Telégrafos habían quedado relegadas a un segundo plano. Incluso uno de los mayores valedores de las opiniones de los telegrafistas, el Director General, había abandonado ya su idea de unificar todos los servicios de comunicaciones y de incautar las líneas explotadas por particulares para entregárselas al Cuerpo o a los ayuntamientos. La última manifestación pública que hizo Tafur Funés a favor de las aspiraciones tradicionales de Telégrafos fue aquel “voto espiritual” que había dado en la comisión nombrada para valorar los proyectos de telefonía presentados a raíz de la Real Orden de 11 de mayo, si bien el verdadero voto útil sirvió para inclinar la balanza hacia el proceso de adjudicación del sistema nacional a una empresa privada.

Conocidas estas noticias, no es de extrañar que muchos concesionarios se alarmaran y temieran perder los derechos adquiridos con sus respectivas licencias, más cuando los términos exactos del contrato que habría de firmarse entre el Estado y la CTNE no eran más que rumores todavía y no se conocerían claramente hasta su publicación en la Gaceta de Madrid el día 28 de agosto. La Diputación de Guipúzcoa fue uno de los concesionarios más inquietos con respecto a las noticias que llegaban desde Madrid y en sesión celebrada el día 21 de agosto, a propuesta de la Comisión

de Teléfonos, solicitó la ayuda del ayuntamiento de San Sebastián. La diputación buscaba la colaboración del consistorio para defender sus intereses ante “los rumores alarmantes que corren respecto a los proyectos de telefonía nacional”³³⁸.

3.61. Lunes, 25 de agosto de 1924

Firma del Real Decreto de concesión del sistema telefónico nacional

Sosthenes Behn se entrevistó con el Gobierno y con el Director de Comunicaciones el jueves 20 de agosto por la tarde y, según declaraciones del general Vallespinosa, aquella reunión sirvió para analizar artículo por artículo el contrato que habría de firmarse entre las dos partes y que los vocales del Directorio encargados de la ponencia ya habían dado por bueno unos días antes. Por el acta de la reunión del Consejo de Administración del día siguiente sabemos que aquel encuentro sirvió para confirmar oficialmente que el Estado aceptaba las bases y que la adjudicación del sistema telefónico nacional iba a realizarse en los términos acordados. El siguiente paso era, por lo tanto, publicar un Real Decreto en el que se sancionara dicho convenio entre el Estado y la compañía, con las condiciones y excepciones que habían explicado los generales Mayandía y Ruiz del Portal en sus informes.

El Real Decreto fue firmado por el rey Alfonso XIII en el Palacio de la Magdalena, su residencia veraniega de Santander, el día 25 de agosto de 1924³³⁹. Esta norma autorizaba al Gobierno a contratar con la Compañía Telefónica Nacional de España la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional con arreglo al pliego de bases que acompañaban al decreto. El texto expositivo justificaba la decisión tomada basándose en los múltiples problemas que afectaban a la telefonía de nuestro país, “sin que hasta la fecha haya sido objeto de la resolución radical que merece”. A continuación se exponían brevemente dichos problemas, explicados ya varias veces en el presente Trabajo Fin de Máster, y se hacía mención a la importancia de la telefonía en la defensa nacional, “lo cual constituye otro argumento que justifica la necesidad de que no se aplaze por más tiempo asunto de tal magnitud”. Esta afirmación contrasta poderosamente con el hecho de que un medio para

³³⁸ Gutiérrez-1997, p. 278.

³³⁹ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 25 de agosto de 1924. Gaceta de Madrid, 28 de agosto de 1924, nº 241, pp. 1051-1057.

asegurar la defensa del Estado se entregara a una empresa que, si bien contaba con el término “nacional” en su frontispicio, estaba manejada por una multinacional extranjera.

Luego relataba el proceso legislativo seguido por el Directorio y que había llevado finalmente a la publicación del Real Decreto que se estaba sancionando, mencionando también las correcciones realizadas por la empresa en el proceso de negociaciones que tuvo lugar durante el verano. Para mayor ahondamiento en el distanciamiento de este texto con respecto a la realidad, explicaba éste que se trataba de un “proyecto presentado por una Sociedad española y dirigida por nacionales”. Nadie duda que la CTNE era formalmente una empresa española, pero parece un poco exagerado afirmar que estaba dirigida por nacionales teniendo en cuenta que las negociaciones y la toma de decisiones habían corrido por cuenta del presidente de la International.

En un intento de justificar peregrinamente la “alegalidad” del proceso seguido desde la promulgación de la Real Orden de 11 de mayo hasta la publicación de este Real Decreto, Primo de Rivera afirma que se prescindía de las formalidades de concurso porque “el resultado hubiera sido análogo”. Es decir, que para “aligerar” el procedimiento se hacía caso omiso de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911 y de la Ley de Comunicaciones de 1907, otorgando la concesión directamente a la empresa que, a su juicio, hubiera ganado de todas formas el hipotético concurso público.

Considerando la importancia de este Real Decreto y que no es muy extenso, se ha creído oportuno reproducir aquí, íntegramente, su contenido:

REAL DECRETO

A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Por el presente se autoriza al Gobierno para que seguidamente a la publicación de este Mi Decreto proceda, con excepción de las formalidades prevenidas en la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, a contratar por escritura pública con la Compañía Telefónica Nacional

de España la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional con arreglo a las bases aprobadas.

Artículo 2.º No serán de aplicación al contrato que autoriza este Decreto todas las leyes y disposiciones en contradicción con el mismo y con las bases aprobadas, especialmente la ya citada de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública y el Real decreto-ley de 8 de Marzo de 1924, con sus respectivos reglamentos.

Dado en Santander a veinticinco de Agosto de mil novecientos veinticuatro.

ALFONSO

A continuación se transcribían las 26 bases del contrato que habría de firmarse entre las dos partes a finales de aquella semana en el Palacio de Comunicaciones de Madrid.

Como puede apreciarse, en el artículo primero del Real Decreto se especificaba que este contrato se realizaba como una excepción de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, hecho que en principio podría considerarse legal si nos atenemos a las correcciones hechas al artículo 55 de dicha ley por Real Decreto de 31 de mayo de 1924. En dicha enmienda se ampliaban las posibles situaciones en las que prescindir de las formalidades de concurso o subasta pública, permitiendo al Gobierno una mayor laxitud a la hora de contratar compras o servicios con otras entidades, como es el caso. Esta digresión legislativa, un tanto sibilina, podría incluso entrar dentro del marco de la legalidad.

Sin embargo, lo que no se entiende es como el artículo segundo puede decretar que no es de aplicación cualquier disposición legal en contradicción con este decreto, incluso aquellas disposiciones legales de rango mayor como son una ley y un real decreto-ley. Está claro que el Estatuto Municipal tenía un contenido legislativo en materia telefónica manifiestamente contrario a lo sancionado por este Real Decreto, por lo que se creaba un conflicto entre estas normativas, ya que por un lado se realizaba concesiones a los municipios para que tomaran el control de sus redes telefónicas y por otro se entregaba todo el sistema nacional a una sociedad privada, incluyendo los centros urbanos. Sin embargo, de manera formal, una norma de rango menor nunca puede dejar sin aplicación, ni siquiera en parte, una medida legislativa que está por encima de ésta, como eran los casos que se señalaban aquí concretamente: la Ley de Contabilidad de 1911 y el Estatuto Municipal del mes de

marzo anterior, junto con su Reglamento, que por otra parte contaba sólo con un mes de antigüedad.

3.62. Miércoles, 27 de agosto de 1924

La línea telefónica del Metropolitano de Madrid³⁴⁰

Mientras el rey firmaba el Real Decreto por el que autorizaba al Gobierno a firmar el contrato para la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico con la CTNE, el ayuntamiento de Madrid discutía sobre una licencia para colocar un cable telefónico en un túnel de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII de Madrid (el “metro”). El Director de esta empresa había solicitado la instalación de dicha línea de uso privado amparándose en el Reglamento telefónico de 1920, donde se indica lo siguiente:

La Dirección General de Correos y Telégrafos podrá hacer concesiones de líneas telefónicas particulares que han de unir puntos entre los cuales exista comunicación telegráfica o telefónica abierta al servicio público, siempre que tengan por objeto servir de auxiliares a las de conducción de energía eléctrica de alta tensión, utilizándose única y exclusivamente para los fines de la explotación.

La Dirección de Metropolitano quería colocar un cable telefónico en la galería del suburbano que transcurría por debajo de la avenida Pi y Margall (lo que hoy conocemos como el segundo tramo de la Gran Vía) y que serviría para unir telefónicamente la estación de Gran Vía, situada bajo la Red de San Luis (justo enfrente del solar que luego se convertiría en el flamante edificio Telefónica) y un edificio situado en el número 7 de dicha calle. Según el Reglamento de 1920, esta línea podría ser construida y explotada por la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, pero eso era antes de la firma del contrato entre el Estado y la CTNE. Este convenio dejaba en suspenso cualquier norma que entrara en contradicción con el contrato y con sus bases, lo que por supuesto incluía cualquier reglamento telefónico vigente en aquel momento.

³⁴⁰ Yuste-2004, pp. 295-296.

El asunto fue discutido en el pleno municipal de 27 de agosto y se aprobó la concesión por mayoría. Esto ocurría sólo dos días después de que el Real Decreto fuera sancionado por Alfonso XIII, un día antes de que se publicara en la Gaceta de Madrid y dos días antes de que se firmara definitivamente el contrato entre el Estado y la Telefónica. No cabe duda de que en aquellos días se daba un vacío legal que provocaba situaciones tan paradójicas como ésta, ya que se había aprobado el decreto pero no se había llegado a firmar el convenio. No obstante, tal y como establece el párrafo transcrito del Reglamento de 1920, era la Dirección General la que tenía que realizar estas concesiones y no cualquier otra administración pública como un ayuntamiento. Aunque el consistorio aprobara dicha línea, tenía que mediar una resolución del Director General de Comunicaciones. Este documento no ha podido ser encontrado, si bien podría ser que nunca hubiera llegado a existir. Quizá el Metropolitano de Madrid aprovechó la situación de gran agitación en la cuestión telefónica para instalar su pequeña línea sin necesidad de mayor autorización que la del consistorio de la capital, intentando no hacer saltar ninguna alarma que pudiera provocar la denegación de su solicitud.

3.63. Viernes, 29 de agosto de 1924

Primera reunión del Comité Ejecutivo de la CTNE³⁴¹

En la segunda reunión del Consejo de Administración de la CTNE, celebrada el día 21 de agosto de 1924, se constituyó, a propuesta de Lewis J. Proctor, el primer Comité Ejecutivo de la compañía, tal y como se establecía en el artículo 32 de los estatutos sociales. Este comité estaba formado por cinco consejeros (Ruiz Senén, Cifuentes, Behn, Proctor y Rico) y tendría las mismas facultades y atribuciones que el Consejo de Administración, pero permitía descargarle de las tareas más cotidianas y de los trámites burocráticos. Esto era lo que decía, en teoría, el citado artículo de los estatutos. Sin embargo, pronto se vio que, en la práctica, este “núcleo fuerte” servía como auténtico grupo de gobierno de la empresa; era aquí donde se tomaban las verdaderas decisiones de la compañía y el Consejo de Administración se limitaba a aprobar todas las medidas tomadas por aquel.

³⁴¹ Acta nº 1 del Comité Ejecutivo, 29 de agosto de 1924, libro 1, p. 1.

Ninguno de los Consejeros delegados del Gobierno, que se nombrarían unas semanas más tarde, formaban parte del Comité Ejecutivo, por lo que la intervención del Estado en la Compañía Telefónica Nacional era más bien anecdótica y servía únicamente para poder proclamar públicamente que la empresa había permitido la entrada de tres funcionarios del Estado en el Consejo de Administración, lo que por supuesto daba buena imagen y publicidad positiva. En realidad, las intervenciones de estos tres delegados en las reuniones del Consejo eran muy escasas y rara vez se les prestaba la atención que sería deseable para un representante de los intereses generales del país. No en vano, las reuniones mensuales del Consejo de Administración se convirtieron, con el paso del tiempo, en una formalidad que era necesaria cumplir, pero que no aportaban ninguna decisión de importancia para la Dirección de la entidad. En resumen se podría decir que la función del Comité Ejecutivo no era, como decían los estatutos, descargar a los consejeros de sus tareas más cotidianas, sino que servía para tomar auténticas decisiones de gobierno, sin la presencia de los delegados del Gobierno, que luego eran aprobadas por el Consejo de Administración sin mediar mucho debate.

Se podría decir, incluso, que el Comité era muchas veces un mero títere a las órdenes de los dos consejeros que realmente ostentaban el poder ejecutivo de la empresa: Sosthenes Behn, cuando se encontraba en España, y su hombre de confianza, Lewis J. Proctor. Tanto el presidente como el vicepresidente de la ITT eran los auténticos administradores de la Compañía Telefónica Nacional de España y tomaban, la mayor parte de las veces, las decisiones que consideraban más oportunas sin realizar consulta alguna con el Comité Ejecutivo y mucho menos con el Consejo de Administración. Estas dos comisiones se limitan a aprobar sus medidas, que por supuesto siempre miraban primero por el bien de la multinacional estadounidense y luego por el bien nacional.

No hace falta consultar las actas de muchas reuniones para llegar a esta conclusión. La primera decisión tomada en la primera reunión del Comité Ejecutivo, presidida por Ruiz Senén, sirve como ejemplo demoledor de la teoría expuesta:

Para proceder con el mayor acierto a la elección y nombramiento del personal para todos los servicios de esta Compañía, el Comité acuerda, por unanimidad, delegar todas sus facultades, a estos efectos, en el Coronel Sosthenes Behn, a fin de que como conocedor de estas organizaciones y servicios pueda nombrar todo el personal de la Compañía y fijar las retribuciones que al mismo hayan de asignarse.

En el fondo, esta decisión no era más que una forma de confirmar oficialmente lo que ya venía sucediendo *de facto* desde la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España o incluso mucho antes. Sosthenes Behn era el encargado de nombrar a todo el personal de la empresa, español o extranjero, sin necesidad de que el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo o cualquier otro directivo tuvieran una sola palabra en la resolución. No cabe duda de que la experiencia en el negocio telefónico del Coronel era mucho mayor que la de cualquier otro empresario español que formara parte de la compañía, que en la mayor parte de los casos era totalmente nula; sólo Gumersindo Rico tenía conocimientos del sector y había participado en la empresa por méritos propios y no sólo por formar parte de un destacado grupo de financieros nacionales, como era el caso del resto de consejeros. Sin embargo, aún cuando Sosthenes Behn tuviera mucha más experiencia en las necesidades de plantilla de una compañía telefónica, el hecho de delegar en una sola persona el nombramiento de todo el personal de una empresa parece una medida un tanto desproporcionada. Esto se entiende desde el punto de vista de una empresa que ha sido creada tal y como dicha persona había estipulado meticulosamente, diseñando todo el plan de negocio al completo, desde el primer empleado hasta la última adquisición de material telefónico.

Sosthenes Behn también decidía sobre los sueldos de todos los empleados, lo que más tarde llevaría a no pocas reclamaciones por las diferencias existentes entre el personal extranjero y el español a este respecto. Varios políticos e intelectuales alzaron sus voces para reprender esta actitud en los últimos años de la Dictadura y al principio de la II República, indicando que mientras el personal extranjero de menor categoría profesional cobraba entre 750 y 1.000 pesetas/mes y los altos directivos foráneos entre 4.000 y 6.000 pesetas/mes, la remuneración media del personal español era de 225 pesetas/mes³⁴².

Volviendo a aquella primera reunión del Comité Ejecutivo de 29 de agosto de 1924, la cuestión del nombramiento de personal no fue la única decisión importante que se tomó sin contar con el debate oportuno en el Consejo de Administración. Por su parte, Proctor fue nombrado Vicepresidente del Consejo y, por ende, de la compañía y además “delegado especial” del Comité para todo lo relacionado con explotación y servicios de la empresa. Como demuestran las actas de los dos órganos

³⁴² Yuste-2004, p. 278.

de gobierno de la empresa, Lewis J. Proctor era el directivo que en realidad llevaba las riendas de la CTNE durante las ausencias de Sosthenes Behn, ostentando el poder ejecutivo y tomando todas las determinaciones fundamentales.

Otra de las grandes incorporaciones al personal de la compañía, el empresario Javier Martí-Codolar i Pascual, también fue nombrado Vicepresidente y Director General de la empresa. Martí-Codolar fue uno de los socios inseparables de Enrique Parellada en la Compañía Peninsular de Teléfonos, en la que ostentó el cargo de Presidente, y cuando el control de ésta fue adquirido por la ITT, pasó a formar parte de la nómina de la nueva Compañía Telefónica Nacional de España. Su papel de mediador entre Behn y Parellada en los primeros meses de 1924 fue recompensado con este puesto en el Consejo de Administración y en la Dirección de la compañía. Sin embargo, tal y como apunta Pérez Yuste:

Se nombró, eso sí, un Director General de la Compañía, cargo que recayó, en principio, en Javier Martí-Codolar. Se trataba, no obstante, de un puesto vacío de contenido que se ocupó más por la costumbre general establecida que por la existencia de una verdadera necesidad. Con todo y con ello, el ex Presidente de la Peninsular permaneció poco tiempo en el desempeño de su función. Durante 1926 presentó su renuncia al cargo de Director General y a su puesto en el Consejo de Administración [...]. Sea como fuere, el caso es que el puesto de Director General permaneció vacante hasta el 1 de mayo de 1929, fecha en la que pasó a ocuparlo Estaban Terradas, lo que da una muestra muy clara de la poca relevancia que tenía este cargo.³⁴³

La última decisión tomada aquel día por el Comité Ejecutivo fue la de delegar en Gumersindo Rico, Secretario de la compañía, todas las funciones de representación, tanto de este comité como del Consejo de Administración, para que realizara las gestiones necesarias destinadas al aumento de capital social de la compañía hasta la cifra de 115 millones de pesetas, tal y como se había acordado en la segunda reunión del Consejo de 21 de agosto de 1924.

³⁴³ Yuste-2004, p. 272.

La firma del contrato entre el Gobierno y la CTNE

El Real Decreto de 25 de agosto de 1925 autorizaba al Gobierno a contratar con la Compañía Telefónica Nacional de España la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional, con arreglo a las 26 bases del contrato que también se reproducía en la norma regia. Las partes acordaron que la firma del contrato se efectuaría el viernes 29 de agosto en el Palacio de Comunicaciones de Madrid y que el encargado de representar al Estado en este acto sería el coronel Tafur Funés, Director General de Comunicaciones y hombre clave en la adjudicación del servicio nacional a la nueva compañía concesionaria. Para ello, Primo de Rivera tuvo que transferir dicha representación mediante la publicación de una Real Orden, que había firmado el día anterior y era publicada esa misma mañana en la Gaceta de Madrid³⁴⁴.

Ese día, Sosthenes Behn celebró un gran banquete para celebrar el éxito que habría de concretarse sólo unas horas después en el despacho oficial del Director General, al que asistieron un selecto grupo de empresarios norteamericanos y españoles, entre los que se contaba con Charles E. Mitchell, Presidente del *National City Bank* de Nueva York. Después del almuerzo de gala, los representantes de la CTNE que habrían de firmar el contrato, Valentín Ruíz Senén y Gumersindo Rico, Vicepresidente y Secretario de la compañía española respectivamente, se dirigieron al Palacio de Comunicaciones sito en la plaza de Cibeles para proceder a la firma del contrato entre el Estado español y la Telefónica, mediante escritura pública autorizada por el notario Antonio Sirvent López. Como no podía ser de otra forma, Sosthenes Behn también asistió a tan histórico momento, aunque en realidad no iba en calidad de representante ni de uno ni de otro. Estudiados los acontecimientos previos a esta firma, sin duda no se concibe este acto sin la presencia del hombre que había hecho todo esto posible y cuya mano se encontraba detrás de todas las decisiones de la nueva compañía³⁴⁵.

Como ya hemos visto y demostrado, el pliego de bases del contrato firmado entre el Estado español y la CTNE no se trataba de un documento original elaborado por el Gobierno, tal y como ocurriría con cualquier convenio de adjudicación de compras o servicios públicos. Este documento, que contaba con 26 bases, fue redactado a

³⁴⁴ Real Orden de la Presidencia del Directorio Militar, de 28 de agosto de 1924. Gaceta de Madrid, 29 de agosto de 1924, nº 242, p. 1068.

³⁴⁵ Yuste-2004, p. 181.

partir del primer Proyecto de contrato presentado por la Telefónica en el mes de abril y que constaba de 24 cláusulas. Aquel proyecto fue entregado al Gobierno junto con la solicitud o instancia para la reorganización del servicio telefónico nacional el día 21 de abril y luego sirvió también para la convocatoria del “concurso especial de proposiciones libres” por Real Orden de 11 de mayo, que contaba con una serie de “condiciones indispensables” que también recordaban vagamente al Proyecto de contrato de Sosthenes Behn. Más tarde, durante los meses de verano, se utilizó este documento como base para realizar algunas de las correcciones que propuso el Directorio Militar y que finalmente darían como resultado el contrato definitivo que se firmó el 29 de agosto de 1924. Las enmiendas que los vocales ponentes del Gobierno y la Dirección General de Comunicaciones consiguieron introducir en el convenio fueron mínimas y no modificaron la auténtica sustancia del mismo, que por supuesto siguió siendo tremendamente favorable para los intereses del tándem ITT-CTNE. Tal y como explicaba Diego Martínez Barrios en su proyecto de ley de 1931:

O muy segura debía de estar la Compañía Telefónica Nacional de la bondad de su proyecto de contrato, o muy convencida de la fatalidad de su aceptación, cuando tan reacia se mostró a rectificaciones en los más principales puntos de discrepancia con la Comisión. Aceptó, tan sólo, pequeñas variaciones de secundaria importancia; pero lo fundamental, lo sustancial del contrato, lo que caracteriza para hacerlo recusable, eso quedó en pie.

Y, no obstante todo esto, el contrato fue aceptado y firmado por el Gobierno de la Dictadura, porque lo inevitable, lo fatal, era que su primitivo proyecto de contrato, con las ligerísimas variaciones que la más elemental prudencia aconsejara, había de ser, en definitiva, el que se elevara por el Estado a escritura pública.

El contrato firmado declaraba en su base primera que no le sería de aplicación lo estipulado en materia telefónica en el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales. Tal y como otros investigadores han apuntado, esto también tiene un error de forma ya que los contratos del Estado tienen que atenerse a la normativa vigente, no pueden dejar en suspenso leyes o reglamentos provocando que el propio convenio quede por encima de la legislación.

Antonio Pérez Yuste en su tesis de 2004 señalaba un defecto formal aún mayor del contrato entre el Estado y la CTNE, que se encontraba en el último párrafo del texto firmado por ambas partes aquel 29 de agosto:

No podrán quedar modificadas las bases del presente contrato, ni aplicarse en contradicción con el mismo las leyes o disposiciones de carácter general o particular expedidas por el Estado o las Corporaciones de carácter público.

Es decir, que las bases del contrato se blindaban de tal modo que no podrían ser modificadas en el futuro de ninguna manera, ni aplicarse en contradicción con ellas ninguna ley o normativa. Podría decirse que el contrato entre el Gobierno y la compañía pasaba a elevarse a la categoría de norma fundamental, casi por encima de la Constitución, sin posibilidad alguna de que cualquier normativa trastocara en lo más mínimo los intereses de la CTNE en su concierto con el Estado, prohibiendo incluso que se legislara en contra de estas 26 bases.

Sin embargo, lo más desconcertante de todo este asunto es que esta concesión de soberanía no aparecía en el proyecto de contrato inicial presentado por la CTNE, tal y como explicaba Agustín Muro Abad en sus artículos de la revista Telégrafos en 1932. Incomprensiblemente, en el contrato final se extendieron estos conceptos y la soberanía pretendida por la empresa ganó aún más terreno del que inicialmente había solicitado³⁴⁶.

Por lo demás, la lectura de las bases del contrato demuestra la cuidada redacción con la que se habían escrito las cláusulas originales y el tacto con el que se había realizado las correcciones, siempre con el apoyo de la plantilla de abogados que la ITT había contratado en España, siempre con la intención de que los privilegios de la compañía no se vieran recortados. No es el fin de este Trabajo Fin de Máster desglosar los pormenores de este convenio, que por otra parte ya han sido ampliamente estudiados en los excelentes trabajos de otros historiadores³⁴⁷, por lo que no vamos a profundizar en el contenido de este documento, si bien volveremos a él cuando en algún capítulo posterior se considere necesario hacer referencia a los términos en los se expresaba el contrato entre el Estado y la CTNE.

Aunque la noticia de la adjudicación del sistema telefónico español a una empresa privada, de apariencia nacional pero manejada por una multinacional extranjera, provocó cierto revuelo social, éste fue fácilmente acallado por la censura en

³⁴⁶ Yuste-2004, p. 185.

³⁴⁷ Muro-1932; Gutiérrez-1997, pp. 162-167; Yuste-2004, pp. 186-201 (este autor también menciona el trabajo de Ayats de 1931)

prensa, que simplemente se limitó a informar de la firma del contrato de concesión, sin entrar en valoraciones críticas. Algunas revistas del sector, como *Electra*, consiguieron no obstante publicar algunos artículos censurando la concesión realizada a la Telefónica y reclamando, una vez más, que se creara un organismo dependiente del Estado para reformar, modernizar y explotar el servicio telefónico. El segundo reportaje que apareció en *Electra* analizaba someramente el contrato firmado entre la compañía y el Estado y no escondía lo que era ya un secreto a voces: que detrás de toda la operación se encontraba la ITT y que la CTNE no era más que una subsidiaria de aquélla³⁴⁸:

El Directorio militar, en contra de nuestra manera de pensar, por razones para nosotros desconocidas y que sobradamente habrá compulsado, ha concedido a la Compañía Telefónica Nacional de España, filial de la International Telegraph and Telephone Company, no sólo la organización, reforma y ampliación de las redes y líneas telefónicas de la nación, sino también la explotación de su servicio durante un periodo mínimo de veinte años.

Además, los telegrafistas se quejaban de que ya no se iban a invertir aquellos 1.200 millones de pesetas que se habían anunciado en 1923, de que el contrato no hablaba de llevar la telefonía a pueblos de menos de 4.000 habitantes y, en general, de que el Gobierno no había escuchado sus reivindicaciones. El redactor lamentaba que la concesión hubiera sido otorgada a una empresa privada, extranjera para más inri, pero mostraba más resignación que intenciones de luchar contra la medida y se limitaba a buscar algún punto favorable para los telegrafistas en las bases del contrato, cosa que era harto difícil, como sabemos.

Las voces que habían permanecido amortiguadas durante años empezaron a hacerse oír a finales de la Dictadura, cuando varios representantes de la Asamblea Nacional se manifestaron en contra de los términos en los que se había realizado el concierto entre el Gobierno y la CTNE, criticando la ilegalidad del proceso y las irregularidades presentes tanto en el Real Decreto como en las bases del convenio. Pero no sería hasta la llegada de la II República cuando la concesión del sistema telefónico nacional correría auténtico peligro para los intereses de la Compañía

³⁴⁸ *Electra*, 30 de agosto de 1924, nº 30, pp. 607-609; 10 de septiembre de 1924, nº 31, pp. 628-629; 20 de septiembre, nº 32, pp. 649-650; 10 de octubre de 1924, nº 34, pp. 689-690.

Telefónica Nacional y la International Telephone and Telegraph Co. de Sosthenes Behn.

Primo de Rivera se reúne con Tafur Funés y con Sosthenes Behn

Gracias a las crónicas aparecidas en los periódicos La Vanguardia y ABC³⁴⁹, se sabe que Primo de Rivera se reunió en la mañana del día 29 de agosto con el Director General de Comunicaciones. Aunque se desconocen los términos de aquella entrevista, no cabe duda que el tema fundamental que se trató fue el de la firma del contrato que habría de producirse esa misma tarde entre el Estado y la Telefónica.

Ésta no fue la única reunión sobre asuntos telefónicos que celebró el Marqués de Estella en aquella jornada, ya que por la tarde recibió a Sosthenes Behn, “vocal del Consejo de administración de la nueva Compañía Nacional de Teléfonos”, tal y como indicaban los periódicos del día siguiente. No sabemos, empero, si esta visita del Coronel se produjo antes o después de la rúbrica del contrato, pero es seguro que no tardaría mucho en desplazarse de un despacho a otro, ya que la Dirección General se encontraba en el Palacio de Comunicaciones y Primo de Rivera estaba recibiendo a sus visitas en el Ministerio de la Guerra, en el Palacio de Buenavista, justo al otro lado de la plaza de Cibeles.

Los periódicos no aportaban más información sobre la reunión, pero podemos imaginar que los términos en los que se produciría fueron muy distintos a aquella otra que se celebró casi un año antes en el mismo lugar y con la que abríamos el capítulo 3 del presente Trabajo Fin de Máster. El día 26 de octubre de 1923 se producía la primera entrevista entre Primo de Rivera y Sosthenes Behn y éste le habló de “asuntos relacionados con las comunicaciones telefónicas” y le presentó una memoria que contenía el proyecto de telefonía de la compañía norteamericana. Aquella propuesta inicial había cambiado mucho con el transcurrir del tiempo. Atrás quedaba diez meses de intensas negociaciones que habrían de cambiar, para siempre, el panorama de las telecomunicaciones en nuestro país. En aquel 29 de agosto de 1924, estos dos protagonistas se volvían a reunir, esta vez bajo unas circunstancias muy diferentes. Sosthenes Behn era ahora el representante de la compañía que acababa de lograr la

³⁴⁹ La Vanguardia, 30 de agosto de 1924, p. 24; ABC, 30 de agosto de 1924, p. 13.

concesión de todo el sistema nacional y que en realidad no era otra cosa que una subsidiaria de la ITT, lo que convertía a la CTNE y a la telefonía española en el primer gran triunfo de su “International System”.

Tercera reunión del Consejo de Administración de la CTNE³⁵⁰

Después de firmarse en el Palacio de Comunicaciones el contrato entre el Estado y la Telefónica, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en sesión extraordinaria para cerrar el acuerdo privado entre la ITT y la CTNE que habría de regir la relación entre las dos entidades.

Gumersindo Rico abrió la reunión con la confirmación de que la escritura pública del contrato con el Estado había sido firmada con arreglo a las bases a que se refería el Real Decreto de 25 de agosto de 1924. A continuación explicaba que, como estas bases no se ajustaban exactamente a la solicitud y proyecto de contrato presentados por Sosthenes Behn en la primera reunión del Consejo el día 19 de abril, se procedía a revisar el convenio privado pactado en aquella fecha entre la ITT y la CTNE con el fin de adaptarlo a la nueva situación en lo que fuera pertinente.

Por su parte, el Coronel manifestó que “sería preferible establecer las estipulaciones definitivas en dos contratos entre ambas empresas abarcando en uno la parte relativa al asesoramiento técnico y financiero y el otro, la referente a la cesión de derechos en relación con determinadas propiedades telefónicas y a la suscripción de valores, viniendo estos dos contratos a reemplazar y dejar sin efecto el Memorándum mencionado”. El Consejo estuvo de acuerdo, como no podía ser de otra manera, por lo que Behn presentó los dos contratos preparados de antemano, que fueron leídos, examinados y aprobados por unanimidad. Estos dos convenios, que estaban transcritos a continuación, fueron firmados por Julián Cifuentes en representación de la CTNE y por Sosthenes Behn como presidente de la ITT, además de por Gumersindo Rico como secretario de la reunión. De esta forma quedaba sellada definitivamente la alianza entre las dos compañías, convirtiéndose la sociedad española en una auténtica filial de la International, en la forma y en el fondo, ya que había adquirido la mayoría de las acciones ordinarias de la CTNE y ostentaba el

³⁵⁰ Acta nº 3 del Consejo de Administración, 29 de agosto de 1924, libro 1, pp. 6-7.

control de todas las decisiones que se tomaran en relación a contrataciones, adquisición de materiales, instalación de líneas, explotación del servicio, tarifas, contabilidad, construcción de edificios, etc.

Por último, Rico daba cuenta además de las gestiones que el Comité Ejecutivo había llevado a cabo en su primera reunión aquel mismo día, leyendo los acuerdos adoptados, que quedaron aprobados por unanimidad por los consejeros de la compañía.

La primera parte del contrato privado entre la CTNE y la ITT³⁵¹

El primero de los dos convenios suscritos entre las dos compañías el día 29 de agosto de 1924 versaba sobre el asesoramiento técnico y financiero que la ITT se comprometía a ofrecer a la sociedad española para la consecución de su proyecto de organización, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional. A cambio, la multinacional recibía unos suculentos beneficios en forma de comisiones de dos tipos, eso sin contar el rendimiento monetario que obtuviera de las acciones de la Telefónica que tenía suscritas y que eran muy numerosas. Como vamos a comprobar, este primer contrato no era más que una reedición de las bases 2ª y 3ª del convenio original firmado entre las dos sociedades el día 19 de abril cuando la CTNE fue constituida, ya que se expresaba en términos muy similares, exceptuando alguna pequeña diferencia. El presente acuerdo y el otro que a continuación se detallará dejaban sin efecto el convenio firmado entre las dos sociedades en el mes de abril.

El primer contrato comenzaba realizando las consideraciones siguientes:

- Que, producto de los estudios e investigaciones realizados por la International, se había creado la Compañía Telefónica Nacional de España con el fin de conseguir un contrato con el Estado para la reorganización y desarrollo del servicio telefónico nacional.
- Que gracias precisamente a las gestiones realizadas por la multinacional se había logrado dicha concesión a favor de la CTNE.

³⁵¹ Acta nº 3 del Consejo de Administración, 29 de agosto de 1924, libro 1, pp. 7-11.

- Que en virtud del segundo contrato firmado también el mismo día 29 de agosto se cedía a la CTNE todas las acciones ordinarias de la Compañía Peninsular de Teléfonos, así como las opciones y otros derechos para la adquisición de las redes telefónicas de Zaragoza, Málaga, Almería, Córdoba, Santander y Granada.
- Que la International se comprometía a adquirir todas las acciones que representaban la ampliación del capital social de la CTNE, que ascendía a 114 millones pesetas, excepto 600.000 pesetas, representadas por 1.200 acciones ordinarias que se reservaban para el Banco Urquijo y el Banco Hispano Americano a partes iguales.

Hechas estas cuatro consideraciones iniciales y teniendo en cuenta que la ITT se comprometía a suministrar los servicios técnicos y financieros que a continuación se detallaban durante el plazo mínimo de 20 años que habría de durar la concesión conseguida por la CTNE, la sociedad española se comprometía a pagar a la multinacional durante dicho plazo las dos comisiones especificadas y detalladas en los siguientes apartados.

En el apartado A, muy similar a la base 2ª del primer contrato del mes de abril, la International se comprometía a aconsejar técnica y financieramente a la CTNE, inspeccionar su organización y desarrollo, completar los estudios iniciales de oficinas, revisar los presupuestos anuales, preparar los planos de las plantas para los edificios telefónicos, comunicar los resultados de sus investigaciones sobre ciencia telefónica, preparar los estudios para el desarrollo de las redes, representar a la CTNE en los mercados extranjeros y mantener en Madrid a su propio costo al personal necesario con el fin de prestar los servicios enumerados. Como pago por todos estos servicios expuestos, la ITT percibiría un 4,5% de los ingresos brutos de la CTNE.

Como ya se explicó cuando se estudió el primer convenio firmado entre las dos sociedades, esto quería decir que cualquier ingreso que realizara la Telefónica en sus cuentas no sería cargado en su totalidad, sino que un 4,5% de la cantidad tendría que pagarse directamente a la International. Ni siquiera se trataba de un porcentaje sobre los beneficios netos, algo que ya de por sí sería ventajoso para la multinacional, sino sobre los ingresos brutos. En contrapartida, la ITT sólo cobraría esta remuneración si los beneficios totales permitían pagar los intereses de las acciones preferentes; en caso de que esto no fuera posible, el pago de esta comisión quedaría aplazado hasta que fuera posible cobrarlo. Además, a efectos de la liquidación de esta remuneración y

durante los tres primeros años, no sería apartada por la CTNE ninguna cantidad para el fondo de depreciación y en los años sucesivos no excedería del 3%.

En el apartado B, prácticamente igual a la base 3ª del primer convenio del mes de abril, se especificaba que la ITT mantendría “a su propio coste un personal adecuado en las oficinas instaladas en locales que le serán proporcionados por la Compañía Telefónica Nacional de España para comprar los materiales, examinar los edificios que tenían que ser construidos o reconstruidos, conseguir los precios más competitivos para materiales y enseres y hacer anticipos temporales de fondos para la compra de estos materiales.

Por todo lo expuesto en este apartado B, la International percibiría una comisión del 5% sobre el importe de todos los enseres comprados, así como sobre el coste de los edificios construidos, adquiridos o reconstruidos. Expresando este concepto con otras palabras, esto significaba que cualquier pago de material destinado a redes o edificios costaría a la empresa española un 5% más que el valor que pagaba a su proveedor, ya que tenía por un lado que costear el material adquirido y por otro entregar este porcentaje del valor pagado a la ITT. Este importe sería abonado regularmente a la cuenta de la multinacional, aunque no podría disponer de esa cantidad mientras la CTNE no se encontrara al corriente en el pago de los intereses de sus obligaciones y de los dividendos de las acciones preferentes (como ocurría con la otra comisión del 4,5% de los ingresos brutos de la Telefónica)

La segunda parte del contrato privado entre la CTNE y la ITT³⁵²

El segundo convenio firmado entre las dos entidades en este día hacía referencia a la cesión de derechos en relación con determinadas propiedades telefónicas y a la suscripción de valores. El presente contrato y el otro que se ha descrito anteriormente dejaban sin efecto el convenio firmado entre las dos sociedades el día 19 de abril de 1924.

En este caso, las diferencias con respecto al acuerdo del mes de abril sí son notables, ya que en el primitivo se estipulaba que el capital social aumentaría hasta los 60 millones de pesetas, mientras que en realidad se estaba elevando a 115 millones.

³⁵² Acta nº 3 del Consejo de Administración, 29 de agosto de 1924, libro 1, pp. 11-13.

De todas formas, aunque el capital final y la forma de repartir las acciones hubiera cambiado, la consecuencia final no variaba: la ITT adquiriría la mayor parte de las acciones ordinarias por lo que se convertía no sólo en el mayor propietario de la CTNE, sino en el que tenía el verdadero control de la compañía española.

Por el presente contrato, la ITT se comprometía a transferir a la CTNE todas las acciones ordinarias de la Compañía Peninsular de Teléfonos, que a su vez era propietaria de todas las acciones ordinarias de la Sociedad General y la Madrileña de Teléfonos. Además, entregaría, dentro de un plazo prudencial, todas las acciones preferentes que poseía de dichas sociedades. A cambio de todo ello, la CTNE entregaría 50 millones de pesetas en efectivo a la ITT. Es interesante recordar en este momento que Sosthenes Behn adquirió el control de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de sus filiales pagando 10 millones de pesetas por sus acciones ordinarias a principios de 1924, lo que supone una revalorización de estas empresas de un 400% en medio año. Es cierto que la ITT también se comprometía a transferir todas sus opciones, derechos y privilegios de las concesiones telefónicas de Zaragoza, Málaga, Almería, Córdoba, Santander y Granada, si bien es difícil pensar que las opciones de compra de estas seis ciudades estaban valoradas en 40 millones de pesetas.

En cuanto al aumento del capital social de la empresa, se repartía éste en 100 millones de pesetas en acciones preferentes y 14 millones de pesetas en acciones ordinarias. La International Telephone Securities Corporation, el brazo financiero de la ITT creado a principios de año por Sosthenes Behn, se comprometía a adquirir la totalidad de estas acciones, exceptuando las que corresponden a 600.000 pesetas (1.200 acciones), que se repartirían a partes iguales entre el Banco Urquijo y el Banco Hispano Americano. En este caso la propia ITT actuaba como “intermediaria” entre la CTNE y la Securities. Ésta iría adquiriendo las acciones a medida que los fines sociales de la compañía española lo requirieran.

Dicho de otra forma: unas horas antes de la firma del acuerdo entre la CTNE y el Estado español, la ITT no tenía suscrita ninguna acción de la sociedad española, que contaba con un accionariado exclusivamente nacional formado por cuatro empresarios y miembros de la alta sociedad española, a los que se sumaba Gumersindo Rico. De manera oficial, no existía ninguna relación entre la International y la Telefónica, a excepción de un acuerdo entre ambas, que era privado y cuyo contenido no era conocido por el Gobierno de la Dictadura. Unas horas después del acuerdo suscrito en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, la ITT se convirtió en la principal accionista de la empresa española, comprometiéndose a adquirir

participaciones por valor de 113.400.000 pesetas, es decir, más del 98% del capital social de la empresa. Las acciones ordinarias, las que otorgaban voto en las Juntas Generales y por lo tanto el control de la sociedad, quedaban casi todas en manos de la International. Con esta estrategia tan soberbiamente orquestada, la multinacional había pasado de ser un sencillo consultor técnico y financiero de la CTNE a ser el dueño absoluto de ésta, controlando todas sus decisiones y su estrategia empresarial. Como es de suponer, todas estas decisiones se tomaron siempre mirando por el bien de la ITT antes que por el bien de la CTNE, y por supuesto, por encima del interés del Estado español.

Como veremos un poco más adelante, si bien la Securities se comprometía a adquirir todas las acciones preferentes, finalmente no fueron suscritas por la multinacional. Poco importaba ya quien comprara las participaciones preferentes, teniendo en cuenta que la ITT había adquirido de antemano la mayoría de las acciones ordinarias y se había hecho con el control de la compañía.

3.64. Lunes, 31 de agosto de 1924

Las redes guipuzcoanas y el Real Decreto de 25 de agosto³⁵³

Tres días después de que el Real Decreto por el que se autorizaba al Gobierno a firmar el contrato con la Telefónica fuera publicado en la Gaceta de Madrid el día 28 de agosto de 1924, la Comisión de Hacienda del ayuntamiento de San Sebastián solicitó al letrado municipal que estudiara dicha norma. La intención era que emitiera un dictamen “sobre si procedía o no que el Ayuntamiento entablase recurso contencioso administrativo contra dicha disposición”.

Como ya hemos visto, la alarma se había instalado tanto en la corporación municipal como en la provincial incluso antes de conocerse los términos en los que se manifestaba el contrato. Una vez fueron conocidos, la Diputación decidió recurrir contra el citado Real Decreto y contra el convenio firmado entre la CTNE y el Estado por lo que pudiera haber en todo ello de contrario a sus derechos como concesionario de la red provincial. Aunque el letrado municipal de San Sebastián todavía no había emitido su dictamen, por el momento el ayuntamiento de la capital decidió no unirse al recurso en tanto en cuanto consideraban que las circunstancias en las que se

³⁵³ Gutiérrez-1997, pp. 239-240 y 278.

encontraban las dos redes eran distintas: la provincial tenía un plazo de concesión de 35 años mientras que la municipal tenía una licencia de explotación a perpetuidad.

En vista de las tensiones que comenzaban a surgir entre la diputación de Guipúzcoa y la Compañía Telefónica Nacional de España, el Director de Tráfico de la empresa, M. Howard Soler, fue enviado a las instalaciones de la red telefónica provincial con el fin de reunirse con sus directivos. Allí se trató de aunar los esfuerzos de las dos entidades por el bien del servicio entre las líneas de la CTNE y las de Guipúzcoa. Además, el Marqués de Urquijo, Presidente de la compañía, realizó unas “valiosas manifestaciones en nombre del Consejo sobre que la Compañía nunca intentaría, con relación a la Red de Guipúzcoa, nada que no fuese de perfecto acuerdo con la Diputación”. Como ya podía apreciarse, el Marqués de Urquijo ostentaba un cargo similar al de un rey en una monarquía parlamentaria: era la máxima autoridad de la compañía pero carecía de poder real y su papel se limitaba, la mayor parte de las veces, a representarla en los actos públicos, a firmar los documentos oficiales y a realizar laborales casi diplomáticas.

En vista de la actitud cordial de la CTNE gracias a la visita de Soler y a las palabras del Presidente de la compañía, la Diputación decidió retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la adjudicación del sistema telefónico nacional, aunque esto no ocurriría hasta muchos meses después.

3.65. Miércoles, 3 de septiembre de 1924

Segunda reunión del Comité Ejecutivo³⁵⁴

En el día 3 de septiembre de 1924 se celebró la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la CTNE, a la que ya no asistió Sosthenes Behn, por lo que deducimos que, una vez conseguida oficialmente la adjudicación del servicio nacional, el presidente de la ITT volvió a marchar para centrar su atención en el resto de negocios de la multinacional que presidía. Sin duda, el asunto telefónico español había requerido toda su atención durante los meses de verano y a él había dedicado grandes esfuerzos personales. Sin embargo, una vez su objetivo se había alcanzado y tras una última reunión con Primo de Rivera el día de la firma del contrato, el Coronel marcharía de Madrid y dejaría en manos de su hombre de confianza, Lewis J. Proctor,

³⁵⁴ Acta nº 2 del Comité Ejecutivo, 3 de septiembre de 1924, libro 1, pp. 1-2.

la gestión del proyecto que la CTNE se proponía emprender en España. Por supuesto, las órdenes de Behn seguían llegando a España puntualmente por medio de cartas y telegramas enviados desde Nueva York, París, etc.

En aquella reunión del Comité Ejecutivo, presidida por Julián Cifuentes, se tomaron sólo dos decisiones. La primera tenía que ver con las oficinas de la compañía, ya que evidentemente se habían quedado pequeñas teniendo en cuenta el nuevo escenario de la Telefónica. Hasta entonces, la empresa era una sociedad con un capital de 1 millón de pesetas cuyo único objetivo era lograr la concesión del sistema telefónico español. Como ya hemos visto, la plantilla de trabajadores que la ITT consiguió reunir en torno a la CTNE fue extraordinaria, con profesionales de reconocida experiencia en el sector, ingenieros y especialistas técnicos, un grupo formado por los mejores abogados, etc. Sin embargo, y a pesar de la cantidad y calidad de sus empleados, la compañía no dejaba de ser una entidad que todavía estaba preparando el proyecto al que se había consagrado y no estaba volcada todavía en su verdadera razón social: la reorganización, modernización y explotación del servicio telefónico en España.

Estas aspiraciones se convirtieron en realidad el día 29 de agosto de 1924 y de esta forma se daba comienzo a la verdadera obra de la Compañía Telefónica Nacional de España. Es evidente que la plantilla y las instalaciones de la oficina central tenían que crecer, con el fin de acoger ya no sólo a los trabajadores que habían hecho posible la consecución de su proyecto, sino a todos los nuevos empleados necesarios para desarrollar las labores habituales de una empresa de estas características. Ahora la CTNE tenía un capital social de 115 millones de pesetas y se proponía realizar la mayor obra de comunicaciones planteada hasta la fecha en nuestro país: reformar el desastroso sistema telefónico nacional, construir una red moderna y eficaz y explotar todo el servicio bajo su control.

La sede de la compañía se encontraba, por aquel entonces, en el primer piso del edificio situado en la plaza de las Cortes, número 6, al lado del Congreso de los Diputados. En su segunda reunión, el Comité Ejecutivo decidió alquilar también el piso entresuelo izquierda del mismo edificio, con el fin de ampliar sus oficinas. El precio era de 20.000 pesetas anuales y el contrato de arrendamiento fue firmado por Proctor, como ya hiciera con el del primer piso.

La segunda decisión que se tomó en aquella fecha fue la de delegar todas las atribuciones del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración en Gumersindo

Rico para formalizar “cuantas escrituras y documentos públicos y privados sean necesarios al desenvolvimiento y funciones de esta Compañía, [...] designándole por unanimidad, para llevar a efecto con la plena representación de este Comité y del Consejo cuantas formalidades se requieran para el cumplimiento del mandado que en virtud de este acuerdo se le otorga”. Es decir, que el Secretario tenía desde ese momento plenos poderes para firmar todos aquellos documentos legales, públicos o privados, con el fin de que la empresa se desarrollara con normalidad, sin necesidad de recurrir a la autorización de ningún órgano de gobierno.

3.66. Viernes, 12 de septiembre de 1924

El papel de José Antonio Primo de Rivera en la CTNE

El célebre hijo del general Primo de Rivera, José Antonio (1903-1936), estudió la carrera de derecho y se licenció en el año 1922. Varios historiadores coinciden en afirmar que un año más tarde entraría a formar parte del equipo de abogados españoles que asesoraron jurídicamente a la ITT y a la CTNE en el proceso de adjudicación del sistema telefónico nacional, ayudando a redactar meticulosamente las bases del contrato final que se firmaría con el Estado a finales de agosto. Las averiguaciones realizadas por Antonio Pérez Yuste en los archivos de Gumersindo Rico nos han permitido conocer que éste entró en contacto con el hijo del Dictador a través del Marqués de Pozoblanco y pronto quedaría “fuertemente impresionado por la profundidad de pensamientos que poseía aquel joven abogado, recién salido de la Universidad”³⁵⁵. También según estos documentos de Gumersindo Rico, el vínculo de José Antonio Primo de Rivera con la CTNE finalizó cuando la empresa presentó al Gobierno su “Proyecto sobre el desarrollo de las comunicaciones telefónicas en España” en abril de 1924.

En cuanto la noticia de la adjudicación del servicio telefónico se hizo pública, algunas voces críticas ataron cabos y acusaron al general Primo de Rivera de inmoralidad administrativa. Según éstas, una de las condiciones que habría impuesto el Marqués de Estella para la concesión del sistema nacional a la CTNE fue la de asegurar un puesto en la plantilla para su hijo mayor. No cabe duda que los contactos familiares de José Antonio Primo de Rivera ayudarían, y mucho, en las negociaciones

³⁵⁵ Yuste-2004, pp. 128-129.

llevadas a cabo a lo largo de aquellos meses, especialmente durante el verano. Sosthenes Behn supo jugar aquella carta y no sólo vio en José Antonio a un joven y brillante abogado; también vio al hijo del Jefe del Gobierno, que tenía el poder de otorgar, en último término, el sistema telefónico nacional a una empresa como la CTNE, el que tendría que redactar el Real Decreto y presentárselo al rey para su firma y sanción.

Como respuesta a las críticas que circulaban, la Oficina de Información del Gobierno facilitó el día 11 de septiembre de 1924 una nota oficial que fue publicada en los periódicos del día siguiente y que reproducimos, en parte, a continuación³⁵⁶:

Otra nueva carta propagadora de especies falsas, alarmantes y atentatorias [...] ha caído en manos de la Policía. [...] La misma carta contiene el siguiente párrafo:

“La inmoralidad y la barbarie cunden por todas partes de modo vergonzoso. Ya habrá usted visto la adjudicación, sin subasta ni concurso, del servicio telefónico a la Compañía donde se asegura que ha entrado ¡de abogado! el joven hijo del dictador con 20 ó 25.000 pesetas de sueldo. Y así por todas partes.”

Aparte de los signos admirativos aplicados a la palabra abogado tratándose de un joven que es licenciado y doctor en Derecho, cursando su carrera con sobresalientes y matrículas de honor, [...] aparte de esto, lo demás es mentira, o sea lo contrario absolutamente de toda verdad.

En efecto, el hijo del general Primo de Rivera, que habla el inglés y el francés como el español, y que ya llevaba dos años empleado en una casa de maquinaria de origen norteamericano, obtuvo colocación por intervención de un amigo suyo, el Sr. Maroto, en la Compañía de Teléfonos que ahora ha obtenido la concesión del Estado. Pero en cuanto el presidente del Directorio supo que esta Compañía era concursante, llamó a su director; le obligó a prescindir de los servicios de su hijo, consiguiendo de éste sin esfuerzo que renunciara a su puesto y que para justificarlo pidiera anticipo de reingreso en el regimiento en que hace sus servicios como suboficial de complemento.

³⁵⁶ El Sol, 12 de septiembre de 1924, p. 1; La Vanguardia, 12 de septiembre de 1924, p. 12.

Hasta aquí parece que la nota oficial del Gobierno viene a confirmar lo que Gumersindo Rico reflejó en sus notas y que ha quedado documentado en la tesis de Antonio Pérez Yuste: José Antonio entró a trabajar para la ITT como abogado y abandonó su puesto cuando se conoció que la CTNE habría presentado un proyecto de telefonía al Gobierno³⁵⁷. No obstante, como ya hemos visto, esta propuesta entregada de manera oficial en abril de 1924 no era más que una revisión del proyecto que la ITT llevaba desarrollando durante mucho tiempo antes y de la que el general Primo de Rivera tenía perfecta constancia. No se vio entonces ningún problema en que el hijo del Dictador trabajara para una empresa que venía presentando planes al Gobierno, hasta que no se hizo de manera oficiosa en el mes de abril y con el membrete de la CTNE.

La nota de la Oficina de Información continuaba diciendo:

Todo se realizó así; pero además, el presidente del Directorio no quiso indicar ni un solo nombre de los de la ponencia técnica, ni de la financiera que había de examinar los proyectos, ni designados por quien corresponde, ha cruzado con ellos ni el saludo, ni quiso saber qué ponentes del Directorio estudiaban el asunto, ni tampoco conocer la ponencia hasta no ser leída en Consejo, y cuando lo fue, sobre estimular a todos a que extremaran el estudio del contrato -lo que dio lugar a importantes y severas modificaciones-, el presidente, por sí mismo, examinó la cláusula ya aprobada que concedía franquicia de timbre a la contabilidad de la Compañía, se opuso a tal concesión, y logró que se anulara, lo que significaba para la Compañía de Teléfonos “un favor” de muchos miles de pesetas anuales en contra. Esta es la única verdad, hasta el punto que los generales del Directorio más bien consideraron al presidente influido por un prejuicio contra la Compañía.

Este párrafo es, sin embargo, una clara exageración de los hechos ocurridos durante el verano de 1924 y que ya han sido descritos en los apartados anteriores. Es cierto que los documentos históricos consultados no sitúan al Marqués de Estella como principal defensor de los intereses de la CTNE, pero tampoco llegó a tener nunca “prejuicio contra la Compañía”. Algunos historiadores indican también que

³⁵⁷ La persona que sirvió como contacto entre Rico y Primo de Rivera hijo también coincide: Juan Maroto y Pérez del Pulgar (1896-1977) era Marqués de Pozoblanco. Participó en la Guerra de Marruecos como alférez de complemento, fue hecho preso en el Desastre de Annual y liberado tiempo después.

Primo de Rivera tomó parte activa en las negociaciones, entrevistándose en alguna ocasión con Sosthenes Behn. Tampoco es exacto que Primo de Rivera no quisiera conocer los nombres de los ponentes encargados de estudiar el asunto telefónico y, en cuanto a las “importantes y severas modificaciones” que consiguió realizar en el contrato, ya se ha demostrado que no fueron ni tan importantes ni tan severas.

Es interesante ver también como la nota del Gobierno se esmeró en desvincular a la familia Primo de Rivera de la decisión de adjudicar el sistema telefónico nacional a la CTNE, pero no opuso ninguna pega a la parte en la que se acusaba al Gobierno de realizar la concesión sin subasta ni concurso. Estas palabras fueron quizá obviadas, o por lo menos esquivadas, porque no había forma de justificar algo tan evidente como que el Directorio se había saltado la Ley de Administración y Contabilidad Pública; aunque también es cierto que la Oficina de Información bien podría haber eliminado esa parte del texto ya que realmente se estaba reproduciendo por voluntad del Gobierno.

3.67. Sábado, 13 de septiembre de 1924

Tercera reunión del Comité Ejecutivo³⁵⁸

El Comité Ejecutivo de la CTNE se reunió en esta fecha con el único fin de completar la personalidad y atribuciones del Secretario General de la compañía, cargo que se encontraba en manos de Gumersindo Rico. Si en la reunión anterior se había autorizado a éste para que formalizara cuantas escrituras y documentos públicos o privados fueran necesarios para el desenvolvimiento y funciones de la compañía, en esta nueva reunión se hacía extensiva esta autorización para que pudiera “celebrar por sí sólo todos los contratos de compra necesarios”. Como veremos a continuación, esta nueva ampliación de las atribuciones asignadas a Gumersindo Rico era necesaria en tanto en cuanto la CTNE seguía enfrascada en un proceso de adquisición de propiedades telefónicas a lo largo y ancho de la geografía española, con miras en las capitales provinciales que todavía no se encontraban bajo su control.

³⁵⁸ Acta nº 3 del Comité Ejecutivo, 13 de septiembre de 1924, libro 1, p. 2.

La contestación de José Antonio Primo de Rivera

Como consecuencia de las críticas que se habían levantado por la relación entre el hijo del Jefe del Directorio Militar y la Compañía Telefónica Nacional de España, José Antonio Primo de Rivera, que por aquel entonces tenía 21 años, envió una carta a varios periódicos para que fueran publicadas en las ediciones de 13 y 14 de septiembre³⁵⁹. Se reproduce aquí algún fragmento de la nota en la que explicaba su vínculo con la CTNE:

Mi relación con la Compañía Telefónica Nacional ha sido ésta: hace tiempo, el presidente de una Compañía telefónica norteamericana, Mr. Behn (para quien sólo tengo respeto y gratitud), habló con un amigo mío de que quisiera llevarse a trabajar con él en los Estados Unidos a un muchacho español. Mi amigo tuvo la bondad de recomendarme y presentarme a Mr. Behn; éste no me encontró mal, y quedó convenido que cuando mi servicio militar terminase me iría con él a América. Entonces ni el Sr. Behn ni la Sociedad americana tenían relación alguna con el Estado español.

Pero más tarde se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, integrada, entre otros, por elementos de la presidida por Mr. Behn, y solicitó la concesión de los teléfonos españoles [...]

Tan pronto como la nueva Compañía estableció así relación con el Estado, mi padre “me obligó a renunciar al prometido destino en América, a pesar de que, ganándome allí honradamente la vida, no tendría nada que ver con la Compañía española ni con el Estado”.

Conste que a la Compañía española no he pertenecido “ni un minuto”. Regístrense sus libros, sus nóminas, todos sus papeles, a ver si alguien encuentra en ellos rastro de mi nombre. Mi colocación estaba en los Estados Unidos; allí pensaba irme en cuanto acabase el servicio militar (innumerables personas lo saben), y si mi padre me impuso el sacrificio (que yo acepté por él con gusto) de renunciar a ese porvenir, lo hizo por un exceso de delicadeza.

³⁵⁹ La Voz, 13 de septiembre de 1924, p. 3; La Vanguardia, 14 de septiembre de 1924, p. 12.

La colaboración de José Antonio como asesor en materia jurídica con la CTNE ha quedado demostrada mediante varias pruebas documentales, como los archivos de Gumersindo Rico, aunque sí parece probado que su nombre nunca llegó a aparecer en la plantilla de empleados ni de la ITT ni de la CTNE. Gumersindo Rico y otros dirigentes de la Telefónica dirigían a él las dudas que se les planteaban en cuestiones legales vinculadas al asunto telefónico, pero siempre actuaba como asesor externo. No es mentira por lo tanto que José Antonio no perteneció “ni un minuto” a la Compañía Telefónica Nacional, por lo menos de manera oficial, aunque tampoco es cierto que su relación con la sociedad se limitara a su intención de entrar a formar parte del elenco de abogados de la ITT en Estados Unidos.

No obstante, lo que más sorprende de aquella polémica es que Primo de Rivera hijo proclamara que nunca había formado parte de la CTNE (o que hubiera colaborado con ella siquiera) cuando dos días antes, en la nota oficial del Gobierno, se afirmaba que “el hijo del general Primo de Rivera [...] obtuvo colocación [...] en la Compañía de Teléfonos que ahora ha obtenido la concesión del Estado. Pero en cuanto el presidente del Directorio supo que esta Compañía era concursante, llamó a su director; le obligó a prescindir de los servicios de su hijo, consiguiendo de éste sin esfuerzo que renunciara a su puesto”. Es decir, que Primo de Rivera padre confirmaba que José Antonio había trabajado a las órdenes de la CTNE, mientras que su hijo lo negaba sólo dos días más tarde, indicando que su relación no había llegado a ser ni la de asesor externo.

3.68. Lunes, 15 de septiembre de 1924

La comisión para la valoración de las redes del Estado

La base segunda del contrato firmado entre el Gobierno y la Telefónica consignaba que el Estado entregaría a la compañía todas las instalaciones y propiedades telefónicas explotadas hasta el momento por el Cuerpo de Telégrafos, “para su modernización, reconstrucción, ampliación y para los demás fines de este contrato”. Además, se incluían también todas las redes “que en lo sucesivo debían revertir al mismo [al Estado] a tenor de las respectivas concesiones”. La compañía se haría cargo de todas estas instalaciones en un plazo máximo de seis meses.

Por su parte, la base tercera del mismo contrato decía lo siguiente:

Por el derecho que se confiere a la Compañía en la base anterior, por la entrega de las instalaciones y propiedades telefónica que ha de serle hecha por el Estado y por el derecho que corresponde y puede corresponder al Estado con relación a la reversión de las redes explotadas por concesionarios, la primera abonará a éste, además de los beneficios que se indican en la base séptima, la cantidad que resulte de una valoración de las líneas y centros que hoy posee el Estado y que debe entregar a la Compañía a medida ésta lo solicite. La valoración será hecha por una Comisión formada por dos Ingenieros del Cuerpo de Telégrafos, nombrados por la Dirección del Ramo, y dos funcionarios de la Compañía, nombrados por ésta. En el caso en que no hubiere conformidad en la valoración, las personas designadas nombrarán un Presidente de su libre elección, y si no llegasen a un acuerdo lo designará el Jefe del Gobierno.

La valoración tendrá que estar terminada en un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha de la firma de la escritura de otorgamiento de esta concesión y deberá ser acatada tanto por el Estado como por la Compañía. Ésta abonará al Estado la cuantía de la valoración en el plazo de treinta días después de firmadas las actas de la misma.

En el acto de la firma de este contrato, la Compañía estará obligada a depositar 5.000.000 (cinco millones) de pesetas en las arcas del Tesoro para responder y a cuenta del importe de la valoración.

La comisión nombrada para la valoración de las redes del Estado tenía, por lo tanto, hasta el día 29 de noviembre para realizar un estudio riguroso de todas las líneas e instalaciones telefónicas del Estado y emitir una valoración de la cantidad total que la Compañía debería aportar como pago por todas estas propiedades. No fueron pocos los que se sorprendieron del plazo tan corto que se concedía a una comisión formada sólo por cuatro personas para llevar a cabo una labor de estas dimensiones, teniendo en cuenta la gran cantidad de redes con las que contaba el Cuerpo de Telégrafos y las condiciones tan variadas en las que se encontraban, ya que habían ido revirtiendo a lo largo de los años en circunstancias de lo más variopintas. Sin embargo, como veremos más adelante, la comisión no tuvo problemas para realizar la valoración en el plazo establecido, hasta le sobró tiempo, y ni siquiera tuvieron que recurrir al nombramiento de un presidente para deshacer un posible empate.

La primera reunión de este equipo tuvo lugar el día 15 de septiembre de 1924 y los cuatro vocales nombrados fueron Roy A. Walker, Ingeniero Jefe de la CTNE, José Berenguer Cagigas, Subdirector del Distrito 1º de la compañía, Antonio Nieto Gil, Jefe de Centro del Cuerpo de Telégrafos, y Francisco Moñino y Benítez-Cano, Oficial Segundo de la misma corporación. De esta forma se daba comienzo al trabajo de estudio y valoración de las redes en manos del Cuerpo de Telégrafos que, como veremos más adelante, terminó siendo un mal negocio para el Estado³⁶⁰.

3.69. Viernes, 19 de septiembre de 1924

Reunión del ayuntamiento de Santander para tratar la cesión de la red

El ayuntamiento de Santander, que estaba a cargo de la red municipal, fue una de las entidades más perjudicadas por el vaivén legislativo en materia telefónica de los distintos gobiernos, incluido el de Primo de Rivera en sus primeros meses en el poder. El consistorio había elevado ya varias solicitudes en las que pedía una prórroga en la concesión para hacer frente a las múltiples deudas que el negocio telefónico le estaba ocasionando, pero el día 17 de enero de 1924 vio como la última de esas instancias era denegada por Real Orden del Subsecretario de la Gobernación, agotando así la vía administrativa. Sin embargo, muchas ciudades españolas habían conseguido en el pasado ampliaciones en sus licencias y, para más inri, San Sebastián había logrado sólo un par de meses antes una prórroga a perpetuidad de su concesión del centro telefónico urbano. Lo que más tuvo que sorprender en el ayuntamiento santanderino fue la promulgación, en marzo de ese mismo año, del Estatuto Municipal, que proclamaba que las concesiones municipales pasaban a estar bajo control de los consistorios, cosa que le había sido denegada tajantemente dos meses antes. Parece claro que Santander eligió el peor momento para elevar sus instancias, teniendo en cuenta la inconsistencia legislativa del Directorio Militar en aquellos momentos.

El ayuntamiento tuvo que leer resignado las bases cuarta y quinta del contrato del Estado con la Compañía Telefónica Nacional de España. En ellas se establecía que la compañía estaba autorizada a negociar directamente con los concesionarios de las distintas redes españolas, sin mediación alguna por parte del Estado. El general Mayandía ya había expresado, en sus informes del mes de agosto, que el Gobierno

³⁶⁰ Yuste-2004, pp. 221-222.

debería tener una intervención mucho mayor en las negociaciones y en las adquisiciones de las líneas en manos de otras entidades, pero esta demanda, como tantas otras, no llegó a formalizarse en el contrato final, que quedó redactado de una forma tan favorable para los intereses de la Telefónica.

A pesar de que el fin de la licencia santanderina no se encontraba cercano todavía y por lo tanto podía continuar su explotación durante varios años más, el ayuntamiento se decidió a vender su sistema urbano, posiblemente para deshacerse de él lo antes posible y de las deudas que le estaba provocando a la ciudad, según quedaba reflejado en las solicitudes realizadas por su alcalde a finales de 1923. De esta forma, el consistorio de Santander se convirtió en una de las primeras entidades en entablar negociaciones para la cesión de sus propiedades, una vez la CTNE había logrado la concesión del sistema telefónico nacional. Para tratar el tema de la cesión de la red urbana a la compañía se celebró una reunión plenaria del ayuntamiento en la jornada del 19 de septiembre de 1924, a la que asistió Gumersindo Rico en representación de la CNTE³⁶¹.

3.70. Viernes, 26 de septiembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo³⁶²

Comenzó esta reunión con una referencia a los dos contratos firmados entre la CTNE y la ITT el día 29 de agosto, el segundo de los cuales versaba sobre los compromisos que la compañía española adquiriría con la International Telephone Securities Corporation en materia de emisión, suscripción y compra de valores. A este respecto, se autorizaba a Javier Martí-Codolar, Director General de la compañía, para firmar, en nombre la misma, los resguardos provisionales de las acciones que hubieran de emitirse conforme al aumento de capital que se había acordado. Así mismo se autorizaba a Martí-Codolar para que firmara toda clase de cheques, giros u órdenes de pago contra los fondos de la compañía.

En otro orden de cosas, Proctor daba lectura a una carta en la que se hacía una oferta a la compañía por un solar en la calle Hermosilla de Madrid, a lo que el Comité respondía dando plenas facultades al Vicepresidente de la compañía para que

³⁶¹ La Vanguardia, 18 de septiembre de 1924, p. 13.

³⁶² Acta nº 4, 26 de septiembre de 1924, libro 1, pp. 2-3.

llevara a cabo las gestiones necesarias con el vendedor, llegando a la adquisición de la propiedad si así lo consideraba oportuno. De esta forma iniciaba la CTNE un gran plan de compra de solares y edificios en muchas ciudades españolas, empezando por la capital, para la construcción e instalación de centros telefónicos modernos y adecuados, con el fin de sustituir poco a poco las instalaciones realizadas por los anteriores propietarios de las redes, que se encontraban a estas alturas en un estado calamitoso, en la mayor parte de los casos. Este solar de la calle Hermosilla, situado al lado de la central que la Compañía Madrileña de Teléfonos tenía en el barrio de Salamanca, sería donde algún tiempo más tarde comenzaría la construcción de la central automática que reemplazaría al viejo sistema manual que todavía daba servicio a la zona este de la capital³⁶³.

La CTNE se encontraba inmersa en el proceso de adquisición de la red telefónica urbana de Santander. Por esto motivo, Gumersindo Rico se había desplazado unos días antes a la ciudad cántabra para participar en el pleno celebrado por el ayuntamiento cuyo objeto era tratar las condiciones de esta cesión. Se entiende que las negociaciones se desarrollaron de manera positiva para los intereses de la empresa, puesto que en esta reunión del Comité Ejecutivo se delegó la representación de la compañía en el Subdirector del Distrito 3º, Benito Navarro, para que concertara y formalizara los documentos públicos o privados necesarios con el fin de completar la incautación de dicha red urbana³⁶⁴.

Por último, y a petición de Ruiz Senén, se acordaba fijar un día a la semana para celebrar la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo, sin necesidad de convocatoria previa, y “sin perjuicio de reunirse cuantas veces fueren convenientes”. La reunión habitual del comité pasaría a celebrarse todos los miércoles a las 4 de la tarde, a partir de la siguiente semana.

³⁶³ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 10.

³⁶⁴ El Distrito 3º, que comprendía varias provincias del norte peninsular, tenía su sede en la ciudad de Bilbao.

3.71. Sábado, 27 de septiembre de 1924

Reunión del Consejo de Administración³⁶⁵

La reunión del Consejo de Administración celebrada en el mes de septiembre sirvió para que este órgano otorgara aún mayor libertad de actuación al Comité Ejecutivo, dándole plenas facultades para que actuara en nombre del Consejo y consiguiendo de esta forma que no tuvieran que recurrir a su autorización en ningún momento.

El Presidente del Consejo, el Marqués de Urquijo, abrió la sesión expresando, “en sinceras palabras de afecto para el Consejo y para los funcionarios de la Compañía, sus deseos a favor de la prosperidad de la misma y su decidido propósito de dedicar a este negocio el mayor interés y la más preferente atención”. A continuación se leía y aprobaba el acta de la reunión anterior, así como las correspondientes a las sesiones celebradas por el Comité Ejecutivo, mereciendo todas las decisiones tomadas por éste la completa aprobación de los consejeros. También fueron leídos, examinados y refrendados los contratos firmados entre la ITT y la CTNE en la última reunión del Consejo el día 29 de agosto de 1924, facultando una vez más al Comité Ejecutivo para que procediera como considerase oportuno a la hora de aclarar algunos aspectos de dichos convenios.

Con respecto a los compromisos adquiridos con la International Telephone Securities Corporation sobre emisión, compra y suscripción de valores, los consejeros también aprobaban todo lo convenido y estuvieron de acuerdo con Valentín Ruiz Senén cuando éste expuso la necesidad de poner en circulación buena parte del nuevo capital social de la empresa. Ruiz Senén aprovechó para indicar “la conveniencia de que el Comité conserve las más amplias facultades y libertad de acción [...] para poder atender oportunamente a las necesidades y contingencias que puedan presentarse sin necesidad de obtener en cada caso autorización del Consejo”. Estando todos los consejeros de acuerdo con esta opinión, se aprobó ratificar al Comité Ejecutivo con plena potestad para tomar cualquier decisión sin necesidad de que mediara el consentimiento del Consejo de Administración.

³⁶⁵ Acta nº 4, 27 de septiembre de 1924, libro 1, pp. 13-14.

Por último, antes de levantar la sesión, Proctor y Rico informaron sobre el proceso de adquisición de redes urbanas en el que se encontraba inmersa la compañía. En este sentido ya se había firmado el acuerdo para la reversión del centro telefónico de Zaragoza y a su vez se estaban realizando las gestiones y negociaciones oportunas para obtener el control de las redes de Málaga, Almería, Santander y Granada.

3.72. Martes, 30 de septiembre de 1924

Las reformas en Telégrafos y la reorganización del servicio telefónico

El diario La Vanguardia publicó el día 30 de septiembre unas declaraciones del Director General de Comunicaciones cuando fue preguntado por la situación de los telégrafos y las próximas reformas del Cuerpo³⁶⁶. Tafur Funés reconocía que “el servicio no es bueno, aunque el personal se esfuerza en remediarlo”, y a la vez se lamentaba de que los proyectos de mejora tropezaban siempre con la escasez del Tesoro público. Para ello habían encontrado la siguiente solución:

Sobre la reforma de la red, como es muy costosa y no había grandes facilidades de obtener los créditos necesarios, se pensó en la reorganización de otro servicio telefónico, por lo que se sacó a concurso, concediéndolo recientemente a una compañía española, por mediación de un contrato, con sujeción a bases que ya se publicaron.

Dicho contrato fue estudiado con todo detalle, y fue aprobado por ser beneficioso para el Estado y para el público.

Ya con este problema resuelto, creo que se podrá implantar la reforma y mejorar la red telegráfica, pues los recursos necesarios se pueden obtener con las cantidades que la Compañía de Teléfonos entregue al Tesoro por el importe de las redes telefónicas de propiedad del Estado, cuya valoración se está actualmente verificando.

A continuación describía las mejoras que se iban a realizar en el servicio teleográfico gracias al dinero que la CTNE entregaría por la compra de las redes que estaban en manos del Estado.

³⁶⁶ La Vanguardia, 30 de septiembre de 1924, p. 18.

No es cierto, como sabemos, que la reorganización del servicio telefónico se realizara para obtener el dinero que permitiría reformar el servicio telegráfico, tal y como declaraba Tafur Funés al periodista. No obstante, sí parecía lógico que el dinero que el Cuerpo de Telégrafos iba a dejar de ingresar por la explotación de los teléfonos quedara compensado, en cierto modo, por el pago que la CTNE realizara por todas las redes y líneas de la corporación pública. Efectivamente así ocurrió: el día 28 de abril de 1925 se firmaba el Real Decreto por el que se acordaba la aplicación de este capital para la ejecución de un “plan general de conjunto de mejora de las redes telegráficas, adquisición de aparatos, instalación de redes neumáticas y reparación del cable de Canarias, presentado por la Dirección general de Comunicaciones”³⁶⁷. Lo que se desconoce, empero, es si la cantidad que finalmente pagó la Compañía era suficiente para emprender este plan tan ambicioso, más teniendo en cuenta que la valoración de las redes de Telégrafos no resultó tan positiva para el Estado como se hubiera deseado.

3.73. Miércoles, 1 de octubre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo³⁶⁸

En esta sesión se tomaron dos decisiones de importancia. La primera, tenía que ver con la adquisición definitiva de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de sus subsidiarias; la segunda, trataba sobre el cambio de domicilio social de la empresa.

Como sabemos, Sosthenes Behn adquirió todas las acciones ordinarias de la Peninsular a principios de 1924, por lo que pasó a controlar, no sólo esta compañía, sino todas las que formaban el entramado de Enrique Parellada. En los contratos privados firmados entre la ITT y la CTNE el día 29 de agosto se establecía que la multinacional hacía entrega a la Telefónica de todas las acciones y derechos sobre estas compañías, a cambio de 50 millones de pesetas en efectivo y una más que beneficiosa participación en la sociedad española. De esta forma, la Peninsular y sus filiales pasaban ahora a manos de Telefónica y con ello adquiría también el control de casi todas las líneas interurbanas del país y de muchos centros urbanos de diversa importancia, entre los que se contaban Madrid y Bilbao. La Compañía Peninsular era

³⁶⁷ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 28 de abril de 1925. Gaceta de Madrid, 30 de abril de 1925, nº 120, pp. 554-555.

³⁶⁸ Acta nº 5, 1 de octubre de 1923, libro 1, pp. 3-4.

la mayor empresa concesionaria, dominaba aproximadamente un tercio de los teléfonos españoles, aunque algunos estudios apuntan que realmente ese porcentaje subía notablemente cuando se trataba de medir el volumen de negocio de este grupo empresarial frente al total nacional. Sin embargo, las críticas con respecto a la calidad del servicio que ofrecía esta empresa y a las condiciones laborales de sus trabajadores eran numerosas: largas listas de espera para darse de alta como abonado, problemas para establecer conferencias incluso en las condiciones más favorables, tarifas excesivamente altas y, en general, abundantes quejas de todo tipo.

Ahora todo ello se encontraba en manos de la Telefónica, que se veía en la obligación de reformar y modernizar por completo todas las redes de la Peninsular, dar un impulso al negocio y, sobre todo, incorporarlas a su red nacional. Realizar una correcta interconexión de todas las líneas, independientemente de las condiciones previas a su reversión, era una tarea que entrañaba no pocas dificultades. El primer reto era, por lo tanto, integrar todos estas instalaciones y propiedades telefónicas en la Compañía Telefónica Nacional para comenzar a dar forma al gran sistema nacional moderno y unificado. Una de las cuestiones era entonces cómo absorber a las compañías del grupo Peninsular e incorporar sus activos en la CTNE. Para comenzar este proceso, el Comité acordó convocar una reunión de banqueros el siguiente sábado día 4 de octubre “para cambiar impresiones sobre las operaciones para el canje de acciones de las Compañías Peninsular y General de Teléfonos por acciones de la Compañía Nacional de España”.

En cuanto al cambio de sede social de la empresa, a estas alturas era evidente que ni siquiera el alquiler de un nuevo piso del edificio situado en la plaza de las Cortes era suficiente para el volumen de trabajo y la cantidad de empleados que comenzaba a adquirir la compañía. En vista de este crecimiento, producto inevitable del inicio de su verdadera actividad empresarial, el Comité Ejecutivo decidió alquilar un edificio completo en el número 5 de la avenida Conde de Peñalver, que era el nombre que tenía en aquella época el tramo de la Gran Vía situado entre la calle Alcalá y la Red de San Luis. Este inmueble, propiedad del Banco Matritense, se encontraba justo enfrente de las oficinas del Banco Urquijo, que estaban en el número 4. En el primer número de la Revista Telefónica Nacional se hacía referencia a esta mudanza³⁶⁹:

³⁶⁹ Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925, p. 7.

Uno de ellos [los elementos que sobresalen en la compañía] es el edificio desde el cual ha de dirigirse el desarrollo que figura en nuestro programa de reorganización y crecimiento del servicio telefónico español: la oficina principal de la Compañía, que ocupamos precisamente el 1.º del pasado diciembre, situada en la avenida del Conde de Peñalver, número 5, Madrid.

La Compañía Telefónica Nacional entraba así en el nuevo corazón empresarial de Madrid y contaba con una sede central suficientemente distinguida para la significancia que habría de adquirir. Sin embargo, poco después, aquel edificio también se quedaría pequeño y la empresa decidiría construir, no muy lejos de éste, un imponente rascacielos que reflejara la fuerza y el poder que había adquirido la CTNE en un lapso brevísimo de tiempo.

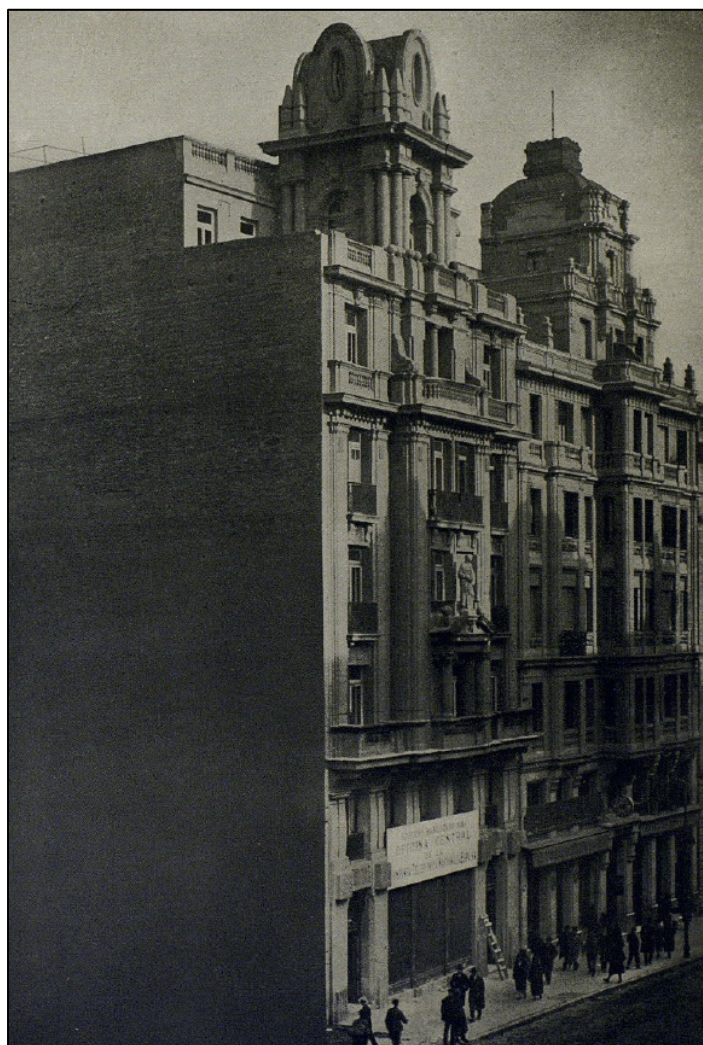


Figura 8. Edificio de la avenida Conde de Peñalver, número 5, sede de la CTNE desde 1924 a 1929. Fuente: España y el teléfono, ITT, 1925.

En aquella reunión del Comité Ejecutivo también se trataron otros temas, como las instalaciones de unos postes de hierro en algunas calles de Madrid o como una carta que habría de presentarse a la ITT para aclarar determinados puntos de los contratos firmados el 29 de agosto de 1924. Gumersindo Rico también daba cuenta de las adquisiciones de los centros telefónicos de Zaragoza y Málaga, cuyas escrituras de adquisición ya habían sido firmadas por él mismo.

3.74. Viernes, 3 de octubre de 1924

Adquisición de la red urbana de Santander

El día 3 de octubre de 1924 se celebró el acto de la entrega de la red telefónica urbana de Santander a la Compañía Telefónica Nacional de España. El periódico *La Vanguardia* se hacía eco de esta noticia³⁷⁰, aunque parece que el nombre de la empresa que habría de regir la telefonía nacional todavía no había terminado de calar entre la sociedad y el artículo se refería a ella como “la compañía de Teléfonos Interurbanos de reciente creación”. Parece evidente que los movimientos de compra y adquisición de empresas telefónicas tuvo que confundir en cierto modo a la sociedad de la época, que no terminaría de entender el proceso que había seguido la CTNE para hacerse con el control del sistema español a la vez que adquiría los bienes de la Peninsular de Teléfonos y de otras muchas redes urbanas.

Como se había acordado en la sesión del Comité Ejecutivo de 26 de octubre, el representante de la Compañía que se hizo cargo de la red urbana fue el Coronel de Ingenieros y Subdirector del Distrito 3º, Benito Navarro. Se ponía fin de esta forma a quince años de explotación del servicio municipal por parte del ayuntamiento de la ciudad, que había comenzado en 1909 cuando se hizo cargo de ella en aplicación del Real Decreto de 18 de septiembre de 1908, por medio del cual se permitía a los consistorios establecer y explotar por su cuenta el servicio telefónico.

Finalmente, el otorgamiento de la escritura de venta de la red de Santander tuvo fecha de 16 de diciembre de 1924³⁷¹. La ciudad cántabra era una de las seis capitales cuyos derechos de compra habían sido transferidos de la ITT a la CTNE por

³⁷⁰ *La Vanguardia*, 3 de octubre de 1924, p. 16.

³⁷¹ Yuste-2004, p. 226.

el convenio privado firmado entre las dos compañías. El precio pagado por la Telefónica al ayuntamiento de la ciudad ascendió a 350.000 pesetas

A principios de la década de 1920, Santander contaba con 72.469 habitantes³⁷² y el número de teléfonos rondaba la cifra de 1.300³⁷³, lo que implicaba una tasa de penetración del 18 por mil, un dato buenísimo que la situaba en los primeros puestos de la estadística telefónica nacional, sólo por detrás de San Sebastián, Bilbao y Oviedo, y por delante de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Sin embargo y a pesar de su probada eficiencia y popularidad, el ayuntamiento de Santander no consiguió un negocio especialmente favorable para sus intereses, ya que la compra de este centro urbano le supuso a la CTNE un coste de unas 270 pesetas por abonado, uno de los más bajos pagados por la compañía durante sus primeras adquisiciones de propiedades telefónicas.

3.75. Sábado, 4 de octubre de 1924

Artículo en *The Economist*

La revista financiera *The Economist*, en su edición de 4 de octubre de 1924, informaba sobre la concesión del servicio telefónico español a la CTNE, que, según la nota publicada, había sido organizada en torno al Banco Urquijo y al Banco Hispano Americano y tenía conexiones con el *National City Bank* de Nueva York y una compañía telefónica de Estados Unidos³⁷⁴. Además se indicaba que la Telefónica sólo había tenido otros dos competidores, cuyas propuestas habían sido rechazadas: la Siemens alemana y la Ericsson sueca. El artículo no mencionaba, por lo tanto, el proyecto de la New Antwerp Telephone and Electric Works, que también se había presentado al “concurso” convocado por el Gobierno español.

Con respecto a las empresas que habían competido con la CTNE por la concesión de la red telefónica nacional hubo, durante décadas, mucha confusión. Gracias al esfuerzo de investigadores como Antonio Pérez Yuste o Ángel Calvo Calvo se ha podido conocer el verdadero número de proyectos que se presentaron, así como

³⁷² Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

³⁷³ Número de teléfonos existente a fecha 31 de diciembre de 1921. Dato extraído de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923, a todas las “fuerzas vivas” de España.

³⁷⁴ *The Economist*, 4 de octubre de 1924, nº 4232, p. 539.

las empresas que estaban detrás de aquellas propuestas. Antes de estos hallazgos, muchos historiadores españoles apuntaron también que las empresas que concurrieron al concurso fueron dos, aunque no coincidían con las que indicaba *The Economist*. Sobre la participación de la Ericsson nunca se ha tenido duda alguna, ya que su proyecto fue de sobra conocido, así como su intento de penetrar en el mercado telefónico nacional con la compra de la concesión de la red de Valencia o la instalación de la central automática de San Sebastián.

La mayoría de investigadores españoles apuntaron durante años a la participación del “Grupo Belga” como tercera empresa en liza, ya que, según parecía, desconocían la existencia de un cuarto proyecto: el de la Siemens-Halske. Tal y como apuntaba Pérez Yuste en su tesis de 2004, “es probable que el error haya podido propagarse de unos investigadores a otros, pudiendo tener su origen en el Proyecto de Ley de Diego Martínez Barrios, Ministro de Comunicación durante la Segunda República”³⁷⁵, que sólo mencionaba a las empresas sueca y belga. Este error ha sido subsanado gracias a las últimas investigaciones publicadas y ya no se duda que el número total de empresas que quisieron hacerse con el sistema telefónico español fueron cuatro. Sorprende, no obstante, como los medios internacionales sí se hicieron eco de la participación de la Siemens, pero desconocían que la New Antwerp también concurrió al “concurso”, más teniendo en cuenta que la firma alemana presentó el proyecto después de que la comisión hubiera sido disuelta y que ello provocó que pasara, en cierto modo, desapercibida para los medios españoles de la época.

La opinión de la Cámara de Comercio de Barcelona

La Cámara de Comercio de Barcelona se sumó al grupo de entidades que no vio con buenos ojos la adjudicación del servicio telefónico nacional a la CTNE. En este sentido se expresaron en una sesión celebrada a principios de octubre, de la que informó *La Vanguardia* en su edición del día 4, aprobando una propuesta respecto “a la concesión otorgada a una Compañía de Teléfonos”³⁷⁶.

³⁷⁵ Yuste-2004, pp. 164-165.

³⁷⁶ *La Vanguardia*, 4 de octubre de 1924, p. 17.

No es de extrañar que muchas corporaciones catalanas, como la Cámara de Comercio, se mostraran contrarias a la entrega del servicio telefónico nacional a una compañía privada, teniendo en cuenta que la Mancomunidad de las cuatro diputaciones de la región todavía contaba con el control de las redes telefónicas provinciales. La alarma en la administración catalana estaba plenamente justificada, puesto que las condiciones del contrato eran claramente favorables para la CTNE y además daban todo tipo de facilidades a la empresa para que adquiriera propiedades telefónicas a lo largo y ancho de la geografía española, entre las que se contaba, por supuesto, la red de la Mancomunidad de Cataluña.

3.76. Martes, 7 de octubre de 1924

Nombramiento de los tres Consejeros Delegados en el Consejo

Según la base octava del contrato celebrado entre la Compañía Telefónica Nacional de España y el Estado, éste “además de participar en los ingresos de la Compañía, colaborará o intervendrá en la administración y desarrollo de la misma, según las bases de este contrato, por medio de tres Delegados oficiales, representantes de los Ministerios de Hacienda, Guerra y Gobernación, los cuales se nombrarán oportunamente y podrá ser removidos libremente por el Gobierno”. Esta delegación, que formaría parte del Consejo de Administración, representaría al Gobierno en todos los asuntos que haya de tratar la compañía y defendería los intereses del Estado. Las actas del Consejo de Administración a las que se ha tenido acceso para la realización de esta investigación demuestran el papel casi decorativo que estos tres delegados del Gobierno tuvieron en el seno del Consejo de Administración de la CTNE, aprobando, junto al resto de consejeros, todas las decisiones que había tomado previamente el Comité Ejecutivo, al que por supuesto no pertenecía ninguno de ellos. Tal era la confianza, casi ciega, puesta en la Telefónica para sacar al país del tremendo atraso en materia telefónica que la Dictadura prácticamente no intervino en el funcionamiento de la misma, al menos durante los primeros años, dejando que hiciera a su antojo y sin que los tres representantes del Estado plantearan debates substanciales dentro de la compañía.

Los tres Consejeros Delegados del Gobierno fueron nombrados por Real Orden de 7 de octubre de 1924³⁷⁷, puestos que recayeron en Miguel Manella Corrales, Teniente Coronel de Ingenieros del Ministerio de la Guerra, Antonio Nieto Gil, Jefe de Centro de Telégrafos en representación del Ministerio de la Gobernación, y Antonio Carrillo de Albornoz, Jefe de Administración de tercera clase en el Ministerio de Hacienda. Nieto Gil y Carrillo de Albornoz ya eran “viejos conocidos” de la CTNE, en tanto en cuanto habían formado parte de la comisión creada el 11 de mayo para “examinar, estudiar y proponer al Gobierno la solución más conveniente para la reorganización de los servicios telefónicos de España”. Este detalle ya hubiera bastado para hacer saltar las alarmas, más teniendo en cuenta que, a buen seguro, los ministerios de la Gobernación y de Hacienda contarían con no pocos funcionarios competentes para realizar la labor de representación en el seno de la compañía. ¿Qué necesidad había entonces de nombrar como consejeros a dos personas que habían tomado parte activa en el proceso de adjudicación de la telefonía española a la CTNE?

Por si este hecho no fuera suficiente, Antonio Nieto Gil era, en esos momentos, uno de los cuatro vocales de la comisión nombrada para examinar y valorar las redes del Estado, para su posterior compra por parte de la Telefónica, con arreglo a lo estipulado en la base tercera del contrato firmado el 29 de agosto. Por lo visto, desde el Gobierno nadie consideró que estos dos cargos, de tanta sensibilidad, pudieran resultar incompatibles. De hecho, de haber realizado Nieto Gil las dos tareas de manera adecuada y buscando siempre el mejor escenario para el conjunto del país, no tendrían por qué haber sido inconciliables. Por un lado, podría haber buscado una tasación justa de las redes del Cuerpo de Telégrafos, maximizando el beneficio para el Estado; por el otro, podría haber mostrado una actitud verdaderamente crítica y decidida contra las medidas que la compañía tomaba en contra de los intereses de la nación, evitando así el exagerado proteccionismo del que gozó la empresa durante aquellos años. Sin embargo, no ocurrió ni una cosa ni la otra y por lo tanto las críticas no tardaron en aparecer, pero tampoco tardaron en ser acalladas por la censura de la Dictadura.

Sin embargo, hacia el final de la Dictadura, en junio de 1928, las críticas a la inoperancia de los Delegados del Gobierno en el Consejo de Administración eran tan numerosas y graves que Primo de Rivera se vio obligado a tomar medidas en el

³⁷⁷ Real Orden del Presidente interino del Directorio Militar, de 7 de octubre de 1924. Gaceta de Madrid, 8 de octubre de 1924, nº 282, p. 181.

asunto y cesó fulminantemente a esos tres representantes del Estado. El motivo que desencadenó finalmente el “despido” tuvo que ver con cierto expediente a un trabajador de la compañía, que nada tenía que ver, en el fondo, con la Delegación del Gobierno en la compañía; pero eso era lo de menos. El Jefe del Directorio Militar se vio ahogado por las acusaciones que se venían sucediendo, sobre todo manifestadas en la Asamblea Nacional, y provocó este desenlace en un momento que quizá no reunía los mejores argumentos para hacerlo. Pérez Yuste decía en su tesis doctoral³⁷⁸:

Dicho lo cual, Primo de Rivera anunció, públicamente a la Asamblea, el cese de los Consejeros Delegados, en una reacción que más bien parece provocada por una concatenación de causas que terminaban de colmarse con la referida por Puyuelo [el asambleísta que había iniciado el debate], que por el hecho en sí denunciado por éste.

El día 28 de junio de 1928 se firmaba la Real Orden por la que se cesaba a los tres Consejeros Delegados del Estado en la CTNE, quedando sustituidos por Julio Alonso Cuevillas, del Ministerio de Hacienda, Mariano Ripollés Vaamonde, del Ministerio de la Guerra, y Manuel Lázaro Pigrau, del Ministerio de la Gobernación³⁷⁹.

3.77. Miércoles, 8 de octubre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo³⁸⁰

En esta reunión del Comité Ejecutivo, el Vicepresidente Lewis J. Proctor informó de la adquisición del solar en la calle Hermosilla de Madrid al que ya se había referido en una sesión anterior y que estaba situado al lado de la antigua central de la Compañía Madrileña de Teléfonos. Este sería el terreno en el que comenzarían, unos meses más tarde, las obras de una nueva central, que vendría a formar parte del sistema automático que se diseñó para la ciudad. Para realizar la operación de compraventa se autorizaba a uno de los abogados de la compañía, Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra, al que ya nos hemos referido con anterioridad en relación a su papel

³⁷⁸ Yuste-2004, pp. 300-301.

³⁷⁹ Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 28 de junio de 1928. Gaceta de Madrid, 29 de junio de 1928, nº 181, pp. 1.771-1.772.

³⁸⁰ Acta nº 6, 8 de octubre de 1924, libro 1, pp. 4-5.

de nexos entre el Gobierno de la Dictadura y los directivos de la ITT durante las primeras negociaciones llevadas a cabo un año antes.

Otra de las obras que la CTNE estaba decidida a realizar cuanto antes en la capital de España era la canalización subterránea de los cables telefónicos aéreos, que no sólo afeaban el aspecto de la ciudad, sino que eran motivo de no pocos problemas técnicos y de la mala calidad del servicio en muchas ocasiones. Para ello, Ruiz Senén se había reunido con el Secretario del ayuntamiento de Madrid y con los representantes de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII y Canal de Isabel II, para tratar el asunto de las obras necesarias para acometer esta obra, mostrándose todos ellos dispuestos “a dar todo género de facilidades” a la compañía.

La Dirección de la compañía también se había dado cuenta de la extrema importancia de cuidar la imagen de la compañía de cara al exterior, vigilando las declaraciones realizadas a la prensa y mimando sus relaciones con otros poderes públicos o entidades de cualquier tipo. Por ello, el Comité Ejecutivo consideró necesario autorizar a Ruiz Senén para redactar una nota informativa sobre la CTNE y entablar conversaciones con los medios de comunicación para que publicaran dicha nota oficial en sus páginas.

A este respecto también comenzaban a preocupar las palabras que venían de aquellos que criticaban la adjudicación del servicio telefónico nacional a la CTNE y los términos en los que se había realizado. Proctor aprovechó esta reunión para explicar la campaña que fomentaban “algunas compañías y determinados elementos políticos en contra de los intereses de la compañía”. La decisión tomada por el Comité Ejecutivo fue la de adoptar una actitud de “completa pasividad en este asunto, pues considerando perfectamente legal, válido y equitativo el contrato de concesión a favor de la Compañía”, no había lugar a manifestarse públicamente sobre estos aspectos. De esta forma se iniciaba una política que marcaría la nota predominante, durante muchos años, en la reacción que la CTNE tomaba ante las críticas que en algunas ocasiones surgían contra la licitud de su contrato con el Estado y su actitud monopolista. La Telefónica hizo suya la máxima de no realizar manifestaciones al respecto, siempre y cuando las acusaciones no fueran a mayores y acabaran siendo debatidas en la Asamblea Nacional, como ocurrió durante los últimos momentos de la Dictadura.

Rico y Proctor pasaron entonces a referirse a la adquisición de propiedades telefónicas, como ya venía siendo habitual. El Vicepresidente había realizado una

visita a la Diputación de Vizcaya, mientras que Rico expresaba el resultado de las gestiones entabladas con el ayuntamiento de Pamplona, “que a su juicio, se consolidarán rápidamente en una ventajosa adquisición para la Compañía”. Proctor informó también sobre la marcha de la comisión de valoración de las líneas y centros telefónicos propiedad del Estado y se mostraba optimista con respecto a los resultados, que esperaba fueran publicados en breve.

En materia de acciones, el Comité Ejecutivo también dio su apoyo a la propuesta de Julián Cifuentes de solicitar la cotización de la compañía en las Bolsas de Madrid, Bilbao y Barcelona. Asimismo se acordó que el día 25 de octubre comenzara la operación de suscripción de acciones preferentes de la Compañía Telefónica Nacional de España, que, como se verá a continuación, se declaró cerrada incluso antes de abrirse, por haberse cubierto toda la oferta de participaciones en un tiempo record.

Por último, antes de levantar la sesión, se convino proponer al Marqués de Urquijo que convocara una reunión extraordinaria del Consejo de Administración con el fin de aclarar algunos artículos de los estatutos sociales de la compañía, que, según parece, no estaban del todo claros.

El Gobierno de Estados Unidos da su visto bueno al contrato

Las investigaciones llevadas a cabo por Adoración Álvaro en el *National Archives and Records Administration* (NARA) de Estados Unidos han permitido conocer algunos de los comunicados que se intercambiaron el embajador norteamericano en España Alexander P. Moore y el Departamento de Estado de Washington. En alguno de aquellos cables se trataba la cuestión telefónica española y la relación entre la CTNE y la ITT, así como el contrato que se firmaría con el Estado el día 29 de agosto de 1924.

El Gobierno de Estados Unidos se declaraba públicamente contrario a los monopolios, ya fuera en territorio nacional o extranjero. En este sentido, son conocidos los procesos “antitrust” (antimonopolio) que la administración norteamericana amenazó con emprender contra la todopoderosa AT&T durante los años 20 y que ocasionaron, entre otras cosas, que se tuviera que deshacer de su filial, la *International Western Electric*, que finalmente fue adquirida por la ITT de Sosthenes Behn en el verano de 1925. Sin embargo, en un perfil mucho más privado, el Gobierno estadounidense era

partidario de que empresas nacionales entraran en el negocio de las telecomunicaciones en otros países, tal era el caso de la ITT y su objetivo de extender su “International System” por todo el mundo.

Uno de los cables a los que tuvo acceso Adoración Álvaro, con fecha de 8 de octubre de 1924, estaba dirigido por el Departamento de Estado al embajador plenipotenciario en Madrid, Alexander Moore. En él se indicaba que la administración norteamericana había dado el visto bueno al contrato firmado con el Estado, ya que, “tras un detenido estudio, llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de monopolio natural”³⁸¹. Sorprende, en primer lugar, que el Gobierno de otro país tuviera que dar el beneplácito a un contrato suscrito entre el Estado español y una compañía española. Esto sólo se entiende, evidentemente, cuando se mira desde la perspectiva estadounidense, quienes no veían a una empresa española firmando un contrato, sino a una compañía norteamericana adjudicándose un monopolio. En el fondo, la realidad no era tan distinta a como ellos la advertían, ya que la CTNE se convirtió aquel 29 de agosto de 1924 en una filial de la ITT y, por lo tanto, en una empresa de su órbita. De esta forma sí se entiende que el Gobierno de Estados Unidos tuviera que dar su visto bueno a que una empresa norteamericana monopolizara el negocio telefónico de un país entero.

Por otro lado, también sería interesante conocer cómo Washington llegó a la conclusión de que el proceso seguido por la ITT/CTNE se trataba de un monopolio natural, similar al caso de la AT&T en Estados Unidos. Por poner un ejemplo que se dio en el marco español, la evolución de la Compañía Peninsular de Teléfonos desde su creación en 1894 hasta su desmantelamiento en 1924 sí se podría entender como un proceso con tendencia hacia el monopolio. Este desarrollo había durado tres décadas. Sin embargo, el proyecto que la ITT había iniciado en España en 1923 y que luego heredó la CTNE no se puede considerar como un “monopolio natural”, ya que fue claramente forzado, negociado e impuesto a golpe de decreto en un tiempo record. De ponerle un nombre, podríamos pensar en “monopolio artificial”.

Fuera o no fuese un caso de “monopolio natural”, de lo que no hay duda es de que el Gobierno norteamericano utilizaba una doble vara de medir para permitir estos procesos o no. Mientras aceptaba esta tendencia como algo legítimo en el escenario español, en EEUU no dudó en emprender acciones legales en contra del monopolio

³⁸¹ Álvaro-2005, pp. 10-11.

natural de la AT&T. Estas dos decisiones se tomaron más o menos al mismo tiempo, puesto que la administración norteamericana se encontraba, en aquellos momentos, iniciando un proceso antitrust contra la compañía de Theodore Vail³⁸².

En aquel comunicado de 8 de octubre de 1924, el Departamento de Estado también indicaba que “en caso de rescate por parte del Estado -algo que se contemplaba en el contrato- salvo que éste se realizara ilegalmente, no podría acudir al gobierno americano en busca de ayuda”. Nuevamente, aunque a nuestros ojos esto pueda parecer una clara injerencia de otro país en la soberanía española, hay que entenderlo desde el punto de vista de un gobierno que vela por los intereses de una compañía nacional en un mercado extranjero. Si el Gobierno español decidía incautarse del sistema telefónico nacional de manera que la ITT saliera económicamente perjudicada, Washington no se comprometía a ayudar a ésta para salir del apuro. No obstante, como la Historia se ha encargado de confirmar, la administración estadounidense sí intervino activamente en los conflictos que se crearon entre la CTNE y el Gobierno de la II República cuando éste intentó declarar ilegal el contrato que se firmó en 1924, haciendo peligrar los intereses de la ITT en el mercado telefónico español.

3.78. Viernes, 10 de octubre de 1924

La CTNE y la Diputación de Álava

Las investigaciones del historiador Ángel Calvo³⁸³ han permitido conocer la colaboración llevada a cabo entre la Telefónica y la Diputación de Álava para la instalación de la red telefónica en aquella provincia. Al poco de conseguir la concesión del sistema telefónico nacional, el diputado provincial Luis Dorao propuso una reunión con el Subdirector del Distrito 3º, Benito Navarro, para concretar la forma de continuar con los trabajos de la red de Álava. El día 10 de octubre, la Diputación de esa provincia aprobaba un proyecto de red telefónica, tal y como la corporación entendía que debía procederse para dotar a la provincia de un sistema apropiado.

Sirva el caso alavés como ejemplo de una entidad que colaboró activamente con la Compañía Telefónica Nacional para dotar al país de un servicio telefónico de

³⁸² Sampson-1973, p. 26.

³⁸³ Calvo-2010, p. 133.

calidad, acostumbrados como estamos a estudiar cómo la empresa se hizo con el control de las distintas redes a través de negociaciones y compras, en ocasiones de una manera un tanto subrepticia.

3.79. Domingo, 12 de octubre de 1924

Reversión de la red de Gandía

La base segunda del contrato entre el Estado y la CTNE establecía que la compañía se haría cargo “de las instalaciones y propiedades del Estado que posea en la fecha de la firma del contrato”, es decir, las que tuviera bajo su control antes del 29 de agosto de 1924. Por su parte, la base tercera establecía que, como pago, la compañía abonaría “la cantidad que resulte de una valoración de las líneas y centros que hoy posee el Estado”. Todas las redes que no estuvieran en posesión del Cuerpo de Telégrafos en aquella fecha tendrían que ser adquiridas por negociación con los concesionarios que tuvieran la licencia en cada caso, sin mediación alguna del Estado (base cuarta del contrato). La compañía ya venía realizando estas negociaciones con distintas entidades como el ayuntamiento de Santander y el de Pamplona, el concesionario de Zaragoza y muchos más.

Mientras la comisión encargada del examen y la evaluación de las propiedades del Cuerpo de Telégrafos realizaba sus trabajos, la licencia de un centro telefónico urbano llegaba a su fin. Se trataba del de Gandía (Valencia) y la fecha de caducidad de la concesión era el 12 de octubre de 1924³⁸⁴. Esto provocaba una situación curiosa, que se resolvió sin mucha discusión a favor de la Compañía Telefónica.

Como la red de Gandía no era propiedad del Estado cuando se firmó el contrato en la jornada del 29 de agosto, la comisión no la incluyó en su valoración. Además, como ésta emitió su dictamen después de que la concesión revertiera al Cuerpo de Telégrafos, ésta quedó automáticamente incluida en la lista de instalaciones y propiedades telefónicas del Estado. La consecuencia, como se puede ver, es que la red de esta localidad valenciana pasó a manos de la compañía sin coste alguno³⁸⁵.

³⁸⁴ Yuste-2004, p. 163.

³⁸⁵ Yuste-2004, pp. 223-224.

3.80. Miércoles, 15 de octubre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo³⁸⁶

Proctor dio comienzo a la reunión exponiendo el proyecto que la compañía pretendía emprender en su nueva sede de la Gran Vía, donde se quería instalar una central “dotada de los elementos que integran las Centrales telefónicas modernas en otros países”, con una sala de descanso para las telefonistas, otra para atender a la prensa y “varias mejoras que demuestren la perfecta organización que proyecta la Compañía”.

El Marqués de Urquijo, aunque no se contaba entre los miembros del Comité Ejecutivo, comenzó a participar en algunas reuniones del mismo, donde solía aportar su opinión personal sobre algunos aspectos organizativos de la compañía, que en muchas ocasiones parecían venir de un observador externo poco informado sobre la marcha del sector telefónico en lugar del Presidente de la empresa. El Comité solía responder a sus manifestaciones en un tono complaciente y sus miembros se mostraban siempre “totalmente decididos a llevar a la práctica las indicaciones del Sr. Presidente”, cosa que por supuesto ocurría si los intereses de la compañía coincidían con las opiniones del Marqués de Urquijo. Si no se daba el caso, entonces simplemente hacían constar en acta sus ideas y se pasaba a otro asunto.

En esta reunión, el Marqués de Urquijo expuso su “deseo de que se mejore lo antes posible el servicio telefónico, especialmente en Madrid a fin de que la Compañía pueda dar al público la impresión inmediata de que por su acertada actuación empiezan a disfrutarse las ventajas de la nueva organización”. La expresión de este deseo tan ideal pero a la vez tan impreciso no parece encajar en el contexto de las reuniones del Comité, donde se trataban asuntos muy concretos sobre el funcionamiento y la dirección de la empresa sin entrar en divagaciones tan generales como estas. El Presidente de la compañía también recomendó que se tuviera muy presente la obligación contractual adquirida con el Estado respecto a la preferencia respecto a la compra de materiales y enseres de producción nacional frente a los extranjeros. De todo esto estuvo muy de acuerdo el Comité y se manifestaron favorables a actuar en los términos que recomendaba el Marqués de Urquijo.

³⁸⁶ Acta nº 7, 15 de octubre de 1924, libro 1, pp. 5-7.

En cuanto a la marcha de las negociaciones con distintas entidades para la entrega de redes a la CTNE, Rico informaba de que ya se habían firmado las escrituras para la adquisición de los centros urbanos de Almería y Santander y que continuaban las conversaciones para la compra de las redes de Granada y Pamplona.

Almería era una de las seis capitales provinciales cuyos derechos de compra de la red habían sido transferidos de la ITT a la CTNE según los contratos firmados entre ambas compañías. Finalmente, el otorgamiento de la escritura de venta de la red almeriense tuvo fecha de 2 de diciembre de 1924³⁸⁷. El precio pagado por la Telefónica al anterior concesionario, Guillermo López Rull³⁸⁸, ascendió a 50.000 pesetas.

En esta reunión, el Comité también autorizó al Secretario para entregar los resguardos provisionales de acciones preferentes de la compañía a los bancos que iban a encargarse de la operación de suscripción y canje de las mismas: el Banco Hispano Americano y el Banco Urquijo. Estas acciones que se iban a poner a la venta en breve correspondían a 50 millones de pesetas.

Por último, Gumersindo Rico explicaba al Comité la necesidad que tenía de salir fuera de Madrid para llevar a cabo gestiones importantes de la compañía, como era la representación de la misma en las diversas negociaciones de compra que en aquellos momentos estaban teniendo lugar. Debido a estas ausencias, que podían llegar a ser prolongadas, se veía conveniente que algún otro empleado de la empresa pudiera sustituirle en distintos actos en los que se requiriera su presencia: firma de contratos, autorización de documentos públicos o privados, etc. Por ello, el Comité acordó designar al abogado Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra para que sustituyera al Secretario en todos esos ejercicios, siempre y cuando Rico no pudiera asistir personalmente.

³⁸⁷ Yuste-2004, p. 226.

³⁸⁸ Yuste-2004, p. 133.

3.81. Jueves, 16 de octubre de 1924

La nota informativa oficial de la CTNE aparece en prensa

En la reunión celebrada el día 8 de octubre se encargó a Valentín Ruiz Senén la redacción de una nota informativa sobre la CTNE y la posterior publicación de la misma en las páginas de los principales diarios nacionales. Respondía esta decisión a la creciente preocupación por las críticas que estaban surgiendo hacia la compañía y su contrato con el Estado, así como a la impresión que el conjunto de la sociedad pudiera tener de la empresa. Era importante ganarse el apoyo de la opinión pública cuanto antes, ya que no se preveía que ésta fuera a posicionarse a favor de un monopolio tan dudosamente conseguido.

Ruiz Senén se puso manos a la obra y la nota oficial se publicó en la prensa sólo una semana después³⁸⁹. Con ella se pretendía presentar a la Compañía Telefónica Nacional de España a la sociedad española, resaltando los grandiosos objetivos de la compañía, siempre a favor del bien nacional, tanto en lo que respecta a la mejora del servicio telefónico como a la compra de materiales producidos en nuestro país. El texto expresaba con palabras grandilocuentes el enorme plan al que se enfrentaba para “hacer que España en general tenga un perfecto servicio telefónico, para conseguir lo cual no ha de limitar esfuerzos ni omitir sacrificios”. Así mismo se disculpaba por las demoras que pudieran producirse por “circunstancias ajenas a ella”.

Explicaba la nota que el negocio se había fundado en una concesión del Estado y que se proponía cumplir escrupulosamente el contrato firmado, respetando las determinaciones del Gobierno y a sus representantes, “a fin de obtener en esta conducta el más firme fundamento de su prestigio”. El párrafo en el que explican sus intenciones con respecto a la adquisición de material es especialmente interesante:

Inspirará sus actos en un sentido de absoluta preferencia para cuanto sea español y precisamente la independencia de los elementos que integran la Compañía, ajenos por completo a toda empresa o negocio de construcción de materiales y aparatos que al servicio telefónico puedan referirse, debe ser garantía bastante [...] de que, en ningún caso, ha de haber nada que impida esta orientación netamente española y de protección, por consiguiente, a

³⁸⁹ La Vanguardia, 16 de octubre de 1924, p. 9.

cuanto sea nacional, que por el personal que en ella intervenga o bien por los elementos de trabajo de que disponga.

Como los hechos posteriores se han encargado de demostrar, esta preferencia por lo español, sobre todo en la compra de material telefónico, era la fachada que trataban de mostrar al Gobierno y a la opinión pública, mientras que por otro lado satisfacían los intereses de la ITT siempre que era posible. Éste fue el caso, por ejemplo, de las centrales automáticas que se comenzaron a instalar en España a partir de 1925, que eran del modelo “Rotary”, el modelo fabricado por el brazo productor de la International.

La nota continuaba mostrando sus buenas intenciones con respecto al resto de concesionarios presentes en el mapa telefónico español, con los que buscaría el entendimiento y el acuerdo. En lo que respecta a las líneas y redes que ya se encontraban en su poder o que lo iban a estar en breve, hacía un resumen de las más importantes y manifestaba su interés por conquistar la confianza del público, que, según la compañía, pronto tendría “ocasión de apreciar las ventajas que le ofrece lo que el Estado otorga y la Compañía ha de cumplir”. El texto concluía con una petición respecto a las críticas que habían aflorado contra la CTNE:

La Compañía en suma, espera y ruega que, toda apreciación respecto a ella, se suspenda para fundarla en los hechos que, en un próximo porvenir, ha de presentar como seguro elemento para un buen juicio.

3.82. Sábado, 18 de octubre de 1924

Reunión del Consejo de Administración³⁹⁰

El día 18 de octubre de 1924 fue convocada, por el Marqués de Urquijo, una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa, aunque por recomendación del Comité Ejecutivo. El motivo era el estudio y la corrección de algunos artículos de los estatutos sociales de la compañía que, a ojos de algunos consejeros, debían ser revisados y aclarados, “ya que por su confusa redacción pueden dar lugar a erróneas interpretaciones que desvirtúen el concepto y la idea fundamental que los ha inspirado”.

³⁹⁰ Acta nº 5, 18 de octubre de 1924, libro 1, pp. 14-15.

Se realizaron tres modificaciones, dos de las cuales no revierten mayor importancia. La primera fue una corrección debida a un error en la redacción y la segunda servía para aclarar en el artículo octavo de los estatutos que las acciones preferentes tenían preferencia sobre las ordinarias a la hora de cobrar los beneficios acumulados, así como en caso de liquidación y disolución de la sociedad.

La tercera modificación fue la que realmente marcó una diferencia notable en lo que respecta al gobierno de la empresa y no nos cabe duda de que fue el verdadero motivo de que esta reunión extraordinaria del Consejo fuera convocada con tanta celeridad. Tenía que ver con el poder de las acciones ordinarias y con la posibilidad de que la ITT pudiera perder el control de la compañía. Tal y como explica Pérez Yuste en su tesis³⁹¹:

En las acciones ordinarias se hallaba concentrado, con carácter de exclusividad, el gobierno de la Compañía sin que a las preferentes correspondiera, tan siquiera, el derecho de voto en las Juntas Generales, con la excepción de los casos previstos en el artículo 168 del Código de Comercio, vigente entonces, respecto a las modificaciones de los Estatutos y del capital social (art. 21). En estas circunstancias bastaba la mayoría de los títulos ordinarios para disponer del mando total de la empresa, de ahí la constante desproporción que se dio durante mucho tiempo entre el importante volumen de las acciones preferentes y el reducido número de las ordinarias.

No obstante, la redacción del artículo 21 especificaba que, en determinadas circunstancias, se podrían modificar los estatutos sociales, incluyendo los que regulaban el poder de las acciones ordinarias en detrimento de las preferentes. Es decir, a pesar de que la ITT poseía el control de la empresa en aquel momento, no tenía la total seguridad de que con el paso del tiempo no se modificaría este privilegio en alguna Junta General extraordinaria convocada a tales efectos. Era necesario, por lo tanto, enmendar el artículo 21 y no permitir ninguna excepción, ni siquiera las previstas en el artículo 168 del Código de Comercio.

En esta reunión de 18 de octubre, el Consejo estudió dicho artículo y después “de analizar los factores y principios fundamentales de orientación de la Compañía, se acordó ampliarle convenientemente al objeto y fines de la misma”. Parece que “el

³⁹¹ Yuste-2004, p. 137.

objeto y fines” de la compañía eran satisfacer todas las demandas de la ITT y asegurar su parcela de poder en el presente y en el futuro, porque el segundo párrafo del artículo 21 quedó redactado de la siguiente forma:

Se exceptúa de lo establecido en los artículos anteriores los casos previstos en el artículo 168 del vigente Código de Comercio, respecto de los cuales no sólo se estará a lo que dicho artículo dispone sino que será necesario, para la validez de los acuerdos, que sean adoptados por mayoría absoluta de cada clase de acciones de la Compañía, tanto las ordinarias como las preferentes.

Es decir que, incluso en los casos excepcionales que se preveían en el artículo 168 del Código de Comercio, no valía con el acuerdo de una Junta General extraordinaria para modificar los estatutos de la empresa; era necesario además que la mayoría de los accionistas de la empresa, tanto los de un tipo como los de otro, estuvieran de acuerdo y votaran favorablemente. La conclusión es clara: mientras que la ITT mantuviera la suscripción de la mayoría de las acciones ordinarias, no podría realizarse ninguna reforma estatutaria sin que la multinacional estuviera de acuerdo, incluso en aquellos casos prevenidos por el Código de Comercio vigente. Por supuesto, la hipotética reforma que más preocupaba a Sosthenes Behn era aquella que consiguiera recortar el poder de las acciones ordinarias.

Las investigaciones realizadas por Pérez Yuste dieron con una reflexión realizada por Gumersindo Rico con respecto a esta operación:

Con esta sencilla fórmula la Compañía Telefónica perdió el carácter de nacional para conservar, tan solo, la etiqueta de su denominación. Todas sus actividades pasaron íntegramente a los poseedores de los títulos de soberanía, dueños absolutos de la Sociedad.

Para finalizar la sesión, el Consejo acordó corregir los estatutos tal y como había quedado reflejado en el acta y convocar lo antes posible una Junta General extraordinaria de accionistas para someter a la aprobación de la misma los acuerdos tomados en aquella reunión. En el acta de la siguiente reunión del Consejo de Administración, con fecha 26 de noviembre de 1924, se indicaba que en este día 18 de octubre de 1924 se había celebrado no sólo reunión del Consejo de Administración

sino también Junta de accionistas de la compañía³⁹². No se tiene constancia, empero, de ninguna Junta General celebrada en esta jornada, lo que puede deberse a dos motivos: o no quedó constancia documental de dicha reunión o simplemente no existió y el Comité decidió “ahorrarse” el trámite burocrático de convocar oficialmente a los accionistas para aprobar estos cambios. Nos inclinamos por la segunda opción por varias razones. En primer lugar porque, según palabras del Consejo, se iba a “convocar lo antes posible una junta general extraordinaria de accionistas para someter a la aprobación de la misma los acuerdos tomados en la reunión de esta fecha”, de lo que se deduce que, de hacerse, no se celebraría ese día. Pero además podemos entender que los consejeros decidieran no pasar por el procedimiento oficial, más teniendo en cuenta que los cambios se realizaban a favor de la ITT y que los propios consejeros suscribían, en aquellos momentos, todas las participaciones de la compañía (la fecha de otorgamiento de la escritura pública de emisión del segundo paquete de acciones de la CTNE fue el día 30 de noviembre de 1924)

3.83. Lunes, 20 de octubre de 1924

La venta de acciones preferentes de la Compañía Telefónica Nacional

En la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 8 de octubre se acordó que el día 25 de octubre diera comienzo la operación de suscripción pública de acciones preferentes de la Compañía Telefónica Nacional de España. Con el fin de dar publicidad a esta operación, la Dirección de la empresa envió un anuncio a los periódicos nacionales para que fuera publicado en sus ediciones de 20 y 21 de octubre³⁹³.

En estos anuncios se informaba de que la CTNE había emitido 47.400 acciones preferentes, de 500 pesetas nominales cada una, con un dividendo del 7% anual acumulativo, y que la suscripción pública de estas participaciones quedaría abierta desde el día 25 de octubre. La operación se cerraría el día 31 si antes no quedaban suscritos todos los títulos. Además se informaba de que los pedidos se servirían por el orden en el que fueran recibiendo, debiendo abonarse al efectuarlos la totalidad del importe de los títulos suscritos. La compra de acciones podía realizarse en varios bancos de Madrid, Bilbao, Barcelona, Oviedo, Gijón y San Sebastián.

³⁹² Acta nº 7 del Consejo de Administración, 26 de noviembre de 1924, libro 1, p. 20.

³⁹³ ABC, 21 de octubre de 1924, p. 10.

La suscripción de estas acciones preferentes no llegó a iniciarse el día 25 de octubre, tal y como se anunciaba en los periódicos, ya que el mismo día 20 quedaron adjudicadas la totalidad de las participaciones, teniendo que “cerrarse” la convocatoria sin haber llegado a abrirse. Así, el periódico La Vanguardia publicaba en su edición del día 21 de octubre una nota, redactada la jornada anterior por los tres bancos barceloneses que se encargaban de la venta de estas acciones, en la que se indicaba que se había cubierto totalmente la suscripción de participaciones destinadas a esa ciudad, por lo que no tenían más remedio que cerrarla ese mismo día³⁹⁴.

La Revista Telefónica Española, editada por la propia CTNE dio buena cuenta de este acontecimiento en su primer número de enero de 1925, declarando con orgullo que habían sido suscritas acciones por un valor total de 23.700.000 pesetas en un tiempo record³⁹⁵. A su juicio, esta gran acogida demostraba, tanto el formidable apoyo de los accionistas españoles a la recién nacida sociedad, como la confianza que se tenía en que la CTNE ejecutaría exitosamente su plan para modernizar la telefonía española:

Esta ha sido la primera vez que se han ofrecido al mercado las acciones de esta compañía recientemente formada, y el entusiasmo con que los capitalistas se han apresurado a participar en la operación, ha sido un elocuente testimonio de la confianza con que el público español ha visto a la empresa y a las personas que la habían apadrinado. Este apoyo popular puede considerarse, como excelente indicación de un movimiento a favor de un servicio telefónico mejor y más unificado.

Sin embargo, lo que la Revista no explicaba en este artículo era el motivo por el cual la venta de acciones tuvo que declararse cerrada antes de abrirse, teniendo en cuenta que ésta era pública y que no se iba a iniciar hasta el día 25 octubre. ¿Qué necesidad había de anunciar una suscripción pública de acciones si parece que todas habían sido adjudicadas de antemano?

³⁹⁴ La Vanguardia, 21 de octubre de 1924, p. 4.

³⁹⁵ Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925, p. 15.

3.84. Miércoles, 22 de octubre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo³⁹⁶

La reunión celebrada el miércoles 22 de octubre fue breve. En ella, se acordó delegar atribuciones del Comité Ejecutivo en el Director general de la compañía, Javier Martí-Codolar, con el fin de que pudiera representar amplia y eficazmente a la Telefónica y llevar a cabo todas las gestiones necesarias para cumplir con los intereses de la misma. Además, se decidió convocar para la próxima reunión ordinaria del Consejo de Administración a los Delegados oficiales del Gobierno, recientemente nombrados por Real Orden de 7 de octubre de 1924.

Proctor aprovechó también para exponer “la necesidad de proceder a una revisión de las tarifas interurbanas, con motivo de la próxima entrega de la propiedad telefónica del Estado”. El Comité Ejecutivo acordó que el Vicepresidente de la compañía presentara al Consejo en la siguiente reunión un proyecto de unificación de tarifas, iniciándose de esta forma la primera modificación de las cuotas telefónicas, que, como sabemos, es un tema de gran sensibilidad en tanto en cuanto afectan directamente al bolsillo del abonado.

En este sentido, el contrato con el Estado tenía una redacción bastante ambigua, cosa que por supuesto había sido provocada deliberadamente por Sosthenes Behn y su equipo de abogados para que la libertad de la CTNE en este sentido fuera la mayor posible. En la base octava del convenio, en la que se definía el papel de los Delegados del Gobierno, se podía leer:

Los Reglamentos y tarifas que aprueben los Delegados, según se prevé en este Contrato, deberán ser inmediatamente comunicados al Gobierno, el cual, si lo juzgara conveniente, y dentro de los quince días siguientes, podrá mandar suspender tales Reglamentos o tarifas y pedir la revisión de los mismos con carácter definitivo dentro del término de otros quince días. En el caso que los Reglamentos y tarifas fueran desaprobados por los Delegados, la Compañía tendrá el derecho de apelar al Gobierno, y contra la resolución del mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

³⁹⁶ Acta nº 8, 22 de octubre de 1922, libro 1, p. 7.

Tal y como explica Yuste en su tesis de 2004³⁹⁷, “la CTNE no tenía necesidad alguna de llegar a este extremo, por cuanto la Base 26ª del Contrato le reconocía la posibilidad de recurrir en alzada directamente ante el Jefe del Gobierno. [...] En otras palabras, sólo había una persona con capacidad para vetar cualquier modificación de tarifas estipulada por la Telefónica: el Jefe del Gobierno, o sea, Primo de Rivera”.

La base vigésima era la que reglamentaba más extensamente en materia de tarifas telefónicas, en siete principios, de los cuales sólo reproducimos, por su importancia, los dos primeros, además del párrafo que cierra esta base:

Las tarifas y cuotas para toda clase de servicios que se presten al público, la forma de su aplicación y las modificaciones en ellas, serán siempre formuladas de acuerdo con los siguientes principios:

1.º Las tarifas han de ser equitativas para el público, a fin de no impedir el debido desarrollo telefónico.

2.º Los ingresos producidos por las tarifas [...] han de ser en todo tiempo suficientes para que los ingresos anuales netos no sean menores de los necesarios para obtener un rendimiento del 8 por 100 sobre la cantidad neta invertida, [...] más el de un 2 por 100 de dicha cantidad neta invertida para nutrir anualmente el fondo de reserva de la Compañía. [...]

La Compañía preparará y propondrá a la Delegación oficial en el Consejo de Administración las tarifas para toda clase de servicio, la forma de su aplicación, las modificaciones y el aumento de ellas [...]. Cuando éstas estén conformes con los principios detallados en esta base serán aprobadas con todo efecto oficial por dicha Delegación.

Dada la imprecisión que tenía el contrato a la hora de regular las modificaciones en las tarifas, Proctor no tardó ni dos meses en proponer los primeros cambios en las cuotas que los abonados pagaban por el servicio telefónico interurbano.

³⁹⁷ Yuste-2004, pp. 244-245.

3.85. Jueves, 23 de octubre de 1924

Las acciones de la Peninsular y la Sociedad General de Teléfonos

En el acta de la reunión que el Comité Ejecutivo celebró el miércoles 1 de octubre se dejó constancia de la reunión que habría de celebrarse entre la Dirección de la empresa y un grupo de banqueros el sábado siguiente, día 4 de octubre, “para cambiar impresiones sobre las operaciones para el canje de acciones [preferentes] de las Compañías Peninsular y General de Teléfonos por acciones de la Compañía Nacional de España”. Ahora que la Telefónica estaba preparando la absorción del entramado empresarial de Enrique Parellada, se hacía necesario que las acciones de las antiguas compañías, que pronto dejarían de tener valor, se cambiaran por participaciones de la nueva empresa. De hecho, la Telefónica ya había destinado 52.600 de sus acciones preferentes, por valor de 26.300.000 pesetas, para rescatar las participaciones de este tipo de la Peninsular y la Sociedad General de Teléfonos.

En aquella reunión del día 4, la CTNE y los bancos encargados de esta operación decidieron abrir el proceso de canje de participaciones. Así lo publicó el Banco Hispano Americano en un comunicado que firmó el día 23 de octubre y que apareció en varias ediciones del periódico *La Vanguardia*³⁹⁸. En él se indicaba que dicha entidad había sido designada por la Telefónica para el cambio de acciones preferentes, a razón de 5 de la nueva compañía por cada 100 de la Peninsular o de la Sociedad General de Teléfonos.

3.86. Lunes, 27 de octubre de 1924

Reunión del Consejo de Administración³⁹⁹

La reunión celebrada por el Consejo de Administración en este día fue la primera que contó con la presencia de los tres Consejeros Delegados del Gobierno, que habían sido nombrados por Real Orden de 7 de octubre de 1924 y que eran Miguel Manella Corrales, del Ministerio de la Guerra, Antonio Nieto Gil, funcionario del Cuerpo de Telégrafos y representante del Ministerio de la Gobernación, y Antonio Carrillo de Albornoz, del Ministerio de Hacienda. Los recién llegados fueron recibidos

³⁹⁸ *La Vanguardia*, 24 de octubre de 1924, p. 4.

³⁹⁹ Acta nº 6, 27 de octubre de 1924, libro 1, pp. 15-17.

con unas “sinceras y elocuentes palabras” por parte del Marqués de Urquijo, que expresó la satisfacción con la que les recibía, “esperando que con su acertada y activa colaboración contribuirán a los fines en que se inspira el Contrato de concesión celebrado entre el Estado y esta Compañía”.

Miguel Manella respondió, en nombre de la Delegación del Gobierno, también con unas palabras de gratitud y cordialidad, prometiendo realizar “con el mayor celo su actuación a fin de armonizar con los intereses del Estado, que ellos representan, el éxito que debe corresponder a la Compañía Telefónica por la acertada y valiosa actuación de los elementos que la integran y dirigen”. Como los hechos posteriores vinieron a confirmar, los tres delegados del Gobierno no cumplieron estas amables palabras que dispensaron en su primera reunión, ya que no supieron “armonizar los intereses del Estado con el éxito de la Telefónica”, en tanto en cuanto miraron más por lo segundo que por lo primero durante los cuatro años que formaron parte del Consejo. Aunque quizá sería más justo decir que no supieron mirar ni por lo uno ni por lo otro, por lo que indirectamente beneficiaron al éxito de la compañía. Por supuesto, al convertirse en consejeros de pleno derecho aunque fueran los representantes del Gobierno, pasaban a recibir la remuneración anual de 6.000 pesetas que les confería el artículo 27 de los estatutos sociales de la empresa.

Tal y como ya había adelantado Proctor en la última reunión del Comité Ejecutivo, se veía absolutamente necesario unificar las tarifas del servicio interurbano, en tanto en cuanto la CTNE estaba incorporando líneas que provenían de la Compañía Peninsular de Teléfonos, que aplicaban las cuotas de una forma, y del Cuerpo de Telégrafos, que las aplicaban de otra totalmente distinta. Por ello, el Vicepresidente presentaba en aquella reunión un proyecto para un nuevo sistema tarifario, aunque el Consejo de Administración delegaba su estudio en el Comité Ejecutivo. Éste, a su vez, una vez examinada y aprobada la propuesta de Proctor, pasaría “a estudio de la Delegación Oficial del Gobierno, si así lo considera oportuno, para su aprobación”. De la lectura de estas palabras se entiende, primero, que el Consejo no perdió mucho tiempo en estudiar el nuevo sistema de tarifas, ya que encargó esa tarea automáticamente al Comité Ejecutivo. Pero además se daba por hecho que, en caso de que la Delegación quisiera estudiar el proyecto, lo aprobaría y daría por bueno. Recordemos en este momento que, por contrato, los consejeros delegados del Estado tenían obligatoriamente que valorar cualquier cambio en las tarifas, que por supuesto se podría aprobar o no.

Antonio Nieto Gil, miembro del Cuerpo de Telégrafos y Delegado del Ministerio de la Gobernación, entendía que la unificación de las tarifas interurbanas era “muy conveniente” y se comprometía a estudiar el proyecto con atención tan pronto como el Comité Ejecutivo se lo presentara oficialmente.

El representante del Ministerio de Hacienda, Antonio Carrillo de Albornoz, expresó entonces su deseo de colaborar activamente en la marcha de la compañía y para ello solicitó “autorización para examinar la contabilidad de la misma y conocer determinados datos de funcionamiento, que estima esenciales para hacer su preparación y prestar a la Compañía el máximo fruto de su buen voluntad”. El Marqués de Urquijo cerraba la sesión mostrándose muy complacido por el interés demostrado por los tres nuevos miembros del Consejo y esperando un resultado positivo como consecuencia de “su actuación en defensa de los intereses que le están conferidos”.

3.87. Miércoles, 29 de octubre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁰⁰

Proctor abrió esta reunión exponiendo la necesidad de agilizar las gestiones para lograr la autorización del tendido del cable telefónico submarino entre Algeciras y Ceuta. Aprovechó también para explicar el estado en el que se encontraban las obras de construcción de la nueva línea de Madrid a Algeciras, que enlazaría con el hilo submarino para dar servicio a las posesiones africanas. Proctor también explicó que habían comenzado las gestiones con una firma inglesa para la adquisición del cable que habría de tirarse sobre el lecho marino. Ruiz Senén propuso solicitar la ayuda de los tres Delegados del Gobierno “para que se resuelva este asunto de manera definitiva y lo antes posible”, delegando en Gumersindo Rico la redacción del proyecto para que el caso fuera explicado de la mejor manera posible a la Delegación oficial del Estado.

Por las palabras de los miembros del Comité Ejecutivo se intuye que el asunto de la conexión telefónica entre la Península y las plazas africanas era un proyecto al que se le estaba dando máxima prioridad. El propio Proctor se estaba encargando personalmente de la negociación con la empresa cablera, de la supervisión de las obras en la línea Madrid-Algeciras y de todas las cuestiones relacionadas con este

⁴⁰⁰ Acta nº 9, 29 de octubre de 1924, libro 1, pp. 7-8.

plan. Entendemos, por lo tanto, que la CTNE buscaba dar un golpe de efecto gracias a la instalación de este cable submarino, ya que se trataba de uno de los anhelos personales del general Primo de Rivera. No en vano, esta unión telefónica entre los dos continentes era una de las condiciones “muy recomendable” que debía cumplir cualquier proyecto que se presentara al “concurso de proposiciones libres” abierto con la Real Orden de 11 de mayo de 1924. No es extraño entonces que los directivos de la empresa buscaran agilizar el proceso, para demostrar la rapidez con la que la CTNE podía ejecutar los planes que había prometido llevar a cabo.

En esta reunión también se estudió el proyecto de unificación de tarifas para el servicio interurbano, que se basaba en un “procedimiento de distancias fijas”. Se acordó presentar la propuesta a los Consejeros Delegados del Gobierno, haciendo constar que por ahora sólo se había concretado la necesidad de unificar las cuotas telefónicas, dejando para más adelante la fijación definitiva de las tarifas, que se ajustarían en función de las necesidades de la explotación y de las normas establecidas en el contrato firmado con el Estado.

Con respecto a la adquisición de nuevas redes, el Comité delegó en Lewis J. Proctor el estudio de las propiedades telefónicas de la red de Vizcaya, para que propusiera la solución más adecuada a este respecto, “en atención a las circunstancias que concurren en aquella provincia”.

Antes de levantar la sesión, el Comité Ejecutivo se hacía eco de una petición hecha por la prensa sevillana para realizar una entrevista al Subdirector del Distrito 5º de la compañía, con sede en la capital andaluza. En apartados anteriores hemos visto como la Dirección de la Telefónica dio, desde el principio, enorme importancia a su relación con la prensa y a la imagen que proyectaba al exterior de cara a la opinión pública. En este sentido, el Comité veía necesario centralizar toda manifestación oficial sobre los proyectos y los planes de la compañía desde “la organización directiva de Madrid”. Por lo tanto, no consideraban al Subdirector del Distrito 5º lo suficientemente preparado para expresar el sentir oficial de la empresa y decidieron enviar a “un alto empleado para que en representación de la Compañía exponga a las fuerzas vivas de la localidad los planes fundamentales y el criterio general de aquella”.

3.88. Sábado, 1 de noviembre de 1924

Reversión de todas las propiedades telefónicas del Estado

El día 1 de noviembre de 1924 se trata de otra fecha que, por su significado, debería contarse entre las más importantes de la historia de las telecomunicaciones españolas. Sin embargo, ni los medios de la época, acallados por la censura, ni las investigaciones posteriores le han sabido dar el valor que se merece, sobre todo teniendo en cuenta el sentido que tuvo este día para las aspiraciones de algunos protagonistas del mapa telefónico nacional.

En esta jornada se hizo efectivo el traspaso de todas las líneas y redes telefónicas que hasta entonces se encontraban en manos del Estado, explotadas por el Cuerpo de Telégrafos. Según la base segunda del contrato firmado con la CTNE, “el Estado, cuando y a medida que lo solicite la Compañía, entregará a ésta para su modernización, reconstrucción, ampliación y para los demás fines de este contrato, todas las instalaciones y propiedades telefónicas hoy explotadas por el Estado”. El convenio no indicaba en ninguna cláusula que esta entrega debiera realizarse después de que la comisión para la valoración de las redes hubiera dictado su decisión, que habría sido lo más lógico desde el punto de vista formal. Por ello, la CTNE acordó con la Dirección General de Comunicaciones que todas las propiedades se traspasaran en la primera jornada de noviembre de 1924.

Las actas del Comité Ejecutivo hablan de la “eficaz colaboración” que Tafur Funés brindó durante toda la operación, ayudando a que la conexión con las centrales de la compañía fuera lo más eficiente posible y a que las centrales urbanas pasaran a manos de la compañía con rapidez. En este sentido, la CTNE se hizo con la red de Barcelona el día 13 de noviembre, tal y como explicaba la Revista Telefónica Española en su segundo número⁴⁰¹. No obstante, la valoración económica que habría de realizar la comisión nombrada a tales efectos tardaría todavía más de dos semanas en hacer pública su decisión, pero poco importaba la cantidad exacta final, teniendo en cuenta que el traspaso se iba a hacer de todas formas y que el contrato otorgaba a la compañía el poder de decidir cuándo quería que el Estado le entregara sus propiedades telefónicas.

⁴⁰¹ Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, p. 15.

Se iniciaba de esta forma un proceso que habría de cambiar, para siempre, el panorama de las telecomunicaciones en nuestro país. Atrás quedaban los interminables debates entre los partidarios de la explotación del servicio por parte del Estado, con el Cuerpo de Telégrafos a la cabeza, y los defensores de la concesión a una compañía privada, con la CTNE como máxima beneficiada por la adopción de esta medida. Atrás quedaban también todas las soluciones intermedias que a los distintos dirigentes se les fueron ocurriendo a lo largo del tiempo y que no hicieron más que acentuar el desastroso estado de la telefonía nacional. La eterna reivindicación de los telegrafistas se había saldado, por fin, muy en contra de sus pretensiones y, en vista de la firma que su Director General había estampado en el contrato con la CTNE, no tuvieron más remedio que ceder sus propiedades a la compañía que se había alzado con la adjudicación. La censura de prensa de la época no nos ha permitido conocer las impresiones del Cuerpo de Telégrafos ante esta reversión, pero podemos estar seguros de que las voces críticas fueron muchas, aunque también habría palabras de resignación y de triste aceptación de un proceso que desde hacía tiempo se presentaba como inevitable.

Por su parte, la CTNE había logrado su gran objetivo y se disponía ahora a interconectar adecuadamente todas sus propiedades y a seguir adquiriendo nuevas líneas y redes urbanas. Su proyecto de construcción de un moderno sistema telefónico para todo el país comenzaba a adquirir forma y pocas piezas se resistían ya a su control. El día 1 de noviembre de 1924 supuso, en la historia de la telefonía española, el primer gran paso (no sólo sobre papel) para conseguir, por fin, una red unificada y eficiente que nos situara en niveles similares a los de países de nuestro entorno.

3.89. Lunes, 3 de noviembre de 1924

El informe del letrado municipal de San Sebastián

Cuando el Real Decreto de 25 de agosto de 1924 se promulgó, no fueron pocas las entidades que tomaron las medidas que consideraron oportunas para que el nuevo marco legislativo en materia telefónica no afectara a los intereses de las redes que explotaban. Este fue el caso de la Mancomunidad de Cataluña que, como veremos a continuación, elevó una instancia a la Subsecretaría de Gobernación o el de la Diputación de Guipúzcoa, que interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la concesión de la CTNE, aunque luego fuera retirado.

El ayuntamiento de San Sebastián también tomó acciones rápidamente, pero en principio no creyó conveniente sumarse al recurso de la Diputación de Guipúzcoa, a pesar de la invitación de ésta a unir sus fuerzas, por considerar que las condiciones en las que se encontraban las dos corporaciones eran diferentes: la concesión de la red de la ciudad era a perpetuidad, no como la provincial, que tenía una caducidad de 35 años. No obstante, el día 31 de agosto pidió al letrado municipal que examinara el Real Decreto para que “emitiese dictamen sobre si procedía o no que el Ayuntamiento entablase recurso contencioso administrativo contra dicha disposición”⁴⁰².

El abogado presentó su informe el día 3 de noviembre de 1924, señalando que en la base segunda del contrato entre el Estado y la CTNE se decía, de manera clara, que la compañía se haría con las “propiedades telefónicas hoy explotadas por el Estado y las que en lo sucesivo debían revertir al mismo a tenor de las respectivas concesiones”. La red de San Sebastián no tenía que revertir, tal y como se establecía en la Real Orden del Subsecretario de la Gobernación de 27 de octubre de 1923. No entendía, por lo tanto, que debiera iniciarse un procedimiento contencioso administrativo ya que era necesario que se “vulnere un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo”.

Los hechos posteriores han demostrado que efectivamente la CTNE respetó lo establecido en aquella Real Orden de octubre de 1923 y no solicitó la reversión de la red de San Sebastián en ningún momento, entablando siempre negociaciones formales con el consistorio de la ciudad hasta que finalmente se pactó su traspaso a principios de los 70. No obstante, se podría decir que el ayuntamiento de la ciudad se mostró excesivamente confiado con respecto a las intenciones de la compañía, ya que, por otro lado, el artículo 2º del Real Decreto de 25 de agosto de 1924 establecía que, “no serán de aplicación al contrato que autoriza este Decreto todas las leyes y disposiciones en contradicción con el mismo y con las bases aprobadas”. Por su parte, la base primera del convenio comenzaba diciendo:

La Compañía, en la forma y con arreglo a las condiciones que en este contrato se indican, y a medida que las necesidades del servicio lo exijan, establecerá en toda la Península un amplio y homogéneo sistema telefónico urbano e interurbano.

⁴⁰² Gutiérrez-1997, p. 278.

La ciudad de San Sebastián está dentro de la península Ibérica, por lo que la compañía podría entender que la Real Orden de octubre de 1923 entraba en contradicción con la base primera del contrato y que por lo tanto no era de aplicación. A pesar de ello, la compañía no inició ningún proceso en contra de los intereses del consistorio y las relaciones fueron relativamente cordiales durante los más de 45 años que duró la convivencia de estos dos concesionarios en suelo nacional.

3.90. Miércoles, 5 de noviembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁰³

En esta primera sesión celebrada en el mes de noviembre se informó a los miembros del Comité de la entrega hecha por el Estado, el día 1 de noviembre, de todas las líneas y centros telefónicos que estaban en posesión del Cuerpo de Telégrafos. Así mismo celebraban la normalidad con la que se estaba realizando la incautación de los centros telefónicos urbanos y la interconexión de todas las líneas interurbanas con las centrales de la compañía, funcionando todo ello con normalidad. En este sentido se mostraban muy satisfechos por “la eficaz y justa colaboración brindada por el Director General de Comunicación”.

Con respecto a los empleados de las redes telefónicas que la CTNE se fuera incautando, la base decimoséptima del contrato firmado con el Estado indica que “a medida que el Estado haga entrega a la Compañía de sus redes y centros telefónicos, así como cuando ésta se vaya haciendo cargo de las redes y centros telefónicos hoy en poder de concesionarios, la Compañía incluirá entre sus empleados a aquellos que en el momento de la entrega estuvieren afectos o formen parte de la Administración de tales servicios telefónicos en los respectivos centros y redes”. En consideración a este acuerdo contractual, la compañía contrató a todos los funcionarios que prestaban servicio en las redes telefónicas del Estado que habían pasado a manos de la CTNE el 1 de noviembre. Al mismo tiempo, tal y como se recoge en el acta de esta reunión, en la Sección de Personal de la empresa contaban ya con un gran número de peticiones de contratación, por lo que el Comité acordó no admitir ninguna otra solicitud de ingreso, dado que la demanda superaba la oferta de puestos de trabajo.

⁴⁰³ Acta nº 10, 5 de noviembre de 1924, libro 1, pp. 9-10.

En lo que se refiere al proyecto para la modificación de las tarifas de telefonía interurbana, Gumersindo Rico informaba que había sido entregado a la Delegación del Gobierno para su aprobación. Sin embargo, las intenciones de Proctor quedaban muy lejos de limitarse a las cuotas telefónicas interurbanas. En esta reunión expuso también “con suficientes razones” la necesidad de modificar también las tarifas de los pequeños centros telefónicos urbanos, a lo que el Comité respondió mostrando su concordancia con la medida y delegando en Proctor la redacción del informe que sería trasladado igualmente a la Delegación oficial del Gobierno para su posterior aprobación.

Además, se había solicitado ya la colaboración de dichos Delegados para aligerar, en la medida de lo posible, los trámites necesarios para la instalación del cable submarino entre Algeciras y Ceuta que habría de unir la península con sus posesiones en África. Se había solicitado también la colaboración de estos tres consejeros para ayudar a obtener la autorización del gobierno británico para el tendido de la línea, toda vez que el referido cable pasaba por aguas jurisdiccionales de Gibraltar. A este respecto, la base decimocuarta del contrato otorgaba a la Compañía Telefónica libertad absoluta para tratar, negociar y pactar con cualquier entidad con el fin de “facilitar el establecimiento de un servicio telefónico internacional, homogéneo y eficiente.” Se autorizaba a la compañía para “celebrar convenios con las Administraciones extranjeras relativos al servicio internacional, siendo estos convenios intervenidos y aprobados por el Gobierno para poderlos hacer efectivos”. Es decir, que aunque la CTNE tenía libertad para tratar con las autoridades británicas para realizar el tendido del cable, el convenio final tendría que ser autorizado por el Estado, para lo que, por supuesto, se solicitaba la colaboración de los tres representantes de éste en el Consejo de Administración.

Gumersindo Rico informó al Comité de la firma de la escritura de adquisición del centro telefónico urbano de Córdoba en los términos que previamente se habían determinado. Otras cuestiones que también se discutieron en esta reunión fueron las negociaciones con el presidente del Banco Matritense sobre el alquiler de la nueva sede de la compañía en el número 5 de la Gran Vía o la solicitud que se iba a realizar a las compañías de ferrocarriles para conseguir tarifas especiales para el transporte de materiales. El Comité se consideraba con derecho a realizar esta petición dado que, por contrato, la compañía quedaba subrogada en todos los derechos inherentes a la explotación telefónica que antes realizaba el Estado o los distintos concesionarios de redes y líneas.

Ruiz Senén también reiteró en la sesión su “deseo de atender con preferente atención y en cuanto sea posible y económicamente compatible con los intereses de la Compañía a la producción nacional”, voluntad con la que estuvo de acuerdo todo el Comité Ejecutivo. Como ya hemos visto, la adquisición de material debía realizarse con preferencia a la producción nacional, siempre que se reunieran las condiciones técnicas y económicas necesarias (base 19ª del contrato con el Estado). Esta coletilla sirvió para que esta base del contrato se convirtiera la mayor parte de las veces en papel mojado, ya que la compañía siempre podía justificar su preferencia por materiales y equipos extranjeros en que no se daban las condiciones que ellos mismos habían considerado oportunas. Fueron varios los consejeros españoles que, a lo largo de estos meses, se expresaron en los mismos términos a como lo hiciera Ruiz Senén en esta ocasión, aunque la respuesta del Comité y del Consejo (es decir, la respuesta de la ITT) fue siempre la misma: hacían suyos los referidos deseos y acordaban “ratificarse en esta norma de criterio que responde en absoluto a la orientación de esta Compañía y a una de las bases fundamentales de su actuación”.

3.91. Jueves, 6 de noviembre de 1924

La Mancomunidad eleva una instancia en relación a la CTNE

El diario La Vanguardia informaba, en su edición de 6 de noviembre, sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de la Mancomunidad de Cataluña en sus últimas sesiones⁴⁰⁴. Una de estas decisiones había sido la de aprobar “una instancia que se elevara a la subsecretaría de Gobernación, referente a la situación creda (sic) a la Mancomunidad por el real decreto de 25 de agosto último, autorizando el contrato del Estado con la Compañía Telefónica Nacional de España, para la explotación del servicio de teléfonos”. Estas expresiones van en consonancia con las ya realizadas por otras entidades en el ámbito catalán, como la de la Cámara de Comercio de Barcelona un mes antes, en las que se manifestaba cierta inquietud con respecto a las aspiraciones de la CTNE.

Como ya hemos visto, su preocupación estaba más que justificada, teniendo en cuenta las condiciones en las que se expresaba el contrato, otorgando todo tipo de facilidades a la compañía para la adquisición de redes telefónicas en toda España. La

⁴⁰⁴ La Vanguardia, 6 de noviembre de 1924, p. 6.

Mancomunidad no tenía ninguna intención de entregar su sistema telefónico, del que se sentía tremendamente orgullosa, a otra entidad. Su Presidente, Alfonso Sala, ya tuvo la oportunidad de mostrar su opinión al respecto cuando la Telefónica intentó comprar la red catalana antes de verano y éste respondió que “no ha lugar a discutir sobre este particular”⁴⁰⁵. Por lo tanto no es de extrañar que las autoridades de esta corporación vieran con alarma los cambios que se estaban produciendo en materia telefónica, más cuando la CTNE se estaba dedicando a la adquisición de líneas y redes a un ritmo frenético, reduciendo cada vez más el número de concesionarios en España.

Así, por ejemplo, la Mancomunidad tuvo que ver como la Telefónica tomaba posesión en aquellos días de la red telefónica de Barcelona, que simbolizaba la gran pretensión a la que siempre habían aspirado para completar su notable sistema telefónico regional. La fuerte irrupción de la CTNE en el panorama empresarial barcelonés implicaba una prueba más de la progresiva pérdida de poder de la Mancomunidad y la confirmación de que la pieza telefónica de esa ciudad nunca llegaría a formar parte del puzzle telefónico de las diputaciones catalanas. Todo parecía indicar ya, como demuestra la instancia que elevaron al Gobierno, que la incorporación de las líneas de la Mancomunidad a las propiedades de la compañía se les antojaba cada vez más inminente.

3.92. Miércoles, 12 de noviembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁰⁶

Gumersindo Rico daba cuenta en esta reunión de haberse firmado la escritura de adquisición del centro telefónico urbano de Pamplona “en el precio y condiciones que previamente habían sido acordados” con el concesionario. El propietario de la red era el ayuntamiento de la ciudad y el precio acordado era de 175.000 pesetas⁴⁰⁷. A su vez informó también de las negociaciones entabladas con el concesionario de Granada, indicando que la escritura se firmaría tan pronto como el actual propietario de la red realizase determinadas acciones burocráticas necesarias para completar el proceso de compraventa.

⁴⁰⁵ Véase la crónica del día 9 de mayo de 1924 del presente Trabajo Fin de Máster.

⁴⁰⁶ Acta nº 11, 12 de noviembre de 1924, libro 1, pp. 10-12.

⁴⁰⁷ Gutiérrez-1997, p. 279.

El Comité había recibido, días antes, una comunicación de los Consejeros Delegados del Gobierno en la que se informaba sobre una reclamación de la anterior empresa concesionaria del centro telefónico urbano de Plasencia (Cáceres), la firma “Viuda y Sobrinos de R. Prado”. En dicha solicitud, los antiguos propietarios de la red consideraban que deberían recibir una compensación económica por parte de la CTNE por la cantidad invertida recientemente en una construcción realizada para la mejora del sistema telefónico en el municipio. Después de estudiar el caso, el Comité Ejecutivo de la Telefónica decidió contestar a la Delegación oficial del Gobierno indicando que la empresa estaba “totalmente exenta de toda obligación en el sentido que se expresa, pues la adquisición de las referidas propiedades del Estado, se ha efectuado por el precio de la valoración convenida por los delegados de ambas partes y libre de toda carga, gravamen u obligación respecto a la misma”. Añadían además que se informaría a la Delegación oficial de que esta resolución se aplicaba igualmente a todos los casos análogos que se pudieran presentar.

Con respecto al tema de las modificaciones en las tarifas, Proctor presentaba en esta reunión su segundo proyecto de unificación de las cuotas telefónicas, refiriéndose en este caso a las de pequeños centros urbanos. El Comité aprobó esta propuesta y se acordó fuera elevada a la consideración de los Consejeros Delegados del Gobierno.

Se tomaron también decisiones con respecto a algunas peticiones del ayuntamiento de Madrid. Por un lado, se aprobó “contribuir desde luego” a una subvención para fines benéficos solicitada por el alcalde de la capital, Fernando Suárez de Tangil y Angulo, aunque la cantidad se acordaría en función de la que aportaran otras compañías. Además, se decidió no acceder a la petición realizada por el consistorio para que la CTNE instalara gratuitamente aparatos telefónicos en algunas paradas de taxis de la capital. Ruiz Senén y Proctor visitarían al regidor municipal para explicarle personalmente los motivos por los que se había tomado esta consideración. Por su parte, el Marqués de Urquijo, presente en la reunión, insistía en la necesidad de “actuar rápidamente en las obras que actualmente se realizan en Madrid para extender en lo posible el servicio Telefónico Urbano pues considera muy conveniente atender [...] las demandas del público”. El Comité mostró su conformidad y agrado hacia estas manifestaciones del Presidente de la compañía.

Sin salirse de la provincia de Madrid, el Secretario General presentaba sendas cartas enviadas por el Presidente de la Diputación provincial⁴⁰⁸ y por el Gobernador Civil en las que se solicitaban algunos privilegios en materia telefónica para las corporaciones que dirigían. El Comité Ejecutivo consideraba que no se podía acceder a dichas franquicias, escudándose en el contrato firmado con el Estado, aunque accedieron a someter el asunto a la deliberación del Consejo de Administración en su reunión mensual. Como cabe imaginarse, este asunto no fue discutido finalmente en la sesión del Consejo de finales de noviembre, tal y como se había prometido.

Con respecto al edificio del número 5 de la Gran Vía que la CTNE iba a ocupar en breve, Lewis Proctor informaba que se había firmado el contrato de arrendamiento de la totalidad del inmueble por 138.000 pesetas anuales. A su vez, se denegaba una solicitud por la que se pedía permiso a la compañía para instalar un estanco y un bar en los bajos del edificio.

En esta sesión se hizo referencia por primera vez a cierto solar de la Gran Vía, que la compañía pretendía adquirir y por el que se estaban realizando las oportunas negociaciones. Este terreno no es otro que el situado entre las calles Gran Vía, Fuencarral y Valverde y donde aproximadamente un año después comenzaron las obras del emblemático Edificio Telefónica que hoy preside la avenida madrileña. Ruiz Senén esperaba “recibir en breve una carta de París con referencia a este asunto”. Por el contexto, entendemos que la “carta de París” se trataba de una misiva enviada por Sosthenes Behn desde la capital francesa con las órdenes para proceder en el asunto del solar en venta en la Gran Vía.

3.93. Martes, 18 de noviembre de 1924

Venta de la red de Zaragoza

Proctor y Rico informaron, en la reunión del Consejo de Administración del 27 de septiembre, sobre la firma de la escritura de venta del centro telefónico urbano de Zaragoza, que finalmente fue otorgada el 18 de noviembre⁴⁰⁹. Los derechos de compra de esta red, junto con los de otras cinco capitales provinciales, habían sido

⁴⁰⁸ Hay que recordar que, por aquel entonces, Madrid formaba parte de una región de cinco provincias llamada Castilla-La Nueva, por lo que la provincia contaba a su vez con su propia Diputación, no como en la actualidad.

⁴⁰⁹ Yuste-2004, p. 226.

transferidos de la ITT a la CTNE cuando el 29 de agosto se firmaron los contratos privados entre estas dos empresas.

El precio final pagado por la Telefónica a su anterior concesionario, la “Sociedad Baselga y Compañía”⁴¹⁰, fue de 700.000 pesetas. A principios de la década de 1920, Zaragoza contaba con 141.350 habitantes⁴¹¹ y unos 1.770 teléfonos⁴¹², lo que implicaba una tasa de penetración del 12,5 por mil, un dato que no la situaba precisamente entre las capitales de provincia mejor situadas, más teniendo en cuenta su tamaño (la sexta ciudad española, en pugna con Murcia) y su importancia como nodo de comunicaciones. La compra de este centro urbano le supuso a la CTNE un coste de unas 400 pesetas por abonado.

3.94. Miércoles, 19 de noviembre de 1924

Resolución del consejo para la evaluación de las propiedades del Estado

El día 15 de septiembre de 1924 se iniciaron los trabajos de la comisión destinada al estudio, examen y tasación de las propiedades telefónicas del Estado. No obstante, ya hemos visto como, a pesar de no haberse emitido veredicto alguno todavía, el día 1 de noviembre se traspasaron todas las líneas y redes del Cuerpo de Telégrafos a la CTNE y se dio comienzo al proceso de entrega de centros telefónicos urbanos mientras la comisión seguía realizando su labor. Ésta estaba formada por dos empleados de la compañía, Roy A. Walker y José Berenguer Cagigas, y dos representantes del Estado, Francisco Moñino y Benítez-Cano y Antonio Nieto Gil. Decir, a estas alturas, que Antonio Nieto Gil era sólo un representante del Gobierno es quizá pecar de idealismo, puesto que el 7 de octubre fue nombrado Consejero Delegado del Estado en el Consejo de Administración de la empresa y el día 27 de ese mes asistió a su primera reunión, comenzando a cobrar un sueldo de 6.000 pesetas anuales por esta actividad.

La comisión emitió su dictamen unánime el día 19 de noviembre de 1924, dando como resultado una valoración que muchos investigadores han calificado de

⁴¹⁰ Yuste-2004, p. 132.

⁴¹¹ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁴¹² Número de teléfonos existente a fecha 31 de diciembre de 1921. Dato extraído de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923, a todas las “fuerzas vivas” de España.

“mal negocio para el Estado”. El importe de la compra de las redes y líneas del Estado por parte de la CTNE ascendía a 17.464.293,37 pesetas. En esa cantidad estaba incluido el valor de todos los centros telefónicos urbanos, de las líneas interurbanas, de las líneas telefónicas colgadas en apoyos telegráficos y de la línea internacional con Francia, así como el mobiliario y cualquier otro material destinado a la explotación telefónica. Tal y como explica Pérez Yuste, “la tasación se realizópreciando todas las propiedades por su valor material y aplicando a la cantidad resultante unos coeficientes de depreciación más que discutibles. En la tasación no se consideró, en cambio, el “valor comercial” de las instalaciones vendidas, [...] en cuya estimación deben incluirse factores como la antigüedad, la cartera de clientes o el aprecio social de que goza el servicio, entre otros”⁴¹³.

Según estimaciones de Agustín Muro Abad en sus artículos de la revista Telégrafos de 1932, un valor justo para las propiedades telefónicas del Estado hubiera sido de 37.428.543 pesetas, es decir, 20 millones más que la tasación realizada por la comisión, un 115% superior⁴¹⁴.

Sin embargo, lo peor de todo es que en esa tasación final no se tuvo en cuenta el valor de los “derechos de reversión”, es decir, el valor de todas las redes que todavía no estaban en control del Cuerpo de Telégrafos, pero cuyas licencias irían poco a poco caducando y que pasarían con el tiempo a manos del Estado y de ahí directamente a la CTNE. Pérez Yuste estimaba que tales concesiones eran unos ochenta centros telefónicos repartidos por toda España, entre los que se encontraba el más importante: el de Madrid. ¿Fue esta tasación realizada de manera fraudulenta? Lo cierto es que, a pesar de los discutibles coeficientes de depreciación y la no aplicación del valor comercial de las instalaciones, la valoración de las líneas no fue ilegal en tanto en cuanto se ciñó, escrupulosamente, al contrato firmado entre el Gobierno y la CTNE, que en su base tercera indicaba:

La primera [la CTNE] abonará a éste [el Estado], además de los beneficios que se indican en la base séptima, la cantidad que resulte de una valoración de las líneas y centro que hoy posee el Estado y que debe entregar a la Compañía a medida que está lo solicite. La valoración será hecha por una Comisión formada por dos Ingenieros [...]

⁴¹³ Yuste-2004, pp. 222-223.

⁴¹⁴ Revista Telégrafos, 31 de enero de 1932, nº 14, pp. 3-5.

Es decir, ni una palabra sobre la tasación de las redes que habrían de revertir al Estado con el tiempo; sólo se valoraron las que se encontraban en posesión del Estado “hoy”, es decir, el día 29 de agosto de 1924. La jugada le salió redonda a la Telefónica, ya que Muro Abad estimó que los derechos de reversión de las redes cuya concesión no había caducado se podrían valorar en casi 23 millones de pesetas. Se desconoce, empero, si el Gobierno era consciente del abuso que llevaba implícita la redacción de esta cláusula del contrato, pero lo que está claro es que se trató de una irresponsabilidad enorme que ocasionó una pérdida de muchos millones de pesetas al Estado español. Los informes de las ponencias de los generales Mayandía y Ruiz del Portal de agosto de 1924 no mencionaban, en ningún momento, que ese párrafo tuviera que ser modificado de forma alguna para que protegiera los intereses del Estado. La compañía, por el contrario, sería plenamente consciente de que aquella redacción le beneficiaba. No en vano, las 26 bases del contrato que finalmente se firmó habían salido directamente de las 24 cláusulas del proyecto de contrato que el equipo de abogados del tándem ITT/CTNE había redactado a principios de año y que fue entregado al Gobierno el día 21 de abril.

Como se puede apreciar, la tasación realizada por la comisión resultó muy poco beneficiosa para el país. Algunos estudios han realizado estimaciones relativas en términos de coste por abonado y han calculado que el precio que la CTNE pagó al Cuerpo de Telégrafos por sus propiedades fue de unas 312 pesetas por abonado⁴¹⁵. Ya hemos comprobado como la red de Zaragoza se pagó a razón de 400 pesetas por abonado y a continuación también veremos cómo se alcanzaron precios de 500, 600 y hasta 900 pesetas por abonado en algunos centros adquiridos más tarde. Para mayor agravio, muchas de estas redes se encontraban en muy mal estado e iban a revertir al Estado, y por lo tanto a la compañía, en un plazo medio de unos cinco años. De haber esperado, la CTNE hubiera obtenido esos centros de manera gratuita en un tiempo más que prudencial gracias a la onerosa redacción de la base tercera del contrato con el Estado.

⁴¹⁵ Yuste-2004, p. 224.

El reparto de las acciones de la empresa

En la reunión que realizó el Consejo de Administración el día 21 de agosto de 1924 se aprobó una ampliación del capital social de la empresa de 114 millones de pesetas, que se sumaba al millón que ya había sido aportado por los cinco fundadores españoles de la compañía el día 19 de abril. Esta ampliación de capital se hizo efectiva el día 29 de agosto después de la firma del contrato con el Estado y quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de noviembre de 1924⁴¹⁶.

Esta ampliación de capital de 114 millones de pesetas se realizó mediante la emisión de 228.000 acciones al portador con un valor nominal de 500 pesetas cada una. De estas participaciones, 28.000 correspondían a acciones ordinarias (14 millones de pesetas) y 200.000 correspondían a acciones preferentes (100 millones de pesetas). En el Registro Mercantil también se dejó constancia de que ya se habían puesto en circulación 26.800 participaciones ordinarias y 100.000 preferentes y que todas ellas ya se habían suscrito y pagado, hallándose por tanto completamente liberadas⁴¹⁷. El resto de acciones, 1.200 ordinarias y 100.000 preferentes, quedaban en cartera y se pondrían en circulación cuando la compañía lo considerara oportuno. Vamos a ver ahora, quién suscribió cada uno de estos grupos de participaciones de la CTNE.

De las 26.800 acciones ordinarias puestas en circulación antes del 19 de noviembre, 24.120 fueron adquiridas por la ITT y 1.910 por la International Telephone Securities, lo que hacían un total de 26.030; es decir, casi un 93% del total de las acciones ordinarias de la CTNE. Como ya sabemos, esta suscripción entregó el control de la compañía a la ITT, puesto que estas participaciones eran las únicas que contaban con voz y voto en las Juntas Generales de accionistas e implicaban la posibilidad de ejercer la administración y dirección de la empresa. Las pocas participaciones que restaban habían sido adquiridas por miembros del Consejo de Administración de la empresa, por los hermanos Behn, por Lewis J. Proctor y por otras personalidades españolas a las que se les reconocía de esta forma su apoyo al proyecto de la CTNE.

⁴¹⁶ Yuste-2004, pp. 216-221.

⁴¹⁷ La fecha de otorgamiento de la escritura pública de emisión fue finalmente el día 30 de noviembre de 1924, tal y como quedó recogido en la Memoria social de la compañía del año 1924, p. 6.

Las 1.200 acciones ordinarias que todavía no se habían puesto en circulación corresponden a las 600.000 pesetas que se habían reservado para su adquisición posterior por parte de los Bancos Urquijo e Hispano Americano, tal y como se había acordado en los contratos firmados entre la CTNE y la ITT.

El total de acciones ordinarias de la empresa era de 30.000 y sumaban 15 millones de pesetas. Las 2.000 participaciones que restan hasta esa suma total se corresponden al millón de pesetas inicial aportado por el quinteto fundador y fueron emitidas el 19 de abril cuando se creó la compañía. Por supuesto, estas acciones seguían en manos de sus dueños: Valentín Ruíz Senén, Julián Cifuentes, Amadeo Álvarez García, el Marqués de Perijáa y Gumersindo Rico.

En cuanto a las acciones preferentes, 52.600 de ellas (26.300.000 pesetas) fueron destinadas a rescatar las acciones preferentes que la Compañía Peninsular de Teléfonos y la Sociedad General de Teléfonos tenían en circulación. El resto de las acciones preferentes que se habían puesto en circulación, 47.400 (23.800.000 pesetas) fueron puestas a la venta en una suscripción pública, que ya hemos detallado en un apartado anterior⁴¹⁸. El proceso tendría que haberse abierto el 25 de octubre, pero en la misma jornada en la que se dio la noticia, el día 20, se tuvo que cerrar la suscripción puesto que la totalidad de las 47.400 acciones puestas a la venta habían sido adquiridas.

Por último, las 100.000 acciones preferentes (50 millones de pesetas) que quedaron en cartera fueron puestas en circulación unas semanas más tarde, primero 50.000 y luego las 50.000 restantes. La compañía inició un programa de compra de acciones dirigido a los empleados de la propia CTNE y a sus familiares y amigos, que será tratado con más detalle en un capítulo posterior de este Trabajo Fin de Máster.

Esta ampliación de capital de 114 millones sirvió para que la CTNE obtuviera “los recursos necesarios para iniciar la adquisición de las propiedades telefónicas del Estado y de los diferentes concesionarios telefónicos particulares, así como para comprar todas las acciones ordinarias de la Compañía Peninsular de Teléfonos que estaban en poder de la ITT”⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Véase la crónica del día 20 de octubre de 1924.

⁴¹⁹ Yuste-2004, p. 221.

3.95. Jueves, 20 de noviembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴²⁰

En esta sesión, Valentín Ruiz Senén informó al Comité de las gestiones que se estaban efectuando para la compra del solar de la Gran Vía madrileña, situado en la Red de San Luis, donde, como ya sabemos, años después se inauguraría el Edificio Telefónica. Además, anunciaba el “favorable resultado” de la entrevista que se había llevado a cabo con el alcalde de Madrid.

Además, Proctor comunicó al Comité Ejecutivo la apertura de sendos locutorios abiertos al público en las subcentrales telefónicas de las calles Jordán y Hermosilla. El resto de miembros se mostró muy complacido por la noticia y acordaron publicar en la prensa un anuncio con la apertura de estos locutorios, para que la sociedad madrileña conociera “las ventajas que para ellos significa esta facilidad”. En esta misma línea, Behn había ordenado al Comité que se intensificara la publicidad de todos los proyectos que realizaba la compañía, con el fin de que el público comprobara los grandes avances que la reorganización telefónica estaba consiguiendo ya.

Esta reunión también sirvió para que el Comité adoptara la costumbre de que el Tesorero General, el Marqués de Perijáa, informara semanalmente sobre la situación de ingresos y gastos y mensualmente sobre el estado de los fondos de la empresa, a fin de conocer la marcha económica de la misma. Además se autorizó a cuatro abogados de la compañía para que pudieran firmar, en nombre del Secretario, los títulos definitivos de las acciones preferentes que se pretendían entregar al público el día 1 de diciembre.

Los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos que prestaban servicios en las instalaciones telefónicas del Estado se estaban incorporando progresivamente a la plantilla de la compañía, motivo por el cual no se había realizado ninguna admisión adicional de empleados durante aquella semana. Por su parte, Ruiz Senén propuso que se estudiara la posibilidad de que la CTNE adquiriera bosques para poder conseguir por su cuenta madera para los postes de las líneas telefónicas, ya que parece que se estaban presentando dificultades a la hora de comprar materiales adecuados.

⁴²⁰ Acta nº 12, 20 de noviembre de 1924, libro 1, pp. 12-14.

3.96. Sábado, 22 de noviembre de 1924

El nuevo sistema de tarifas del servicio interurbano es aprobado

Lewis J. Proctor había llamado la atención sobre el sistema tarifario de la compañía en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 22 de octubre de 1924. A su juicio, se hacía necesario unificar las tarifas del servicio interurbano, ya que coexistían dos sistemas, producto del traspaso de las redes telefónicas del Estado y de las redes de la Compañía Peninsular de Teléfonos. Además, tarde o temprano también se incorporarían las líneas de la Mancomunidad de Cataluña, lo que conllevaría un tercer sistema tarifario y una confusión aún mayor. La unificación de las cuotas interurbanas se hacía, por lo tanto, indispensable. Proctor propuso un sistema que se basaba en calcular el precio a partir de la distancia entre las dos poblaciones, pero no medida en kilómetros recorridos por los circuitos telefónicos como hasta entonces, sino calculada en línea recta.

El nuevo plan para estas tarifas fue presentado al Consejo de Administración en su reunión del 27 de octubre, que delegó su estudio y aprobación en el Comité Ejecutivo. Éste dio su visto bueno al proyecto el día 29 de octubre y se lo entregó a la Delegación oficial del Gobierno para que procediera al examen del mismo, tal y como informaba Gumersindo Rico al Comité el 5 de noviembre. Los Consejeros Delegados del Estado aprobaron el nuevo sistema presentado por la compañía y éste quedó sancionado mediante Real Orden el día 22 de noviembre de 1924⁴²¹. Las nuevas tarifas unificadas también quedaban reflejadas en dicha norma⁴²².

3.97. Miércoles, 26 de noviembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴²³

Sosthenes Behn se había ausentado de España durante tres meses, desde que marchara tras la firma del contrato entre la CTNE y el Estado el 29 de agosto

⁴²¹ Real Decreto de la Subsecretaría de Gobernación, de 22 de noviembre de 1924. Gaceta de Madrid, 14 de diciembre de 1924, nº 349, p. 1229,

⁴²² Para profundizar en los sistemas tarifarios para el servicio interurbano que existían en España antes de la llegada de la CTNE y las modificaciones introducidas por ésta, se puede consultar Yuste-2004, pp. 245-250.

⁴²³ Acta nº 13, 26 de noviembre de 1924, p. 14-17.

hasta que volvió de nuevo a finales de noviembre. Durante este tiempo había atendido a otros negocios que requerían su atención, ahora que la adjudicación del sistema telefónico español ya había sido conseguida, y había delegado la administración de la Telefónica en su hombre de confianza, Lewis J. Proctor. No obstante, las actas del Comité Ejecutivo dan buena cuenta de que Sosthenes Behn se mantenía al tanto de todo lo que ocurría en España y dictaba órdenes sobre el modo de proceder de la empresa y sobre las adquisiciones que había de realizar. No cabe duda de que muchas de las decisiones que se tomaban en los órganos de gobierno de la empresa nacían en la figura del Coronel, aunque los encargados de proponerlas y exponerlas eran luego otros. Además, Behn seguía manteniendo el poder de elegir a todo el personal de la compañía, que le había sido otorgado en la primera reunión del Comité Ejecutivo, de modo que cualquier nombramiento de importancia dentro de la sociedad tenía que contar, necesariamente, con su consentimiento.

El coronel Behn fue el auténtico director de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en este 26 de noviembre, que fue especialmente larga y en la que se trataron temas de gran importancia como la ampliación del capital social de la empresa en 25 millones. Se puede decir que la participación de Sosthenes Behn en esta sesión se hace notoria por la autoridad con la que se dirige al resto de miembros, por la rotundidad con la que convierte en decisiones firmes sus propuestas y porque el Comité acata sin dudar todas sus afirmaciones. No en vano, Behn era el Presidente de la compañía que tenía el control absoluto de la CTNE y además revelaba gran seguridad al hablar de su experiencia en el sector telefónico.

Después de las formalidades iniciales, la reunión comenzó con una explicación del presidente de la ITT sobre la forma en la que se lleva la contabilidad telefónica en la multinacional y en el resto de compañías asociadas. El Comité consideró que este sistema era muy beneficioso y estudiaría como podría aplicarse adecuadamente en la contabilidad de la compañía española.

En aquellos momentos, la CTNE se encontraba inmersa en un proceso de negociación para la adquisición definitiva de todas las propiedades y concesiones telefónicas de las compañías Peninsular, Madrileña y General de Teléfonos. A mediados del mes de noviembre se había llegado a un acuerdo más o menos firme y el Departamento Contencioso de la Telefónica había redactado un informe con las condiciones en las que se produciría esta reversión. El Comité estaba interesado en que estas adquisiciones se realizaran lo antes posible, por lo que aprobaron el

convenio presentado por los abogados de la compañía y se acordó que el Consejo de Administración diera también su conformidad al texto.

“Con objeto de contar con las disponibilidades necesarias para atender a los gastos generales de la Compañía”, el Comité también decidió proponer al Consejo que pusiera en circulación el paquete de acciones por valor de 25 millones de pesetas del capital social que todavía se encontraba en cartera. Para ello se emitirían 50.000 acciones preferentes, que serían adquiridas primero por la International Telephone Securities Corporation de conformidad con el contrato firmado entre las dos empresas a finales de agosto. De esta forma se elevaba el capital social puesto en circulación en acciones preferentes a 75 millones de pesetas. Julián Cifuentes intervino entonces para expresar su opinión de que “para la suscripción pública de las referidas acciones debía darse preferencia al mercado español”, algo con lo que todos los demás miembros del Comité se mostraron de acuerdo. Estas 50.000 participaciones se pusieron en circulación según escritura pública de emisión de 15 de diciembre de 1924⁴²⁴.

Se aprovechó esta reunión también para nombrar a uno de los Vicesecretarios de la compañía, cargo que recayó en la persona de Julián Calvet, abogado en nómina de la CTNE.

Cerraba entonces Behn haciendo un alegato a favor del desarrollo de la producción nacional, “para cumplir lo antes posible tanto la obligación contractual que la concesión nos impone, como el deseo unánime de esta Compañía en fomentar la Industria Española y encontrar para ello en España el mayor número de elementos para su explotación”. El Comité escuchó muy complacido estas manifestaciones y le felicitaba por su actividad, acierto y celo demostrado en todas las gestiones realizadas. Por todo ello y por si el poder de la International en la CTNE no fuera suficiente, Sosthenes Behn se encargó de que en aquella reunión de 26 de noviembre se le confirieran todos los poderes “a fin de que en virtud de esa amplia autorización pueda gestionar, concertar, realizar y formalizar cuantos actos, documentos o contratos considere necesarios a su actuación”. Por la forma en la se expresa esta decisión del Comité, se entiende que los poderes que se otorgaban a Behn se referían únicamente a todo aquello que tuviera que ver con la adquisición de materiales. No obstante, la redacción del párrafo resulta algo confusa, pudiendo parecer que el Comité le

⁴²⁴ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1924, p. 6.

estuviera otorgando plenos poderes para obrar en nombre del Consejo de Administración en cualquier decisión relacionada con la compañía, no sólo con la adquisición de materiales. Asumiendo que efectivamente el párrafo estaba mal expresado y “sólo” se estuvieran delegando en Sosthenes Behn las decisiones sobre compra de materiales y equipos, no cabe duda de que el poder que se estaba otorgando al presidente de la ITT era enorme, puesto que cualquier decisión que tomara en representación de la compañía a este respecto no necesitaba la autorización de ningún órgano de dirección. Valía con su palabra para que su voluntad se convirtiera en disposición oficial de la empresa. Para mayor sumisión, los miembros del Comité prometían “estar y pasar por los acuerdos que en virtud de este mandato se lleven a efecto”.

Reunión del Consejo de Administración⁴²⁵

Aprovechando la estancia de Sosthenes Behn en España, el Consejo de Administración celebró una reunión ese mismo día en la que se tomaron decisiones de gran calado y a la que también asistió su hermano mayor Hernand Behn. El Marqués de Urquijo, “haciéndose interprete del sentir unánime del Consejo, en sinceras palabras de afecto y cordialidad se congratula de la presencia de los Srs. Behn en esta reunión y ratifica una vez más a los referidos Sres., la satisfacción y admiración de todos los reunidos, por la labor realizada hasta hoy por dichos Sres. Behn a los que se considera como el factor más principal y esencial de esta organización”. Como se puede apreciar, el Presidente de la CTNE no escatimó en alabanzas hacia las personas de Sosthenes y Hernand Behn a los que llegó a referirse como las piezas fundamentales de la compañía.

A pesar de la trascendencia de los asuntos tratados en esta reunión, es importante apuntar que la mayoría de las decisiones ya habían sido aprobadas por el Comité Ejecutivo momentos antes, en tanto en cuanto éste tenía plenas facultades para actuar en nombre del Consejo de Administración. Esta sesión sirvió entonces para confirmar algunas resoluciones que en verdad ya habían sido tomadas: la adopción del modelo de contabilidad telefónica de la ITT, la puesta en circulación del paquete de acciones por valor de 25 millones de pesetas del capital social de la

⁴²⁵ Acta nº 7, 26 de noviembre de 1924, libro 1, pp. 17-21.

empresa en forma de 50.000 acciones preferentes, la adquisición de las propiedades telefónicas del grupo Peninsular, etc.

No obstante, también se decidieron algunas otras cuestiones de relevancia, sobre todo referidos a nombramientos y renunciaciones en los puestos del Consejo y del Comité. En primer lugar, Behn propuso que el Consejo de Administración de la compañía se ampliara a quince miembros y que los tres nuevos sillones fueran ocupados por el Marqués de Comillas, José María Boada y Javier Martí-Codolar. Estas tres personas fueron nombrados consejeros de la CTNE por unanimidad “y con especial satisfacción de todos los presentes”. Además, Sosthenes Behn informó de que tanto el Marqués de Urquijo como el Marqués de Comillas habían sido nombrados miembros del Consejo de Administración de la multinacional que presidía, de lo cual se felicitaba.

Claudio López Bru (1853-1925), II Marqués de Comillas, era hijo de Antonio López y López (1817-1883), un empresario y banquero español de gran importancia durante todo el siglo XIX. El I Marqués de Comillas fue fundador, entre otras, de la Compañía Transatlántica Española y de los Ferrocarriles del Norte y presidió el Banco de Crédito Mercantil y fundó el Banco Hispano Colonial. Su cuarto hijo Claudio heredó el marquesado, el control de las empresas y una enorme fortuna. El II Marqués de Comillas también se convirtió en un importante empresario nacional, fundando varias empresas y entrando en el Consejo de Administración de otras muchas. También fue famoso por su religiosidad y por sus obras sociales como benefactor que le valieron el apodo de “el limosnero mayor de España”. Con su nuevo cargo como consejero de la Compañía Telefónica Nacional participaba también del negocio de las telecomunicaciones y a la vez la empresa ganaba un importante elemento empresarial y financiero nacional.

Por su parte, José María Boada y Javier Martí-Codolar, habían sido socios de Enrique Parellada en la Compañía Peninsular de Teléfonos desde sus comienzos y ahora que ésta iba a ser absorbida por la CTNE, entraban como directivos también de la nueva empresa que controlaba la telefonía nacional. Se recompensaba así su colaboración en el proceso de compra de la Peninsular y de sus filiales y de todas sus propiedades telefónicas. Javier Martí-Codolar había sido nombrado asimismo Director General de la Telefónica, cargo que, como ya hemos explicado, estaba vacío de significado y no otorgaba ningún tipo de autoridad real.

En esta reunión que el Consejo de Administración celebró el día 26 de noviembre de 1924, Sosthenes Behn daba la noticia de que renunciaba a su puesto en el Comité Ejecutivo “pues considera natural que por las funciones asignadas al referido Comité para su actuación, debe estar integrado por personas que puedan prestar al mismo la más asidua y continua colaboración, lo que para él no resulta factible por la necesidad de residir muy largas temporadas fuera de España.” El Consejo lamentó esta decisión e insistió reiteradamente para que desistiera de su renuncia, ya que le consideraban como el “alma de toda esta organización”. Ante la irrevocable determinación del Coronel, el Consejo se rindió a la realidad y aceptó la dimisión presentada, si bien hacían constar “que aunque no ocupe su puesto dentro del Comité, se le considerará siempre presente como principal elemento e inspirador de toda la actuación de la Compañía”. No obstante, a ojos de Sosthenes Behn, poco importaba ya formar parte del Comité o no, teniendo en cuenta que ya se le habían conferido muchos de los poderes que estatutariamente correspondía al Consejo de Administración de la empresa y podía tomar importantes decisiones en nombre de éste sin necesidad de contar con su aprobación. No cabe duda de que ésta fue una maniobra totalmente urdida por el mismo Behn, de tal forma que primero conseguía un enorme poder de manos del Comité (en el que por supuesto no estaban los Delegados oficiales del Gobierno) y luego comunicaba al Consejo su renuncia a su puesto como miembro del primero. Ya no necesitaba si quiera formar parte del órgano de gobierno de la empresa para mantener un gran control de la misma.

Después de haber renunciado a su puesto en el Comité, Sosthenes Behn propuso a tres consejeros para ocupar las sillas que estaban vacías en el mismo, hasta llegar al número de siete: el Marqués de Urquijo, Presidente de la compañía, el Marqués de Perijáa, Tesorero, y Javier Martí-Codolar, Director general. El Consejo aprobó esta designación.

A continuación y en otro orden de cosas totalmente distinto, el Marqués de Perijáa propuso, y el Consejo aprobó, el reparto de un dividendo a cuenta a las acciones preferentes de la compañía. Este dividendo sería de 2,175 pesetas para las participaciones procedentes del canje (por las acciones de la Peninsular y General de Teléfonos) y de 4,073 pesetas para las suscritas.

El párrafo en el que se confirmaba que Behn pasaba a tener todas las atribuciones para decidir sobre adquisición de materiales y equipos era igual de confuso que el equivalente en el acta del Comité Ejecutivo. Sea como fuera, el Coronel tenía ahora libertad absoluta para “formalizar tanto en España como en el extranjero

cuantos actos, pactos, documentos o contratos considere necesarios”. Teniendo en cuenta que este texto iba introducido por un pomposo alegato en defensa de la producción nacional y el desarrollo industrial del país, no se entiende la inclusión de las palabras “como en el extranjero” en el enunciado de los poderes que se otorgaban a Sosthenes Behn.

El Consejo fue informado por el Coronel de las negociaciones establecidas para la adquisición de las concesiones y propiedades telefónicas de la Mancomunidad de Cataluña. En este sentido, indicaba, se crearía una comisión integrada por dos delegados técnicos de la compañía y otros dos de la Mancomunidad para valorar las redes de la corporación catalana y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es decir, se estaba intentando imitar el modelo que se había seguido para el examen y tasación de las propiedades telefónicas del Estado y que tan buenos resultados les había aportado. Behn confiaba en “una satisfactoria solución en este asunto”. No obstante, como veremos, las negociaciones con la Mancomunidad no resultaron tan fructíferas como las realizadas con el Gobierno central.

Asimismo proponía que se iniciaran gestiones con la diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de San Sebastián. En estos dos casos, también sabemos, por los hechos posteriores, que las gestiones de las que hablaba Behn tampoco llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La red provincial de Guipúzcoa todavía tardaría seis años en incorporarse a la Telefónica y el centro urbano de San Sebastián no lo haría hasta la década de los 70.

El Coronel había fijado también su atención en las islas Canarias y se refirió a los proyectos que la compañía pretendía realizar en esa región para la reorganización del servicio telefónico⁴²⁶. Allí se trasladaría “muy en breve un funcionario de la Compañía para estudiar de acuerdo con los intereses del país las necesidades telefónicas de aquel grupo isleño”.

Por último, el Coronel cerraba la sesión, de la que había sido el auténtico director, con una explicación de cómo la ITT y el resto de sus filiales dedicaban gran atención a la publicidad de la compañía, consagrando un presupuesto elevado para

⁴²⁶ El primer cable telefónico submarino entre las islas de Tenerife y Gran Canaria no se tendió hasta 1929, al mismo tiempo que el segundo cable entre Algeciras y Ceuta. La comunicación radiotelefónica entre Madrid y Canarias se puso en servicio en 1930. El PENCAN 1, el primer cable telefónico submarino entre la península y el archipiélago se tendió en agosto de 1965.

estos fines. Por ello, proponía que se siguiera el ejemplo del resto de empresas del “International System”, que invertían un 2% de sus ingresos brutos en publicidad.

La multa al ayuntamiento de San Sebastián

El Cuerpo de Telégrafos siempre fue contrario a cualquier forma de explotación telefónica que no fuera la que ellos defendían: la incautación de todas las redes y líneas en manos de concesionarios y su reversión al Estado. Según su opinión, los telegrafistas, o en su lugar una corporación estatal creada para tales fines, deberían tener el control de toda la telefonía española. En este sentido se oponían tanto a las concesiones a empresas privadas como a otras administraciones públicas de ámbito local o regional.

Cuando en 1923 el ayuntamiento de San Sebastián solicitó que su concesión del centro telefónico urbano fuera prorrogada a perpetuidad, el Cuerpo de Telégrafos inició una campaña de descredito hacia el consistorio de la capital guipuzcoana, con el fin de que esa instancia al Gobierno fuera denegada. Como sabemos, no lo consiguieron ya que San Sebastián consiguió que se publicara la Real Orden por la que se concedía al ayuntamiento la explotación del servicio telefónico urbano sin fecha de reversión. A pesar de ello, los telegrafistas habían emitido varios informes en contra en los que se acusaba al consistorio de incumplimiento del contrato firmado con el Estado. El Cuerpo de Telégrafos era, además del propietario final de todas las líneas y redes telefónicas españolas, el organismo encargado de realizar las inspecciones y de la incautación de cualquier sistema telefónico si se consideraba que el convenio se estaba incumpliendo de manera sistemática. De ahí que tuvieran el poder para instruir un expediente en el que se obligaba al ayuntamiento a atender todas las peticiones de abono pendientes en un plazo de dos meses.

Por supuesto, el consistorio presentó todas las alegaciones pertinentes en su defensa. Una de sus alegaciones para evitar una multa o incluso la incautación de toda la red fue que “cuando se hizo cargo de la red en 1908 había 390 abonados, siendo de 2.700 en el día de la fecha siendo la primera de España con un teléfono por 22 habitantes seguida de Bilbao con un teléfono por 8 habitantes”⁴²⁷.

⁴²⁷ Gutiérrez-1997, pp. 275-276.

A pesar de que la Real Orden ya había sido sancionada más de un año antes y que el Cuerpo de Telégrafos había enfocado sus esfuerzos hacia otros frentes, la Dirección General de Comunicaciones todavía tenía pendiente resolver esta denuncia. El día 26 de noviembre de 1924 le fue impuesta una multa de 250.000 pesetas al ayuntamiento de San Sebastián. Contra esta resolución interpusieron recurso de alzada alegando que era imposible cumplir con el expediente interpuesto en un plazo tan corto y para justificarlo, y ya de paso arremeter contra el Cuerpo de Telégrafos, añadían:

Buena prueba de la imposibilidad a que me refiero, la constituye lo que está sucediendo en Barcelona, donde se hizo cargo del servicio el Estado, hace más de dos años y aún están sin atender varios miles de peticiones.

Las negociaciones para la adquisición de la red de la Mancomunidad

El día 26 de noviembre de 1924 el Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Alfonso Sala, realizaba unas declaraciones a la prensa en las que manifestaba sus intenciones de viajar a Madrid en breve para tratar algunos asuntos de importancia para los intereses catalanes⁴²⁸. Entre estas cuestiones se mencionaba explícitamente “el de la incautación por la Compañía de Teléfonos y la indemnización que debe percibir la Mancomunidad y la aplicación del estatuto”.

Por las palabras de Sala parece que la Mancomunidad estaba dispuesta a negociar la incautación de sus propiedades telefónicas a cambio de una compensación económica adecuada. No en vano, la corporación catalana era otra concesionaria más de todas las existentes en territorio nacional y como tal tenía derecho a entablar conversaciones con la CTNE y tratar de llegar a un convenio que satisficiera a ambas partes. Estas declaraciones coincidían en el tiempo con la comunicación que hizo Sosthenes Behn al Consejo de Administración de la compañía sobre las gestiones establecidas “para la adquisición de las concesiones y propiedades telefónicas de la Mancomunidad de Cataluña”. Behn se refería a una comisión integrada por dos delegados de la CTNE y dos de la corporación que habrían de valorar las redes. No cabe duda, por lo tanto, de que Alfonso Sala viajaba a Madrid

⁴²⁸ La Vanguardia, 27 de noviembre de 1924, p. 8.

para reunirse con los directivos de la compañía, acordar la constitución de dicha comisión e iniciar de esta forma las negociaciones.

Sin embargo, estas gestiones a las que hacían referencia tanto Sosthenes Behn como Alfonso Sala no culminaron en un acuerdo satisfactorio, ya que la compra de la red catalana no se produjo hasta mucho después, cuando la Mancomunidad ya había sido disuelta y sus propiedades telefónicas habían pasado a manos de las cuatro diputaciones provinciales. Se desconoce siquiera si la comisión llegó a constituirse, aunque nuestra sospecha es que no, ya que en ninguna otra reunión ni del Consejo de Administración ni del Comité Ejecutivo se vuelve a mencionar esta cuestión. Creemos que, de haber sido formada, se habría dado cuenta en las actas de las sesiones posteriores, teniendo en cuenta que se trataba de un asunto de gran importancia y que la red de la Mancomunidad era, por aquel entonces, la única gran concesión que no estaba todavía en manos de la compañía.

Hay que destacar, no obstante, el cambio de parecer del Presidente con respecto a la situación previa a la adjudicación del servicio telefónico nacional a la CTNE, ya que en junio rechazó totalmente la oferta que le hizo la empresa y contestó con un rotundo “no ha lugar a discutir sobre este particular”. Las circunstancias habían cambiado: ahora la Telefónica había firmado un contrato con el Estado y tenía libertad absoluta para negociar y comprar las propiedades telefónicas de otros concesionarios sin mediación alguna por parte del Gobierno.

3.98. Viernes, 28 de noviembre de 1924

Los Marqueses de Urquijo y Comillas en el Consejo de la ITT

Claudio López Bru, II Marqués de Comillas, fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España en la reunión celebrada por dicho Consejo el día 26 de noviembre de 1924. Como ya hemos visto, Sosthenes Behn también dio la noticia de que tanto él como el Marqués de Urquijo habían sido nombrados Consejeros de la ITT en Nueva York. Los periódicos nacionales se hicieron eco de esta noticia y pronto publicaron una noticia titulada “Dos

nombramientos acertados”⁴²⁹ en la que reproducían un cablegrama enviado el día 28 de noviembre desde la oficina principal de la multinacional en Nueva York:

El Consejo de Administración de la “International Telephone and Telegraph Corporation”, en junta general extraordinaria, especialmente convocada al efecto, ha acordado elevar hasta 17 el número de sus consejeros, con el fin de elegir a los marqueses de Comillas y de Urquijo. Los elementos del Consejo se hallan altamente satisfechos ante la aceptación de estos cargos por dichos señores y se congratulan de tener como asociados a tan distinguidos representantes españoles, que al mismo tiempo pertenecen a la junta directiva de la Compañía Telefónica Nacional de España, aumentando así las íntimas relaciones que existen entre las Compañías española y americana, en el mutuo propósito y esfuerzo, de proveer a España de un completo y eficiente sistema telefónico, en beneficio de la nación. Enviamos a ustedes nuestros más cordiales saludos.

Por orden de la Junta directiva, H. B. Orden. Vicepresidente

Todos los periódicos añadían un párrafo en el que aseguraban que estos nombramientos evidenciaban la alta consideración y estima que los empresarios estadounidenses tenían por los ilustres financieros españoles, insistiendo en el orgullo que todo esto suponía para nuestro país. Esperaban así mismo que estos lazos económicos entre ambos países se estrecharan cada vez más, “por creer que ello ha de contribuir poderosamente al mayor engrandecimiento de nuestra patria y su desarrollo industrial y financiero”.

3.99. Domingo, 30 de noviembre de 1924

El nuevo sistema de tarifas para pequeñas poblaciones es aprobado

Proctor estaba decidido a modificar completamente el sistema tarifario de la telefonía española y poco después de iniciar el proceso de unificación de cuotas en el servicio interurbano, propuso también que se realizaran cambios en las tarifas de los centros telefónicos urbanos pequeños. La primera intención de Proctor era, como en el caso de las conferencias interurbanas, homogeneizar los precios aplicados en las

⁴²⁹ ABC, 30 de noviembre de 1924, p. 17; La Vanguardia, 2 de diciembre de 1924, p. 11; Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925, p. 9.

redes urbanas recibidas del Estado y en las rescatadas de los diferentes concesionarios. Se abandonó el antiguo sistema que clasificaba las redes urbanas en función del número de habitantes de la población, estableciendo en su lugar otro basado en el número de abonados, determinación que, en principio, parecía mucho más justa.

Estas ideas sobre modificación de tarifas fueron manifestadas al Comité Ejecutivo en la reunión del día 5 de noviembre, aunque el proyecto definitivo se presentó una semana más tarde. Los miembros del Comité dieron por buena la propuesta de Lewis J. Proctor y, sin que el Consejo de Administración diera su aprobación, se entregó el nuevo plan a la Delegación oficial del Gobierno para que procediera al examen del mismo. Los Consejeros Delegados del Estado aprobaron el nuevo sistema presentado por la compañía, como habían hecho unos días antes con las modificaciones en el servicio interurbano, y éste quedó sancionado mediante Real Orden el día 30 de noviembre de 1924⁴³⁰. Las nuevas tarifas unificadas también quedaban reflejadas en dicha norma y afectaban a las poblaciones con menos de 100 abonados y a las que contaban con un número total de abonados entre 100 y 300.

Pérez Yuste explica que, “en términos absolutos, resulta difícil comparar el sistema de tarifas previo a la adjudicación del servicio telefónico nacional a la CTNE, con el sistema establecido posteriormente por ésta, aunque todo parece indicar que, en términos generales, se encarecieron notablemente los precios, sobre todo en localidades de pequeño y mediano tamaño”. A este respecto se mencionan los planteamientos que algunas localidades como Calatayud o Zaragoza hicieron a la Telefónica como protesta por la subida de las tarifas⁴³¹.

⁴³⁰ Real Decreto de la Subsecretaría de Gobernación, de 30 de noviembre de 1924. Gaceta de Madrid, 14 de diciembre de 1924, nº 349, p. 1229,

⁴³¹ Yuste-2004, pp. 256. Para profundizar en los sistemas tarifarios de centros telefónicos urbanos que existían en España antes de la llegada de la CTNE, las modificaciones introducidas por ésta y los conflictos que surgieron poco después, se puede consultar Yuste-2004, pp. 250-260.

3.100. Lunes, 1 de diciembre de 1924

Primera conferencia telefónica entre la península y las plazas africanas

A pesar de que el contrato con el Estado no le obligaba a ello, la Compañía Telefónica Nacional de España se comprometió a unir telefónicamente Madrid con el protectorado español en Marruecos antes de que terminara el año. Las gestiones para el tendido del primer cable telefónico submarino todavía se estaban llevando a cabo y aunque se estaban intentando agilizar todos estos trámites, tal y como atestiguan las actas del Comité Ejecutivo de aquellos meses, todavía quedaban unos días para que el proyecto se convirtiera en realidad. La línea telefónica entre Madrid y Algeciras también se estaba reformando convenientemente. Para cumplir con su promesa y para provocar un golpe de efecto en la opinión pública y en la del Gobierno, la CTNE decidió realizar una primera conferencia de voz utilizando un cable telegráfico a modo de inauguración simbólica el día 1 de diciembre de 1924.

Esto fue posible gracias a la utilización de un hilo telegráfico del Gobierno entre Ceuta y Algeciras⁴³², que fue cedido por el Estado de manera temporal para llevar a cabo este acto. La inauguración no tenía continuidad real, ya que este cable volvería a ser utilizado para los despachos telegráficos en cuanto el acto terminara. No obstante, estaba cargada de significado puesto que se trataba de la primera conferencia telefónica entre la península y las plazas españolas en África, algo largamente ansiado por el general Primo de Rivera. Por supuesto, el Jefe del Gobierno no faltó a la ceremonia y fue uno de los dos conferenciantes; al otro lado, el rey Alfonso XIII. El marqués de Estella se encontraba en la Alta Comisaría del Ejército, en Tetuán, mientras que el monarca conversaba desde la Presidencia del Directorio Militar en Madrid.

No cabe duda que esta inauguración simulada formaba parte de un plan propagandístico de la CTNE, que lograba el efecto perseguido: demostrar la capacidad técnica de la nueva empresa adjudicataria del servicio telefónico español, que en sólo tres meses desde la firma del contrato con el Estado había conseguido realizar una de las empresas con mayor sensibilidad para la clase política española. No en vano, la rápida conexión telefónica entre Madrid y África fue uno de los aspectos en los que

⁴³² Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1924, pp. 4-5.

incidió la compañía a la hora de presentar su proyecto al Gobierno de la Dictadura, algo que sin duda impresionaría muy favorablemente a Primo de Rivera.

Ese mismo día, el ingeniero de la compañía desplazado en Tetuán, Luis Alcaraz, mandaba el siguiente telefonema dirigido a la Dirección de la CTNE:

Me complazco en trasladarle los plácemes y felicitaciones que el general Primo de Rivera me ha dirigido, como representante de la Compañía, después de las conferencias con su Majestad el Rey y de la comunicación establecida entre España y África.

Asimismo, debo hacerle presente el encargo expreso del general que me hizo en la comida a que tuve el honor de ser invitado, de que manifestaba su reconocimiento a todo el personal que ha trabajado en el establecimiento rápido y eficaz de este medio de comunicación, que tanto ha de facilitarle su intenso trabajo en Madrid.

Hizo votos porque toda España pueda disfrutar con tanta rapidez de los servicios que la Compañía ha de realizar, poniendo de manifiesto que el caso actual es la prueba más definitiva de lo acertado del contrato realizado con la Compañía.

Venta de las redes de Málaga y Córdoba

Málaga era otra de las seis capitales provinciales cuyos derechos de compra de su centro telefónico urbano habían sido transferidos de la ITT a la CTNE según contrato firmado entre las dos compañías el 29 de agosto de 1924. Las negociaciones para la adquisición definitiva de esta red se iniciaron rápidamente y en la reunión del Consejo de Administración del 27 de septiembre ya se informó de que se encontraban muy avanzadas. En la siguiente sesión del Comité Ejecutivo, celebrada el día 1 de octubre de 1924, Gumersindo Rico comunicó al resto de miembros que ya había sido firmada la escritura de venta, que fue finalmente otorgada el 1 de diciembre de 1924⁴³³.

⁴³³ Yuste-2004, p. 226.

El precio final pagado por la Telefónica a su anterior concesionario, Francisco Istúriz Ortiz⁴³⁴, fue de 110.000 pesetas. A principios de la década de 1920, Málaga contaba con 150.584 habitantes⁴³⁵ y unos 650 teléfonos⁴³⁶, lo que implicaba una tasa de penetración del 4,2 por mil, un dato muy bajo, aunque en consonancia con otras capitales andaluzas. La compra de este centro urbano le supuso a la CTNE un coste de unas 172 pesetas por abonado, un precio realmente bueno para la compañía, sobre todo si se compara con otras adquisiciones como la de la vecina Granada.

Este fue el caso también de Córdoba, cuyo concesionario era Antonio González Portocarrero⁴³⁷. Gumersindo Rico informó al Comité Ejecutivo en su reunión de 5 de noviembre que se había firmado la escritura de adquisición, que quedó otorgada el 12 de diciembre de 1924. El precio pagado por la Telefónica a González Portocarrero ascendió a 102.500 pesetas⁴³⁸. A principios de la década de 1920, Córdoba contaba con 73.710 habitantes⁴³⁹ y un número de teléfonos muy similar al de Málaga⁴⁴⁰, lo que arrojaba una tasa de penetración del 8,8 por mil, un dato bastante bueno si se tiene en cuenta la media andaluza. La compra de este centro urbano le supuso a la CTNE un coste de unas 160 pesetas por abonado, muy similar al pagado por Málaga, aunque parece que la red cordobesa contaba con una mayor popularidad entre la población de la ciudad, lo que debería haber incrementado su “valor comercial”.

La estancia de Sosthenes Behn en España

Sosthenes Behn viajó de nuevo a España a finales de noviembre de 1924, después de tres meses de ausencia en los que se sabe que estuvo, como mínimo, en París y Nueva York. Parece que los motivos de la visita, que realizó junto a su mujer y

⁴³⁴ Yuste-2004, p. 132.

⁴³⁵ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁴³⁶ Número de teléfonos existente a fecha 31 de diciembre de 1921. Dato extraído de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923

⁴³⁷ Acta nº 66 del Comité Ejecutivo, 18 de noviembre de 1925, libro 1, pp. 89-90.

⁴³⁸ Yuste-2004, p. 226.

⁴³⁹ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁴⁴⁰ Número de teléfonos existente a fecha 31 de diciembre de 1921. Dato extraído de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923.

a su hermano Hernand, fueron varios. En primer lugar, el Coronel querría comprobar *in situ* la marcha de sus negocios en nuestro país, ya que, aunque hubiera dejado al cargo a un hombre de su más absoluta confianza, una personalidad dinámica y celosa como la de Behn no quedaría conforme hasta que no pudiera participar activamente en los negocios.

Además, gracias a las actas de las reuniones celebradas por el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo en el día 26 de noviembre sabemos que Sosthenes Behn también viajó para impulsar una serie de medidas empresariales de gran importancia: el nombramiento de nuevos miembros en los dos órganos, la adopción del modelo de contabilidad telefónica de la ITT, la puesta en circulación de 25 millones de pesetas del capital social de la empresa, la adquisición de las propiedades telefónicas del grupo Peninsular, la designación de un porcentaje de los ingresos brutos de la compañía para publicidad, etc. Además dio órdenes de que la CTNE comenzara a estudiar un proyecto para la reorganización del servicio telefónico en las islas Canarias y consiguió que el Comité y el Consejo le otorgaran plena libertad para la compra de materiales y equipamientos, ya fuera en España o en el extranjero.

Por supuesto también aprovechó esta breve estancia en nuestro país para iniciar o continuar negociaciones con distintos concesionarios de redes telefónicas. En este sentido se sabe que trató con Alfonso Sala, Presidente de la Mancomunidad, con el ayuntamiento de San Sebastián y con la Diputación de Guipúzcoa. Además, no sería de extrañar que todos (o la mayoría de) los acuerdos sobre centros urbanos cuya escritura de adquisición fue firmada poco después fueran también obra de las dotes diplomáticas del Coronel. Así, por ejemplo, el Comité Ejecutivo daba cuenta algún tiempo más tarde de los contratos firmados con los concesionarios de Manzanares (Ciudad Real) o Alcira (Valencia)

Behn también pudo estar presente en el establecimiento de la primera comunicación telefónica entre Madrid y Tetuán, uno de los grandes logros de la Telefónica. A buen seguro, su presencia serviría para acelerar las negociaciones que habrían de culminar en aquel logro, así como en el tendido del cable telefónico submarino que se realizaría a finales de este mes de diciembre.

Pero el Coronel sólo pasó unos días en España, ya que volvió a salir de Madrid el día 1 de diciembre. Todo parece indicar que quiso estar presente en aquella primera llamada telefónica entre la península y las plazas africanas, ya que aquella misma

noche se despidió de sus colaboradores y cogió un tren con destino Barcelona. Antonio Pérez Yuste en su tesis doctoral explicaba⁴⁴¹:

Sosthenes Behn era un ciudadano del mundo; estaba siempre de paso, yendo y viniendo de uno a otro país, negociando con unos y con otros, disfrutando en banquetes o recepciones, seduciendo a reyes y gobernantes.

Esto fue precisamente lo que hizo durante su estancia en España; pero una vez todas las gestiones que había venido a acometer fueron completadas con éxito o fueron mandadas realizar, volvió a marchar, para prestar su atención a otros negocios.

Dos notas de sociedad aparecidas en sendos periódicos de la época⁴⁴² informaban de que el día 1 de diciembre de 1924 salía Sosthenes Behn y señora en el expreso nocturno de Barcelona, desde donde tomarían otro tren con destino París. Desde la capital francesa viajarían a Nueva York. Por su parte, Hernand Behn también partió con destino París el mismo día, pero en el expreso de Irún. Como nota curiosa, los diarios apuntaban que Hernand Behn viajaba “con su hermana señora Steen”. Desconocemos quién sería esta señora Steen, pero a buen seguro que no se trataba de su hermana porque Sosthenes y Behn sólo habían tenido un hermano, llamado Guillermo, que murió muy joven víctima del tétanos.

Varios directivos de la Telefónica, “el alto personal”, acudieron a las estaciones del Mediodía (actual Atocha) y del Norte (actual Príncipe Pío) para despedir a los viajeros. Los diarios mencionaban, entre todos ellos, a Lewis J. Proctor y a Javier Martí-Codolar.

3.101. Miércoles, 3 de diciembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁴³

En las anteriores reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración se aprobó proceder a la adquisición de las compañías Peninsular, Madrileña y General de Teléfonos en los términos en los que se expresaba un

⁴⁴¹ Yuste-2004, p. 55.

⁴⁴² La Voz, 2 de diciembre de 1924, p. 2; El Heraldo de Madrid, 2 de diciembre de 1924, p. 3.

⁴⁴³ Acta nº 14, 3 de diciembre de 1924, libro 1, pp. 17-19.

convenio presentado por los abogados de la CTNE. Para llevar a efecto todas las gestiones relacionadas con estas adquisiciones, el Comité delegó todas sus facultades en el Vicepresidente Lewis J. Proctor con el fin de que ejecutara cuantos actos y contratos fueran necesarios. Asimismo se autorizaba a dicho consejero para que representara a la Compañía Telefónica Nacional en las Juntas Generales de accionistas de aquellas empresas, ya que la CTNE era la poseedora de todas sus participaciones ordinarias y por lo tanto tenía el control absoluto de todas ellas. Proctor podía actuar sin limitación alguna en nombre y representación de la Telefónica en dichas Juntas, con el fin de proceder cuanto antes a la incorporación de todas las propiedades y activos de las compañías.

Según aparece reflejado en el acta de aquella reunión, algunos proveedores de material habían manifestado sus quejas con respecto a una supuesta intervención de Valentín Ruiz Senén a favor de alguno de ellos y en contra de otros. Ruiz Senén expresó su contrariedad y extrañeza ante estos comentarios e hizo constar en acta que él no había tenido la menor preferencia a la hora de adquirir materiales, “entendiendo que los Consejeros deben abstenerse de toda inclinación de esa naturaleza, dejando actuar libremente al Departamento u organismo encargado”. Julián Cifuentes indicó que, después de respetar la producción nacional, debía prevalecer el criterio de calidad.

En lo que respecta a la adquisición de centros telefónicos urbanos, el acta habla de cierto pacto establecido entre Sosthenes Behn y un tal señor Fierro, aunque no se especificaban más detalles. El Comité acordó entregar la suma de 100.000 pesetas por la compra de la red municipal de cuya concesión gozaba el señor Fierro. Las investigaciones realizadas no nos han permitido conocer de qué municipio se trataba, si bien tuvo que ser alguno de cierta importancia a juzgar por el precio pagado, similar al entregado por Córdoba o Málaga.

El Comité también estudió los planos del proyecto de canalización subterránea de los cables telefónicos en el barrio de Salamanca de Madrid y acordó que fueran presentados a la Delegación oficial del Gobierno en el Consejo de Administración para su aprobación.

Por último, a propuesta de Valentín Ruiz Senén, el Comité expresa “su especial satisfacción por el éxito logrado con motivo del establecimiento del servicio telefónico con África e igualmente hace constar un voto de gracias para todos los funcionarios de

la Compañía que han intervenido de manera tan eficaz y laboriosa en esta instalación y a los que pertenece buena parte del éxito alcanzado”.

3.102. Jueves, 4 de diciembre de 1924

Real Orden agradeciendo la comunicación telefónica con África

En el artículo que la Revista Telefónica Española dedicó a la “inauguración” de la comunicación entre Madrid y Tetuán también se indicaba que la Dirección de la compañía había recibido, días después, una Real Orden expresando el agradecimiento por el éxito obtenido⁴⁴⁴. La revista se mostraba orgullosa e indicaba que no hacía falta añadir comentarios, puesto que la disposición regia ya hablaba por sí misma:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

En vista del favorable éxito obtenido al inaugurar Su Majestad el día 1 de los corrientes, la línea que une telefónicamente esta Presidencia del Gobierno con la Alta Comisaría de Marruecos en Tetuán; el Rey, que Dios guarde, a propuesta del Directorio militar, ha dispuesto se manifieste a usted su expresivo agradecimiento, así como al personal de esa Compañía que ha intervenido y llevado a efecto tan acertada instalación.

De Real orden lo digo a usted para su conocimiento y satisfacción.

Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 4 de diciembre de 1924.

El Marqués de Magaz

Señor Director de la Compañía Telefónica Nacional de España

Se trata, sin duda, de una distinción enorme puesto que en muy pocas ocasiones se expresaba, por Real Orden, el agradecimiento a una entidad por alguna labor que se hubiera realizado. No obstante, esta disposición no ha podido ser localizada en la Gaceta de Madrid, por lo que se desconoce si finalmente fue firmada por el rey Alfonso XIII o si quedaría sin sancionar y por lo tanto sin promulgarse oficialmente. No se desconfía de la veracidad de esta información aportada por la

⁴⁴⁴ Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925, p. 5.

Revista Telefónica Española, ya que posiblemente el general Primo de Rivera se mostraría tan agradecido por esta conexión telefónica que no dudaría en indicar al marqués de Magaz que elevara dicho reconocimiento a la mayor consideración posible. De ahí que el Presidente del Directorio en funciones redactara la Real Orden para su posterior firma por parte del monarca, aunque se desconoce si dicha sanción regia fue finalmente otorgada.

Durante los seis años que duró la dictadura de Primo de Rivera se promulgaron muy pocas reales órdenes con un agradecimiento expreso a alguna entidad. En el transcurso de las investigaciones realizadas para este Trabajo Fin de Máster sólo han podido ser localizadas seis disposiciones similares, si bien todas correspondían a agradecimientos concedidos a comisiones gubernamentales nombradas para algún fin, como la elaboración de alguna ley o la colaboración con algún ministerio o consejo oficial. La publicación de agradecimientos por donaciones particulares o colectivas para alguna causa benéfica era más habitual. No se ha encontrado ninguna Real Orden, ni siquiera ésta a la que la Revista Telefónica Española hacía referencia, en la que se agradeciera a una compañía el cumplimiento de su contrato con el Estado o cualquier otro éxito conseguido. Deducimos por tanto que aunque la disposición fuera redactada, finalmente no fue sancionada por el rey, por considerarse quizá una medida que ensalzaba el acontecimiento en demasía.

3.103. Viernes, 5 de diciembre de 1924

La fundación de la ITT Co. (España)

Por si la intensa labor que realizó Sosthenes Behn en su breve paso por España no hubiera sido suficiente, también se encargó de llevar a cabo las gestiones para la fundación de la “International Telephone and Telegraph Corporation (España)”, que finalmente fue creada el día 5 de diciembre de 1924⁴⁴⁵. La ITT Co. (España) se trataba de otra filial de la multinacional, con sede social en Madrid, cuyo fin era aportar apoyo técnico y financiero a la Compañía Telefónica Nacional. Este respaldo a la empresa española le venía impuesto por los contratos firmados entre ambas compañías el día 29 de agosto de 1924, en los que se comprometía a ayudar a la

⁴⁴⁵ Sobel-2000, p. 41.

CTNE en el desenvolvimiento de sus negocios a cambio de unas suculentas comisiones, tal y como ya hemos visto en apartados anteriores.

3.104. Jueves, 11 de diciembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁴⁶

Gumersindo Rico dio cuenta de haber firmado la escritura de adquisición del centro telefónico urbano de Granada, que por otra parte ya había sido incorporado a la compañía el 1 de noviembre de 1924. El precio de adquisición fue de 300.000 pesetas, aunque también se tuvieron que entregar separadamente otras 10.500 pesetas “como importe del material telefónico nuevo que no había entrado en la contratación de la red”.

Finalmente, el otorgamiento de la escritura de venta de la red de Granada tuvo fecha de 7 de enero de 1925⁴⁴⁷. La ciudad de la Alhambra formaba parte del grupo de seis capitales cuyos derechos de compra habían sido transferidos de la ITT a la CTNE cuando el 29 de agosto se firmaron los contratos entre estas dos empresas. Su anterior concesionario, Diego Godoy Rico⁴⁴⁸, había logrado llegar a un acuerdo con la Telefónica realmente ventajoso, ya que la compra de este centro urbano le supuso a la CTNE un coste de casi 900 pesetas por abonado. A principios de la década de 1920, Granada contaba con 103.368 habitantes⁴⁴⁹, aunque el número de teléfonos rondaba la ridícula cifra de 350⁴⁵⁰, lo que implicaba una tasa de penetración del 3,4 por mil, un dato realmente vergonzoso para una ciudad de su significancia, lo que hace aún más llamativo el precio pagado por la Telefónica por esta red urbana.

En esta reunión del Comité Ejecutivo no se trataron muchos más temas de importancia, si bien Proctor anticipó, en líneas generales, las bases de un proyecto sobre asistencia social y benéfica para el personal de la compañía, que habría de ser presentado definitivamente más adelante.

⁴⁴⁶ Acta nº 15, 11 de diciembre de 1924, libro 1, pp. 19-20.

⁴⁴⁷ Yuste-2004, p. 226.

⁴⁴⁸ Yuste-2004, pp. 132-133.

⁴⁴⁹ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁴⁵⁰ Número de teléfonos existente a fecha 31 de diciembre de 1921. Dato extraído de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923.

3.105. Viernes, 12 de diciembre de 1924

El cable submarino entre Algeciras y Ceuta

La CTNE estaba decidida a colocar el primer cable submarino entre la península y África antes de que terminara el año 1924. Ya hemos visto como el día 1 de diciembre se realizó una primera conferencia telefónica entre Madrid y Tetuán, que permitió hablar al rey Alfonso XIII con el general Primo de Rivera. No obstante, aquel acto no se trató de una inauguración real, por mucho que la Revista Telefónica Española se empeñara en nombrarlo así, en tanto en cuanto se utilizó un cable telegráfico propiedad del Estado de manera provisional. Las actas del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de la empresa dan buena cuenta de las gestiones que se venían realizando para la instalación del verdadero cable submarino, a las que se le estaba imprimiendo una rapidez especial. Lewis J. Proctor se encargaba de todas estas gestiones personalmente: la compra del cable en Inglaterra, el transporte de éste hasta España, la construcción de una línea telefónica moderna en Andalucía que conectara con el tendido submarino, etc.

La Revista Telefónica Española dedicó seis páginas de su segundo número a relatar la gesta del cable telefónico y de cómo fue tirado e instalado entre Algeciras y Ceuta con extraordinaria rapidez⁴⁵¹. Comenzaba dicho artículo con unas divagaciones un tanto fantasiosas sobre el estrecho de Gibraltar, su significado como nexo de unión pero también como separación entre Europa y África y sobre el barco cablero, el “Amber” que habría de tirar el cable.

A continuación se explicaba que el día 12 de diciembre salía el cable de Inglaterra a Gibraltar en un barco mercante llamado “The Grand”. Allí fue depositado en unos tanques contruidos a tal efecto, donde el cable se mantenía siempre húmedo, a la espera de que llegara el “Amber”, que en aquellos momentos se encontraba tendiendo un cable en la costa de Portugal. El hecho de que España no contara con un barco cablero era, sin duda, un gran inconveniente para el desarrollo de nuestras comunicaciones telegráficas y telefónicas, ya que dependíamos de la disponibilidad de las embarcaciones de otros países para cualquier instalación o reparación de avería en nuestros cables submarinos. Por aquel entonces, los cables

⁴⁵¹ Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, pp. 27-32.

telefónicos entre la península y los territorios insulares o coloniales eran inexistentes, pero se contaba ya con varios hilos telegráficos que unían la península con las islas Baleares, las islas Canarias y el norte de África. Todos ellos se encontraban en un estado lamentable, tal y como explicaban los periódicos y revistas especializadas de la época, hasta el punto que uno de los cables con Canarias era totalmente inútil y se dependía exclusivamente de la disponibilidad del otro, provocando que en no pocas ocasiones ese archipiélago se encontrara incomunicado, telegráficamente hablando.

El cable que se acaba de trasladar a los puertos de Gibraltar tenía una longitud de 18,025 nudos (33,4 kilómetros), de los cuales 2,75 correspondían al extremo de tierra en Algeciras, otros 2,75 nudos correspondían al extremo de tierra en Ceuta y los restantes constituían lo que se llamaba “cable de fondo”. El hilo contenía 250 libras de cobre y 200 libras de gutapercha por nudo (61,2 y 49 kilogramos por kilómetro, respectivamente), llevaba una cinta de latón enrollada en espiral sobre la gutapercha y además de esto una envoltura de yute, que es un tipo de cáñamo tratado con alquitrán. Como armadura llevaba alambres de hierro, también enrollados en espiral, para dar al cable resistencia mecánica y protegerlo contra el roce de rocas submarinas.

3.106. Lunes, 15 de diciembre de 1924

Propiedades de la Peninsular y de la Ericsson

En un artículo del primer número de la Revista Telefónica Española, editada por la propia CTNE, se hablaba de las propiedades telefónicas que la empresa iba adquiriendo de los distintos concesionarios anteriores⁴⁵². A este respecto, menciona el día 15 de diciembre de 1924 como fecha en la que todas las redes y líneas de la Compañía Peninsular de Teléfonos y sus filiales pasaron a manos de la Telefónica. Como veremos un poco más adelante, se sabe que el acuerdo de fusión de las dos empresas, por el que además se incorporaban los activos de la primera a la CTNE, tuvo carácter oficial desde el día 3 de enero de 1925.

Desconocemos, por lo tanto, a qué se refería exactamente la Revista Telefónica Española cuando hacía mención al día 15 de diciembre. Una hipótesis probable es que dicha fecha sea cuando las dos empresas llegaron al acuerdo

⁴⁵² Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925, pp. 16-19.

definitivo, que ya se venía fraguando desde mediados de noviembre y que el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración pudieron examinar en sus reuniones del día 26 de noviembre de 1924. Una vez aprobado por parte de los órganos de gobierno de la CTNE, es posible que se ultimaran las negociaciones y se alcanzara el acuerdo definitivo a mitad de diciembre. Quizá por motivo de liquidación de acciones, cierre de año fiscal o similares se decidiera hacerlo oficial desde el día 3 de enero de 1925. Por otro lado, la memoria social de la empresa del ejercicio 1925 nos aporta un dato muy revelador a este respecto y que nos indica que parece que el Gobierno tuvo algo que ver con este asunto⁴⁵³:

Todas estas estaciones [las de la Peninsular y sus filiales] formaban ya parte de nuestra red, si bien hasta enero de 1925, no fue aprobada por el Gobierno su cesión a la Compañía Telefónica Nacional de España.

El mismo artículo de la Revista Telefónica Española al que hacemos referencia también indicaba que el centro telefónico urbano de Valencia se adquiriría “pocos días después”. El concesionario de la red de la ciudad del Turia era la Compañía Española de Teléfonos Ericsson, que había comprado la licencia de explotación a su anterior concesionario a principios de 1924, con la intención de mostrar su fuerza a la hora de presentar su proyecto para la adjudicación del sistema telefónico español. La compañía que finalmente ganó el “concurso” fue la CTNE, por lo que la Ericsson no tuvo más remedio que retirarse del mercado español, por lo menos como constructor y explotador de líneas y redes telefónicas. La firma sueca tenía dos opciones: seguir controlando la red hasta el fin de la concesión, cuando haría entrega de todas sus propiedades al Estado que a su vez las traspasaría a la CTNE, o vender la red valenciana directamente a la Telefónica. Optó por la segunda.

Las negociaciones se llevaron a cabo directamente por Sosthenes Behn y por Fredrik Wincrantz, Director General de L.M. Ericsson, debido posiblemente a la sensibilidad que empezaba a adquirir el asunto de la rivalidad entre las dos compañías⁴⁵⁴. Se sabe que hubo, por lo menos, una reunión entre ambos, que se celebró en París en el mes de diciembre de 1924 y donde se firmó el contrato entre las dos partes, tal y como quedó registrado en el acta de la sesión celebrada por el

⁴⁵³ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1925, p. 5.

⁴⁵⁴ Yuste-2004, pp. 225-226.

Comité Ejecutivo el 14 de enero de 1925⁴⁵⁵. La escritura de transmisión fue registrada oficialmente en Madrid el 2 de junio de 1925⁴⁵⁶, aunque las propiedades de la Ericsson fueron incorporadas mucho antes, en cuanto fue firmado el contrato, en las últimas semanas de 1924, tal y como explicaba la Revista Telefónica Española en su primer número.

El precio que se pagó por la red telefónica de Valencia fue de 2 millones de pesetas. A principios de la década de 1920, Valencia tenía 251.258 habitantes⁴⁵⁷ y 3.828 teléfonos⁴⁵⁸, lo que arrojaba una tasa de penetración del 15,2 por mil, sólo un poco superior a la de Madrid y Barcelona, que no llegaban al 15 por mil. La compra de este centro urbano le supuso a la CTNE un coste de unas 525 pesetas por abonado, que se trataba de un precio bastante justo para la empresa Ericsson.

3.107. Martes, 16 de diciembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁵⁹

La única decisión importante que se tomó en esta reunión fue la de delegar en Gumersindo Rico la formalización de la escritura pública con la reforma de los estatutos sociales de la empresa que se había aprobado “por el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas en sus reuniones extraordinarias del 18 del pasado mes de Octubre”. Como ya explicamos en su momento, parece que aquella Junta de accionistas no existió de manera oficial, de tal forma que el Consejo “se ahorró” el trámite oficial de convocar a los accionistas. Por supuesto, la no aprobación de la modificación de los estatutos por una Junta General de accionistas va en contra de los propios estatutos, aunque es comprensible que no se pasara por el proceso burocrático, teniendo en cuenta que aquellos cambios se hicieron a favor del principal poseedor de acciones ordinarias de la Telefónica, la ITT.

⁴⁵⁵ Acta nº 20 del Comité Ejecutivo, 14 de enero de 1925, libro 1, p. 25.

⁴⁵⁶ Registro Mercantil de Madrid, Libro de Sociedades, tomo 158, hoja 5.083.

⁴⁵⁷ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁴⁵⁸ Número de teléfonos existente a fecha 31 de diciembre de 1921. Dato extraído de la carta enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923, a todas las “fuerzas vivas” de España.

⁴⁵⁹ Acta nº 16, 16 de diciembre de 1924, libro 1, p. 20.

Además, en esta fecha el Comité acordó autorizar a cuatro empleados de la compañía para poder firmar, en nombre del Secretario, los títulos de las 50.000 acciones preferentes (25 millones de pesetas) que se habían puesto en circulación según lo aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 26 de noviembre de 1924 y que habían quedado registradas oficialmente por escritura pública de emisión otorgada un día antes, el 15 de diciembre de 1924.

Concurso para la construcción de un edificio en la calle Hermosilla

El día 16 de diciembre de 1924 se publicaba en el diario ABC un anuncio de la Compañía Telefónica Nacional en el que convocaba el “Concurso para construir un edificio ampliando la central de Salamanca”, invitando “a los contratistas a participar en este trabajo que sacamos a concurso”⁴⁶⁰. La nota indicaba que la CTNE había adquirido un solar de 870 metros cuadrados en la esquina de calle Hermosilla con Núñez de Balboa, donde se pretendía levantar un edificio de dos pisos en el que instalar una central telefónica automática con capacidad para 18.000 líneas y que se pretendía construir “sin pérdida de tiempo”. Como sabemos, las negociaciones para la adquisición de este terreno habían sido llevadas por Lewis J. Proctor. El anuncio también especificaba que se recibirían ofertas hasta las 12 de la mañana del día 23 de diciembre de 1923 y la dirección a la que tenían que dirigirse.

3.108. Miércoles, 24 de diciembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁶¹

El Comité Ejecutivo era informado de que se había procedido a ingresar en las cuentas del Tesoro público el resto del importe de la valoración de las propiedades telefónicas del Estado. El coste total de la compra de las redes y líneas del Cuerpo de Telégrafos por parte de la CTNE ascendía a 17.464.293,37 pesetas, aunque en el día de la firma del contrato se había entregado ya una fianza de 5 millones de pesetas, tal y como se establecía en la base tercera de dicho convenio. Por lo tanto, restaba pagar 12.464.293,37 pesetas por todas las propiedades que se habían traspasado el día 1

⁴⁶⁰ ABC, 16 de diciembre de 1924, p. 23.

⁴⁶¹ Acta nº 17, 24 de diciembre de 1924, libro 1, pp. 20-22.

de noviembre de 1924. Quedaban de esta forma saldadas todas las cuentas entre el Gobierno y la compañía y ésta pasaba a ser la dueña de las redes que habían estado en manos del Cuerpo de Telégrafos y de todas las que habrían de revertir en el futuro como consecuencia del fin de las licencias otorgadas por el Estado a los distintos concesionarios.

El uso de las facultades y atribuciones que el Consejo de Administración había delegado en el Comité Ejecutivo, éste acordaba poner en circulación las últimas acciones que quedaban en cartera. Se trataban de 50.000 participaciones preferentes, que representaban 25 millones de pesetas, y 1.200 ordinarias, que representaban 600.000 pesetas. Con esta liberación de acciones quedaba totalmente suscrito y desembolsado el capital social de la compañía, que ascendía a 115 millones de pesetas. Todas estas participaciones se pusieron en circulación según escritura pública de emisión de 29 de diciembre de 1924⁴⁶². Como sabemos, las 1.200 participaciones ordinarias fueron suscritas, a partes iguales, por el Banco Hispano Americano y el Banco Urquijo. Los 25 millones de pesetas que se emitieron en acciones preferentes se destinaron a un plan de suscripción destinado a los empleados de la compañía y a sus familiares y amigos, que estudiaremos en apartados posteriores. Para llevar a cabo todas estas gestiones se delegó, con plenas atribuciones, en Gumersindo Rico.

En cuanto al canje de acciones preferentes de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de la Sociedad General de Teléfonos por acciones del mismo tipo de la CTNE, se aprobó que el plazo para realizar este cambio se ampliara hasta el día 31 de diciembre de 1924 y que se publicara un anuncio en prensa para informar sobre esta operación.

Proctor dio lectura a un telefonema enviado por Sosthenes Behn en el que “proponía” al Comité solicitar una opción de compra sobre el inmueble del hotel Colón en la Plaza de Cataluña de Barcelona, con el fin de que se convirtiera en sede de la compañía en la ciudad condal. De esta forma se pretendía que la CTNE también contara en Barcelona con un edificio excelentemente localizado que mostrara la pujanza y el dinamismo de la nueva Compañía Telefónica Nacional. El Comité aceptó por unanimidad la proposición del Coronel y ratificó “una vez más su absoluta confianza en el Sr. Behn para llevar a efecto cuantas gestiones estime convenientes”.

⁴⁶² Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1924, p. 6.

Por último, el acta hace referencia a cierto acto patriótico celebrado en el teatro Centro y a la “lamentable actitud observada por la Sociedad Radio España con motivo de los discursos pronunciados” durante el evento. A propuesta de Valentín Ruiz Senén, el Comité acordó dirigir a Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde de Valledano, alcalde de Madrid y presidente de dicho acto, una carta oficial de adhesión a la Corona, “ya que en el espíritu de esta Compañía no cabe ni siquiera la frialdad de su actuación y colaboración cuando se trata de afirmación monárquica y patriótica”. El posicionamiento político de la CTNE fue otro motivo de polémicas durante muchos años, puesto que la compañía no tuvo reparos en inclinarse hacia uno u otro lado en función de los intereses económicos propios, algo que por otra parte es una postura empresarial habitual en muchas sociedades privadas que buscan satisfacer sus intereses económicos. Fue especialmente discutida la “división” de la empresa en dos cuando estalló la Guerra Civil, materializándose incluso en la existencia de dos Consejos de Administración que operaban en los dos frentes, atendiendo por igual a los intereses del bando republicano y del bando nacional, a la espera de que la balanza de la guerra se inclinara hacia un vencedor.

3.109. Jueves, 25 de diciembre de 1924

El “Amber” llega a Gibraltar

El día de Navidad llegó a Gibraltar el barco cablero Amber que habría de tirar el hilo telefónico entre Algeciras y Ceuta. Éste ya había llegado en otra embarcación casi dos semanas antes y había quedado guardado en unos almacenes de la colonia británica. El día 27 de diciembre fue trasladado el cable hasta el tanque del barco, para que pudiera comenzar su instalación en la jornada siguiente. Aquel día también llegaron a Algeciras el Ingeniero Jefe de la CTNE, Roy A. Walker, y el Subingeniero Jefe, Luis Alcaraz Otaola, para verificar el correcto tendido del cable y dirigir las obras⁴⁶³. Alcaraz había sido también el ingeniero designado por la compañía para supervisar aquella primera conferencia telefónica entre Madrid y Tetuán que tuvo lugar el día 1 de diciembre de 1924.

⁴⁶³ Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, p. 29.

3.110. Domingo, 28 de diciembre de 1924

Comienza la instalación del cable submarino

El proceso de instalación del cable submarino entre Algeciras y Ceuta dio comienzo en la jornada del 28 de diciembre de 1924 y se realizó en un tiempo record, en menos de dos días⁴⁶⁴. En aquella mañana de domingo, el barco echó anclas fuera de Algeciras y se llevó a tierra el extremo norte del cable, que quedó instalado a mediodía en una caseta de amarre que miraba al mar. En esta edificación era donde quedarían unidas días más tarde las líneas terrestres con el conductor submarino. Para ayudar en la operación se utilizó una reata de mulas alquiladas en un cortijo cercano, “pero no sin que una de las mulas estuviese a punto de estropear el programa negándose absolutamente a quebrantar, por una hora, el precepto del descanso dominical en cualquier trabajo que fuese”.



Figura 9. Amarre del primer cable telefónico entre Algeciras y Ceuta, 1924. Fuente: Breve cronología de la telecomunicación española, Domingo Martín de la Vega.

⁴⁶⁴ Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, pp. 29-31.

Una vez el cabo había quedado amarrado a la caseta de Algeciras, el Amber salió hacia alta mar. Más allá de Gibraltar fue cortado el extremo del cable de costa, que se sujetó a una boya para marcar su situación y se tiró por la borda. A continuación se dirigió hacia Ceuta, luchando contra una tormenta. El cable llegó a las costas africanas cuando el sol ya se había puesto, por lo que se hizo necesario utilizar un reflector para iluminar la caseta de amarre ceutí mientras se colocaba allí el extremo sur. Según cuenta la revista, “las mulas marroquíes no demostraron tener escrúpulos religiosos, y con su valiosa ayuda quedó aterrizado rápidamente el cable”.

A primera hora de la mañana siguiente se completó el tendido del hilo telefónico entre los dos continentes. El barco se dirigió, soltando el cable sobre el lecho marino, hacia la boya donde había quedado atado el extremo español. Una vez allí se cortó el cable, se empalmaron los dos trozos sobre la cubierta del barco y todo quedó listo, a falta de las pruebas de continuidad oportunas.

3.111. Lunes, 29 de diciembre de 1924

Reunión del Consejo de Administración⁴⁶⁵

El Presidente del Consejo abrió la reunión dando la bienvenida a José María Boada y a Javier Martí-Codolar como nuevos consejeros, a los que dedicó palabras de “merecido elogio” que suscribieron por unanimidad el resto de miembros.

El Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda pidió explicaciones al Consejo por una reclamación que había suscrito un funcionario que se identificó como Delegado del Estado en Barcelona, pues entendía que no existía “más Delegación Oficial que la que él y los Sres. Nieto y Manella representan”. La duda quedó aclarada por el Marqués de Urquijo en el sentido de que efectivamente no había más Delegados del Estado que los tres allí presentes y que aquella reclamación la había realizado un Delegado de la Dirección General de Comunicaciones y afectaba al servicio telegráfico en Barcelona, sin tener nada que ver con asuntos de la compañía.

Lewis J. Proctor explicaba que aquella medianoche quedaría establecida la comunicación telefónica con Ceuta, por lo que estaban esperando que de un momento a otro llamara el ingeniero allí destinado para comprobar que el servicio funcionaba

⁴⁶⁵ Acta nº 8, 29 de diciembre de 1924, libro 1, pp. 21-23.

correctamente. Se invitaba, por lo tanto, al resto de consejeros a que permanecieran en el edificio, si lo deseaban, para “hablar con África”. Se explicaron además las tarifas que se iban a aplicar al servicio telefónico entre la península y el protectorado español en Marruecos y que serían expuestas a la aprobación de la Delegación oficial del Gobierno.

A este respecto, el Presidente propuso que no se abriera la comunicación telefónica con África mientras el servicio con Andalucía siguiera siendo tan deficiente como en aquellos momentos. Aunque el acta no indica que el Consejo aprobara o desaprobara sus palabras, sí parece que se tuvieron en cuenta, puesto que en la memoria social de la compañía para el año 1924 y que el Consejo de Administración entregaba a sus accionistas en la Junta General celebrada el 23 de marzo de 1925 se podía leer⁴⁶⁶:

No ha sido abierto todavía al público este servicio por no haberse terminado los nuevos circuitos de Madrid-Algeciras que estamos construyendo y que son necesarios para este nuevo servicio, toda vez que, los que actualmente unen a Madrid con el Sur de España, son deficientes y el congestionarlos con más servicio aumentaría las deficiencias de la comunicación con dicha parte meridional de España.

Para la reforma de esta nueva línea que habría de mejorar el servicio en Andalucía, la memoria de 1924 también indicaba que se habían instalado tres repetidores de señal: en Ciudad Real, en Córdoba y en Algeciras. Se introducía de esta forma otro de los avances tecnológicos en materia telefónica que eran desconocidos hasta entonces en España y que, dada la extensión del territorio nacional, eran absolutamente necesarios para la calidad de las comunicaciones.

Ahora que el servicio telefónico entre España y Marruecos se iba a convertir en una realidad, Proctor había iniciado conversaciones con el Director General de Comunicaciones, Tafur Funés, y con el general Gómez Jordana, uno de los vocales del Directorio Militar, para la instalación de líneas telefónicas de la CTNE en el territorio del protectorado español en Marruecos. Además, se acordó que el Marqués de Urquijo y Julián Cifuentes elevaran al Gobierno una petición oficial en nombre de la compañía para que le fuera entregada la explotación de todos los servicios telefónicos

⁴⁶⁶ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1924, p. 6.

en el Protectorado. Se indicaba ya, incluso, las tarifas que cobraría la Telefónica por la explotación del servicio en Marruecos: las que corresponderían en cada caso para España más un 25% “en especial consideración a la naturaleza de los servicios en aquella sección”.

Parece claro, por lo tanto, que los motivos de la CTNE/ITT a la hora de establecer rápidamente la comunicación con África no pasaban únicamente por su intención de dar un golpe de efecto ante el Gobierno y la opinión pública. También anhelaban hacerse con la concesión del sistema telefónico del protectorado español en Marruecos y para ello habían iniciado ya las conversaciones con el Directorio Militar y con la Dirección General, para la instalación de líneas en ese territorio y para conseguir la adjudicación. A pesar de los deseos de sus directivos, la Telefónica nunca se hizo con el control de la telefonía en territorio marroquí, sobre todo debido al clima de tensión, de belicismo y de continuos cambios políticos y fronterizos que caracterizaron a aquella zona hasta su independencia total en 1956.

Para cerrar la última reunión del año, el Consejo de Administración daba su conformidad con el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de poner en circulación las últimas 25.600.000 pesetas del capital social de la empresa que quedaban en cartera. Se emitían para ello 50.000 acciones preferentes y 1.200 acciones ordinarias. Se aprobaba igualmente que la Securities adquiriera en primer término la totalidad de dichas acciones ordinarias y preferentes.

3.112. Miércoles, 31 de diciembre de 1924

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁶⁷

La última reunión de 1924 tuvo muy pocos asuntos que tratar en su orden del día. La única decisión de relevancia fue una propuesta que hacía Sosthenes Behn a fin de que los nuevos títulos de acciones fueran firmados por las personas autorizadas, no valiendo únicamente con el sello de la compañía. El Comité estimó “muy gustas (sic) y atendibles las indicaciones del Sr. Behn” y acordó que todos los títulos fueran firmados a mano por el Secretario y por las personas autorizadas, que eran el Registrador General de Valores de la compañía y un empleado del Departamento Contencioso.

⁴⁶⁷ Acta nº 18, 31 de diciembre de 1924, libro 1, p. 22.

Inauguración del cable submarino entre Algeciras y Ceuta

Como hemos visto, el cable entre la península y sus posesiones africanas quedó tendido en un tiempo record el 29 de diciembre por la mañana. Los ingenieros de la compañía realizaron entonces las conexiones oportunas en las casetas de amarre de ambos extremos: en Algeciras quedó unido el cable con las líneas terrestres andaluzas y en Ceuta se conectó con la línea telefónica de Tetuán. Una vez hecho esto, se realizaron las pruebas de continuidad, que dieron resultados positivos. Ya hemos visto como en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 29 de diciembre por la tarde se esperaba que a medianoche llamara el ingeniero destinado en Marruecos para comprobar que la comunicación funcionaba correctamente.

La comunicación telefónica entre Madrid y Tetuán fue establecida oficialmente el día 31 de diciembre, unas horas antes de que terminara el año, cumpliendo así con el firme propósito de la CTNE de inaugurar el cable telefónico submarino en 1924. La compañía demostraba así, sólo unos meses después de lograr la concesión telefónica, su poderío y su capacidad técnica y económica para emprender grandes empresas como ésta. No obstante, el servicio telefónico entre la península y África estuvo limitado en un principio a las comunicaciones oficiales del Gobierno con el Alto Comisario de Tetuán, dado que las líneas interurbanas en la región andaluza no se encontraban en situación de cargarse con más tráfico.

Termina 1924

1924 llegaba a su fin y con él, el año más importante en la historia de la telefonía española.

Hacia doce meses, el panorama nacional en materia telefónica no era nada esperanzador: el nuevo Directorio Militar estaba demostrando una inconsistencia legislativa igual, o incluso peor, que los gobiernos de la Restauración; el estado general de las líneas y redes era lamentable, consecuencia inmediata de que el horizonte de la caducidad de las licencias se encontrara cada vez más cercano; y el Cuerpo de Telégrafos veía impotente como las arcas del Estado no contaban con la capacidad económica suficiente como para emprender un verdadero proceso de reforma y modernización. Por supuesto, la automatización de las redes y otros

avances tecnológicos suponían inversiones que muy pocos estaban dispuestos a asumir.

Al finalizar el año, la telefonía española se encontraba, casi de manera íntegra, en manos de una empresa que tenía el firme propósito de establecer “un amplio y homogéneo sistema telefónico urbano e interurbano” gracias a su proyecto de reforma de la red nacional. La CTNE se había hecho ya con las propiedades telefónicas del Estado, las de la Peninsular y las de otros muchos concesionarios a lo largo y ancho de la geografía española, iniciando un proceso de interconexión y homogenización más que necesario. Además había establecido comunicación telefónica con las plazas africanas en un tiempo record, estaba emprendido un plan de compra de inmuebles y solares para las centrales automáticas, había comenzado a introducir los últimos avances tecnológicos y los frutos de su programa de mejoras ya se podían apreciar en el servicio telefónico español.

Por el camino quedaban doce meses de intensas negociaciones entre los directivos de la ITT y la CTNE con el Directorio Militar, la Dirección General de Comunicaciones, la Mancomunidad de Cataluña, la Ericsson, multitud de pequeños concesionarios, el Cuerpo de Telégrafos, la Compañía Peninsular de Teléfonos y hasta con el rey Alfonso XIII. Durante este tiempo se había convocado y fallado un “concurso de proposiciones libres” y se había dado un paso sin precedentes en la historia de las telecomunicaciones de nuestro país: se había adjudicado todo el servicio telefónico nacional a una sola empresa concesionaria.

En la memoria social del año 1924⁴⁶⁸, la Compañía Telefónica Nacional de España hacía hincapié en todas estas adquisiciones de propiedades telefónicas: las del Estado, las de la Compañía Peninsular y sus filiales y las de otros muchos centros telefónicos urbanos. Todo ello hacía que, de los 83.000 teléfonos que había aproximadamente en España, unos 70.000 estuvieran ya bajo control de la Telefónica. Además, se afirmaba que contaban también con el 95% de las líneas telefónicas interurbanas.

La lista de proyectos era larga: la introducción de la telefonía automática, la sustitución de cables viejos, la instalación de sendas subcentrales en Madrid y Barcelona para dar servicio a 2.500 abonados en cada ciudad, la proyección de

⁴⁶⁸ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1924.

nuevas líneas interurbanas (Madrid-Algeciras, Madrid-Valencia, Madrid-Bilbao, etc.), la colocación de repetidores en algunas redes de Andalucía y del norte peninsular, el estudio de la posible aplicación de telefonía múltiple por medio de corrientes de alta frecuencia, etc. Además se hacía mención al cable submarino ya tendido entre Algeciras y Ceuta, que permitía incluso la comunicación entre Barcelona y Tetuán.

En cuanto a la capitalización de la empresa, se habían desembolsado y puesto en circulación los 115 millones de pesetas que constituían el capital social, repartidos en 200.000 acciones preferentes y 30.000 acciones ordinarias. Los intereses correspondientes a los títulos preferentes ya habían sido abonados.

La compañía se encontraba inmersa en un plan de organización completa del personal, labor difícil porque el contrato con el Estado le obligaba a incorporar a todo empleado que se encontrara al servicio de los anteriores concesionarios, que eran entidades de todo tipo, incluyendo a los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos. A tal fin se había establecido un sistema general de plantilla, con sueldos máximos y mínimos para cada puesto dentro de la compañía.

Además, en dicha memoria se hacía mención a su afán por fomentar la producción nacional, lo que había provocado, según ellos, la demora en la ejecución de algunos proyectos, que de otra forma ya estarían finalizados si se hubieran adquiridos los materiales y los equipos en el extranjero. Solicitaban igualmente paciencia para que la compañía pudiera realizar las reformas adecuadas en su debido tiempo, añadiendo que en este proceso de modernización podría producirse alguna deficiencia en el servicio hasta que éste estuviera perfectamente establecido.

3.113. Sábado, 3 de enero de 1925

Incorporación de la Peninsular y sus filiales a la CTNE

El proceso de adquisición de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de sus subsidiarias había comenzado a principios de 1924, mediante una inteligente estrategia consistente en “hacer el vacío” a Enrique Parellada, que finalmente vendió todas las acciones ordinarias de la empresa a la International. La multinacional, a su vez, cedió todas sus participaciones y derechos sobre estas compañías a la CTNE el día 29 de agosto de 1924. Entonces era ya cuestión de tiempo que la Telefónica, nueva dueña de la Peninsular, acordara la forma de hacerse definitivamente con todos sus activos y quedara fusionada de manera oficial.

El acuerdo con la Dirección de la Peninsular se alcanzó a mediados de noviembre, el convenio con las condiciones fue redactado por el Departamento Contencioso de la CTNE y aprobado por el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración en sus reuniones de 26 de noviembre de 1924. Las tres compañías (la Peninsular, la Madrileña y la General de Teléfonos) quedaron fusionadas por incorporación mediante escritura pública, que se firmó el día 24 de enero y quedó inscrita oficialmente en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de octubre de 1925⁴⁶⁹. En dicha escritura se especificaba que el acuerdo tenía carácter retroactivo a la fecha de 3 de enero de 1925, que era cuando se consideraban como disueltas las tres sociedades y todas sus propiedades y activos quedaban en poder de la Compañía Telefónica Nacional de España. De esta forma se completaba la adquisición de la empresa que había logrado un mayor poder en el mercado telefónico nacional antes de la irrupción de la International y de la creación de la CTNE. Enrique Parellada, que fue el empresario que había marcado los designios de la telefonía española durante más de 40 años e impulsor de su particular “Sistema Peninsular”, no llegó a ver como todas sus propiedades quedaban incorporadas a la Telefónica, puesto que murió poco antes.

Las propiedades de estas compañías eran muchas. La Peninsular tenía 21 centros telefónicos urbanos, entre los que destacaban los de Bilbao, Sabadell y Vigo, y las líneas de su red interurbana, divididas en tres sectores: Nordeste, Noroeste y Sur. La Madrileña de Teléfonos sólo tenía el control de la red telefónica de la capital. Por último, la Sociedad General de Teléfonos explotaba 12 centros urbanos, entre ellos los de Cádiz, Murcia y Toledo⁴⁷⁰. Todas pasaron a manos de la CTNE el día 3 de enero de 1925.

3.114. Miércoles, 7 de enero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁷¹

En la primera reunión celebrada por el Comité Ejecutivo en el año 1925 se comunicó que ya se encontraban firmados los títulos de acciones preferentes definitivos, por lo que se podía hacer entrega de estos documentos a sus tenedores a

⁴⁶⁹ Registro Mercantil de Madrid, Libro de Sociedades, tomo 162, hoja 5.083.

⁴⁷⁰ Yuste-2004, pp. 224-225.

⁴⁷¹ Acta nº 19, 7 de enero de 1925, libro 1, pp. 22-23.

cambio de los resguardos provisionales que se habían repartido durante los meses anteriores.

También se había dado comienzo al plan de adquisición, reforma y construcción de edificios destinados a las oficinas y centrales telefónicas de la compañía en ciudades de toda España. En este sentido, como ya sabemos, se había comenzado a trabajar con especial atención a Madrid, por ser uno de los centros telefónicos urbanos con más necesidades y por la evidente importancia estratégica y publicitaria de la ciudad como capital del país. Proctor ya se había encargado de la adquisición de un solar en la calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca, situado al lado de la antigua central manual de la Compañía Madrileña de Teléfonos. La CTNE estaba decidida a automatizar el servicio telefónico en Madrid lo antes posible y para ello necesitaba construir edificios (o reformar ampliamente los ya existentes) en los que instalar las nuevas centrales, que vendrían a sustituir a las antiguas. En este sentido, se tomaron decisiones distintas para las subcentrales de la capital, puesto que la del distrito de Salamanca se construyó desde cero, al lado de la que pertenecía a la Compañía Madrileña, mientras que en el distrito de Chamberí se reformó el antiguo edificio.

Para la obra que querían acometer en la calle Hermosilla se había convocado un concurso público al que habían concurrido 19 empresas. La empresa nombró una comisión encargada de estudiar y calificar todas las propuestas, formada por Lewis J. Proctor, el Marqués de Perijáa, Gumersindo Rico y el abogado de la CTNE José Hernández Pinteño. Parece que estas cuatro personas se reunieron en varias ocasiones para examinar los proyectos y finalmente presentaron un informe según el cual se proponía como ganadora a la compañía “Cubiertas y Tejados, S.A.”. El Comité Ejecutivo, de acuerdo con la proposición de la comisión (formada casi íntegramente por miembros de este órgano), decidió adjudicar las obras de construcción del nuevo edificio para la subcentral automática de Salamanca a esta empresa. Asimismo se hacía constar “un voto de gracias a favor de la tan repetida Comisión por el celo, acierto y escurpulosidad con que ha examinado y resuelto este anuncio”.

Además, se había convocado un concurso para las obras, no de construcción, sino de reforma de la otra subcentral de Madrid, la situada en la calle Jordán, en el actual distrito de Chamberí, barrio de Trafalgar. Quedaban designados los mismos cuatro miembros para formar la comisión que habría de valorar las propuestas presentadas a este concurso.

3.115. Miércoles, 14 de enero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁷²

El antiguo edificio que la Compañía Madrileña de Teléfonos tenía en la calle Jordán se iba a reformar totalmente para acoger, en un futuro próximo, la nueva central telefónica automática. Para llevar a cabo este plan de remodelación, la compañía había convocado un concurso, al que se habían presentado seis empresas de construcción. Para el estudio y calificación de las propuestas que habían concurrido, el Comité Ejecutivo nombró una comisión, formada por los cuatro hombres que habían valorado los proyectos del edificio de Hermosilla, que consideró que el plan de un tal Pablo Cauto Navarro era el más adecuado y el que reunía “las mejores condiciones”. El Comité acordó, por lo tanto, adjudicar las obras de reforma del edificio de calle Jordán a dicho contratista.

Proctor también informó de su viaje a Córdoba y Sevilla para iniciar un proceso de adquisición de solares y edificios destinados a las centrales telefónicas y oficinas de la compañía en dichas ciudades andaluzas.

En esta reunión también se tomó una importante decisión con respecto a la creación de la marca “Compañía Telefónica Nacional de España” y a la identidad visual de la empresa. En este día, Lewis J. Proctor presentó a la aprobación del Comité un diseño de “escudo” para la compañía, es decir, lo que hoy conoceríamos como el logotipo, que sirve para conformar la personalidad corporativa y darse a conocer entre el público. El resto de miembros consideraron adecuado el modelo y delegaron en Proctor la elección de colores, texto y forma que conformaría el diseño final. Este logotipo, cuya primera versión se presentó al Comité en este 14 de enero de 1925, se convirtió en una de las imágenes corporativas más conocidas de España durante los casi sesenta años que vino a conformar la identidad visual de la Telefónica. Fue sustituido por el segundo logotipo de la empresa en 1984, tres años antes de que también cambiara su denominación social por la más abreviada “Telefónica de España, S.A.”.

Este primer emblema de la compañía, que recordaba poderosamente al de la ITT, era circular y estaba dividido por una circunferencia concéntrica. En la parte

⁴⁷² Acta nº 10, 14 de enero de 1925, libro 1, pp. 23-25.

central, mucho más grande, aparecía un mapa de la península Ibérica, sur de Francia y norte de África, en el que venían marcadas las fronteras nacionales. Algunas versiones del logotipo ampliaban el territorio dibujado de tal forma que aparecían las islas Baleares y más territorio francés y africano. A veces también aparecían dibujados sobre el mapa los ríos más importantes de la península como Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Además, el territorio español quedaba destacado de alguna forma, ya fuera sombreado o en color negro, incluyendo el protectorado español en Marruecos. El archipiélago canario nunca llegó a aparecer en el logotipo de la CTNE y en algunas versiones, el mapa quedaba tan desplazado hacia arriba, que incluso se recortaba el extremo nororiental de España, que correspondería con la provincia de Gerona y parte de las de Lérida y Barcelona. Alrededor del mapa, entre la circunferencia exterior y la interior aparecía el nombre completo de la empresa escrito en sentido horario y en letras mayúsculas.



Figura 10. a) Logotipo de la CTNE. Fuente: ABC, 31 de julio 1925, p. 15.
b) Logotipo de la ITT. Fuente: España y el teléfono, ITT, 1925.

Después de considerar el asunto del logotipo de la compañía, el Comité pasó a aprobar oficialmente la agregación a la CTNE de la Compañía Peninsular de Teléfonos, la Compañía Madrileña de Teléfonos y la Sociedad General de Teléfonos. De esta forma quedaban fusionadas por incorporación las tres empresas y se declaraban fuera de circulación, anuladas y canceladas las acciones de estas compañías, que quedaban sustituidas por las que se habían entregado por la Telefónica. El Comité delegaba en Lewis J. Proctor para que, en representación de las tres sociedades, otorgara y firmara la escritura pública, en la que quedaría indicado que la fusión tendría efecto retroactivo a la fecha 3 de enero de 1925. Se completaba así la incorporación de las compañías del grupo de Enrique Parellada en los activos de la CTNE y desaparecían oficialmente del mapa empresarial español.

Gumersindo Rico informaba además que se había firmado la escritura de adquisición de la red telefónica urbana de Valencia, por la que se habían pagado dos millones de pesetas a la firma Ericsson. Las condiciones registradas en dicha escritura eran las “establecidas en los pactos y contratos firmados en París” entre ambas compañías. Por lo tanto, todas las propiedades telefónicas de este centro urbano también habían pasado ya a manos de la Telefónica. Como hemos visto, la escritura quedó registrada oficialmente en el Registro Mercantil de Madrid el 2 de junio de 1925.

Se daba cuenta además de la adquisición del centro telefónico urbano de Manzanares (Ciudad Real) por 62.000 pesetas.

Por último, el Secretario informaba de que los títulos de acciones definitivos habían sido enviados al Banco Urquijo Catalán, que a su vez los distribuiría por los demás bancos barceloneses encargados del canje de los resguardos de acciones provisionales por los definitivos.

3.116. Miércoles, 21 de enero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁷³

En esta reunión se discutieron asuntos de menor importancia como fue la decisión de adelantar un trimestre de alquiler al Banco Matritense, propietario del edificio en el que se encontraba la sede social de la empresa en la Gran Vía de Madrid, o el estudio de las dietas que cobraban los empleados cuando realizaban algún viaje. Este día se acordó también alquilar el edificio situado en los números 11 y 13 de la calle de Aviñó de Barcelona, en el Barrio Gótico.

3.117. Jueves, 22 de enero de 1925

El International System de Behn sigue en marcha

El día 22 de enero de 1925 se conocía la noticia de que Sosthenes Behn se encontraba en Nueva York dedicado a sus negocios para extender el International System por todo el mundo. Esta información había llegado a España gracias a la

⁴⁷³ Acta nº 21, 21 de enero de 1925, libro 1, pp. 25-26.

agencia de noticias *United Press* y fue publicada por *La Vanguardia* al día siguiente⁴⁷⁴. Según el periódico, el Coronel había declarado que iba a pedir autorización a los accionistas de la ITT para aumentar el capital social de la empresa de 25.000 a 500.000 dólares, mediante la emisión de 90.000 acciones. Esta solicitud sería realizada en la Junta General que habría de celebrarse el día 10 de febrero en Nueva York. El motivo de esta ampliación de capital no era otro que “organizar la Compañía Telefónica de España”.

No cabe duda de que la ITT necesitaba una inyección de capital importante para atender a sus nuevos negocios españoles, que se habían convertido en su inversión fundamental. No obstante, el artículo aparecido en el diario *La Vanguardia* contenía algún error, ya que las cifras que aportaba eran, a todas luces, ridículas. Esta equivocación pudo deberse a la traducción de la nota del inglés al español o a una mala transcripción de las cifras, pero lo cierto es que no hemos conseguido ni tan siquiera intuir cuáles hubieran sido los valores correctos que el periodista debería haber escrito. Se decía que la ampliación de capital iba a ser de 25.000 a 500.000 dólares, es decir, de 475.000 dólares, lo que implicaba un incremento del 1900%. La CTNE tuvo que requerir una ampliación de capital muy importante, pero estas cifras, en términos relativos, hubieran sido desproporcionadas. Además, según Robert Sobel, los activos de la ITT estaban valorados en 1922 en menos de 14 millones de dólares, mientras que en 1926 habían alcanzado casi los 100 millones⁴⁷⁵. Se puede afirmar, por lo tanto, que las cantidades económicas que daba el periodista de *La Vanguardia* eran minúsculas para una multinacional como la International, que estaba en pleno proceso de expansión, adquiriendo sistemas telefónicos en dos continentes y en negociaciones para la compra de una de las empresas de producción de material más importantes del mundo (la International Western Electric Co.) Los cálculos elaborados para la realización de este Trabajo Fin de Máster aportan un valor para el cambio de divisas en aquellos años de unas 7 pesetas por dólar; de ahí que 500.000 dólares significaran sólo 3,5 millones de pesetas, una suma que no daría ni para pagar las primeras adquisiciones telefónicas españolas en manos de pequeños y medianos concesionarios privados.

⁴⁷⁴ *La Vanguardia*, 23 de enero de 1925, p. 18.

⁴⁷⁵ Sobel-2000, pp. 46-47.

Fuera como fuese, la financiación de la multinacional no era un problema a estas alturas. Sosthenes Behn estaba arropado por la bolsa de Nueva York, las acciones de la ITT se consideraban un negocio seguro y los mercados hacían que éstas subieran como la espuma: las acciones que en 1923 se compraban por 64 dólares habían alcanzado los 100 dólares a principios de 1925. Por su parte, el National City Bank declaraba abiertamente que no habría ningún inconveniente en depositar una enorme cantidad de dinero en las cuentas de la ITT cuando ésta lo necesitara⁴⁷⁶.

Este mismo artículo informaba de que Behn había enviado una carta a los accionistas de la ITT en la que declaraba que, según los cálculos realizados, se instalarían en España 400.000 teléfonos en el espacio de 10 años. Este dato ha podido ser contrastado gracias al libro de Robert Sobel, que también añade que Behn confiaba en que el sistema español se convertiría en 1935 en uno de los más eficientes del mundo⁴⁷⁷. El Coronel exageraba quizá en esta última afirmación ya que en 1935, la red española estaba lejos de contarse entre las mejores del mundo, aunque quizá habría que valorar cómo hubiera evolucionado de no haberse producido los acontecimientos políticos que marcaron la historia de nuestro país en aquellos diez años. No iba muy desencaminado Sosthenes en cuanto a cantidad de teléfonos se refería, por lo menos en estas estimaciones realizadas en enero de 1925. En la memoria de la compañía correspondiente al año 1935 se puede leer que el número de teléfonos de la CTNE en territorio español alcanzó la suma de 329.130; es decir, sólo 70.000 menos de los que había pronosticado el Coronel una década antes, lo que supone un error del 17,5%. La memoria también indicaba que dos terceras partes del total de aparatos correspondían ya al sistema automático⁴⁷⁸.

Por último, Behn declaraba que había retirado “recientemente la petición del monopolio (sic) de Italia”, pero que proseguía en negociaciones con Francia. Además, se esperaba que en breve obtuviera el “monopolio de Méjico y la sociedad está en negociaciones con otros países hispano-americanos”. Efectivamente, el punto de mira de la International se encontraba en los sistemas telefónicos nacionales a ambos lados del Atlántico, en Europa y América Latina. La situación económica no podía ser en

⁴⁷⁶ Sobel-2000, p. 41.

⁴⁷⁷ Sobel-2000, p. 41.

⁴⁷⁸ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1935, p. 4.

aquellos momentos más propicia para Behn, con los mercados entregados a su compañía, y la incorporación de España como primera pieza de su International System le había otorgado gran notoriedad. Ya nadie dudaba que el Coronel fuera un gran empresario y que su plan de adquisición de intereses telefónicos por todo el mundo se tratara de un buen negocio en el que invertir. Behn aprovechó el tirón y se lanzó a los negocios en varios países, con desigual suerte. Como veremos en capítulos posteriores, el sistema telefónico francés fue siempre su gran aspiración pero supuso también uno de sus mayores reveses. Sin embargo, la telefonía mexicana tuvo una historia muy similar a la española y sólo unos meses más tarde, en el verano de 1925, Sosthenes Behn pudo incorporar México a su lista de países dentro de la órbita del International System.

3.118. Miércoles, 28 de enero de 1925

Detención de un empleado de la CTNE acusado por desfalco

En su edición de 29 de enero de 1925, el diario La Vanguardia informaba de que el día anterior había sido detenido y llevado a los calabozos de los Juzgados de Barcelona un “alto empleado de una compañía que explota un servicio público”. Según se indicaba, la causa del arresto era “haberse descubierto una irregularidad, que se decía asciende a 905.000 pesetas”, aunque por el momento no se aportaban más datos sobre el asunto⁴⁷⁹.

Sin embargo, en la edición del día siguiente se aportaba más información sobre lo acontecido en la jornada del 28 de enero. El juez de guardia practicó esa misma noche una diligencia que dio por resultado la incautación de 100 acciones de la Compañía Telefónica Nacional de España, que, según el detenido, eran de su propiedad⁴⁸⁰.

⁴⁷⁹ La Vanguardia, 29 de enero de 1925, p. 20.

⁴⁸⁰ La Vanguardia, 30 de enero de 1925, p. 6.

3.119. Jueves, 29 de enero de 1925

Se inician las investigaciones en el caso del desfalco

El día después de la detención, el caso del desfalco pasó al juzgado al que le correspondía el sumario. El juez encargado, señor Páramo, estudió las diligencias instruidas el día anterior y volvió a tomar declaración al detenido, ratificando el procesamiento de éste y manteniendo el arresto. Por la tarde se ordenó que se pusieran a su disposición los libros de contabilidad de la empresa y otros documentos, “a fin de precisar las fechas en que el detenido dispuso de las cantidades que había en la caja de la expresada Compañía de Teléfonos, de la que era cajero el detenido”⁴⁸¹.

Al parecer, el trabajador de la CTNE procesado señaló a otros dos jefes de la compañía de participar en el desfalco, uno de los cuales había muerto recientemente. Según el acusado, “daba el dinero [a uno de esos jefes], en vez de ingresarlo en caja, aunque señalaba en los libros las cantidades como ingresadas”. Por la tarde se practicaron nuevas diligencias, entre ellas la del examen de algunos libros en la central telefónica, y se volvió a tomar declaración al acusado durante más de tres horas.

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁸²

El Comité Ejecutivo de la empresa se reunió en esta fecha, habiéndose enterado unas horas antes de la detención de un cajero de la compañía en Barcelona. Los miembros del Comité se mostraron muy afectados y contrariados por la noticia y decidieron tomar medidas urgentes para emprender las acciones legales oportunas. Se aprobó proceder como querellante en la causa del desfalco ante los Juzgados de Barcelona, aunque para ello tuvieron que autorizar a Valentín Ruíz Senén, Vicepresidente del Consejo de Administración, para sustituir al Marqués de Urquijo, que en esos momentos se encontraba fuera de Madrid y a quien correspondía, según el párrafo tercero del artículo 34 de los estatutos sociales de la empresa, la representación legal de la misma. Se autorizó, por lo tanto, a Ruiz Senén para tomar las acciones de índole civil o criminal que la CTNE hubiera de ejercitar contra el cajero

⁴⁸¹ La Vanguardia, 30 de enero de 1925, p. 6.

⁴⁸² Acta nº 22, 29 de enero de 1925, libro 1, pp. 26-27.

de la compañía acusado, Manuel Gomila Giralt, y “demás personas que están o pudieren resultar implicadas en el asunto que motiva la querella”.

El acta de la reunión no se refiere al detenido como empleado de la Telefónica en ningún momento, sino como “cajero de la Peninsular”, entendiéndose que su contratación había sido debida a la obligación contractual que tenía la CTNE de recolocar a todos los empleados de las concesiones cuyas propiedades fueran adquiridas por la empresa. No obstante, aunque Manuel Gomila hubiera sido trabajador de la Compañía Peninsular anteriormente, era ya, a todos los efectos, empleado en plantilla de la CTNE.

En esta reunión se tomaron también otras decisiones, aunque el asunto del desfalco era el que, claramente, preocupaba a los miembros del Comité. También se decidió conceder algunas ventajas en los abonos telefónicos a los periódicos y otros medios de comunicación de la capital, como también lo hacía la Compañía Madrileña de Teléfonos antes que la CTNE, guiados por el “deseo de atender con la mayor consideración y preferencia a la prensa”. No en vano, los medios de comunicación siempre han sido, tanto entonces como en la actualidad, el mejor aliado de una compañía privada para proyectar una buena imagen en la opinión pública, por lo que es muy positivo para los intereses de la entidad gozar de su apoyo.

El Tesorero General dio cuenta del saldo de los fondos de la compañía y consideró que eran reducidos para atender a las necesidades de la misma, por lo que pidió autorización al Comité “para solicitar de la International Telephone Securities Corporation las cantidades necesarias al efecto”. El Comité accedió a dicha solicitud, aunque hizo constar su criterio de que no deberían ser retiradas de la cuenta que la compañía tenía con la Securities más que las “cantidades prudencialmente indispensables”.

3.120. Viernes, 30 de enero de 1925

Nueva detención en Barcelona

El caso del desfalco a la Telefónica que tuvo lugar en Barcelona comenzaba a convertirse en un asunto espinoso, sin perspectivas de mejora, ya que cada día que pasaba se iba complicando aún más. Mientras, seguía adquiriendo notoriedad en la prensa y en la sociedad catalana en general. La policía detuvo el día 30 de enero a “otro alto funcionario” de la compañía, ingresando inmediatamente en los calabozos

del Juzgado, después de haber prestado declaración. A su vez, el juez decretó el procesamiento e ingreso en prisión del primer detenido, el cajero Manuel Gomila, que entró en la cárcel esa misma tarde. Como consecuencia de las declaraciones de los dos detenidos, el juez declaró el secreto de sumario. Gomila designó como abogado para su defensa a Felipe Rodés Baldrich, un famoso abogado barcelonés, que también fue político y llegó a ocupar el cargo de Ministro⁴⁸³.

Además, se realizaron varios registros en las oficinas de la compañía y en la central telefónica, donde la policía se incautó de libros y documentos relacionados con el caso. El juez Páramo se estuvo informando sobre la forma en que se efectuaba la recaudación e ingresos en caja de las sumas recaudadas por la empresa. También prestaron declaración varios empleados de la CTNE, llamados por el juez, “guardándose extremada reserva respecto a las manifestaciones que los mismos hicieron”. Por todo ello, la prensa informaba de que no se descartaban nuevas detenciones y registros⁴⁸⁴.

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁸⁵

Sólo un día después de la reunión anterior el Comité Ejecutivo celebró una sesión extraordinaria para tratar el asunto del desfalco, ya que su pronta reacción era esencial para que la imagen de la compañía no se viera afectada y para recuperar, si era posible, las sumas de dinero que habían sido robadas. Se reunieron los miembros habituales del Comité, con la excepción del Marqués de Urquijo que se encontraba fuera de Madrid, además del abogado catalán José Bertrán y Musitu⁴⁸⁶ que participa a requerimiento de Lewis Proctor y con el fin de informar sobre la situación en Barcelona.

⁴⁸³ Felipe Rodés Baldrich (1878-1957) era miembro del partido Solidaridad Catalana y fue elegido Diputado en seis legislaturas de la Restauración y también en las últimas elecciones generales de la II República en febrero de 1936, “las del Frente Popular”. Ocupó la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes (hoy Educación y Cultura) durante varios meses en 1917 y 1918 en un gobierno presidido por Manuel García Prieto. El apellido Rodés sigue en la actualidad vinculado a la abogacía en Cataluña.

⁴⁸⁴ La Vanguardia, 31 de enero de 1925, p. 7.

⁴⁸⁵ Acta nº 23, 30 de enero de 1925, libro 1, pp. 27-29.

⁴⁸⁶ Véase crónica del día 5 de abril de 1924.

Bertrán y Musitu expuso detalladamente el caso y las posibles complicaciones que este asunto podría ocasionar. El abogado declaraba responsable directo al “cajero de la Compañía Peninsular de Teléfonos”, Manuel Gomila, contra quien se había procedido inmediatamente. Además se considera responsables por acción u omisión a otros empleados, aunque su implicación se iría depurando a medida que los hechos se aclararan. Se expresa, no obstante, optimista con respecto a la posibilidad de que la CTNE recuperara las cantidades que habían sido objeto de desfalco y proponía el plan que, a su juicio, llevaría “al más ventajoso y satisfactorio resultado”. La representación de la CTNE en la causa abierta quedaba en manos del abogado José María Bassols, asesor externo de la compañía, letrado del Colegio de Barcelona y pasante en el bufete de Bertrán y Musitu.

Ruiz Senén tomó entonces la palabra para agradecer la actuación de José Bertrán y Musitu, mostrando cierto pesimismo hacia la satisfactoria resolución de los acontecimientos, aunque consideraba posible aminorar el perjuicio económico para la empresa. Expresaba también “la necesidad de defender a todo evento el prestigio y los intereses de la Compañía y a tales efectos no puede vacilarse ante el deber ineludible de exigir la responsabilidad a que haya lugar y de aplicar las sanciones oportunas a todos los funcionarios que directa o indirectamente puedan tener relación con el asunto”. Por ello, se declaraban suspensos de empleo y sueldo a los empleados de la compañía procesados por el juez, Manuel Gomila Giralt y Juan Antonio Escribano, a los que se apuntaba como culpables directos del delito cometido.

Además, se abría un expediente para depurar responsabilidades dentro de la compañía, designando a Fermín Aracil Gosálvez como instructor de dicho expediente, al que se facultaba con plenas atribuciones para el ejercicio de su función y por lo tanto con plena capacidad para suspender de empleo y sueldo en nombre de la compañía a todos los trabajadores que pudieran estar implicados en el asunto. El Comité acordó por último abrir una cuenta corriente en tres bancos de Barcelona, aunque no se especificaba con qué motivo.

Reunión en Bilbao

Ese mismo día, La Vanguardia⁴⁸⁷ informaba de la llegada del Director de la Compañía Telefónica Nacional, Javier Martí-Codolar, a la capital vizcaína, para entrevistarse con el Subdirector del Distrito 3º, Benito Navarro, con la intención de “estudiar la organización de los servicios con arreglo a las necesidades de Bilbao”.

El centro telefónico urbano de esta ciudad estaba ahora en posesión de la CTNE como parte de las propiedades de la antigua Peninsular de Teléfonos que habían sido traspasadas el día 3 de enero de 1925. La telefonía bilbaína había pasado por varias manos desde sus primeros días, luego entre 1889 y 1894 perteneció a la empresa “Red Telefónica de Bilbao”, pero pronto se acordó la liquidación y la adjudicación de su explotación a la Compañía Peninsular de Teléfonos, poco después de haber sido creada ésta en 1894. La empresa de Parellada disfrutó de la concesión hasta que la Telefónica ordenó su desmantelamiento y se hizo con todas sus propiedades.

3.121. Sábado, 31 de enero de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁴⁸⁸

Al comienzo de cada reunión del Consejo de Administración se llevaba a cabo una serie de formalidades que a estas alturas se estaban convirtiendo en una larga lista de acuerdos que era necesario aprobar antes de poder pasar a los verdaderos asuntos de la sesión: el acta de la reunión anterior, todas las actas y decisiones de las reuniones del Comité Ejecutivo, el nombramiento de personal, las adquisiciones de material, el movimiento de fondos de la compañía, los informes de los distintos departamentos, los estudios sobre nuevas construcciones, etc. Cuando todas estas cuestiones habían sido aprobadas, siempre con el voto unánime de todos los miembros, comenzaba la auténtica reunión del Consejo de Administración. En esta fecha, se presentó además un balance provisional de comprobación de los fondos de la sociedad, que había sido solicitado por el Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda, Carrillo de Albornoz.

⁴⁸⁷ La Vanguardia, 30 de enero de 1925, p. 15.

⁴⁸⁸ Acta nº 9, 31 de enero de 1925, libro 1, pp. 23-25.

Ruiz Senén, que presidía el Consejo en sustitución del Marqués de Urquijo, daba cuenta de la adquisición de la Compañía Peninsular, de la Madrileña y de la Sociedad General de Teléfonos, según acuerdo adoptado por este órgano en la reunión del día 26 de noviembre de 1924. Se detallaban las gestiones realizadas para tal fin, entre las que se incluía la firma de la escritura pública el día 24 de enero de 1925, que hacía oficial la fusión de las tres antiguas empresas en la CTNE, con efectos retroactivos al día 3 de enero.

El Presidente en funciones explica entonces el caso del desfalco descubierto en Barcelona, así como las medidas que había tomado el Comité Ejecutivo en defensa de los intereses de la compañía. También quería subrayar que todos estos acuerdos habían sido adoptados para “mantener a todo evento el prestigio de la Compañía y exigir con la necesaria inflexibilidad las responsabilidades que pudieran derivarse de este asunto”. El Consejo expresó por unanimidad su satisfacción por la actuación del Comité, “haciendo suya totalmente la actuación del Comité” y confirmando que todas las medidas tomadas fueron las más acertadas.

Por último, Ruiz Senén informó sobre otros acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo en las sesiones celebradas durante el mes de enero: las adjudicaciones de las obras para los edificios de las subcentrales de las calles Hermosilla y Jordán y las ventajas que se iban a conceder a los abonos telefónicos de la prensa. Todo ello mereció “la máxima aprobación y conformidad por parte del Consejo”.

La Revista Telefónica Española

A finales de enero de 1925 salió a la luz el primer número de la Revista Telefónica, una publicación gratuita y mensual que editaba la propia Compañía Telefónica Nacional de España para todos sus empleados. La revista, que siempre contaba con muchos artículos, explicaba aspectos muy diversos de la compañía, siempre desde un punto de vista corporativo, donde los logros eran anunciados a bombo y platillo mientras que los problemas, los conflictos laborales o cualquier cuestión que pudiera dar mala imagen eran deliberadamente omitidos. Para fomentar esa idea de gran familia telefónica y fomentar el sentimiento de inclusión de los trabajadores en la compañía, los textos siempre aparecían escritos en primera persona del plural.

La edición de este magazine responde a patrones empresariales americanos, heredados sin duda de la política corporativa que imprimía la ITT en casi todas las decisiones de la CTNE⁴⁸⁹. No hay duda de que la creación de la Revista Telefónica Española fue una idea de Sosthenes Behn o de alguno de sus colaboradores norteamericanos más directos como Lewis Proctor. No en vano, hasta el nombre de la publicación recordaba al de su “madre” al otro lado del Atlántico, la Revista Telefónica Internacional, y a los de sus “hermanas”, la Revista Telefónica Portorriqueña y la Revista Telefónica Cubana.

Este primer número⁴⁹⁰ se abría con “Un saludo de nuestro presidente al personal de la compañía”, una carta del Marqués de Urquijo dirigida a todos sus empleados en la que ensalzaba a la compañía y explicaba los ambiciosos objetivos que ésta se proponía alcanzar, que además iba acompañada por una gran fotografía del Presidente de la Telefónica. El texto, que no escatimaba en elogios a la empresa, también mencionaba la presencia de elementos norteamericanos en la organización de la misma:

Seguro estoy de que todos se darán cuenta de la importancia que para España tiene el poder contar en breve plazo con un servicio telefónico perfecto, porque aspiramos a que nuestra nación sea de las más adelantadas a este respecto, y para ello hemos tenido la fortuna de contar con el concurso técnico y la organización que nos proporcionan valiosos elementos americanos que, especializados en esta materia, han de contribuir eficazmente al logro de nuestros propósitos, pues tienen sobradamente acreditada su pericia y acierto en otros países en que ya se ha implantado este servicio.

La revista también incluía un artículo de tres páginas titulado “Quiénes somos y a qué venimos” en el que se explicaba a los trabajadores la naturaleza y los fines de esta publicación. Era “una publicación dedicada por entero a la industria telefónica y a servir de lazo de unión entre los empleados de la Compañía Telefónica Nacional de España”. Algunos de los objetivos que perseguía la publicación era ayudar a que los trabajadores se conocieran, informar sobre asuntos de interés dentro de la empresa y explicar el plan que la CTNE estaba ejecutando para la reforma del servicio telefónico.

⁴⁸⁹ Álvaro-2005, p. 7.

⁴⁹⁰ Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925.

El reportaje central de la revista estaba dedicado al proyecto de telefonía que la CTNE iba a llevar a cabo en España y venía encabezado por un titular desmedido: “España tendrá el mejor servicio telefónico del mundo”. En el texto se ahondaba en esta idea indicando que la compañía se proponía “desarrollar el sistema telefónico en España dentro del plazo de diez años, hasta conseguir que no haya otro que le supere en nación alguna del mundo”. En este sentido, hasta las declaraciones que Sosthenes Behn realizó a la prensa neoyorkina más o menos en la misma época⁴⁹¹ eran menos ambiciosas, ya que el Coronel tuvo la cautela de afirmar que en una década nuestro sistema telefónico se situaría entre los mejores del mundo. El artículo reconocía por lo menos que se trataba de una hazaña difícil de lograr:

Este propósito, espontáneamente concebido por la Compañía Telefónica Nacional de España, es acaso de muy difícil, pero no imposible realización. Los proyectos aprobados tienden a ello, y si a esto se añade la gran suma de entusiasmo y la valiosa cooperación del personal de la Compañía, el programa podrá cumplirse, y se cumplirá. Los que hayamos tomado parte en tal triunfo y en el progreso económico que para España significa podremos sentirnos orgullosos durante el resto de nuestra vida.

A continuación se describían los planes de la CTNE en construcción y reforma de líneas interurbanas, automatización de las redes urbanas, instalación de cables submarinos, etc. También se describían las adquisiciones de propiedades telefónicas más importantes realizadas hasta el momento, entre las que se contaban las que pertenecían al Estado, las de las compañías Peninsular, Madrileña y General y el centro urbano de Valencia, que estaba en propiedad de la Ericsson. También se recordaba que la compañía tenía el control del 95% de las líneas interurbanas y del 85% de los teléfonos españoles.

En esta primera edición de la Revista Telefónica Española también se publicó una crónica sobre el establecimiento de la primera comunicación telefónica entre Madrid y Tetuán el día 1 de diciembre de 1924 y se reproducía el artículo de la edición de ABC de 30 de noviembre en el que se informaba sobre el nombramiento de los marqueses de Urquijo y Comillas como consejeros de la ITT en Nueva York. Otro reportaje, del que ya hemos dado cuenta anteriormente, trataba la exitosa puesta en circulación de 47.400 acciones preferentes mediante suscripción pública el día 20 de

⁴⁹¹ Véase crónica del día 22 de enero de 1925.

octubre de 1924 y cuya venta tuvo que cerrarse poco después de haberse iniciado. Tampoco se olvidaba la revista del interés de la CTNE por fomentar la industria nacional o de los salones de descanso que había abierto en Madrid para las telefonistas, incluso se adentraba en divagaciones éticas sobre honradez, amabilidad y disciplina en los puestos de trabajo.

3.122. Lunes, 2 de febrero de 1925

Se crea la Asociación general de Empleados y Obreros de la CTNE

Durante la intensa visita que realizó a España a finales de noviembre, Sosthenes Behn también tuvo tiempo de reunirse con los representantes de las juntas directivas de la Asociación de Auxilios mutuos de los Empleados y Obreros de la Compañía Madrileña de Teléfonos y de la Asociación de Empleados y Obreros de la Red Telefónica Interurbana. En aquellas entrevistas, Behn les explicó las ventajas que, en su opinión, tenía formar una sola asociación, “ya que sería una la Compañía a la que serviríamos, y a la podrían afiliarse cuantos perteneciendo a la Telefónica Nacional, voluntariamente desearan inscribirse y que sería la única que entendería en cuantos asuntos pudieran presentarse relacionados con reclamaciones o solicitudes del personal”. Además, el Coronel se mostró partidario de que la compañía nutriera los fondos del sindicato de empleados⁴⁹².

Tras aquellas primeras reuniones con Behn, estas dos asociaciones, a las que se unió la de Empleados y Obreros de la Sociedad General de Teléfonos, presentaron memorias explicativas de sus fines, beneficios, número de socios, capital, etc. Pero no fue hasta finales de enero cuando se celebraron varias reuniones entre los miembros de las tres juntas, incluyendo también algunos nuevos empleados de la CTNE, encaminadas a la fundación de una asociación única de trabajadores que vendría a sustituir a sus predecesoras en su papel de defensoras de los derechos de la plantilla, así como para servir de interlocutor oficial entre ésta y la compañía. El día 2 de febrero, siempre bajo la supervisión, inspiración y apadrinamiento de Sosthenes Behn, se acordó crear la Asociación General de Empleados y Obreros de la Compañía Telefónica Nacional de España. Se formuló un proyecto de estatutos, con arreglo a las disposiciones vigentes, que fue presentado a la aprobación de la Dirección general de

⁴⁹² Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, pp. 7-10.

Seguridad. Además se nombró una Junta directiva presidida por el joven técnico Luis Alcaraz Otaola, Subingeniero Jefe de la CTNE. En el segundo número de la Revista Telefónica Española se transcribió una copia de los estatutos provisionales de la asociación y se dedicaron unos párrafos a explicar cuáles eran sus fines e intenciones:

Lazo de unión entre personal y Compañía. La que recogerá todo los anhelos de sus afiliados. La que intervendrá procurando que sean puestas en práctica cuantas mejoras puedan beneficiar a la colectividad o que tiendan al mejoramiento del servicio. Estudiará cuantas iniciativas expongan los asociados y si son viables de realización las elevará a la superioridad interesando su acepción.

Tal y como se recoge en aquella edición de la revista, “la idea de su creación se debe al coronel Mr. Behn, que desde su primera entrevista con las Juntas directivas de las Asociaciones [...], indicó la conveniencia de formar una sola Asociación”. Parece claro entonces que la Dirección de la compañía estaba interesada en crear, cuanto antes y bajo su tutela, un único órgano con el que tratar las cuestiones laborales de sus empleados, reduciendo así el margen de maniobra de los sectores más críticos. La activa intervención de Behn, la rapidez con la que se planteó la creación de la corporación y la celeridad de las negociaciones nos hacen pensar que la constitución de esta asociación fue, en cierto modo, “dirigida” por la cúpula de la compañía. Con estas medidas se consiguió crear una suerte de sindicato de trabajadores, que diera una apariencia de defensor de los derechos de estos, pero que en el fondo estuviera controlada por la Dirección de la CTNE. No en vano, al frente de la asociación se había puesto a Luis Alcaraz, ingeniero de alto rango y persona que gozaba de la más absoluta confianza por parte de los directivos de la compañía. Un hecho que lo demuestra fue la designación de Alcaraz como supervisor de la primera conferencia telefónica entre Madrid y Tetuán celebrada el 1 de diciembre de 1924 y del tendido del cable submarino entre Algeciras y Ceuta unas semanas después. El interés de la CTNE en crear esta asociación bajo su supervisión quedaba demostrado también en las amables palabras que le dedicaban en la memoria social del ejercicio 1924, donde se indicaba que su fundación se había visto “con la mayor simpatía”⁴⁹³.

En los artículos publicados en la Revista Telefónica Española ya se pueden intuir algunas expresiones que parecen el reflejo de la idiosincrasia de la Dirección y

⁴⁹³ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1924, p. 7.

de su política corporativa de crear una afección de los empleados hacia la empresa, en lugar de las ideas de un sindicato de trabajadores: “A esto deben aunarse todos nuestros esfuerzos [...], a cooperar todos juntos, a laborar como hermanos que somos en la familia telefónica”. Incluso se hacía un aviso para todos aquellos que, buscando el interés de los trabajadores, quisieran “laborar en la sombra” sin pasar por la Asociación de Empleados y Obreros. Hasta se elogiaba la buena voluntad de los directivos de la compañía para atender sus peticiones, aspecto que no termina de encajar en el acto de fundación de un sindicato:

También ésta [la claridad] existe en los elementos directores que hoy nos rigen en los altos destinos de la Compañía y sus claras inteligencias comprenderán las causas justas, las aspiraciones legítimas, y con su elevado espíritu y rectas conciencias, nos concederán bienestar y tranquilidad, pues saben que existiendo ésta el trabajo se efectúa con gusto y el rendimiento es mucho mayor.

3.123. Miércoles, 4 de febrero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁴⁹⁴

El abogado de la compañía José Bertrán y Musitu volvió a asistir a la reunión del Comité Ejecutivo en este día para explicar detalladamente “la situación en que se encuentra el asunto de Barcelona, las gestiones complementarias y realizadas en relación con el mismo y los propósitos que le animan para llevar a feliz término la cuestión planteada por la Compañía”. Bertrán y Musitu mantenía el optimismo respecta a una favorable resolución del caso con respecto a los intereses de la CTNE.

A continuación, el acta de la sesión aporta un dato con mucha trascendencia sobre el asunto del desfalco al referirse al fallecido Enrique Parellada y Pallás como parte implicada en la trama. Parellada había sido fundador y presidente de la Compañía Peninsular y de sus filiales, la Madrileña y la Sociedad General de Teléfonos, hasta su muerte en 1924. Una de las últimas decisiones que tomó al frente de sus compañías fue la venta de las acciones ordinarias de la Peninsular a Sosthenes Behn, poco tiempo antes de fallecer, acción por la que cedía el control de dichas empresas a la ITT y que finalmente derivaría en la incorporación de todas ellas

⁴⁹⁴ Acta nº 24, 4 de febrero de 1925, libro 1, pp. 29-31.

en la Compañía Telefónica Nacional. La redacción de esta parte del acta es confusa y enrevesada, por lo que la implicación de Parellada en el caso de desfalco no termina de quedar clara, aunque se entiende que algunos directivos de la CTNE habían discutido sobre el asunto con los herederos del empresario catalán y querían saldar cuanto antes toda relación con Enrique Parellada y sus negocios.

Para ello, el Comité autorizaba a José Bertrán y Musitu para resolver todas estas cuestiones con los descendientes de Enrique Parellada. En primer lugar le daban instrucciones para obtener de estos herederos todo el dinero que debían a la Compañía Telefónica Nacional como resultado de la incorporación de la Peninsular y de sus filiales. El Comité de la CTNE facultaba al abogado para que recibiera dichas cantidades, firmara los recibos o cartas de pago necesarias y practicara además “cuantas actuaciones judiciales o extra-judiciales sean consecuencia de la liquidación y restitución antes indicada”.

Además, en un párrafo aún más confuso que el anterior, el acta indica que el Comité autorizó a Bertrán y Musitu para que pactara “con los herederos de Don Enrique Parellada y Pallás todas las cuestiones y diferencias relacionadas con las responsabilidades que por cualquier concepto pudieran atribuirse al expresado Sr. Parellada con motivo de su gestión” de las tres antiguas empresas. El abogado de la CTNE podía firmar los contratos o documentos que fueran necesarios para dar efectividad a estos pactos y que tenían que ver con las responsabilidades del fallecido empresario catalán al frente del grupo Peninsular. Para alcanzar dichos acuerdos con sus herederos, Bertrán y Musitu podía pactar el precio y las condiciones que estimara más convenientes.

Como se puede apreciar, la implicación de Parellada en todo este asunto no queda nada clara, ni siquiera si participó en la trama o si por el contrario fue víctima de la misma. Lo que sí parece evidente es que la CTNE quería liquidar sus relaciones con el apellido Parellada, recibiendo todo el dinero que parece que sus herederos debían a la compañía y llegando a un pacto que explicara las responsabilidades del empresario fallecido como máximo directivo de la Peninsular. Entendemos que, en caso de que el empresario catalán fuera uno de los artífices del desfalco, la Telefónica quisiera dar carpetazo al asunto, borrar cualquier relación que pudiera existir con él y con sus herederos y no dar más publicidad al asunto.

Aunque no está probado documentalmente, todo apunta a que Enrique Parellada era el tercer implicado al que se refería el cajero de la antigua Peninsular,

Manuel Gomila Giralt, cuando testificó ante el juez Páramo el día después de su detención. Tal y como recogía el diario La Vanguardia en su edición de 30 de enero, el detenido acusaba “a otros dos jefes de Teléfonos, uno de éstos fallecido, a uno de los cuales, dijo, daba el dinero, en vez de ingresarlo en caja, aunque señalaba en los libros las cantidades como ingresadas”. El jefe fallecido sería Enrique Parellada y Pallás, el otro jefe se trataba del posteriormente detenido Juan Antonio Escribano.

Ruiz Senén también consideró muy conveniente informar oficialmente al Gobierno que la actuación de la CTNE era totalmente ajena a los hechos descubiertos en Barcelona, para salvaguardar el prestigio de la compañía. Además, el Comité acordaba redactar una nota exponiendo la versión oficial de la Dirección con respecto al asunto del desfalco, “para justificar la actuación de la Compañía y evitar torcidas interpretaciones y comentarios gratuitos sobre la misma”. Julián Cifuentes se expresaba en unos términos parecidos al hacer referencia a la confianza que debía disfrutar la compañía “en lo sucesivo tanto por parte de los poderes públicos como en el mercado financiero a fin de encontrar, por tal motivo, el apoyo necesario a nuestra gestión”.

Discutido el caso del desfalco, el Comité dirigía su atención hacia otros asuntos. Ruiz Senén se interesó entonces por las categorías del personal con la que se pretendía organizar la plantilla de la compañía, según la importancia de los cargos y de los sueldos, “estableciendo escalas máximas y mínimas en cada categoría”. Proctor le manifestó su deseo de culminar con esta tarea en un breve periodo de tiempo, aunque explicaba que si todavía no se había llevado a la práctica era por las múltiples incorporaciones de personal que se habían efectuado con motivo de las adquisiciones de propiedades telefónicas y que evidentemente habían ocasionado que todavía se estuviera reorganizando la plantilla. Las palabras de Lewis J. Proctor al exponer esta cuestión a Valentín Ruiz Senén son todo un ejemplo de cómo la CTNE era dirigida en realidad por Proctor y por Sosthenes Behn desde la distancia:

[...] manifestando el Sr. Proctor que efectivamente se piensa por la Dirección en llevar a efecto la organización que tan acertadamente propone el Sr. Ruiz Senén, coincidiendo con el criterio hace tiempo expresado en tal sentido por el Sr. Coronel Behn [...]

Proctor se refería a “la Dirección” como si fuera un organismo al que sólo pertenecieran él mismo y Sosthenes Behn. Valentín Ruiz Senén era fundador de la compañía, vicepresidente del Consejo de Administración y presidente del Comité

Ejecutivo, exactamente igual que Julián Cifuentes. Parece lógico que, ocupando todos estos cargos, estos dos empresarios también deberían ser considerados miembros de “la Dirección”. Aunque todo indica que Proctor se refería en realidad a la Dirección ejecutiva de la empresa que, como sabemos, recaía completamente en su persona como encargado de tomar todas las decisiones directivas de la CTNE, según las directrices marcadas por Sosthenes Behn.

Durante esta reunión del Comité Ejecutivo, Ruiz Senén también hacía hincapié en la necesidad de que la CTNE ofreciera a sus empleados “todas aquellas ventajas que imponen la más ventajosa prudencia y equidad y las imprescindibles medidas de carácter benéfico a fin de que la Compañía pueda ofrecer a todos sus funcionarios ciertas garantías generales de asistencia social”. Tal era la desinformación de Valentín Ruiz Senén sobre la marcha de la empresa de la que era vicepresidente que no tenía conocimiento sobre la creación de la Asociación de Empleados de la compañía y del proyecto para un fondo benéfico. Lewis Proctor le informó sobre la existencia de dicho organismo, en cuya constitución había participado muy activamente el propio Sosthenes Behn, como ya hemos visto.

Antes de cerrar la sesión, Gumersindo Rico informaba sobre el término de las negociaciones para la adquisición del centro telefónico urbano de Alcira (Valencia) por 750.000 pesetas, haciendo referencia a ciertas “circunstancias especiales” que afectaban a dicha red pero que no quedaban concretadas en el acta. El Comité dio su entera conformidad y aprobación a dicho acuerdo.

3.124. Sábado, 7 de febrero de 1925

La CTNE retira los cargos en la causa del desfalco

Después de unos días sin grandes novedades en el asunto del desfalco, los periódicos publicaban que en la noche del 7 de febrero se había presentado un escrito de la compañía retirando los cargos en la causa del desfalco. El procurador Jaime Cortés, en nombre y representación de la CTNE, entregó una instancia en el juzgado de guardia en el que anunciaba que la empresa desistía de continuar la acción penal contra los procesados por el caso de desfalco, renunciando igualmente a las indemnizaciones que pudieran corresponderle. El motivo esgrimido por la compañía fue que, habiendo realizado el Consejo de Administración un arqueo de caja, no aparecieron irregularidades que pudieran demostrar la denuncia, debido a un error del

contador de la empresa. Ante la falta de pruebas concluyentes, se decidía no continuar con el proceso judicial abierto⁴⁹⁵.

A continuación se informaba de un rumor que decía que “a primeras horas de la noche, en el despacho del abogado de la Compañía de Teléfonos, fueron abonadas las responsabilidades civiles emanadas de la causa que instruye”. El abogado al que se refiere el artículo tuvo que ser, necesariamente, José Bertrán y Musitu. Gracias al acta de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada tres días antes sabemos que éste estaba autorizado a cobrar de los herederos de Parellada todo el dinero que debían a la CTNE como consecuencia de la incorporación de la Peninsular y de sus filiales. Por lo tanto no parece descabellado pensar que Bertrán y Musitu cobró las responsabilidades civiles del caso de manos de los descendientes del empresario catalán, aunque es un extremo que, por supuesto, no ha podido ser probado.

Lo que sí es seguro es que la compañía retiró todos los cargos este día 7 de febrero y que fue debido a “una transacción en el asunto de referencia, cuyo resultado ha sido asegurar a la Compañía la cantidad que con motivo del desfalco le afectaba”⁴⁹⁶, tal y como explicaba Ruiz Senén en la reunión del Consejo de Administración de finales de mes. Es decir, que los motivos en los que fundamentaban su resolución ante el juez fueron sencillamente mentira: ni el Consejo de Administración realizó un arqueo de caja, ni el contador de la compañía había cometido error alguno. Simplemente se había recuperado la cantidad desfalcada y con eso se dieron por satisfechos, siempre con la intención de desvincularse del asunto de la manera más pronta y limpia posible.

3.125. Lunes, 9 de febrero de 1925

Incautación de la red municipal de Alcira

En la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 11 de febrero Gumersindo Rico informaba de que se había firmado la escritura de adquisición del centro telefónico urbano de Alcira⁴⁹⁷, una localidad valenciana que contaba con 20.839

⁴⁹⁵ La Vanguardia, 8 de febrero de 1925, p. 17.

⁴⁹⁶ Acta nº 10 del Consejo de Administración, 26 de febrero de 1924, libro 1, pp. 25-26.

⁴⁹⁷ Acta nº 25 del Comité Ejecutivo, 11 de febrero de 1925, libro 1, p. 33.

habitantes en 1920⁴⁹⁸. La incautación se había llevado a efecto el 9 de febrero, aunque el acuerdo establecía que la explotación se retrotraía al día 1 de enero de 1925. El precio final había sido de 750.000 pesetas, una cantidad muy elevada, sobre todo si se compara con otras adquisiciones realizadas en aquellos meses. En el acta de la sesión anterior se indicaba que en este contrato confluían “circunstancias especiales”, aunque no se especificaban cuáles eran éstas⁴⁹⁹.

No se dispone del número exacto de abonados de la red de Alcira en el momento de su reversión a la CTNE, pero sí se conoce este dato para la fecha 31 de diciembre de 1926. Según la memoria social del año 1926, el centro telefónico de esta localidad contaba con 164 abonados⁵⁰⁰, lo que arroja un dato de penetración del 7,8 por mil, un valor bastante bueno si se tiene en cuenta el tamaño del municipio.

El elevado coste que supuso para la CTNE la adquisición de este centro telefónico se hace aún más patente al calcular el precio pagado por abonado a la red: con 164 abonados, la compañía había pagado más de 4.500 pesetas por abonado. Ya hemos visto como la Telefónica compró algunas redes por cantidades de lo más diversas, desde las 172 pesetas por abonado en el caso de Málaga hasta las 900 en el centro telefónico urbano de Granada. Entendemos que estas diferencias tan grandes vendrían derivadas de las capacidades negociadoras de los distintos concesionarios, así como del estado de las redes en el momento de su reversión. No obstante, el precio relativo pagado por el sistema municipal de Alcira superaba con creces el ya muy favorable para el anterior propietario de la red granadina. Las “circunstancias especiales” que tuvieron que rodear aquellas negociaciones tuvieron que ser muy significativas, porque de otra forma no se entiende el alto coste que ocasionó este centro de poco tamaño.

El asunto del desfalco y la nota de la CTNE

Como no podía ser de otra forma, la noticia de la renuncia por parte de la compañía a proseguir la acción penal contra los acusados en el caso de desfalco no había dejado impasible a nadie. Los abogados defensores de los detenidos solicitaron

⁴⁹⁸ Población según el censo de 1920. <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁴⁹⁹ Acta nº 24 del Comité Ejecutivo, 4 de febrero de 1925, libro 1, p. 31.

⁵⁰⁰ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1926, p. 49.

la libertad, que fue denegada por el juez. Éste a su vez había dirigido un oficio a la CTNE preguntando “en qué concepto había formulado la denuncia por estafa que dio origen al procesamiento y prisión sin fianza de los señores Gomila y Escribano”, puesto que ahora declaraba la empresa que no tenía pruebas concluyentes contra ellos⁵⁰¹. Por supuesto, los abogados estaban preparando sendos recursos pidiendo la reforma del auto de procesamiento dictado contra ellos, ahora que la situación había cambiado.

Por su parte, la compañía había redactado una nota, fechada el día 8 de febrero, explicando su versión de lo sucedido y solicitaba a los periódicos que la publicaran. En ella comenzaban explicando que la CTNE se había hecho cargo de las tres compañías de la Peninsular mediante fusión por incorporación y que “con motivo de la entrega de los saldos de los bancos que figuraban en la contabilidad de las compañías absorbidas, apreció una diferencia importante de la que no se dio en aquellos instantes ni explicación, ni satisfacción cumplida”. Consecuencia de ello y tras el asesoramiento jurídico oportuno, se cursó la denuncia consiguiente que había derivado en la detención de los dos antiguos empleados de la Peninsular. A continuación, sin dar detalles, explicaban cómo se había resuelto el asunto:

Gracias a las justificaciones y explicaciones que le han dado y a las gestiones realizadas por los representantes de la Compañía obran en poder de la misma, la totalidad de los saldos activos de las dichas sociedades fusionadas, por cuya razón en el día de ayer, creyó la Compañía un deber retirarse del sumario instruido con motivo de tales hechos.

Es decir, que primero habían advertido una diferencia importante en las cuentas de la Peninsular, se procesó la denuncia y, después de ciertas explicaciones y gracias a las “gestiones realizadas”, el dinero volvió a las cuentas de la compañía. Por último, la empresa cerraba la nota defendiendo su modo de proceder y la absoluta legalidad con la que se había realizado la compra de las compañías del grupo Peninsular.

⁵⁰¹ La Vanguardia, 10 de febrero de 1925, p. 8.

3.126. Miércoles, 11 de febrero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁰²

Valentín Ruiz Senén se expresaba al comienzo de esta sesión en unos términos similares a como ya lo hiciera la semana anterior: incidiendo en la necesidad de llevar a cabo cuanto antes la organización de la plantilla según un sistema de categorías profesionales con sueldos máximos y mínimos. Proctor le informó entonces de que dicha estructuración ya había dado comienzo con un “sistema de remuneraciones para los pequeños Centros”.

El Comité acordó pagar a las acciones preferentes de la compañía un dividendo del 7% anual que estatutariamente se les asignaba, en atención al próximo vencimiento del trimestre. Los miembros valoraron la posibilidad de no pagar dividendos en esta ocasión, pero finalmente se aprobó la decisión de hacerlo “en atención a la necesidad de mantener a todo evento el crédito de la Compañía”. Además se decidió cargar provisionalmente el importe de dicho dividendo en una cuenta especial hasta que se supiera el beneficio que le correspondía exactamente.

Proctor dio lectura a una carta del Director General de la empresa, Javier Martí-Codolar, en la que expresaba sus deseos de cesar de su cargo durante algún tiempo por motivos de salud⁵⁰³. El Comité accedía a dicha solicitud, “si bien lamentaba las causas que motivan este alejamiento temporal y deseándole un rápido restablecimiento”. Se puede apreciar que el hecho de que el cargo de Director General quedara vacío no preocupaba especialmente al Comité Ejecutivo, ya que no dedicó mucho más tiempo al asunto y no designó a ninguna persona para ocupar dicho puesto en sustitución de Martí-Codolar, aunque el cese fuere temporal. Esto viene a confirmar lo que ya apuntamos con anterioridad de que este cargo no era fundamental en la estructura organizativa de la empresa y que se ocupó más por la costumbre de su existencia que por una verdadera necesidad. Cuando Javier Martí-Codolar abandonó su puesto definitivamente en el mes de mayo, se tardaron cuatro años en nombrarse a su sustituto, que finalmente fue el ingeniero catalán Esteban Terradas.

⁵⁰² Acta nº 25, 11 de febrero de 1925, libro 1, pp. 31-33.

⁵⁰³ Este cese se producía sólo unos días después del escándalo del desfalco, en el que parecía estar implicado Enrique Parellada. Javier Martí-Codolar había sido, durante muchos años, socio de Parellada en la Compañía Peninsular de Teléfonos y una persona de su más absoluta confianza.

En otro orden de cosas, el Comité trató el asunto de las quejas que había expuesto el Subsecretario de la Gobernación, Martínez Anido, sobre deficiencias del servicio telefónico en las comunicaciones solicitadas por su Subsecretaría. En este sentido se presentó un informe que indicaba que dicho departamento había realizado un promedio de seis conferencias diarias en el último mes, que se habían celebrado “normalmente y sin dificultad no obstante la congestión de servicio en los circuitos”. El Comité acordó entonces escribir al Subsecretario de la Gobernación para explicarle que se extremarían las medidas para evitar las deficiencias en el servicio que habían motivado las quejas.

Proctor informó sobre una entrevista que había celebrado con el Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Alfonso Sala, para tratar el tema del desfaldo ocurrido en Barcelona. El Comité acordaba entonces “la más absoluta abstención” y a su vez lamentaba que este desagradable asunto pudiera afectar la reputación de varias personas para las que los miembros guardaban “completa consideración”.

3.127. Jueves, 12 de febrero de 1925

Se constituye oficialmente la Asociación general de Empleados y Obreros

La Revista Telefónica Española, en su edición de febrero de 1925, anunciaba con orgullo que el día 12 de febrero de 1925 quedó constituida de manera oficial la Asociación general de Empleados y Obreros de la Compañía Telefónica Nacional de España. Esta nueva organización nacía como una suerte de sindicato a la que los funcionarios de la empresa podían adherirse y cuyo fin era convertirse en “el vínculo de fraternidad entre personal y Compañía, el portavoz de las legítimas aspiraciones de todos los que trabajamos en ella y aspiramos a que unidos todos, sin dejar uno solo, formemos una Asociación poderosa y fuerte”.

La mayor parte de los empleados de la CTNE se encontraban sindicados en alguna de las tres asociaciones que ya existían, desde hacía años, en la Compañía Peninsular, la Madrileña y la Sociedad General. Era intención de la propia Telefónica Nacional que estas tres entidades quedaran fusionadas en la recién creada Asociación general de Empleados y Obreros, de la misma forma que las tres compañías habían quedado incorporadas dentro de la Telefónica. Las asociaciones originales seguirían existiendo, de manera provisional, si bien la Asociación general de Empleados y Obreros de la CTNE sería la única con la que la compañía atendería los asuntos relaciones con los obreros.

Las conversaciones para la creación de esta Asociación comenzaron a finales de 1924, bajo la supervisión y consejo de Sosthenes Behn. Los estatutos provisionales y la Junta directiva quedaron aprobados unánimemente el 2 de febrero y ese mismo día se presentaron en la Dirección general de Seguridad. Transcurridos los ocho días que establecía la normativa vigente, el día 12 de febrero quedó oficialmente constituida, con arreglo a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 y su reglamento de 10 de marzo de 1923. Fue ratificada una Junta directiva formada por ocho miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Contador y dos vocales. La Presidencia de la asociación quedó en manos de Luis Alcaraz Otaola, ingeniero por el que la compañía sentía un gran aprecio y tenía en alta consideración.

El hecho de que este organismo fuera inspirado directamente por la persona de Sosthenes Behn y que el control del mismo recayera en un empleado tan vinculado a la compañía y de un rango tan elevado como Luis Alcaraz⁵⁰⁴ hizo dudar desde el principio de la autonomía que la Asociación iba a alcanzar con respecto a la compañía que la sostenía. De hecho, el artículo de la Revista Telefónica Española incluía también una referencia al hecho de que los empleados no pagaban cuota por asociarse (cosa que no ocurría en las tres sociedades originales); de lo que se entiende que todos los gastos corrían a cuenta de la propia CTNE, como si se tratara de un departamento más de la empresa. En una carta que Logan N. Rock, Inspector General de la empresa, dirigía a Luis Alcaraz en agosto de aquel año, se indicaba que la compañía buscaría “la forma de proporcionar a la Asociación [...] ingresos bastantes para asegurar su independencia económica”⁵⁰⁵, lo que es una contradicción: si la empresa iba a sufragar completamente la Asociación, ésta no podría disfrutar nunca de independencia económica. Estaba por demostrarse por lo tanto que la nueva organización de empleados no se fuera a rendir ante la mano que le daba de comer y que fuera a cumplir realmente sus objetivos de protección de los derechos propios de

⁵⁰⁴ Yuste-2004, pp. 279-280: “Luis Alcaraz Otaola, Subingeniero Jefe de la Compañía que, a la sazón, formaba parte de la primera promoción de Ingenieros de Telecomunicación de la Escuela General de Telegrafía. Ocupó este puesto [el de Presidente de la Asociación general de Empleados y Obreros] hasta abril de 1927, fecha que fue sustituido por otro ilustre Ingeniero de Telecomunicación perteneciente, también a aquella primera promoción: Emilio Novoa González. Luis Alcaraz fue nombrado, entonces, Presidente de Honor de la Asociación General en reconocimiento a sus méritos y a la labor realizada en la misma y, menos de un año después, en enero de 1928, fue enviado a Brasil por la ITT para ocupar el puesto de Ingeniero Jefe en la Compañía Telefónica de Río Grande del Sur.”

⁵⁰⁵ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, pp. 5-6.

los funcionarios, reclamación de abusos y defensa de los intereses de los mismos en las negociaciones sobre jubilaciones, bajas laborales y otros asuntos sociales.

No en vano, la compañía había participado con entusiasmo en la constitución de la Asociación de Empleados y Obreros, tal y como se expresaba en este número de la revista: “Para ello tenemos un factor importantísimo a nuestro favor: el decidido apoyo de la Compañía Telefónica Nacional de España, que simpatiza con nuestra idea”.

La primera acción que quiso realizar la Asociación fue la de dirigirse a todos los empleados a través de las páginas de la Revista Telefónica Española, exponiendo los motivos que habían inspirado su creación, así como el deseo de que el personal se adhiriera a la organización con entusiasmo. Así mismo explican que cada distrito telefónico tendría un Vocal que formaría parte la Junta Directiva, sería elegido por votación popular y defendería los intereses de su correspondiente región en una reunión trimestral. El Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Contador y los dos Vocales formarían a su vez parte de lo que vino a llamarse Comité ejecutivo permanente y se reuniría con carácter quincenal. Cerraban la información sobre la nueva Asociación con la reproducción de los estatutos provisionales, que tendrían vigencia hasta que se confeccionara el reglamento definitivo que gobernaría la sociedad.

Banquete de despedida para el Capitán Rock

El día 12 de febrero de 1925 se celebró un almuerzo con motivo de un viaje a Estados Unidos del Inspector General de la compañía, Logan N. Rock. Fue organizado por el Departamento de lo Contencioso en Lhardy, un famoso restaurante situado en el número 8 de la Carrera de San Jerónimo, que ha permanecido abierto hasta la actualidad y que se hizo famoso por su célebre clientela, que ha incluido a destacados políticos, artistas e intelectuales de los siglos XIX y XX, así como a miembros de la realeza española como Isabel II o Alfonso XII.

Al homenaje asistió toda la cúpula directiva de la compañía: el Presidente, Marqués de Urquijo; los Vicepresidentes, Valentín Ruiz Senén, Lewis J. Proctor y Julián Cifuentes; el Tesorero, Marqués de Perijáa; y el Secretario, Gumersindo Rico. Acudieron igualmente los más altos responsables de varios departamentos: el Director Comercial, Frank E. Hodges; el Director de Tráfico, Howard Soler; el Ingeniero Jefe,

Fred T. Caldwell; y el Director de Publicidad, Francisco Borondo. Por último, también asistieron Geo J. Strong, Interventor General, varios subdirectores de Distrito, representantes de la Asociación general de Empleados y Obreros, así como otros cargos notables.

El capitán Logan N. Rock, nacido en Louisville (en el estado de Kentucky) en 1890, era uno de los más cercanos colaboradores del coronel Behn y hombre de su más absoluta confianza. Ambos se conocieron durante su estancia en Francia cuando el gobierno de Estados Unidos tomó parte en la I Guerra Mundial y envió sus tropas a Europa. Allí ascendieron hasta los cargos de capitán el uno y teniente coronel el otro. Es de sobra sabido el gusto que tenía Sosthenes Behn por rodearse de oficiales del Ejército retirados, como él, y cubrir los cargos más importantes de las compañías que conducía con las amistades forjadas en aquellas campañas militares en las que participó⁵⁰⁶.

Logan N. Rock, al que se le había confiado el papel de Inspector General de la compañía española, también ostentaba cargos de enorme poder en otras empresas de la órbita de la ITT: era Secretario y Consejero jurídico de la multinacional, Secretario de la *Porto Rico Telephone Company*, Vicesecretario de la *Cuban Telephone Company*, Secretario de la *Radio Corporation de Cuba y Puerto Rico* y Consejero y Vicesecretario de la *Cuban and American Cable Company*. Con estos datos biográficos se entiende que Rock tuviera que volver con bastante frecuencia a atender sus obligaciones al otro lado del Atlántico.

La crónica de este almuerzo se puede leer, de manera resumida, en la nota que apareció en el diario ABC⁵⁰⁷ o con mayor detalle en el reportaje de la Revista Telefónica Española⁵⁰⁸. En este último se transcriben los discursos en honor al capitán Rock pronunciados por Gumersindo Rico y por Luis Alcaraz, Presidente de la Asociación de Empleados y Obreros de la CTNE. En ambos brindis se ponía de manifiesto el afecto general por Logan Rock y de igual forma se destacaban los lazos de unión existentes entre la Compañía Telefónica Nacional de España y la International Telephone and Telegraph Corporation. Así, el Secretario definió a la multinacional estadounidense como “la madre e inspiradora de todas estas

⁵⁰⁶ Yuste-2004, p. 62

⁵⁰⁷ ABC, 14 de febrero de 1925, p. 11.

⁵⁰⁸ Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, pp. 20-22.

organizaciones telefónicas nacionales”, una interesante circunlocución para definir el vínculo entre la CTNE y la ITT, sin duda mucho más sutil que las palabras que luego pronunciaría el homenajeado.

El capitán Rock comenzó su discurso con unas divertidas declaraciones sobre los estereotipos españoles y sobre el cariño que sentía por España después del tiempo que había dedicado a trabajar en nuestro país. Con respecto a las relaciones existentes entre las dos compañías, Rock se mostró mucho más espontáneo, refiriéndose a la Compañía Telefónica Nacional de España como “su filial”. No pudo ser más sincero el homenajeado al catalogar a la compañía española como una subsidiaria más dentro del “International System” que la corporación norteamericana estaba extendiendo por todo el mundo. Quedaban lejos estas declaraciones de las habituales soflamas de los directivos de la compañía y los políticos que ampararon la concesión, que no cedían en sus declaraciones, proclamando siempre la supuesta españolidad de la compañía y recurriendo a giros lingüísticos para justificar el papel de la ITT en la telefonía de nuestro país.

Sustitución de cables aéreos en Madrid

Cuando la CTNE se hizo con la concesión del sistema telefónico nacional tuvo que emprender una intensa labor para evaluar la situación en la que se encontraba todo el equipamiento de las redes que iba adquiriendo, desde las centrales hasta los tendidos de cables, incluyendo instalaciones urbanas, rurales o de líneas interurbanas. En general, el estado de conservación era lamentable y necesitado de una amplia reforma y restructuración, debido, como se sabe, al lógico interés de los antiguos concesionarios por maximizar beneficios en detrimento de la inversión en la mejora de las redes.

La situación en Madrid no era muy distinta, a pesar de tratarse de la capital y de una ciudad que dependía poderosamente de este medio de comunicación para la transmisión de despachos oficiales, de noticias o de movimientos empresariales y financieros. En el caso concreto del cableado aéreo de la ciudad, el sistema requería un saneado integral. Los abonados de Madrid llevaban años quejándose de la mala calidad del servicio, problema que se acentuaba en los días de lluvia por el hecho de contar en muchas zonas con hilos desnudos o cables sensibles a la humedad, con aislamiento de caucho o incluso de papel, lo que provocaba que se cruzaran eléctricamente las líneas. La Revista Telefónica Española explicaba en su edición de

febrero de 1925 que en el sector de la central de calle Mayor no llegaba la corriente necesaria para que la señal de llamada alcanzara los cuadros, mientras que en las centrales de Jordán y Hermosilla lo que ocurría debido a ese cruce de líneas era justamente lo contrario: quedaban encendidas a la vez varias luces de llamada⁵⁰⁹.

La compañía se había propuesto sustituir la planta exterior de toda la red municipal, soterrando el cableado en el centro histórico, allá donde fuera posible, y haciendo desaparecer las antiestéticas torres metálicas llenas de conductores que poblaban y afeaban la ciudad. Mientras este proyecto no se pudiera llevar a cabo de una manera completa, cosa que no se empezó a realizar hasta finales de 1925, la empresa decidió ir sustituyendo los cables antiguos situados en zonas de mayor tráfico por unos nuevos, labor que dio comienzo el día 12 de febrero⁵¹⁰.

3.128. Viernes, 13 de febrero de 1925

Reunión entre Lewis J. Proctor y el Presidente de la Mancomunidad

En la reunión del Comité Ejecutivo del 11 de febrero se daba cuenta de una entrevista celebrada entre Proctor y Alfonso Sala, presidente de la Mancomunidad de Cataluña, para intercambiar opiniones sobre el delito de desfalco que había agitado a la sociedad barcelonesa. No obstante, parece que sus obligaciones retuvieron a Sala durante bastantes días en Madrid puesto que el diario La Vanguardia publicó varios artículos sobre las reuniones y gestiones que estaba realizando en la capital. En la edición del día 13 de febrero se informaba de una segunda entrevista con Proctor⁵¹¹:

Por la noche ha visitado a don Alfonso Sala, en el hotel donde se hospeda, el director (sic) de la Compañía Telefónica Nacional, Mr. Proktor (sic), para hablarle de la conveniencia de que la adquisición de las líneas de la Mancomunidad de Cataluña se haga de una sola vez.

Esto significa que las negociaciones entre la CTNE y la Mancomunidad para la adquisición de la red telefónica seguían produciéndose, o que por lo menos la Telefónica no cejaba en su empeño de hacerse con sus líneas y centros telefónicos

⁵⁰⁹ Revista Telefónica Española, nº 2, febrero de 1925, p. 3.

⁵¹⁰ Revista Telefónica Española, nº 4, abril de 1925, pp. 16-22.

⁵¹¹ La Vanguardia, 13 de febrero de 1925, p. 17.

urbanos lo antes posible. No en vano, la concesión de la que disfrutaba la Mancomunidad finalizaba en 1957 y la compañía consideraría que se trataba de un tiempo demasiado largo como para esperar a que caducara. Sin duda sería mucho más rentable comprar toda la red cuanto antes, a pesar del desembolso monetario que eso supondría, para comenzar a explotarla y obtener beneficios lo antes posible. Que todo el sistema interurbano de una región tan importante como Cataluña, así como algunos de sus centros urbanos, no estuviera bajo control de la CTNE era algo que preocupaba a los directivos de la compañía.

Parece que este proceso de negociación se retomó con cierta energía en noviembre de 1924 gracias a la intervención de Sosthenes Behn, que llegó a anunciar la creación de una comisión de valoración de la red de Cataluña similar a la que había examinado y tasado las propiedades del Estado. Sin embargo, aquellos contactos se debieron enfriar porque no se tiene constancia de ningún movimiento ni del nombramiento de ninguna comisión tras un viaje que Alfonso Sala realizó a Madrid a finales de noviembre y que tenía el objetivo, entre otros, de tratar la incautación de la red telefónica catalana por parte de la CTNE. La siguiente prueba que se tiene de las relaciones entre la compañía y la Mancomunidad es este artículo de La Vanguardia de 13 de febrero de 1925 que revela una entrevista mantenida con Lewis J. Proctor. No obstante, parece que el Vicepresidente de la CTNE visitó a Sala por iniciativa propia y de manera informal (por la noche y en su hotel), más que como parte de una reunión oficial previamente acordada entre las dos partes.

3.129. Martes, 17 de febrero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵¹²

Esta sesión del Comité Ejecutivo fue mucho más corta de lo habitual y además se trataron asuntos de importancia menor. Cabe destacarse simplemente la decisión de crear un fichero de empleados con las fotografías de todos ellos para la mejor identificación y seguimiento del trabajo de cada uno. Además, se acordó pagar el alquiler trimestral del edificio que ocupaba la sede central de la empresa en el número 5 de la Gran Vía.

⁵¹² Acta nº 26, 17 de febrero de 1925, libro 1, pp. 33-34.

Inauguración de la Escuela de Empalmadores de Barcelona y Madrid

La Compañía Telefónica Nacional de España estaba obligada, por contrato, a colocar en su plantilla a todos los trabajadores que prestaban sus servicios en las redes que fuera adquiriendo por toda España, lo que incluía funcionarios del Cuerpo de Telégrafos, empleados del grupo Peninsular, de pequeños concesionarios municipales, etc. Pronto se encontró con una nómina de trabajadores tan abultada como heterogénea, tal y como manifestaban varios consejeros de la empresa en las sesiones del Comité Ejecutivo. Valentín Ruiz Senén fue el directivo que más insistió para que se adoptara, cuanto antes, un sistema general de plantilla, jerarquizado y con perfiles profesionales perfectamente definidos, con la intención de estructurar la empresa lo antes posible y acabar con las diferencias existentes entre empleados. Proctor y Rock ya se encontraban trabajando en dicho sistema, basándose en la experiencia de la ITT en la administración de la *Cuban* y la *Porto Rico Telephone Co.*

Además de la necesaria organización del personal, tarea nada fácil debido a los regímenes laborales tan dispares con los que llegaban los empleados de sus antiguos concesionarios, la compañía emprendió una intensa labor de formación de sus trabajadores, ya que en este sentido también llegaban con habilidades y conocimientos de lo más diverso. En primer lugar, la CTNE impulsó la creación de Escuelas para el aprendizaje, con el fin de adecuar el nivel de sus empleados al manejo de los equipos de la empresa y formar a nuevos trabajadores, para que entraran ya con los conocimientos adecuados. Más tarde se crearía incluso un Departamento de Instrucción, que sirvió para centralizar todo el sistema de enseñanza de la compañía⁵¹³. Las enseñanzas en dichas Escuelas eran gratuitas y, en algunos casos, incluso se pagaba un pequeño sueldo a los aprendices y “se les facilita un camino de ventura y trabajo”. La Revista Telefónica Española se refería así a su labor formativa⁵¹⁴:

La Compañía Telefónica Nacional de España, además del servicio público que presta, realiza una labor docente que pasa inadvertida para el gran público. Esta labor de enseñanza, verdadera función social, que tan intensamente ha emprendido la Compañía, encuentra dos de sus más brillantes manifestaciones en las Escuelas de Empalmadores de Madrid y Barcelona.

⁵¹³ Yuste-2004, p. 277.

⁵¹⁴ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, pp. 44-46.

La Escuela de Empalmadores de Barcelona fue fundada el día 17 de febrero de 1925 y contaba en un principio con seis aprendices, aunque en noviembre de aquel año ese número había crecido hasta los 25 alumnos. La Escuela, dirigida por Julián Tirado Pérez, se encontraba en calle de Pallars y ocupaba un cobertizo y un solar adjunto⁵¹⁵. La Escuela de Empalmadores de Madrid había sido creada un mes antes, a mediados de enero de 1925 y estaba dirigida por un ingeniero estadounidense, W. N. Daniels, ayudado por otro instructor llamado Rufo Sanjuán. En sus comienzos contaba con diez aprendices, aunque en mayo ya había alcanzado la treintena⁵¹⁶.

La Revista Telefónica Nacional informaba puntualmente sobre la inauguración de estas escuelas, resaltando siempre la formación que la CTNE ofrecía a los jóvenes españoles. De esta forma se sabe que el día 21 de septiembre de 1925 daban comienzo las clases en la Escuela de Mecánicos de Barcelona con 66 alumnos y el 20 de octubre en la de Capataces y Celadores de Madrid. Aquel mes también quedó inaugurada la Escuela de Contabilidad⁵¹⁷.

3.130. Miércoles, 18 de febrero de 1925

El centro telefónico urbano de Manzanares y la red de Ciudad Real

El centro telefónico urbano de Manzanares, explotado por un concesionario particular, se trataba del único municipio de la provincia de Ciudad Real que no estaba explotado por el Estado o por los ayuntamientos. En el acta de la sesión celebrada por el Comité Ejecutivo el 14 de enero 1925 se daba cuenta de la adquisición de este centro telefónico por 62.000 pesetas. La reversión de la red a la Compañía Telefónica Nacional se produjo de manera oficial el día 18 de febrero de 1925⁵¹⁸.

Según el censo de 1920, Manzanares contaba con 15.846 habitantes⁵¹⁹, y según la memoria de la CTNE de 1926, el número de abonados era de 123 a finales de aquel año. Estos datos arrojan un valor de penetración telefónica entorno al 7 por

⁵¹⁵ En la edición de mayo de Revista Telefónica Española se indicaba que la Escuela fue fundada el 15 de febrero, dos días antes, y que el número inicial de alumnos fue de doce.

⁵¹⁶ Revista Telefónica Española, nº 5, mayo de 1925, pp. 20-26.

⁵¹⁷ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, pp. 30-32; nº 12, diciembre de 1925, pp. 31-32;

⁵¹⁸ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional, año 1926, p. 63.

⁵¹⁹ <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

mil, muy superior a la media provincial, que a principios de la década de 1920 se situaba en torno al 3 por mil⁵²⁰. La adquisición de la red implicó un coste para la CTNE de unas 500 pesetas por abonado.

La diputación de Ciudad Real también se había encargado de la red interurbana de su provincia, tomando el ejemplo de las de Guipúzcoa y Vizcaya y, en menor medida, Islas Baleares. La idea de construir una red provincial inspirada en el proyecto de telefonía de Francos Rodríguez surgió en 1915 y contó con el beneplácito del Cuerpo de Telégrafos, que colaboró activamente en su formación. Sus promotores fueron un Jefe de Sección del Cuerpo, Jenaro Ramón Roldán y Nieto, el encargado de la estación telegráfica de La Solana, Luis Mira y de la Rubia, y un diputado provincial, Francisco García Catalán. La red se comenzó a construir en 1916 y el 15 de mayo de aquel año se inauguró el primer circuito telefónico de la Diputación. Para el año 1924 el servicio llegaba a 74 pueblos de la provincia y se habían construido 1.883 kilómetros de líneas interurbanas. Los centros telefónicos urbanos se encontraban repartidos de la siguiente forma: 30 controlados por el Cuerpo de Telégrafos, 43 explotados por los consistorios y 1 por un concesionario privado (Manzanares)⁵²¹

3.131. Jueves, 26 de febrero de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵²²

En el caso del desfalco de Barcelona, el Comité Ejecutivo acordó informar al Consejo de Administración de la “satisfactoria solución para esta compañía”. En este sentido, la Dirección de la empresa había tomado la decisión de no continuar como parte activa en el proceso, siendo fieles de esa forma a la política de la empresa de no involucrarse en las “derivaciones que el asunto pueda tener” y que ya no podían aportar ningún provecho a la empresa. Dicho de otra forma, la compañía se desvinculaba del caso, ahora que sus intereses se habían visto protegidos, para no continuar ligando su nombre a un asunto tan espinoso y que a buen seguro daría mala imagen. No obstante, los miembros del Comité lamentaban que esas posibles derivaciones pudieran acarrear consecuencias desagradables para personas que merecían su mayor consideración.

⁵²⁰ Calvo-1998, p. 65.

⁵²¹ Electra, 20 de agosto de 1924, nº 29, pp. 573-579.

⁵²² Acta nº 27, 26 de febrero de 1925, libro 1, pp. 34-35.

Proctor dio cuenta en esta reunión de algunas gestiones destinadas a la adquisición de edificios en las ciudades de Santander, Sevilla y Málaga. Además, el Comité aprobó una proposición que había enviado el Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda, Carrillo de Albornoz, sobre reparto de dividendos y contabilidad de pago de los mismos.

Para finalizar, el Comité acordó proponer al Consejo de Administración que convocara una Junta General ordinaria de accionistas que estatutariamente debía celebrarse antes del 1 de abril de 1925. Siguiendo también lo establecido en los estatutos, la convocatoria de la misma tenía que hacerse como mínimo con 30 días de antelación y durante los 15 días anteriores a dicha Junta deberían ponerse a disposición de los accionistas todos los documentos necesarios para comprobar las operaciones realizadas, a fin de que pudieran examinar el estado de la compañía, su administración y el balance anual de la misma. Añadía el Comité Ejecutivo una declaración muy interesante a este respecto:

En atención a que en las Juntas Generales ordinarias sólo las acciones de esta misma clase tienen voz y voto y por ello podemos contar de antemano con la unánime conformidad de las mismas, por estar en su totalidad en poder de los presentes, podrá prescindirse, si así lo juzga y estima conveniente el Consejo, de la antelación de treinta días para la convocatoria y en tal caso celebrar la mencionada Junta en la fecha que considere oportuno aunque siempre quince días después a la de la convocatoria.

Como se puede ver, se asumía de antemano que la convocatoria de la Junta General de accionistas era un mero trámite burocrático al que estaban obligados por sus estatutos sociales, en lugar de una verdadera reunión en la que los suscriptores de las acciones pudieran discutir sobre la marcha de la compañía, las partidas en las que se invertía su capital, la política empresarial, las adquisiciones de inmuebles o materiales más importantes, etc. En este caso, los accionistas ordinarios, los que contaban con voz y voto, estarían todos de acuerdo con cualquier decisión que se tomara puesto que estaban todos representados en aquella sesión del Comité. En realidad, sólo hacía falta que estuviera representada la ITT Co., que era la depositaria del 80% de las acciones ordinarias (24.120 de las 30.000), eso sin contar las que estaban en manos de su filial la Securities (6%) y los miembros de la multinacional

presentes en el Consejo de Administración (1%)⁵²³. La resolución que aquí se estaba tomando, la de convocar la Junta General sólo con quince días de antelación en lugar de treinta, era la decisión más nimia de todas las que habrían de tomarse en dicha reunión y que evidentemente no admitirían discusión alguna.

Reunión del Consejo de Administración⁵²⁴

Valentín Ruiz Senén, en el habitual resumen de los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo en sus reuniones del último mes, hizo especial referencia al caso de desfalco en Barcelona y a “los favorables resultados de las gestiones realizadas en defensa de los intereses sociales”. La compañía había intentado desvincular el nombre de la misma con todo este asunto, ya que, según la Dirección, la actuación de todos sus trabajadores había sido siempre correcta e irreprochable, aunque lamentaban que la cuestión pudiera determinar “molestias para personas de nuestra mayor consideración y respeto”.

El Vicepresidente también explicó que se había autorizado al abogado José Bertrán y Musitu para llevar a efecto “una transacción en el asunto de referencia, cuyo resultado ha sido asegurar a la Compañía la cantidad que con motivo del desfalco le afectaba”. Los términos en los que se expresan las actas con respecto al caso de desfalco son vagos e imprecisos, por lo que no nos permiten entender completamente la implicación de cada uno de los protagonistas en este asunto tan delicado. No obstante, las palabras de Ruiz Senén dejan intuir que dicha transacción tuvo que ver con la autorización que recibió Bertrán y Musitu del Comité Ejecutivo en su reunión del día 4 de febrero. El abogado había sido facultado en aquella fecha para llevar a cabo dos cuestiones: recibir todo el dinero que los descendientes de Enrique Parellada parecían deber a la Compañía y pactar, con el precio y las condiciones que estimara más convenientes, un acuerdo con estos descendientes que aclarara las responsabilidades del empresario catalán en la administración de las empresas del grupo Peninsular.

⁵²³ Yuste-2004, p. 218.

⁵²⁴ Acta nº 10, 26 de febrero de 1925, libro 1, pp. 25-27.

Es difícil esclarecer el asunto completamente, pero sí parece claro que las gestiones entre Bertrán y Musitu y los herederos de Parellada resolvieron el asunto del desfalco, por lo menos en lo que afectaba a los intereses de la CTNE. También sabemos que el día 7 de febrero fueron abonadas las responsabilidades civiles emanadas de la causa en el despacho del abogado. Fueran los descendientes del empresario catalán los que pagaran esta cantidad o fueran otras personas, el caso es que la compañía quedó satisfecha con esta solución y decidió no continuar con la acción penal contra los procesados. La Dirección tomó la resolución de alejarse discretamente del caso y no involucrarse más en un asunto tan desagradable y que podría traer consecuencias muy negativas de cara a la opinión pública.

A continuación se resumía el resto de asuntos discutidos en las reuniones del Comité Ejecutivo del mes de febrero. El Consejo también aprobaba el acuerdo adoptado sobre el pago del dividendo del 7% que correspondía a las acciones preferentes y que correspondía abonar en aquel trimestre. Tal y como se recordó en esta reunión, las tarifas de los servicios telefónicos de la compañía garantizaban en todo momento el interés asignado (así quedaba estipulado en el contrato con el Estado), por lo que no debería haber inconveniente alguno para proceder al pago de dicho dividendo.

El Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda, Antonio Carrillo de Albornoz, vio aprobada una consideración que había presentado al Consejo de Administración sobre reparto de dividendos y forma de contabilizar el importe de estos pagos y que contó con el apoyo unánime de todos los miembros de la Dirección. Carrillo de Albornoz se mostró muy agradecido por “la preferente atención dispensada a la proposición que ha presentado”. Por su parte, el Delegado del Ministerio de la Guerra, Miguel Manella, manifestó los deseos que le había transmitido el Profesor de Comunicaciones de la Escuela Superior de Guerra de que sus alumnos visitaran las centrales de la compañía. El Marqués de Urquijo se declaró entusiasmado con la idea, expresando “en nombre del Consejo la satisfacción con que el mismo verá que esa proyectada visita se lleva a efecto, como asimismo poniéndose incondicionalmente a la disposición de aquel Centro para cuantas facilidades necesite de la Compañía”.

De acuerdo con la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo y a propuesta de éste, el Consejo aprobó la convocatoria de la Junta General ordinaria de accionistas para el día 23 de marzo de 1925. También se informaba de la reunión extraordinaria convocada en esa jornada con el fin de redactar el orden del día correspondiente a la Junta, cambiar impresiones y aprobar la memoria y el balance

social que habrían de presentarse a los accionistas. Recordemos que, según los estatutos de la sociedad, estos documentos debían estar a disposición de los asistentes a la Junta con 15 días de antelación.

Para cerrar la sesión, el Consejo aprobó también que se mantuviera una cuenta bancaria en dólares estadounidenses en el Banco Morgan-Harjes de París, para “facilitar en su día cualquier operación necesaria para atender a las adquisiciones de material” de la compañía. Es decir, que se asumía de antemano que las compras de materiales en el extranjero iban a producirse con relativa facilidad, desaviniendo de esta forma lo estipulado en la base 19ª del contrato con el Estado, por la que se comprometían a utilizar material nacional. Aunque, ya hemos visto que la “coletilla” que se añadió a esa base del convenio desvirtuaba totalmente esta recomendación, facultando a la compañía para que adquiriera los materiales en los mercados extranjeros sin incurrir en un incumplimiento del contrato.

3.132. Miércoles, 4 de marzo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵²⁵

En estas fechas, la compañía estaba realizando una intensa labor de adquisición de edificios y solares en las ciudades más importantes del país, con la finalidad de instalar las oficinas de la empresa y reformar o construir las centrales telefónicas que habrían de sustituir a las antiguas. En este sentido, su primer objetivo siempre fue Madrid. Ya hemos visto como, durante los meses anteriores, se había alquilado el edificio situado en el número 5 de la Gran Vía para que sirviera de sede central de la CTNE. También se estaban negociando las condiciones para la adquisición de un solar en la Gran Vía madrileña, en la Red de San Luis, con el fin de construir un soberbio rascacielos para demostrar el poder de la compañía, donde también se instalaría la nueva central automática y a donde se trasladaría la sede social de la compañía y todos los grandes despachos de los directivos. Este segundo tramo de la Gran Vía, conocido inicialmente como avenida Pi y Margall, había sido inaugurado sólo tres años antes. En la calle Hermosilla se había comprado otro solar para construir la subcentral de Salamanca y ya se había convocado y fallado el concurso para la adjudicación de las obras del nuevo inmueble. En cuanto a la

⁵²⁵ Acta nº 28, 4 de marzo de 1925, libro 1, pp. 35-37.

subcentral de Jordán, no se había adquirido ningún terreno nuevo, pero también se había convocado un concurso para la reforma del edificio antiguo, para adecuarlo a su nueva misión.

Una vez que las adquisiciones y obras en Madrid ya se habían puesto en marcha, la empresa consideró oportuno centrar sus esfuerzos en otras grandes ciudades. Parece que la Dirección de la compañía había cambiado de parecer con respecto al edificio que adquirir en Barcelona, puesto que habían abandonado su intención de comprar el inmueble del hotel Colón y ahora consideraban “más conveniente a los intereses de la Compañía” hacerse con el hotel Bristol, situado igualmente en la plaza de Cataluña. Sosthenes Behn había enviado un telegrama en el que daba órdenes de adquirir dicho edificio. Proctor era el encargado de llevar a cabo las negociaciones, por lo que el Comité autorizaba al Vicepresidente de la CTNE a realizar todas las gestiones necesarias para la compra del inmueble. El Marqués de Urquijo preguntó si el local era adecuado para la instalación de una central automática, a lo que Proctor respondió afirmativamente. Como veremos a continuación, poco importaba que el local fuera o no adecuado para la central puesto que el edificio fue derruido y en su lugar se construyó uno totalmente nuevo.

También se aprobó la compra de un solar en Valencia, un edificio en Pamplona por 425.000 pesetas y otro en Santander. Con respecto a este último, el Comité consideraba que la oferta de compra recibida era demasiado elevada, por lo que habría que continuar con las negociaciones con el propietario. Con respecto a Sevilla, la compañía tenía intenciones de adquirir una casa en la plaza de San Fernando y para ello había contratado a un arquitecto que examinara y valorara el estado de dicho edificio. El informe emitido no era muy favorable, por lo que el Comité acordó que “sólo debe ofrecerse al propietario del mencionado inmueble la suma de 400.000 pesetas”, aunque quedaba a discreción de Proctor cerrar el trato con la cantidad final que él considerara oportuna.

En esta sesión se aprobó también la convocatoria redactada por Gumersindo Rico para la Junta General ordinaria de accionistas que habría de celebrarse, según acuerdo del Consejo de Administración, el día 23 de marzo. En cuanto a los títulos de acciones de las extintas compañías del grupo Peninsular, el Comité acordaba quemarlos, mediante acta notarial. Por último, el Tesorero daba cuenta de haber vendido los fondos públicos y las obligaciones del centro telefónico urbano de Almansa (Albacete), procedentes de las carteras de las compañías fusionadas, habiéndose

obtenido un valor equivalente al capital invertido por éstas en la adquisición de estos valores y fondos públicos.

3.133. Miércoles, 11 de marzo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵²⁶

Los estatutos sociales de la compañía no reconocían expresamente el derecho de los accionistas preferentes a asistir a las Juntas Generales ordinarias. No obstante, el Comité Ejecutivo de la CTNE, “inspirado en su criterio general de facilitar a todos los asociados el mayor número posible de datos y elementos de juicio para que puedan conocer la verdadera marcha y administración de la Compañía”, acordó que dichos accionistas pudieran acceder a la reunión. Como ya sabemos, las únicas participaciones que daban voz y voto en las Juntas Generales eran las ordinarias, pero de esta forma se permitía, por lo menos, que el resto de accionistas estuvieran presentes en la toma de decisiones y pudieran escuchar las deliberaciones.

Además, el Marqués de Urquijo informó de haber convocado un Consejo extraordinario previo a la Junta General para la aprobación de la memoria y balance correspondientes al año 1924 y para la aprobación del orden del día para dicha Junta.

En lo que respecta a la adquisición de solares e inmuebles en distintas ciudades españolas, Proctor expuso las gestiones realizadas con la Sociedad Inmobiliaria Valenciana para la compra de un solar de Valencia por 233.133,40 pesetas. Además, se leyó la contestación del propietario del edificio de la plaza de San Fernando en Sevilla y, en vista de la diferencia que existía con respecto a la cantidad que ofrecía la compañía (400.000 pesetas), se acordó buscar otros inmuebles o solares en la capital andaluza.

3.134. Martes, 17 de marzo de 1925

El Rey recibe a Proctor

El diario La Época⁵²⁷ se hacía eco de cierta reunión mantenida entre el rey Alfonso XIII y Lewis J. Proctor en la mañana del día 17 de marzo de 1925.

⁵²⁶ Acta nº 29, 11 de marzo de 1925, libro 1, pp. 37-38.

Desgraciadamente, la breve nota no aporta información sobre los asuntos que trataron, aunque esta entrevista en palacio viene a confirmar la importancia que la compañía comenzaba a adquirir en la sociedad española, habiendo transcurrido sólo medio año desde la adjudicación del servicio telefónico. La CTNE se fue convirtiendo poco a poco en parte fundamental de la vida de nuestro país, lo que por supuesto implicaba unos amplios beneficios que la situaban entre las empresas más importantes.

3.135. Miércoles, 18 de marzo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵²⁸

Proctor presentó en esta sesión el plan de organización del personal de la compañía en el que tanto había insistido, semanas atrás, el Vicepresidente del Consejo Valentín Ruiz Senén. Se dejaba claro que, si bien se había previsto el aumento de la plantilla para el futuro, por el momento no era necesario cubrir todas las plazas que se consignaban y que se irían realizando las contrataciones a medida que las necesidades de la compañía lo requirieran.

En otro orden de cosas, la Dirección de Tráfico de la compañía había formulado una consulta a la Dirección General sobre la reglamentación existente en materia de descanso dominical para los empleados de la empresa. Parece además que este descanso era habitual en las antiguas compañías del grupo Peninsular, pero que no se estaba cumpliendo en la nueva Compañía Telefónica Nacional, por lo que los trabajadores notarían, indudablemente, el cambio a peor. A este respecto, el Comité acordaba respetar la legislación vigente “tan pronto como la organización de los servicios permita establecer el normal cumplimiento de aquellas disposiciones”. Es decir que mientras la compañía se encontrara en fase de reorganización del servicio, el Comité no veía con buenos ojos cumplir con las leyes laborales que decretaban un día de descanso a la semana para los trabajadores. No obstante, en esta reunión se permitió que, de manera provisional, este día libre fuera disfrutado cada diez días en lugar de cada siete.

⁵²⁷ La Época, 17 de marzo de 1925, p. 2.

⁵²⁸ Acta nº 30, 18 de marzo de 1925, libro 1, pp. 38-39.

El Comité acordó también volver a reunirse en sesión extraordinaria el sábado 21 de marzo para estudiar y examinar detenidamente el balance social de la empresa, que no había podido ser valorado en este día, y la memoria correspondiente al ejercicio 1924.

En su ya habitual repaso a la geografía española, Lewis J. Proctor dio cuenta de una proposición recibida sobre un edificio en la calle Reyes Católicos de Granada por 290.000 pesetas. Indicaba el Vicepresidente que realmente lo único útil de la propiedad era el solar y solicitaba la autorización del Comité para gestionar este asunto, expresando su confianza en que sería fácil obtener una rebaja sobre el precio señalado.

Se informó también en esta reunión del alquiler de varias salas en un edificio situado en la avenida Pi y Margall (antiguo nombre del segundo tramo de la Gran Vía madrileña), número 5. Se trataba éste de un edificio construido muy poco tiempo antes, situado casi enfrente del solar que estaba a punto de adquirir la compañía en la Red de San Luis. También se comenzaba a valorar la posibilidad de hacerse con un local en la cercana calle de Hortaleza, con el fin de instalar los nuevos cuadros de redes interurbanas que se preveían construir. Aquí fue donde meses más tarde se inauguraría una central interurbana provisional, a la espera de la finalización de las obras del edificio Telefónica, para dar servicio, entre otras muchas líneas, a la nueva entre Madrid y Valencia que se habían construido durante 1925.

Todas estas adquisiciones en el nuevo centro financiero de Madrid, la flamante y recientemente inaugurada Gran Vía, dan una idea del poderío económico que la Compañía Telefónica Nacional comenzaba a adquirir en los negocios españoles. En sólo unos meses habían alquilado un gran edificio en el número 5 del primer tramo (que se convirtió en su sede central de manera provisional), además de varias salas en el número 5 del segundo tramo (actual número 27 de la Gran Vía), estaban valorando arrendar unos locales en la calle Hortaleza y además se negociaba la compra del mejor solar de toda la calle: el número 2 de la avenida Pi y Margall (actual número 28)

Con respecto al local de la calle Hortaleza, finalmente fue adquirido y en ella se instaló una central interurbana provisional. Un artículo de la Revista Telefónica Española del mes de junio explicaba los planes de la compañía para esa central y el

ritmo de las obras⁵²⁹. Se había adquirido el primer piso de un edificio todavía en construcción, situado en el número 3 de la calle Hortaleza, muy cerca del solar de la Red de San Luis donde meses más tarde comenzarían los trabajos de construcción del edificio Telefónica y de la nueva central automática.

Durante las obras de esta central provisional, la compañía colocó un letrero que decía “Compañía Telefónica Nacional de España. Adquirido para Central Telefónica de 36.000 números durante la construcción de Centros Automáticos”. El cartel no mentía, ya que ahí se estaba instalando una central mientras se automatizaba la red urbana de la ciudad, pero era claramente capcioso, dando a entender que ésta iba a ser una central automática, cuando en realidad era manual. El mismo artículo de la Revista Telefónica Española reconocía este hecho:

Sin embargo, esta Central no será todavía automática, aunque el material de equipo que se instale permitirá, por su perfección y modernidad, un excelente y rápido servicio manual.

El objeto fundamental de esta central provisional era trasladar todas las líneas interurbanas de la antigua central de la calle Alcalá, que estaba totalmente saturada y no admitía más ampliaciones. Como sabemos, la compañía estaba inmersa en un ambicioso proyecto de construcción y reforma de líneas interurbanas, muchas de las cuales tenían a la capital como uno de los extremos, siguiendo con la tradicional estructura radial de las comunicaciones españolas. La conexión telefónica entre Madrid y Valencia, cuyas obras comenzarían en el mes de mayo, era un ejemplo de línea interurbana que ya no cabía en la central de Alcalá, por lo que se hacía necesario construir una totalmente nueva, para dar un servicio adecuado a las líneas antiguas y a todas las que habrían de venir.

Aunque el fin primero fuera la red interurbana, se aprovecharía también para trasladar algunos circuitos urbanos de la central de Mayor a esta provisional de Hortaleza. En total serían las líneas de 800 abonados situados en el barrio de Chueca, entre la Red de San Luis, la glorieta de Bilbao y la plaza de las Salesas⁵³⁰. La central

⁵²⁹ Revista Telefónica Española, nº 6, junio de 1925, pp. 24-27.

⁵³⁰ Según este artículo de junio de 1925, la nueva central tendría capacidad para 800 abonados. No obstante, en otro artículo del mes de noviembre se indicaba que sería capaz de albergar 1.200 líneas (Revista Telefónica Española, nº 11, p. 8) y más tarde, en febrero de 1926, este número crecía hasta los 3.600 abonados (Revista Telefónica Española, volumen 2, nº 2, p. 9)

de Mayor también se encontraba saturada y la liberación de 800 números por el traslado a Hortaleza permitiría dar servicio a otras tantas solicitudes de abono que estaban pendientes de atender. Por el momento, toda la instalación, tanta de líneas urbanas como interurbanas sería con cables aéreos, “si bien de los tipos más perfeccionados y siguiendo en su instalación los métodos más modernos y que dan los resultados más eficaces”. La cercanía de esta central con el solar de la avenida Pi y Margall donde se iba a instalar la central automática definitiva permitiría realizar el traslado de todas las líneas de una manera sencilla.

3.136. Viernes, 20 de marzo de 1925

El Estatuto Provincial de Primo de Rivera

A pesar de llevar ya año y medio al frente del Directorio Militar, Primo de Rivera mantenía vivo el espíritu regeneracionista inicial del régimen, que se manifestó en la reforma de las diputaciones provinciales a través del Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925⁵³¹. Esta norma, impulsada de nuevo por el Director General de la Administración, Calvo Sotelo, tenía la intención de reestructurar las administraciones locales y provinciales, presentándose como una continuación de la obra realizada con el Estatuto Municipal de 1924. No entra dentro de los objetivos de este Trabajo Fin de Máster estudiar el contenido de esta nueva normativa, sobre todo si se tiene en cuenta que ésta no incluye legislación explícita en materia de telefonía, cosa que sí hacía el Estatuto Municipal. Sin embargo, la importancia radica, en este caso, en el efecto que tuvo sobre la Mancomunidad de Cataluña y la red telefónica que tenía a su cargo.

El título I, capítulo II, sección tercera, del Estatuto Provincial trataba “De las Mancomunidades para obras y servicio interprovinciales”. Aquí se indicaba que las diputaciones provinciales podrían agruparse en mancomunidades de carácter administrativo para la ejecución de obras o la prestación de servicios de su competencia, de carácter indefinido o temporal, pero siempre para una misión concreta. Es decir, no se mantenía el concepto de Mancomunidad tal y como se entendía hasta el momento, sino que las diputaciones podrían ahora unirse pero siempre con la intención de prestar un servicio concreto a su territorio. Una vez fuera aprobada la constitución de la mancomunidad pertinente, las diputaciones procederían

⁵³¹ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 20 de marzo de 1925. Gaceta de Madrid, 21 de marzo de 1925, nº 80, pp. 1446-1483.

al nombramiento de una comisión gestora de las obras y servicios a que afectara dicha asociación. El artículo 28 indicaba además que, en caso de disolución de la mancomunidad, la liquidación sería practicada por la misma comisión gestora.

De la lectura de estas disposiciones sobre mancomunidades de provincias se entiende rápidamente que la Mancomunidad de Cataluña, tal y como estaba constituida, dejaba de tener sentido en el nuevo marco legislativo. Sólo cabía la coordinación para la gestión de servicios concretos. Por ello, la transitoria quinta del Estatuto Provincial decretaba la anulación del estatuto de dicha corporación regional y nombraba una comisión gestora para su liquidación:

En aplicación de lo dispuesto en esta Ley, queda sin vigor el Estatuto de la Mancomunidad de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, aprobado por Real decreto de 26 de Marzo de 1914.

Los servicios que actualmente están a cargo de la referida Mancomunidad, serán regidos hasta el día 30 de Junio próximo por el actual Consejo Permanente de la Mancomunidad, que se denominará Comisión gestora interina de los servicios coordinados.

Por lo tanto, la Mancomunidad de Cataluña quedaba disuelta automáticamente y en su lugar quedaba una comisión gestora interina que habría de determinar qué hacer con los servicios que estaban en manos de la corporación. Existían tres opciones: o se quedaban como servicios coordinados entre las cuatro provincias, pero siempre bajo la forma jurídica del nuevo concepto de mancomunidad, o eran divididos y traspasados a las diputaciones o se cedían a otras entidades.

Por supuesto, dentro de los servicios a cargo de la Mancomunidad estaba el telefónico, tan largamente anhelado por Sosthenes Behn y la Compañía Telefónica Nacional. Como veremos en capítulos posteriores, la CTNE aprovechó la nueva coyuntura legal para retomar las negociaciones con la corporación catalana, ahora que había sido tocada de muerte, y hacerse con su red telefónica, aprovechando el momento de debilidad por el que pasaba. No obstante, gracias a las actas del Comité Ejecutivo y a otros documentos presentados en este Trabajo, sabemos que las conversaciones entre estas dos entidades nunca llegaron a congelarse del todo. Sosthenes Behn tenía a finales de noviembre la seguridad de que se iba a nombrar una comisión conjunta para la valoración y tasación de la red, que conduciría a una satisfactoria adquisición de la misma por parte de la CTNE. Se tiene constancia de que, desde la adjudicación del servicio telefónico nacional a la Telefónica, Alfonso Sala

se reunió, como mínimo, en dos ocasiones con representantes de la empresa: a principios de diciembre de 1924 y el día 13 de febrero de 1924. Parece que ninguno de aquellos contactos condujo a un acuerdo entre las dos partes.

3.137. Sábado, 21 de marzo de 1925

Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo⁵³²

En este día celebró el Comité Ejecutivo una sesión extraordinaria para examinar el balance y liquidación correspondientes al primer ejercicio social de la compañía, cerrado en 31 de diciembre de 1924. Dicho balance sería presentado dos días después en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas que tendría lugar después. El Comité deliberó sobre los diferentes conceptos que aparecían en el balance y los aprobaron por unanimidad, realizando sólo una pequeña modificación: cambiar, en el extracto de la “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”, la denominación “déficit” que aparecía en una partida de 196.128,53 pesetas por la de “Diferencia por intereses intercalarios”. Esta resolución se tomó, a propuesta del Jefe de Contabilidad de la empresa, porque dicha cuenta no implicaba un déficit en la liquidación, sino que era un anticipo que se había hecho a cuenta de los beneficios, tal y como se decidió en la reunión del Comité celebrada el día 11 de febrero.

Aprovechando la sesión, el Comité, “en uso de las amplias facultades que le fueron conferidas por el Consejo de Administración de esta Compañía”, acordó comprar el edificio situado en la Plaza de Cataluña de Barcelona, que habría de convertirse en la sede central de la Telefónica en esta capital. El inmueble, situado en la esquina de las calles Fontanella y Puerta del Ángel, costó 2 millones de pesetas a la CTNE y se encontraba inmejorablemente localizado. La empresa estaba decidida a que sus edificios ocuparan los lugares más emblemáticos de las ciudades, no sólo por la necesidad de que las centrales telefónicas estuvieran situadas, valga la redundancia, en una zona céntrica, sino para mostrar el poderío de la nueva empresa en el panorama empresarial español. En un artículo de la Revista Telefónica Española, la compañía explicaba esta política⁵³³:

⁵³² Acta nº 31, 21 de marzo de 1925, libro 1, pp. 39-40.

⁵³³ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 9.

No obstante, la actividad desplegada ha sido tal y tan grande el deseo de dotar a España de suntuosas oficinas telefónicas, que ya se han adquirido solares, tan bien situados como ha sido posible, en Barcelona: una casa en las calles de Fontanella, 2, y Puerta del Ángel, 6, de 473,30 metros cuadrados de superficie.

Las actas del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de la compañía dan buena cuenta de ese deseo de destacarse y de proyectar una imagen pública de fuerza y autoridad a través de sus edificios en las grandes ciudades. Esta obsesión también venía heredada de la política empresarial que los hermanos Behn imprimían a todas las empresas de su órbita. A este respecto, el historiador cubano José Altshuler contaba en un artículo de 1991 la historia del edificio de la Cuban Telephone and Telegraph Company en La Habana⁵³⁴:

Hacia 1924 se hizo evidente para los hermanos Behn que el edificio de la calle Águila ocupado por las oficinas centrales de la Cuban Telephone Company, no estaba a la altura de los planes de gran envergadura que se habían trazado, de suerte que decidieron sustituirlo por un gran edificio moderno que dominara el panorama habanero y atrajera la atención de todo el mundo. El nuevo edificio, emplazado en la esquina de las calles Águila y Dragones (unido al antiguo, que se mantuvo como auxiliar), se inauguró en septiembre de 1927. Sus 62 metros de altura sobre la acera lo hacían el más alto del país, con la peculiaridad de que se diseñó de modo que su ambiente fuese “por mucho tiempo español en sus principales aspectos”. [...]

La historia de la Compañía aparecía representada en el remate de la gran puerta de entrada al edificio, pues, en el supuesto de que la concha simbolizaba “al peregrino que va a regiones ignotas”, se habían labrado dos conchas, una grande y otra chica que, según el arquitecto Leonardo Morales, eran, respectivamente, la representación de

... la International Telephone and Telegraph Corporation y la Cuban Telephone Company, soportadas por dos querubines robustos que [representaban] el espíritu joven de dos pueblos fuertes: el Cubano y el Americano.

⁵³⁴ Altshuler-1991, p. 15.

Seguramente hubiera sido más apropiado suponer que los tales querubines representaban a los hermanos Behn. En cualquier caso, poca duda puede caber de que (sic) el nuevo edificio había sido concebido al calor de la euforia de los hermanos por haberse adueñado del control del negocio telefónico de España.

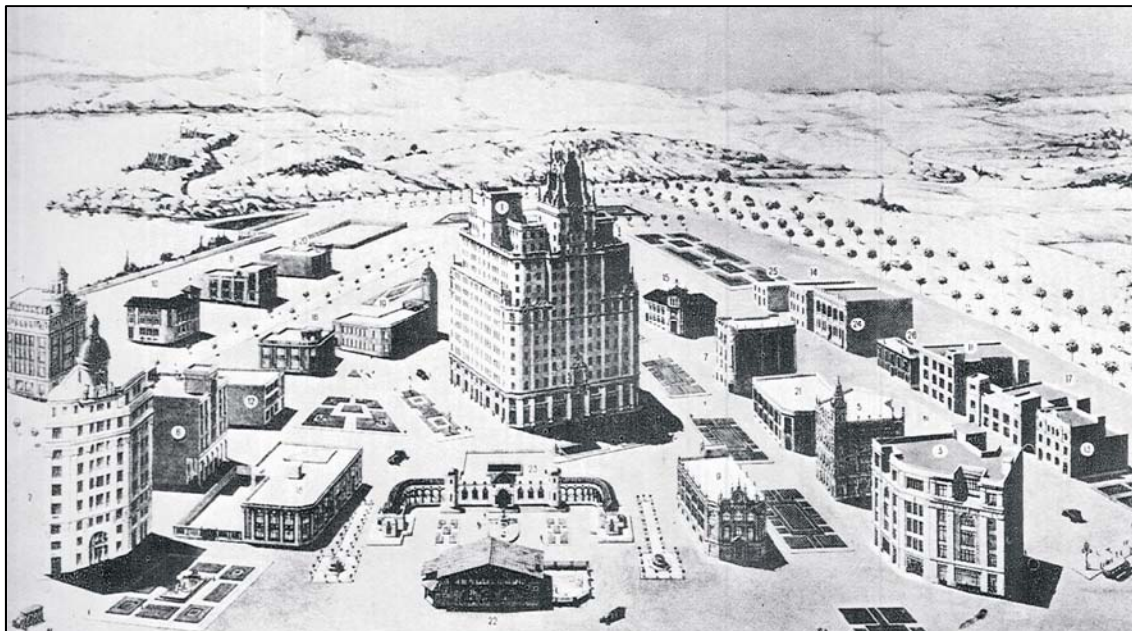


Figura 11. “La ciudad Telefónica”. Composición hecha con los nuevos edificios construidos y en construcción por la CTNE, 1928.

Volviendo a la reunión celebrada por el Comité Ejecutivo en este día 21 de marzo de 1925, los allí presentes autorizaban al Vicesecretario Ramón Güell para que comprara el edificio de la plaza de Cataluña, pagara el precio estipulado, tomara posesión de la finca y firmara la correspondiente escritura de venta. No obstante, el inmueble se encontraba, en esos momentos, alquilado por un tal Antonio Albareda y Canals, por lo que también era necesario convenir la rescisión de su arriendo, por lo que también se autorizaba a Ramón Güell para que fijara la cantidad que habría de satisfacer a Antonio Albareda para obtener dicha rescisión, siempre y cuando la cantidad no superara las 400.000 pesetas.

Por último, el Comité autorizó al Subdirector del Distrito 6º, Francisco Lozano Gorriti, para que formalizara todos los pactos y contratos que fueran necesarios para la adquisición de inmuebles en la ciudad de Granada.

La nota oficiosa de Primo de Rivera sobre el Estatuto Provincial

La oposición a la promulgación del Estatuto Provincial y a la disolución de la Mancomunidad de Cataluña tuvo que ser enorme, sobre todo entre los políticos regionalistas y nacionalistas. No obstante, la censura por aquel entonces era ya muy fuerte y consiguió poner freno a todas aquellas manifestaciones. En la prensa apenas se publicaron valoraciones críticas con respecto al nuevo Estatuto (las que aparecieron fueron muy sutiles) y simplemente se limitaban a informar sobre su promulgación y a ofrecer algunas manifestaciones oficiales del Gobierno y la Presidencia de la Mancomunidad.

En este sentido, el general Primo de Rivera redactó una nota oficiosa de la Presidencia del Directorio que tenía fecha de 21 de marzo⁵³⁵ y fue enviada a los periódicos para su publicación inmediata⁵³⁶. En ésta se indicaba que el Gobierno se veía en la obligación de explicar su opinión respecto al nuevo Estatuto, especialmente en relación al asunto catalán. A continuación explicaba el giro hacia el centralismo que había iniciado nada más llegar al poder:

Pero luego ha ido ganando en su juicio la opinión de que descentralizar es igualmente posible con el régimen provincial, que agrandar las divisiones administrativas, judiciales y de servicios técnicos como sistema general no lo aconseja la creciente actividad o intensidad de la vida provincial, y por último, y en ello está la razón del completo cambio de criterio, que reconstituir desde el poder la región, reforzar su personalidad, exaltar el orgullo diferenciativo entre unas y otras, es contribuir a deshacer la gran obra de la unidad nacional, es iniciar la disgregación para la que siempre hay estímulo en la soberbia o el egoísmo de los hombres.

Según su opinión, el ensayo de regionalismo de la Mancomunidad de Cataluña había hecho “galopar el nacionalismo y el separatismo, haciendo pasar a los catalanes amantes de España horas de amargura y humillación”. Además, el Marqués de Estella afirmaba que la Mancomunidad había sido un fracaso desde el punto de vista administrativo, habiendo consumido cuantiosos recursos para establecer servicios, entre los que se incluía el telefónico, “bien modestos”. Por todos estos motivos había

⁵³⁵ Pabón-1999, p. 970.

⁵³⁶ La Vanguardia, 22 de marzo de 1925, p. 16.

decidido distribuir y dividir todos estos bienes y servicios entre las cuatro provincias y hacer desaparecer la corporación, para no continuar arrancando “el sentimiento de amor a España de los corazones”. La hostilidad de Primo de Rivera hacia la Mancomunidad se hacía cada vez más intensa a medida que avanzaba la nota (“organización artificiosa que iba infiltrando odio en sus almas”), finalizando con la manifestación de que éste había sido el decreto que había promulgado con mayor satisfacción y convicción.

3.138. Lunes, 23 de marzo de 1925

Reunión extraordinaria del Consejo de Administración⁵³⁷

El Marqués de Urquijo había convocado una sesión extraordinaria del Consejo de Administración previa a la celebración de la Junta General ordinaria que tenía que celebrarse en la tarde del 23 de marzo. El objeto de la reunión era aprobar los documentos que se debían presentar a los accionistas en las Juntas: el balance social, la memoria social y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, en este caso el de 1924. Gumersindo Rico leyó estos informes, que merecieron la aprobación unánime de los consejeros allí presentes. Los tres Delegados oficiales del Gobierno hicieron constar que no tenían que hacer ninguna observación a las cuentas aprobadas y que por lo tanto daban su consentimiento según lo establecido en la base 21ª del contrato con el Estado, aunque también indicaban que estudiarían más detenidamente los documentos cuando dispusieran de más tiempo para hacerlo. Además, se aprobó la pequeña modificación propuesta por el Jefe de Contabilidad y que ya había sido autorizada dos días antes por el Comité Ejecutivo.

La primera Junta General ordinaria de accionistas

El día 23 de marzo de 1925 se celebró la primera Junta General de accionistas de la Compañía Telefónica Nacional de España, cuya finalidad era aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 1924. Para ello, el Comité Ejecutivo redactó y el Consejo aprobó la memoria y el balance de pérdidas y ganancias de la compañía, que se presentaron a los accionistas asistentes a esta

⁵³⁷ Acta nº 11, 23 de marzo de 1925, libro 1, pp. 27-28.

reunión. La convocatoria de la Junta General, que fue aprobada por los consejeros en su reunión de 26 de febrero, fue anunciada en la prensa, indicando que tenían derecho a concurrir todos los accionistas que lo solicitaran y obtuvieran de la Secretaría General la correspondiente papeleta de asistencia que era necesario presentar en la entrada⁵³⁸.

Días más tarde, varios periódicos se hacían eco de la celebración de esta Junta General, a la que, según las crónicas, asistieron gran número de accionistas poseedores de acciones ordinarias y preferentes⁵³⁹. La reunión estuvo presidida por el Marqués de Urquijo y en ella se dio lectura a la memoria y balance del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 1924. La gestión realizada por el Consejo de Administración mereció la unánime aprobación de la Junta, contando con el voto a favor de todos los suscriptores de acciones ordinarias presentes en la sesión. Consecuentemente se ratificó la “absoluta confianza en el Consejo”, que quedó reelegido totalmente, ya que, según los estatutos sociales, debía renovarse en cada junta.

La memoria, que ya resumimos en un capítulo anterior⁵⁴⁰, explicaba brevemente las labores que había realizado la compañía durante los meses transcurridos desde la adjudicación del servicio telefónico hasta el cierre del ejercicio social. Tras una pequeña introducción, se enumeraban las adquisiciones de líneas y redes durante el año 1924: las propiedades telefónicas del Estado, las de la Compañía Peninsular de Teléfonos y varias concesiones urbanas como Zaragoza, Valencia, Santander, Granada o Pamplona. Además se detallaban algunos proyectos que ya se encontraban en ejecución o que comenzarían a realizarse en breve, como la automatización del servicio urbano, la reforma y construcción de líneas interurbanas o el establecimiento de la comunicación telefónica con las plazas africanas. La prensa asistente al acto también destacó la intención expresa de la compañía por fomentar la producción nacional.

⁵³⁸ ABC, 6 de marzo de 1925, p. 32.

⁵³⁹ La Voz, 25 de marzo de 1925, p. 8; El Imparcial, 26 de marzo de 1925, p. 6; El Sol, 26 de marzo de 1925, p. 2; La Libertad, 26 de marzo de 1925, p. 2; La Vanguardia, 31 de marzo de 1925, p. 7.

⁵⁴⁰ Véase crónica del día 31 de diciembre de 1924.

Los diarios destacaron “el ambiente de franca cordialidad” del acto, “pudiendo apreciarse claramente la satisfacción de todos los concurrentes por la acertada labor del Consejo de Administración”.



Figura 12. Junta general de accionistas de la CTNE, 1926. Fuente: Telefónica.

Segunda reunión extraordinaria del Consejo de Administración⁵⁴¹

El Consejo de Administración de la empresa se reunió de nuevo tras la celebración de la primera Junta General de accionistas para ratificar las decisiones tomadas en ésta. El Marqués de Urquijo abrió la sesión con unas “sinceras palabras de gratitud para la Junta General, [expresando] la satisfacción que le causa la reelección de todo el Consejo que estatutariamente debía cesar en la Junta [...], congratulándose de que por este motivo pueda contar con la colaboración de todos los prestigiosos elementos que constituían y constituyen el Consejo”. Por supuesto, la reelección de todos los consejeros de la empresa era un mero trámite burocrático que tenía que realizarse, tal y como establecían los estatutos sociales de la empresa: en las Juntas Generales debía cesarse el Consejo al completo y elegirse uno nuevo, que indudablemente iba a estar formado por los mismos miembros.

⁵⁴¹ Acta nº 12, 23 de marzo de 1925, libro 1, pp. 28-29.

Seguidamente se procedió al nombramiento del “nuevo” Consejo de Administración de la empresa, en el que todos los miembros volvieron a ocupar los cargos que desempeñaban hasta entonces. Estanislao de Urquijo y Ussía, Marqués de Urquijo, era reelegido Presidente; los cargos de Vicepresidentes volvían a recaer en manos de Julián Cifuentes Fernández, Valentín Ruiz Senén, Lewis J. Proctor y Javier Martí-Codolar i Pascual; al frente de la Tesorería General y la Secretaria General quedaban de nuevo José López Nieulánt, Marqués de Perijáa, y Gumersindo Rico, respectivamente.

Como consecuencia del cese del anterior Consejo de Administración, también quedaba finiquitado el Comité Ejecutivo que se había nombrado el día 21 de agosto de 1924. Por lo tanto se hacía necesario volver a constituirlo oficialmente, ratificando su composición previa a esta jornada: seguiría formado por el Marqués de Urquijo, Valentín Ruiz Senén, Julián Cifuentes, el Marqués de Perijáa, Javier Martí-Codolar, Lewis J. Proctor y Gumersindo Rico. Se otorgaba a este nuevo Comité Ejecutivo “todas las facultades que tenía en la misma forma que ha venido actuando hasta ahora”.

Por último, el Consejo acordó entregar oficialmente los documentos aprobados a la Delegación del Gobierno, aunque la memoria y el balance no podrían ser publicados hasta que los consejeros del Estado no los hubieran aprobado, tal y como quedaba estipulado en la base 21ª del contrato de concesión.

3.139. Miércoles, 25 de marzo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁴²

La Dirección Comercial de la empresa había elaborado un proyecto sobre reglamentación y tarifas para los “servicios radiotelefónicos”, que se presentó en esta reunión del Comité Ejecutivo. Los miembros suscribieron dicho informe y en consecuencia se acordó que fuera entregado a la Delegación Oficial del Gobierno para su aprobación.

En Sevilla continuaban las negociaciones para la adquisición de un edificio en la plaza de San Fernando y por el que la compañía había ofrecido a comienzos de

⁵⁴² Acta nº 32, 25 de marzo de 1925, libro 1, pp. 40-41.

mes 400.000 pesetas. El dueño del inmueble había solicitado en un principio un precio mucho mayor, que la compañía había rechazado categóricamente, pero, según informaba Gumersindo Rico en esta reunión del Comité, finalmente se había llegado a un acuerdo de compra por 450.000 pesetas. No obstante, el propietario declinaba toda responsabilidad por los trámites legales y desahucios que hubieran de presentarse para desalojar el edificio, que en esos momentos se encontraba arrendado a un inquilino.

Por último, el Secretario daba cuenta de las negociaciones para la adquisición del centro telefónico urbano de Cáceres por 220.000 pesetas. Anunciaba que el trato ya había sido cerrado y que sólo quedaba firmar la correspondiente escritura de compraventa. Según la memoria social de la CTNE del ejercicio 1926, esta red contaba en 31 de diciembre de aquel año con un total de 537 abonados⁵⁴³, lo que significa que este centro telefónico supuso para la empresa un coste de entre 400 y 500 pesetas por abonado (en función del número de teléfonos que hubiera realmente en el momento de su compra, asumiendo que obviamente éste crecería entre marzo de 1925 y diciembre de 1926)

3.140. Jueves, 26 de marzo de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁵⁴⁴

En las habituales formalidades con la que se iniciaban todas las reuniones ordinarias del Consejo de Administración se presentaba, entre otros muchos documentos, un resumen de los gastos e ingresos de la compañía desde la última reunión, elaborado por el Tesorero General. En esta ocasión, el Presidente quiso llamar la atención del Consejo respecto a la “favorable situación económica” de la empresa que se conocía gracias a dichas cuentas.

Tras la Junta General celebrada el día 23 de marzo se entregó a la Delegación oficial del Gobierno la memoria, el balance y las liquidaciones de la compañía correspondientes al primer ejercicio social. Los Consejeros Delegados aprobaron dichos documentos y firmaron el correspondiente oficio, que fue enviado al Secretario General, que a su vez daba cuenta en esta reunión de la recepción de dicho registro.

⁵⁴³ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1926, p. 54.

⁵⁴⁴ Acta nº 13, 26 de marzo de 1925, libro 1, pp. 29-31.

El Presidente expresó “la satisfacción y gratitud del Consejo por la diligencia y rapidez con que dicha Delegación Oficial ha procedido al examen y aprobación de los referidos Balance y Liquidaciones”. A su vez, Antonio Carrillo de Albornoz, el Delegado de Hacienda en el Consejo, destacaba “lo acertada y cumplidamente que han llevado a cabo la confección de los Balances y Liquidaciones correspondiente al Primer Ejercicio Social, desarrollando la más intensa y meritoria labor, que considera digna del mayor aplauso”. Por ello proponía que se premiara con alguna recompensa extraordinaria a todos los empleados del Departamento de Contabilidad que habían realizado las cuentas presentadas. El Consejo se mostró de acuerdo con la propuesta y delegó en la Dirección para que decidiera la cuantía que habría de entregarse a estos empleados.

A continuación se trataron cuestiones referidas a dos reclamaciones que la compañía tenía abiertas. En primer lugar, el Consejo aprobó un modelo de instancia que habría de elevarse al Gobierno y por la que se pedía la exención del impuesto del Timbre con el que se gravaba el coste de las conferencias interurbanas y los telefonemas. Éste se trataba de una comisión del 5% sobre el valor que los abonados pagaban por las comunicaciones interurbanas y que repercutía directamente en la factura del usuario. La CTNE quería que dicho impuesto gubernamental dejara de aplicarse y por ello solicitaban, mediante esta instancia, que el Gobierno eximiera a la compañía de cobrar esta comisión. La compañía no se veía afectada directamente por el impuesto del Timbre, puesto que se cobraba a los abonados, pero seguramente estos no entrarían en valoraciones sobre los conceptos que se aplicaban en sus facturas y simplemente verían que el coste total era elevado, lo que achacarían íntegramente a la compañía telefónica con la mala imagen que eso implicaba.

Además, con anterioridad a ésta, la compañía había elevado otra reclamación a la Dirección General de Comunicaciones con motivo de la autorización que ésta había otorgado a la “Sociedad Radio-Barcelona” para la instalación de ciertas líneas telefónicas bajo la denominación de “circuitos microfónicos”. Según la CTNE, esta resolución de la Dirección General resultaba perjudicial a los intereses de la compañía y vulneraba la base primera del contrato con el Estado. Por todo ello, en esta reunión se aprobó la reclamación que se había registrado y además se acordó que se presentara un recurso. En atención a la premura con que, a ojos del Consejo de Administración, tenía que procederse, se decidió recurrir directamente ante el Ministerio de la Gobernación, conducta que iba a su vez en contra del criterio general de la compañía. Según éste, todos los recursos debían entablarse por medio de la

Delegación oficial del Gobierno, y nunca saltándose este paso previo para aligerar el proceso. Es decir, que en la primera ocasión que el Consejo tuvo para seguir su propio criterio, lo rompieron y presentaron el recurso directamente al Ministerio. El acta de la sesión no indica que los Consejeros Delegados del Estado realizaran ninguna objeción o manifestación en contra de este sorteamiento de su autoridad. Efectivamente, el recurso fue elevado inmediatamente, al día siguiente, pero el Gobierno no consideró que la respuesta fuera tan urgente y resolvió la cuestión mediante Real Orden de 12 de agosto de 1925.

3.141. Lunes, 30 de marzo de 1925

La solicitud de Radio Ibérica y las líneas telefónicas particulares

A pesar de que la concesión del sistema telefónico nacional había sido adjudicada a la CTNE en su totalidad, todavía existían entidades que solicitaban la construcción de líneas telefónicas para su uso privado. Ya vimos el caso de la Compañía Metropolitano Alfonso XIII de Madrid que, aprovechando el vacío legal y los grandes cambios que se estaban dando en materia telefónica a finales de agosto de 1924, solicitó la construcción de una línea telefónica particular en uno de sus túneles. La autorización fue otorgada por el ayuntamiento de Madrid sin mediar resolución por parte de la Dirección General de Comunicaciones.

Por su parte, acabamos de ver como la Sociedad Radio-Barcelonesa había solicitado la instalación de unas líneas telefónicas en la ciudad condal a las que denominaban “circuitos microfónicos”. La Dirección General había autorizado dicha construcción, lo que había provocado la indignación de la CTNE, que entendía que dicha concesión iba en contra del contrato que tenía firmado con el Estado y se disponía a presentar un recurso ante el Ministerio de la Gobernación.

Otra compañía radiofónica, la “Sociedad Radio Ibérica” también había solicitado la instalación de una línea particular para unir sus talleres ubicados en el número 22 del Paseo del Rey en Madrid con sus oficinas en la calle del Pez, número 14. Para ello había dirigido una instancia al Director General de Comunicación el día 13 de enero de 1925 exponiendo sus motivos y la necesidad de dicho circuito telefónico. En este caso, la respuesta de Tafur Funés fue muy distinta a la que se dio, más o menos al mismo tiempo, a la solicitud de la empresa barcelonesa: el día 30 de

marzo se publicaba en el Diario Oficial de Comunicaciones una disposición determinando que no procedía otorgar la concesión que se solicitaba⁵⁴⁵. Es cuanto menos notable que estas dos instancias corrieran una suerte tan dispar, habiéndose resuelto por la misma persona y en un lapso de tiempo muy corto entre una y otra, más cuando el contrato firmado entre el Estado y la CTNE era muy claro con respecto a las concesiones telefónicas a otras entidades. En su base primera decía lo siguiente:

El Estado [...] declara que quedarán en suspenso todas las transferencias de derechos a los Ayuntamientos [...], que no prestará por sí mismo ninguno de los servicios que ha de rendir la Compañía con arreglo al presente contrato ni otorgará a otras personas o entidades ninguna concesión parcial o general, ni prorrogará ninguna de las concesiones existentes, ni permitirá la prestación de tales servicios por ningún particular, entidad o Corporación pública o privada, sino mediante acuerdo con la Compañía, exceptuándose única y exclusivamente el servicio telefónico entre Autoridades por líneas oficiales y las que, siendo propiedades de las Compañías de ferrocarriles, estén afectas al tráfico de las mismas.

Unos meses más tarde también se daría un caso complicado de resolver con otra empresa privada que había instalado una línea telefónica privada. Se trataba de la “Sociedad Anónima Electra-Cangüesa”, una compañía de generación de energía eléctrica asturiana, que tenía montada una red telefónica entre la central eléctrica y sus oficinas en varios pueblos de la región. Esta línea se había instalado el 14 de agosto de 1924, contando con la autorización de la Dirección General de Comunicaciones, sobre los postes de alta tensión propiedad de la compañía. La CTNE fue informada de la existencia de dicha línea en noviembre de 1925 y ahí se dio comienzo a un proceso en el que intervino la Dirección General, el Ministerio de la Gobernación y hasta la Presidencia del Directorio. El caso fue resuelto en contra de los intereses de la compañía, a pesar del impecable razonamiento de la CTNE, que siempre apoyo sus argumentos con las bases del contrato firmado con el Estado y que le daba la razón. Estos hechos no han quedado reflejados en las actas consultadas para la realización de este Trabajo Fin de Máster, pero han sido sacados a la luz

⁵⁴⁵ Yuste-2004, p. 296.

gracias a las investigaciones de Antonio Pérez Yuste en el Archivo General de la Administración⁵⁴⁶.

Como se puede apreciar, las resoluciones tomadas por el Gobierno y la Dirección General de Comunicaciones con respecto a las líneas telefónicas particulares fueron, al principio, un tanto erráticas, recordando en cierto modo al proceso de concesión del sistema telefónico nacional y los primeros pasos dados a finales de 1923 y principios de 1924. La diferencia con aquella situación era sin embargo importante: ahora el Estado contaba con un contrato que regulaba muy claramente todo lo referente a la telefonía nacional y a su adjudicación a la CTNE. Es cierto que los términos en los que se desarrollaba este convenio no eran nada favorables a los intereses del Estado, pero lo que no se podía negar era su precisión reglamentaria.

3.142. Martes, 31 de marzo de 1925

La Compañía Telefónica Nacional de España en la bolsa de Madrid

El crecimiento que la compañía estaba experimentando era tal que, sólo seis meses después de la adjudicación del sistema telefónico nacional, la Dirección solicitó la cotización en bolsa de las acciones preferentes de la compañía. La Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa emitió un expediente favorable a dicha instancia y el día 31 de marzo de 1925 las acciones de la Telefónica comenzaron a cotizar en el parqué madrileño. Como sabemos, las participaciones preferentes de la compañía ascendían a 200.000 y tenían un valor nominal de 500 pesetas, así que el capital inicial en bolsa fue de 100 millones de pesetas.

3.143. Miércoles, 1 de abril de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁴⁷

Gumersindo Rico dio cuenta del informe favorable emitido por la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa en relación a la cotización de las acciones

⁵⁴⁶ Yuste-2004, pp. 296-299.

⁵⁴⁷ Acta nº 33, 1 de abril de 1925, libro 1, pp. 42-43.

preferentes de la compañía en la Bolsa de Madrid. Además, explicaba que ya habían comenzado las gestiones para su entrada en los parques de Bilbao y Barcelona.

Proctor, por su parte, presentó al Comité un proyecto de contrato con la “Compañía de los Ferrocarriles Andaluces” sobre el tendido de líneas telefónicas interurbanas en los terrenos que explotaba esta empresa. Los miembros aprobaron las bases generales de dicho contrato sin más modificaciones que aquellas que el Departamento Contencioso de la CTNE considerara oportuno realizar.

También se informó del otorgamiento de la escritura de adquisición del centro telefónico urbano de Cáceres, que se había llevado a cabo en los términos que ya fueron explicados en la reunión anterior del Comité Ejecutivo. La incautación sería llevada a cabo por el Subdirector del Distrito en los próximos días.

Por otra parte, se acordó adquirir un solar en Pamplona y para ello se estudiaron unos planos para la compra de terrenos en esta ciudad, con el fin de elegir el más conveniente para los intereses de la compañía. Finalmente se escogió el lote 3 de la manzana 12 del ensanche, cuyo solar medía 533,50 metros cuadrados. Se facultaba con plenas atribuciones al Subdirector del Distrito 3º, Benito Navarro, para que comprara dicho terreno, pagara el precio, estipulara los pactos del contrato y otorgara y firmara la escritura de compraventa. En esta parcela, situada en la confluencia de las calles Cortes de Navarra y Amaya, sería donde poco tiempo después darían comienzo las obras del edificio Telefónica de Pamplona, que se encuentra justo enfrente de la plaza de toros de la capital navarra.

En un artículo titulado “Desde Pamplona” que publicaba la Revista Telefónica Española en agosto de 1925 se explicaban las intenciones que la CTNE tenía en la capital navarra⁵⁴⁸:

Dicho solar tiene una superficie de 533,50 metros cuadrados, y en él se propone construir la C. T. N. de E. un gran Palacio de Comunicaciones Telefónicas capaz para atender los servicios del Centro Interurbano, Red provincial de Navarra, y el Centro Urbano con el teléfono automático que ha de substituir al actual de batería central de la Casa Bell Telephone de Amberes. La Compañía Telefónica Nacional de España empezará en breve la construcción

⁵⁴⁸ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 11.

de las mencionadas obras, y con ellas vendrá la unificación de todos los servicios telefónicos y el mejoramiento de la Red Urbana, tan necesario en una ciudad como Pamplona.

3.144. Miércoles, 8 de abril de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁴⁹

En el acta de esta sesión queda patente de nuevo la preocupación de Valentín Ruiz Senén por proceder cuanto antes a la reestructuración de la plantilla y a la colocación de todos los empleados en el puesto de trabajo que les corresponde, para que “ningún empleado pueda sentirse legítimamente perjudicado”. Proctor respondía que el proceso ya estaba prácticamente finalizado.

Ruiz Senén también llamaba la atención sobre la actitud que la compañía debería adoptar hacia la prensa, para evitar “determinaciones que pueden contribuir a nuestro desprestigio, aunque sean injustamente fundadas”. Por ello rogaba a Proctor que formulara un plan general de actuación en este sentido, sin parcialidad hacia ningún periódico en concreto. Además, se deberían determinar los diarios de Madrid y provincias en los que la compañía incluiría publicidad y el enfoque que dar a los anuncios en función del público al que fuera destinada cada publicación: de carácter general, local, para revistas financieras, de carácter urgente como eran los casos de concursos o compra de materiales, etc. Por último, el Vicepresidente argumentaba que el “ambiente español” tenía unas características muy distintas a las de otros países y que no podían dejar de tenerse en cuenta. Proctor le respondió manifestando que no creía que la manera de proceder actual se distanciara mucho de la que proponía Ruiz Senén, pero que, no obstante, se ocuparía “con todo interés de este particular”. Menciona el ejemplo de las negociaciones realizadas en su último viaje a Barcelona con siete periódicos de esa ciudad, de los que obtuvo rebajas que oscilaban entre el 10 y el 15% sobre los precios habituales para la publicación de anuncios semanales.

Valentín Ruiz Senén era además el miembro del Comité encargado de las gestiones para la adquisición del solar en la Gran Vía de Madrid e hizo referencia a las últimas novedades sobre este asunto. En esta reunión del día 8 de abril se acordó mantener la oferta que ya se había presentado con anterioridad y pedir a los

⁵⁴⁹ Acta nº 34, 8 de abril de 1925, libro 1, pp. 43-45.

vendedores que propusieran un último precio, con el fin de que el Comité Ejecutivo de la CTNE pudiera tomar una decisión definitiva lo antes posible.

Con relación a la destrucción de las acciones preferentes de las compañías Peninsular y Sociedad General de Teléfonos, el Vicesecretario Ramón Güell, encargado de llevar a cabo estas operaciones, informaba de que no se podría proceder a dicha quema hasta que la cancelación de las acciones no estuviera inscrita en el Registro Mercantil. Además, también tenía que quedar registrada oficialmente la fusión de estas dos compañías con la CTNE, por lo que habría que esperar a que todos esos trámites burocráticos estuvieran completados para poder ejecutar la orden que el Comité había dispuesto en una reunión anterior.

3.145. Miércoles, 15 de abril de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁵⁰

En esta sesión del Comité se presentó el proyecto para la venta de acciones preferentes a los trabajadores de la compañía, que mereció la aprobación unánime de todos los miembros. Este plan, que sería presentado a los empleados en la edición de abril de la Revista Telefónica Española, quedó abierto oficialmente el día 1 de junio de 1925⁵⁵¹.

La Subdirección de Barcelona había formulado una consulta en relación a una pensión de 125 pesetas mensuales que la Compañía Peninsular de Teléfonos pagaba a la hermana de un trabajador fallecido de esta empresa. El Comité discutió sobre la conveniencia o no de mantener dicha pensión y finalmente resolvió hacerlo. No obstante, se dejó claro que esta “acción libre y espontánea de la Compañía” no crearía derecho alguno más allá de la percepción de la mensualidad ni debería servir como precedente para otros casos, “haciéndose solamente como obra de caridad, ya que la interesada es una pobre anciana sin otros medios de vida ni posibilidad alguna de lograrlos”. En relación con este asunto, Ruiz Senén propuso a Proctor que estudiara la creación de un reglamento de pensiones para los trabajadores de la empresa, que previera “las posibles contingencias de incapacidad por edad, imposibilidad, defecto físico, etc., de tal manera que la Compañía al velar por el porvenir, la tranquilidad y los

⁵⁵⁰ Acta nº 35, 15 de abril de 1925, libro 1, pp. 45-47.

⁵⁵¹ Revista Telefónica Española, nº 4, abril de 1925, pp. 6-7.

racionales medios de subsistencia de sus funcionarios y obreros, pueda ofrecer a todos ellos equitativa garantía de tranquilidad, tanto para la situación presente como para las contingencias del porvenir". El Comité se mostró de acuerdo con la propuesta que Ruiz Senén hizo a Proctor.

Parece que, a estas alturas, Lewis J. Proctor era el directivo que ostentaba el verdadero poder de la empresa, ya que el resto de consejeros se limitaban a aprobar las decisiones que él había tomado de antemano o que incluso había ejecutado sin el consentimiento de ninguno de los dos órganos de gobierno. Cuando un miembro del Comité o del Consejo consideraba oportuno que la Dirección realizara alguna medida por el bien de los intereses de la compañía, simplemente se limitaban a encargársela a Proctor. La mayor parte de las veces la respuesta de éste era que esa consideración ya había sido tenido en cuenta previamente, por él mismo o por Sosthenes Behn, que el proyecto se encontraba en marcha y que en breve se presentaría la versión final del proyecto para el examen y la aprobación del Comité. Por supuesto, el Comité siempre aprobaba todos los planes presentados por Proctor, que en realidad era el único que llevaba proyectos concretos a las reuniones, con algunas excepciones de Gumersindo Rico. Las pocas veces que algún consejero daba con una idea que consideraba indispensable para la buena marcha de la empresa y que no había sido estudiada por Behn o Proctor todavía, éste indicaba que agradecía la propuesta y que la examinaría minuciosamente.

En general, de la lectura de las actas se tiene la sensación de que la mayor parte de los consejeros, a excepción de Proctor y Rico, se limitaban a asistir a las reuniones una vez por semana, sin realizar ninguna otra gestión para la compañía el resto del tiempo. Cuando algún otro directivo se encargaba de algún asunto concreto, solían ser cuestiones que implicaban la representación de la sociedad ante algún organismo o entidad. No en vano, la mayoría de los consejeros de la empresa eran importantes hombres de negocios, conocidos en todos los círculos empresariales, cuyo nombre por sí sólo ya aportaba un valor añadido a los negocios que estuvieran tratando. Por supuesto, Proctor sabía perfectamente cuándo encargar algún asunto a algún otro miembro del Consejo, que normalmente era Valentín Ruiz Senén. Por lo general, aunque un poco desorientado a veces, éste sí parecía dispuesto a participar de manera activa en la marcha de la empresa y a tomar el mando de algunas gestiones o negociaciones. Fue el caso de las conversaciones para la adquisición del solar de la Gran Vía o el de la representación de la compañía ante el ayuntamiento de Madrid. Gumersindo Rico, cuyo nombre no gozaba de esa notoriedad dentro de la

burguesía financiera del país, se dedicaba siempre a asuntos más burocráticos, como correspondía a su condición de Secretario General de la compañía: firma de contratos, escrituras públicas, etc. No obstante, Rico sí demostraba estar al tanto de la marcha de la compañía y participaba activamente en la elaboración y en la presentación de los proyectos, aunque siempre se mantenía en un discreto segundo plano.

Esta circunstancia tan particular que se vivía en el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo se hacía evidente cuando algún miembro se refería a la “Dirección” de la empresa, que parecía estar formada únicamente por Lewis J. Proctor. Él era el que llevaba las riendas de las reuniones aunque nunca las presidiera, el que respondía a casi todas las dudas y propuestas sobre la marcha de la empresa y el que presentaba todos los planes para su aprobación, cuando no habían sido ya puestos en marcha sin mediación del Comité o del Consejo. En resumen se podría afirmar que el Vicepresidente de la ITT y Vicepresidente de la CTNE era el que concentraba todo el poder ejecutivo y el que respondía y actuaba como Dirección de la compañía.

En el caso que nos ocupaba, el de las jubilaciones de los empleados, Proctor respondió a Ruiz Senén indicándole, como no podía ser de otra forma, que Sosthenes Behn ya había dado órdenes de que se pusiera en marcha un plan de pensiones dentro de la compañía. El capitán Rock, Inspector General de la CTNE, ya había sido encargado con esta tarea y estaba ocupándose activamente en el desarrollo de dicho plan, que sería presentado en breve al Comité Ejecutivo.

En esta reunión también se trataron otros asuntos como la cuestión de los anuncios en prensa de la compañía, habiéndosele encargado al Jefe de Publicidad de la compañía, Francisco Borondo, la redacción de un presupuesto y plan general que esperaban estuviera listo lo antes posible. También se daba cuenta de las reclamaciones que se habían recibido con respecto a la entrega de guías telefónicas en Madrid, acordándose editar dichas guías sin publicidad y consignando únicamente los nombres de los abonados, debiendo acelerarse esta labor en la medida de lo posible, a fin de que pudieran estar listas en el mes de mayo. Se aprobó que todos los consejeros que tuvieran que firmar algún documento de la compañía cobraran una cantidad fija de 5 céntimos de peseta por cada rúbrica. Asimismo, en respuesta a una pregunta planteada por el Marqués de Urquijo, se indicó que el número de teléfonos que explotaba la compañía había aumentado en 500 durante el mes de marzo. La Dirección de Construcciones y Conservación aportó un informe sobre el estado de los trabajos de instalación de la línea Algeciras-Almargen (Málaga), que contó con la aprobación del Comité.

Proctor presentó la documentación sobre “Instrucciones de Ingeniería” y “Métodos de Construcciones” que la ITT había preparado para que fueran aplicados en las obras de la compañía española, en tanto en cuanto la multinacional tenía la obligación de asesorar a la CTNE en cuestiones técnicas, tal y como establecía el contrato firmado por las dos empresas. El Comité aprobó que estos manuales fueran reproducidos y distribuidos por toda la geografía española para que fueran aplicados convenientemente en todas las construcciones que se llevaran a cabo.

Antes de levantar la sesión, el Marqués de Urquijo informó sobre el fallecimiento del Marqués de Comillas, “uno de los más esclarecidos y prestigiosos de los miembros del Consejo de Administración de esta Compañía, acordándose que conste en acta el gran sentimiento y profundo pesar que a todos ha causado la pérdida de tan ilustre compañero”. No obstante, esta información llegaba tres días antes de la verdadera muerte del marqués (¡!), lo que es, cuanto menos, sorprendente. Según las crónicas que aparecieron en la prensa un día después del fallecimiento⁵⁵², Claudio López Bru, había enfermado el día 15 de abril de una bronconeumonía, que se fue agravando rápidamente hasta llegar al fatal desenlace el sábado 18 por la mañana. Entendemos por lo tanto que la noticia sobre el estado de extrema gravedad del Marqués de Comillas, que acababa de cumplir 72 años, fue difundida durante la jornada de aquel miércoles, aunque también fue deformada y dilatada hasta el extremo, de tal forma que llegó a oídos del Marqués de Urquijo como un comunicado de defunción anticipada.

3.146. Sábado, 18 de abril de 1925

Muere el Marqués de Comillas

El día 18 de abril de 1925 a las 10:30 de la mañana fallecía Claudio López Bru, II Marqués de Comillas, tras una brevísima afección que duró escasamente media semana. En el momento de su muerte, López Bru era presidente de la Compañía Transatlántica Española y del Banco Hispano Colonial, además de ser miembro de los Consejos de Administración de la Compañía de Tabacos de Filipinas, Ferrocarriles del Norte, Compañía de Carbones de Asturias, Constructora Naval, Hullera Leonesa y otras muchas⁵⁵³. En noviembre de 1924, apenas cinco meses antes de su

⁵⁵² ABC, 19 de abril de 1925, pp. 19-20.

⁵⁵³ Revista Telefónica Española, nº 5, mayo de 1925, p. 3.

fallecimiento, el Marqués de Comillas había sido nombrado también consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España y de la International Telephone and Telegraph Corporation. No obstante, las actas consultadas no dan cuenta de que López Bru participara en ninguna reunión ni de que ejerciera su labor como consejero, participando en las decisiones de la compañía, tomando parte activa en la Dirección o colaborando en algún proyecto en el que la empresa se encontrara inmersa.

3.147. Martes, 21 de abril de 1925

La fusión de las cuatro asociaciones de empleados y el fondo benéfico

El día 21 de abril se celebró una reunión de la Junta directiva de la Asociación general de Empleados y Obreros. El acuerdo más importante que se tomó en aquella sesión fue el de fusionar las tres antiguas asociaciones de empleados del grupo Peninsular en la nueva organización de la Compañía Telefónica Nacional. Estas tres corporaciones que pretendían ser absorbidas eran la “Asociación Profesional de Empleados, Ex-empleados y Operarios de la Sociedad general de Teléfonos”, la “Asociación de Socorros mutuos de Empleados y Operarios de la Compañía Madrileña de Teléfonos” y la “Asociación general de Empleados y Obreros de la Red Telefónica Interurbana”. En palabras de la Junta directiva⁵⁵⁴:

Sería una gran ventaja para todos que las Asociaciones existentes se reuniesen en una sola. En vez de caminar sobre cuatro senderos distintos, aunque no sean divergentes, avancemos por uno solo.

Se instaba a las tres asociaciones a que nombraran a dos representantes para estudiar y formular un plan de fusión, incluyendo todo lo referente a los proyectos de fondo benéfico que cada organización ofreciera a sus empleados. Se pensaba estudiar de esta forma cómo incorporar esos privilegios en el proyecto de fondo benéfico que estaba elaborando la CTNE.

Con respecto a este plan de pensiones y socorro para empleados, la Revista Telefónica Española ya explicaba en su primer número de enero de 1925⁵⁵⁵:

⁵⁵⁴ Revista Telefónica Española, nº 5, mayo de 1925, pp. 6-7.

⁵⁵⁵ Revista Telefónica Española, nº 1, enero de 1925, p. 23.

Que la Compañía establecerá un fondo benéfico de retiro, el cual será administrado en cooperación por la Compañía y los empleados, y al cual contribuirá aquélla. El objeto de este fondo será atender a las necesidades de los empleados en casos de enfermedad, invalidez, jubilación y defunción.

En la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 15 de abril, Valentín Ruiz Senén hizo mención a la necesidad de crear dicho fondo benéfico, llamando la atención de Lewis J. Proctor para que pusiera en marcha los trámites necesarios para que en breve se pudiera constituir el plan. Lo que desconocía Ruiz Senén es que este proyecto llevaba gestándose desde hacía varias semanas, que Sosthenes Behn ya había dado órdenes para que se empezara a trabajar en el proyecto y que Logan Rock, Inspector General de la CTNE, estaba ocupándose de esta tarea.

Efectivamente, tal y como explicaba la Junta directiva de la Asociación de Empleados en su reunión del 21 de abril, el capitán Rock ya tenía elaborado el plan provisional de creación del fondo benéfico de la compañía y se encontraba estudiando la fusión de éste con los de las otras tres asociaciones. Los representantes de la organización declaraban que este plan sería llevado a la práctica incluso aunque las cuatro asociaciones no llegaran a un acuerdo de unificación, aunque lo deseable era que todo el fondo estuviera gestionado por una única entidad. Para llevar a cabo las negociaciones sobre este proyecto de pensiones y socorro se nombró una comisión formada por representantes de todas las asociaciones y presidida por el propio Logan Rock. Una vez estuviera redactado por la comisión el proyecto definitivo, sería sometido a la consideración de los afiliados de sus respectivas asociaciones, para su aprobación.

Como se puede apreciar, la implicación de la Dirección de la compañía en la organización de la Asociación general de Empleados y Obreros era total, llegando al punto de presidir esta comisión para elaborar el proyecto de fondo social para los trabajadores. No en vano, la CTNE era la que iba a pagar, casi de manera íntegra, el capital destinado a las jubilaciones, las pensiones y los subsidios de los empleados. En un artículo de la Revista Telefónica Española de abril de 1925 queda patente la dependencia que la Asociación tenía del Inspector General a la hora de tratar cualquier cuestión con respecto al fondo benéfico de la empresa⁵⁵⁶:

⁵⁵⁶ Revista Telefónica Española, nº 4, abril de 1925, p. 3.

El capitán Rock, que, como todos saben, marchó a Nueva York, ha regresado hace días, volviendo con él nuevamente la actividad a todos los planes que teníamos con relación a la ayuda de la Compañía. Con el apoyo que la Nacional ha de prestar a nuestra Asociación para la constitución del fondo benéfico, lograremos que las pensiones para casos de jubilación, invalidez, enfermedad, etc., puedan adquirir valores que nosotros no sospechábamos alcanzar tan pronto. Por ello las cifras para la formación de nuestro capital inicial de subvención y de ayuda a nuestras cuotas, que la Compañía ha de facilitarnos, no están todavía puntualizadas, pues es cosa que merece serio y meditado estudio.

La Asociación de empleados y los directivos de la compañía

En aquella reunión de la Junta celebrada el 21 de abril de 1925 también se debatió sobre el deseo expreso de algunos directivos de la Compañía de pertenecer a la Asociación general de Empleados y Obreros. En este sentido, la Junta decidió permitir que cualquier trabajador de la compañía tuviera la oportunidad de asociarse, lo que incluía a los altos directivos, pero con la salvedad de que no podrían ser elegidos para ningún cargo de la Asociación aquellas personas que ocuparan un puesto elevado en la organización de la compañía, a saber:

*Director general, Tesorero general, Interventor general, Inspector general, Secretario general, Director de Construcciones y Conservación, Director de Tráfico, Director de Compras, Director Comercial, Superintendente de Suministros, Ingeniero Jefe, Subdirectores de Distrito y cargos análogos que existan o en lo sucesivo puedan crearse.*⁵⁵⁷

Como se puede apreciar, la línea divisoria quedaba perfectamente dibujada entre el segundo y el tercer nivel de jerarquía de la empresa, de tal forma que se excluía al Ingeniero Jefe pero no al Subingeniero Jefe, cargo que ostentaba el Presidente de la Asociación, Luis Alcaraz Otaola.

⁵⁵⁷ Revista Telefónica Española, nº 5, mayo de 1925, p. 4.

La Junta también aprobó en esta reunión que los trabajadores de la ITT Co. (España) pudieran formar parte de la Asociación general de Empleados y Obreros de la Compañía Telefónica Nacional de España.

3.148. Miércoles, 22 de abril de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁵⁸

En esta sesión se trataron varios temas relacionados con la plantilla de la compañía. En primer lugar, se decidió no admitir más solicitudes de ingreso ante la imposibilidad de atenderlas por no existir vacantes en nómina. Además, el Comité acordó que se establecieran “determinadas bases de admisión, especificando las aptitudes y condiciones que para cada plaza se requieran”. En este sentido, se daría preferencia, en igualdad de circunstancias, a los parientes o allegados de los trabajadores que ya estaban en plantilla. Esto se trataba de una práctica habitual en este tipo de grandes empresas, que promovían el desarrollo de una “gran familia”, telefónica en este caso. Dando preferencia a los parientes de los empleados se fomentaba este sentimiento corporativo, que también se veía reforzado por una serie de derechos y privilegios como indemnizaciones por accidentes laborales, actividades lúdicas y deportivas fuera del trabajo, facilidad para la adquisición de acciones de la compañía y hasta vivienda en algunos casos⁵⁵⁹.

En lo que se refería a la contratación de ingenieros, el Marqués de Urquijo era de la opinión de preguntar por referencias e informes a los directores de las Escuelas de Ingeniería, “con objeto de obtener las mayores garantías de laboriosidad y competencia en la elección y nombramiento de los aspirantes”. Proctor explicaba entonces que el criterio de la compañía era el de tomar en prácticas a estos ingenieros durante dos meses para valorar sus aptitudes, en tanto en cuanto los conocimientos teóricos adquiridos en una Escuela no eran suficientes para enfrentarse a las tareas de la empresa:

Ya que para el eficaz desempeño y cumplimiento de las funciones que en la Compañía se les asigna, precisan una especialización y practica determinada que no se adquiere, con la amplitud suficiente, en el carácter general de

⁵⁵⁸ Acta nº 36, 22 de abril de 1925, libro 1, pp. 47-49.

⁵⁵⁹ Álvaro-2005, p. 7.

enseñanza de las escuelas, considerándose por estas razones el título de Ingeniero, cualquiera que sea su clase, como preparación general necesaria para especializarse en los trabajos telefónicos.

Para cerrar el asunto de las contrataciones, el Marqués de Urquijo pronunció un pequeño discurso sobre la necesidad de seleccionar rigurosamente a todo el personal, excluyendo “los elementos inútiles o perjudiciales” y beneficiando al que “rindiendo culto al trabajo cumpla con los deberes de su cargo y se comporte como procede y la buena organización de la empresa exige”.

Proctor explicó a continuación las subvenciones que la Compañía Peninsular de Teléfonos otorgaba a distintas entidades y el Comité aprobó que se continuara con la misma práctica, si bien quedaba a juicio de la Dirección establecer modificaciones o suprimir por completo alguna de estas ayudas.

Por último, se presentaba un informe del Interventor General de la empresa sobre la situación económica de la CTNE, aunque Ruiz Senén no lo consideró suficiente porque no separaba con todo detalle las partidas. Según su opinión, no debería salir ninguna cantidad de las cuentas de la empresa “sin saber y determinar con toda claridad adonde debe cargarse”. Proctor manifestaba entonces que todavía no era posible desglosar las partidas generales con tanto detalle, debido a la especial organización de la compañía y a que faltaban datos que todavía tenían que ser suministrados por las Subdirecciones de los distritos. No obstante, se estaba trabajando para subsanar estos errores y para “someter en su día a la aprobación del Comité los estados correspondientes en la forma concreta que se desea”.

Alfonso Sala dimite como presidente de la Mancomunidad

La correspondencia entre Primo de Rivera y Alfonso Sala, Presidente de la Mancomunidad, fue intensa durante las primeras semanas de 1925. Muchos historiadores se han encargado de estudiar estas cartas, en las que se pone de manifiesto la diferencia de opiniones entre los dos dirigentes sobre la Mancomunidad de Cataluña y el Estatuto Provincial que habría de publicarse poco después. En una misiva fechada el día 24 de febrero, Sala anunciaba su “retirada de la vida pública en

caso de confirmarse el propósito de disolución de la Mancomunidad”⁵⁶⁰. Alfonso Sala viajó a Tetuán para reunirse con Primo de Rivera a mediados de marzo y allí fue donde se encontraba cuando el rey firmó el Real Decreto por el que se promulgaba el Estatuto Provincial y se ordenaba el desmantelamiento del organismo catalán. El mismo día 20 de marzo, Alfonso Sala partió de Tetuán destino Madrid, para llegar a Barcelona finalmente el 22 de marzo⁵⁶¹.

En aquellas jornadas circulaba por Barcelona un texto que decía ser un manifiesto del Presidente de la Mancomunidad al pueblo catalán y en el que se declaraba contrario al Estatuto Provincial. Días más tarde, Alfonso Sala leyó una nota a los periodistas en la que explicaba que aquel texto no había sido escrito por él y que nada tenía que ver con sus ideas. Además, se declaraba partidario del nuevo Estatuto⁵⁶²:

No podía menos de colaborar con tales principios y fundamentos a la implantación del nuevo régimen provincial y regional, con todos mis amigos y compañeros, que lo son todos los que han integrado las cuatro diputaciones catalanas y así lo expresé al Rey al Directivo y singularmente a su ilustre presidente el general Primo de Rivera que ha tenido la atención y el afecto de hospedarme durante tres días en el Palacio de la Residencia de Tetuán.

No se entienden estas manifestaciones de Alfonso Sala el día 24 de marzo, tan favorables a la nueva reorganización territorial, teniendo en cuenta que semanas antes se encontraba enfrascado en un agrio debate con Primo de Rivera por esta misma cuestión. El Presidente siempre había sido contrario a la disolución de la Mancomunidad y no tardó en cumplir las amenazas que había transmitido al Jefe del Directorio Militar en febrero, aunque en su renuncia oficial se declaró otra vez favorable al nuevo régimen.

El miércoles 22 de abril de 1925, Alfonso Sala presentaba su dimisión como presidente de la Mancomunidad, como presidente de la comisión gestora interina,

⁵⁶⁰ Pabón-1999, p. 969.

⁵⁶¹ La Vanguardia, 21 de marzo de 1925, p. 9.

⁵⁶² La Vanguardia, 25 de marzo de 1925, p. 8.

como presidente de la diputación de Barcelona y como diputado de esta última. En unas cartas dirigidas al Gobernador Civil y al vicepresidente de la Diputación decía⁵⁶³:

En vista de la diferencia de criterio en la aplicación del estatuto provincial tengo el sentimiento de presentar a V. E. la renuncia del cargo [...] no sin hacer constar que mi criterio respecto al nuevo régimen provincial es el del estatuto aprobado por el gobierno del Directorio y que rige en España desde el día 1.º de los corrientes.

Es decir, que aunque cumplía con su promesa de retirarse de la vida pública en caso de confirmarse la disolución de la Mancomunidad, lo hacía declarándose a favor del estatuto que ejecutaba dicha disolución.

Solicitud de constitución del Comité Paritario Nacional de Teléfonos

En el Real Decreto de 3 de abril de 1919, en el que se regulaba la jornada laboral de ocho horas, aparecía por primera vez el concepto de Comité Paritario, una organización formada por patronos y empleados que mediaba en problemas relacionados con los sueldos de los trabajadores de las empresas⁵⁶⁴. Tres años después, el Real Decreto de 5 de octubre de 1922 regulaba la constitución, el funcionamiento y las atribuciones de los Comités Paritarios⁵⁶⁵. No obstante, tras la promulgación de esta disposición todavía quedaban dudas acerca de si la legislación social vigente se oponía a la existencia de Comités Paritarios Permanentes para regular las relaciones entre directivos y obreros en las empresas de servicios públicos como la CTNE. Estas dudas quedaron resueltas por el Gobierno de Primo de Rivera mediante la Real Orden de 7 de abril de 1925, que autorizaba la formación de un Comité Paritario en una empresa catalana de gas y electricidad, lo que demostraba

⁵⁶³ La Vanguardia, 24 de abril de 1925, p. 6.

⁵⁶⁴ Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 3 de abril de 1919. Gaceta de Madrid, 4 de abril de 1919, nº 94, pp. 42-43.

⁵⁶⁵ Real Decreto del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, de 5 de octubre de 1922. Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 1922, nº 279, pp. 61-63.

que en las compañías de servicios públicos se podía constituir una organización de este tipo⁵⁶⁶.

Tal y como explicaba la Revista Telefónica Española⁵⁶⁷:

Responde este organismo a la moderna orientación de la legislación social en el sentido de intervencionismo del Estado, que no quiere ser ya una esfinge ni abstenerse de intervenir en las relaciones económicas, y tiende a extender el procedimiento conciliatorio a toda suerte de conflictos que surjan entre el capital y el trabajo, criterio sustentado desde el primer momento por el Sr. Aunós, Subsecretario de Trabajo, a quien de hecho corresponde la primera idea referente a estos Comités, y al que puede atribuirse en justicia la fraternidad de los mismos.

De hecho, aunque la idea de los Comités Paritarios no era nueva, el general Primo de Rivera la impulso y favoreció, imitando la organización sindical de la Italia fascista de Benito Mussolini. Estos consejos estaban formados por igual número de obreros que de patronos, pero siempre estaban presididos por un funcionario del Ministerio de Trabajo, que representaba al Estado, fomentando la participación de éste en la resolución de los conflictos laborales.

Aunque la creación de los comités correspondía al Gobierno, la Junta directiva de la Asociación de Empleados y Obreros de la CTNE tomó la iniciativa y dirigió una instancia, con fecha 22 de abril de 1925, al Subsecretario del Ministerio de Trabajo solicitando la constitución de un Comité Paritario Nacional Permanente de Teléfonos. El escrito elevado a la Administración pública explicaba cómo la creación de esta entidad se acogía a la legislación vigente y exponía los motivos por los que se veía necesaria la existencia del Comité Paritario. La razón principal era, sin duda, que los conflictos laborales que pudieran surgir se resolvieran de manera idéntica “para los funcionarios que hacen su servicio en cualquier aldea donde exista Centro telefónico, que para los que lo prestan en una capital de provincia”. Además, se resaltaba la importancia del servicio telefónico para el orden y la seguridad nacional.

⁵⁶⁶ Real Orden de la Presidencia del Directorio Militar, de 7 de abril de 1925. Gaceta de Madrid, 15 de abril de 1925, nº 105, pp. 308-310.

⁵⁶⁷ Revista Telefónica Española, nº 4, abril de 1925, pp. 5-6.

En el número de junio de la Revista Telefónica Española se informaba de las “favorables impresiones de la formación de este Comité”, indicando que ya se habría celebrado una reunión en el Ministerio entre los representantes de la compañía y los de la Asociación de no haber tenido que ausentarse el Subsecretario de Trabajo para asistir a una conferencia en Suiza⁵⁶⁸.

3.149. Viernes, 24 de abril de 1925

La reclamación por la Ley del Timbre

En la reunión del Consejo de Administración del 26 de marzo se decidió elevar una instancia al Gobierno en la que se pedía la exención del impuesto del Timbre con el que se gravaba el coste de las conferencias interurbanas. En dicha solicitud, la compañía pedía que se aclarara el último inciso de la base cuarta del contrato firmado con el Estado. Los últimos párrafos de dicha base establecían lo siguiente:

Todos los actos de adquisición de instalaciones o propiedades telefónicas, bien por el Estado, bien por la Compañía, así como la entrega de dichas instalaciones o propiedades por el Estado a la Compañía, [...] como también todos los demás actos complementarios de los mismos que se realicen, incluso los documentos con que se solemnizan, estarán exentos de los impuestos sobre los derechos reales y demás directos o indirectos que, en virtud de la legislación general o particular sobre tales impuestos, los graven, constituyendo esta exención una excepción del precepto general.

Comprenderá esta exención a la transmisión no sólo de los derechos de concesión o cualesquiera otros, sino de las instalaciones, propiedades, material de todas clases en depósito y demás elementos adscritos o destinados a los servicios objeto de este contrato. Esta exención no alcanza a los derechos correspondientes a la ley del Timbre.

Como se puede apreciar, esta cláusula era muy favorable para la CTNE, que quedaba exenta de todo impuesto o tasa en todos los actos de adquisición de instalaciones y propiedades telefónicas. Un poco más adelante, en la base séptima del contrato, también se eximía a la compañía del pago de cualquier impuesto de carácter

⁵⁶⁸ Revista Telefónica Española, nº 6, junio de 1925, p. 5.

nacional, provincial o municipal que pudiera establecerse sobre las instalaciones, los edificios, los emplazamientos de postes y antenas, las obras, etc. Todo ello siempre con la excepción del impuesto que correspondía a Ley del Timbre de 1920. Pérez Yuste explicaba en su tesis en qué consistía dicho gravamen⁵⁶⁹:

Según esta Ley, los usuarios de las líneas telefónicas interurbanas debían satisfacer al Estado una sobretasa de 10 céntimos por cada telefonema cursado y otra del 5% de la tarifa oficial por cada conferencia cursada o abono contratado, excepto para las conferencias extraprovinciales mantenidas a través de las líneas telefónicas no explotadas por la Compañía Peninsular, que eran consideradas a estos efectos como telefonemas. El concesionario debía recaudar las tasas y liquidarlas, posteriormente, al Estado.

La instancia elevada al Gobierno solicitaba la exención también de este impuesto en las llamadas telefónicas interurbanas y en los abonos para conferencias, dejando que se aplicara únicamente a la expedición de documentos. Según la CTNE, el cobro de este impuesto por el Estado no tenía carácter ni fuerza de timbre y en realidad imponía una tasa del 5% que se sumaba al canon del 4% ya establecido en la base séptima. En resumen, según la compañía, el Estado estaba logrando una participación del 9% en los ingresos brutos de explotación de la compañía.

Sorprende que la CTNE decidiera realizar esta solicitud, sobre todo teniendo en cuenta que estaba exenta del pago de cualquier impuesto que pudiera gravar sus actividades y que el único que tenía que abonar al Estado era precisamente el que se cobraba a los usuarios y repercutía directamente en sus facturas. Tal y como establecía la Ley del Timbre, la función del concesionario (la Telefónica, en este caso) era sencillamente la de recaudar las tasas y liquidarlas al Estado después, por lo que la compañía no se veía directamente afectada por este impuesto. Consecuentemente, los costes de las conferencias interurbanas se veían incrementados en un 5%, algo que los usuarios no verían con buenos ojos y culparían a la compañía de las tarifas tan elevadas. Se desconoce, empero, si los planes de la Telefónica, en caso de conseguir que dicha solicitud fuera aprobada, pasaban por reducir sus tarifas interurbanas un 5% o sencillamente mantener los precios y conseguir un porcentaje de beneficios más alto.

⁵⁶⁹ Yuste-2004, p. 193.

Este aspecto era una de las pocas cláusulas del contrato entre la compañía y el Estado que no era favorable a los intereses de la CTNE, aunque en realidad tampoco afectaba a sus beneficios. Curiosamente, cuando en septiembre de 1924 surgieron críticas por la colaboración del hijo de Primo de Rivera con la empresa, éste fue uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno para demostrar el supuesto rechazo del Dictador hacia la CTNE⁵⁷⁰. En la nota oficiosa publicada por la Presidencia del Directorio Militar el 12 de septiembre se indicaba que, antes de la intervención de Primo de Rivera en el proceso de adjudicación del sistema telefónico, la cláusula que concedía también la exención de timbre a la contabilidad de la compañía estaba aprobada. Sin embargo, y según la nota, el Presidente examinó dicha base, se opuso a esta concesión y logró que se anulara “lo que significaba para la Compañía de Teléfonos “un favor” de muchos miles de pesetas anuales en contra”. Como ya sabemos, ni la intervención de Primo de Rivera fue tal, ni se realizó modificación alguna en este sentido (este gravamen no se excluyó en ninguna versión del contrato), ni la aplicación de este impuesto implicaba coste alguno para la compañía. Sí conllevaba una recaudación interesante para el Estado, pero salía directamente del bolsillo de los abonados.

Fuera como fuese, la instancia de la CTNE fue presentada al Gobierno y por lo tanto tenía que ser estudiada por algún vocal del mismo. Primo de Rivera designó al general Mario Muslera Planes para presidir la ponencia que habría de decidir si se admitía o rechazaba la solicitud elevada por la compañía. El día 24 de abril de 1925 el Presidente emitió la orden, dirigida a este vocal del Gobierno, para que estudiara el asunto referente a:

Escrito del Subsecretario de Hacienda, fecha 13 del actual en el que informa la Dirección general de Rentas Públicas acerca de la adjunta instancia del Presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España D. Estanislao de Urquijo, Marqués de Urquijo, solicitando que se aclare el último inciso de la base 4ª del contrato con el Estado aprobado en 25 de Agosto último,

⁵⁷⁰ Véase crónica del día 12 de septiembre de 1924.

*presentándole su informe o propuesta de resolución cuando lo haya verificado.*⁵⁷¹

3.150. Lunes, 27 de abril de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁵⁷²

Al comienzo de la reunión, el Marqués de Urquijo daba cuenta al Consejo del fallecimiento del Marqués de Comillas y le dedicaba unas palabras de recuerdo similares a las que ya había pronunciado unos días antes en la última sesión del Comité Ejecutivo, destacando su labor como consejero de la empresa. Claudio López Bru había sido nombrado miembro del Consejo de Administración de la CTNE en la reunión celebrada el día 26 de noviembre de 1924. No obstante, el Marqués de Comillas no había asistido a ninguna de las seis sesiones celebradas por el Consejo de Administración desde su nombramiento hasta su muerte el día 18 de abril de 1925 ni se hace mención a su participación o colaboración en la gestión de la sociedad.

A continuación se informó detalladamente sobre todas las decisiones adoptadas por el Comité en sus reuniones del mes de abril, todo lo cual mereció la entera y absoluta conformidad del Consejo que lo sancionó por unanimidad. Se presentaron y aprobaron también las relaciones de nombramiento de personal, los informes de cuentas, el estado de gastos e ingresos, los proyectos de los distintos departamentos, etc.

La ITT Co. de Nueva York había decidido transferir los contratos que se habían firmado entre la multinacional y la CTNE a nombre de su nueva filial española, la “International Telephone and Telegraph Co. (España)”. El Consejo acordó delegar en el Comité Ejecutivo todas las decisiones que hubieran de tomarse para la transferencia de estos contratos, siempre buscando la resolución “más conveniente para nuestros intereses”. El Comité informaría al Consejo de todas las determinaciones que se adoptaran una vez el proceso hubiera finalizado. Esta fue la única decisión de importancia que se tomó en esta reunión celebrada el día 27 de abril de 1925.

⁵⁷¹ Ponencia del general Muslera sobre la solicitud de la CTNE para que se aclare la base 4ª del contrato con el Estado, abril y mayo de 1925. Archivo Histórico Nacional, caja 240-2, expediente 36.

⁵⁷² Acta nº 14, 27 de abril de 1925, libro 1, pp. 31-32.

Concurso de proyectos para la construcción del edificio de Barcelona

La CTNE no escatimó fondos en la adquisición de los mejores edificios y solares en todas las ciudades españolas, con la clara intención de hacer ostensible su fuerza y dinamismo en el panorama empresarial español. En Barcelona, segunda ciudad española por importancia, compró el edificio del hotel Bristol, situado en la Plaza de Cataluña de Barcelona, en la esquina de las calles Fontanella y Puerta del Ángel, por 2 millones de pesetas. Esta decisión fue tomada en la reunión del Comité Ejecutivo de 21 de marzo de 1925. No obstante, la compañía no tenía ninguna intención de reutilizar el inmueble del antiguo hotel Bristol, sino que se consideró más conveniente demolerlo y construir uno totalmente nuevo que se convertiría en la nueva sede la CTNE en la capital catalana. En un artículo de la Revista Telefónica Española de agosto explicaban esta decisión⁵⁷³:

A veces, cuando la oficina y central automática, que estarán en el mismo edificio, necesitan una colocación verdaderamente estratégica, la Compañía, no pudiendo encontrar un solar como desea, compra un edificio para derribarlo y levantar en su hueco la magnífica obra nueva. Esto, como puede suponerse, no se logra sino al cabo de laboriosos trámites y después de importantes desembolsos. Así se ha procedido en Barcelona, donde la Compañía ha adquirido el Hotel Brístol, enorme edificación que da a las calles de Fontanella y Puerta del Ángel y hace chaflán a la plaza de Cataluña.

Para la construcción de este nuevo edificio, el Marqués de Urquijo convocó un concurso de proyectos el día 27 de abril de 1925 que fue difundido públicamente en los periódicos unos días después⁵⁷⁴. El anuncio indicaba lo siguiente:

Esta Compañía abre un concurso entre los arquitectos españoles para la presentación de proyecto de un gran edificio de ocho pisos, planta baja y sótanos, en la Plaza de Cataluña, que será destinado a la instalación de oficinas y centrales automáticas.

⁵⁷³ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 9.

⁵⁷⁴ La Vanguardia, 1 de mayo de 1925, p. 2.

Además se decía que las bases del concurso estarían disponibles para todos los arquitectos que las solicitaran en la sede central de la compañía en Madrid y que el plazo para la admisión de proyectos finalizaba el día 10 de julio. El ganador recibiría un premio de 75.000 pesetas.

3.151. Martes, 28 de abril de 1925

La reforma de las líneas telegráficas gracias al pago de la CTNE

Poco después de que la Compañía Telefónica Nacional de España consiguiera la adjudicación del servicio telefónico, Tafur Funés realizaba unas declaraciones al diario La Vanguardia en las que aseguraba que dicha concesión había sido realizada para obtener el dinero que permitiría reformar el servicio telegráfico. Como sabemos, no es cierto que los teléfonos fueran entregados a la CTNE para que el Estado consiguiera el líquido necesario para la reorganización telegráfica, pero lo cierto es que el Director General cumplió su palabra con respecto al destino de aquel dinero. El día 28 de abril de 1925 se firmaba el Real Decreto por el que se acordaba la aplicación del capital pagado por la Telefónica por las redes telefónicas propiedad del Estado para la ejecución de un “plan general de conjunto de mejora de las redes telegráficas, adquisición de aparatos, instalación de redes neumáticas y reparación del cable de Canarias”⁵⁷⁵.

En el texto expositivo del Real Decreto se explicaba que el capital invertido en telegrafía no era proporcional al crecimiento de la demanda, debido sin duda a las penurias del erario público. Ello implicaba que la red se encontrara cada vez peor y que el servicio fuera deficiente. Se hacía necesaria una importante inversión de dinero para construir nuevas líneas, instalar aparatos modernos, llegar a zonas rurales que no disponían todavía de sistema telegráfico, consolidar los apoyos de los postes, etc. La situación de Canarias era especialmente desfavorable ya que, de los dos cables submarinos, uno se encontraba inservible, lo que ocasionaba que cualquier avería en el otro provocara que las islas se encontraran totalmente incomunicadas con la península. Sin embargo, se había encontrado la solución al problema económico que implicaban todas estas mejoras tan necesarias:

⁵⁷⁵ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 28 de abril de 1925. Gaceta de Madrid, 30 de abril de 1925, nº 120, pp. 554-555.

Actualmente, y sin acudir al presupuesto ordinario de ingresos, ha encontrado la forma de poner remedio suficiente. Para ello propone utilizar las cantidades entregadas por la Compañía Telefónica Nacional de España, con arreglo a su contrato de concesión, por la explotación de las instalaciones y propiedades telefónicas del estado que han pasado a su servicio, cantidad que asciende a pesetas 17.464.293,37.

La Dirección General de Comunicaciones había elaborado un plan de cinco años para la inversión de este dinero en “las mejoras precisas para evitar las dificultades mencionadas y obtener un buen servicio”, que incluían la reforma de las redes telegráficas, la adquisición de aparatos, la instalación de redes neumáticas y la reparación del cable de Canarias. Parece lógico que el Directorio decidiera emplear el dinero de la Telefónica en el Cuerpo de Telégrafos, ya que la cesión de las propiedades del Estado a la compañía le estaba ocasionando y le ocasionaría una importante pérdida de ingresos.

3.152. Miércoles, 29 de abril de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁷⁶

El Consejo de Administración había delegado en el Comité Ejecutivo el estudio de la proposición presentada por la ITT de Nueva York para transferir, a nombre de su nueva filial española, la ITT (España), los contratos que había suscrito con la CTNE el día 29 de agosto de 1924 sobre asesoramiento técnico y financiero. El Comité examinó dicha proposición y no encontró reparo alguno, por lo que se consideraban transferidos a todos sus efectos dichos contratos con carácter retroactivo a 1 de enero de 1925.

Julián Cifuentes aprovechó la reunión para preguntar a Lewis Proctor si se habían hecho ya los pedidos para las centrales automáticas que tenían que comenzar a instalarse en el año 1925 y para las que ya se estaban construyendo o reformando edificios en varias ciudades españolas. Proctor manifestó que el coronel Behn se estaba ocupando “con preferente atención de este asunto para la favorable y total resolución del mismo, ya que tiene muy presente la necesidad de atender el criterio general establecido por esta Compañía respecto al desarrollo e incremento de la

⁵⁷⁶ Acta nº 37, 29 de abril de 1925, libro 1, pp. 49-50.

producción nacional”. Como veremos en apartados posteriores, este aparente retraso en la adquisición de materiales para la instalación de centrales automáticas no tenía nada que ver con el interés por atender a la producción nacional, tal y como expresaba Proctor en esta reunión. Sosthenes Behn se encontraba inmerso en un proceso de negociación con la AT&T para la compra de su “brazo productor” destinado al mercado internacional, la *International Western Electric Co.*, que fabricaba un modelo de centrales automáticas llamado “Rotary”. Cuando la ITT finalmente se hizo con la IWEC unos meses más tarde, la CTNE decidió que el modelo de central más conveniente para las ciudades españolas era el producido por la nueva filial de la multinacional de Behn. Por ello, no fue hasta finales del verano de 1925 cuando se comenzaron a pedir materiales para las nuevas centrales, que por supuesto llegaron en masa desde la fábrica de la IWEC en Amberes (Bélgica), dada la enorme necesidad que tenía nuestra red de automatizar el servicio telefónico urbano.

3.153. Domingo, 3 de mayo de 1925

Comienzan los trabajos de la línea Madrid-Valencia⁵⁷⁷

Cuando un abonado madrileño deseaba comunicarse con alguien en Valencia la conexión se establecía a través de Zaragoza y Barcelona⁵⁷⁸, ya que en 1925, casi medio siglo después de la llegada del teléfono a nuestro país, todavía no existía una línea directa entre la capital y la tercera ciudad española por número de habitantes. La base 15ª del contrato entre la Telefónica y el Estado establecía que una de las líneas que la empresa estaba obligada a construir era ésta y no es de extrañar que fuera una de las primeras elegidas por la Dirección para emprender su programa de reforma del sistema interurbano nacional.

Las obras de la línea Madrid-Valencia comenzaron el día 3 de mayo de 1925 a las cuatro y media de la tarde con la instalación del primer poste en el kilómetro 33,370 de la carretera Cuenca-Minglanilla⁵⁷⁹. Una brigada comenzó entonces a construir la línea en dirección Cuenca, mientras que, pocos días después, otro grupo emprendió la misma tarea desde Vallecas, yendo al encuentro de aquella primera brigada. El día 3 de junio comenzó un tercer grupo a colocar postes en Requena (Valencia), también

⁵⁷⁷ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, pp. 34-38.

⁵⁷⁸ Yuste-2004, p. 350.

⁵⁷⁹ Minglanilla es una población conquense muy cercana a la provincia de Valencia.

con dirección Cuenca, a las órdenes del Subingeniero Jefe de la compañía y Jefe de Construcciones, Luis Alcaraz Otaola.

Las brigadas que construían líneas interurbanas estaban compuestas por dos capataces, 14 celadores y de 15 a 20 peones, de los cuales la mitad eran barreneros, lo que hacía un total de 25 ó 30 hombre por grupo. Cada brigada disponía de uno a tres camiones, según la disponibilidad de estos, para repartir la madera y que iban siempre 10 kilómetros por delante de cada brigada. Cada camión podía transportar como máximo diez postes corrientes de 8 metros de altura⁵⁸⁰.



Figura 13. Instalación de líneas interurbanas, 1925. Fuente: Telefónica.

⁵⁸⁰ Para profundizar en el procedimiento que se seguía para la instalación de los postes y sus pormenores se puede consultar el artículo “Cómo trabajan nuestras brigadas” que publicó la Revista Telefónica Española en su edición de agosto de 1925.

En esta línea Madrid-Valencia se montaron en principio cinco circuitos (diez hilos), que ocupaban totalmente la primera cruceta superior de los postes telefónicos, aunque todo quedaba listo para que en el futuro se pudieran instalar nuevos circuitos en función de las necesidades. De estos cinco circuitos, dos eran directos entre Madrid y Valencia y contaban con repetidores en Cuenca; uno era “escalonado” (con entrada en los pueblos) entre Madrid y Cuenca y luego directo en el trayecto Cuenca-Valencia; otro era directo en el tramo Madrid-Cuenca pero escalonado de Cuenca a Valencia; y el último era escalonado en todo el trayecto entrando en 25 pueblos de las provincias de Madrid, Cuenca y Valencia, además de en las tres capitales.

3.154. Lunes, 4 de mayo de 1925

El Gobierno deniega la solicitud sobre el impuesto del Timbre

El Presidente del Consejo de Administración de la CTNE había elevado una solicitud al Gobierno para que se aclarara el último inciso de la base cuarta de su contrato con el Estado, que tenía que ver con la no exención del impuesto del Timbre. La CTNE pretendía que dicho gravamen fuera aplicado únicamente a la expedición de documentos por parte de la compañía, pero que se exceptuase la imposición del 5% sobre el importe de las conferencias telefónicas interurbanas y de los abonos interurbanos y de 0,10 pesetas en los telefonemas. Esta comisión venía especificada en el artículo 47 de la Ley del Timbre. En opinión de la empresa, el impuesto no tenía verdadero carácter ni fuerza de timbre, sino que lo consideraba como una participación más del Estado en la recaudación de sus beneficios. La base cuarta del contrato firmado por las dos partes ya establecía el canon del 4% de los beneficios que la compañía tenía que pagar al Estado (un valor muy favorable para la Telefónica, como sabemos), así se consideraba que las conferencias y los abonos interurbanos estaban en realidad gravados con un 9%, lo que, en su opinión, pugnaba con el criterio general que establecía dicha base cuarta.

Primo de Rivera recibió la solicitud del Marqués de Urquijo, que presentaba en nombre de la empresa, y procedió a encargar su estudio y resolución a uno de los vocales del Directorio Militar: el general Mario Muslera. No tardó mucho éste en emitir su valoración, ya que el día 4 de mayo de 1925 ya tenía preparado un informe y una Real Orden para denegar dicha solicitud por parte de la CTNE. El texto se titulaba “Informe acerca de la instancia formulada por el Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España, solicitando que se aclare el último inciso de la base cuarta del contrato entre el Estado y dicha compañía

aprobado por Real Decreto de 15 de agosto de 1924” y se ha conservado junto al resto de documentos de la ponencia del general Muslera en el Archivo Histórico Nacional⁵⁸¹.

En dicho informe se explicaba primero el contenido de la base cuarta del contrato y luego la solicitud elevada por el Presidente de la compañía. A continuación, Mario Muslera consideraba necesario indicar que este impuesto del Timbre que se aplicaba a ciertas conferencias y los telefonemas no era satisfecho por la CTNE, sino por los abonados que hacían uso de estos servicios. Por ello dejaba claro que este gravamen no podía ser considerado como un aumento del canon fijado, tal y como afirmaba la empresa. Además, no podía aspirar a la exención del mismo fundado en cláusulas del contrato, “puesto que tal contrato sólo afecta a los impuestos que deben ser satisfechos por la Compañía; pero no puede alterar en nada los gravámenes que para los particulares y entidades se hayan establecido con carácter general por las leyes”. Muslera recordaba a la compañía que, en lo que al impuesto del Timbre se refiere, se tenía que limitar a su recaudación, ingresando su importe en las cuentas del Estado, tal y como quedaba reglamentado en la Real Orden de 1 de mayo de 1920.

Después de esta argumentación, el vocal del Directorio resolvía la petición declarando que “no ha lugar a aclarar la base 4ª del contrato [...], toda vez que en dicha base no se regulan las exenciones tributarias concedidas a la referida Compañía”. Muslera firmó y envió este informe al general Primo de Rivera el día 4 de mayo de 1925 y además adjuntó la Real Orden redactada por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda estipulando todo lo expuesto para que fuera sancionada por el rey.

Esta disposición repetía más o menos las palabras del informe de Mario Muslera y recordaba a la compañía que se limitara a recaudar el impuesto del Timbre para su posterior ingreso en el Tesoro. La Real Orden, que también tenía fecha de 4 de mayo de 1925, no ha podido ser localizada en los archivos de la Gaceta de Madrid de la época, como ya ocurriera con aquella de 4 de diciembre en la que se agradecía a la CTNE la “inauguración” del servicio telefónico entre la península y África. Esto no significa que no fuera sancionada por Alfonso XIII, puede que simplemente se

⁵⁸¹ Ponencia del general Muslera sobre la solicitud de la CTNE para que se aclare la base 4ª del contrato con el Estado, abril y mayo de 1925. Archivo Histórico Nacional, caja 240-2, expediente 36.

trasapelara y no quedara publicada en la Gaceta. No obstante, la CTNE fue informada de la redacción de esta Real Orden, puesto que en la segunda reunión del Comité Ejecutivo del mes de junio se comunicaba a los miembros que esta disposición había quedado resulta en contra de sus intereses⁵⁸².

3.155. Martes, 5 de mayo de 1925

Las críticas de Primo de Rivera hacia la Compañía Telefónica Nacional

A las 7 de la tarde del 5 de mayo de 1925 se celebró, como tantos otros días, un Consejo del Directorio Militar y las ediciones de los periódicos del día siguiente informaron sobre dicha reunión: los asistentes, los asuntos tratados, las decisiones tomadas, etc. Sin embargo, las declaraciones formuladas aquel día por Primo de Rivera cuando el Consejo hubo finalizado causaron gran preocupación en el seno de la Compañía Telefónica Nacional de Teléfonos:

*En el Consejo nos hemos ocupado durante mucho tiempo del servicio que presta la Compañía de Teléfonos. Son tantas las quejas que he hecibido (sic) y recibo, en provincias y aquí, que hemos acordado una visita de inspección inmediata. Además adoptaremos las medidas de rigor pertinentes. El servicio está mucho peor que antes, y para tal resultado no valía la pena de (sic) haber hecho un esfuerzo hasta llegar a un contrato general en toda España.*⁵⁸³

Las declaraciones del general Primo de Rivera fueron muy duras y muy críticas hacia la actuación de la CTNE, llegando incluso a indicar que el servicio estaba “mucho peor que antes”. Parece que el Gobierno se disponía a llevar a cabo una investigación en la compañía para aclarar las causas que provocaban las quejas de los usuarios, aunque no especificaba en qué forma se realizaría dicha intervención.

Quizá el Marqués de Estella se olvidaba de que contaba con tres Delegados del Gobierno en el Consejo de Administración que deberían estar realizando dicha inspección constantemente y muy especialmente en las reuniones mensuales del Consejo. De producirse cualquier problema o un número muy elevado de reclamaciones, la primera medida tenía que ser informar convenientemente a la

⁵⁸² Acta nº 44 del Comité Ejecutivo, 10 de junio de 1925, libro 1, pp. 58-59.

⁵⁸³ ABC, 6 de mayo de 1925, p. 11.

Delegación oficial del Estado, para que estudiara, investigara y tomara las acciones oportunas para solucionar la cuestión desde el seno de la compañía. Según la base octava del contrato con la Telefónica, estos Delegados llevarían “la autorización y representación del Estado en todos los asuntos y cuestiones relacionados con este Contrato”, por lo que, ante cualquier falta o incumplimiento del mismo, eran ellos los que debían ser informados y actuarían en consecuencia. Sin embargo, esto no es lo que ocurrió en este caso, ya que los tres Delegados del Gobierno se enteraron de estas duras declaraciones de Primo de Rivera del mismo modo que el resto de consejeros de la compañía: por los periódicos del día siguiente.

3.156. Miércoles, 6 de mayo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁸⁴

El mismo día en que la prensa publicaba la noticia sobre las quejas contra la CTNE y las medidas que podría tomar el Gobierno, el Comité Ejecutivo tenía convocada la reunión habitual que se celebraba todas las semanas. Ruiz Senén abrió la sesión refiriéndose a estas duras manifestaciones de Primo de Rivera aparecidas en los periódicos, que preocuparon, y mucho, en el núcleo de la compañía. El Vicepresidente divagó entonces largamente sobre el espíritu de la compañía, su deseo de cumplir con las obligaciones contractuales, el impulso y actividad que se daba a los trabajos, etc. Según su opinión, el Consejo de Administración de la compañía siempre había obrado con la única intención de armonizar los intereses de la empresa con el bien público y el servicio al país. Por todo ello se invitaba a los Delegados oficiales del Gobierno a examinar e investigar la actuación del Consejo:

[...] pues si bien ha sido norma constante y reiterado afán de la misma [la compañía] el lograr que dichos representantes del Gobierno interviniesen y colaborasen de la más manera más activa y directa en todos los asuntos sociales, se considera tan necesario como imprescindible que por dicha Delegación Oficial en el más recto e inflexible cumplimiento de su misión, se proceda a determinar y concretar lo antes posible deficiencias observadas y, que por lo visto motivan las reiteradas quejas a que el Gobierno se refería en sus manifestaciones.

⁵⁸⁴ Acta nº 38, 6 de mayo de 1925, libro 1, pp. 50-51.

El Comité se mostraba dispuesto a subsanar, en la medida de lo posible, todas las deficiencias que pudieran encontrarse en la actuación del Consejo y de la compañía, aunque estaba seguro de que dichos problemas tendrían origen en alguna imposibilidad material que quedaba fuera de su responsabilidad y “nunca en la falta de entusiasmo y de empeño para cumplir con su deber”. Al final de la reunión se anunció la llegada de los tres representantes del Estado en el Consejo de Administración y se les invitó a que se unieran a la reunión para tratar este asunto tan importante.

Antes de levantar esta sesión, el Marqués de Urquijo insistió en la necesidad de instalar lo antes posible el sistema de alta frecuencia en las líneas interurbanas, ya que, según tenía entendido, esta mejora permitía duplicar la capacidad de los circuitos, con el beneficio que eso implicaba para los usuarios de este servicio. El Comité Ejecutivo convino que Proctor recordara a Sosthenes Behn esta necesidad “por si encuentra factible atenderla dentro de las acertadas y activas negociaciones que actualmente desarrolla para facilitar la realización de uno de los más firmes propósitos de esta Compañía, como el de fomentar la producción nacional en todos los aspectos que nuestro negocio requiere y en lo sucesivo pueda requerir”.

Se desconoce qué “negociaciones” estaba realizando el Coronel Behn para desarrollar la producción española de materiales y equipos, pero lo cierto es que esta cantinela se repetía tan constantemente en las reuniones del Comité, del Consejo y en cualquier declaración pública de la Dirección de la compañía que las palabras comenzaban a quedar vacías de significado. En ocasiones da la sensación que se pronunciaban simplemente para recordarse a sí mismos la conveniencia de orientar a la compañía en ese sentido, más que para tomar acciones reales que les llevaran a fomentar la producción nacional.

Reunión del Comité Ejecutivo con los Delegados del Gobierno⁵⁸⁵

El Comité Ejecutivo continuó con la sesión que estaba celebrando este día 6 de mayo, ahora con la presencia de los Consejeros Delegados del Gobierno, que habían sido invitados a participar. Esta segunda parte de la reunión estuvo presidida por el Marqués de Urquijo, aunque, según la norma establecida por el Consejo de

⁵⁸⁵ Acta nº 39, 6 de mayo de 1925, libro 1, pp. 51-53.

Administración el día 21 de agosto de 1924, el Comité estaría presidido por Valentín Ruiz Senén y por Julián Cifuentes que se alternarían en periodos mensuales. En el mes de mayo de 1925 era el turno de Ruiz Senén.

El objeto de esta segunda reunión era “expresar el deseo de la Compañía para que en vista de las manifestaciones del Gobierno sobre deficiencias en los servicios telefónicos, se proceda de la manera más rápida y eficaz a la depuración de los hechos que hayan podido determinar las mencionadas deficiencias”. El Marqués de Urquijo quiso recordar que estos problemas eran ajenos a la voluntad del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía, que siempre buscaba en primer lugar el interés público, si bien el sistema todavía presentaba algunas limitaciones que no eran responsabilidad de la empresa y escapaban de su control. Pedía a los Delegados del Estado que comunicaran estas valoraciones al Gobierno y que igualmente le transmitieran la opinión que ellos mismos tuvieran sobre la actuación de la empresa hasta la fecha.

Antonio Carrillo de Albornoz, representante del Ministerio de Hacienda, dio entonces su opinión con respecto a este tema. Indicaba que, “por su intervención frecuente y directa en los asuntos de la Compañía”, estimaba que ésta había actuado siempre con la mejor de las intenciones, cumpliendo siempre con los deberes que el contrato con el Estado le imponía. Habló en nombre de los tres Delegados del Gobierno cuando dijo que ya habían valorado la idea de visitar al general Primo de Rivera para informarle sobre su opinión favorable con respecto a la actuación de la compañía y de su Consejo de Administración.

Ruiz Senén volvió a insistir en términos similares a los del Marqués de Urquijo, haciendo constar que la compañía no pretendía adoptar actitud de oposición frente a las declaraciones oficiales del Gobierno, puesto que podían estar equivocados, “pero equivocados de buena fe”. La CTNE estaba dispuesta a facilitar en todo lo posible el trabajo de investigación que el Gobierno quisiera llevar a cabo para examinar y valorar el sistema telefónico y el trabajo efectuado por la compañía, tan seguros estaban de que se demostraría “del modo más claro y meridiano” que toda su actuación estaba destinada a ofrecer un servicio de calidad al país. Sí quiso Ruiz Senén mencionar algunas demoras en los trabajos de la compañía, que achacaba exclusivamente al deseo de la compañía por fomentar la industria nacional. Por todo ello se pedía a los Delegados oficiales que el Gobierno llevara a cabo una investigación lo antes posible, a la vez que se recordaba la contrariedad que aquellas manifestaciones habían producido en el seno de la CTNE.

Carrillo de Albornoz tomó de nuevo la palabra para expresar su conformidad con lo expresado por el Marqués de Urquijo y Valentín Ruiz Senén, prometiendo realizar inmediatamente las gestiones que se les proponían. El Delegado del Gobierno se dolía nuevamente de que tuviera que hablarse de una inspección, cuando ellos, “por su doble carácter de Consejeros y de Delegados del Gobierno han intervenido en todos los actos de la Compañía, reconociendo su buena fe y su eficaz actuación en todo momento”. Para finalizar, Miguel Manella, representante del Ministerio de la Guerra, hizo constar en acta que, como Delegado del Estado, no entendía otra inspección que no fuera la que se realizaba todos los meses dentro del Consejo de Administración por la Delegación oficial del Gobierno, puesto que ésa era su principal misión.

3.157. Viernes, 8 de mayo de 1925

La ITT lamenta la muerte del Marqués de Comillas

El Consejo de Administración de la ITT, a propuesta de Edward J. Berwind y John E. Berwind, emitió el día 8 de mayo de 1925 un comunicado con motivo de la muerte del Marqués de Comillas, en el que se expresaba el pesar por su muerte y se valoraba su participación como directivo de la multinacional⁵⁸⁶:

Considerando que con la muerte del Marqués de Comillas, miembro de esta Junta directiva, la International Telephone and Telegraph Corporation ha perdido un amigo leal y un miembro que trajo a los Consejos y al servicio de la Compañía el peso de su dilatada experiencia, un nombre ilustre e innumerables lazos establecidos en una larga vida de actividad y de copiosos frutos.

Considerando que los miembros de esta Junta estiman que la muerte del Marqués de Comillas les ha privado de un Consejero experto, sabio y de innumerables recursos, se sienten movidos a expresar su sentimiento, hacerlo constar en el libro de actas de la Compañía y expedir, en nombre de ella, un mensaje de pésame a la viuda y familia del difunto; se

Resuelve que en señal de respeto a la memoria del Marqués de Comillas, se suspenda esta sesión.

⁵⁸⁶ Revista Telefónica Española, nº 6, junio de 1925, p. 34.

3.158. Domingo, 10 de mayo de 1925

Anuncio de convocatoria a los accionistas preferentes

La edición del diario ABC de 10 de mayo de 1925 incluía un anuncio en el que se emplazaba a los accionistas preferentes de la Compañía (no a los ordinarios) a una reunión “para tratar de cuestiones para la obtención del mayor beneficio”. El aviso, que se asemejaba mucho a los anuncios oficiales de la CTNE en los que se convocaba a los accionistas a las Juntas Generales, decía lo siguiente:

Convocatoria a los accionistas preferentes de la Compañía Telefónica Nacional de España

Se reciben adhesiones de los tenedores de esta clase de valores para celebrar una reunión y tratar en ella de cuestiones de alto interés para la obtención del mayor beneficio. Dicha reunión se celebrará previas las formalidades legales y en el local que se comunicará a los adheridos. Dirigirse al Apartado 8.068 – La Comisión.

Aunque el formato era muy similar a los anuncios oficiales de la Compañía, es evidente que no se trataba de uno de ellos, ya que únicamente se convocaba a los accionistas preferentes y no venía respaldado por el Consejo de Administración, sino por una “Comisión” con un apartado de correos. Las investigaciones realizadas no nos han permitido averiguar las personas u organización que se encontraban detrás de esta convocatoria, puesto que las actas del Comité Ejecutivo tampoco aportan muchos datos sobre el tema. Gumersindo Rico simplemente apuntó a “lo descabellado que es el propósito que anima a los organizadores”, sin especificar más detalles.

3.159. Miércoles, 13 de mayo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁸⁷

Como ya hemos visto, el reparto de dividendos que correspondían a las participaciones preferentes de la compañía se hacía en periodos de tres meses. En esta reunión, el Comité Ejecutivo acordó, en atención al próximo vencimiento del

⁵⁸⁷ Acta nº 40, 13 de mayo de 1925, libro 1, pp. 53-54.

trimestre en curso, el reparto del dividendo del 7% anual que recompensaba a las acciones preferentes en circulación, de conformidad con el criterio seguido en ocasiones anteriores.

Ruiz Senén expresó su sorpresa por el anuncio que se había insertado en el diario ABC en su edición del 10 de mayo de 1925, por el que se convocaba, de manera anónima, a los accionistas preferentes de la compañía. Esta nota no tenía nada que ver con el Consejo de Administración de la CTNE y por ello no tenía validez alguna ni efectos reglamentarios. El Vicepresidente propuso al Comité que investigara quién se encontraba detrás de aquella convocatoria y que se tomaran las medidas oportunas. No obstante, la sugerencia de Ruiz Senén llegaba nuevamente tarde, toda vez que esta investigación ya había tenido lugar. Gumersindo Rico informó “de los datos adquiridos con relación a este asunto y de las averiguaciones practicadas con referencia al mismo, que acreditan lo descabellado que es el propósito que anima a los organizadores”. En el acta no se dejó constancia, empero, de las indagaciones que se habían realizado ni de los planes “descabellados” que habían impulsado a los instigadores a convocar aquella reunión de accionistas preferentes.

Por último, el Comité era informado de una solicitud de apoyo económico que había sido realizada por la Asociación General de Empleados y Obreros de la Red Telefónica Interurbana (antigua asociación de trabajadores de la Peninsular) para la organización de una fiesta benéfica. Este evento tenía la finalidad de conseguir fondos para aumentar los recursos de la entidad. El Comité Ejecutivo decidió entonces contribuir con 1.000 pesetas (!) a dicha fiesta benéfica, “por esta vez y sin que la determinación actual se inspire en precedentes anteriores ni los establezca para lo sucesivo”.

Reunión del Comité Ejecutivo con los Delegados del Gobierno⁵⁸⁸

Como ya ocurriera la semana anterior, los Consejeros Delegados del Gobierno fueron convocados a esta segunda parte de la reunión del Comité Ejecutivo, presidida por el Marqués de Urquijo, para tratar el asunto de las críticas manifestadas por Primo de Rivera sobre la actuación de la CTNE. El representante del Ministerio de la Guerra,

⁵⁸⁸ Acta nº 41, 13 de mayo de 1925, libro 1, pp. 54-55.

Manuel Manella, dio cuenta de la visita efectuada al Secretario del Directorio, el coronel Godofredo Nouvilas, en cumplimiento del ruego que el Comité les había expresado en la reunión anterior. Manella expresaba así las palabras que le había dirigido el coronel Nouvilas sobre las críticas que había manifestado ante la prensa:

No se referían a la marcha y organización de la compañía, ni a su actuación y desarrollo en la ejecución de los trabajos conforme al plan que determina su concesión, si no simplemente, a la dificultades de carácter particular para celebrar conferencias y a las quejas recibidas del público en tal sentido, dificultades o inconvenientes que más bien pueden atribuirse a malestar entre el personal de la Compañía.

Como hemos visto, las palabras que pronunció Primo de Rivera el día 5 de mayo después de la reunión del Consejo fueron mucho más ásperas, llegando a afirmar que el servicio telefónico se encontraba mucho peor que antes de la concesión y que para tal resultado no merecía la pena haberse llevado a cabo el esfuerzo de contratar con la CTNE la reorganización de la red nacional. No cabe duda que su secretario trató de suavizar las palabras quizá pronunciadas en un momento tenso tras las deliberaciones del Consejo del Directorio Militar. No obstante, no dejaba de ser cierto que el servicio seguía sin ser bueno y que muchas conferencias telefónicas seguían produciéndose con dificultad, tiempos de espera excesivamente largos o mala calidad de la señal, lo que acarrearía no pocas críticas. La situación era especialmente complicada en Madrid, donde el servicio era muy deficiente a pesar de los esfuerzos que la compañía estaba realizando para enmendar los problemas heredados de la anterior concesionaria o quizá debido precisamente a estas obras de mejora, que siempre llevan asociadas algunas molestias circunstanciales.

Concretamente al caso madrileño se refería Antonio Nieto, Delegado del Ministerio de la Gobernación, que también se había reunido con el coronel Nouvilas y había salido de la entrevista con la misma impresión que Manuel Manella. No obstante, en esta ocasión la reunión se había centrado en las deficiencias del servicio urbano de Madrid, un asunto de especial sensibilidad por tratarse de la capital del país y un centro financiero de primer orden.

Para cerrar la sesión, tanto el Marqués de Urquijo como Lewis J. Proctor quisieron expresar sus mejores voluntades con respecto a los problemas que afectaban al servicio telefónico. El Presidente habló de las “medidas y garantías eficaces para corregir, en lo posible, las faltas de los servicios y depurar las

responsabilidades del personal investigando con el mayor cuidado su actuación". Por su parte, el Vicepresidente detalló algunas de las mejoras que ya habían sido establecidas y se unió al deseo unánime del Consejo de que la Delegación Oficial del Gobierno interviniese en la actuación de la Compañía.

3.160. Sábado, 16 de mayo de 1925

Escrito de Bertrán y Musitu a la Comisión gestora de la Mancomunidad

Mediante la promulgación del Estatuto Provincial el día 20 de marzo de 1925, el gobierno de Primo de Rivera disolvía automáticamente la Mancomunidad de Cataluña y en su lugar quedaba una Comisión gestora interina que habría de determinar qué hacer con los servicios que estaban en manos de la corporación. La nueva coyuntura fue aprovechada por la CTNE para iniciar un nuevo proceso de negociaciones para la adquisición de la red telefónica que se encontraba en manos de la Mancomunidad, esta vez bajo unas circunstancias muy distintas a como lo hubiera hecho en el pasado. Ahora la compañía tenía la concesión del sistema telefónico nacional mientras que la corporación catalana estaba siendo desmantelada, lo que parecía otorgar cierto grado de ventaja a las aspiraciones de Sosthenes Behn.

La Comisión gestora interina de los Servicios coordinados encargada de valorar qué hacer con las posesiones de la Mancomunidad y decidir sobre su futuro estaba presidida por José María Milá i Camps (1877-1955), un político afecto al régimen de Primo de Rivera que también había sido nombrado presidente de la diputación de Barcelona. El encargado por parte de la CTNE de entablar conversaciones con dicha comisión fue el abogado José Bertrán y Musitu. Éste dirigió un escrito, fechado el día 16 de mayo de 1925, en el que la compañía proponía que "la valoración económica de todas las instalaciones y propiedades telefónicas fuera realizada mediante peritación, sujetándose a las diferencias, en caso de discordia, al dictamen inapelable del Director General de Comunicaciones"⁵⁸⁹.

Esta propuesta fue aprobada por la Comisión gestora interina en una sesión que celebró el día 19 de mayo y en la que también se decidió que se nombrarían dos peritos, uno por parte de la antigua Mancomunidad y otro por parte de la compañía, para que evaluaran las propiedades telefónicas de aquella. En esta reunión se autorizó

⁵⁸⁹ Yuste-2004, pp. 227-228.

a Milá i Camps para que designara al perito que habría de representar los intereses de la comisión y que trabajaría con el designado por la CTNE.

3.161. Miércoles, 20 de mayo de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁵⁹⁰

La Compañía Telefónica Nacional había heredado de la Compañía Peninsular de Teléfonos un edificio situado en el número 317, de la calle de Córcega en Barcelona, al lado de la Casa Serra, sede de la Diputación provincial⁵⁹¹. Este edificio, que daba tanto a la calle de Córcega como a la avenida Alfonso XIII (actual avenida Diagonal), compartía medianera con el edificio situado en el número 319, propiedad de tres hermanos apellidados Lericas y Morros (Montserrat, Luis y José María). El Comité Ejecutivo facultó al Vicesecretario Ramón Güell para que conviniera con los dueños de ese otro inmueble una servidumbre de medianería sobre la pared que separaba ambas fincas, que se extendería a toda su altura y longitud desde sus cimientos hasta su coronación y desde una calle hasta la otra.

Sin abandonar la región catalana, Lewis Proctor se refería entonces a las negociaciones que era necesario establecer con la Comisión gestora interina de los Servicios coordinados para la adquisición de las concesiones y propiedades telefónicas de la antigua Mancomunidad. El Comité acordó autorizar al abogado de la compañía José Bertrán y Musitu para gestionar y tratar esta cuestión con la comisión y formular propuestas concretas a nombre de la compañía, que no obstante deberían ser valoradas y aprobadas por el Consejo de Administración. Como sabemos, Bertrán ya había iniciado los contactos con la comisión unos días antes, enviando una propuesta para que las propiedades telefónicas de la Mancomunidad fueran valoradas mediante peritación. Es decir, Proctor en esta reunión simplemente sometió a la aprobación del Comité una decisión que ya había sido tomada y que se estaba ejecutando sin la autorización pertinente.

⁵⁹⁰ Acta nº 42, 20 de mayo de 1925, libro 1, pp. 55-57.

⁵⁹¹ Antes de la creación de la Mancomunidad de Cataluña, la diputación de Barcelona tenía la sede en el actual Palacio de la Generalidad, en la plaza de San Jaime. Cuando la Mancomunidad fue constituida en abril de 1914, ésta ocupó este edificio medieval en el Barrio Gótico barcelonés y la Diputación se trasladó a la Casa Serra, un palacio modernista construido en 1903 por el que años más tarde sería presidente de la Mancomunidad: José Puig i Cadafalch.

La propuesta de la compañía de designar dos peritos, uno por parte de la antigua Mancomunidad y otro por parte de la CTNE, había sido aceptada por la Comisión gestora un día antes de la celebración de esta sesión. El Comité tenía que decidir entonces a quién designaba como ingeniero encargado de valorar las redes de la Mancomunidad, aunque, por razones obvias, esa tarea no podía estar asignada más que a una sola persona: Esteban Terradas. El antiguo Director de la red de la Mancomunidad se trataba de una persona que conocía a la perfección las propiedades telefónicas catalanas y sus particularidades, razón por la que también había sido designado como encargado para realizar una primera oferta a la Mancomunidad un año antes. En esta ocasión, y bajo unas circunstancias muy distintas, se le designaba como técnico para la valoración de las concesiones telefónicas de la antigua Mancomunidad, labor que debía realizar conjuntamente con el perito nombrado por la Comisión gestora interina.

En esta reunión también se otorgaron todos los poderes al Subdirector del Distrito 3º, Benito Navarro y Ortiz de Zárate, para que ultimara y formalizara los acuerdos para la adquisición del solar situado en la calle Cortes de Navarra de Pamplona, autorizándole para firmar la escritura pública de compraventa. Gracias a un artículo de la Revista Telefónica Española sabemos que dicha escritura fue suscrita finalmente el día 25 de junio de 1925⁵⁹². También se acordó suscribirse a ciertos boletines benéficos del ayuntamiento de Barcelona, cuyo fin era recaudar fondos para las colonias escolares que tenían lugar en verano. Esta decisión se tomaba manteniendo el criterio que había adoptado antes la Compañía Peninsular de Teléfonos.

El Comité aprobó por último la adquisición de los centros telefónicos urbanos de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava (también en la isla de Tenerife) y Arucas (en la isla de Gran Canaria) con arreglo a las negociaciones previamente entabladas y a los acuerdos alcanzados con los anteriores concesionarios⁵⁹³. Dichas redes se encontraban en manos de tres concesionarios privados: la Sociedad de Teléfonos de Tenerife, la Sociedad de Teléfonos de La Orotava y Carmen Castellanos y Roma, respectivamente. El Comité designó al abogado de la compañía Julián García-San Miguel y Muñoz de Baena para que realizara y formalizara estas adquisiciones,

⁵⁹² Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 11.

⁵⁹³ Según la edición de agosto de 1928 de la Revista Telefónica Española, la red telefónica de La Orotava pasó a manos de la CTNE el 5 de julio de 1925.

firmando cuantas escrituras públicas o privadas fueran necesarias. Para ello, el Secretario General le otorgaba plenos poderes para representar a la CTNE en las islas y con estos fines.

3.162. Martes, 26 de mayo de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁵⁹⁴

Cuando en esta sesión se presentaron los habituales informes sobre adquisición de materiales y equipos durante el último mes, el Delegado del Estado Antonio Carrillo de Albornoz insistió en el “afán de proteger la industria nacional, ya que con ello, no sólo cumple la Compañía uno de sus más plausibles deberes, sino que evita con tal actuación todo comentario que sin justa procedencia pueda fomentarse”. Proctor respondía explicando la necesidad de efectuar algunas adquisiciones en el extranjero, puesto que todavía no era posible obtener en España los materiales necesarios, aunque indicaba que por supuesto se extremaría su actuación en tal sentido. Por su parte, en los resúmenes sobre gastos e ingresos de la compañía se observaba, para satisfacción de los presentes, que los ingresos habían aumentado considerablemente con respecto al mes anterior. Carrillo de Albornoz también insistió en la necesidad de conocer con todo detalle los gastos que efectuaba la compañía, consignándolo muy claramente en los informes pertinentes. Proctor manifestaba, en este sentido, que el Departamento de Contabilidad ya se estaba ocupando “muy activamente” de esta labor y que esperaba que en la próxima reunión del Consejo se pudiera presentar un informe detallado con los movimientos hasta el día 1 de mayo de 1925.

El Marqués de Urquijo daba cuenta al Consejo de la renuncia con carácter irrevocable de Javier Martí-Codolar de su cargo como Director General de la compañía. El empresario catalán ya había cesado de su cargo de manera temporal a principios de año por motivos de salud, tal y como se explicó en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 11 de febrero. El Consejo de Administración, “en vista de los motivos en que dicho Sr. Martí Codolar fundamenta su renuncia, el Consejo, no sin expresar el sentimiento que tal determinación le produce, acuerda aceptar la dimisión”. El cargo se consideraba vacante a partir del 31 de mayo de 1925 y además se

⁵⁹⁴ Acta nº 15, 26 de mayo de 1925, libro 1, pp. 32-35.

aplazaba el nombramiento de un nuevo Director por el momento. Como ya sabemos, la expresión “por el momento” implicó a la postre un periodo de cuatro años en los que no se designó a un sustituto para el cargo, que finalmente recayó en Esteban Terradas el 1 de mayo de 1929. Martí-Codolar mantuvo, no obstante, su asiento en el Consejo de Administración, del que era Vicepresidente, y en el Comité Ejecutivo, aunque a finales de 1925 y principios de 1926 renunció también a estos puestos por motivos de salud. Según manifestaciones de Gumersindo Rico, además de este motivo, “la nostalgia de Barcelona, lugar de su residencia, y quizá el convencimiento de que no tenían matiz de imprescindibles sus servicios, por la especial contextura de la organización, le movieron a declinar la misión que le estaba conferida”⁵⁹⁵.

Proctor explicó a continuación las ventajas de la instalación de sistemas de alta frecuencia en las líneas interurbanas de la compañía y detalló también las gestiones realizadas por la Dirección para conseguir que estos sistemas fueran establecidos “en las más ventajosas condiciones”. Pidió entonces autorización al Consejo para realizar el pedido correspondiente a la firma alemana “Telefunken”, que contaba con la participación de la Siemens. Según Proctor, era la que reunía las condiciones más favorables “con notoria y extraordinaria ventaja en cuanto a precio” de todas las proposiciones recibidas por la CTNE. Ruiz Senén se congratuló de esta decisión, puesto que contradecían a aquellos comentarios que criticaban que la Dirección de la empresa no procedía con independencia e imparcialidad a la hora de adquirir materiales y equipos.

El Consejo también fue informado sobre las negociaciones entabladas para la adquisición de terrenos en Bilbao, que contaron con la aprobación de todos los presentes. Con el fin de ultimar las gestiones y comprar los solares que se consideraran oportunos se otorgó plenos poderes a Gumersindo Rico y a Proctor.

Con respecto al asunto de las críticas realizadas por el general Primo de Rivera a principios de mes y que habían causado gran preocupación en el seno de la compañía, el Consejo de Administración daba por zanjada la cuestión con la siguiente declaración:

El Consejo ve con satisfacción según oficialmente se reconoce, que no son ciertamente imputables a la Compañía las comentadas deficiencias, que

⁵⁹⁵ Yuste-2004, p. 272.

motivaron en su día severa censura por parte del Gobierno, y en cuanto a la actitud de todo el personal de nuestra organización, expresa el Consejo su confianza, respecto al fiel y exacto cumplimiento del deber por parte de la mayoría de dicho personal, al que igualmente considera, salvo posibles excepciones, ajeno también a toda culpa y origen de las referidas deficiencias.

Asimismo se consideraba indispensable que el Consejo y la Dirección mantuvieran la “más cordial compenetración” con los trabajadores de la empresa, con el fin de que estos se sintieran confortados y alentados a cumplir con su deber de la mejor manera posible. Las palabras con las que el Consejo cerraba este asunto daban a entender que la culpa de las deficiencias en el servicio que había apuntado el Jefe del Gobierno era atribuible al personal de la empresa. Por ello se consideraba que había que proceder a juzgar a los empleados “con la mayor escrupulosidad” para que no se encontrara nunca “el más insignificante motivo o el menor fundamento de razón que justifique protesta alguna, aislada o colectiva”.

3.163. Lunes, 1 de junio de 1925

Plan para la compra de acciones por parte de los empleados

La Dirección de la CTNE llevaba un tiempo desarrollando un plan de compra de acciones dirigido a los empleados de cualquier nivel. Esta política empresarial no era nueva, sino que se venía aplicando en muchas compañías extranjeras desde hacía años, que se hacía, más que para financiar los planes de negocio de la sociedad, como forma de crear un vínculo con los trabajadores. De esta forma los empleados se sentían más unidos a la empresa, comprendían que formaban parte de ella y por lo tanto creaban menos conflictos y eran más productivos en su trabajo. La AT&T tenía un plan de venta de acciones similar desde 1921 y los Behn habían utilizado una estrategia parecida en 1922 para dar valor a su recién nacida ITT⁵⁹⁶. No es de extrañar, por lo tanto, que el Coronel no tardara en imitar esta estrategia en el negocio de la telefonía española, teniendo en cuenta los buenos resultados que estaba dando fuera de nuestras fronteras, tanto a su compañía como a otras similares.

El día 1 de junio de 1925 entraba en vigor en la Compañía Telefónica Nacional de España un plan en virtud del cual sus empleados podían comprar a plazos

⁵⁹⁶ Yuste-2004, p. 220.

acciones preferentes de la empresa, permitiendo de esta forma a los trabajadores participar en los beneficios del negocio comprando participaciones con unas condiciones de pago muy favorables. El plan estaba abierto para cualquier empleado que figurase en nómina de la compañía el día 1 de junio y cada uno podía comprar una acción por cada 2.400 pesetas (o fracción de esa cantidad) que estuviera percibiendo como sueldo anual. Las acciones tenían un precio unitario de 500 pesetas y el pago se haría a plazos sin intereses que se descontarían del sueldo del empleado, pudiendo éste elegir si deseaba consignar 10 ó 20 pesetas mensuales a este concepto. Si el trabajador lo deseaba, también podía saldar la deuda de una vez y recibir el título definitivo. Incluso si a algún comprador le era imposible seguir abonando los plazos, la compañía se comprometía a devolver la suma ya desembolsada más un interés del 3% anual sobre los pagos realizados⁵⁹⁷.

En la Revista Telefónica de aquel mes se informaba sobre el número de acciones que habían quedado suscritas a través de este plan en los primeros 15 días de su aplicación: 251 trabajadores habían adquirido un total de 513 acciones. Esto implica que en dos semanas, los empleados de la Telefónica habían suscrito 256.500 pesetas del capital social de la empresa. Sin embargo, parece que las perspectivas de adhesión al plan de compra de acciones no habían sido alcanzadas, puesto que aquella edición de la revista también indicaba que la Dirección de la compañía había ampliado por un mes el plazo de admisión de solicitudes.

No obstante, en un artículo de la Revista Telefónica del mes de octubre Proctor informaba del “entusiasmo despertado entre el personal para suscribir acciones”, puesto que habían solicitado participar en este plan 1.600 empleados de los 6.300 con los que contaba la compañía por aquel entonces (una cuarta parte de la plantilla)⁵⁹⁸

3.164. Martes, 2 de junio de 1925

Comienzan las reuniones para fusionar las asociaciones de empleados

En su segunda reunión del mes de abril, la Junta directiva de la Asociación general de Empleados y Obreros decidió emprender las acciones necesarias para fusionar las tres antiguas organizaciones de trabajadores del grupo Peninsular.

⁵⁹⁷ Revista Telefónica Española, nº 4, abril de 1925, pp. 6-7.

⁵⁹⁸ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, p. 5.

Además se acordó crear una comisión para estudiar esta fusión y para redactar el proyecto de fondo benéfico que habría de regir en la compañía y con el que tendrían que estar de acuerdo todas las partes implicadas: tanto los representantes de las cuatro asociaciones como la Dirección de la CTNE, que era la que en realidad aportaba el capital para dicho fondo de pensiones y auxilios para empleados.

El día 2 de junio de 1925 se celebró la primera reunión de la comisión para tratar estos asuntos. Estaba presidida por el Inspector General de la compañía, Logan N. Rock, y contaba con dos representantes por cada una de las cuatro asociaciones que por el momentos existían.

Nuevas quejas contra la Compañía Telefónica Nacional

El diario La Vanguardia, en su edición de 2 de junio de 1925, informaba sobre la sesión celebrada unos días antes por la Cámara de Comercio de Madrid, en la que se trataron muy diversos asuntos⁵⁹⁹. La última cuestión que se trató en esta reunión tenía que ver con las quejas unánimes de los comerciantes de la capital respecto al servicio telefónico, que, según su opinión, era “mucho más deficiente que con la antigua empresa”. Por ello, la Cámara acordó dirigirse al Directorio para poner en su conocimiento estas quejas, con el fin de que “se procure su remedio inmediato o en otro caso se impongan las sanciones debidas a la Compañía de Teléfonos”.

Estas quejas van en consonancia con la que el Directorio ya había recibido semanas antes en la misma línea y que había provocado las declaraciones de Primo de Rivera a principios del mes de mayo, causando tanta preocupación en la Dirección de la compañía. El Marqués de Estella se había referido al servicio telefónico prácticamente en los mismos términos a como ahora lo hiciera la Cámara de Comercio (estaba “mucho peor que antes”), por lo que entendemos que las quejas eran fundadas y generalizadas. Si finalmente este organismo elevó sus quejas al Directorio, no cabe duda de que no tuvieron que sentar nada bien al general Primo de Rivera, que tenía que escuchar constantemente reproches y noticias negativas con respecto al servicio telefónico que ofrecía la compañía a la que había adjudicado todo el servicio nacional unos meses antes.

⁵⁹⁹ La Vanguardia, 2 de junio de 1925, p. 18.

No obstante, todo parece indicar que la mayor parte de las críticas venían de Madrid, tal y como se entiende de estas declaraciones de la Cámara de Comercio o de la reunión que mantuvo Antonio Nieto Gil con el Secretario del Directorio Militar, el coronel Nouvilas, a principios de junio en la que éste se refirió claramente a los problemas en la capital como causa de las duras palabras pronunciadas por Primo de Rivera unos días antes⁶⁰⁰. Parece que las obras que la CTNE estaba emprendiendo en Madrid en aquellos momentos (relacionadas, sobre todo, con la sustitución de cables aéreos defectuosos) serían la causa de que los usuarios de la capital notaran que la calidad del servicio había descendido con respecto a meses anteriores, cosa que achacarían automáticamente al cambio de compañía, sin pensar en que aquellas obras eran en realidad para mejorar el servicio. De hecho, la compañía se encargaba de pedir paciencia a sus abonados siempre que podía, en revistas, periódicos y hasta en la memoria del ejercicio social 1924. La Dirección repetía una y otra vez que aquellos primeros meses iban a ser difíciles y que implicarían un esfuerzo extra por todas partes, incluyendo a los abonados, que tendrían que sufrir todas las obras de mejora que habían de realizarse en la red.

3.165. Viernes, 5 de junio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁰¹

El Departamento de Intervención General había formulado una consulta con respecto al timbre que había de pagarse por la negociación o transmisión de acciones. El Comité decidió, siguiendo la norma general establecida por la mayoría de las sociedades anónimas españolas, cargar el importe del impuesto a los accionistas. En relación a este impuesto, parece que en el mes de febrero de 1922 la Compañía Peninsular de Teléfonos se había ingresado 1.000 pesetas de más en la recaudación de dicho gravamen por telefonemas y conferencias telefónicas. La Administración Pública había incoado un expediente y ahora era responsabilidad de la Telefónica la resolución del asunto, ya que se subrogó por fusión en todos los derechos, pero también en todas las obligaciones de la antigua empresa de Enrique Parellada. Para representar a la CTNE se autorizaba con plenos poderes al abogado y vicesecretario de la compañía, Ramón Güell y Sagás.

⁶⁰⁰ Acta nº 41 del Comité Ejecutivo, 13 de mayo de 1925, libro 1, p. 54.

⁶⁰¹ Acta nº 43, 5 de junio de 1925, libro 1, pp. 57-58.

Al Comité también le fue comunicada una proposición presentada por el Banco Matritense, propietario del edificio en el que se encontraba la sede social de la empresa en el número 5 de la avenida Conde de Peñalver, para la adquisición de dicho inmueble. El Comité consideró que no convenía “en modo alguno a los intereses de la Compañía y a las necesidades de la misma”, por lo que se decidió no tener en cuenta la proposición del dueño del edificio. No en vano, la compañía se encontraba en esos momentos cerrando las negociaciones para la adquisición del solar de la Red de San Luis donde tenían previsto construir un imponente edificio que albergara las oficinas centrales de la empresa y donde se instalaría la nueva central automática.

De la misma forma que en la reunión de 13 de mayo se informó de una petición de apoyo económico para un festival benéfico de la Asociación General de Empleados y Obreros de la Red Telefónica Interurbana, en esta ocasión se leía una solicitud similar de la Asociación de Socorros Mutuos de Empleados y Operarios de la antigua Compañía Madrileña de Teléfonos. Esta entidad estaba organizando un festival benéfico cuyo fin era conseguir fondos para aumentar los recursos de la entidad. El Comité Ejecutivo tomó exactamente la misma decisión que en la ocasión anterior: contribuir con 1.000 pesetas a dicho evento. También se acordó contribuir con la cantidad de 500 pesetas (!) como donativo a un evento benéfico que se celebraba en Madrid por estas fechas conocido como la “Fiesta de la Flor”.

3.166. Lunes, 8 de junio de 1925

Logan N. Rock explica el sistema de vacaciones de los empleados

El Presidente de la Asociación general de Empleados y Obreros había enviado una carta, con fecha 23 de mayo de 1925, al Inspector General de la compañía para que aclarara el sistema de vacaciones, permisos y licencias extraordinarias que tenía el personal de la compañía. El día 8 de junio, Logan N. Rock contestaba a dicha misiva con otra en la que explicaba únicamente el modelo de vacaciones que había adoptado la Telefónica para sus empleados.

Todos los trabajadores que contaran con más de doce meses de antigüedad el día 1 de junio de cada año tenían derecho a quince días de vacaciones, mientras que los que llevaran de seis a doce meses en esa fecha disponían de siete días. Durante su periodo vacacional, los empleados disfrutarían de su sueldo íntegro. A los efectos del cómputo de tiempo del servicio en la CTNE se consideraba como servido en la misma el tiempo que un empleado hubiera prestado sus servicios en cualquier de las

redes que habían pasado o que pudieran pasar a poder de la compañía. Si algún trabajador no podía hacer uso de sus días porque las “razones del servicio” se lo impedían, entonces tenía derecho a acumular estos días en el año siguiente. Las vacaciones comenzaban a concederse a partir del día 1 de mayo y hasta el 31 de octubre, excepto en el Departamento de Tráfico donde era necesario extender este periodo para no perturbar el servicio.

Con respecto a la concesión de licencias extraordinarias o por enfermedad, Logan N. Rock informaba a la Asociación que la Dirección de la compañía todavía estaba estudiando el asunto y que por lo tanto no era posible detallar el reglamento concreto. No obstante, por el momento y hasta que este extremo estuviera aclarado, las licencias especiales debían solicitarse al Jefe del Departamento, que a su vez elevaría un informe a la Dirección general que resolvería la cuestión y tendría la última palabra.

3.167. Miércoles, 10 de junio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁰²

Como sabemos, el Gobierno había rechazado un mes antes la solicitud de la compañía para que fuera eximida de cobrar el impuesto del Timbre que gravaba los telefonemas con 0,10 pesetas y las conferencias interurbanas con un 5% de su importe. En esta reunión, el Comité era informado sobre esta denegación y acordaba acatar la resolución. No obstante, los presentes también estaban de acuerdo en que este impuesto debía cargarse sobre las tarifas de los abonados y que por lo tanto tenía que ser ajeno totalmente a los ingresos que la compañía recibiera por estos servicios. Los beneficios de la empresa no deberían verse afectados por la aplicación de esas comisiones del Estado. Es decir, que estaban aprobando algo que ya se hacía y que, por otra parte, era aquello a lo que estaban obligados por la Ley del Timbre: recaudar dicho impuesto e ingresarlo íntegramente al Estado.

A continuación siguieron las habituales explicaciones sobre adquisición de terrenos y edificios en las principales ciudades españolas. En lo que respecta al edificio comprado en Sevilla, que estaba alquilado a otros inquilinos, Proctor informó sobre las gestiones que realizaba el propietario para desahuciar a las personas que en

⁶⁰² Acta nº 44, 10 de junio de 1925, libro 1, pp. 58-59.

aquellos momentos ocupaban el inmueble, “a fin de dejarla en las condiciones que se le han impuesto por la Compañía para su adquisición”. También en Sevilla se acordó la adquisición de un lote de terreno en el espacio que iba a ocupar la Exposición Iberoamericana de Sevilla⁶⁰³ para instalar una subcentral automática, que tendría un doble fin: que su funcionamiento causara buen efecto entre los asistentes y producir “señalados beneficios” por su utilización. El Comité dejaba el asunto a la entera resolución de Lewis Proctor, para que actuara como estimara “más acertado y conveniente”.

También se autorizó al abogado Plácido Arenas y Méndez para que representara a la compañía en la adquisición de edificios o solares en Santander, con plenas facultades para negociar con propietarios y formalizar los contratos que fueran necesarios. Con respecto a la capital cántabra, un artículo de la edición de agosto de la Revista Telefónica explicaba que se habían adquirido una casa y unos solares en las calles del Martillo y Santa Lucía y que sumaban un total de 1.011,91 metros cuadrados⁶⁰⁴. Estas dos vías (la calle del Martillo se conoce actualmente como calle Marcelino Sanz de Sautuola) se encuentran muy cerca entre sí y del paseo Pereda.

También se acordó autorizar al Subdirector del Distrito 2º, José de Rivera y Juer, para que firmara la escritura pública de arrendamiento del edificio situado en el número 35 de la calle de la Cruz, en Barcelona. El precio del alquiler era de 3.600 pesetas anuales y el contrato tendría una duración de 10 años a contar desde el 1 de junio de 1925.

3.168. Miércoles, 17 de junio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁰⁵

Gumersindo Rico dio cuenta de haber recibido un telegrama de José Urizar, del Distrito 3º, en el que informaba sobre las gestiones realizadas en Bilbao para la adquisición de unos terrenos y sobre las negociaciones referentes a la compra de

⁶⁰³ La Exposición Iberoamericana de Sevilla, que finalmente se celebró en 1929, llevaba siendo retrasada desde su fecha original en 1911. La I Guerra Mundial, la Guerra del Rif y diversos problemas de gestión internos fueron posponiendo la fecha de inauguración del evento.

⁶⁰⁴ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 9.

⁶⁰⁵ Acta nº 45, 17 de junio de 1925, libro 1, pp. 59-60.

otros solares en Santander por 325.000 pesetas. Todo ello contó con la aprobación del Comité Ejecutivo.

Proctor también explicó los inconvenientes surgidos con la fábrica de Córdoba encargada del suministro de alambre de cobre, según el contrato firmado con la CTNE, y se acordó ratificar la entera confianza en el Vicepresidente para que resolviera este asunto, “sin necesidad de autorización previa alguna”, en la forma que considerara más conveniente para los intereses de la compañía.

3.169. Miércoles, 24 de junio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁰⁶

De acuerdo con los convenios suscritos entre la ITT Co. (España) y la Telefónica, la primera estaba obligada a aconsejar técnica y financieramente a la segunda. En esta reunión del Comité Ejecutivo, Proctor presentó las instrucciones y los dibujos para efectuar el tendido de cables subterráneos y el empalme de conductores, para uso exclusivo de la Compañía Telefónica Nacional. Como veremos en capítulos posteriores, el soterramiento de cables telefónicos daría comienzo un mes más tarde, en el municipio madrileño de El Escorial.

Antes de cerrar la sesión, Gumersindo Rico dio cuenta de haber llevado a cabo la rescisión del contrato que un tal Leopoldo Gálvez Holguín había suscrito con la Compañía Peninsular de Teléfonos en 22 de febrero de 1915. Tras las oportunas negociaciones y gestiones, la indemnización que finalmente se había pagado a esta persona ascendió a 35.000 pesetas. No se especifica, empero, el tipo de contrato que este Leopoldo Gálvez tenía con la Peninsular ni el provecho que la CTNE obtuvo de la rescisión del mismo.

⁶⁰⁶ Acta nº 46, 24 de junio de 1925, libro 1, pp. 60-61.

3.170. Viernes, 26 de junio de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁶⁰⁷

En la sesión celebrada por el Consejo de Administración en el mes de junio de 1925 no se tomó ninguna decisión de relevancia, más que la sanción de todas las determinaciones tomadas por el Comité Ejecutivo en sus reuniones semanales de este mes. Todo ello mereció la “entera y absoluta conformidad del Consejo”, que lo aprobó por unanimidad. Además, se examinaron y ratificaron todos los informes que habitualmente se presentaban en estas sesiones: de los diferentes departamentos de la empresa, de las subdirecciones territoriales, adquisición de materiales y equipos, contratación de personal, etc. El único resumen que causó una pequeña observación fue el de Tesorería, ya que el Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda hizo constar, una vez más, su deseo de que se detallaran todos los gastos de explotación en los que incurría la empresa, para conocer de manera pormenorizada la actuación de la compañía. Proctor, que ya había manifestado su predisposición a que en la reunión de este mes se contara con dicho informe detallado, volvió a manifestar su intención de que “se hará todo lo posible para tener dichos estados en el Consejo del próximo mes de Julio”.

3.171. Domingo, 28 de junio de 1925

La tasación de las propiedades de la antigua Mancomunidad

La Compañía Telefónica Nacional había designado al abogado Bertrán y Musitu para que la representara en las negociaciones para la adquisición de la red telefónica de la ahora extinta Mancomunidad de Cataluña. En mayo envió una carta a la Comisión gestora interina de los Servicios coordinados, que se encontraba debatiendo qué hacer con todas las propiedades y servicios de la antigua corporación, proponiéndole que la valoración de las posesiones e instalaciones telefónicas fuera realizada mediante peritación. Esta idea fue aprobada por la Comisión y se encargó a su presidente que designara al ingeniero que habría de representar sus intereses. Finalmente, José María Milá i Camps nombró a dos peritos, ingenieros militares: Mario

⁶⁰⁷ Acta nº 16, 26 de junio de 1925, libro 1, pp. 35-36.

Giménez y Manuel Companys⁶⁰⁸. Por parte de la CTNE, el Comité Ejecutivo propuso a Estaban Terradas como ingeniero encargado, tal y como quedó recogido en el acta de la sesión celebrada el día 20 de mayo.

Se tiene constancia de la existencia de al menos una reunión, que tuvo lugar el día 28 de junio de 1925 y en la que hubo posicionamientos muy diferentes. Los peritos de la Comisión gestora interina destacaban el coste de la red, considerando la depreciación de la peseta, y su tasación final fue de 4.621.978 pesetas. Por su parte, Esteban Terradas defendía que la red era deficitaria y que la compañía tendría que realizar una gran inversión para modernizarla y reformarla adecuadamente, por lo que proponía una valoración de toda la red en 2.100.000 pesetas⁶⁰⁹, una cantidad muy similar a la que había ofrecido a la Mancomunidad un año antes. Como se puede apreciar, la tasación de la Comisión era un 220% superior a la de la CTNE, por lo que no se pudo llegar a ningún acuerdo. En el acta de liquidación de la Mancomunidad de Cataluña se daba cuenta de la inflexibilidad de la compañía en las negociaciones:

La Comisión gestora interina, vista la imposibilidad en que cree hallarse de acceder en ninguna forma al traspaso y liquidación de nuestra red de teléfonos, por venta a la Compañía Telefónica Nacional, dadas las misérrimas condiciones en que ofrecía adquirirla, que imposibilitan no ya la discusión, sino el trato [...]

3.172. Martes, 30 de junio de 1925

Liquidación de la Mancomunidad de Cataluña⁶¹⁰

El 30 de junio de 1925 finalizaba el plazo concedido a la Comisión gestora interina para determinar qué hacer con los servicios que estaban en manos de la antigua Mancomunidad de Cataluña, que había quedado disuelta por la disposición quinta transitoria del Real Decreto de 20 de marzo que implantó el Estatuto Provincial. En el informe presentado a finales de junio se indicaba que el gasto total efectivo que había realizado la Mancomunidad durante los diez años de su existencia fue de

⁶⁰⁸ Yuste-2004, p. 228.

⁶⁰⁹ Gutiérrez-1997, pp. 358-359.

⁶¹⁰ Acta de liquidación de la Mancomunidad de Cataluña, redactada por la Comisión gestora interina de los Servicios coordinados en 30 de junio de 1925. Martín-Retortillo y otros-1978, pp. 452 y siguientes

150.017.139,91 pesetas, a lo que había que agregar 11.573.089,57 pesetas por los pagos que aún estaban pendientes de realizarse, más 54.281.000 pesetas en deuda emitida y 5.328.500 pesetas en títulos de crédito.

En lo que respecta al servicio telefónico de la corporación se destacaba “la labor altamente beneficiosa para la generalización de ese medio rapidísimo de fácil comunicación, y en este sentido es de alabar cuanto se intentó”. La comisión estimó que la inversión realizada por la Mancomunidad en telefonía fue de 9.011.843,94 pesetas en total, que incluía el activo susceptible de aprecio, valorado en 6.593.748 pesetas, más el dinero invertido en las obras realizadas, que evidentemente ya no tenían valor liquidable. De esos 6,5 millones invertidos en activos, 4 correspondían al precio de las líneas y 2,3 al de las centrales; el resto era mobiliario, material técnico y otros conceptos de menor valor.

En vista de que no se había podido alcanzar un acuerdo con la Compañía Telefónica Nacional para la adquisición de las propiedades telefónicas de la antigua Mancomunidad, dadas las “misérrimas condiciones” que la empresa ofrecía, la Comisión gestora interina resolvió adjudicar “a las Diputaciones provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, en común y pro indiviso, todo el material y líneas, aparatos, etc., que integraron la Red telefónica de la Mancomunidad”. Quedaban, por lo tanto, todas las propiedades telefónicas de la corporación en manos de las cuatro diputaciones catalanas, algo que no sentó nada bien en el seno de la CTNE, acostumbrada como estaba a alcanzar acuerdos muy beneficiosos para sus intereses en las adquisiciones de redes y líneas.

3.173. Miércoles, 1 de julio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶¹¹

Las únicas decisiones relevantes que se tomaron en esta sesión del Comité Ejecutivo estuvieron relacionadas con la autorización a distintas personas para actuar en representación de la compañía a la hora de adquirir solares o edificios por toda España. En primer lugar se facultó a los Subdirectores de todos los distritos en los que se dividía la geografía del país para que pudieran firmar contratos de arrendamiento de locales. Además se delegaban en el abogado Francisco Crooke las negociaciones

⁶¹¹ Acta nº 47, 1 de julio de 1925, libro 1, pp. 61-62.

para comprar terrenos y solares en la ciudad de Málaga pero sin llegar a la firma de ningún contrato, para lo cual tendría que tener la conformidad escrita del Comité Ejecutivo.

3.174. Viernes, 3 de julio de 1925

Solicitud de mejora en las condiciones de trabajo de Madrid y Barcelona

Los ordenanzas de las centrales telefónicas de Madrid y Barcelona, principalmente, pero también de toda España, se habían dirigido a la Asociación general de Empleados para exponer sus quejas con respecto a las condiciones laborales de sus trabajadores. Entre las más importantes se encontraban la duración de la jornada laboral (que era de “diez o más horas”), la no existencia de un día de descanso semanal “ni aún quincenal” o la congelación de las “escasas retribuciones”. Ante estas reclamaciones, que se consideraban muy razonables, la Junta directiva de la Asociación se decidió a enviar una carta a Lewis J. Proctor, con fecha 3 de julio de 1925, solicitando que “se regulen las horas de prestación de servicio de cada ordenanza, no excediendo de ocho horas diarias, se les conceda un día de descanso a la semana y se les aumente su haber en cantidad suficiente para que puedan subvenir a las necesidades creadas para ellos y sus familias”⁶¹².

Hay que recordar que la Dirección de Tráfico había formulado una consulta a la Dirección sobre los descansos semanales, acordando entonces el Comité Ejecutivo que se respetaría la legislación vigente en este sentido “tan pronto como la organización de los servicios permita establecer el normal cumplimiento de aquellas disposiciones”⁶¹³. Mientras tanto, se permitió que, de manera provisional, este día libre fuera disfrutado cada diez días en lugar de cada siete. No obstante, estas quejas de los trabajadores de la compañía parecen indicar que ni siquiera se tuvo en cuenta esta decisión de otorgar un día de descanso de cada diez. Gracias a la Revista Telefónica Española sabemos que a finales de 1925 todavía no se había implantado esta medida en todos los centros telefónicos. Así, por ejemplo, el día 16 de noviembre Luis Alcaraz enviaba una carta a Logan N. Rock solicitando un día de descanso decenal para los trabajadores toledanos. El Inspector General respondió al Presidente de la Asociación

⁶¹² Revista Telefónica Española, nº 7, julio de 1925, p. 4.

⁶¹³ Acta nº 30 del Comité Ejecutivo, 18 de marzo de 1925, libro 1, p. 39.

el día 25 de noviembre confirmando la concesión de dicha jornada libre y su rápida aplicación en el centro telefónico urbano de Toledo⁶¹⁴.

3.175. Miércoles, 8 de julio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶¹⁵

El asunto principal de esta reunión del Comité Ejecutivo fueron las negociaciones improductivas para la adquisición de la red de la antigua Mancomunidad y la posterior liquidación de ésta por parte de la Comisión gestora interina de los Servicios coordinados. El abogado José Bertrán y Musitu había sido designado por el Comité en la sesión celebrada el día 20 de mayo para que se encargara de los trámites de esta cuestión. No obstante, cuatro días antes ya había enviado una propuesta a Milá i Camps sugiriendo que la valoración económica de todas las instalaciones y propiedades telefónicas fuera realizada mediante peritación y que, en caso de desacuerdo, se recurriera al Director General de Comunicaciones. La Comisión gestora interina estuvo de acuerdo con esta proposición.

Bertrán y Musitu fue invitado a participar en la reunión del Comité Ejecutivo de 8 de julio para informar detalladamente sobre los acontecimientos que se habían sucedido en las últimas jornadas. Como finalmente no se había llegado a un acuerdo, se podía recurrir ahora al Director General para que dictaminara la resolución final como árbitro designado por ambas partes en caso de llegar a esta situación, como finalmente había sucedido. No obstante, en lugar de solicitar una sentencia concluyente, el Comité acordó someter “el asunto, con carácter particular, a conocimiento del Director General de Comunicación Sr. Tafur, a fin de conocer su criterio antes de recabar su concurso y resolución oficial”. Es decir, que antes de apelar a Tafur Funés como juez del asunto, primero iban a “tantearle” de manera extraoficial y conocer así su predisposición a satisfacer los intereses de la compañía.

⁶¹⁴ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, p. 54.

⁶¹⁵ Acta nº 48, 8 de julio de 1925, libro 1, p. 62.

3.176. Miércoles, 15 de julio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶¹⁶

Como ya hemos visto, la CTNE estaba dedicando no pocos esfuerzos para proyectar una imagen favorable de cara a la opinión pública, a los accionistas, al Gobierno, etc. No obstante, parece que estas medidas no estaban alcanzando los resultados deseados y la percepción que la sociedad tenía de la Telefónica no era muy positiva. En esta sesión del Comité Ejecutivo, Valentín Ruiz Senén se refirió a “determinadas consultas que le han formulado significadas y prestigiosas entidades en relación con la marcha de esta Compañía”, estimando que la opinión del público en general, de la prensa y del Gobierno no era nada favorable a sus intereses. Esto quedaba reflejado también en el descenso que estaban sufriendo las acciones de la compañía en la Bolsa de Madrid, que si bien todavía no era alarmante, sí demostraba cierto retroceso y una falta de compradores dispuestos a hacerse con participaciones de la compañía.

Casualmente, la revista *El Electricista* publicaba, este mismo día, las siguientes declaraciones⁶¹⁷:

La impresión hasta hoy causada por la concesión telefónica, es sumamente deplorable. Y no somos nosotros, los telegrafistas, quienes exteriorizamos quejas por deficiencias del servicio que la Compañía hoy concesionaria descubre a cada paso; son los periódicos de gran circulación y, no ha mucho, miembros del Directorio Militar, quienes no se recataron para dirigir enérgicas censuras por el deplorable funcionamiento de las líneas telefónicas.

El Comité Ejecutivo estaba totalmente decidido a “remediar el mal y resolver satisfactoriamente esta enojosa situación lo antes posible”, ya que las circunstancias que rodeaban a la compañía empezaban a no ser nada propicias para su crecimiento y sus ambiciones. En primer lugar se consideraba preciso que fueran presentados informes, datos y estudios concretos sobre este asunto, para evidenciar los factores y las causas que confluían en el mismo, “para determinar con la rapidez y energía que el caso requiere los medios que hayan de ponerse en práctica a los fines indicados”.

⁶¹⁶ Acta nº 49, 15 de julio de 1925, libro 1, pp. 62-64.

⁶¹⁷ *El Electricista*, 15 de julio de 1925.

Tampoco eran ajenos al malestar que existía en buena parte del personal de la compañía y por ello el Comité decidió atajar el problema desde dentro, solucionando el descontento generalizado de sus trabajadores, con la intención de que esa imagen se proyectara hacia fuera y resolviera también la impresión negativa que el conjunto de la sociedad tenía de la CTNE. Para ello se acordó consultar a todos los jefes y trabajadores de cierta categoría para que emitieran su opinión libremente, “con absoluta garantía de que la Dirección General les deja en franca libertad de actuación para que puedan exponer su criterio sin temor a represalias ni determinaciones que envuelvan sanción den ningún clase”. Estas medidas, aunque tímidas, suponen el primer paso que dio la cúpula de la CTNE para atender las reivindicaciones de sus trabajadores e intentar mejorar la opinión pública de la compañía, que se encontraba muy deteriorada. Hasta el momento, la actitud de la Dirección de la empresa había consistido en negar todas las opiniones contrarias a sus intereses, vinieran de donde vinieran, y hacer oídos sordos ante las críticas, situación que ya no era sostenible dado el clima general que rodeaba a la compañía.

El Marqués de Perijáa, Tesorero de la empresa, se refirió a continuación a los inconvenientes que tenía el sistema para proveer de fondos a los distritos de la compañía, haciendo especial mención a los excesivos gastos en impuesto de Timbre que se pagaba por los cheques que se enviaban desde Madrid a las distintas Subdirecciones regionales. Para solucionar estos problemas, el Tesorero propuso abrir una cuenta corriente en cada localidad cabeza de Distrito, a la que tendría acceso el Subdirector y el Secretario de cada zona. De esta forma, la provisión de fondos se realizaría desde la Tesorería General mediante transferencias, no sometidas a timbre como en el caso de los cheques. Esto ayudaría también a mejorar los informes de cuentas de la compañía, ya que bastaría con presentar los extractos de las cuentas de cada distrito para conocer sus gastos de manera detallada. Todo esto contó con la aprobación del Comité, acordándose que se procediera de esta forma a partir del 1 de agosto de 1925.

En esta reunión también se confirió poder al Vicesecretario, el abogado Ramón Güell y Sagás, para representar a la compañía ante todas las administraciones públicas, pudiendo incoar los expedientes y recursos de la compañía, con plenas facultades para firmar escritos, notificaciones y diligencias o recurrir sus fallos. También se autorizó al letrado José de Urizar y Olazábal para que adquiriera, en nombre la empresa, un crédito hipotecario para la compra de una finca en Bilbao.

3.177. Miércoles, 22 de julio de 1925

Concurso para la construcción del nuevo edificio en Barcelona

El Comité Ejecutivo de la CTNE había comprado el edificio del hotel Bristol en la barcelonesa plaza de Cataluña, en la esquina de las calles Fontanella y Puerta del Ángel. La compañía no tenía intención de reutilizar el inmueble adquirido, sino que pretendía construir uno totalmente nuevo, de ocho plantas, que se convertiría en la nueva sede la CTNE en la capital catalana y donde se instalaría la central automática de la ciudad. Para la construcción de este nuevo edificio, se convocó un concurso el día 27 de abril de 1925 con un premio de 75.000 y se fijó el 10 de julio como fecha límite para la admisión de proyectos. Una vez finalizado el plazo, se reunió el jurado nombrado para estudiar y dictaminar sobre las cinco propuestas presentadas en una única reunión el miércoles 22 de julio de 1925. El acta de aquella sesión quedó copiada literalmente en el acta de la reunión que el Comité Ejecutivo celebró poco después⁶¹⁸.

El jurado estaba presidido por Valentín Ruiz Senén, Vicepresidente del Consejo de Administración, y contaba también con la contribución de Fred T. Caldwell, ingeniero de la ITT y de la CTNE, Modesto López Otero, famoso arquitecto madrileño, Enrique Sagnier i Villavecchia, igualmente reconocido arquitecto barcelonés, e Ignacio de Cárdenas, Jefe del Departamento de Edificaciones de la compañía. Una vez constituido el jurado, los presentes pasaron a deliberar sobre el fallo del concurso del nuevo edificio de Barcelona y se tomaron las cinco determinaciones o valoraciones siguientes:

- 1) Examinados los cinco proyectos presentados, no procedía declarar desierto el concurso, ya que había varios proyectos que, en opinión de los miembros del jurado, eran dignos de adjudicación.
- 2) La adjudicación y pago del premio suponía la adjudicación del proyecto a la compañía, quedando en libertad para ejecutarlo o no, en el plazo y de la forma que se considerara oportuno. También se podrían realizar modificaciones en los planos e incluso pedir que el arquitecto ganador introdujera nuevas mejoras.

⁶¹⁸ Acta nº 50 del Comité Ejecutivo, 22 de julio de 1925, libro 1, pp. 65-66.

- 3) Todos los proyectos merecían el estudio minucioso y comparativo que el jurado hizo de ellos, a pesar de que ninguno estaba “en absoluta armonía con las bases del concurso” en lo que a presentación de documentos se refería.
- 4) Los tres arquitectos del jurado se decantaban por el proyecto que llevaba el lema “Emisor”, aunque consideraban que sería necesario realizar un estudio más detenido, incluyendo algunos cálculos estructurales, sobre las dimensiones de la torre. Añadían que sería necesario además mejorar la decoración de las medianeras. Caldwell también era la opinión de elegir este proyecto, pero agregaba que habría que modificarse la fachada en algunos puntos para facilitar la instalación de la central automática. Ruiz Senén estaba de acuerdo con todo lo dicho por sus cuatro compañeros.
- 5) La cláusula cuarta de las bases del concurso establecía que se adjudicaría un segundo premio de 5.000 pesetas y un tercer premio de 3.000 pesetas. El jurado estimaba que no procedía dejarlos desiertos tampoco, pero no habiendo encontrado diferencias esenciales e importantes entre ellos y estimando a todos dignos de atención, se acordó solicitar al Consejo de Administración de la compañía que la cantidad total de 8.000 pesetas fuera distribuida en partes iguales entre los cuatro proyectos no favorecidos, “significando esto una compensación, en parte, a los gastos ocasionados a los autores”.

El proyecto ganador, titulado “Emisor”, obra de Agustín de Aguirre y Manuel de los Santos, nunca se llegó a construir. Los motivos se desconocen, aunque pudo deberse a varias causas: quizá fueron las reservas que los arquitectos del jurado habían mostrado con respecto a la enorme torre que incluía el proyecto o por considerarse demasiado “rompedor” con la arquitectura tradicional de las ciudades españolas, o quizá el coste de su construcción era demasiado elevado⁶¹⁹. Lo cierto es que el edificio era tremendamente innovador y sin duda hubiera producido el efecto que la CTNE quería conseguir a través de sus edificios centrales: causar impresión y

⁶¹⁹ El mismo artículo de la Revista Telefónica Española estimaba que el presupuesto total de las obras (demolición del hotel Bristol y construcción del edificio “Emisor”) no bajaría de los 1,5 millones de pesetas. También indicaban que la central automática estaría lista en el término de dos años.

fascinación ante la pujanza de la nueva compañía telefónica. No sabemos la implicación que Sosthenes Behn llegó a tener en la decisión de abandonar este proyecto, pero lo cierto es que en una reunión del Comité Ejecutivo de finales del mes de octubre, el Coronel dejaba claro que no había quedado satisfecho con los concursos hasta entonces realizados por la compañía⁶²⁰.

En lo que se refiere al concurso de arquitectos para hacer los proyectos de edificios, no se había obtenido el resultado apetecido y creía que era mejor no pensar en nuevos concursos.

El Coronel podía estar refiriéndose al caso concreto de Barcelona, a algún otro o a todos los celebrados por la compañía en general, por lo que no se puede asegurar que el proyecto “Emisor” fuera finalmente rechazado por la disconformidad de Sosthenes Behn. Lo que sí parece claro es que no se encontraba muy satisfecho con la idea de sacar a concurso obras tan importantes como éstas y para el edificio de Madrid se tomaron determinaciones muy distintas: no hubo concurso público, Behn tomó las riendas del plan y se encargó el proyecto al arquitecto de la compañía, Ignacio de Cárdenas, que colaboró con el arquitecto de la ITT, Lewis S. Weeks, autor del edificio de la ITT en Nueva York.

En un artículo de 2003, el investigador Francisco Javier García Algarra explicaba que “debido a los problemas aparecidos en este concurso, ITT decidió que la dirección de todo el programa la haría directamente Cárdenas”, lo que vendría a confirmar la hipótesis de que Sosthenes Behn no quedó satisfecho con el resultado del concurso de Barcelona, vetó la construcción del proyecto ganador y decidió intervenir directamente en las decisiones sobre los planes arquitectónicos más importantes. No obstante, el artículo no especifica cuáles fueron esos problemas que aparecieron ni tampoco se especifican en las actas consultadas para la realización de este Trabajo Fin de Máster⁶²¹.

Fuera como fuese, la compañía construyó finalmente un edificio mucho más modesto que aún hoy se puede contemplar en la esquina oriental de la plaza de Cataluña. El arquitecto de este nuevo proyecto fue Francisco de Paula Nebot, hombre de gran influencia política, alto cargo de la Unión Patriótica de Primo de Rivera y

⁶²⁰ Acta nº 63, 28 de octubre de 1925, libro 1, p. 85.

⁶²¹ Algarra-2003, p. 217.

Director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que también proyectó otros edificios de la misma plaza y a quien también debemos el diseño general de la misma. Más tarde, Nebot fue sustituido por Ignacio de Cárdenas, arquitecto y Jefe del Departamento de Edificaciones de la compañía, que también estaba al mando de las obras del edificio Telefónica de Madrid.

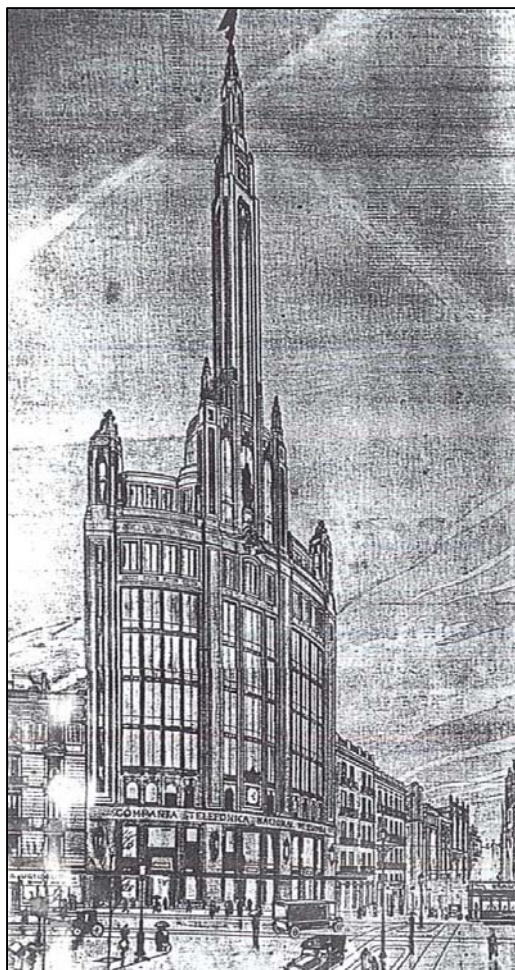


Figura 14. Proyecto ganador del concurso del edificio para la plaza de Cataluña en Barcelona: "Emisor", obra de Aguirre y de los Santos.

Reunión del Comité Ejecutivo⁶²²

Valentín Ruiz Senén, que había presidido el jurado nombrado para estudiar los proyectos para el edificio de Barcelona, hizo un resumen de las deliberaciones de la

⁶²² Acta nº 50, 22 de julio de 1925, libro 1, pp. 64-66.

reunión que se había celebrado poco antes. Comunicaba que el ganador había sido el que llevaba por título “Emisor” y que el fallo se había inspirado “en las máximas garantías de imparcialidad y competencia”. A continuación se leyó el acta de la sesión íntegramente, tras lo cual el Comité expresó su satisfacción por la actuación del jurado y se acordó trasladar oficialmente la gratitud de la compañía a los miembros que lo habían constituido. Se procedió entonces a abrir los sobres que contenían los nombres de los concursantes, resultando ganadores los arquitectos Aguirre y Santos, a quienes se les comunicaría esta adjudicación y la obtención del premio de 75.000 pesetas.

El arquitecto López Otero había propuesto realizar una exposición pública en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con todos los proyectos presentados a este concurso, para lo que se necesitaba una autorización que estaba dispuesto a conseguir. Gracias a la Revista Telefónica Española sabemos que los cinco trabajos estuvieron expuestos finalmente entre el 1 y el 8 de agosto de 1925⁶²³ y también conocemos los lemas de los otros cuatro proyectos presentados: “Tres”, “Lux”, “1927” y “Eros”.

En esta reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 22 de julio de 1925 también se tomaron otras dos decisiones de importancia. Por un lado, a propuesta del Marqués de Perijáa, se nombró Vicetesorero de la compañía a Ángel Andany Sanz. Además se designó a Logan N. Rock para que representara a la compañía en las reuniones que se iban a celebrar para constituir el Comité Paritario Nacional de Teléfonos. La Dirección General de Trabajo y Acción Social había invitado a la compañía a que concurriera a dichas negociaciones, con la debida representación, tarea que recayó en el Inspector General de la CTNE.

Comienza el soterramiento de cables en El Escorial

La Compañía Telefónica Nacional eligió la localidad madrileña de El Escorial para iniciar sus trabajos de soterramiento de cables telefónicos aéreos. Los cables tendidos y las torres metálicas que los sostenían afeaban enormemente las calles y plazas de los municipios españoles y además constituían uno de los motivos por los que la calidad del servicio era tan mala y se producían tantas averías. Las obras

⁶²³ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 10.

dieron comienzo el día 22 de julio de 1925, que “fueron seguidas de cerca por numerosas personas, que manifestaron su admiración por la gran obra de mejoramiento nacional que está realizando la Compañía”⁶²⁴.

Se tendieron cuatro cables de cubierta de plomo, cada uno de los cuales contenía 200 pares de hilos de cobre con aislamiento de papel. Es decir, que el nuevo sistema municipal escurialense contaría con capacidad para 800 abonados. Como la antigua central de la localidad estaba preparada para un máximo de 400 circuitos, fue necesario construir una nueva central, mucho más moderna y preparada que la anterior. De esta forma quedaba totalmente reformado el centro telefónico urbano de El Escorial, que no sólo eliminaba tendidos aéreos, sino que reemplazaba todo el cableado, el edificio de la central y hasta el equipamiento de la misma, preparada ahora para albergar el doble de abonados.

Esta localidad no se encontraba, evidentemente, entre las 17 ciudades españolas cuyo sistema telefónico urbano tenía que ser renovado en un plazo de cinco meses, lo que incluía automatización pero también soterramiento de todas las líneas aéreas. Pero entendemos que la CTNE eligió un municipio de un tamaño mucho menor como “plataforma de pruebas” para ensayar cómo realizar las obras de tendido subterráneo de cables, que en breve daría comienzo en Madrid, Barcelona y otras capitales españolas.

3.178. Jueves, 23 de julio de 1925

Reunión en el Ministerio de Trabajo para la formación del Comité Paritario

El día 22 de abril de 1925, la Asociación general de Empleados y Obreros de la CTNE envió una solicitud al Subsecretario del Ministerio de Trabajo para que se iniciaran cuanto antes los trámites para la creación de un Comité Paritario Nacional Permanente de Teléfonos. Parece que el Ministerio veía con buenos ojos la creación de esta corporación, pero no fue hasta el mes de julio cuando el Director general de Trabajo y Acción Social, Felipe G. Cano, envió una carta al Presidente de la Asociación convocándole a una reunión el día 23 de ese mes para tratar el asunto⁶²⁵. Gracias al acta del Comité Ejecutivo de la CTNE del día anterior sabemos que el

⁶²⁴ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, pp. 12-13.

⁶²⁵ Revista Telefónica Española, nº 7, julio de 1925, p. 3.

Ministerio también solicitó la presencia de la compañía, ya que los Comités Paritarios tenían que estar formados por representantes de ambas partes. La Dirección de la empresa había delegado en Logan N. Rock, Inspector General, para que representara a la compañía en esta comisión.

La reunión para tratar la constitución del Comité Paritario Nacional de Teléfonos contó con la presencia de Ricardo Oyuelos, Jefe de la Sección segunda de la Dirección general de Trabajo y Acción Social, en representación del Ministerio, Logan N. Rock, por parte de la CTNE, y Luis Alcaraz, como Presidente de la Asociación general de Empleados y Obreros⁶²⁶. El ambiente en el que se desarrollaron las negociaciones no pudo ser más cordial: ambas partes estaban de acuerdo en que se formara el Comité con carácter nacional y que las facultades del mismo consistieran en “entender en todo lo relacionado con la reglamentación del trabajo y su retribución y servir de Consejo de conciliación en las diferencias individuales y colectivas que surjan entre la Compañía y sus obreros”.

Respecto a la presidencia del Comité, “después de ligera discusión”, Rock y Alcaraz decidieron que sería designada directamente por el Ministerio. Se convino igualmente que se abriría un plazo de información pública hasta el 31 de agosto de 1925.

3.179. Lunes, 27 de julio de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁶²⁷

Hernand Behn asistió a esta sesión del Consejo de Administración y fue por ello recibido con gran satisfacción por parte de todos los presentes. Behn agradeció el saludo y la bienvenida del Consejo y anunció que su hermano Sosthenes se reintegraría muy pronto al mismo, “después de terminar la importante labor que actualmente realiza a favor de los intereses de nuestra compañía, y que, sin que por el momento pueda concretar respecto a los términos de aquella, anuncia que las gestiones se desarrollan con franca marcha hacia el éxito”. Como veremos en capítulos posteriores, Sosthenes Behn se encontraba en aquel verano de 1925

⁶²⁶ Acta de la reunión convocada para tratar de los preliminares de constitución del Comité Paritario. Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, pp. 4-5.

⁶²⁷ Acta nº 17, 27 de julio de 1925, libro 1, pp. 36-39.

inmerso, como siempre, en intensas negociaciones para extender su International System por todo el mundo. La CTNE recibiría en breve la noticia de que la ITT había adquirido la International Western Electric Co. y que había logrado una importante concesión en el sistema telefónico mexicano. Aunque cualquier logro de la ITT implicaba indirectamente un beneficio para todas las empresas de su órbita, como era el caso de la Telefónica, era quizá un poco exagerado afirmar que el Coronel se encontraba en aquellos momentos realizando labores a favor de los intereses de la compañía española.

Hernand Behn tampoco perdió el tiempo en su breve estancia en nuestro país y ya se había reunido con el coronel Tafur Funés para tratar el asunto de la red de la Mancomunidad, ya que se trataba éste del árbitro designado por ambas partes para la resolución del conflicto en caso de no llegarse a un acuerdo, como efectivamente había ocurrido. En la reunión del Comité Ejecutivo del 8 de julio ya se había decidido consultar la opinión del Director General de manera “extraoficial”, para conocer su parecer, antes de apelar a su sentencia definitiva, que podría no ser todo lo beneficiosa para sus intereses que ellos deseaban.

Antonio Nieto Gil expresaba asimismo la poca confianza que tenía en llegar a un “éxito satisfactorio” para la compañía con respecto a la adquisición de las propiedades telefónicas de la extinta corporación catalana dada la enorme diferencia entre las dos ofertas y a pesar de la “meritoria y valiosa mediación del referido Coronel Tafur”. Parece, por lo tanto, que el Director General mantenía su inclinación por la compañía telefónica y mediaba en las cuestiones que afectaban a ésta, siempre a favor de los intereses de la empresa. No obstante, en este asunto parecía más complicado que su colaboración hiciera que la balanza se inclinara del lado de la CTNE, puesto que la Mancomunidad siempre se había mostrado muy celosa con respecto a su red telefónica y también muy firme en el precio que debería recibir por todas sus propiedades. El Consejo decidió finalmente someter la cuestión a Tafur Funés para que dictara una sentencia oficial como considerara más justo para ambas partes.

El Consejo también decidió adquirir un terreno en Bilbao frente a Altos Hornos, siguiendo las recomendaciones del letrado José de Urizar y Olazábal. Ruiz Senén también informó a los presentes sobre el concurso de proyectos para el edificio de Barcelona y se acordó transmitir la satisfacción y gratitud del Consejo a todos los miembros del tribunal, especialmente a los dos integrantes del mismo que no

pertenecían a la CTNE: los arquitectos Modesto López Otero y Enrique Sagnier i Villavecchia, Marqués de Sagnier.

Por último se hacía constar en acta que, a todos los efectos, el domicilio social de la empresa se había trasladado, en el mes de noviembre de 1924, de su antigua sede en la plaza de las Cortes número 6, al inmueble situado en la avenida Conde de Peñalver número 5. El Secretario explicaba que se estaban dando dificultades para la inscripción del nuevo domicilio social de la compañía en el Registro Mercantil de Madrid.

3.180. Miércoles, 29 de julio de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶²⁸

Antonio Nieto Gil, Consejero Delegado del Ministerio de la Gobernación, había informado a Lewis J. Proctor de las intenciones de la Dirección General de Comunicaciones de nombrar funcionarios de Telégrafos en los distintos Distritos de la compañía a fin de ejercer la inspección de las instalaciones y los servicios de la CTNE. El Vicepresidente informaba a su vez al Comité Ejecutivo y éste acordaba que Ruiz Senén hiciera un estudio detenido del contrato entre el Estado y la Telefónica para determinar si esta decisión de Tafur Funés se acogía a las bases firmadas.

El Comité autorizó al abogado José de Urizar y Olazábal para que representara a la compañía en las subastas públicas que los Juzgados de primera instancia de Bilbao iban a celebrar los días 3 y 4 de agosto. La intención de la compañía era que el letrado adquiriera solares edificables en la calle de Buenos Aires de la capital vizcaína y en la “ante-iglesia” de Erandio (también en la provincia de Vizcaya) La compra de este terreno en Bilbao es una muestra más de cómo la compañía se hizo, gracias a su capacidad económica, con los solares o edificios mejor situados en cada una de las capitales españolas. En este caso, la empresa compró un terreno de casi 1.000 metros cuadrados⁶²⁹ situado en la calle de Buenos Aires, número 10, esquina con la calle Colón de Larreategui, también en pleno centro financiero de la ciudad, y donde meses más tarde se iniciarían las obras del actual edificio Telefónica de Bilbao, en el que se instaló la central automática que daría servicio a la red municipal y sus oficinas.

⁶²⁸ Acta nº 51, 29 de julio de 1925, libro 1, pp. 66-67.

⁶²⁹ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, p. 9.

Las negociaciones para la adquisición del solar de la Gran Vía situado en la Red de San Luis habían llegado a buen término y la compañía ya se encontraba en disposición de firmar la escritura de compraventa con los propietarios de la parcela. El Comité Ejecutivo autorizaba por lo tanto a Valentín Ruiz Senén, que se había encargado de todos los trámites desde el principio, para formalizar el contrato sin restricción ni limitación alguna. Se concluía así un proceso de negociación que se había iniciado ocho meses antes, en noviembre de 1924. En la reunión que celebró el Comité Ejecutivo el día 12 de aquel mes se hizo referencia por primera vez a cierto solar de la Gran Vía que interesaba adquirir, según órdenes dadas desde París por Sosthenes Behn. Se encargó, muy oportunamente, a Ruiz Senén que realizara todas las gestiones oportunas y éste fue informando al Comité y al Consejo de los movimientos más significativos a este respecto. Por fin, en julio de 1925 parece que el proceso había dado sus frutos y el solar sería adquirido en pocos días.

Sobre las intenciones de la compañía por construir edificios imponentes en las mejores zonas de cada ciudad ya hemos hablado en varias ocasiones. Sirva este párrafo que publicaba la Revista Telefónica Española en un artículo a finales de verano para confirmar los objetivos de la empresa de hacerse notar a través de la arquitectura y localización de sus sedes centrales⁶³⁰:

No es tan fácil como muchos creen el construir un edificio que reúna las condiciones que en todos los suyos quisiera ver la Compañía; esto es: situación muy céntrica; magnificencia suficiente para constituir un verdadero ornato de la ciudad, y amplitud que permita instalar en él unas oficinas a la moderna, junto con la Central automática correspondiente.

El mismo artículo explicaba, no sin cierta presunción, cómo se había logrado adquirir un solar tan grande y a la vez tan bien situado en pleno centro financiero de la ciudad:

En Madrid, la Compañía ha comprado un solar de grandes dimensiones en la Avenida de Pi y Margall, habiéndolo podido encontrar precisamente, por su extensa superficie, y al no estar parcelado, no lo hacían deseable, sino para edificar una oficina central de la importancia que tendrá la de la Compañía.

⁶³⁰ Revista Telefónica Española, nº 8, agosto de 1925, pp. 9-10.

La avenida Pi y Margall, segundo trama de la Gran Vía, había sido inaugurada sólo tres años antes y, en consecuencia, varios solares seguían todavía vacíos y pendientes de que alguna compañía o promotor se hiciera con ellos y levantara los solemnes edificios que habrían de poblar esta avenida madrileña. Es cierto que pocas compañías españolas estaban en disposición de adquirir una parcela de las características de la situada en el número 2 de la avenida Pi y Margall, actual número 28 de la Gran Vía, por su tamaño y por su localización. Aún menos empresas tendrían la capacidad económica no sólo de comprar el solar sino de levantar un rascacielos como el que se proponía construir la Telefónica. El artículo ofrecía los siguientes datos sobre el terreno comprado:

En cuanto al solar adquirido en la Avenida de Pi y Margall, podemos ofrecer estos resumidos datos a nuestros lectores: Superficie, 2.280 metros cuadrados. Fachadas tres, a las siguientes calles: Pi y Margall, 46,91 m.; Valverde, 52,86 m., y Fuencarral, 36,29 m.

Añadimos nosotros que, para más inri, la cota de la Red de San Luis es el punto de mayor elevación de la ciudad de Madrid, lo que significaba que el edificio que iba a levantar la Telefónica en ese solar sería bien visible desde la mayoría de los puntos de la ciudad, incluso aunque no llegara a los 90 metros que finalmente alcanzó. Aún hoy sigue siendo un punto de referencia fundamental en la ciudad de Madrid, pero la impresión que tuvo que causar cuando se terminó en 1929 tuvo que ser aún mayor, tratándose además de uno de los primeros rascacielos de Europa, aunque algunos autores apuntan incluso que fue, en realidad, el primero.

Aquel artículo de la Revista Telefónica España publicado a finales de verano también explicaba que se esperaba que el concurso de proyectos para el edificio fuera “un acontecimiento, porque las condiciones en que ha de celebrarse aseguran la concurrencia de las primeras firmas”. Efectivamente, de haberse convocado un concurso, no cabe duda que la calidad de los proyectos hubiera sido altísima. No obstante, aunque la compañía presupusiera que las obras se iban a adjudicar mediante concurso público, la realidad es que a finales del mes de octubre llegó Sosthenes Behn y desmanteló esa idea totalmente. Como veremos en un capítulo posterior, el Coronel expuso en una reunión del Comité sus críticas con respecto al sistema de concursos, por lo que proponía que el proyecto fuera asignado directamente a un arquitecto de confianza, lo que quedó automáticamente aprobado por el resto de miembros del Comité.

3.181. Viernes, 31 de julio de 1925

Anuncio de la apertura de información pública acerca del Comité Paritario

Como consecuencia de la reunión que Luis Alcaraz y Logan N. Rock habían celebrado en el Ministerio de Trabajo el día 23 de julio, el Director general abrió un periodo de información pública acerca de la formación del Comité Paritario. El anuncio, firmado el 31 de julio de 1925 y publicado en la Gaceta de Madrid, establecía que dicha información pública quedaba abierta hasta el día 31 de agosto “para que cuantas personas o entidades lo consideren conveniente, acurdan a informar precisamente por escrito, acerca de la formación de un Comité Paritario Nacional de Teléfonos”⁶³¹.

3.182. Sábado, 1 de agosto de 1925

Carolina Marcial Dorado y el Bureau de Información Pro-España

Gracias a la Revista Telefónica Española sabemos que Sosthenes Behn viajó a nuestro país durante el verano de 1925⁶³², pero se trató más bien de unas vacaciones en las que realizó un recorrido por la península visitando varias regiones. Una muestra de que esta visita no fue por negocios es que el Coronel no asistió a ninguna reunión del Consejo de Administración de la CTNE. Durante su viaje por España le acompañaba, entre otras personas, Carolina Marcial Dorado, una profesora de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y además directora de una institución llamada “Bureau de Información Pro-España”.

El Bureau de Información Pro-España fue otra creación personal de Sosthenes Behn. Se trataba de un organismo que pretendía dar a conocer nuestro país entre el público norteamericano y normalizar la imagen que se tenía de España en la sociedad de la época. No hay que olvidar que hacía no muchos años, los dos países habían sido enemigos y se habían enfrentado en una guerra que permitió a Estados Unidos elevarse hasta el puesto de superpotencia mundial. Por supuesto, presentar España a los norteamericanos como una nación moderna servía no sólo para robustecer la imagen del país, sino también la de la Telefónica y por ende la de la ITT. El objetivo de

⁶³¹ Anuncio de la Dirección general de Trabajo y Acción social, de 31 de julio de 1925. Gaceta de Madrid, 2 de agosto de 1925, nº 214, p. 800.

⁶³² Revista Telefónica Española, nº 7, julio 1925, p. 22; nº 8, agosto 1925, pp. 26-27.

Behn era que el turismo y las inversiones en España crecieran, gracias a la promoción de nuestros encantos, lo que repercutiría indirectamente en el negocio telefónico. Ángel Calvo en su libro de 2010 lo expresa así⁶³³:

Como instrumento al servicio de este objetivo fundó en Nueva York el Bureau de Información Pro-España para dar a conocer rasgos característicos de la geografía y la cultura del país y proyecto al exterior la imagen de una empresa imbricada en el contexto español.

La Revista Telefónica Española, en su artículo de julio de 1925, explicaba que el Bureau se había creado como una sección del Departamento de Publicidad de la ITT, dirigido por Kenned McKim, que unos meses más tarde se convertiría en el nuevo Director de ese departamento pero en la CTNE.

La organización se fundó en el mes de marzo de 1925⁶³⁴. En un artículo del diario ABC de octubre de 1929 se indicaba que la organización llevaba cuatro años realizando una “valiosa labor hispanófila”⁶³⁵. Por su parte, en otro reportaje que publicó el mismo periódico en mayo de 1926, escrito por el periodista y guionista Miguel de Zárraga, se daban algunos datos sobre turistas estadounidenses en nuestro país⁶³⁶. En 1924 el número de visitantes norteamericanos había sido de 8.000, mientras que en 1925 habían ascendido a 40.000, lo que implicaba un crecimiento del 400% en sólo un año. Miguel de Zárraga apuntaba a que este fuerte aumento era debido “gracias también no poco al Bureau de Información Pro España, generosamente fundado y pagado por la International Telephone and Telegraph Corporation”. Cuando en junio de 1957 murió Sosthenes Behn, el diario ABC le dedicó una necrológica titulada “Ha muerto un gran amigo de España: el coronel Behn”, en la que se destacaba su amor a nuestro país. Aquí se indicaba que este cariño por España le había llevado a crear, en 1928, el Bureau de Información Pro-España, lo que se trata claramente de un error de documentación del escritor de la nota⁶³⁷.

⁶³³ Calvo-2010, p. 136.

⁶³⁴ Revista Telefónica Española, volumen 2, nº 6, junio 1926.

⁶³⁵ ABC, 1 de octubre de 1929, p. 37.

⁶³⁶ ABC, 27 de mayo de 1926, p. 28.

⁶³⁷ ABC, 9 de junio de 1957, p. 34.

La figura de Carolina Marcial Dorado es poco conocida, a pesar de tratarse de una de las primeras mujeres españolas en lograr una cátedra en una universidad extranjera y de haber impulsado el conocimiento de nuestra lengua y cultura en Estados Unidos. Se sabe que provenía de una familia gaditana de clase acomodada y que emigró muy pronto, siendo una niña. Sus padres se esforzaron para que tanto sus hijos como sus hijas obtuvieran una buena educación y estudió con célebres profesores de la época, especializándose en literatura hispana. En 1921 ya había conseguido la cátedra en el Barnard College de la Universidad de Columbia de Nueva York, donde impartía clases de lengua y literatura españolas⁶³⁸. Durante su etapa académica publicó varios libros de primeras lecciones de castellano para estudiantes, así como algunos estudios sobre distintos aspectos de la cultura de nuestro país. Su figura inspiró la creación de la “Fundación Carolina Marcial Dorado”, que otorgaba becas a jóvenes estudiantes españoles para que completaran sus estudios en Estados Unidos. Esta institución, que desapareció durante los años 60, se refundó en octubre del año 2000 como “Fundación Carolina” y es muy conocida por su labor de promoción de las relaciones culturales, educativas y científicas entre España y la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

El Bureau que presidía Marcial Dorado realizaba una intensa labor de promoción de la cultura española en Nueva York, organizando exposiciones, obras de teatro, conciertos, etc. Buena parte de sus esfuerzos, humanos y económicos, los dedicó a la edición de unos folletos turísticos de varias ciudades o regiones españolas, como Madrid, Sevilla y San Sebastián en 1926, Barcelona en 1927 y Asturias en 1928. Estos cuadernillos fueron su labor más aplaudida en la prensa nacional de la época, aunque también publicó varias obras de divulgación sobre la historia y el arte y abrió una biblioteca en sus oficinas. El Bureau también colaboró activamente con la Asociación de Amigos de España en Norteamérica, una asociación que reunía a importantes personalidades de la diplomacia y la empresa.

Sosthenes Behn y Carolina Marcial no fueron los únicos que establecieron un organismo para estrechar los lazos entre los dos países. Los diarios de la época dan buena cuenta de que Lewis J. Proctor presidió, durante varios años, una asociación de ciudadanos estadounidenses que residían en España. Ésta organizaba cenas y fiestas para la alta sociedad madrileña, a las que asistían importantes autoridades, como el

⁶³⁸ ABC, 27 de abril de 1921, p. 5.

embajador norteamericano, Alexander P. Moore, o el general Primo de Rivera en alguna ocasión.

3.183. Miércoles, 5 de agosto de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶³⁹

El Vicepresidente Valentín Ruiz Senén llamaba la atención del Comité Ejecutivo en el asunto de la creación del Comité Paritario que había solicitado la Asociación general de Empleados y Obreros. Pedía que se estudiara y meditara este tema con el mayor detenimiento, puesto que, a su juicio, tenía esta cuestión “vital importancia” y había que “prever y aquilatar” las consecuencias de todo ello. Leídas estas manifestaciones, parece claro que la Dirección de la empresa no veía la creación de este Comité Paritario con tan buenos ojos como lo hiciera con la Asociación de empleados, a la que acogió en su seno como un departamento más de la empresa. Ahora algunos miembros veían con cierta preocupación el asunto y pedían que se participara activamente en su gestación.

El Secretario contestaba entonces que, hasta la fecha, no se había tomado ninguna resolución por parte de la compañía, limitándose únicamente a designar a Logan N. Rock, Inspector General, para que representara a la misma en las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo. Dicha representación había sido conferida en virtud del acuerdo adoptado por el Comité en su reunión de 22 de julio de 1925. No obstante, Gumersindo Rico convino estudiar el asunto de la manera más detallada posible “para adoptar la resolución que en definitiva pueda significar mayores ventajas para nuestros intereses”.

Proctor informaba de las gestiones que había realizado el abogado José de Urizar y Olazábal en las subastas públicas celebradas en Bilbao y en las que se había adquirido el solar de la calle de Buenos Aires de aquella ciudad. Todo el comité mostró su satisfacción por el éxito obtenido y expresaba su “gratitud por el acierto y actividad con que ha procedido”.

⁶³⁹ Acta nº 52, 5 de agosto de 1925, libro 1, pp. 67-69.

3.184. Miércoles, 12 de agosto de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁴⁰

En esta reunión, el Comité Ejecutivo acordó, en atención al próximo vencimiento del trimestre en curso, el reparto del dividendo del 7% anual que recompensaba a las acciones preferentes en circulación, siguiendo el mismo criterio que en ocasiones anteriores.

También se autorizó a todos los subdirectores de Distrito para que pudieran representar a la compañía cuando fuera necesario como parte demandante, demandada, coadyuvante o querellante ante los Juzgados y Tribunales en cualquier proceso que se siguiera y en el que la empresa tuviera parte. Los subdirectores de los Distritos eran, en esta fecha, los siguientes: José Berenguer Cagigas del 1º (Madrid), José de Rivera Juer del 2º (Barcelona), Benito Navarro Ortiz de Zárate del 3º (Bilbao), Rafael de Abreu Moraza del 4º (León), Francisco Gil Merino del 5º (Sevilla), Francisco Lozano Gorriti del 6º (Granada), Luis Alonso Pérez del 7º (Valencia) y Francisco de Juan Martínez del 10º (Santa Cruz de Tenerife)

Por último se confirmaron ciertos movimientos de personal. El Vicesecretario Julián Calvet era nombrado Subdirector Comercial en Barcelona, por lo que abandonaba su anterior cargo, y éste era ocupado por José Gamero Fernández.

Resolución del Gobierno con respecto a las líneas microfónicas

El día 27 de marzo Gumersindo Rico, en nombre de la compañía, había elevado un recurso al Gobierno en contra de la autorización que la Dirección General de Comunicaciones había otorgado a la “Sociedad Radio-Barcelona” para la instalación de ciertas líneas telefónicas bajo la denominación de “circuitos microfónicos”. Aunque el Comité Ejecutivo consideraba esta cuestión de gran urgencia, al Gobierno no le pareció que tuviera que resolver el caso con tanta premura

⁶⁴⁰ Acta nº 53, 12 de agosto de 1925, libro 1, pp. 69-70.

y finalmente firmó la Real Orden desestimando el recurso el día 12 de agosto de 1925⁶⁴¹.

En los “considerandos” del texto expositivo, el Marqués de Magaz, Presidente interino del Directorio, explicaba su forma de entender los circuitos microfónicos y las líneas telefónicas, llegando a la conclusión de que “no existe paridad alguna entre línea microfónica aneja al montaje de una estación de radiodifusión y una línea telefónica propiamente dicha, ni existe perjuicio alguno para la Compañía Telefónica Nacional de España por la concesión de las citadas líneas microfónicas”. Por ello resolvía que el recurso de la empresa contra la Dirección General fuera desestimado.

Pero la Real Orden iba un poco más allá y no se limitaba a mantener la concesión a la Sociedad Radio-Barcelona, sino que además se invitaba a la Dirección General de Comunicaciones a que continuara entregando licencias “de líneas microfónicas anejas a estaciones radioeléctricas, con la expresa condición de prohibir la utilización esas líneas como líneas telefónicas ordinarias”. Es decir, que el golpe para la CTNE fue aún mayor: no sólo se permitía que esta sociedad mantuviera su concesión, sino que otras podían seguir su ejemplo y contar con el beneplácito del Gobierno y la Dirección General de Comunicaciones.

3.185. Lunes, 17 de agosto de 1925

La ITT adquiere la International Western Electric Company

El International System de Sosthenes Behn empezaba a despegar y ya nadie dudaba de su capacidad para hacerse con sistemas telefónicos de países enteros. Al éxito español le sucederían otros en varios países europeos y americanos, ampliando de esta forma su red de compañías “nacionales” bajo el control de la International. Sin embargo, el Coronel era perfectamente consciente de que a su sistema le faltaba una pieza fundamental: un brazo productor que permitiera la integración vertical del negocio. La ITT seguía dependiendo de otras empresas para la adquisición de equipos, tanto en América, donde solía comprar a la *Western Electric*, como en Europa, donde adquiriría equipos a dos de sus grandes competidoras: la *Ericsson* y la *Siemens & Halske*, que evidentemente no le vendían baratos sus productos. Por ello

⁶⁴¹ Real Orden de la Presidencia del Directorio, 12 de agosto de 1925. Gaceta de Madrid, 14 de agosto de 1925, nº 226, pp. 1004-1005.

era necesario incorporar una filial que le permitiera conseguir estos equipos a bajo coste, al estilo de lo que la *Western Electric* significaba para la AT&T⁶⁴².

Una vez la concesión del sistema telefónico español había sido conseguida, Sosthenes Behn viajó de nuevo a Estados Unidos para centrar su atención en otros negocios, entre los que se encontraba, de manera preferente, la adquisición de una compañía productora de material y equipos eléctricos para su International System. Primero inició conversaciones con algunas compañías como la *Western Electric* o la *International Automatic Telephone* (Autelco), pero tuvo que abandonar pronto esos frentes porque rechazaron sus ofertas. Sin embargo, la oportunidad perfecta surgió en 1925 cuando la AT&T tuvo que deshacerse de una de sus filiales, la *International Western Electric Company* (IWECC). Hasta el nombre y la proyección de la empresa eran perfectos para los planes de Sosthenes Behn.

La IWECC había sido creada 1918 como una sociedad de cartera que permitió a la AT&T agrupar todas sus empresas de fabricación en el extranjero, presentes en numerosos países de todo el mundo como Bélgica, China, Reino Unido, Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Suiza, Sudáfrica, Singapur, Egipto o Australia, por nombrar algunos. La mayor parte de ellas se encontraban explotadas bajo la marca “Bell”. Se podría decir que la IWECC tenía más de “International” que la propia ITT que la iba a adquirir y además obtenía beneficios que eran siete veces mayores que los que alcanzaban todas las empresas de Behn⁶⁴³. En España la IWECC también había creado una filial, “Teléfonos Bell, S.A. Manufacturas Eléctricas”, que abrió una fábrica en Barcelona y también estableció una delegación comercial en Madrid, que, ironías de la Historia, contó con Gumersindo Rico como primer encargado.

De esta forma, la AT&T consiguió reunir en una sola empresa todas sus fábricas y laboratorios repartidos por el mundo. Mientras la *Western Electric* se encargaba de abastecer de material y equipos telefónicos el mercado estadounidense y canadiense, la IWECC estaba centrada en la producción internacional, aunque ésta no contaba con un departamento de investigación como el de la primera y sencillamente “heredaba” sus patentes. No obstante, sus resultados económicos no eran satisfactorios, en parte porque las compañías telefónicas de cada país solían proteger a los productores nacionales, cuando los había, como era el caso de la *Ericsson* en

⁶⁴² Yuste-2004, pp. 70-72.

⁶⁴³ Sobel-2000, p. 42.

Suecia, la *Siemens & Halske* en Alemania, la *Thomson-Houston* en Francia, etc. Tal y como explicaba Pérez Yuste en su tesis:

Las pérdidas de la IWECE repercutían, directamente, en el balance contable de la Western Electric e, indirectamente, en los abonados de la ATT quienes, según la apreciación del Gobierno Americano, eran los que de verdad estaban sufragando el desarrollo de los sistemas telefónicos extranjeros. Por esa razón, se ejerció una fuerte presión sobre la ATT para que se deshiciera de la IWECE vendiéndola, preferiblemente, a otra compañía americana. Algunos autores opinan, sin embargo, que la ATT se vio obligada a desprenderse de sus intereses internacionales a causa de un procedimiento antimonopolio emprendido contra ella por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La Banca Morgan y el *National City Bank*, principales valedores financieros de la ITT supieron ver la oportunidad y pusieron en contacto a Sosthenes Behn con el nuevo presidente de la AT&T, Walter Gifford. Las negociaciones, que tuvieron lugar en el verano de 1925, no duraron mucho porque ambas partes se entendieron a la perfección: uno necesitaba deshacerse de la IWECE y el otro adquirir precisamente una empresa productora de material telefónico con miras al mercado internacional. La fecha exacta del acuerdo entre las dos compañías no se conoce, pero el día 17 de agosto de 1925 se recibía en España un cablegrama enviado por Sosthenes Behn desde Nueva York informando sobre la adquisición.

El contrato de compra se firmó finalmente el 30 de septiembre de 1925. La AT&T vendía a la ITT sus fábricas en el extranjero excepto las de Canadá, así como las licencias de fabricación de sus patentes, incluyendo las de las centrales automáticas tipo “Rotary” que se construían en la factoría de Amberes (Bélgica) El coste total de la operación fue de 33 millones de dólares⁶⁴⁴, un precio bastante bueno para Sosthenes Behn, sobre todo si se tienen en cuenta los activos adquiridos en la operación y el mercado potencial. Tal fue el entendimiento entre las dos partes que aquel día no sólo se firmó el contrato de venta de la IWECE, también se firmó un acuerdo secreto de no competencia: la AT&T se centraba en el mercado

⁶⁴⁴ Sobre el precio de la compra existen pequeñas diferencias en función de las investigaciones consultadas. Pérez Yuste aporta este dato (33 millones de dólares) obtenido de la página web oficial de la AT&T (www.att.com/history) En Wilkins-1974, p. 71, se dice, en cambio, que el coste fue de 29,3 millones. Por su parte, Sobel-2000, p. 44, redondea esta cifra en 30 millones de dólares por la operación de venta.

norteamericano (Estados Unidos y Canadá) y la ITT en el resto del mundo. Además, la AT&T podía utilizar a la empresa de Behn como agente exportador.

Cuando la ITT adquirió la IWEW, le cambió el nombre, que pasó a denominarse *International Standard Electric Company* (ISEC), que en España pasaría a ser, como sabemos, “Standard Eléctrica S.A.”.

El cablegrama que Behn envió a España para informar sobre el acuerdo decía lo siguiente:

La International Telephone and Telegraph Company anuncia la compra a la Western Electric Company, principal fabricante en el mundo de aparatos y equipos telefónicos, de la International Western Electric Company [...]

La adquisición de esta nueva subsidiaria contribuirá en gran manera al desarrollo y al éxito de la actuación de la International Telephone and Telegraph Corporation, y particularmente en lo que concierne a España, pues permitirá a la International Telephone and Telegraph Corporation organizar una entidad española para la instalación de una o varias factorías en España, en las cuales, utilizando las importantes patentes adquiridas, será posible fabricar todo el equipo telefónico que se necesite en lo futuro para el desarrollo general de la telefonía en España.

Además, ello permitirá la exportación de dicho equipo a países extranjeros, particularmente a la América española, resultando así que España no sólo llegará ser la propia productora del que necesite, sino que se convertirá en país exportador, dejando de ser, como es hoy, meramente importador, en tal concepto.

Uno de los propósitos a realizar es el desarrollo de la actual fábrica de Barcelona, construyendo además una gran fábrica moderna en Madrid o sus proximidades, donde se fabricarán los modernísimos tipos de aparatos de telefonía, telegrafía, radiotelefonía y radiotelegrafía.

La noticia de la compra de la IWEW fue conocida inmediatamente por todos los periódicos españoles de la época, gracias al cablegrama de Sosthenes Behn, y no tardaron en publicar un artículo en el que destacaban la importancia de esta

adquisición para el mercado español y el compromiso de Behn de construir una fábrica en Madrid e impulsar la de Barcelona⁶⁴⁵.

Pérez Yuste resumía de la siguiente forma la enorme importancia de la adquisición de la IWECA para el entramado empresarial de Sosthenes Behn:

Como se ve, la operación no pudo resultar mejor para los intereses de los hermanos Behn. Con la adquisición del sistema telefónico español [...] y la compra de la IWECA a la Western Electric, la ITT pasó de ser una pequeña compañía regional de servicios [en el Caribe] a convertirse en una empresa de gran tamaño con capacidad para integrar, dentro de la misma corporación, tanto la fabricación de equipos como la operación de las redes telefónicas y la prestación de todo tipo de servicios. La integración vertical del negocio, además, no sólo permitió que la ITT pudiera abastecer el mercado español con sus propios equipos sino que, además, la situó en una magnífica posición para competir, a partir de entonces, con sus más directos rivales allí donde fuera necesario.

3.186. Jueves, 20 de agosto de 1925

La ITT y el servicio telefónico en México

Como ya hemos explicado en varias ocasiones, Sosthenes Behn vio en Europa y América Latina los mercados más propicios para extender su International System de compañías “nacionales” con monopolios telefónicos en sus territorios. En algunos casos, obtuvo grandes éxitos, como en España; en otros, sin embargo, tuvo que admitir cierta derrota, como en Italia o Francia. No obstante, ahora que la pieza española se había convertido en la joya de su proyecto internacional, algunos países que en el pasado le habían dado la espalda por su inexperiencia o las pocas garantías que ofrecía, comenzaban a abrirle de nuevo las puertas de sus redes telefónicas. Éste fue el caso de México, que en 1923 rechazó la propuesta de Sosthenes Behn de reorganizar y modernizar su desastrosa red nacional, pero que ahora comenzaba a rendirse a sus encantos.

⁶⁴⁵ La Voz, 17 de agosto de 1925, p. 2; El Heraldo de Madrid, 17 de agosto de 1925, p. 3; ABC, 18 de agosto de 1925, p. 11; El Imparcial, 18 de agosto de 1925, p. 2; El Siglo Futuro, 19 de agosto de 1925, p. 3; La Vanguardia, 19 de agosto de 1925, p. 8; El Globo, 20 de agosto de 1925, p. 2.

La telefonía mexicana era incluso más deficiente que la española. También estaba formada por multitud de pequeños concesionarios que explotaban pequeñas redes municipales y apenas se contaban con líneas interurbanas que permitieran la comunicación entre los núcleos poblacionales más importantes. Según la Constitución del país, cada Estado tenía derecho a establecer su propia red telefónica o a contratar a otra entidad su instalación y explotación, derecho que luego fue transferido incluso a los distritos y a los municipios, por lo que la cantidad de operadores presentes en el mercado mexicano a principios del siglo XX era desproporcionada. La red telefónica del Distrito Federal estuvo al principio en manos de un empresario llamado Pablo Martínez del Río, que había creado la “Compañía Telefónica Mexicana” en 1904 para dar servicio a la capital. Se había propuesto crear una “red puramente subterránea al interior del perímetro central de la ciudad, y aérea en el exterior”⁶⁴⁶.

A diferencia del caso español, en México sí habían entrado empresas extranjeras para construir y explotar concesiones en varios puntos del país. Así, por ejemplo, una compañía británica, la “Veracruz Telephone Construction Syndicate” se había hecho cargo de la red de la ciudad de Veracruz y de su estado y había instalado una línea interurbana para comunicarse con la capital⁶⁴⁷.

Un tiempo después se creó la compañía “Mexican Telephone and Telegraph Co.”, fundada en Boston a partir de la “Compañía Telefónica Mexicana”, y nacía con el objetivo de hacerse con la mayor cantidad de redes posibles en territorio mexicano. Su director en 1909 se llamaba W. French Smith y su presidente Lewis C. Benton⁶⁴⁸. Esta nueva compañía, que había sido organizada por banqueros de Boston y estaba asociada con la AT&T, tenía en sus manos el servicio telefónico de la capital del país. No obstante, poco más tarde llegó la Ericsson y también consiguió una concesión similar para construir y explotar una red en el Distrito Federal⁶⁴⁹, que encargó a su filial *Mexeric*. Con dos concesionarios en la misma ciudad, los conflictos y los problemas no tardaron en aparecer, ya que las dos compañías, la Mexican y la Ericsson, luchaban por el negocio telefónico de la capital. Todo comenzó a complicarse, hasta el punto de darse casos tan curiosos como el de la conexión telefónica entre el DF y Veracruz:

⁶⁴⁶ Canudas-2005, p. 1283.

⁶⁴⁷ Sobel-2000, pp. 45-46.

⁶⁴⁸ Canudas-2005, p. 1283.

⁶⁴⁹ Datos obtenidos de la página web: www.ericssonhistory.com

estas dos compañías construyeron sendas líneas interurbanas para unir las dos ciudades, que se sumaban a la ya construida y explotada por la compañía británica, lo que provocaba que hubiera tres líneas pero que ninguna funcionara adecuadamente.

En 1915, cuando el Ejército estadounidense invadió los territorios del norte de México, el Gobierno del país se hizo cargo de la compañía como si de una empresa pública se tratara. En aquellos años, el servicio telefónico mejoró notablemente y en el año 1925 su red era ya la más grande y eficiente de todo México. Por aquel entonces, el Gobierno estaba decidido a mejorar sus relaciones con el vecino del norte y el negocio telefónico parecía una buena oportunidad para conseguirlo. De esta forma, se reanudaron las negociaciones con Sosthenes Behn y se empezó a valorar la posibilidad de entregar la Mexican a la ITT. Aunque pudiera parecerlo, esta empresa no disfrutaba del monopolio del sistema nacional; era la más importante y la mejor preparada, pero seguía compitiendo con otras compañías, sobre todo con la Ericsson. A estas alturas, el número de concesionarios se había reducido notablemente y la telefonía mexicana se podía resumir ya en una guerra entre la Mexican, favorecida por el Gobierno, y la Mexeric, filial de la firma sueca. Su campo de batalla más importante era la capital, donde seguían operando las dos compañías y donde seguían luchando por ofrecer un servicio mejor que su competidora, robándose los abonados e invirtiendo grandes cantidades de dinero para no perder posiciones en el mercado.

Las negociaciones para la adquisición de la Mexican no entrañaron muchas dificultades para Sosthenes Behn. Éste prometió invertir importantes sumas para desarrollar rápidamente la compañía mexicana, construir una fábrica de materiales de la International Standard Electric en la capital y establecer la conexión telefónica con Estados Unidos y Cuba. Algunos estudios de la época valoraban la Mexican en 5 millones de dólares (unos 35 millones de pesetas de entonces), aunque Robert Sobel afirmaba en su libro que esa cantidad estaba sobredimensionada.

Como sabemos, el Coronel declaraba en enero de 1925 que tenía la esperanza de obtener en poco tiempo el “monopolio de Méjico” y que la ITT se encontraba también en negociaciones con otros países de América Latina. Efectivamente, el éxito obtenido en España y México le abrió las puertas de otros mercados como el brasileño o el argentino y de algunas concesiones que se le habían resistido en el pasado como la red de Montevideo. Incluso algunas empresas de comunicaciones europeas estaban valorando la posibilidad de ceder a las pretensiones de Behn y entrar dentro de su International System como ya estaba ocurriendo en países a ambos lados del Atlántico. No obstante, ya hemos visto que a través de la compra de la Mexican no

consiguió exactamente el monopolio del servicio telefónico nacional, tal y como explicaba a los periodistas y banqueros neoyorkinos, aunque sí una pieza importantísima dentro del negocio de ese país.

La fecha concreta de la compra de la empresa mexicana por parte de la ITT no ha podido ser determinada, pero tuvo que ser necesariamente en agosto de 1925, puesto que el día 20 de ese mes se recibía en España un cablegrama enviado por el propio Sosthenes Behn desde la sede de la multinacional en Nueva York en el que se informaba sobre “la adquisición del control de sus propiedades”. El texto explicaba que la empresa tenía una experiencia en el sistema telefónico mexicano de aproximadamente 20 años y que en aquellos momentos controlaba las redes de la capital y sus alrededores, Querétaro, León, San Luis de Potosí, Saltillo, Monterrey y Victoria⁶⁵⁰.

Además, no sólo había logrado hacerse con la compañía mexicana y con todas sus propiedades, sino que le habían sido otorgadas dos nuevas concesiones por parte del Gobierno. Una le daba derecho a construir y explotar el servicio telefónico interurbano en todo el territorio nacional, lo que implicaba un crecimiento de la sociedad enorme, ya que las necesidades del país en este sentido eran grandes: a estas alturas todavía no se podía conferenciar entre la capital y ciudades tan importantes como Monterrey, Tampico o San Luis de Potosí. El cablegrama de Sosthenes Behn indicaba que los ingenieros de la compañía ya estaban preparando el programa para la reconstrucción y ampliación del servicio interurbano mexicano, que incluía la conexión con la red de la AT&T en Estados Unidos. Con esta nueva licencia la Mexican Telephone and Telegraph lograba una preponderancia clara en el mercado telefónico nacional, ya que contaba con el control de importantes redes municipales y ahora con todo el servicio interurbano.

La otra concesión que había logrado la ITT al adquirir la Mexican era una ampliación de la licencia de la que ya disfrutaba en el Distrito Federal, aunque no se especificaba en qué consistía dicha ampliación. Lo que es seguro es que la Ericsson no tuvo que ver con buenos ojos ni esta nueva concesión en la capital, donde también operaba su propia red, ni por supuesto la compra de la Mexican por parte de la ITT. La

⁶⁵⁰ El Imparcial, 21 de agosto de 1925, p. 2; La Voz, 21 de agosto de 1925, p. 4; La Vanguardia, 27 de agosto de 1925, p. 8; La Industria Nacional, 31 de agosto de 1925, p. 119; Revista Telefónica Española, nº 12, diciembre de 1925, p. 46.

firma sueca tuvo que contemplar con desconfianza el hecho de que Behn consiguiera a la vez el control de su mayor competidora en México y dos licencias tan importantes como las que le había entregado el Gobierno. Daba comienzo de esta forma un nuevo conflicto entre las dos compañías, que se habían enfrentado un año antes por el sistema telefónico español y que seguían librando batallas en varios países europeos para hacerse un hueco en sus mercados, ya fuera como productores de materiales telefónicos o como explotadores de redes. Aunque parece que la ITT partía ahora con ventaja en el negocio telefónico mexicano que podría derivar en un proceso de “monopolio natural”, lo cierto es que la Ericsson supo resistir con tenacidad y no abandonó sus propiedades telefónicas en aquel país. El Gobierno mexicano puso fin a esta pugna cuando en 1947 decidió crear una empresa estatal que se convirtió en la única proveedora de servicios telefónicos (hoy conocida como “Telmex”), para lo cual tuvo que adquirir y fusionar las dos empresas concesionarias que todavía resistían por aquel entonces: la Ericsson y la Mexican de la ITT.

Los periódicos españoles recibieron con gran entusiasmo la noticia de la adquisición de la Mexican por parte de la ITT y de las dos nuevas concesiones logradas por ésta. Recordaban que hacía pocos días también se había anunciado que la multinacional se había hecho con el control de la IVEC y que ésta pretendía construir una fábrica en Madrid y dar empuje a la de Barcelona. De la combinación de todas estas noticias, los periodistas españoles llegaron a la conclusión de que “las fábricas españolas no solamente producirán todos los equipos y aparatos telefónicos necesarios para llevar a cabo el gran programa de construcción de la Compañía Telefónica Nacional de España, sino que también tendrán facilidad para exportar equipos y aparatos telefónicos a otros países, particularmente a la América española”. El cablegrama de Sosthenes Behn no hacía referencia en ningún momento a esta posibilidad, no porque no fuera posible, sino porque posiblemente todavía era pronto para llegar a tales afirmaciones.

3.187. Viernes, 21 de agosto de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁵¹

La única decisión de relevancia que se tomó en esta reunión del Comité fue la autorización otorgada al abogado Francisco Crooke y Campos de Málaga para que comprara en aquella ciudad un solar (o varios agrupables entre sí) para la construcción del nuevo edificio de la compañía. Esta parcela tenía que cumplir las condiciones de no ser menor de 400 metros cuadrados ni mayor de 800 y no superar el precio de 160.000 pesetas. El abogado tenía que encargarse de todo el proceso y de la burocracia implícita, desde las negociaciones iniciales hasta la inscripción de la nueva edificación en el Registro de la Propiedad.

3.188. Jueves, 27 de agosto de 1925

La CTNE adopta el modelo “Rotary” para sus centrales automáticas

La base 15ª del contrato que la CTNE había firmado con el Estado obligaba a la compañía a automatizar, en un plazo de cinco años, las redes urbanas de 17 ciudades españolas importantes, a saber: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Santander, Málaga, Murcia, Vigo, Oviedo, Zaragoza, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Granada, Cartagena, Gijón y Valladolid. Curiosamente, estas 17 grandes urbes se corresponden con las que la CTNE había propuesto en el proyecto de contrato que entregó al Gobierno de Primo de Rivera el día 21 de abril de 1924⁶⁵², aunque en aquella ocasión también se incluía Valencia y San Sebastián. Como sabemos, cuando el convenio definitivo fue firmado en agosto de aquel año, la CTNE no tenía la seguridad de que la adquisición de las redes telefónicas de estas dos ciudades fuera a ser fácil (una en manos del ayuntamiento, la otra en manos de la Ericsson), así que fueron discretamente borradas del contrato, de tal forma que no se comprometían a nada que no estaban seguros de poder cumplir.

Como sabemos, durante estos doce meses la CTNE había empleado muchos recursos, tanto humanos como económicos, para adquirir excelentes solares y edificios en estas ciudades donde poder instalar las nuevas centrales automáticas. Las

⁶⁵¹ Acta nº 54, 21 de agosto de 1925, libro 1, pp. 70-71.

⁶⁵² Véase crónica del día 21 de abril de 1924.

actas del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración dan cuenta de cómo la compañía fue adquiriendo poco a poco propiedades en la mayoría de estas ciudades y de los planes para la construcción de inmuebles en los terrenos adquiridos. No obstante, faltaba lo más importante: decidir qué modelo de central automática se iba a instalar en esos edificios destinados a albergarlas. En el año que habría transcurrido desde la firma del contrato, la compañía todavía no se había pronunciado a este respecto, a pesar de haber mencionado en numerosas ocasiones su intención de iniciar cuanto antes el proceso de automatización de las redes urbanas, como por ejemplo en la memoria de su primer ejercicio social presentada en marzo de 1925. Por lo tanto, los pedidos de materiales y equipamiento para centrales seguían sin realizarse.

El hecho de que la Dirección de la empresa estuviera tardando tanto en decidir sobre un asunto de tanta significancia empezaba a preocupar incluso a algunos miembros del Consejo que de normal no tenían ninguna reflexión importante que aportar en las reuniones, como era el caso del Vicepresidente Julián Cifuentes. En una sesión del Comité Ejecutivo a finales de abril, éste preguntó a Proctor si se habían hecho ya los pedidos para las centrales automáticas. La contestación sirvió para dar largas y cerrar el tema con la habitual cantinela sobre la importancia de la producción nacional⁶⁵³.

El Coronel Behn se ocupa con preferente atención de este asunto para la favorable y total resolución del mismo, ya que tiene muy presente la necesidad de atender el criterio general establecido por esta Compañía respecto al desarrollo e incremento de la producción nacional.

Sin embargo, la atención de Behn no estaba puesta en la producción nacional, sino en la adquisición de la IWECC, que, ya de paso, contaba con una fábrica en Barcelona. Parece evidente que tanto Proctor como Behn estaban esperando a que se cerrara el acuerdo con la AT&T para encargar las centrales automáticas que ésta producía en su fábrica de Amberes: el modelo "Rotary". No se tardó mucho en hacer pública la decisión.

El día 27 de agosto de 1925, casi un año después de que se firmara el contrato con el Estado, la CTNE informaba de que se adoptaba el sistema de conmutación

⁶⁵³ Acta nº 37 del Consejo de Administración, 29 de abril de 1925, libro 1, p. 50.

Rotary Nº 7-A para automatizar las redes urbanas españolas. En un artículo de 1928, la ITT explicaba que la decisión se había tomado “considerando todos los factores que confluían”⁶⁵⁴, aunque desconocemos de qué factores se trataban, ya que la compañía no presentó ningún informe del estudio. En un libro que la CTNE publicó, también en 1928, se decía que se había realizado un “estudio detenidísimo de todos los sistemas automáticos disponibles en el mercado”, citando varias ventajas del modelo Rotary frente a los de la competencia⁶⁵⁵.

No hay pruebas de que esta decisión se tomara única y exclusivamente para “robustecer la integración vertical del incipiente negocio telefónico de la ITT”, aunque es evidente que esta determinación aportó enormes beneficios al nuevo negocio de fabricación de centrales automáticas que la International acababa de inaugurar. Sólo en cinco años, la CTNE estaba obligada a contratar como mínimo 17 centrales y varias subcentrales para las ciudades incluidas en el contrato con el Estado. Pero más adelante tendría que seguir comprando más y más centrales para abastecer al resto del sistema telefónico español. Como los hechos posteriores han demostrado, la intención de Sosthenes Behn no era limitarse a las urbes incluidas en el convenio, ya que imprimió un ritmo tal a la automatización que en cinco años ya se habían instalado centrales Rotary en 22 ciudades españolas⁶⁵⁶, cinco más de las previstas.

Cabe destacarse en este punto que en los concursos que habían organizado el ayuntamiento de San Sebastián y la Mancomunidad de Cataluña para la automatización de la ciudad donostiarra (y sus alrededores) y el municipio de Balaguer (en Lérida) no se había optado en ningún caso por el modelo Rotary de la IWECC. San Sebastián optó por el modelo AGF de la Ericsson y la Mancomunidad por un sistema “paso a paso” de la alemana *Siemens & Halske*. En el caso de esta última, la decisión se había tomado sobre todo por el precio de las ofertas, ya que el modelo Rotary costaba el doble que el de la Siemens. De hecho, este sistema de conmutación automática no estaba teniendo excesivo éxito hasta el momento. Incluso cuando la IWECC pertenecía a la AT&T, ésta no elegía el modelo Rotary para sus centrales en territorio estadounidense, sino que se decantaba por el sistema Strowger de *Aulteco*. No fue hasta que la ITT se hizo con la IWECC cuando el modelo Rotary comenzó a

⁶⁵⁴ McKim-1928, p. 128.

⁶⁵⁵ Yuste-2004, p. 326.

⁶⁵⁶ Yuste-2004, p. 325.

despegar, gracias sin duda a los encargos de centrales automáticas que las filiales de la ITT, como la CTNE, realizaban a su nuevo “brazo productor”.

A pesar de que las primeras centrales automáticas españolas se habían decantado por otros modelos (tras la realización de unos verdaderos estudios comparativos) y que la AT&T tampoco había optado por el sistema Rotary, la CTNE no dudó en apostar por este modelo para todas las ciudades españolas. En este sentido, Pérez Yuste apunta a lo evidente: “tal decisión se trató, en realidad, de una imposición de la ITT que pretendía con ello garantizar una cartera de pedidos para su fábrica de Amberes, recientemente adquirida”⁶⁵⁷.

3.189. Sábado, 29 de agosto de 1925

La Dirección de la empresa autoriza la formación del Comité Paritario

Durante el mes de agosto de 1925 había quedado abierto el plazo de información pública para que cualquier persona o entidad acudiera a informar ante el Ministerio de Trabajo acerca de la formación del Comité Paritario Nacional de Teléfonos. La compañía lo hizo a través de un escrito presentado por Valentín Ruiz Senén el día 29 de agosto. La nota, muy breve, manifestaba que la Dirección de la CTNE daba el visto bueno a la nueva asociación e instaba al Subsecretario del Ministerio a que procediera a la formación del Comité Paritario Nacional de Teléfonos⁶⁵⁸.

3.190. Lunes, 31 de agosto de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁶⁵⁹

El Presidente se refirió en primer lugar a la satisfacción que a todos producía la llegada de Sosthenes Behn a Europa y la noticia de que en breve vendría a España. Además hacía mención a las “importantes gestiones realizadas en América por dicho Sr. Behn”, que sin duda serían las dos adquisiciones recientes de la ITT: la Mexican Telephone and Telegraph Co. y la International Western Electric Company. El Marqués

⁶⁵⁷ Yuste-2004, p. 331. Para profundizar sobre el proceso de automatización de las ciudades españolas se puede consultar el capítulo 8.1 de la tesis de Antonio Pérez Yuste.

⁶⁵⁸ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, pp. 42-43.

⁶⁵⁹ Acta nº 18, 31 de agosto de 1925, libro 1, pp. 39-41.

de Urquijo también dijo que estas gestiones se habían llevado a cabo “en relación a los intereses de nuestra Compañía, que con tanto celo y entusiasmo defiende y representa en todo momento”. Una vez más parece un poco exagerado afirmar que el Coronel se había hecho con el control de la Mexican y de la IVEC mirando por el bien de la Telefónica Nacional, a la que con tanto celo parecía defender allende los mares. Es cierto, no obstante, que cualquier beneficio o acción positiva para la International implicaba indirectamente mejoras para cualquier empresa de su órbita.

Valentín Ruiz Senén informó al Consejo del acuerdo que se había adoptado de entregar sendos cheques de 5.000 pesetas a los arquitectos que habían participado en el tribunal del concurso de proyectos para el edificio de Barcelona, Modesto López Otero y Enrique Sagnier i Villavecchia, como muestra de gratitud por “su acertada y activa intervención”. Éstos habían rechazado pasar nota de los honorarios que podían haber devengado por su participación en el jurado, por lo que la Dirección había tomado la determinación de entregar esta cantidad a cada uno. También se aprobó pagar 5.000 pesetas en concepto de comisión a un tal señor Escartín, en atención a las gestiones realizadas en la negociación para la compra del solar de la Gran Vía.

El Marqués de Urquijo expresó su satisfacción, otra vez, por las palabras que le había dirigido el príncipe Alfonso de Borbón y Battenberg con respecto a las conferencias telefónicas que había realizado durante su reciente viaje a Asturias. Gumersindo Rico manifestó que las autoridades de la región también le habían felicitado por “la buena organización de dichos servicios y el celo demostrado por los funcionarios”. La Revista Telefónica Española dedicó un amplio reportaje en su edición del mes de septiembre a este viaje del Príncipe de Asturias a aquella región, que se aprovechó para inaugurar la nueva central de Cangas de Tineo (hoy Cangas del Narcea) Durante aquel acto, que tuvo lugar el día 29 de agosto de 1925, pudo el heredero al trono conversar con Alfonso XIII, que se encontraba en Madrid. Al finalizar la conferencia telefónica, el príncipe, que tenía 18 años, transmitió a los presentes un mensaje de su padre: “Dice el Rey que si toda España va a tener una comunicación tan perfecta como ésta, el éxito de la Compañía Telefónica será rotundo”⁶⁶⁰.

Valentín Ruiz Senén se refería entonces a la inspección que proyectaba la Dirección General de Comunicaciones y que se llevaría a cabo por interventores o delegados en los distintos distritos de la compañía. El Vicepresidente había estudiado

⁶⁶⁰ Revista Telefónica Española, nº 9, septiembre de 1925, pp. 4-7.

el contrato firmado hacía un año y entendía que no se podía reconocer otra inspección oficial del Estado que no fuera la ejercida por los tres Delegados nombrados por el Gobierno. Miguel Manella, representante del Ministerio de la Guerra, coincidía con las apreciaciones de Ruiz Senén y entendía que toda intervención oficial debía ejecutarse a través de la Delegación oficial a la que él pertenecía, que por supuesto actuaba dentro de la mayor neutralidad. Se hizo constar en acta el criterio aprobado por la compañía, aprobado por el Consejo y ratificado por los Delegados oficiales del Estado, no reconociendo la función de ningún inspector o interventor que pudiera nombrarse para examinar la actuación de la compañía.

Esta decisión fue, lo que se podría decir, “un puñetazo en la mesa” del Consejo de Administración de la CTNE frente a las aspiraciones del Director General de Comunicaciones de realizar inspecciones en la empresa. Quizá ahora, un año después, Tafur Funés comenzaba a ser consciente de los términos tan beneficiosos para la compañía en los que se expresaba el contrato firmado. A la vez, se daría cuenta de la situación de desprotección e incapacidad de actuación en la que quedaba el Estado, que ni siquiera permitía a la Dirección General de Comunicaciones, que en el fondo seguía siendo la propietaria última de las redes, realizar una simple inspección en los centros telefónicos. Casi cualquier acción que quisiera tomar el Gobierno en relación con la Telefónica se iba a encontrar con alguna base del contrato que lo impedía, como en este caso.

Por supuesto, siempre quedaba la intervención de los tres representantes del Estado en el Consejo de Administración, en los que se debería poder confiar para atender a los intereses generales del país; pero a estas alturas ya ha quedado demostrado que su participación en la compañía consistía en aprobar todas las decisiones que salieran de la Dirección sin realizar ninguna objeción. A veces daba la sensación de que estos tres Delegados asistían a las reuniones del Consejo como un “divertimento”, más que como una obligación de extrema importancia para el bien nacional. Éste fue el ejemplo definitivo de que la Delegación oficial no tenía ninguna intención de enfrentarse a la Dirección de la compañía, al no poner ninguna pega a que se denegara una inspección de la Dirección General en los centros telefónicos, escudándose en que su intervención en el Consejo ya era suficiente para defender los intereses del Estado.

Por último, no se entiende tampoco como la compañía pudo negarse tan en rotundo a dicha intervención, puesto que nunca dejaron de defender la rectitud e

integridad con la que siempre se actuaba en la prestación del servicio telefónico, cumpliendo en todo momento con el contrato firmado con el Estado.

3.191. Martes, 1 de septiembre de 1925

Los trabajadores solicitan se mantenga el sueldo a los llamados a filas

El recrudecimiento de la guerra del Rif estaba provocando que muchos españoles estuvieran siendo llamados a filas para participar como soldados en la campaña militar en Marruecos. En estos momentos el general Primo de Rivera se encontraba ultimando su golpe definitivo a las fuerzas rifeñas: el día 8 de septiembre de 1925 se produciría el desembarco de Alhucemas, que propiciaría el fin de la guerra. En el contingente participaron 13.000 soldados españoles, un número elevadísimo, lo que provocó que incluso fueran llamados a filas algunos hombres que ya habían cumplido con sus compromisos miliares en aquella contienda.

Muchos trabajadores de la Compañía Telefónica Nacional de España ya estaban siendo requeridos por el Ejército para desplazarse a África, lo que provocaba que tuvieran que abandonar su puesto de trabajo de manera temporal. En vista de esta situación, la Asociación de Empleados de la CTNE envió una carta al Vicepresidente Lewis J. Proctor el día 1 de septiembre para que todos los llamados a filas mantuvieran su sueldo mientras tuvieran que cumplir con sus obligaciones militares. En esta solicitud, Luis Alcaraz recordaba que en el año 1921 la Compañía Peninsular de Teléfonos ya había tomado esta decisión a favor de sus empleados y que lo más razonable era no desviarse de esta política. También apelaba al “afecto de la compañía a su personal” y al patriotismo de la misma, a fin de hacer “menos penosa la campaña y no dejar en desamparo a sus familias”⁶⁶¹.

3.192. Miércoles, 2 de septiembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁶²

Comenzaba la reunión con una nueva mención a la necesidad de conocer detalladamente la situación económica de la compañía, conociendo todos los gastos

⁶⁶¹ Revista Telefónica Española, nº 9, septiembre de 1925, p. 43.

⁶⁶² Acta nº 55, 2 de septiembre de 1925, libro 1, pp. 71-72.

de explotación y primer establecimiento, tal y como ya se había insistido en anteriores ocasiones. Se acordó reiterar estos deseos al Departamento de Intervención General para que procurara preparar dichos estados de cuentas lo antes posible.

El Subsecretario del Ministerio de la Gobernación había dirigido una solicitud a la Dirección de la compañía en la que solicitaba la franquicia del servicio telefónico para la Guardia Civil. Ante esta petición, el Comité decidió contestar inmediatamente, pero manifestando que no se podía resolver la cuestión antes de someterla a la consideración del Consejo de Administración de la empresa y a la Delegación oficial del Gobierno. Según las bases del contrato con el Estado, era necesario contar con la aprobación de los Consejeros Delegados para resolver un asunto de tanta importancia como el que aquí se planteaba. Por ello quedaba pospuesta la decisión definitiva hasta la siguiente reunión del Consejo que se celebraría a finales de mes.

Por último también se sometía a la consideración del Comité una propuesta de contrato de publicidad presentado por los periódicos La Libertad e Informaciones. Se acordó rechazar esta proposición “en atención a que el criterio de esta Compañía debe ser el de no ligar su actuación en ese sentido [...] ya que debemos tener la más absoluta libertad de acción para llevar a efecto la publicidad en todo momento con arreglo a las condiciones que a nuestros intereses convengan”.

3.193. Domingo, 6 de septiembre de 1925

Los sueldos de los llamados a filas

Como ya hemos explicado, la guerra del Rif estaba provocando que muchos españoles fueran llamados a filas para participar como soldados en la campaña militar, incluso por segunda vez. En vista de la necesidad de enviar a África a gran cantidad de hombres, pero consciente también de los inconvenientes que eso suponía para los reclutados, el marqués de Magaz, Presidente interino del Directorio, publicó un Real Decreto el día 6 de septiembre de 1925 para regular los sueldos de los funcionarios que tenían que abandonar su puesto de trabajo por segunda vez⁶⁶³. Así, todos los trabajadores del Estado que fueran enviados a la campaña militar en Marruecos y que

⁶⁶³ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 6 de septiembre de 1925. Gaceta de Madrid, 8 de septiembre de 1925, nº 251, pp. 1439-1440.

ya hubieran sido llamados a filas previamente conservarían su sueldo íntegro durante el tiempo que durara su participación en el conflicto.

La Asociación de Empleados de la CTNE, que ya había mandado una solicitud a Lewis J. Proctor para que se mantuviera el sueldo de todos los reclutados leyó con gran interés este Real Decreto y sólo cuatro días después volvió a insistir en su petición. El día 10 de septiembre, Luis Alcaraz envió otra carta, esta vez dirigida a Logan N. Rock, en la que le recordaba que Proctor todavía no le había respondido a su solicitud de 1 de septiembre. Pero además se hacía eco de la publicación en la Gaceta de Madrid de este Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar concediendo este derecho para “nuestros queridos compañeros funcionarios del Estado” y volvía a mencionar que la Peninsular también había tomado esta decisión en septiembre de 1921. Por todo ello se insistía en la petición de la Asociación de que los empleados que fueran llamados a filas mantuvieran los sueldos íntegros durante el tiempo que durara su estancia en África, tanto para aquellos que fueran convocados por primera vez como para los que tenían que cumplir con esta obligación de nuevo.

3.194. Lunes, 14 de septiembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁶⁴

Como sabemos, a principios de mes la Asociación general de Empleados y Obreros había dirigido a Proctor una carta en la que le solicitaban que los trabajadores que fueran llamados a filas mantuvieran el sueldo. En vista de que el Vicepresidente no contestaba a su petición, mandaron otra misiva a Logan N. Rock, Inspector General, en los mismos términos. En esta reunión del Comité Ejecutivo se estudió detenidamente la solicitud formulada por la asociación y se acordó conceder el sueldo íntegro que cada trabajador tuviera en caso de tener ser llamado a filas por motivo de la guerra del Rif. Igualmente serían abonadas íntegramente todas las horas que aquellos empleados tuvieran que dedicar a sus labores militares cuando hubieran sido requeridos por el Ejército pero en su lugar de residencia habitual. Entendía la compañía en este caso que no sería necesario abandonar el puesto de trabajo de una manera permanente como en el caso de tener que desplazarse a África, pero que las obligaciones militares les obligarían a ausentarse durante unas horas.

⁶⁶⁴ Acta nº 56, 14 de septiembre de 1925, libro 1, pp. 72-74.

Por último, se acordó que la CTNE conservaría en sus plantillas a todo el personal que se viera forzado a abandonar su puesto o cargo por estos motivos, concediéndoles el derecho de reingresar cuando hubieran cumplido los deberes a los que les obligaba el Estado. Todas estas decisiones fueron comunicadas en un escrito redactado y firmado por Gumersindo Rico el día 16 de septiembre de 1925 y que fue hecho público para el conocimiento de todos los trabajadores⁶⁶⁵.

Una vez zanjado el asunto de los sueldos para el personal llamado a filas, el Presidente preguntó por la marcha de las obras y las nuevas construcciones de la compañía. Proctor expuso entonces con todo detalle la labor en la que se encontraba inmersa la empresa y manifestaba su esperanza de que a lo largo del mes de octubre quedaran totalmente terminadas las nuevas líneas interurbanas entre Madrid y Valencia y entre Madrid y Córdoba. Pensaba incluso que estas obras podrían terminarse antes, pero prefería no ponerlas en servicio hasta que no quedara inaugurado el nuevo cuadro interurbano que se estaba instalando en la calle Hortaleza, con el fin de que el personal realizara algunas prácticas con el mismo antes de que el servicio se pusiera en funcionamiento.

Proctor también informaba al Comité sobre la reunión que había celebrado en París con Sosthenes Behn, motivo por el que, entendemos, transcurrieron dos semanas entre la última sesión del Comité Ejecutivo y ésta. Parece que Proctor viajó a Francia para tratar en persona con el Coronel sobre la reciente adquisición de la IWECC por parte de la ITT y las implicaciones que eso tenía en la Compañía Telefónica Nacional. Ya hemos visto como a finales de agosto la empresa emitió un comunicado en el que por fin se decidía por un sistema de central automática para las ciudades españolas, que precisamente se trataba de un modelo de la IWECC. En esta reunión del Comité, Proctor explicó las gestiones realizadas en París junto con Behn para la adquisición de todo el material necesario para la instalación del servicio automático en Madrid, que, según su opinión, estaría en funcionamiento en menos de un año. Expuso a grandes rasgos el proyecto que se iba a seguir para automatizar la telefonía de toda la ciudad en tan poco tiempo. La central quedaría instalada en el nuevo solar de la Gran Vía, en una construcción provisional erigida al efecto, y que años más tarde quedaría totalmente sustituida por el edificio definitivo y por una central más grande. Además se instalarían dos subcentrales de 5.000 líneas cada una: en la calle

⁶⁶⁵ Revista Telefónica Española, nº 9, septiembre de 1925, p. 44.

Hermosilla⁶⁶⁶, en el inmueble que ya estaba en construcción en el solar adquirido unos meses antes, y otra en la calle Jordán, en el edificio de la antigua central manual una vez estuviera éste perfectamente reformado y acondicionado para la instalación del sistema automático.

Igualmente daba cuenta Lewis Proctor de haberse iniciado la apertura de zanjas para la canalización subterránea de cables telefónicos y de su propósito de intensificar estos trabajando organizando turnos nocturnos para las brigadas que estaban encargadas de las tareas. Se consideraba esto necesario para cumplir los plazos que se habían propuesto para la instalación del sistema automático en la ciudad. Es importante apuntar en este momento que la base 15ª del contrato con el Estado no sólo obligaba a la compañía a automatizar las redes telefónicas de 17 ciudades españolas, también imponía que la distribución de las líneas fuera subterránea en las partes céntricas de las poblaciones. Lo más lógico era realizar las dos tareas, automatización y soterramiento, de una sola vez.

En otro orden de cosas totalmente distinto, el Subdirector del Distrito 7º, Luis Alonso Pérez, había realizado una consulta sobre donativos y subvenciones de la compañía para fiestas, obras benéficas, suscripciones, etc. El Comité acordó responder indicándole que no existían normas fijas que regularan estos asuntos, por lo que cada caso se dejaba siempre a juicio de la Dirección de la compañía, siguiendo también los informes y recomendaciones del Subdirector del Distrito implicado en el evento en cuestión.

Antes de cerrar la sesión, el Comité reconoció la necesidad de establecer y unificar un criterio general para las relaciones de la compañía con la prensa, por lo que consideraban preciso elaborar un reglamento al respecto y designar a las personas adecuadas para tratar con los periódicos. También expresaron su deseo de conocer la organización del Departamento de Publicidad de la compañía.

⁶⁶⁶ En el acta pone que la central automática estaría en la calle Hortaleza, pero evidentemente se trata de un error del Secretario, que confundiría esta calle con la de Hermosilla. La central provisional que ya se estaba construyendo en Hortaleza era manual y además estaba destinada sobre todo a servir como cuadro para líneas interurbanas, aunque también diera servicio a algunos abonados de la zona circundante.

3.195. Jueves, 17 de septiembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁶⁷

El Comité Ejecutivo era consciente del problema que en breve se le iba a presentar a la compañía con respecto a la plantilla de telefonistas cuando el sistema automático fuera instalado y estuviera en funcionamiento. El caso de Madrid era muy preocupante, ya que se trataba de uno de los primeros centros urbanos donde se iba a emprender estas reformas y el número de telefonistas superaba las cuatrocientas. Por ello, y para no agravar el conflicto, se decidió no contratar a ninguna telefonista más al servicio de la compañía, ni tan siquiera para efectuar las prácticas.

Según queda reflejado en esta acta, parece que algunos empleados de la compañía gozaban de ciertos “beneficios concedidos respecto a las tarifas del servicio urbano”. En esta reunión se decidió incluir también en ese grupo de trabajadores con descuentos en telefonía a los abogados consultores de la compañía. Antes de cerrar la reunión, Gumersindo Rico daba lectura a una carta recibida del arquitecto Enrique Sagnier en la que agradecía las deferencias y atenciones que la compañía le había brindado, indicando la recepción de las 5.000 pesetas que se le habían entregado en consideración por su trabajo como miembros del jurado que calificó los proyectos del edificio de Barcelona.

3.196. Domingo, 20 de septiembre de 1925

Inauguración de la línea Madrid-Tarancón

Las obras de la línea interurbana Madrid-Valencia habían dado comienzo el día 3 de mayo de 1925 y a mediados de septiembre ya se encontraban muy avanzadas. El tramo Madrid-Tarancón fue inaugurado el día 20 de septiembre en un acto al que asistieron todas las autoridades de esta localidad conquense⁶⁶⁸.

Durante aquellos primeros años, estos actos eran siempre muy ceremoniosos e incluían toda una serie de solemnidades que se repitieron a lo largo y ancho de la geografía española: los discursos de las autoridades locales y de los representantes

⁶⁶⁷ Acta nº 57, 17 de septiembre de 1925, libro 1, pp. 74-75.

⁶⁶⁸ Revista Telefónica Española, nº 9, septiembre de 1925, pp. 9-10.

de la compañía subrayando la importancia de la telefonía en la vida moderna, el desfile desde la alcaldía a la oficina telefónica con la banda municipal al frente, la inauguración de la central mediante una simpática conversación telefónica, los brindis, el ágape ofrecido por las autoridades, los mensajes de felicitación, el baile nocturno y otros rituales⁶⁶⁹.

La presencia de una autoridad religiosa era siempre necesaria en toda inauguración de la Compañía Telefónica Nacional de España ya que el protocolo establecía que la central y el resto de equipos tenían que ser bendecidos previamente. Si el acto tenía lugar en una capital importante, entonces hacia los honores el obispo de la diócesis correspondiente; sin embargo, si se trataba de la inauguración de la central en algún municipio pequeño, bastaba entonces con la consagración del párroco del pueblo.

Ese día, los habitantes de la localidad podían realizar conferencias telefónicas de manera gratuita y, por supuesto, todo esto quedaba siempre reflejado con palabras altisonantes en un artículo de la siguiente edición de la Revista Telefónica Española.

3.197. Jueves, 24 de septiembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁷⁰

En esta reunión se trató sobre la adquisición de un solar en Granada, propiedad de un tal señor Moreno Ágreda, que parecía estaba adoptando una actitud de enfrentamiento que no gustaba a la Dirección de la compañía. El encargado de las negociaciones por parte de la compañía era un abogado llamado Martín Flores. El Comité decidió “contribuir con una suma” de hasta 20.000 pesetas para ayudar a que el señor Moreno Ágreda cambiara de parecer con respecto a la compra, pero “siempre en el caso de que la Compañía quede absoluta y totalmente desligada de todo compromiso moral y material con el referido señor”.

El Marqués de Urquijo expresó su deseo de ver separados cuanto antes los servicios de la compañía de las oficinas telegráficas en todas las localidades en las que todavía se encontraban instalados en las mismas dependencias. Proctor

⁶⁶⁹ Yuste-2004, pp. 340-341.

⁶⁷⁰ Acta nº 58, 24 de septiembre de 1925, libro 1, pp. 75-76.

respondía asegurando que el traslado se realizaría, según sus cálculos, durante el mes de octubre, excepto en los casos de León y Sevilla, “en cuyos Centros por especiales circunstancias y consideración aún se demorará un poco más el traslado”.

3.198. Viernes, 25 de septiembre de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁶⁷¹

El único asunto de importancia que se debatió en esta sesión del Consejo de Administración fue una propuesta del Delegado del Ministerio de Hacienda con respecto al canon del 4% de los beneficios anuales que la compañía estaba obligada a pagar al Estado. Carrillo de Albornoz planteó la posibilidad de que la participación del Estado correspondiente al primer semestre del año 1925 fuera ingresada ya en las cuentas del Tesoro público, aunque fuera de manera aproximada. Parece que durante aquel primer año de la concesión del sistema telefónico nacional, el Gobierno se había dado cuenta de los ingresos que el Cuerpo de Telégrafos había dejado de cobrar por la explotación de sus propiedades telefónicas. Además, teniendo en cuenta que el pago del canon al Estado se realizaba de manera anual, el Erario público notaría ya, a estas alturas del año, la carestía de una suma tan importante de dinero; de ahí que el Delegado de Hacienda intentara que la CTNE ingresara, por lo menos, una parte de lo que correspondía al Estado, para disponer de líquido.

El Consejo respondía diciendo que en principio no se negaba a la proposición del “digno Compañero representante del Gobierno”, aunque consideraba necesario estudiar este asunto con detenimiento, “dada la importancia del caso y el justificado temor de hacer concesiones de tal naturaleza que puedan determinar una posibilidad de perjuicio más o menos remoto e indirecto a nuestros intereses”. Es decir, que independientemente de las necesidades del Tesoro público, la CTNE no estaba segura de poder acceder a la propuesta por un posible perjuicio remoto e indirecto a sus intereses. Carrillo de Albornoz mostró su conformidad con la respuesta, ya que más no podía hacer: el contrato firmado entre la compañía y el Estado era también muy claro en este punto, que, otra vez, era claramente favorable a la Telefónica.

También insistió el Delegado de Hacienda en la necesidad de mejorar los informes de Tesorería para que fueran más detallados y permitieran así conocer mejor

⁶⁷¹ Acta nº 19, 25 de septiembre de 1925, libro 1, pp. 41-43.

la marcha de la compañía. El Consejo consideró “muy atendible la referida petición” y prometió tenerlas en consideración, aunque este tipo de compromisos también comenzaban a carecer de sentido, ya que esta solicitud se venía haciendo desde hacía meses y todavía no había sido satisfecha por la Dirección de la CTNE.

3.199. Jueves, 1 de octubre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁷²

Valentín Ruiz Senén aprovechó esta sesión para insistir en sus ya habituales reivindicaciones con respecto a la marcha de la compañía. Por un lado, consideraba de la mayor urgencia reorganizar la plantilla según el plan presentado por Proctor un tiempo atrás, insistiendo también en no contratar más personal, por el momento, hasta que todos los trabajadores estuvieran debidamente colocados en el puesto de trabajo que les correspondía. También solicitaba que los informes de gastos de explotación y de primer establecimiento que se presentaban todos los meses al Consejo de Administración se detallaran adecuadamente para conocer con toda claridad los conceptos en los que se gastaba cada suma de dinero. Pedía a la Dirección que prestara su atención a estas dos cuestiones para que pudieran estar resueltas lo antes posible.

El Comité acordó participar en los festejos que estaba organizando el ayuntamiento de Madrid con motivo del desfile militar de las tropas españolas que habían participado en el desembarco de Alhucemas, que se iba a celebrar el día 10 de octubre. Para la organización del evento, el consistorio había solicitado el apoyo de varias empresas de la ciudad. En esta reunión se decidió contribuir con 1.000 pesetas como donativo para este evento y además iluminar el edificio que ocupaba la sede central de la empresa en el número 5 de la avenida Conde de Peñalver. La Revista Telefónica Española, en su edición de octubre de 1925, publicaba una foto de la parte superior del inmueble decorada con varios cables llenos de bombillas⁶⁷³.

Antes de levantar la sesión, Ruiz Senén dio cuenta de una solicitud de trabajo que había recibido y que a su vez proponía a la consideración del Comité Ejecutivo. Parece que en el transcurso de la reunión había olvidado sus manifestaciones

⁶⁷² Acta nº 59, 1 de octubre de 1925, libro 1, pp. 76-77.

⁶⁷³ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, p. 32.

iniciales, ya que al principio había hecho un alegato en contra de la contratación de más empleados hasta que la plantilla estuviera totalmente organizada. No obstante, esta solicitud no procedía de cualquier persona, o mejor dicho, de cualquier familia. Ruiz Senén se refería a los deseos del señor Gómez-Acebo para ingresar en la compañía como subinspector, que sin duda tenía que tratarse de una persona de gran importancia puesto que su contratación era discutida en una reunión del Comité Ejecutivo. Además, el acta de la reunión también hace referencia a la “calidad de personas que en el asunto intervienen”. Conocido el apellido, la categoría que esta persona parecía tener y el puesto que solicitaba cubrir, nuestra hipótesis es que se trataba de Manuel Gómez-Acebo y Modet, tercer hijo del III Marqués de Cortina y abogado de profesión.

José Gómez-Acebo y Cortina (1860-1932), III Marqués de Cortina, fue un abogado madrileño que se dedicó a la política, ocupando escaño en el Congreso de los Diputados en varias legislaturas, y alcanzó carteras ministeriales en dos ocasiones: fue Ministro de Fomento en 1919 y Ministro de Marina en 1921. También fue presidente del Banco Español de Crédito entre 1918 y 1930. José Gómez-Acebo tuvo tres hijos varones: Juan, que heredó el marquesado, Jaime y Manuel.

En el acta de la reunión, el Comité acordó tomar en consideración “las referidas indicaciones” y expresó su interés para buscar la solución más favorable al asunto. Finalmente se decidió que Gómez-Acebo se entrevistara con Lewis J. Proctor y que éste decidiera “de conformidad con las circunstancias que por todos conceptos puedan concurrir en el presente caso”. En caso de confirmarse que el solicitante de empleo fuera efectivamente Manuel Gómez-Acebo⁶⁷⁴, no es de extrañar que el Comité prestara tanta atención al asunto y anduviera con pies de plomo antes de tomar cualquier decisión. El marquesado de Cortina gozaba de gran prestigio en la sociedad española de la época y sus influencias políticas y financieras seguían siendo muy significativas. No en vano, el padre del interesado era por aquella época el presidente del Banco Español de Crédito.

⁶⁷⁴ Manuel Gómez-Acebo y Modet (1889-1936) casó con Mercedes Cejuela Fernández y sólo tuvieron una hija, Margarita Gómez-Acebo (1935) La vida de Margarita es mucho más conocida: se casó en 1962 con Simeon Borisov (1937), Simeón II, zar de Bulgaria hasta 1946 y más tarde Primer Ministro de ese país entre 2001 y 2005.

3.200. Viernes, 2 de octubre de 1925

El Marqués de Urquijo felicita a Primo de Rivera por sus éxitos militares

El Presidente de la CTNE envió el día 2 de octubre de 1925 un telefonema al general Primo de Rivera en el que le felicitaba, en nombre del Consejo y de los más de 6.500 empleados de la compañía, por las recientes victorias en Marruecos. En este despacho también le aplaudía por haber “conseguido dar a la historia patria el más alto ejemplo de heroísmo ocupando el territorio de Axdir, madriguera del rebelde Abd-el-Krim”, y se sumaba al “regocijo nacional saludando al victorioso Ejército”⁶⁷⁵.

3.201. Lunes, 5 de octubre de 1925

Reuniones del Pleno de la Junta directiva de la Asociación de Empleados

La Junta directiva de la Asociación de Empleados celebró entre los días 5 y 6 de octubre de 1925 sus reuniones del Pleno, contando con la presencia del Comité Ejecutivo y de los vocales de todos los distritos de la compañía⁶⁷⁶, que habían sido elegidos a principios de verano por votación de los trabajadores de cada región. Luis Alcaraz, en su calidad de Presidente, abrió la sesión explicando brevemente la historia de la asociación y expresando su satisfacción por haber conseguido que el 90% de los empleados se hubiera afiliado ya (a finales de octubre eran 5.603, de unos 6.300). Añadía que, toda vez que los trabajos organizadores ya habían finalizado, era necesario iniciar “una marcha más activa y estudiar las aspiraciones del personal para elevarlas a la Compañía”. Además, los vocales de los distritos acordaron ratificar los cargos del Comité Ejecutivo de la asociación, permitiendo que continuaran desempeñando sus cargos hasta la próxima Junta general reglamentaria.

A continuación fueron debatidas las aspiraciones que habían de elevarse a la Dirección de la compañía cuanto antes. En este sentido fue aprobada una lista de trece peticiones de lo más variada: abono de una gratificación especial por las fiestas navideñas, creación de una Escuela de Aprendices, aumentos de sueldos varios, disfrute de las vacaciones en cualquier época del año, mejoras en las dietas de salida del personal, ampliación de la edad para el ingreso del personal femenino a más de 25

⁶⁷⁵ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, pp. 33-34.

⁶⁷⁶ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, pp. 3-6.

años, etc. También se aprobó la creación de otros organismos dependientes de esta asociación, como una cooperativa de consumo o un colegio de huérfanos para hijos de empleados. También se estudió el proyecto de fondo benéfico que había desarrollado la Dirección de la compañía, siguiendo las aspiraciones de Sosthenes Behn, y se acordó que se solicitaran cuatro modificaciones en su reglamento.

Cuando las sesiones del Pleno hubieron finalizado, el Vicepresidente Lewis J. Proctor y el Inspector General, Logan N. Rock, hicieron una visita a los miembros de la Asociación. Proctor les refirió una vez más el interés de la Compañía por la organización de trabajadores, “estando dispuesta a ayudarla y favorecerla en cuanto sea preciso para su buena marcha y prosperidad”. También se mostró sorprendido por la enorme acogida de la asociación por parte de los empleados, que se habían afiliado en gran número, “sin presión alguna por nuestra parte, pues la Compañía no ha obligado ni hecho gestión para que se inscribieran; todos lo han efectuado voluntariamente”. No hay duda que los trabajadores se habían apuntado a la Asociación de Empleados de manera masiva, que había llegado a contar con la casi totalidad de la plantilla en su lista de socios. No obstante, quizá Proctor se olvidaba mencionar que un motivo que indudablemente animaría a los trabajadores a afiliarse era la ausencia de cuotas. La empresa era la que corría con todos los gastos de la organización e iba a sufragar el fondo benéfico que se proponía poner en marcha. Para los empleados de la compañía, formar parte de la Asociación sólo tenía ventajas; si exceptuamos el hecho de que en realidad formaban parte de un “sindicato” controlado por la propia compañía. De esta forma la Dirección de la CTNE conseguía lo que había pretendido desde el principio: que las reclamaciones fuera conducidas por la Asociación que ellos mismos habían creado, evitando así conflictos derivados de protestas que escaparan de su control.

En respuesta a las amables palabras de Proctor, Luis Alcaraz hizo constar que “gran parte de la labor realizada se ha podido conseguir gracias a la ayuda y cariño con que la Compañía ha acogido cuantos asuntos se le han sometido, teniendo la convicción que continuará prestando su apoyo decidido a la Asociación”. Para terminar, Alcaraz comunicó a Proctor que se habían estudiado detenidamente las necesidades del personal y que en breve se las enviaría, para que las estudiara, las acogiera “con verdadero cariño” y les diera su aprobación.

Esta carta fue enviada dos semanas después, el día 20 de octubre de 1925 y en ella se detallaban las trece aspiraciones de los trabajadores sobre las que habían debatido en las reuniones celebradas a principios de mes⁶⁷⁷. Lewis Proctor tardó más de un mes en responder, pero cuando lo hizo, el día 2 de diciembre, quedó plenamente justificado el retraso: la extensa carta de contestación se detenía punto por punto en doce de las reclamaciones hechas por la Asociación. La única disposición que no era comentada era la referencia a la ampliación de la edad de ingreso del personal femenino a más de 25 años, que estaba siendo estudiada por el Departamento de Tráfico⁶⁷⁸.

En general, las aspiraciones de la Asociación fueron satisfechas en su mayoría, con algunas modificaciones, hecho que Proctor se encargó de resaltar al comienzo de su carta: “sólo nos ha guiado un gran espíritu de justicia y complacencia al conceder los beneficios acordados, que, como no puede ocultársele, representan un gran sacrificio para la Compañía”. Un estudio detallado de las concesiones realizadas por la Dirección nos permite comprobar que los “sacrificios” tampoco fueron tan grandes, aunque la retórica con la que habían sido descritos hiciera que parecieran mayores de lo que en realidad eran. Además, muchas de estas solicitudes eran proyectos que ya estaban en mente de los directivos, como la preferencia para el ingreso en la empresa de los hijos de los empleados, la creación de la Escuela de Aprendices o la reorganización de la plantilla.

Los asuntos más sensibles, los que tenían que ver con el dinero de los empleados, no corrieron la misma suerte. Todas las aspiraciones que tenían que ver con sueldos o retribuciones extraordinarias fueron amablemente denegadas o pospuestas para su estudio más detenido. Así, por ejemplo, la gratificación especial por Navidad fue rechazada casi de plano, como veremos cuando estudiemos las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo del mes de noviembre. Proctor alegaba que la compañía se encontraba en aquellos momentos “en un periodo de máximos desembolsos y mínimos ingresos, como consecuencia del amplio desarrollo que está introduciendo en todos los servicios”. Aunque se dejaba la puerta abierta a una posible paga extra navideña que todavía tenía que ser estudiada por el Comité Ejecutivo. El Vicepresidente no mentía: las actas del Comité del mes de diciembre dan buena

⁶⁷⁷ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, pp. 7-9.

⁶⁷⁸ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, pp. 50-54.

cuenta de las discusiones que tuvieron lugar debido a esta cuestión, llegándose a tomar hasta cuatro acuerdos distintos. La decisión definitiva no se tomó hasta la última reunión del año, el 30 de diciembre de 1925⁶⁷⁹.

A esta carta de Proctor siguió otra de Luis Alcaraz, con fecha 12 de diciembre de 1925, en la que agradecía, en nombre de la Asociación, todos los acuerdos que se habían tomado a favor de los empleados de la compañía. Alcaraz se refirió asimismo al “cariño con que habían sido estudiadas y resueltas” sus peticiones⁶⁸⁰.

3.202. Jueves, 8 de octubre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁸¹

Aparte de las ya tradicionales peticiones de los miembros del Comité para que los informes de gastos estuvieran perfectamente detallados (expresados en esta ocasión por Julián Cifuentes), en esta reunión se presentaron unos gráficos sobre los servicios de la compañía, divididos en conferencias y telefonemas. Se apreciaba un pronunciado descenso en ambos servicios durante el mes de febrero anterior, por lo que el Comité acordó investigar a qué era debido. Los miembros apuntaban a las circunstancias especiales que podrían haber concurrido en algún Distrito en concreto durante aquel mes, así que Lewis J. Proctor prometió encargarse de examinar la marcha de todas las regiones de la compañía y comprobar así si las fluctuaciones de principios de año eran debidas a alguna de ellas.

Gumersindo Rico dio cuenta al Comité de la comunicación recibida del Marqués de Magaz, Presidente interino del Directorio Militar, en la que se agradecía a la compañía la felicitación que se había dirigido al general Primo de Rivera por su victoria sobre Abd el-Krim. Además, el propio Jefe del Gobierno había enviado un telegrama a la empresa desde Tetuán expresando igualmente su gratitud por las palabras que le había dirigido el Marqués de Urquijo. Este telegrama fue reproducido por la Revista Telefónica Española en su edición del mes de octubre⁶⁸².

⁶⁷⁹ Acta nº 72 del Comité Ejecutivo, 30 de diciembre de 1925, libro 1, p. 98.

⁶⁸⁰ Revista Telefónica Española, nº 12, diciembre de 1925, p. 50.

⁶⁸¹ Acta nº 60, 8 de octubre de 1925, libro 1, pp. 77-78.

⁶⁸² Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, p. 34.

M D Residencia Tetuán 109 SIN 5 19 Jefe Gobierno-Presidente Directorio Militar. Gracias por su entusiasta y cariñosa felicitación, correspondiéndoles con afectuoso saludo.

3.203. Miércoles, 14 de octubre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁸³

El único asunto de importancia que se trató en esta reunión del Comité Ejecutivo tuvo que ver con la liquidación del impuesto del Timbre que la CTNE tenía que satisfacer al Estado por la emisión y circulación de acciones de la compañía. Proctor, tal y como había prometido en la reunión anterior, también presentó un gráfico con las variaciones en el servicio de conferencias y telefonemas en los diferentes distritos de la compañía. No obstante, el acta no indica las conclusiones que los miembros del Comité pudieron sacar de dichos gráficos y si con ello se consiguió explicar el descenso que se había sufrido en el mes de febrero.

3.204. Viernes, 16 de octubre de 1925

El fondo benéfico de la compañía

En la reunión que la Junta directiva de la Asociación de Empleados de la compañía celebró el 21 de abril de 1925 se acordó formar una comisión para el estudio de la incorporación de todas las organizaciones de trabajadores existentes en la única asociación que reconocía la compañía de manera oficial. Esta comisión estaba formada por miembros de las cuatro organizaciones y quedó presidida por el Inspector General de la compañía, Logan N. Rock. Además se encargarían de estudiar el proyecto de fondo benéfico que iba a organizar la propia empresa. Este fondo no era otra cosa que un plan para cubrir los gastos de pensiones, jubilaciones y prestaciones para los empleados en caso de enfermedad, accidentes, etc.

La Dirección de la empresa había encargado a Rock la elaboración del plan y llevaba ya meses trabajando en él. Durante el verano, la comisión había presentado sus informes y proyectos para la fusión de las asociaciones y de sus fondos benéficos y durante el mes de septiembre se estudiaron dichos planes. A su vez, Proctor y Rock

⁶⁸³ Acta nº 61, 14 de octubre de 1925, libro 1, pp. 78-79.

se reunieron con varios directivos de la ITT para ser aconsejados sobre los planes de pensiones y prestaciones sociales que la multinacional había implantado para sus trabajadores, en un claro intento de imitar la política de la empresa estadounidense, también en este aspecto. Gracias a las conversaciones mantenidas se había preparado un proyecto, que fue presentado a Luis Alcaraz para su examen. En una nota de la Revista Telefónica Española del mes de septiembre se informaba de que la impresión del presidente de la Asociación era muy positiva, ya que el proyecto cubría “las pensiones, jubilaciones, enfermedades, accidentes, muertes y anticipos”, aunque todavía existían algunos detalles que había que pulir⁶⁸⁴.

No obstante, aunque Proctor, Rock y Alcaraz dieran su visto bueno al proyecto de fondo benéfico, sería necesario esperar al veredicto final de la persona que decidiría si finalmente se aprobaba o no: por supuesto era necesario “someterlo al estudio definitivo del Coronel Behn para seguidamente ponerlo en vigor”.

Este plan de fondo benéfico fue estudiado durante la reunión del Pleno de la Junta directiva de la Asociación celebrada en los días 5 y 6 de octubre y se aprobó solicitar algunas modificaciones en el mismo. El día 16 de octubre Luis Alcaraz envió una carta a Lewis J. Proctor en la que exponía dichas peticiones, para que se tuvieran en cuenta a la hora de aprobar el proyecto definitivo de fondo benéfico⁶⁸⁵. Las modificaciones que la Asociación sugería eran cuatro:

- Que en caso de enfermedad de un empleado la compañía abonara el sueldo del primer mes y la mitad del segundo, comenzando en éste el fondo benéfico a completar el sueldo hasta su completa curación.
- Que los empleados pudieran retirarse voluntariamente si habían cumplido 25 años de servicio, incluyendo aquellos años trabajados en compañías extinguidas o en el Cuerpo de Telégrafos.
- Que en el caso de muerte de un empleado sin herederos directos pudiera designarse libremente un beneficiario para percibir el socorro que tradicionalmente correspondería a algún familiar cercano

⁶⁸⁴ Revista Telefónica Española, nº 9, septiembre de 1925, p. 42.

⁶⁸⁵ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, pp. 6-7.

- Que se fijara una dote para el personal femenino al contraer matrimonio (debido a la norma de soltería que se imponía en algunos centros urbanos e interurbanos)

3.205. Miércoles, 21 de octubre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁸⁶

Proctor presentó en esta reunión el proyecto y los planos del edificio que la compañía se disponía a construir en Santander, en el solar recientemente adquirido de la calle del Martillo. También presentó fotografías del emplazamiento e incluso una composición de cómo quedará el conjunto una vez el inmueble haya sido finalizado. El Comité aprobó el proyecto y facultó plenamente a Proctor para que dirigiera la ejecución de las obras como considerara oportuno.

Se acordó pagar 20.000 pesetas al abogado José Bertrán y Musitu por los trabajos extraordinarios realizados con motivo del desfalco de Barcelona de principios de año.

En el mes de marzo, la compañía había elevado un recurso al Gobierno en contra de la autorización que la Dirección General de Comunicaciones había otorgado a la “Sociedad Radio-Barcelona” para la instalación de ciertas líneas telefónicas bajo la denominación de “circuitos microfónicos”. El día 14 de agosto de 1925 se había publicado en la Gaceta de Madrid la Real Orden por la que no sólo se denegaba dicha solicitud sino que además se autorizaba a la Dirección General para que siguiera realizando concesiones de líneas microfónicas a empresas de radiocomunicación. Desde entonces, la compañía no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, en esta reunión del Comité se acordó por unanimidad “llevar hasta el último extremo” el ejercicio de su derecho para defender los intereses de la compañía. En consecuencia se decidió entablar un pleito contencioso-administrativo hasta agotar todos los procedimientos legales que estuvieran a su alcance.

Con respecto a las negociaciones entabladas con la Dirección General de la Guardia Civil para tratar la cuestión de la franquicia telefónica para dicho cuerpo, Proctor presentaba en esta reunión unas bases que habían sido acordadas por las dos

⁶⁸⁶ Acta nº 62, 21 de octubre de 1925, libro 1, pp. 79-80.

partes. En estas cláusulas se establecían ciertas “facilidades” que en realidad no significaban concesión de franquicia ya que la compañía no estaba autorizada a realizar estas cesiones, como muy oportunamente venía estipulado en el contrato firmado con el Estado. El Comité aceptó íntegramente las bases propuestas y se autorizó a la Dirección para que llevara a efecto este acuerdo con la Guardia Civil.

Antes de terminar, el Marqués de Perijáa informaba sobre la presencia de Sosthenes Behn en España y su deseo de participar en las reuniones del Comité. Por ello, el Tesorero pedía que se aceptara su dimisión como miembro de este Comité, en el que había entrado debido a la ausencia temporal del Coronel, para que éste pudiera ocupar de nuevo su puesto. El Comité aprobó la propuesta del Tesorero y nombró a Sosthenes Behn nuevo miembro de este órgano, haciendo constar en acta la “celosa y eficaz actuación del Sr. Marqués de Perijáa en el seno de este Comité mereciendo por parte de todos el más sincero aplauso por su gestión”. También expresaron la satisfacción por la vuelta del coronel Behn y confiaban en que su presencia en España trajera grandes beneficios para la empresa.

3.206. Lunes, 26 de octubre de 1925

Inauguración del nuevo salón de prensa

Las actas del Comité Ejecutivo de esta primera etapa de la Compañía Telefónica Nacional de España dan buena cuenta de la importancia que la Dirección dio, desde el principio, a su relación con la prensa y a la imagen que proyectaba al exterior. En sus primeras reuniones, los directivos ya mostraban ese interés por vigilar las declaraciones públicas y por mantener un vínculo cordial con aquellos poderes capaces de influir en la opinión de la sociedad⁶⁸⁷. También eran plenamente conscientes de que la empresa no comenzaba su andadura en el negocio telefónico con la simpatía del público en general, dadas las especiales circunstancias que rodeaban a la CTNE: la calidad del servicio, la actitud monopolista, las críticas al contrato con el Estado, las tarifas, etc. A lo largo de los meses siguientes, los consejeros continuaron insistiendo en mimar las relaciones con la prensa y decidieron, por ejemplo, conceder algunas ventajas en los abonos telefónicos a los periódicos y

⁶⁸⁷ Acta nº 6 del Comité Ejecutivo, 8 de octubre de 1924, libro 1, p. 4.

otros medios de comunicación de la capital⁶⁸⁸. No en vano, la prensa siempre ha sido el mejor aliado de una compañía para proyectar una buena imagen en la opinión pública, por lo que siempre es interesante contar con su apoyo.

A este respecto, las malas condiciones de la sala destinada a la prensa que se encontraba en la central de la calle Alcalá no ayudaban a favorecer el apoyo de los medios de comunicación. Por aquel entonces, los corresponsales de los periódicos de provincias se comunicaban telefónicamente con sus redacciones mediante una especie de locutorio que la Compañía Madrileña había habilitado en el edificio que ocupaba la central interurbana en el número 1 de la calle Alcalá. Parece que las condiciones en las que tenían que trabajar los periodistas eran bastante penosas y esto provocaba muchas quejas y mala publicidad. Según palabras de la Revista Telefónica Española⁶⁸⁹:

Desde que la Compañía se hizo cargo de los servicios, echó de ver las malas condiciones en que se verificaba el trabajo de los corresponsales. El local destinado a ellos era insuficiente, obscuro y no reunía las características de aislamiento e independencia necesarias para el desempeño de las tareas periodísticas.

Por ello, una de las primeras medidas que se tomó desde la Dirección de la empresa al hacerse con las propiedades de la Madrileña fue reformar completamente esa central, para que sus telefonistas pudieran trabajar más a gusto y para que los corresponsales de prensa realizaran su trabajo de mejor manera. En la reunión del 15 de octubre de 1924, Proctor ya explicaba que se estaba instalando un salón de descanso para telefonistas, una sala para la prensa y “otras varias mejoras que demuestren la perfecta organización que proyecta la Compañía”⁶⁹⁰.

La obra de reforma de la antigua central interurbana fue proyectada y dirigida por el arquitecto de la compañía Ignacio de Cárdenas. La nueva sala de prensa quedó emplazada en el piso principal del edificio y tenía un enorme ventanal con un balcón que permitía que entrara mucha luz y daba a la calle Alcalá. La inauguración se

⁶⁸⁸ Acta nº 22 del Comité Ejecutivo, 29 de enero de 1925, libro 1, p. 27; acta nº 34 del Comité Ejecutivo, 8 de abril de 1925, libro 1, pp. 43-44; acta nº 49 del Comité Ejecutivo, 15 de julio de 1925, libro 1, p. 63.

⁶⁸⁹ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, pp. 25-26.

⁶⁹⁰ Acta nº 7 del Comité Ejecutivo, 15 de octubre de 1924, libro 1, p. 5.

celebró finalmente el día 26 de octubre de 1925 y a ella asistieron casi todos los altos directivos de la CTNE, así como representantes de la prensa. Los discursos fueron pronunciados por el Subdirector del Distrito 1º, José Berenguer Cagigas, y por el Secretario de la Asociación de la Prensa, Eduardo Palacio Valdés. A este acto acudieron los hermanos Behn, que acababan de llegar a España con la intención de realizar grandes cambios en los proyectos y la estructura de la CTNE, como vamos a ver a continuación.

Reunión del Consejo de Administración⁶⁹¹

Sosthenes Behn, que había vuelto a los negocios españoles después de casi un año de ausencia (había pasado unos meses en nuestro país en verano, aunque de vacaciones), y su hermano mayor Hernand asistieron a esta reunión del Consejo de Administración. El Coronel venía dispuesto, como en su última visita, a impulsar una serie de reformas de gran calado en la Compañía Telefónica Nacional, inspiradas en su forma de entender el negocio telefónico y buscando siempre la maximización de los beneficios de la multinacional que presidía. Por ello, tanto la sesión de este día como la que dos días después celebraría el Comité Ejecutivo fueron especialmente largas y en ellas se trataron temas de gran relevancia, como vamos a ver.

En primer lugar, el Marqués de Urquijo se hacía intérprete de la unánime satisfacción que al Consejo producía su regreso a España y su presencia en esta reunión. Le transmitía un saludo cordial de todos los presentes y el deseo de que su estancia en nuestro país se prolongara lo más posible. Por supuesto el Coronel agradeció las palabras y prometió permanecer en España el tiempo necesario para “llevar a cabo una extraordinaria intensificación en la actuación de nuestra Compañía”, siguiendo los planes y proyectos que él mismo había conformado y que iba a someter a la aprobación de los miembros del Consejo.

Para empezar, hacía un avance de estos proyectos expresando el propósito de realizar en el siguiente año 1926 toda la obra que se había proyectado para 1926 y 1927, lo que evidentemente implicaba doblar la actividad de la empresa pero también el capital gastado. Por ello anunciaba una necesaria inversión de capital de 115

⁶⁹¹ Acta nº 20, 26 de octubre de 1925, libro 1, pp. 43-46.

millones de pesetas. A continuación, Behn detallaba los objetivos que se había marcado y que justificaban esta increíble intensificación de la actividad de la compañía:

- Tener 70.000 teléfonos en la ciudad de Madrid en el año 1935⁶⁹².
- Construir 6.000 kilómetros de líneas interurbanas al año (más o menos la distancia entre Madrid y Nueva York), lo que implicaba unos 120.000 postes telefónicos. Esto permitiría establecer rápidamente comunicaciones directas entre dos puntos cualesquiera de la península, lo que haría aumentar considerablemente los beneficios por explotación.
- Abrir unas 50 estaciones urbanas e interurbanas al año, casi una por semana.
- Construir 14 edificios e instalar 52 repetidores durante el año 1926.
- Educar e instruir al personal de la compañía, organizando las Escuelas especiales.
- Mejorar el servicio telefónico internacional con Francia.
- Inaugurar la central automática de Santander en el verano de 1926. Por su parte, el servicio automático en Madrid podría empezar a funcionar en los meses de otoño.

Una vez Sosthenes Behn había presentado las líneas generales del ambicioso plan que había previsto para el año 1926, el Marqués de Urquijo expresó la confianza ciega del Consejo en cualquier medida que el Coronel tomara con respecto a la marcha de la empresa, incluso aunque se tratara de un proyecto de esta envergadura, que evidentemente tenía ser meditado con cierto detenimiento:

El Sr. Presidente expresa al Sr. Coronel Behn la satisfacción con que escucha todos sus proyectos y la absoluta seguridad que tiene en la eficaz realización de los mismos, ya que responderá desde luego a la entera confianza y a las

⁶⁹² La memoria del ejercicio 1926 de la Compañía Telefónica Nacional de España indicaba que Madrid contaba con algo más de 19.000 teléfonos al finalizar el año 1926.

grandes expectativas que todos han puesto en la acertada actuación del Sr. Coronel Behn.

Como se puede apreciar en el acta de la reunión, ningún consejero realizó ninguna apreciación con respecto al plan propuesto por Behn, ni valoración crítica, ni tan siquiera tuvo dudas con respecto a la viabilidad del proyecto, a la forma de financiarlo o de conseguir los 115 millones de pesetas que se pensaban invertir. Las propuestas de Sosthenes Behn fueron aprobadas sin contestación.

A continuación tomaba la palabra el Secretario General para informar sobre las gestiones realizadas con respecto a la liquidación del impuesto del Timbre que gravaba las acciones de la compañía. Gracias a las decisiones adoptadas en las reuniones anteriores en relación a este asunto y a la forma en que dicho impuesto iba a cobrarse, la CTNE había obtenido una ventaja de más de 100.000 pesetas, lo que produjo gran satisfacción en el seno del Consejo.

Por último, Proctor anunció la inminente inauguración de la central interurbana de la calle Hortaleza, cuyo acto tendría lugar, según estaba previsto, el domingo 31 de octubre a la 1 de la tarde y al que asistirían las autoridades⁶⁹³. También se invitaba a los consejeros para que asistieran, si lo deseaban, al cambio de líneas al nuevo cuadro y a las pruebas que se realizarían en la noche del sábado al domingo, a las 12 de la noche.

El porqué del proyecto de Sosthenes Behn

Este impulso tan enérgico a los proyectos de la CTNE no respondía a una necesidad real de la telefonía española, ya que las ventajas de la adjudicación del sistema nacional comenzaban a apreciarse y nada parecía indicar que hubiera que acelerar el ritmo de las construcciones y reformas. Tal y como explicaban los telegrafistas un par de años antes, los teléfonos debían crecer de manera “natural” con la economía del país y con el resto de servicios públicos, no forzar su desarrollo por encima de las necesidades reales. Esto era precisamente lo que decían que ocurriría si se entregaba la telefonía al capital privado: intentaría maximizar los beneficios y

⁶⁹³ Proctor cometió aquí un error ya que el 31 de octubre de 1925 no fue domingo, sino sábado. La inauguración tuvo lugar el domingo 1 de noviembre de 1925.

forzar un incremento del servicio que podría no ir acorde con el resto de indicadores socioeconómicos del país. No les faltaba razón a los telegrafistas.

Sosthenes Behn había impulsado este ambicioso proyecto, doblando las inversiones y reduciendo los tiempos a la mitad, con la única intención de obtener unos succulentos beneficios para la ITT: cuanto más sobredimensionado fuera el plan de expansión, mayores ganancias. No es de extrañar por lo tanto que decidiera llevar a cabo todas las obras previstas para un bienio en un periodo de solo doce meses, haciendo crecer a la CTNE de manera artificial. Lo más curioso del caso es que el Coronel ni siquiera se molestó en maquillar sus intenciones haciendo el típico alegato por el bien de la telefonía española o la producción nacional. En esta ocasión simplemente se limitó a comunicar su decisión de ampliar los planes de la compañía para el año 1926, sin explicar las razones últimas, y procedió a explicárselo al Consejo de Administración.

Pero, ¿cómo repercutía este proyecto en las finanzas de la International?

A corto plazo, la ITT cobraba dos extraordinarias comisiones de la CTNE, según los contratos firmados entre ambas el 29 de agosto de 1924, como pago por la asistencia técnica y financiera que ofrecía la International. Por un lado, recibía un 4,5% de los ingresos brutos de la CTNE; es decir, un 4,5% de cualquier ingreso que la Telefónica realizara en sus cuentas iba a parar automáticamente a la ITT. Además, ésta cobraba otra comisión del 5% sobre el importe de todos los enseres comprados, así como sobre el coste de los edificios construidos, adquiridos o reconstruidos. Expresando este concepto con otras palabras, esto significaba que cualquier pago de material o edificios costaría a la empresa española un 5% más que el valor que pagaba a su proveedor, ya que tenía por un lado que costear el material adquirido y por otro entregar este porcentaje del valor pagado a la ITT. Por ejemplo, la compra de un edificio como el de Barcelona, que había costado 2 millones de pesetas a la CTNE, había generado automáticamente un beneficio para la ITT de 100.000 pesetas.

Gracias a esta segunda comisión del 5% es como las cuentas de la International notarían más favorablemente los efectos del sobredimensionado del proyecto de la CTNE. Cuantos más edificios, centrales, líneas y redes se construyeran o reformaran, mayores serían los ingresos. Si doblaban la intensidad de las obras, doblaban también las ganancias de la ITT.

Pero estas dos comisiones no eran las únicas vías por las que la multinacional obtenía beneficios si aceleraba el ritmo de la compañía española. Hay que recordar

que la *International Telephone Securities*, el brazo financiero de la ITT, era el principal prestamista de la Telefónica. La compañía, por imposición de Sosthenes Behn, se veía en la obligación de invertir enormes sumas de dinero para llevar a cabo su frenético plan de construcción y reformas, que evidentemente tenía que obtener de algún sitio y para ello pedía préstamos a la filial de la International. Esos créditos conllevaban un interés del 7% anual, con liquidaciones mensuales, que la Securities cobraba escrupulosamente. A mayor necesidad de capital, mayores ingresos por intereses en los préstamos.

Tampoco hay que olvidar que la ITT era la principal accionista de la CTNE, por lo que la pujanza económica de ésta repercutía automáticamente en todas sus acciones, incluyendo las que estaban en manos de la International. Por si todo esto no fuera suficiente, la multinacional era ahora la principal suministradora de material de la Telefónica. Ahora que Sosthenes Behn controlaba la IWECC y que, por la autorización que el Comité le había otorgado en su reunión de 26 de noviembre de 1924 gozaba de libertad absoluta para decidir sobre los materiales que la Telefónica adquiriría, no tenía más que ordenar a la compañía que comprara los equipos de su filial. Así ocurrió, como hemos visto, con las centrales automáticas producidas por la IWECC en su fábrica de Amberes.

El caso de las centrales es un ejemplo categórico de cómo el nuevo proyecto impuesto a la CTNE beneficiaba a las cuentas de la International. Al comprar una central tipo Rotary, la Telefónica tenía que pagar, evidentemente, a quien la había producido: la IWECC, filial de la ITT. Pero al adquirirla, tenía que pagar también una comisión del 5% de su valor a la ITT, tal y como establecían los contratos firmados en agosto de 1924. Para poder comprarla, necesitaba dinero líquido y para ello tenía que solicitar un préstamo, que por supuesto había pedido a la Securities, filial de la ITT, y por el que un tiempo después tendría que pagar intereses. La central automática suponía una mejora indiscutible del servicio, así que el número de abonados y la cantidad de conferencias crecían notablemente, por lo que los ingresos por explotación de la Telefónica también aumentaban; un 4,5% de estos ingresos brutos iban a parar también a la ITT, también por los contratos firmados entre las dos compañías. Por último, la buena marcha del negocio hacía que las acciones de la CTNE aumentaran su valor, generando unos dividendos muy interesantes, que por supuesto cobraban todos los accionistas, entre los que se encontraba la ITT.

Pero aún queda una última vuelta de tuerca, una última herramienta financiera que justificaba el grandioso plan que había impuesto a la CTNE para el año 1926,

aunque los beneficios en este caso se cobrarían muy a largo plazo: la inflación de la cantidad neta invertida. Antonio Pérez Yuste dedica el apartado 6.2 de su tesis doctoral al estudio de cómo la ITT utilizó este mecanismo para inflar artificialmente el valor de la compañía española⁶⁹⁴. No es el fin de este Trabajo Fin de Máster explicar los pormenores de la inflación de la cantidad neta invertida, pero vamos a reproducir aquí la definición y explicación que da Pérez Yuste de esta arma:

Esta cantidad representaba el montante total que el Estado debía reembolsar a la CTNE en el momento de proceder al rescate de los servicios telefónicos, bien por haber finalizado la concesión, bien por incautación anticipada de todas sus redes.

La cantidad neta invertida se convirtió, en manos de la ITT, en una poderosa herramienta financiera que fue utilizada, con demasiada frecuencia, para elevar el valor de la compañía telefónica española por encima de su precio real, aún a costa de incrementar su endeudamiento.

A grandes rasgos podemos decir que la International utilizó todos los mecanismos a su alcance para que esta cantidad quedara inflada artificialmente, uno de los cuales fue, por supuesto, la adquisición de una cantidad de materiales y enseres por encima de las necesidades reales, como efectivamente ocurrió en este ambicioso proyecto planteado para el año 1926.

Varios estudios de la época también apuntaban al interés de la ITT por imprimir un desarrollo excesivo en los planes de construcción de la CTNE, más allá de lo estipulado en el contrato firmado con el Estado. De esta opinión era el Ministro de Comunicaciones de la II República, Diego Martínez Barrios, y también el telegrafista Agustín Muro Abad, que escribió unos interesantísimos artículos para la revista Telégrafos en 1932. En este sentido, Muro Abad indicaba que por un lado se desarrollaba el programa convenido, pero que por otro se intercalaban “con gran profusión construcciones no concertadas, costosísimas y de muy discutible necesidad y conveniencia”. Antonio Pérez Yuste también llamó la atención sobre el hecho de que en 1927 se inaugurara el servicio automático en Jerez de la Frontera, localidad natal de Primo de Rivera, y en Pamplona, cuando ninguna de las dos ciudades se encontraba entre las 17 redes que era preciso automatizar en cinco años según la

⁶⁹⁴ Yuste-2004, pp. 232-244.

base 15ª del contrato con el Estado. Mientras estas inauguraciones tenían lugar, sólo dos de las 17 poblaciones que sí estaban recogidas en dicha base contaban con servicio automático: Santander y Madrid⁶⁹⁵.

3.207. Miércoles, 28 de octubre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁶⁹⁶

La presencia de Sosthenes Behn en cualquier reunión del Comité Ejecutivo o del Consejo implicaba siempre la discusión de grandes cambios en la compañía, en su administración y modelo de negocio. En esta ocasión, modificó enormemente el organigrama de la empresa, para, según la versión oficial, poder enfrentarse con más eficacia al enorme plan de construcciones de la compañía para el año 1926. Como veremos a continuación, esta reestructuración sirvió también para deshacerse de algunos altos directivos españoles, sustituyéndolos por hombres de la ITT, y para saltarse el reglamento de personal y aumentar los sueldos de los empleados extranjeros por encima del que cobraban o cobrarían los trabajadores nacionales.

Gumersindo Rico abrió la sesión informando sobre una carta que se había recibido del antiguo Director de la compañía, Javier Martí-Codolar, en la que presentaba su dimisión como Vicepresidente del Consejo de Administración y como vocal del Comité Ejecutivo. Los presentes admitieron estas dimisiones, aunque hicieron constar en acta “el agrado con que se apreció en todo momento la acertada actuación de dicho Sr. Martí Codolar mientras su salud le permitió dedicar preferente atención a los asuntos de la Compañía”.

El Secretario también explicó las gestiones entabladas con un tal señor Arrese, que era el propietario del edificio de San Sebastián donde la compañía tenía instaladas sus oficinas y central telefónica. Parece que el dueño del inmueble había elevado excesivamente el alquiler, a lo que el Comité respondió con un contundente “no transigir con las pretensiones del referido propietario”.

⁶⁹⁵ Yuste-2004, p. 215.

⁶⁹⁶ Acta nº 63, 28 de octubre de 1925, libro 1, pp. 80-86.

Antes de dar la palabra al coronel Behn, Gumersindo Rico también expuso los avances con respecto al edificio provisional que se pensaba construir en el solar de la Gran Vía para la instalación de la central automática de la ciudad. La empresa había nombrado una junta calificadora encargada de valorar las proposiciones presentadas por distintos constructores para encargarse de las obras de ese inmueble. Esta Junta estaba formada por el Ingeniero Jefe de la compañía, Fred T. Caldwell, el abogado José Hernández Pinteño y el arquitecto y Jefe del Departamento de Edificaciones, Ignacio de Cárdenas. Estos habían estudiado los proyectos y se habían decantado por el de la firma “Pedroso y Cubillo”, por las “favorables condiciones” que concurrían en su proposición. El Comité acordó adjudicar las obras de ese edificio provisional a esta empresa, si bien pedían que la compañía se asegurara de la solvencia de estos adjudicatarios, “mediante las informaciones de carácter privado” que se estimaran pertinentes.

Una vez se hubieron tratado estos asuntos iniciales, Sosthenes Behn tomó el mando de la reunión, comenzando con un resumen de los trabajos que se iban a realizar en el año 1926 y que implicaban un gasto de 115.262.000 pesetas. Llamaba la atención acerca de la magnitud de estos trabajos y el tiempo tan corto que se fijaba para efectuarlos, por lo que veía necesario cambiar “un poco y con carácter temporal” la organización de la compañía. Según el Coronel, este enorme plan implicaba la intensificación de las construcciones, así como cuanto tuviera que ver con Ingeniería, y que todo ello precisaba de una estrecha cooperación con los departamentos de Tráfico y Comercial.

Para empezar, Sosthenes Behn propuso que se nombrara a un Vicepresidente que se encargara exclusivamente del gran proyecto para 1926 y en general de toda la parte de explotación. El Vicepresidente que hasta ahora se encargaba de la explotación, Lewis J. Proctor, pasaría a ser un Vicepresidente administrativo que tendría bajo su control Secretaría General, Intervención General, Tesorería General, Inspección General y Publicidad. También proponía el nombramiento de un Subdirector General que estaría a las órdenes de los dos Vicepresidentes, el de Explotación y el de Administración.

Para cubrir el cargo de Vicepresidente de Explotación, Behn “había podido convencer” al Ingeniero Jefe de la IWEA (ahora ISEC), Frank Gill, que permanecería durante un año o algo más en España. Se le consideraba una persona muy capacitada en cuestiones técnicas y de explotación y se había comprometido a llevar a cabo la obra señalada en el tiempo previsto. Por lo tanto, Sosthenes Behn proponía que Gill

fuera nombrado Vicepresidente de la compañía y consejero. Además, aprovechando la oportuna marcha de Javier Martí-Codolar, anunciada poco antes, también podía ocupar un sillón en el Comité Ejecutivo.

El Comité, después de oír todo lo expuesto por Behn, aprobó por unanimidad tanto el plan general para el año 1926 como el nombramiento de Frank Gill como miembro del Consejo de Administración, vocal del Comité Ejecutivo y Vicepresidente de Explotación de la compañía.

En el Consejo de Administración quedaban vacíos dos asientos, uno de ellos como consecuencia de la muerte del Marqués de Comillas unos meses antes. Sosthenes Behn propuso entonces nombrar consejeros al conde de Güell y a Logan N. Rock, Inspector General de la compañía. El Comité quedó conforme también con estas decisiones.

Juan Antonio Güell y López (1876-1958) era II Conde de Güell y III Marqués de Comillas. El condado de Güell lo había heredado de su padre Eusebio Güell (1846-1918), empresario, político y promotor de la cultura catalana, famoso sobre todo por su amistad y mecenazgo con el arquitecto Antonio Gaudí. El I Conde de Güell había casado con Luisa Isabel López Bru, hija del I Marqués de Comillas, por lo que fue nombrado consejero de las empresas de su familia política: el Banco Hispano Colonial, la Compañía de Tabacos de Filipinas, la Compañía de Ferrocarriles del Norte, etc. En cuanto al marquesado de Comillas, Juan Antonio lo había adquirido al morir el II Marqués de Comillas, Claudio López Bru, sin descendencia. Los derechos pasaron a su hermana Luisa Isabel y de ella a su primer hijo. Parece que los títulos nobiliarios no era lo único que se heredaba, ya que Juan Antonio Güell también recibió el sillón en el Consejo de Administración de la CTNE que había ocupado su tío hasta su muerte el 18 de abril de 1925.

En cuanto a los jefes y directores de los distintos departamentos de la compañía se ratificaba en sus puestos al Tesorero General, Secretario General, Inspector General, Interventor General, Ingeniero Jefe, Director Comercial y Director de Tráfico. De estos siete cargos de alto nivel, sólo los dos primeros estaban ocupados por españoles (el Marqués de Perijáa y Gumersindo Rico, respectivamente); el resto eran hombres de la ITT: Logan N. Rock, Geo J. Strong, Fred T. Caldwell, Frank E. Hodges y Howard Soler, respectivamente.

Con respecto al puesto de Director de Construcciones y Conservación, se proponía sustituir a Pedro Pérez Sánchez, una de las primeras personas contratadas

por la ITT en España a principios de 1923, por Roy A. Walker, que había ocupado el cargo de Ingeniero Jefe antes que Caldwell. A Pérez Sánchez le había ofrecido un puesto en el Consejo de Administración de la ITT Co. (España) como Vicepresidente de la misma, que más bien sonaba a una maniobra para apartar al antiguo telegrafista de la “primera línea”. Con respecto a este nuevo destino, Behn declaraba:

El Coronel Behn hizo el más favorable resumen de los trabajos y esfuerzos llevados a cabo por D. Pedro Pérez Sánchez y dijo que, en nombre de la “International Telephone and Telegraph Corporation (España)” se sentía muy satisfecho de poder otorgar esta recompensa al Sr. Pérez Sánchez.

Behn también explicó la necesidad de realizar cambios en la Sección de Publicidad, que pasaba a las órdenes del Vicepresidente administrativo y a cuyo mando puso a Kenned McKim, en lugar de actual Director, Francisco Hernández Borondo. Como se puede apreciar, la entrada de nombres de la ITT en los puestos más importantes de la compañía era ya casi completa. Todos los departamentos tenían al frente a un hombre de la confianza de Sosthenes Behn y las dos vicepresidencias con verdadero poder, la administrativa y la de explotación, quedaban también en manos de directivos de la ITT o de la IWEA: Lewis J. Proctor y Frank Gill, respectivamente. Los dos únicos directores españoles, Pedro Pérez y Francisco Borondo, habían sido sustituidos por Roy Walker y Kenned McKim. Sólo quedaban por lo tanto tres cargos directivos con capacidad ejecutiva ocupados por personal nacional: el Presidente, el Tesorero y el Secretario. En cuanto las Vicepresidencias ocupadas por Valentín Ruiz Senén y Julián Cifuentes, se mantenían, aunque perdían ya el poco poder ejecutivo que podían haber tenido hasta entonces y quedaban totalmente vacías de competencias. Se podría decir que la Dirección de la empresa se encontraba definitivamente en manos estadounidenses. Esta clara desproporción de hombres de la ITT en los altos cargos de la compañía no tuvo que pasar desapercibida para nadie, por lo que Behn se apresuró a explicar:

El Sr. Coronel Behn, refiriéndose a los cargos de Directores de los diferentes Departamentos, que en muchos casos están desempeñados por extranjeros, desea advertir que se trata de personas de reconocida competencia, que se hallan empleadas tan solo temporalmente, pero que es necesario nombrar en cada Departamento o Sección, un funcionario español como ayudante de Departamento o ayudante de los Jefes de Sección, a cuyo fin propuso varios nombres para algunos de estos Departamentos y Secciones.

Con respecto al Director General, cargo que ocupaba Martí-Codolar hasta hacía no mucho, se dejaba vacante; pero se veía necesario ocupar el cargo de Subdirector General recientemente creado. Para ello, Behn propuso al teniente coronel José Berenguer Cagigas, Subdirector del Distrito 1º (con sede en Madrid) El Comité quedó muy complacido con dicho nombramiento.

Por si todo esto fuera poco, el Comité recordó a Behn que, según la autorización concedida por el Comité el día 29 de agosto de 1924, el Coronel tenía plena autoridad para realizar cualquier nombramiento de personal, incluyendo el de los altos cargos, y que podía también efectuar cuantos cambios en la organización de la empresa quisiera.

En opinión de Behn, no tenía sentido que los Subdirectores de Distrito llevaran el título de “Subdirector” sin existir un “Director” por encima de ellos, por lo que, en lo sucesivo, se denominarían “Directores de Distrito”.

El Coronel se refirió entonces a la necesidad de contratar a unos 30 ó 35 extranjeros “de reconocidas experiencia y competencia” para ser distribuidos en los diferentes departamentos, encargándose de determinados trabajos y de instruir al personal español, ya que, según su opinión, en España no se encontraban “personas con la práctica y conocimientos suficientes para aponer en vigor dichos trabajos”. Estos extranjeros, encomendados al proyecto de obras para 1926, serían escogidos cuidadosamente por el propio Sosthenes Behn. Además se explicaba que estas personas, así como los directores y jefes extranjeros, tendrían que recibir sueldos “muy superiores a los que habrá que pagar en lo futuro a estas plazas, por su carácter temporal y su pericia”. Dado que el proyecto que se había aprobado era totalmente necesario por el bien nacional y de la empresa, era por lo tanto necesario pagar sueldos mayores a las personas encargadas de su dirección. No obstante había un problema:

Si se consignan en las nominas de la Compañía Telefónica Nacional de España estos sueldos, no tendrían o guardarían relación con los de otros empleados permanentes o con los sueldos que habrá que pagar más adelante, cuando sean sustituidos los Jefes o empleados temporales

Por eso Behn proponía que en las nóminas oficiales de la compañía apareciese el sueldo normal que un empleado español en ese puesto cobraría, pero que, “como es justo que la CTNE pague la remuneración total de los citados Jefes extranjeros”, se estableciera un procedimiento adecuado para pagar la diferencia. Ruiz Senén se

mostró totalmente de acuerdo con estas valoraciones y propuso como solución que la citada diferencia fuera cargada a la CTNE mensualmente en una suma global.

El Comité estuvo de acuerdo con todo lo expuesto y aprobó el plan de remuneraciones para extranjeros que había propuesto Sosthenes Behn. En las nóminas de la CTNE aparecerían los sueldos normales para estos puestos y luego aparte, la empresa pagaría el resto a la ITT Co. (España), mensualmente y en cantidad global. Sólo se realizaban contadas excepciones para algunos directivos cuya diferencia era aportada por la multinacional y no por la compañía española. Es importante hacer notar que el acuerdo al que llegó al Comité especificaba que esa diferencia era entre “estos sueldos [los habituales] y lo que sea necesario pagar a dichos empleados”. Es decir, que en ningún momento se especificó cuánto era necesario pagar a los trabajadores extranjeros exactamente, dando total libertad a la Dirección de la empresa, que se encontraba en manos estadounidenses, para decidir el sueldo final de sus compatriotas. Ante estos privilegios, no es de extrañar que las críticas no tardaran en aparecer, ya que los empleados españoles se verían claramente minusvalorados con respecto a sus compañeros de origen americano. Ya hemos visto en capítulos anteriores como varios políticos alzaron su voz, años más tarde, para criticar las desigualdades manifiestas. Gracias a esta acta del Comité Ejecutivo de 28 de octubre de 1925 sabemos hoy cómo y cuándo nacieron exactamente estas diferencias.

Behn y el edificio Telefónica de Madrid

Una vez cerrado el asunto de la reorganización de la empresa y de los sueldos de los empleados extranjeros, la reunión se centró en un asunto al que Behn también daba gran importancia: el proyecto de la nueva sede central de la compañía en Madrid. Previamente, Behn había solicitado el nombre de los arquitectos que se estaban barajando para la construcción del edificio de la compañía en la Gran Vía, a lo que el Marqués de Urquijo respondió con tres nombres, aunque en el acta no quedaron especificados. El Coronel manifestó entonces que había pedido esta información porque, según su opinión, el resultado obtenido en los anteriores concursos de la compañía no había sido de su agrado, por lo que creía que era mejor no pensar en nuevos concursos y designar un arquitecto de reconocida competencia para efectuar el trabajo. Parece que el descontento de Behn era debido en concreto al concurso del edificio de Barcelona, con el que no había quedado satisfecho.

El Comité acordó entonces no convocar más concursos de proyectos de arquitectos, en atención a las razones expuestas por Behn, y también con la intención de acelerar los trabajos de construcción, evitándose así el largo proceso que implicaba un concurso público. Valentín Ruiz Senén era de la opinión de hablar primero con Modesto López Otero, que había participado en el jurado del edificio de Barcelona y que había expresado su preferencia a que estas obras salieran a concurso entre los arquitectos españoles. No en vano, López Otero era Director de la Escuela de Arquitectura de Madrid y vería con muy buenos ojos estas oportunidades para los profesionales que se estaban formando en la institución que él mismo dirigía.

Sosthenes Behn habló entonces de la gran responsabilidad que implicaba la construcción de las sedes centrales de Madrid y Barcelona e hizo mención también a que en España no se había adoptado, de manera general, la construcción de edificios con estructura de acero. Esto se trataba, en realidad, de un eufemismo, puesto que nunca se habían realizado construcciones modernas utilizando ese material; la sede central de Telefónica en la Gran Vía fue el primer edificio verdaderamente contemporáneo de la historia de la arquitectura española en el que se usó acero y hormigón para su estructura. Sosthenes Behn comentaba que posiblemente fuera necesario traer peritos estadounidenses que fueran expertos en este tipo de edificaciones, para realizar los cálculos, comprar los materiales adecuados, planear los trabajos para que se llevaran a cabo con rapidez y eficacia, etc. Con el objetivo de estudiar la situación, el Coronel había venido acompañado por un representante de una empresa constructora muy importante de Estados Unidos, que les permitiría “utilizar los conocimientos y la práctica de una de estas grandes entidades”. Para cerrar la sesión, Behn prometió informar al Comité Ejecutivo acerca de este asunto en cuanto tuviera más detalles.

La construcción de edificios “menores” fue desde el principio responsabilidad del Departamento de Edificaciones de la compañía, que estaba a cargo de Ignacio de Cárdenas Pastor (1898-1979), un arquitecto inexperto que había obtenido el título en 1924⁶⁹⁷. Para los edificios de Madrid, Barcelona y Sevilla se pensaba convocar un concurso público, aunque al final sólo se hizo para la capital catalana y ocasionó multitud de problemas, como acabamos de ver. Así que la compañía decidió encargar también los edificios de Madrid y Sevilla al joven Ignacio de Cárdenas, que con sólo 27

⁶⁹⁷ Algarra-2003, p. 216-221.

años se vio con la responsabilidad de proyectar el edificio más importante y emblemático de la compañía.

Sosthenes Behn sugirió a Cárdenas que fuera a Nueva York para estudiar la arquitectura de los rascacielos que se estaban construyendo en aquella época y para que aprendiera con Lewis S. Weeks, arquitecto jefe de la ITT y autor del edificio de la multinacional en la Gran Manzana, en el número 67 de Broad Street. El propio Cárdenas se expresaba con las siguientes palabras con respecto a su viaje a Nueva York:

Pero como los americanos estaban en la idea de que en España estábamos atrasadísimos en todo lo relacionado con la arquitectura moderna encontraron la solución a mi supuesta ignorancia enviándome a Nueva York donde el arquitecto de la ITT me orientaría sobre ello. Aclaro que esto yo lo consideré normal pues mis pocos años tenían que inspirar poca confianza.

Él mismo reconocía que su edad podría sugerir inexperiencia, lo que contrasta poderosamente con el hecho de que Behn quisiera poner al frente de las obras a un arquitecto “de reconocida competencia”. La visita se produjo a finales de 1925 y parece que Cárdenas volvió con la conclusión de que el estilo neogótico ya no estaba de moda en la construcción de rascacielos y que entonces se llevaba la estructura inspirada en los *zigurat*.

Cuando volvió a Madrid, Cárdenas se puso manos a la obra y desarrolló el proyecto para el edificio que habría de convertirse en uno de los iconos de la ciudad. Todo el cálculo de estructuras fue realizado, empero, por otro ingeniero de la ITT, Aldrich Durant, que estuvo en España hasta finales de 1927, cuando se consideró que el Departamento de Edificaciones de la compañía ya estaba preparado.

Las notas de Ignacio de Cárdenas también dan cuenta de aquella obsesión de la Telefónica por construir sus edificios centrales de tal forma que sirvieran, no sólo para albergar las oficinas e instalar la central telefónica en su interior, sino para mostrar su pujanza y poder económico:

Difícil comparación tiene el edificio telefónico con otros destinados a fines parecidos, pues si es esencialmente un edificio de carácter industrial, es también una embajada de la Compañía en las ciudades españolas, y ha de ser, como ella, popular, suntuoso, útil y rico. También es un anuncio. Sin el anuncio

fracasan hoy en día todas las empresas que del público viven, y un buen anuncio ha de estar enclavado en el mejor lugar de la ciudad.



Figura 15. Obras del edificio de la compañía en la Gran Vía, Madrid.
Fuente: Telefónica.

Ignacio de Cárdenas fue también el arquitecto de la mayoría de los edificios de Telefónica en las principales ciudades españolas, como el que finalmente se construyó en la plaza de Cataluña en Barcelona, el de la plaza Castelar en Valencia, el de la avenida de Buenos Aires en Bilbao o el de la avenida de la Independencia en Zaragoza. El estilo artístico y la ornamentación que imprimió a sus construcciones fueron de lo más variado, en el convencimiento de que la apariencia externa tenía que adaptarse a la ciudad o región donde se encontrara situado:

La idea nacional de nuestra Compañía se afirmará en las fachadas de sus edificios, los cuales pretendemos siempre que armonicen con el carácter peculiar de cada población, y así se levantó en Santander la primera central de un marcado estilo montañés. Los edificios de Barcelona, Zaragoza y Bilbao son sobrios, clásicos y fuertes. Alegres y luminosos, el de Valencia y la sucursal de El Grao. En el de Sevilla se empleará toda la riqueza decorativa del arte antiguo y moderno sevillano. En las Arenas, en Vizcaya, haremos una Central que se asemejará a un pintoresco caserío vasco, y el de la Gran Vía, de

Madrid, imponente, fuerte, majestuoso y muy español y madrileño, edificio que será el cerebro y el corazón de la vasta organización en que trabajamos.

Las memorias de Ignacio de Cárdenas hablan de un cordial enfrentamiento con Lewis Weeks en relación a la decoración de la fachada del edificio de Madrid. El arquitecto americano pretendía que fuera una copia de la Casa de las Conchas salmantina, mientras que el español prefería optar por la inspiración del barroco madrileño. Afortunadamente, el joven arquitecto impuso su criterio y el edificio Telefónica de la Gran Vía quedó mucho más adecuado a la estética de la nueva avenida madrileña.



Figura 16. El edificio Telefónica de Gran Vía recién terminado, finales de 1929. Fuente: Telefónica.

3.208. Jueves, 29 de octubre de 1925

Circular de la Dirección con motivo de los cambios en la organización

El día después de que Sosthenes Behn reformara la organización de la CTNE, el Vicepresidente Lewis J. Proctor envió una “Circular de la Dirección General a los señores jefes de Departamento, subdirectores de Distrito y otros jefes”. Este comunicado también se hizo público en la edición de noviembre de la Revista Telefónica Española para el conocimiento de todos los empleados de la compañía⁶⁹⁸. En el texto se indicaba que, “por el mejor funcionamiento del servicio de la Compañía”, el Comité Ejecutivo había acordado introducir una serie de modificaciones en la organización de la empresa.

A grandes rasgos se explicaba que la estructura de la CTNE había quedado dividida en dos grandes departamentos (de Administración y de Explotación) y que al frente de cada uno había un Vicepresidente. El encargado del Departamento de Administración tenía a su cargo al Secretario General, Tesorero General, Inspector General, Interventor General, Director de Publicidad y Encargado de Locales. El Vicepresidente del Departamento de Explotación tenía a sus órdenes al Ingeniero Jefe, Director de Construcciones y Conservación, Director de Tráfico y Director Comercial. Además, se creaba la figura del Subdirector General, a las órdenes de los dos vicepresidentes y algunas secciones, como el Departamento de Suministros o la Sección de Seguridad, quedaban incorporadas en otras.

3.209. Domingo, 1 de noviembre de 1925

Inauguración de la central de Hortaleza y la línea Madrid-Valencia

En la reunión del Comité Ejecutivo de 18 de marzo de 1925 se informó de las gestiones que se estaban llevando a cabo para la adquisición de unos locales en el primer piso del número 2 de la calle Hortaleza, en Madrid. El objetivo era instalar una central interurbana que sustituyera a la de la calle Alcalá, que se encontraba ya totalmente saturada, y dar servicio no sólo a todas las líneas que se encontraban en el antiguo cuadro, sino también a las nuevas que se estaban construyendo según el plan de obras de la CTNE, como la de Madrid-Valencia. No obstante, esta central de

⁶⁹⁸ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, p. 29.

Hortaleza sería provisional, ya que todo el cuadro se trasladaría a la central automática definitiva que se iba a instalar en el nuevo edificio de la Telefónica de la Red de San Luis. Como sabemos, la sede central de la compañía fue inaugurada en 1929, así que esta central de Hortaleza estuvo en funcionamiento durante cuatro años.

El traslado de las líneas de la central de Alcalá a la de Hortaleza tuvo lugar en la noche del 31 de octubre de 1925 y fue supervisado por el Director de Tráfico de la compañía, Howard Soler, el Director de Construcciones y Conservación, Roy Walker, el Subingeniero Jefe, Luis Alcaraz, y otros ingenieros de la compañía. La inauguración y puesta en marcha de la central tuvo lugar el 1 de noviembre de 1925 a la una de la tarde y al acto asistieron todas las autoridades: Primo de Rivera, el obispo de Madrid-Alcalá, el gobernador civil, el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación, Tafur Funés, el Marqués de Urquijo, los Vicepresidentes de la CTNE, los Delegados del Gobierno, Gumersindo Rico, el Marqués de Perijáa y otros muchos⁶⁹⁹.

Este día también quedó inaugurada la línea Madrid-Valencia que se había empezado a instalar el 3 de mayo de 1925. El tramo Madrid-Tarancón ya se había puesto en funcionamiento el día 20 de septiembre y en la primera jornada de noviembre se hizo lo propio con la línea completa. Tras los discursos de rigor, pronunciados por el Presidente de la compañía y por el Presidente del Directorio Militar⁷⁰⁰, tanto la nueva central como la línea interurbana quedaron inauguradas de manera simultánea mediante una conversación entre Primo de Rivera y el Capitán general de Valencia. A continuación se pusieron al habla también el resto de autoridades con sus homólogos en la ciudad del Turia: el obispo de Madrid con el vicario capitular de Valencia, los gobernadores civiles, los alcaldes, los presidentes de las Cámaras de Comercio, los presidentes de las diputaciones y los representantes de la prensa.

El nuevo cuadro interurbano estaba formado por 18 posiciones, con capacidad para atender 72 circuitos de larga distancia, aunque en el momento de la inauguración sólo estaban conectados 56. Para comprobar la gran mejora que esta central suponía

⁶⁹⁹ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, pp. 5-19.

⁷⁰⁰ En su discurso, el Marqués de Urquijo explicó, a grandes rasgos, el ambicioso plan que la compañía se había propuesto realizar durante el año 1926, planteado por Sosthenes Behn sólo seis días antes en la reunión del Consejo de Administración de octubre. Por su parte, Primo de Rivera empleó su discurso para justificar la concesión realizada a la CTNE, reconociendo, no obstante, que al principio se produjeron críticas. Confiaba en que el tiempo le acabaría dando la razón con actos como el que se estaba produciendo ese día.

con respecto a la de Alcalá baste decir que la antigua estaba formada por 4 posiciones a la que entraban 18 circuitos. En este edificio también se estaban montando los equipos de telefonía múltiple por división en frecuencia que darían servicio a las líneas Madrid-Burgos y Madrid-Córdoba y permitían la transmisión de varias conversaciones por una misma línea: dos sobre un conductor sencillo, tres sobre un par de hilos.

3.210. Miércoles, 4 de noviembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷⁰¹

Esta fue la primera reunión que celebró el Comité Ejecutivo tras la profunda reestructuración de la compañía que hizo el Coronel a finales del mes de octubre y con la excusa del gran proyecto de obras que se había planteado para el año 1926. Ruiz Senén daba la bienvenida al nuevo miembro del Comité y del Consejo de Administración, Frank Gill, aupado por Sosthenes Behn al cargo de Vicepresidente de explotación de la compañía.

A continuación se hacía constar en acta la satisfacción del Comité por el éxito que había supuesto la inauguración de la central interurbana de Hortaleza, así como la felicitación a todo el personal que había intervenido en los trabajos. También se dio la enhorabuena al Marqués de Urquijo por el discurso pronunciado en el acto, que había recibido los mayores elogios.

En esta reunión se autorizó el pago de 75.000 pesetas a los arquitectos Agustín de Aguirre y Manuel de los Santos como premio del concurso de proyectos para el edificio de Barcelona.

También se acordó adjudicar a los contratistas Pedroso y Cubillo las obras del edificio provisional que serviría para albergar la central automática en el solar de la Gran Vía. Con respecto a la continuación de la canalización subterránea de las líneas en el centro de Madrid, se había dividido el proyecto en tres secciones. De las proposiciones presentadas, se decidió conceder dos de las secciones a la firma “Cubiertas y Tejados, S.A.”, que ya estaba construyendo el edificio de la subcentral de Hermosilla, y la otra sección a “S.A. Vallhonrat”. No obstante, se delegaba la última

⁷⁰¹ Acta nº 64, 4 de noviembre de 1925, libro 1, pp. 86-87.

valoración y decisión final en el nuevo Vicepresidente encargado de obras y construcciones, Frank Gill.

Ruiz Senén se refirió entonces a “determinadas actitudes y manifestaciones exteriorizadas cerca [de él] por personas ajenas” a la organización que le han hecho pensar que, en alguna ocasión, han podido trascender algunas decisiones del Comité Ejecutivo más allá de las puertas de la sala de reuniones. Recordaba que lo discutido ahí sólo debía ser conocido en el seno del Comité y que no deberían filtrarse los acuerdos ni los comentarios, por lo que pedía que se ejerciera “la más escrupulosa vigilancia”.

3.211. Jueves, 5 de noviembre de 1925

Adquisición de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña

Como hemos visto en capítulos anteriores, el día 30 de junio de 1925 finalizaba el plazo concedido a la Comisión gestora interina para determinar qué hacer con los servicios que estaban en manos de la antigua Mancomunidad de Cataluña, que había quedado disuelta por el Real Decreto de 20 de marzo que implantó el Estatuto Provincial. La Compañía Telefónica Nacional quiso aprovechar la situación de debilidad de la corporación catalana para adquirir su red telefónica en unas condiciones favorables para sus intereses. Se nombró a tres peritos para tasar las propiedades telefónicas de la Mancomunidad, dos por parte de la Comisión gestora y uno por parte de la compañía, que no era otro que el antiguo Director de la Red Esteban Terradas, gran conocedor de los entresijos de la corporación. No obstante, el acuerdo no llegó, debido a la enorme diferencia existente entre el precio que los ingenieros de la Mancomunidad consideraban justo y la oferta hecha por la CTNE, que no llegaba ni a la mitad del valor tasado por los peritos.

En vista de que no hubo entendimiento final entre las partes, la Comisión gestora interina resolvió adjudicar todas las propiedades telefónicas a las cuatro diputaciones catalanas, que pasaban a ser las nuevas concesionarias de la red. La compañía recurrió al arbitraje del Director General de Comunicaciones, pero, aunque no se tiene constancia de las gestiones realizadas por éste, parece que no tuvieron el efecto deseado para la compañía porque la Comisión gestora se mantuvo en su posición. Ante esta situación, la CTNE tenía dos opciones. Una era esperar hasta que la concesión caducara el 26 de diciembre de 1957 y la red pasara a sus manos de manera gratuita, lo que implicaba esperar más de 30 años. La otra era ceder en sus

pretensiones de adquirir las propiedades telefónicas de la Mancomunidad a un precio tan favorable y aceptar el valor estipulado por los peritos de la Comisión gestora interna, que era de 4.621.926,02 pesetas.

La compañía optó, evidentemente, por la segunda opción. El coste podía no ser tan conveniente como el que había pagado por las propiedades telefónicas del Estado o por otras redes urbanas en manos de pequeños concesionarios, pero sin duda era mejor que esperar 30 años a que caducara la licencia. Los beneficios por explotación del servicio en Cataluña durante estas tres décadas compensarían, sin duda, el gasto realizado en este momento.

Después de tantos años de negociaciones y conflictos, las redes de la Mancomunidad pasaron a manos de la Compañía Telefónica Nacional de España el día 5 de noviembre de 1925, mediante escritura pública otorgada en Barcelona ante el notario Manuel Borrás y de Palau. Está fue firmada por el Presidente de la Comisión gestora interina, José María Milá i Camps, en representación de la Mancomunidad, y por el abogado de la CTNE, José Bertrán y Musitu. Los términos del contrato eran muy similares a todos los que había suscrito la empresa en la adquisición de intereses telefónicos, como en lo referente a la admisión de todo el personal de la red en la compañía. Lo CTNE también consiguió heredar las obligaciones que la Mancomunidad había adquirido con algunos ayuntamientos de la región, que se habían comprometido a facilitar a sus expensas el local, el personal, los gastos de suministros, etc. Esto sin duda significaba un ahorro importante para la empresa, que siguió obligando a estos consistorios a que sufragaran los gastos ocasionados por la explotación del servicio telefónico mientras que la compañía recaudaba las facturas de sus abonados⁷⁰².

No hay que olvidar que, aunque la cantidad pagada por la CTNE fuera finalmente el justiprecio establecido por la Comisión gestora interina (algo más de 4 millones de pesetas), ésta había estimado en su informe para la liquidación de la Mancomunidad que la inversión realizada en telefonía durante su década de existencia había sido de 9 millones de pesetas. Las propiedades liquidables habían sido valoradas en 6,5 millones, lo que significa que la comisión había valorado que sus propiedades telefónicas se habían devaluado por el uso en un 30% durante diez años, un porcentaje ya de por sí bastante positivo para los intereses de la CTNE. No

⁷⁰² Yuste-2004, pp. 228-229.

obstante, ésta pretendía que la rebaja fuera de casi el 70% al ofrecer sólo 2,1 millones de pesetas.

Según datos del investigador Ángel Calvo Calvo, cuando las propiedades telefónicas de la Mancomunidad pasaron a manos de la compañía, la red se extendía a lo largo de 5.932 kilómetros y contaba con 3.189 abonados⁷⁰³. Esto significa que el coste final para la CTNE fue de más de 1.200 pesetas por abonado. Este dato no puede compararse con otros costes relativos que la compañía satisfizo por algunas redes telefónicas urbanas que hemos estudiado en esta investigación, ya que la red de la Mancomunidad tenía un marcado carácter rural y su principal valor se encontraba en las líneas interurbanas. Como ya vimos, la valoración de la Comisión gestora había estimado que estas líneas suponían el 70% del coste total, lo que implicaba que los centros urbanos y sus activos sólo supusieran un tercio del valor total de la red. La Mancomunidad se había esforzado por llevar la telefonía al mayor número de pueblos posible, así que se realizaron grandes inversiones en construir líneas que llegaran hasta esas poblaciones, para luego dar servicio a muy pocos abonados, cuando no sólo al locutorio de la plaza del pueblo. De esta forma se entiende el elevado coste medido en pesetas por abonado que supuso la red de la Mancomunidad para la CTNE.

3.212. Miércoles, 11 de noviembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷⁰⁴

A propósito de los informes de ingresos y gastos presentados en esta reunión, Proctor hizo notar que en general se notaba un importante aumento de la recaudación total por servicios de la compañía, lo que provocó la felicitación de todos los vocales presentes. A continuación, el Comité acordó, en atención al próximo vencimiento del trimestre en curso, el reparto del dividendo del 7% anual que recompensaba a las acciones preferentes en circulación, siguiendo el mismo criterio que en ocasiones anteriores.

Proctor informó al Comité de la petición formulada por la Asociación general de Empleados y Obreros de la compañía respecto al abono de una paga extraordinaria de

⁷⁰³ Calvo-2008, p. 171.

⁷⁰⁴ Acta nº 65, 11 de noviembre de 1925, libro 1, pp. 87-88.

Navidad a todo el personal. Como sabemos, ésta era una de las trece peticiones que el Pleno de la Junta general de la Asociación había solicitado a la Dirección en el mes de octubre. Después de estudiar detenidamente el caso, el Comité acordó no acceder a la solicitud de la plantilla aduciendo que la empresa se encontraba “todavía en periodo de iniciación y los rendimientos de la misma, en el momento presente, no permiten conceder a sus funcionarios y obreros la bonificación extraordinaria mencionada”. Recordemos que sólo un momento antes, el Comité se había congratulado por la buena marcha de la empresa y por el importante aumento en la recaudación.

No obstante, finalmente se decidió conceder una pequeña bonificación extraordinaria “a fin de demostrar [...] la buena voluntad que en tal sentido le anima y por especial deferencia a los empleados de menos categoría o de sueldo más pequeño”. La paga extra equivalía al 10% de la nómina mensual para aquellos empleados cuyo sueldo anual no excediera las 4.000 pesetas y hubieran ingresado en la compañía antes del día 1 de julio de 1925. Es interesante mencionar también en este momento que en la sesión de la semana anterior, el Comité había aprobado que los trabajadores extranjeros cobraran no sólo el sueldo que correspondía a su puesto, ya de por sí elevado por tratarse de altos cargos, jefes y directivos, sino que recibieran además un sobresueldo cuyo límite superior quedaba a discreción de la Dirección de la compañía.

Por último, se acordó delegar en el Marqués de Hoyos, que amablemente se había ofrecido a ayudar a la compañía, todas las gestiones para la adquisición del centro telefónico urbano de Torrelavega (provincia de Santander), que se encontraba en manos de la “Sociedad Telefónica Montañesa”.

3.213. Viernes, 13 de noviembre de 1925

Comienzan las obras del edificio provisional de Gran Vía

Una vez que la ITT hubo adquirido la *International Western Electric Company*, la decisión sobre el modelo de central que se iba a instalar en las ciudades españolas no admitió ningún tipo de discusión. Ya hemos visto como Sosthenes Behn tuvo que esperar un año para dar comienzo a su proyecto de automatización de las redes urbanas de nuestro país debido a sus negociaciones con la *Western Electric* para hacerse con su filial internacional. Cuando esa adquisición fue confirmada, Proctor viajó inmediatamente a París para reunirse con el Coronel y dar comienzo así al plan

de modernización integral de los centros telefónicos urbanos. Durante su estancia en la capital francesa, Proctor y Behn tuvieron tiempo de diseñar el proyecto de automatización del servicio de la capital y de realizar los primeros pedidos de centrales a la fábrica de Amberes que producía el modelo Rotary.

A su vuelta a Madrid, Proctor expuso en una reunión del Comité en qué consistía a grandes rasgos el plan que se iba a seguir para automatizar la telefonía de toda la ciudad en un plazo de un año⁷⁰⁵. La central con capacidad para 7.000 líneas se instalaría en el nuevo solar de la Gran Vía, en una construcción provisional erigida al efecto, y que años más tarde quedaría totalmente sustituida por el edificio definitivo. Además se instalarían dos subcentrales de 5.000 líneas cada una: en la calle Hermosilla y en la calle Jordán.

Los edificios de las subcentrales ya estaban siendo contruidos o reformados, así que sólo quedaba levantar el edificio provisional que habría de albergar la central en el solar de la Red de San Luis, en la parte posterior del terreno. Para ello se había abierto un concurso con el fin de que empresas constructoras presentaran sus proyectos, que fueron evaluados por una comisión calificadora formada por el Ingeniero Jefe de la compañía, Fred T. Caldwell, el abogado José Hernández Pinteño y el arquitecto y Jefe del Departamento de Edificaciones, Ignacio de Cárdenas. Estos habían estudiado los proyectos y se habían decantado por el de la firma “Pedroso y Cubillo”, acordándose entonces adjudicar las obras de ese edificio provisional a esta empresa.

Las obras dieron comienzo el 13 de noviembre de 1925 y la instalación de la central automática se inició el 8 de marzo de 1926, lo que significa que el edificio se levantó en menos de cuatro meses. En este inmueble se construyó la central provisional con capacidad para 7.000 líneas aunque era ampliable a 10.000 y cuyo fin era substituir a la antigua central de la calle Mayor. La compañía pretendía de esta forma automatizar el sistema telefónico madrileño antes de que terminara el año 1926, aunque el edificio Telefónica todavía tardara varios años en terminarse.

Las obras del famoso rascacielos de la Gran Vía terminaron en 1929 y durante las mismas también se procedió a instalar la central automática definitiva, abandonando así esta primera de 7.000 líneas. La nueva tenía una capacidad para

⁷⁰⁵ Acta nº 56 del Comité Ejecutivo, 14 de septiembre de 1925, libro 1, pp. 73-74.

40.000 abonados y a ella también se trasladó todo el cuadro interurbano de la calle Hortaleza. Esa otra central interurbana provisional también fue abandonada una vez que el flamante sistema de la Gran Vía estuvo en pleno funcionamiento⁷⁰⁶.



Figura 17. Obras del edificio Telefónica de la Gran Vía, 1926. En la parte derecha se puede apreciar el edificio provisional que alberga la primera central automática. Fuente: Telefónica.

3.214. Sábado, 14 de noviembre de 1925

Las subcentrales de Salamanca y Jordán y la automatización de Madrid

El proyecto de automatización que Proctor y Behn había desarrollado para Madrid incluía también dos subcentrales de 5.000 líneas, ampliables a 20.000, que se iban a instalar en las calle Hermosilla y Jordán.

Para la subcentral de Hermosilla se estaba construyendo un edificio totalmente nuevo en un solar adquirido en la confluencia de esta calle con Núñez de Balboa. En la cuarta reunión del Comité Ejecutivo, Proctor ya informó de haber recibido una oferta por un terreno situado al lado de la antigua central manual del barrio de Salamanca.

⁷⁰⁶ McKim-1928, pp. 128-129.

Dos reuniones más tarde, a principios de octubre, el Comité fue informado de que ya la compañía ya se había comprometido a adquirir el solar de 870 metros cuadrados⁷⁰⁷. En diciembre se convocó un concurso de proyectos para el edificio de la subcentral, al que finalmente se presentaron 19 empresas. La CTNE nombró una comisión encargada de estudiar y calificar todas las propuestas, formada por Lewis J. Proctor, el Marqués de Perijáa, Gumersindo Rico y el abogado de la CTNE José Hernández Pinteño. Finalmente, en la reunión del 7 de enero de 1925 se dio a conocer el nombre de la compañía que había ganado el concurso, “Cubiertas y Tejados, S.A.”, y el Comité aprobó la adjudicación de las obras y el comienzo de las mismas⁷⁰⁸.

La Revista Telefónica Española informaba, en su edición de diciembre de 1925, que el 14 de noviembre se había “cogido las aguas” del edificio, lo que quiere decir que se había terminado de cubrir el tejado⁷⁰⁹. Por lo tanto, la obra estaba a punto de finalizarse, con lo que en breve podría darse comienzo a la instalación de la subcentral automática. Esta labor se inició el día 6 de febrero de 1926⁷¹⁰.

Para la subcentral de la calle Jordán no se levantó un inmueble nuevo, como en el caso de Hermosilla, sino que se decidió reformar totalmente el antiguo edificio de la Compañía Madrileña de Teléfonos. Para llevar a cabo este plan, la compañía también convocó un concurso, al que se presentaron seis empresas de construcción. Para el estudio y calificación de las propuestas que habían concurrido, el Comité Ejecutivo nombró una comisión, formada por los cinco hombres que habían valorado los proyectos del edificio de Hermosilla, que consideró que el plan de un tal Pablo Cauto Navarro era el más adecuado. En su reunión del 14 de enero de 1925, el Comité Ejecutivo acordó encargar las obras a este contratista⁷¹¹. La instalación de la subcentral dio comienzo un año más tarde, el 16 de enero de 1926.

Ya hemos visto entonces como entre enero y marzo de 1926 la compañía empezó a equipar a la ciudad con tres centrales automáticas. Durante ese año los empleados de la CTNE trabajaron sin descanso para realizar esta instalación y para

⁷⁰⁷ Acta nº 4 del Comité Ejecutivo, 26 de septiembre de 1924, libro 1, p. 3; acta nº 6, 8 de octubre de 1924, libro 1, p. 4.

⁷⁰⁸ Acta nº 23 del Comité Ejecutivo, 7 de enero de 1924, libro 1, p. 23.

⁷⁰⁹ Revista Telefónica Española, nº 12, diciembre de 1925, p. 33.

⁷¹⁰ McKim-1928, p. 128.

⁷¹¹ Acta nº 24 del Comité Ejecutivo, 14 de enero de 1924, libro 1, p. 24.

soterrar los cables aéreos de Madrid, con la intención de que la red automática estuviera lista antes de que terminara 1926. Finalmente, el traspaso del sistema manual al automático tuvo lugar durante la noche del 29 al 30 de diciembre de 1926. De esta forma comenzaron a funcionar las tres centrales construidas: la provisional de Gran Vía, la de Hermosilla y la de Jordán. La antigua situada en la calle Mayor fue desmantelada poco después.

La inauguración tuvo lugar el día 30 de diciembre y estuvo presidida por el rey Alfonso XIII, acompañado por todas las personalidades que han protagonizado este Trabajo Fin de Máster: Primo de Rivera, Tafur Funés, el Marqués de Urquijo, Sosthenes Behn, Hernand Behn, Fred T. Caldwell, etc. Además asistieron numerosos embajadores, varios miembros del Directorio Militar, el Nuncio del Papa y el obispo de Madrid-Alcalá⁷¹², que procedió a bendecir la nueva central de Gran Vía.

3.215. Martes, 17 de noviembre de 1925

La Exposición Nacional de Maquinaria

El día 17 de noviembre de 1925 el rey Alfonso XIII inauguraba en los Palacios del Retiro de Madrid la Exposición Nacional de Maquinaria⁷¹³. En esta muestra la CTNE había montado un equipo de conmutación automática como los que iba a instalar en las ciudades de toda España, aunque éste era más bien una reproducción a pequeña escala, que no obstante funcionaba como las grandes centrales que estaban en proyecto. Se trató de la primera demostración práctica del sistema Rotary llevada a cabo en España. La Revista Telefónica Española explicaba en un artículo la curiosidad que había levantado el sistema automático entre los asistentes y el interés mostrado por Alfonso XIII y la familia real cuando llegaron al “stand” de la compañía. La publicación también indicaba que este mismo equipo iba a ser instalado en el mes de diciembre en una muestra que se iba a celebrar en el Palacio de Hielo de Madrid y que después posiblemente se expondría en la sede de la compañía en la avenida Conde de Peñalver⁷¹⁴.

⁷¹² Revista Telefónica Española, volumen 3, nº 1, enero de 1927, pp. 7-22.

⁷¹³ ABC, 18 de noviembre de 1925, p. 15.

⁷¹⁴ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, pp. 36-37.

3.216. Miércoles, 18 de noviembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷¹⁵

Proctor abría la sesión refiriéndose al acuerdo adoptado en la reunión anterior respecto a la paga extra de Navidad, que correspondía a un 10% del sueldo mensual para aquellos empleados cuya retribución anual no excediera las 4.000 pesetas. El Vicepresidente proponía dejar sin efecto el acuerdo al que se había llegado y entregar a la asociación la totalidad del importe que la compañía tendría que entregar por este concepto, para que aquélla lo distribuyera como considerara oportuno entre los empleados. El motivo que llevaba a este razonamiento era el de fomentar la actuación de la asociación, facilitándole eso sí los medios para que actuara “con libertad”.

Lo que ocurrió a continuación fue un hecho sin precedentes en más de un año de reuniones de los dos órganos de gobierno de la empresa: el Comité rechazó la propuesta de Lewis J. Proctor. Si bien apreciaban y entendían las razones que asistían al Vicepresidente, el resto de miembros estimaban que toda resolución referente a la Asociación de Empleados debía aplazarse hasta que el proyecto sobre fondo benéfico fuera definitivamente aprobado. Por ello, según las indicaciones que hacía Ruiz Senén, se mantenía firme el acuerdo adoptado en la reunión anterior y además se extendía la remuneración del 10% del importe del sueldo mensual a todos los empleados de la compañía.

Gumersindo Rico informaba entonces sobre un caso que se estaba produciendo en la ciudad de Córdoba con respecto a las propiedades adquiridas por la compañía. El anterior concesionario, Antonio González Portocarrero, seguía pagando los alquileres de algunos edificios que se empleaban para la explotación del servicio telefónico urbano, tal y como había quedado estipulado por contrato cuando esta red fue adquirida por la CTNE. Sin embargo, uno de los propietarios había elevado el arrendamiento a una “cantidad notoriamente superior a la que dicho exconcesionario satisfacía por tal concepto durante la vigencia de su concesión”, por lo que González Portocarrero suplicaba a la compañía que tomara medidas en el asunto. El Comité estudio el caso y decidió relevar al empresario en dicha obligación y además reintegrarle las cantidades que hubiera pagado en concepto de diferencia entre el

⁷¹⁵ Acta nº 66, 18 de noviembre de 1925, libro 1, pp. 88-90.

precio que él satisfacía durante su concesión y el fijado por el propietario después de que la red fuera adquirida por la compañía. No obstante, el caso se pasaría a la Sección de lo Contencioso para que tomara las acciones pertinentes contra el arrendador de ese edificio.

Por último, Frank Gill intervino para explicar la obra realizada conforme al plan de construcciones para el año 1925, que se había cumplido casi en su totalidad. Gill indicaba además que lo poco que faltaba por completarse se incluiría dentro del ambicioso programa para 1926, que estaba próximo a iniciarse.

3.217. Sábado, 21 de noviembre de 1925

Creación del Comité Paritario Nacional de Teléfonos

Aunque la creación de los comités correspondía al Gobierno, la Junta directiva de la Asociación de Empleados de la CTNE dirigió una instancia, con fecha 22 de abril de 1925, solicitando la constitución de un Comité Paritario Nacional Permanente de Teléfonos. El día 23 de julio se celebró una reunión en el Ministerio de Trabajo entre Luis Alcaraz, Presidente de la asociación, y Logan N. Rock, en representación de la empresa, para tratar el asunto de la creación del comité. Como ambas partes estuvieron de acuerdo en seguir adelante con el proceso, el Director general de Trabajo y Acción social abrió un periodo de información pública para que cualquier persona o entidad pudiera presentar sus opiniones con respecto a la creación del Comité Paritario. Dos días antes del vencimiento de dicha información pública, Valentín Ruiz Senén envió un informe en el que manifestaba que la Dirección de la CTNE daba el visto bueno a la nueva entidad e instaba al Subsecretario del Ministerio a que procediera a la formación de ésta.

El día 21 de noviembre de 1925 se firmaba el Real Decreto por el que se constituía, con residencia en Madrid y jurisdicción en toda España, un Comité Paritario Nacional Permanente de Teléfonos⁷¹⁶. El texto expositivo comenzaba diciendo que el caso concreto de las compañías de teléfonos no estaba resuelto con el detalle necesario en la legislación vigente, como ya sabían perfectamente los miembros de la

⁷¹⁶ Real Decreto de la Presidencia del Directorio Militar, de 21 de noviembre de 1925. Gaceta de Madrid, 24 de noviembre de 1925, nº 328, pp. 1010-1011.

Asociación de Empleados de la CTNE⁷¹⁷. No obstante, debido a que la telefonía se trataba de un servicio público “de vital importancia” y que además se encontraba explotada en régimen de monopolio, era importante que se diera una “perfecta armonía” entre la Dirección de la empresa y sus empleados. De ahí que el Gobierno tuviera que intervenir y velar para que los conflictos se resolvieran de una manera pacífica, creando para ello el Comité Paritario Nacional de Teléfonos. Se dejaba asimismo claro que el comité tenía jurisdicción en toda España, aunque tuviera residencia en Madrid, ya que el servicio telefónico es igual en cualquier parte y en consecuencia las relaciones laborales también.

Se constituía en consecuencia el Comité Paritario, que estaría formado por nueve vocales nombrados por la Dirección de la CTNE, en concepto de patronos, y por nueve vocales representando a los trabajadores, en concepto de obreros, y estaría presidido por una persona, ajena a la compañía, designada libremente por el Gobierno. El artículo quinto, por su parte, especificaba cuáles eran los fines del organismo:

Las facultades del Comité alcanzarán a fijar las condiciones del trabajo y su retribución y a servir de Consejo de conciliación en las diferencias individuales o colectivas que surjan entre la Compañía y sus Agentes, sin perjuicio del derecho de aquélla y de estos para solventar ante los Tribunales sus pleitos privados.

Como resulta de la creación de este Comité, la compañía tenía un órgano más con el que tratar cuando se trataba de las relaciones con sus trabajadores. No obstante, éste no afectó mucho a la marcha de estas negociaciones ya que la Dirección siempre trató de conducir todos los procesos a través de la Asociación general de Empleados que ella misma había creado, dejando al Comité aquellas diferencias que no pudieran ser resueltas por la primera. Antonio Pérez Yuste en su tesis de 2004 decía que el resultado de todo ello fue una “aparente paz social” dentro de la Compañía Telefónica Nacional. No obstante, este autor indica que también se acusó al Comité Paritario de no ser imparcial y favorecer los intereses de la sociedad privada⁷¹⁸:

⁷¹⁷ Véase crónica del día 22 de abril de 1925.

⁷¹⁸ Yuste-2004, pp. 280-281.

Se vertieron graves acusaciones acerca de la neutralidad de los representantes de los trabajadores en el Comité Paritario de Teléfonos. Según Ayats, éstos eran designados de entre los miembros de la Asociación General de Empleados y Obreros de la CTNE, cuyos directivos, según él, eran a su vez propuestos por la propia Compañía.

3.218. Miércoles, 25 de noviembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷¹⁹

En esta jornada, Proctor informó sobre las proposiciones que se habían recibido para la construcción del edificio de Santander. El Comité acordó adjudicar las obras a un contratista llamado Julio Soler, ya que su oferta era la que reunía las condiciones más ventajosas.

Proctor también explicó que la empresa “S.A. Vallhonrat”, a la que se había adjudicado la canalización subterránea de uno de los tres sectores en los que se había dividido el plan, no se comprometía a realizar las obras conforme a los precios que había presentado en su proyecto, aumentando en un 25% el coste total. En vista de la modificación y de que “no era la Sociedad Anónima Vallhonrat la que directamente concurría” (¿?), se decidió adjudicar también esta sección a “Cubiertas y Tejados, S.A.”, que era la empresa que se encargaba de las otras dos secciones y que además estaba construyendo el edificio de la subcentral de Hermosilla.

El Tesorero General había preguntado qué hacer con los títulos de acciones de las antiguas compañías del grupo Peninsular, que todavía no habían sido destruidos. En la reunión celebrada por el Comité el día 4 de marzo de 1925 se había tomado la decisión de quemar dichos títulos, pero finalmente no se había podido llevar a cabo esta acción porque la fusión de las tres empresas no había sido registrada convenientemente todavía. En esta sesión de 25 de noviembre se acordó, no obstante, ratificar la decisión y quemar los antiguos títulos. Parece que la decisión había sido tomada en base a que, como sabemos, la fusión había quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el día 19 de octubre de 1925, por lo que la fusión ya era oficial, así como la desaparición total de las tres compañías de Enrique Parellada.

⁷¹⁹ Acta nº 67, 25 de noviembre de 1925, libro 1, pp. 90-91.

Por otro lado, en la reunión del Comité de 25 de marzo de 1925 se había presentado un proyecto de tarifas para servicios radiotelefónicos, que fue aprobado y entregado a la Delegación del Gobierno para que resolviera como considerara más conveniente. Sin embargo, la representación del Estado en la compañía no se manifestó hasta el mes de noviembre, cuando envió un comunicado oficial a la Dirección de la compañía. El Comité examinó detenidamente el texto enviado por los Consejeros Delegados y, aunque en el acta no se detallaron los términos en los que se expresaba, se deja intuir que estos habían aprobado las tarifas propuestas por el Comité. Pusiera lo que pusiese, se acordó aplazar toda resolución sobre este asunto hasta que los Tribunales no se declararan en relación al pleito entablado por la compañía contra la resolución gubernamental referente a las concesiones microfónicas⁷²⁰. La compañía decidía de esta forma no abrir varios “frentes” con el Gobierno, dejando primero que se resolviera la cuestión de las líneas microfónicas, para iniciar luego su campaña con respecto al servicio radiotelefónico.

Por último, se volvió a estudiar y deliberar con respecto a la bonificación extraordinaria de Navidad, esta vez con la asistencia del Inspector General, Logan N. Rock. El Comité reiteraba su deseo de conceder una paga extra del 10% del sueldo mensual a todos los trabajadores de la compañía, independientemente de la “subvención o donativo” que se concediera a la Asociación de Empleados. Rock cerró la sesión explicando el objeto social y funcionamiento de esta asociación y el proyecto de fondo benéfico que todavía se estaba estudiando.

El conde de Güell es nombrado consejero de la ITT

Juan Antonio Güell y López, II Conde de Güell y III Marqués de Comillas, había sido nombrado consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 28 de octubre de 1925. Juan Antonio Güell había heredado el condado de su padre Eusebio, pero el marquesado le había llegado por haber muerto su tío Claudio López Bru, II Marqués de Comillas, sin descendencia. El conde de Güell también heredó el sillón que había ocupado su tío en el Consejo de la CTNE y poco después ocurrió lo mismo con el cargo de consejero que también perteneció al II Marqués de Comillas en la *International Telephone and*

⁷²⁰ Véase crónicas de los días 12 de agosto de 1925 y 21 de octubre de 1925.

Telegraph Co durante unos meses antes de su fallecimiento en el mes de abril. El día 25 de noviembre de 1925 se recibía un cablegrama de Hernand Behn, Vicepresidente de la ITT, en el que se comunicaba esta noticia⁷²¹:

Nos es grato participarle que en la Junta del Consejo de Administración de la International Telephone and Telegraph Corporation celebrada hoy fue usted unánimemente electo Consejero de esta corporación. Constituye un alto honor para los miembros de la Junta directiva el que usted acepte nuestra invitación a formar parte de la misma, y nos congratulamos de estar asociados a tan distinguido representante de España, cimentando de este modo las estrechas relaciones ya existentes entre las Compañías Telefónicas española y americana en el mutuo esfuerzo de proveer a España de un sistema telefónico eficiente y completo, para la mayor prosperidad de la Nación.

El conde de Güell también heredó de su tío la presidencia de la Compañía Transatlántica Española y los cargos de consejero en muchas sociedad de la familia: el Banco Hispano-Colonial, la Compañía Minas del Rif, los Ferrocarriles del Norte, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, la Sociedad Hullera y Carbonera Española y más. Esta noticia también fue ampliamente reproducida en los diarios de aquellos días⁷²².

3.219. Jueves, 26 de noviembre de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁷²³

El Marqués de Urquijo abrió la sesión dando posesión de sus cargos a los nuevos consejeros de la compañía: Frank Gill, Ingeniero Jefe de la Standard Electric y ahora Vicepresidente de Explotación de la CTNE, Logan N. Rock, Inspector General de la compañía, y Juan Antonio Güell y López, conde de Güell. Éste último no asistió a la reunión, por lo que todavía no pudo ocupar el asiento que había pertenecido a su tío, el Marqués de Comillas. Rock y Gill sí asistieron y dieron las gracias por el recibimiento y prometieron poner el mayor entusiasmo a favor de los intereses de la

⁷²¹ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, p. 37.

⁷²² ABC, 26 de noviembre de 1925, p. 20; El Imparcial, 26 de noviembre de 1925, p. 5; El Sol, 26 de noviembre de 1925, p. 6; La Época, 26 de noviembre de 1925, p. 2; La Vanguardia, 27 de noviembre de 1925, p. 9; El Globo, 2 de diciembre de 1925, p. 2.

⁷²³ Acta nº 21, 26 de noviembre de 1925, libro 1, pp. 46-49.

compañía. No obstante, el segundo tuvo que ser ayudado por Lewis J. Proctor para expresarse ya que todavía no dominaba el castellano.

En esta reunión se aprobaron, como siempre, todas las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo desde la última sesión del Consejo, que fue el día 26 de octubre. En este caso, el hecho revierte especial notoriedad ya que, de los miembros del Consejo, tampoco hubo ninguno que realizara el mínimo comentario ante los enormes cambios organizativos introducidos por Behn en la reunión celebrada por el Comité el día 28 de octubre. Tampoco se discutió la decisión de inflar los sueldos de los trabajadores extranjeros mediante una paga extraordinaria que no quedaría reflejada de manera oficial en las nóminas de estos empleados, así como tampoco el acuerdo de no convocar más concursos públicos para los proyectos de los edificios de la compañía.

Ruiz Senén informó de la determinación que había tomado el Comité Ejecutivo con respecto a las tarifas del servicio radiotelefónico y al recurso todavía en los Tribunales respecto a las concesiones de líneas microfónicas, aplazando todo movimiento hasta que no se dictara una sentencia definitiva a este respecto. El Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda se mostró de acuerdo con esta resolución, aunque informó de que, si la compañía lo deseaba, no habría inconveniente en implantar las tarifas propuestas y seguir con el proceso judicial por el otro lado.

Antes de cerrar la sesión, el Marqués de Urquijo informó detalladamente de la adquisición de todas las propiedades y concesiones telefónicas de la extinguida Mancomunidad de Cataluña, todas las cuales habían pasado a poder de la compañía según escritura pública otorgada en Barcelona. El Consejo mostró su “completa aprobación y conformidad” por dicha operación.

3.220. Lunes, 30 de noviembre de 1925

Liquidación definitiva de la Mancomunidad

Todas las redes de la Mancomunidad pasaron a manos de la compañía el día 5 de noviembre de 1925, después de que la CTNE tuviera que ceder ante el precio de 4 millones impuesto por los peritos de la corporación. Este acuerdo quedó plasmado en la liquidación definitiva de la Mancomunidad de Cataluña propuesta por la Comisión gestora interina de los Servicios coordinados el día 30 de noviembre de 1925. Ésta fue

aprobada por Primo de Rivera el 28 de enero de 1926 mediante Real Orden, lo que significaba que el organismo dejaba de existir tal y como se había conocido hasta el momento, aunque las diputaciones pudieran seguir mancomunándose para coordinar algún servicio u obra concreto.

La Comisión gestora consideró que esta venta había sido un éxito, “jamás por ella sospechado”, ya que consideraban que la compañía partía de una posición ventajosa, en tanto en cuanto la Mancomunidad había sido tocada de muerte mientras que la CTNE gozaba de un monopolio concedido por el Estado. Milá i Camps se felicitaba por haber conseguido que la empresa cediera ante su “justa petición de recibir el íntegro precio señalado por nuestros peritos, que era el máximo atribuible a la red interprovincial, dadas sus condiciones de construcción y desgaste”⁷²⁴.

De esta forma la Compañía Telefónica Nacional de España se hizo con la última gran concesión telefónica que todavía no se encontraba bajo su control. Durante el año 1925 había seguido adquiriendo otras redes por compra de sus propiedades a los anteriores concesionarios: Salamanca, Oviedo, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Mérida, etc. Además, durante aquel año también se hizo con el control de los centros urbanos de Albacete y Mahón (en Menorca) por haber terminado el plazo de concesión con el Estado, por lo que fueron incorporados sin coste alguno para la compañía⁷²⁵.

El resto de redes telefónicas, como las provinciales de Vizcaya y Ciudad Real, fueron poco a poco pasando a sus manos, ya fuera por acuerdos de compra con los anteriores propietarios o por el fin de las licencias de las que estos disfrutaban. En 1930 ya sólo quedaban siete concesiones fuera de su control: cinco centros telefónicos urbanos (San Sebastián, Berga, Guardiola, Jaén y Melilla), la red de provincial de la diputación de Guipúzcoa y el grupo telefónico de Castro-Urdiales. También estos fueron adquiridos poco a poco por la compañía hasta que sólo quedaron las dos concesiones de la provincia de Guipúzcoa. Las condiciones de reversión eran muy distintas para estos casos: la Diputación tenía un plazo de concesión de 35 años mientras que el ayuntamiento de la capital tenía una licencia de explotación a perpetuidad. La red provincial reversionó de manera gratuita el día 16 de

⁷²⁴ Yuste-2004, p. 229.

⁷²⁵ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1925, p. 5.

diciembre de 1944, tras la mediación de alguna resolución ministerial⁷²⁶. Por su parte, el consistorio donostiarra llegó a un acuerdo con la CTNE para la venta de la red municipal y la cesión de todos los derechos como concesionario para la explotación de la misma en diciembre de 1970. El precio final que se fijó para esta transferencia fue de 1.000 millones de pesetas⁷²⁷.

Aviso a los empleados afiliados a la Asociación de Empleados

La Revista Telefónica Española publicaba en su edición de noviembre una nota de la Asociación general de Empleados y Obreros llamando la atención a aquellos socios que también estuvieran afiliados a otros sindicatos u organizaciones laborales⁷²⁸:

La Junta directiva ha tenido noticia de que varios afiliados a esta entidad están inscriptos, al propio tiempo que en nuestra Asociación, en un Sindicato similar u organización obrera, habiendo acordado poner en conocimiento de todos los asociados que en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la publicación de este anuncio en la Circular núm. 13, comuniquen los que estén en el expresado caso a cuál de las dos entidades desean pertenecer, pues de no verificarlo causarán baja en ésta.

La nota tenía fecha de 30 de noviembre de 1925 y aparecía firmada por la Junta directiva de la Asociación. Parece claro que la compañía no estaba dispuesta a que sus empleados disfrutaran de las ventajas de pertenecer a la asociación que ella misma había organizado, mientras que a la vez siguieran afiliados a otros sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores. Ya hemos visto como la Dirección de la CTNE quiso, desde el principio, dar todo tipo de ventajas a la constitución y fortalecimiento de su Asociación de Empleados para tener perfectamente controlados todos los movimientos obreros que pudieran surgir en su seno. La pertenencia de algún empleado a otro sindicato no entraba dentro de sus planes, por lo que se obligó a todo aquel que estuviera asociado a dos organismos que eligiera. No parece difícil imaginar las intenciones de la compañía en este caso: la

⁷²⁶ Gutiérrez-1998, pp. 262-263.

⁷²⁷ Gutiérrez-1998, pp. 202-203.

⁷²⁸ Revista Telefónica Nacional, nº 11, noviembre de 1925, p. 57.

elección parecía, en principio, bastante obvia. La pertenencia a la Asociación de Empleados de la CTNE era totalmente gratuita y daba acceso a gran cantidad de ventajas y beneficios, sufragado todo ello por la propia compañía.

3.221. Miércoles, 2 de diciembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷²⁹

Proctor volvió a plantear el asunto referente a la paga extra de Navidad de los trabajadores de la compañía, que no se terminaba de resolver de manera definitiva. La Inspección General había planteado tres propuestas y el Comité las estudió, acordando que finalmente se asignaría una gratificación a todos los empleados que hubieran ingresado en la compañía con anterioridad al 1 de julio de 1925: un 15% del sueldo mensual para aquellos que no ganaran más de 200 pesetas y del 10% para el resto.

El Comité acordó también pagar 2.000 pesetas al abogado Francisco Crooke por las gestiones realizadas para la adquisición de inmuebles en la ciudad de Málaga.

Gumersindo Rico pasó entonces a informar sobre las gestiones que había realizado durante su reciente viaje a Santander con motivo del proyecto para la automatización de la red municipal. Ya hemos visto como la compañía adquirió un edificio en la calle de Santa Lucía y un solar en la calle del Martillo, actual calle Marcelino Sanz de Sautuola. Durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 21 de octubre, Proctor presentó el proyecto del edificio que se pensaba construir en el solar de la calle del Martillo y que había sido diseñado por el Departamento de Edificaciones, al frente del cual se encontraba Ignacio de Cárdenas. Ahí sería donde se instalarían las oficinas de la compañía y la central automática comprada a la *International Standard Electric Company*.

Rico dio cuenta en esta sesión del 2 de diciembre de la firma de los contratos para la construcción del inmueble y también para la canalización de los cables subterráneos. La base 15ª del contrato que la CTNE había firmado con el Estado obligaba a la compañía a automatizar las redes urbanas de 17 ciudades españolas en un plazo de cinco años, pero también especificaba que tenía que soterrar las líneas

⁷²⁹ Acta nº 68, 2 de diciembre de 1925, libro 1, pp. 91-93.

telefónicas en sus centros históricos. La compañía se decidió por realizar las dos tareas de forma paralela, reformando de una sola vez todo el sistema urbano de los municipios. El Secretario General también explicó las conversaciones que había mantenido con el ayuntamiento de la ciudad y de algunas modificaciones que el consistorio quería que la compañía introdujese en el proyecto de la nueva red telefónica. También se explicaron los resultados obtenidos en las negociaciones con los propietarios del edificio en el que se encontraba instalada la antigua central manual de Santander.

La Dirección de la Telefónica había decidido que el primer centro telefónico urbano que quedaría totalmente automatizado sería la capital cántabra. Fue tal la intensidad que se imprimió a los trabajos que el servicio telefónico automático se pudo inaugurar en un tiempo record: el día 26 de agosto de 1926⁷³⁰. Como estamos viendo, los contratos para la construcción del edificio que alojaría la central y los de soterramiento de los cables fueron firmados a finales de noviembre de 1925, lo que significa que en nueve meses (!) se levantó el inmueble, se canalizaron todos los cables aéreos, se instaló la nueva central automática tipo Rotary Nº 7-A y se puso en marcha la nueva red. El sistema instalado tenía capacidad para 3.000 abonados en el área urbana de Santander⁷³¹, un número bastante elevado si se tiene en cuenta que, por aquella época, la capital cántabra contaba con 80.000 habitantes aproximadamente⁷³².

3.222. Miércoles, 9 de diciembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷³³

En esta sesión del Comité, a la que asistió Sosthenes Behn, se tomaron importantes decisiones con respecto al capital de la compañía, que era necesario ampliar para hacer frente al ambicioso plan de construcciones proyectado para el año 1926. No obstante, antes de entrar en ese asunto, el Comité decidió contratar a 21 telefonistas, a pesar de la resolución tomada en la reunión de 17 de septiembre en la que se prohibió la admisión de nuevas operadoras al servicio de la compañía. Diez de

⁷³⁰ Yuste-2004, p. 325.

⁷³¹ Memoria de la Compañía Telefónica Nacional de España, año 1926, p. 35.

⁷³² Página web del Inst. Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/intercensal/inicio.do>

⁷³³ Acta nº 69, 9 de diciembre de 1925, libro 1, pp. 93-95.

estas nuevas telefonistas estarían destinadas al nuevo cuadro urbano que se estaba preparando en la central provisional de la calle Hortaleza, ya que, como hemos visto, ésta no se destinó únicamente a las líneas interurbanas, sino que también se reservó espacio para dar servicio a abonados de la capital.

Behn también anunció que pronto se presentaría a la consideración y aprobación del Comité el proyecto de fondo benéfico de la compañía. Este plan, sobre el que se llevaba trabajando varios meses, había sido aprobado por el Presidente de la Asociación de Empleados, Luis Alcaraz, y por el Inspector General, Logan N. Rock. No obstante, ya vimos como el proyecto tendría que contar, en última instancia, con el beneplácito de Sosthenes Behn⁷³⁴.

A propuesta del Coronel, en consideración a las necesidades de la compañía y al amplísimo programa de obras que se había previsto para 1926, el Comité acordó elevar el capital social de la empresa a 150 millones de pesetas, es decir, realizar una emisión de 35 millones. Para ello se ponían en circulación 60.000 acciones preferentes (30 millones) y 10.000 acciones ordinarias (5 millones) Esta emisión se retrotraía a la fecha de 1 de noviembre de 1925.

La International se había comprometido, mediante los contratos firmados entre las dos compañías en agosto de 1924, a que la Securities adquiriera la casi totalidad de todas las acciones del capital social emitido en aquella fecha. Sin embargo, ya nada obligaba a la CTNE a entregar las nuevas acciones emitidas a la multinacional; pero, como no podía ser de otra forma, esto fue lo que ocurrió. Escudándose en que “la situación actual del mercado español no es la más favorable para la colocación de papel”, se accedió a la proposición de Sosthenes Behn de entregar a la Securities todas las acciones, ordinarias y preferentes, emitidas con fecha 1 de noviembre de 1925. Los tipos fueron de 90% para las ordinarias y del 93% para las preferentes. También se recordó que, en cumplimiento de la base décima del contrato, la International quedaba obligada a dar preferencia para la suscripción de estos valores al mercado español.

Behn también comunicó al Comité que, vistas las próximas necesidades económicas de la compañía, se habían proyectado nuevas ampliaciones de capital. Se acordó que los accionistas de la compañía tuvieran derecho preferente de suscripción

⁷³⁴ Véase crónica del día 16 de octubre de 1925.

en proporción a las acciones que cada uno poseyera en cada momento. Dado el ritmo frenético que durante el año 1926 se imprimió a las obras y construcciones de la compañía, no es de extrañar que Behn previera la necesidad de contar con nuevas inyecciones de capital. Durante el año siguiente, la compañía realizó tres ampliaciones, dos en marzo y una en noviembre, por valor de 3.667.000 pesetas, 66.333.000 pesetas y 30.000.000 pesetas respectivamente. Es decir, 100 millones de pesetas en total, lo que hizo que al final del ejercicio 1926 el capital social de la empresa fuera de 250 millones de pesetas, cuando la empresa no había cumplido todavía los tres años. A estas ampliaciones le siguieron otras. El día 1 de enero de 1930, el capital social de la CTNE era de 500 millones⁷³⁵.

Con respecto al “ambiente del papel de la compañía”, Ruiz Senén opinaba que se iniciaba un cambio favorable con respecto a las circunstancias que, según los presentes, rodeaban a las acciones de la compañía en aquellos momentos. El Vicepresidente consideraba que las causas que habían derivado en esta situación eran varias: “abstención del público, campaña por parte de determinados elementos opuestos a nuestra concesión a base de supuestos peligros motivados por nuevas disposiciones en contra la misma, contracción general observada en el mercado por carencia de disponibilidades y afán de la mayor parte del público de invertir sus recursos en papel oscilatorio en su cotización y no de renta o interés fijo como el asignado a nuestras acciones preferentes”.

Entonces Julián Cifuentes, que rara vez se pronunciaba en las reuniones, dio su opinión con respecto a este asunto, lo que supuso la primera crítica conocida a la doble clasificación de las acciones y a los derechos que cada una otorgaba. Cifuentes propuso que, para subsanar en parte algunas de las dificultades que había apuntado Ruiz Senén, se podría permitir que las acciones ordinarias pudieran ser suscritas públicamente como ocurría con las preferentes. Behn dijo entonces que tenía “en estudio el asunto” y que en breve propondría sus ideas al Comité para que tomara la decisión más conveniente. Por supuesto, el Coronel no tenía ninguna intención de que las acciones ordinarias pudieran ser suscritas como las preferentes y la discusión finalizó de esta forma. No obstante, es interesante ver como algunos miembros españoles del Consejo consideraban que la dualidad de las acciones de la compañía

⁷³⁵ Yuste-2004, p. 231.

entrañaba riesgos y comenzaban a expresar tímidamente sus reservas con respecto a este asunto.

En otro orden de cosas, Behn también propuso fijar una remuneración anual de 12.000 pesetas para el Marqués de Urquijo y de 6.000 pesetas para cada uno de los Vicepresidentes sin verdaderos poderes asignados: Valentín Ruiz Senén y Julián Cifuentes. Este sueldo se sumaba al que ya gozaban como consejeros de la empresa, que era de 6.000 pesetas anuales. El Comité aprobó la propuesta, con la abstención de las tres personas implicadas en la votación.

Por último también se tomó la decisión de estudiar la posibilidad de que la CTNE se incorporara a la Asociación benéfica de protección medio-farmacéutica de la empresa “Unión Eléctrica Madrileña” y se autorizó a todos los consejeros de la empresa para que pudieran firmar las acciones que iban a emitirse, para que pudieran firmar en lugar del Presidente y del Secretario.

3.223. Miércoles, 16 de diciembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷³⁶

Cuando se firmó el convenio entre el Estado y la CTNE en 29 de agosto de 1925 la alarma se instaló en muchas entidades que disfrutaban de alguna concesión telefónica. Una de ellas fue la Diputación de Guipúzcoa, que decidió recurrir contra el Real Decreto y contra el contrato por lo que pudiera haber en todo ello de contrario a sus derechos como concesionario de la red provincial. La corporación entabló un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo y aún en diciembre de 1925 no lo había retirado, a pesar de los intentos de la compañía por “normalizar” la situación. Lo que más preocupaba a la Diputación era, sin duda, la base cuarta del convenio entre la Telefónica y el Estado, que regulaba el proceso de adquisición de propiedades telefónicas en manos de otros concesionarios. La redacción de esta cláusula era, por supuesto, muy favorable a los intereses de la compañía, que podía negociar con cualquier propietario sin mediación estatal y recibía todo tipo de facilidades para hacerse con las concesiones de líneas y redes. El párrafo más escandaloso era, sin duda, el siguiente:

⁷³⁶ Acta nº 70, 16 de diciembre de 1925, libro 1, pp. 95-96.

Además el Estado, cuando y a medida lo solicite la Compañía, se incautará de todas o de cualesquiera de dichas instalaciones y propiedades de la manera prescrita en cada caso en la correspondiente concesión.

Es decir, que si algún concesionario “se le resistía”, siempre podía apelar al Gobierno para que mediara y en, último caso, que se incautara de su red en el momento en el que la compañía lo deseara, siempre ateniéndose, eso sí, al contrato existe entre el Estado y el propietario. La alarma de la Diputación estaba plenamente justificada.

En esta sesión de 16 de diciembre, Gumersindo Rico informó sobre una propuesta formulada por una comisión oficial de la corporación provincial ofreciendo un acuerdo a la compañía: la Diputación retiraría el recurso ante el Tribunal Supremo a condición de que se le concediera alguna garantía que asegurara que el Estado no procedería a la incautación de su red provincial. Por supuesto, este trato no aportaba grandes beneficios a la compañía, por lo que el Comité acordó sin mucha discusión denegar la proposición de la Diputación, “ya que ello supondría una renuncia expresa de derechos por parte de la Compañía”.

El Comité manifestó que no entraba dentro de sus planes, por el momento, hacer uso del derecho que ese párrafo de la base cuarta otorgaba a la compañía, que era lo que tanto preocupaba a la corporación. No obstante, no tenían ninguna intención de tomar medidas que le impidieran ejercer dicho derecho en el futuro, por lo que se negaban a llegar a semejante acuerdo. El Comité se limitó a comunicar sus buenas intenciones a la Diputación con respecto a sus intenciones más inmediatas.

El Secretario también dio cuenta de una nueva proposición del presidente del Banco Matritense, propietario del edificio de la avenida Conde de Peñalver donde la compañía tenía instaladas sus oficinas centrales, para la compra del inmueble. El Comité rechazó esta propuesta, lógicamente, ya que sus intenciones con respecto a la localización de la sede central de la empresa eran muy distintas.

También se informó sobre la invitación de la Cámara Oficial de Industria de la provincia de Madrid para que la CTNE sustituyera a la antigua Compañía Madrileña de Teléfonos como asociado. El Comité tampoco tuvo muchas dudas a la hora de rechazar el ofrecimiento, ya que, según consta en acta, se habían fijado como norma general que la compañía no figurara como asociada en la Cámara de Industria o cualquier otra entidad similar.

3.224. Jueves, 17 de diciembre de 1925

Soterramiento de los cables en Madrid y Barcelona

El día 22 de julio de 1922 se había dado comienzo al soterramiento de cables en España con la canalización de los conductores en la localidad madrileña de El Escorial. Entendemos que la CTNE eligió un municipio de un tamaño menor como “plataforma de pruebas” para ensayar cómo realizar las obras de tendido subterráneo de cables, que en breve daría comienzo en Madrid y Barcelona. La Revista Telefónica Española informó puntualmente sobre el comienzo de estos trabajos.

En Madrid se iniciaron en septiembre de 1925⁷³⁷, dato confirmado gracias a las actas del Comité Ejecutivo de la empresa⁷³⁸, y las primeras zanjas se abrieron en la plaza de Colón como parte de la canalización de los cables que habrían de conectar las subcentrales de Salamanca (al este) y Jordán (al oeste). No obstante, un artículo de la revista *Electrical Communication* publicado en 1928 indicaba que estas primeras canalizaciones se hicieron aprovechando otras obras que se estaban realizando en la ciudad y que el verdadero trabajo de soterramiento de cables dio comienzo el día 17 de diciembre de 1925. Las obras se dieron por finalizadas el 28 de mayo de 1926, aunque conllevaron algunas complicaciones debidas al trazado tortuoso de las calles y a que los obreros se encontraron con otras muchas canalizaciones de tuberías, cables eléctricos, etc. En algunas ocasiones fue imposible soterrar los cables y hubo que tenderlos por las fachadas de las casas intentando ocultarlos lo más posible⁷³⁹.

En Barcelona las obras comenzaron en octubre, no sin pocas quejas por parte de los ciudadanos. El plan era iniciar el soterramiento de las líneas en la plaza de Cataluña, pero tuvo que abandonarse por la cantidad de trabajos que ya se estaban realizando en esa zona. Se decidió entonces aprovechar que unas obras municipales ya habían levantado el pavimento en la calle de Santa Ana, muy cerca de esa plaza, para instalar los cables telefónicos subterráneos. A pesar de las protestas de los vecinos, las obras concluyeron en diez días⁷⁴⁰.

⁷³⁷ Revista Telefónica Española, nº 9, septiembre de 1925, pp. 26-28.

⁷³⁸ Acta nº 56 del Comité Ejecutivo, 14 de septiembre de 1924, libro 1, pp. 73-74.

⁷³⁹ McKim-1928, pp. 129-130.

⁷⁴⁰ Revista Telefónica Española, nº 10, octubre de 1925, pp. 30-31.



Figura 18. Canalización de cables para el servicio automático en Madrid, 1926. Fuente: Telefónica.

3.225. Martes, 22 de diciembre de 1925

Averías debidas a un fuerte temporal

En la noche del 21 al 22 de diciembre de 1925 se desató un temporal de lluvia y viento de gran violencia que provocó la interrupción de todas las líneas telegráficas y telefónicas. Esta situación era especialmente crítica en Madrid, que no se podía comunicar con ninguna provincia a escasas horas de la celebración del sorteo extraordinario de Navidad. La Revista Telefónica Española, en su edición de diciembre, explicaba con orgullo la labor realizada por los trabajadores de la CTNE para resolver las averías en un tiempo record y poder así dar servicio telefónico en un día tan importante⁷⁴¹:

La Compañía Telefónica dictó acertadas disposiciones, que fueron ejecutadas con tal rapidez, que a las nueve y media de la mañana estaban francas todas las líneas telefónicas en España, lo que permitió expedir aquel día, con suma regularidad, ¡3.800 telefonemas! referentes todos a la lotería.

⁷⁴¹ Revista Telefónica Española, nº 11, noviembre de 1925, p. 35.

3.226. Miércoles, 23 de diciembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷⁴²

Los miembros del Comité fueron informados sobre la reunión mantenida entre representantes de la compañía y una delegación oficial de la Diputación de Guipúzcoa que había viajado a Madrid para tratar el asunto del recurso interpuesto contra el Real Decreto de 25 de agosto de 1924 y las bases del contrato. Durante aquellas conversaciones, los directivos de la CTNE informaron a los representantes de la corporación que el Comité Ejecutivo había tomado la decisión de rechazar el acuerdo propuesto.

Sin abandonar las cuestiones sobre aquella provincia, Ruiz Senén se refirió a continuación a una conferencia que había mantenido con el Director de la Red telefónica municipal de San Sebastián, Vicente Prado, para discutir sobre el enlace de la red urbana donostiarra con las líneas de la CTNE. Parece que la reunión fue cordial y que ambos estuvieron de acuerdo en todas las cuestiones tratadas.

Proctor aludió por último a la actividad que había desplegado el personal de la compañía durante los temporales que habían afectado a la comunicación telefónica de todo el país durante los últimos días, especialmente en la jornada del sorteo extraordinario de Navidad. Todo el Comité estuvo de acuerdo en que los trabajos fueron ejecutados con una rapidez extraordinaria, resolviendo todas las averías de la manera más satisfactoria. También se informó del “celo y aptitud” demostrados por el personal de la central interurbana de Madrid, que había tenido que atender una enorme cantidad de llamadas con motivo de la lotería. Por todo ello se acordó que se felicitará al personal mediante una circular, comunicando “la satisfacción con que este Comité aprecia su labor y aplaude el éxito logrado por tal concepto”.

⁷⁴² Acta nº 71, 23 de diciembre de 1925, libro 1, pp. 96-97.

3.227. Lunes, 28 de diciembre de 1925

Reunión del Consejo de Administración⁷⁴³

En lo que respecta a las reivindicaciones del Consejero Delegado del Ministerio de Hacienda, el año terminaba como empezó: solicitando una vez que los informes de tesorería detallaran todos los gastos efectuados por la compañía, “a fin de que puedan ser debidamente examinados, para conocer oficialmente la situación económica de la misma”. En esta ocasión, el acta no consigna siquiera que Proctor expresara su convencimiento de que en la próxima reunión dichos resúmenes podrían ser presentados al Consejo.

A la hora de aprobar todas las resoluciones tomadas por el Comité Ejecutivo en sus últimas reuniones, se había ratificado la decisión de ampliar el capital social de la empresa, tal y como había propuesto Sosthenes Behn en sesión de 9 de diciembre de 1925. El Consejo de Administración autorizó entonces a Gumersindo Rico para que otorgara la correspondiente escritura de aumento de capital y emisión de acciones por valor de 35 millones de pesetas, representadas por 60.000 acciones preferentes y 10.000 acciones ordinarias. El Secretario llevó a cabo esta acción dos días después, el 30 de diciembre de 1925⁷⁴⁴.

3.228. Miércoles, 30 de diciembre de 1925

Reunión del Comité Ejecutivo⁷⁴⁵

Con respecto al Comité Paritario recientemente creado por Real Decreto de 21 de noviembre de 1925, el Comité acordó delegar en Lewis J. Proctor el nombramiento de los nueve representantes de la compañía en dicha entidad⁷⁴⁶.

⁷⁴³ Acta nº 22, 28 de diciembre de 1925, libro 1, pp. 49-50.

⁷⁴⁴ Yuste-2004, p. 231.

⁷⁴⁵ Acta nº 72, 30 de diciembre de 1925, libro 1, pp. 97-98.

⁷⁴⁶ Acta nº 23 del Consejo de Administración, 26 de enero de 1926, libro 1, p. 52: Los nueve representantes de la compañía en el Comité Paritario Nacional de Teléfonos fueron aprobados en la reunión del Consejo celebrada en el mes de enero, a propuesta del Comité Ejecutivo. Los elegidos fueron los Vicepresidentes Valentín Ruiz Senén y Julián Cifuentes, el Tesorero Marqués de Perijáa, el Secretario Gumersindo Rico, el Subdirector General José Berenguer, los abogados José Hernández Pinteño y Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra y otras dos personas de nombres José María Jayme y José Castilla.

Para cerrar la última sesión del Comité Ejecutivo del año 1925 se volvió a tratar el asunto referente a la paga extra de Navidad para los empleados de la compañía y se volvió a tomar una nueva decisión al respecto. Las actas de las reuniones no explican los motivos de por qué se produjeron tantos cambios en las resoluciones adoptadas por el Comité, ya que ésta es la cuarta vez que se invalidaba la determinación anterior y se tomaba una nueva. En realidad sí justifican el vaivén de decisiones por “el más sincero afán de demostrar a dicho personal la consideración y el afecto que le merece”, aunque dudamos que éste fuera el verdadero motivo. En esta ocasión se acordó un nuevo sistema para repartir la bonificación extraordinaria: correspondía a un 15% del sueldo mensual de los trabajadores que llevaran en la compañía más de seis meses pero menos de nueve, un 20% para los que hubieran ingresado hace más de nueve meses pero menos de doce y un 25% para todos los que llevaran más de un año de servicios. Parece que esta vez la decisión sobre la paga extra fue definitiva y esta fue la bonificación que recibieron los empleados de la CTNE en aquella Navidad de 1925.

3.229. Jueves, 31 de diciembre de 1925

Termina 1925

El año 1925 llegaba a su fin y con él se cerraba el segundo ejercicio social de la Compañía Telefónica Nacional de España. En la memoria presentada por el Consejo de Administración a la Junta general ordinaria de accionista en 30 de marzo de 1926 se destacaba que, si bien la compañía no se encontraba todavía en periodo de normal explotación, el proyecto de reforma y modernización de la telefonía española comenzaba a arrancar “con decisión y firmeza”. Efectivamente, durante el año 1925, las actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo dan buena cuenta del impulso que se estaba dando a la adquisición de concesiones telefónicas, compra de solares y edificios, construcción de líneas interurbanas, automatización de redes urbanas, inauguración de nuevas centrales, instalación de líneas de alta frecuencia, etc.

La memoria destacaba en primer lugar las redes telefónicas que habían pasado a manos de la compañía durante 1925, por contratos suscritos con los antiguos concesionarios o por reversión al Estado debido a la caducidad de las licencias que tenían otorgadas. La adquisición más importante había sido, sin duda, la de la Mancomunidad de Cataluña en noviembre de aquel año. Además, de manera oficial,

las propiedades de la Peninsular y sus filiales estaban bajo su control desde el día 3 de enero de 1925.

Según la compañía, el número de teléfonos había crecido en un 12,2% con respecto a 1924, superando ya la cifra de los 100.000 operados por la CTNE. Se construyeron 1.346 kilómetros de nuevas líneas, se dio comienzo al soterramiento de los cables en Santander y Madrid (la memoria se olvidaba de El Escorial y Barcelona) y se finalizaron las obras de las subcentrales de Hermosilla y Jordán. También se habían instalado diez repetidores para las comunicaciones de larga distancia y se había abierto la central interurbana provisional de la calle Hortaleza, para dar servicio a todas las nuevas líneas que comenzaban a tenderse, entre las que se destacaba la de Madrid-Valencia y la de Madrid-Algeciras. También se mencionaba la creación de escuelas de formación, a las que ya asistían, en total, más de 700 alumnos. No podía faltar tampoco la manifestación a favor del material español, declarando que se habían invertido 18 millones de pesetas en la industria nacional.

En cuanto al capital social de la empresa, ascendía ya a los 150 millones de pesetas y estaba constituido por 260.000 acciones preferentes y 40.000 ordinarias, lo que implicaba una proporción entre unas y otras de 13:2. En las cuentas de pérdidas y ganancias se podía leer que los productos sólo de la explotación del servicio durante el año 1925 habían sido de más de 26 millones de pesetas, provenientes del servicio interurbano (casi 9 millones) y del servicio urbano (17 millones). Como sabemos, aunque eso no lo pusiera en la memoria, esos 26 millones no iban a parar íntegramente a las cuentas de la compañía, ya que un 4,5% (casi 1.200.000 pesetas) se entregaba a la ITT en concepto de comisión. Lo que sí quedaba reflejado en la memoria eran las 5.737.317,78 pesetas que se habían ingresado en el Tesoro público, como consecuencia del canon que la compañía tenía que pagar al Estado por los beneficios del año 1925, el canon que todavía quedaba pendiente pagar por los beneficios de la Peninsular en 1924, el impuesto del Timbre y otros conceptos.

Aunque el crecimiento durante el año 1925 había sido enorme, las perspectivas para 1926 eran mucho mayores. Sosthenes Behn había puesto en marcha un plan de construcciones y reformas que doblaba el ritmo previsto: durante los siguientes doce meses se pensaba llevar a cabo el plan propuesto inicialmente para 1926 y 1927. No sólo iba a ser necesario doblar la velocidad de las obras, también el capital invertido, para hacer frente al aumento de los materiales adquiridos, el equipamiento comprado, los trabajadores al servicio de la compañía y en general los gastos de una empresa que se había impuesto un proyecto de dimensiones colosales.

4 CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones finales del Trabajo

Este Trabajo Fin de Máster nació con la intención de estudiar el proceso de fundación y consolidación empresarial de la Compañía Telefónica Nacional de España, vistos a través de su Consejo de Administración y su Comité Ejecutivo. Las investigaciones previas a ésta centraron su estudio a la primera etapa de la historia de la Telefónica, comprendida en los meses de primavera y verano de 1924, pero con este Trabajo hemos querido ir más allá y adentrarnos, de la mano de las actas de sus órganos directivos, en la primera etapa del negocio de la compañía, cuando sus proyectos comenzaron a despegar.

Una pieza clave en la historia fue el presidente de la ITT, Sosthenes Behn, quien llegó a España por primera vez en el mes de octubre de 1923 y no tardó en reunirse con el general Primo de Rivera para tratar “asuntos relacionados con las comunicaciones telefónicas”. Aquí fue donde comenzaron las negociaciones con el Directorio Militar que finalizaron con la concesión del servicio telefónico nacional a la CTNE, una empresa totalmente dependiente de la multinacional que el Coronel presidía.

Sosthenes Behn era un empresario que estaba siempre de paso, yendo de un país a otro, negociando con empresarios y políticos y pronto volvió a salir de España para atender otros negocios. No obstante, en nuestro país quedaron sus colaboradores más cercanos, al frente de un importante grupo de profesionales, encargados de desarrollar un proyecto de telefonía nacional y establecer contactos con la burguesía financiera española. Behn volvió a España en abril de 1924, justo para la creación de la CTNE y firmar el convenio privado entre las dos empresas mediante el cual la Telefónica quedaba bajo el mando de la ITT en caso de conseguir el monopolio de los teléfonos en nuestro país. Durante el verano de aquel año las negociaciones se produjeron al más alto nivel y Sosthenes Behn, que en realidad no tenía cargo alguno en la sociedad española (no fue hasta el día 21 de agosto cuando fue nombrado vocal del Consejo de Administración), representó a la empresa en todas las reuniones: con los miembros del Director Militar, con Primo de Rivera, con el rey Alfonso XIII y con el Director General de Telecomunicaciones. Este último también fue una figura clave en todo el proceso. José Tafur Funés, antiguo Coronel de Ingenieros del Ejército, se entendió a la perfección con el empresario estadounidense y se declaró partidario de que la CTNE se hiciera con el control de la telefonía española en

las condiciones que establecía el proyecto de contrato que por aquel entonces circulaba por tan importantes despachos.

Una vez la adjudicación fue concedida, Sosthenes Behn pudo marchar tranquilo y se ausentó durante una nueva temporada, dejando al mando a su hombre de confianza: Lewis J. Proctor, Vicepresidente de la ITT y ahora Vicepresidente de la CTNE. No obstante, las actas del Consejo y del Comité dan buena cuenta de la participación del Coronel en las decisiones de la Telefónica, siempre en contacto con Proctor mediante cartas, telegramas o llamadas telefónicas. Muchos de los acuerdos tomados por la Dirección de la empresa durante aquellos meses surgieron por iniciativa de Sosthenes Behn y todos los proyectos importantes tenían que contar siempre con su aprobación final. El poder que adquirió fue tal que la compañía le concedió autorización para nombrar, a su voluntad, todos los cargos directivos que considerara oportunos y para realizar todas las adquisiciones de material o equipamiento telefónico, tanto en España como en el extranjero. Como hemos visto, Behn no tuvo ningún reparo en hacer uso de estos dos poderes. Durante sus visitas a España en noviembre de 1924 y octubre de 1925 realizó importantes nombramientos y reestructuró el organigrama de la CTNE. Con respecto a la compra de equipos, Behn se encargó de que todas las centrales telefónicas automáticas que se iban a instalar en las ciudades españolas fueran del modelo “Rotary”, producido por el recientemente adquirido brazo productor de la ITT, la *International Western Electric Company* (IWEC)

Gracias a las actas del Consejo y del Comité conocemos los momentos en los que Behn se encontró en España durante los años 1924 y 1925. Las reuniones a las que asistió fueron importantísimas y en ellas se tomaron decisiones trascendentales con respecto a la organización y a los proyectos de la CTNE. Quizá sería más objetivo decir que en aquellas reuniones el Coronel impuso estas decisiones, ya que la lectura de las actas no deja lugar a dudas: Sosthenes Behn, que hablaba con gran autoridad, exponía los planes previamente diseñados por él mismo y el resto de miembros simplemente aprobaban las propuestas y daban luz verde a su aplicación. En las reuniones a las que asistió a finales de noviembre de 1924 se tomaron determinaciones tan importantes como la suscripción de 25 millones de pesetas del capital social de la empresa que quedaba en cartera, la fusión definitiva de la Compañía Peninsular de Teléfonos y sus filiales, el nombramiento de nuevos consejeros o la reestructuración de la contabilidad de la compañía. Además, aquella estancia en España también le sirvió para reunirse con gran cantidad de personas: los representantes de las asociaciones de empleados de las antiguas compañías, el

presidente de la Mancomunidad de Cataluña, altos cargos de la diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de San Sebastián, etc. También pudo asistir a la primera conferencia telefónica realizada entre España y las plazas africanas el 1 de diciembre de 1924 y aún tuvo tiempo para fundar la “International Telephone and Telegraph Co. (España)”, la filial encargada de asesorar técnica y financieramente a la CTNE y a la que traspasó todos los contratos firmados con la empresa española.

Sosthenes Behn se ausentó de los negocios españoles durante un año, por lo menos de forma presencial, tiempo que empleó para realizar otras adquisiciones importantes para su “International System” como la compañía *Mexican Telephone and Telegraph Corporation* y la *International Western Electric Company*, que le permitió integrar verticalmente su negocio telefónico. Se sabe, gracias a la prensa de la época, que el Coronel pasó unas vacaciones realizando un recorrido por la geografía española, aunque durante aquel tiempo no participó en ninguna reunión de la CTNE.

Cuando sí lo hizo fue a finales de octubre de 1925. Llegó a España con dos objetivos fundamentales: reestructurar la cúpula de la CTNE e imponer un intenso plan de obras para 1926. Behn, que llegaba aupado por el éxito de la adquisición de la IVEC, presentó un programa muy ambicioso mediante el cual se pensaba construir en sólo doce meses todo lo que en un principio se había previsto para los dos años siguientes: edificios, centrales automáticas, canalización subterránea de cables, líneas interurbanas, etc. Por supuesto, esto no se hacía por una verdadera necesidad de la telefonía española, sino como una forma de obtener grandes beneficios para la ITT a costa de la inversión desproporcionada en el negocio telefónico nacional y de la inflación artificial de la CNTE. Esto también derivaría mucho tiempo después en el endeudamiento al que se tuvo que enfrentar el gobierno de Francisco Franco cuando se quiso hacer con el control de la compañía. Sobre el interés que tenía Behn en sobredimensionar los proyectos de la compañía hemos hablado cuando se estudió el acta de la reunión del Consejo de 26 de octubre de 1925.

Dos días después, en una sesión celebrada por el Comité Ejecutivo, el Coronel planteó una profunda reorganización de la Dirección de la empresa, haciendo uso de sus facultades para destituir o nombrar cargos con total libertad. Se nombró a un nuevo Vicepresidente, el Ingeniero Jefe de la IVEC, Frank Gill, para ejecutar y llevar a buen término el plan de obras que se había proyectado para el año 1926 y se conformó una estructura empresarial dirigida casi exclusivamente por altos cargos estadounidenses, dejando a algunos pocos españoles cargos de menor importancia o vacíos de contenido como el de Presidente del Consejo. No contento con dejar la

CTNE bajo el control norteamericano, el Coronel impuso una subida de sueldo para todo el personal extranjero, muy por encima de lo que debería corresponder a puestos de esa categoría (según el plan de plantilla que él mismo había desarrollado meses antes), que correría a cuenta de la CTNE.

Después de aquellas reuniones, Behn también asistió a alguna más a finales de 1925, aunque las reformas introducidas no fueron ya tan importantes. Por supuesto, se decidió aumentar el capital de la empresa una vez más, para hacer frente al ambicioso plan de construcciones que ya se estaba empezando a aplicar. Cuando terminaba el año, el valor de la compañía ascendía ya a los 150 millones de pesetas, sólo 16 meses después de iniciar su proyecto de reforma y modernización del sistema telefónico español. Ese capital social estaba repartido de manera muy desigual en acciones ordinarias, las que otorgaban el control de la compañía, y acciones preferentes, que simplemente devengaban intereses de manera trimestral. Las participaciones ordinarias se encontraban en manos de la *International* de Sosthenes Behn de manera casi completa y además había blindado los estatutos de la sociedad de tal forma que era imposible recortar su poder en la CTNE si no era con su aprobación.

Durante los largos periodos en los que estuvo ausente, Sosthenes Behn dejó el mando de la empresa a su hombre de confianza, Lewis J. Proctor. La presencia del Vicepresidente de la ITT en España ha podido seguirse mucho más detalladamente gracias, primero, al gusto de éste por participar en reuniones, veladas y galas de la alta sociedad madrileña, que han quedado perfectamente registradas en las notas de los diarios de la época. Además, Proctor asistió a todas las sesiones del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de la CTNE durante aquellos años. Es más, lo que realmente ocurría era que, si Proctor no podía asistir a una sesión, directamente no se celebraba, como fue el caso de la segunda semana de septiembre de 1925, cuando el Vicepresidente viajó a París para reunirse con Sosthenes Behn con el fin de preparar el plan de automatización de las ciudades españolas.

Proctor era el único directivo que tenía verdadero poder ejecutivo dentro de la empresa y este hecho se fue acentuando con el paso del tiempo. El resto de miembros del Consejo se limitaban a escuchar sus proyectos, que muchas veces eran en realidad los de Sosthenes Behn, y aprobar todas las medidas que proponía. Durante las reuniones se hacía patente la desinformación de los demás consejeros y cómo la “Dirección de la empresa” era un órgano que parecía formado únicamente por una sola persona, dos cuando el Coronel visita España. Solamente el Secretario,

Gumersindo Rico, del que también hemos tenido oportunidad de hablar ampliamente en el capítulo segundo de este Trabajo, estaba también al tanto de la marcha de la empresa, aunque siempre se mantuviera en un discreto segundo plano. Rico había sido el auténtico iniciador de la idea de reformar el panorama telefónico español mediante la creación de una empresa privada que se hiciera con el control del sistema nacional.

El resto de miembros del Consejo y del Comité fueron elegidos únicamente por la importancia de sus nombres en el sector empresarial y financiero de la época. La CTNE necesitaba mostrar una fachada de “españolidad” acorde con la mentalidad de fuerte protección nacional del gobierno de Primo de Rivera. Además, las influencias de estos hombres de negocios eran enormes, lo que vino muy bien a la hora de negociar con el Gobierno, con distintos organismos de la Administración pública, con otros concesionarios de propiedades telefónicas, etc. El cargo de Presidente de la compañía recayó en el Marqués de Urquijo, quien se limitaba a asistir a las reuniones y a aportar sus opiniones sobre el negocio telefónico, que, en más de una ocasión, demostraban cierto desconocimiento del sector de las telecomunicaciones. El cargo estaba vacío de poder real: era la máxima autoridad de la compañía pero su papel se limitaba, la mayor parte de las veces, a representarla en los actos públicos, a firmar los documentos oficiales y a realizar algunas labores diplomáticas que la Dirección le encargaba de vez en cuando.

Además de Proctor se habían nombrado otros dos vicepresidentes, puestos también carentes de contenido y verdadero poder ejecutivo, que, como ya hemos visto, estaba concentrado en la mano derecha de Behn. Uno de ellos era Valentín Ruiz Senén, representante también del Banco Urquijo, que era el único que demostraba cierto interés por la marcha de la CTNE y se implicaba en los proyectos de la misma, aunque en alguna ocasión también manifestaba bastante desinformación con respecto a la realidad de la empresa. A pesar de su relativa participación, nunca se encargó de proyectos de importancia, ya que siempre se le encomendaban tareas más bien de representación, como con el ayuntamiento de Madrid o con los propietarios del solar de la Gran Vía donde habría de construirse la sede central de la compañía. El tercer vicepresidente era Julián Cifuentes, del Banco Hispano Americano, que apenas participaba en las reuniones, aunque sí asistía a ellas y presidía las sesiones del Comité Ejecutivo en turnos mensuales, alternándose con Ruiz Senén. Cuando Behn reestructuró la cúpula de la empresa a finales de octubre de 1925, el papel de estos dos empresarios quedó reducido aún más: conservaron sus cargos de

vicepresidentes, aunque perdían ya el poco poder ejecutivo que podían haber tenido hasta entonces y quedaban totalmente exentos de responsabilidades. La dirección de explotación quedó en manos del nuevo Vicepresidente Frank Gill y la dirección ejecutiva y administrativa fue asignada ya de manera oficial a la persona que la había ostentado hasta el momento: Lewis J. Proctor.

Amadeo Álvarez García, presidente del Banco Hispano Americano y uno de los cinco fundadores de la CTNE en abril de 1924, rara vez participaba en las reuniones del Consejo, lo mismo que José María Boada y Javier Martí-Codolar, de la antigua Compañía Peninsular de Teléfonos, o el Marqués de Comillas, que murió poco tiempo después de haber sido nombrado consejero de la CTNE sin haber participado en ninguna sesión. El caso de Martí-Codolar también lo hemos estudiado con detenimiento, ya que fue nombrado Director general de la Compañía, un cargo también vacío de contenido que se creó simplemente por la costumbre de su existencia. Pronto fue abandonando todos sus puestos en la CTNE, como vocal del Comité Ejecutivo, Director general y miembro del Consejo, aduciendo motivos de salud, aunque Gumersindo Rico era de la opinión de que la falta de competencias reales también influyó en su decisión.

El estudio de las actas de los dos órganos demuestra las hipótesis ya formuladas mucho tiempo atrás de que el Consejo de Administración no se trataba más que de un mero títere en manos del Comité Ejecutivo, que era el auténtico órgano de gobierno de la empresa y donde se tomaban las decisiones importantes. En teoría, el Comité debería haber servido únicamente para descargar al Consejo de las tareas más cotidianas y de índole burocrática y para ello se le transfirieron todas las facultades de éste, pero lo cierto es que Behn y Proctor supieron utilizar los derechos otorgados al Comité para aprobar todos sus planes y llevar a cabo reformas profundas sin necesidad de contar con el Consejo de Administración. Mientras, las reuniones de éste se convirtieron en un trámite que había que despachar mensualmente, y en ellas se ratificaban sin discusión todas las medidas adoptadas por el Comité en sus sesiones semanales. Como hemos explicado, casi se podría decir que el Comité también carecía de poder real, ya que incluso las reuniones de éste servían únicamente para aprobar los proyectos que Proctor había desarrollado previamente. En ocasiones, el Comité tomaba una decisión que ya había sido ejecutada por el Vicepresidente sin la autorización previa de ningún órgano directivo. Lo cierto es que a veces parecía hasta normal que se adquiriera esta actitud, ya que los planes de

Proctor y Behn eran siempre aprobados por unanimidad, sin discusión y con palabras de satisfacción y agradecimiento del resto de consejeros de la empresa.

Por supuesto, los Delegados del Gobierno en el Consejo de Administración no pertenecían al Comité Ejecutivo y por lo tanto no podían participar en las decisiones que se tomaban en sus sesiones. Estas tres personas se limitaban a asistir a las reuniones del Consejo que se celebraban todos los meses, aunque no siempre concurrían todos, y a aprobar todas las medidas adoptadas por la Dirección de la compañía. De no saber que estas tres personas representaban al Estado, la mayor parte de las veces no se podían apreciar diferencias entre su participación y el resto de consejeros. Únicamente el Delegado del Ministerio de Hacienda, Antonio Carrillo de Albornoz, realizó alguna intervención significativa durante aquellas reuniones, aunque siempre se trataban más bien de detalles con respecto a la forma de presentar los informes de tesorería o los balances de la empresa. La Dirección siempre agradecía sus propuestas con halagos hacia su persona, aunque luego hacía caso omiso, la mayor parte de las veces, a lo que el representante del Ministerio había indicado.

Esta inoperancia de la Delegación del Estado en la compañía era especialmente grave, ya que, según el contrato firmado entre ambas partes, era la única herramienta con la que contaba el Gobierno para intervenir en la marcha de la compañía. Dadas las desfavorables condiciones en las que se había suscrito este convenio, era importante extremar la vigilancia del Consejo y controlar que los intereses del Estado no se vieran afectados. Lejos de realizar una verdadera labor de inspección y control de la compañía, los tres Delegados contemplaban con aparente indiferencia todas las decisiones adoptadas, que iban en consonancia con los intereses del bien público siempre que estos y los de la compañía fueran los mismos. La pasividad de estos tres consejeros levantó no pocas críticas y años después fueron ampliamente censurados incluso por el propio Primo de Rivera y se procedió a su “despido” fulminante, que llegó quizá demasiado tarde.

Todo esto quedó demostrado, por ejemplo, cuando en mayo de 1925 se produjeron unas graves acusaciones contra la calidad del servicio telefónico y sobre la conducta de la compañía. La actitud adoptada entonces por los Delegación oficiales fue de apoyo a la empresa y llevaron a cabo algunas labores “diplomáticas” para calmar el enfrentamiento entre ésta y el Gobierno. Algo parecido ocurrió en septiembre de aquel año cuando el Director General de Comunicaciones manifestó que deseaba realizar inspecciones en las oficinas y centrales telefónicas para comprobar el funcionamiento del servicio. La compañía se negó rotundamente, escudándose en su

contrato con el Estado, y defendiendo que la única inspección posible era la de los Delegados del Gobierno en el Consejo de Administración. Estos estuvieron totalmente de acuerdo con la opinión de la CTNE, en lo que incluso parecía un intento para que ningún otro organismo del Estado “compitiera” con ellos como vigilantes de la actuación de la empresa. Por supuesto, las inspecciones no se llegaron a realizar, a pesar de que en mayo se habían mostrado totalmente de acuerdo en que se llevaran a cabo cuando el Gobierno lo considerara oportuno.

El propio Primo de Rivera, consciente de las circunstancias que se estaban produciendo en el seno de la compañía, resumiría todo esto a la perfección en una de sus intervenciones ante la Asamblea Nacional a finales de 1928⁷⁴⁷:

Rápido fue el remedio, relevando a los tres representantes del Estado [...] porque habían obrado con lenidad, a nuestro juicio, en el mero hecho de que no habían procurado, exigido, diría mejor, formar parte del Comité Ejecutivo, habiéndose contentado con pertenecer a una especie de Consejo general donde se tomaban los acuerdos en primer plano, pero no se tomaban en toda la amplitud que hubiera debido demandar la autoridad del Estado.

Gracias a las actas del Consejo y del Comité se han podido conocer las decisiones tomadas por la Dirección de la compañía y los motivos que llevaron a emprender cada una de estas acciones. Esto nos ha permitido poner en contexto todas las informaciones que ya se conocían sobre la empresa y la marcha de sus proyectos, los conflictos que tuvo con otras entidades, las adquisiciones de propiedades telefónicas, las compras de solares y edificios, etc. Gracias a este Trabajo Fin de Máster entendemos ahora el funcionamiento de la empresa desde el punto de vista de sus órganos de gobierno, conociendo cuándo se tomó cada una de las decisiones y las causas que las motivaron.

Así, se ha podido documentar cuando se tomaron determinaciones tan importantes y que luego provocaron no pocas críticas como el elevado sueldo de los trabajadores extranjeros, la aprobación de las tarifas telefónicas interurbanas, la creación de la Asociación general de Empleados y la fundación del Comité Paritario Nacional de Teléfonos. También se han seguido de cerca algunos conflictos en los que estuvo involucrada la CTNE, como el caso del desfalco destapado en Barcelona a

⁷⁴⁷ Yuste-2004, pp. 303-304.

principios de 1925, las licencias otorgadas a algunas empresas para la explotación de líneas telefónicas particulares o las quejas del Gobierno a las que ya nos hemos referido. También hemos comprobado como la empresa era plenamente consciente de las favorables condiciones que se daban en su contrato con el Estado y como hizo uso del mismo siempre que pudo para no ceder ni un ápice en la consecución de sus intereses.

Las actas también dan buena cuenta de algunas preocupaciones de la Dirección de la compañía como la referente a las relaciones con la prensa, a la que siempre dio mucha importancia, incluso más que a algunas administraciones públicas como el ayuntamiento de Madrid. También se cuidó especialmente de mostrar una buena imagen de cara a la opinión pública, cosa que no siempre consiguió, debido sin duda a que la reforma del sistema telefónico nacional todavía no había conseguido que el servicio mejorara notoriamente. Esto empezaría a ocurrir un poco después, cuando las redes municipales fueran totalmente renovadas y modernizadas y se llevara a cabo el intenso programa de construcción de líneas interurbanas. El Comité Ejecutivo prestó especial atención a todas aquellas obras que tenían una especial significancia y poder publicitario, como el tendido del cable submarino entre Algeciras y Ceuta que permitió la comunicación telefónica permanente entre España y su protectorado en Marruecos.

Además se ha podido seguir el proceso de capitalización de la empresa, en qué momento fue ampliado el capital social de ésta y los motivos que llevaron a poner en circulación la cantidad que en cada momento se consideró necesaria para atender las necesidades de la compañía. Las actas también muestran el papel de la International y de su filial *International Telephone Securities Co.* en todo este proceso y el reparto de las acciones en ordinarias o preferentes. En una reunión de finales de 1925 se intuía incluso la primera crítica a esta doble clasificación de las participaciones de la empresa, aunque en aquel momento no recibió la mayor importancia.

Con respecto a los temas más recurrentes en las reuniones de estos dos órganos directivos se aprecian, de manera general, tres etapas fundamentales. Una primera, que abarca de finales de 1924 a principios de 1925, durante la cual el objetivo fundamental de la compañía era hacerse con todas las redes que estaban en manos del Cuerpo de Telégrafos o de otros concesionarios. En este sentido, las operaciones más importantes consistieron en tomar el control de todas las propiedades que estaban explotadas por el Estado (entre las que se encontraba la red de Barcelona), por la Compañía Peninsular de Teléfonos y sus filiales (que incluía la red de Madrid y

casi todo el sistema interurbano), por la Mancomunidad de Cataluña y por otros muchos empresarios que explotaban centros municipales. Durante esta época, la CTNE negoció las condiciones para la adquisición de las redes de ciudades tan importantes como Valencia, Zaragoza, Pamplona, Córdoba, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Pamplona, etc.

Una vez todas las propiedades importantes fueron pasando a manos de la compañía, la Dirección se centró entonces en un programa de compra de edificios y solares en todas estas capitales para la instalación de sus oficinas y las centrales telefónicas automáticas. Las actas de las reuniones que se celebraron a lo largo de 1925 ponen de manifiesto la obsesión de la compañía por adquirir siempre los mejores terrenos, con una localización inmejorable y donde poder construir un edificio que sirviera para exteriorizar la fuerza y la pujanza de la compañía telefónica. En este sentido no se escatimaron recursos ni humanos ni económicos para adquirir las mejores parcelas en Madrid, Barcelona y otras muchas ciudades. Las sedes centrales no sólo servirían para albergar la central y las oficinas, también pretendían crear fascinación y servir como “elemento decorativo” e icono municipal. Para la construcción del edificio de la plaza de Cataluña de Barcelona se convocó un concurso, del que resultó ganador un arriesgado y “rompedor” proyecto que respondía a la perfección con estas intenciones perseguidas por la compañía. No obstante, nunca se llegó a construir, posiblemente por la oposición de Sosthenes Behn, que no quedó satisfecho con el resultado.

En cuanto al edificio de Madrid, las negociaciones para la adquisición del solar de la Red de San Luis en la Gran Vía comenzaron muy pronto, pero no fue hasta el verano de 1925 cuando se cerró el acuerdo definitivo. En este caso también se pensaba convocar un concurso al que concurrirían grandes firmas pero, ante la negativa de Sosthenes Behn de recurrir a este proceso, finalmente se encargó su proyecto al arquitecto de la compañía, Ignacio de Cárdenas, que trabajó con el arquitecto de la ITT para levantar el emblemático edificio que hoy preside la Gran Vía.

Ya hemos visto como, en una primera fase, la compañía se centró en la adquisición e incorporación de las redes telefónicas que se encontraban en manos de otros concesionarios. Luego se procedió a la compra de solares y construcción de edificios en las ciudades más importantes del país, donde tiempo más tarde se instalarían las centrales automáticas que darían servicio a los nuevos sistemas urbanos. Durante el último tercio de 1925 se procedió entonces a formular estos proyectos de automatización de las redes municipales, tal y como quedaba estipulado

en el contrato firmado con el Estado. Sin embargo, los primeros planes y adquisición de equipamiento no dieron comienzo hasta que la ITT se había asegurado la compra de la *International Western Electric Co.*, fabricante de centrales tipo “Rotary”, que por supuesto fueron las que se instalaron en todas las ciudades del país durante los siguientes años. De esta forma se dio comienzo, a principios de 1926, a la automatización de las redes de Madrid y Santander, siguiendo un plan trazado minuciosamente por Behn.

En definitiva, podemos decir que el trabajo realizado ha cumplido con las expectativas que nos habíamos marcado al comienzo del mismo. Se ha documentado la llegada de Lewis J. Proctor y Sosthenes Behn a España, así como sus visitas posteriores; se han examinado detenidamente los contratos privados firmados entre las dos compañías en abril y agosto de 1924; gracias a las actas consultadas se ha estudiado el proceso de creación y consolidación empresarial de la compañía desde el punto de vista de la Dirección de la misma y ello nos ha permitido explicar importantes decisiones tomadas por la CTNE durante sus primeros meses al frente de la telefonía española.

4.2. Líneas de trabajo futuras

Parece claro que una primera línea de trabajo para estudios posteriores consistiría en continuar con la labor realizada en la presente investigación de consultar las actas del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la CTNE y poner en su correspondiente contexto cada una de las determinaciones tomadas por sus directivos. Este Trabajo Fin de Máster ha querido tratar los acontecimientos ocurridos entre aquella primera reunión de Sosthenes Behn con Primo de Rivera el día 26 de octubre de 1923 hasta finales de 1925, cuando la CTNE se hizo con las redes de la Mancomunidad de Cataluña.

Las actas de estos primeros años muestran a una compañía naciente, dependiente de la multinacional estadounidense, que comienza a adquirir propiedades telefónicas y a desarrollar su ambicioso plan para modernizar la telefonía nacional. En 1926 comienza también un periodo muy interesante de la historia de los teléfonos en nuestro país que también merece ser estudiado desde el corazón de la empresa. A partir de esa época, la CTNE entró en un periodo de mayor estabilidad, contaba ya con cierta experiencia en el panorama empresarial español y además estaba preparada para llevar a cabo un amplísimo programa de construcciones. A buen seguro que las actas de los siguientes años dan fe de los trabajos realizados y del

avance de estos proyectos, así como de hitos tan importantes como la inauguración del servicio automático en Santander y Madrid.

Hacia el final de la Dictadura surgieron, no obstante, críticas a la actuación de la compañía y de sus directivos, a los abusos que cometían amparándose en las bases de su contrato con el Estado y también a la labor de los miembros de la Delegación oficial del Gobierno, que fueron “despedidos” en junio de 1928. Las tarifas telefónicas fueron motivo de polémica, así como la doble clasificación de las acciones de la compañía y el excesivo poder de la ITT en el gobierno de la empresa. Todo ello sería discutido en las reuniones del Consejo y del Comité y quedaría convenientemente registrado en las actas de las sesiones, por lo que es necesario estudiarlas como se merece, para entender completamente todos aquellos acontecimientos, tal y como se ha hecho en esta investigación con los ocurridos durante 1924 y 1925.

Otras líneas de trabajo que podrían abordarse en el futuro serían varios episodios o aspectos relacionados con la historia de la Telefónica que no han podido ser tratados con el suficiente detalle en la presente investigación, por motivos obvios de tiempo y espacio. Algunas de estas cuestiones podrían ser:

- La compra de centros telefónicos urbanos en manos de pequeños concesionarios y las negociaciones que llevaron a estas adquisiciones durante aquella época. Entre ellos se cuentan los de Santander, Pamplona, Zaragoza, Córdoba, Granada, Almería, Alcira, Manzanares, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, etc.
- La suscripción de acciones preferentes de la compañía en los distintos momentos en que fueron puestas en circulación, el plan de compra de acciones para los empleados de la CTNE o la salida a bolsa en los parqués de Madrid, Bilbao y Barcelona.
- El papel que jugaron algunas personas como Jose Antonio Primo de Rivera, José Bertrán y Musitu o Esteban Terradas.
- El caso del desfalco en la ciudad de Barcelona, en el que parece que estuvo implicado el antiguo presidente de la Compañía Peninsular de Teléfonos, Enrique Parellada, y que fue ampliamente seguido por la prensa local.

- Las críticas vertidas por Primo de Rivera en la primavera de 1925, las causas que las motivaron y las reuniones que tuvieron lugar durante aquellas jornadas para aclarar el asunto.
- El papel de los Delegados del Gobierno en el Consejo de Administración de la empresa, su actuación y los motivos que motivaron su destitución en 1928.
- Los acontecimientos que motivaron que el edificio que finalmente se construyó en la plaza de Cataluña, en Barcelona, no fuera el proyecto que había ganado el concurso público convocado por la compañía.

5

BIBLIOGRAFÍA

5.1. Archivos

Archivo General de la Administración. Paseo de Aguadores, 2. Alcalá de Henares, Madrid.

Archivo Histórico Nacional. C/ Serrano, 115. Madrid.

Biblioteca de la EUIT de Telecomunicación, UPM. Ctra. de Valencia, km. 7. Campus Sur. Madrid.

Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico. C/ Tapia de Casariego, 6. Madrid.

Biblioteca Nacional Española. Paseo de Recoletos, 20. Madrid.

Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Plaza de la Villa, 2. Madrid.

Hemeroteca Municipal. C/ Conde Duque, 9. Madrid.

Librería Anticuaria García Prieto. C/ Alcalá, 123. Madrid.

5.2. Libros

Galante-1884. Manual de Telefonía, José Galante y Villaranda, Imprenta de G. Estrada, Madrid, 1984.

Francos-1917. Proyecto de Telefonía Nacional presentado al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación por el Director General de Correos y Telégrafos, José Francos Rodríguez, Imprenta de V.H. de Sanz Calleja, Madrid, 1917.

Saldaña-1930. Al servicio de la justicia: la orgía áurea de la dictadura, Quintiliano Saldaña, Ed. Javier Morata, Madrid, 1930.

Sampson-1973. El Estado Soberano de la ITT, Anthony Sampson, Ed. Dopesa, Barcelona, 1973.

Guillén-1977. ITT e IBM en España: el "holding" de la ITT y el monopolio de la IBM en España, Abraham Guillén, Imprenta Zero, Bilbao, 1977.

Martín-Retortillo y otros-1978. Autonomías regionales en España: traspaso de funciones y servicios. Sebastián Martín-Retortillo, Luis Cosculluela Montaner y Enrique Orduña Rebollo, Instituto de Estudios de Administración Local, 1978.

Alonso y Erroteta-1982. Auge y caída del imperio ITT, César Alonso Ríos y Peru Erroteta, Ed. Popular, Madrid, 1982.

Ingham-1983. Biographical dictionary of American business leaders, volumen 1, John N. Ingham, Greenwood Publishing Group, 1983.

Casassas i Ymbert-1983. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): textos, Jordi Casassas i Ymbert, Ed. Anthropos, 1983.

Muniesa-1985. La burguesía catalana ante la II República Española, Volumen 2, Bernat Muniesa, Ed. Anthropos, 1985.

Villacorta-1989. Profesionales y burócratas: Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923, Francisco Villacorta Baños, Ed. Siglo XXI de España, 1989.

Olivé-1999. Primeros pasos de la telecomunicación, Sebastián Olivé Roig, editado por la Fundación Airtel, Madrid, 1999.

Pabón-1999. Cambó: 1876-1947, Jesús Pabón, Ed. Alpha, 1999.

Azaña-2000. Diarios completos: monarquía, república, guerra civil, Manuel Azaña, Ed. Crítica, Barcelona, 2000.

Sobel-2000. ITT: the management of opportunity, Robert Sobel, Ed. Beard Books, Washington, 2000.

De la Peña-2003. Historias de las telecomunicaciones, José de la Peña, Ed. Ariel, Barcelona, 2003.

Sánchez Marroyo-2003. La España del siglo XX: Economía, demografía y sociedad, Fernando Sánchez Marroyo, Ed. AKAL, 2003.

Canudas-2005. Las venas de plata en la historia de México: síntesis de historia económica, siglo XIX, volumen 3, Enrique Canudas, Ed. Utopía y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2005.

Carreras y Tafunell-2005. Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX, volumen 1, Albert Carreras, Xavier Tafunell y otros, Fundación BBVA, 2005.

Rico y otros-2006. Crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas (dos volúmenes), César Rico y otros, editado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 2006.

Sanjuán y otros-2006. De las señales de humo a la Sociedad del Conocimiento: 150 años de telecomunicaciones en España, Olga Pérez Sanjuán y otros, editado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 2006.

Enciso y Matés-2006. Historia económica de España, Agustín González Enciso y Juan Manuel Matés Barco, Ed. Ariel, 2006.

Calvo-2010. Historia de Telefónica: 1924-1975, Ángel Calvo Calvo, Ed. Ariel y Fundación Telefónica, 2010.

5.3. Tesis doctorales

Gutiérrez-1997. Proceso de integración de las redes telefónicas en la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), Tesis Doctoral de Jaime Gutiérrez Alonso, Dpto. Periodismo, Universidad del País Vasco, 1997.

Yuste-2004. La Compañía Telefónica Nacional de España en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Tesis Doctoral de Antonio Pérez Yuste, Dpto. Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, mayo 2004.

Gómez-2009. La administración local en la Dictadura de Primo de Rivera, Tesis Doctoral de José Antonio Gómez Pedreira, Dpto. Historia Social y del Pensamiento Político, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009.

5.4. Artículos y conferencias

Marín-1924. La central telefónica automática de Balaguer, Manuel Marín Bonell, Revista Ibérica, 12 de abril de 1924, vol. XXI, nº 523, pp. 226-228.

ITT-1925. La unificación del servicio telefónico en España, ITT, Revista Telefónica Internacional, vol. 1, nº 1, pp. 4-8, marzo 1925.

McLarn-1927. Coin operated Telephone pay stations, E.S. McLarn, Electrical Communication, Technical Journal of International Standard Electric, 1927.

McKim-1928. Providing Madrid with automatic telephone service, Kenneth McKim, Electrical Communication Technical Journal of International Standard Electric, volumen VI, nº 3, pp. 127-140, enero 1928.

Caldwell y otros-1930. The new telephone plant in Barcelona, F.T. Caldwell, B.A. Turkhud y J.J. Parsons, Electrical Communication, Technical Journal of International Standard Electric, vol. IX, nº 2, pp. 79-99, octubre 1930.

Backwell y Gopegui-1939. Carrier Systems in Spain, O.C. Bagwell y J.R. Gopegui, Electrical Communication, Technical Journal of International Standard Electric, 1930.

Warren y Parsons-1931. The new Madrid toll board, W.H. Warren y J.J. Parsons, Electrical Communication, Technical Journal of International Standard Electric, 1931.

Muro-1932. Estudio del contrato celebrado entre el Estado y la Compañía Telefónica Nacional de España, Agustín Muro Abad, Colección de artículos publicados en la revista Telégrafos a lo largo de 1932.

Carballo-1979. El capital extranjero y la dictadura: la ITT en España, Roberto Carballo Cortiña, Cuaderno Económicos de ICE, nº 10, pp. 579-600, 1979.

Altshuler-1991. Cuba, plataforma de lanzamiento y polígono de pruebas de la ITT, José Altshuler, 1991.

Calvo-1998. El teléfono en España antes de Telefónica (1877-1924), Ángel Calvo Calvo, Revista de Historia Industrial, nº 13, pp. 59-81, 1998.

Calvo-1999. Ciudad e innovación: la formación de los sistemas telefónicos urbanos en Europa, Ángel Calvo Calvo, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 52, 15 de noviembre de 1999.

Carrasco-2001. Evolución histórica de la conmutación telefónica, José Manuel Carrasco, 2001.

Yuste y Salazar-2003. La influencia de la ITT en la automatización del sistema telefónico de Madrid, Antonio Pérez Yuste y Magdalena Salazar Palma, XVIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI'2003), La Coruña, septiembre 2003.

Algarra-2003. Centrales telefónicas norteamericanas en los años 20, Francisco Javier García Algarra, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, pp. 199-221, 2003.

Romeo-2005. 150 años de telecomunicaciones. La telefonía, José María Romeo López, Revista BIT, 2005.

Álvaro-2005. Redes empresariales, inversión directa extranjera y monopolio: el caso de Telefónica (1924 – c. 1965), Adoración Álvaro Moya, VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, septiembre de 2005.

Martín de la Vega-2006. Breve cronología de la telecomunicación española, 2006.

Huidobro-2006. El teléfono: de los orígenes a la actualidad, José Manuel Huidobro, 2006.

Yuste-2006. De la Cierva y la primera Ley de Telecomunicaciones de España, Antonio Pérez Yuste, Foro histórico de las telecomunicaciones, 2006.

Gutiérrez-2007. Proceso de integración de las redes telefónicas de San Sebastián y Guipúzcoa en la CTNE, Jaime Gutiérrez Alonso, Cuadernos de Historia Contemporánea, volumen 29, pp. 75-94, 2007.

Calvo-2006. Telefónica toma el mando: monopolio privado, modernización y expansión de la telefonía en España (1924-1945), Ángel Calvo Calvo, Revista de Historia Industrial, nº 32, año XV, 2006.

Yuste-2007. La creación de la Compañía Telefónica Nacional de España en la Dictadura de Primo de Rivera, Antonio Pérez Yuste, Cuadernos de Historia Contemporánea, volumen 29, pp. 95-117, 2007.

Calvo-2008. Cambio tecnológico en la telefonía de Cataluña durante el monopolio de la CTNE, 1924-1936, Ángela Calvo Calvo, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, volumen 1, pp. 169-176, 2008.

5.5. Periódicos y revistas

ABC, Prensa española, Madrid. Años consultados: 1921-1930, 1957.

La Acción, Prensa española. Años consultados: 1922-1926.

Boletín Oficial del Cuerpo de Telégrafos, Imprenta de Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid. Años consultados: 1923-1924.

La Correspondencia de España, Prensa española. Años consultados: 1922-1926.

Diario Oficial de Comunicaciones, Editado por la Dirección General de Comunicaciones, Impreso en los Talleres Gráficos de Comunicaciones, Madrid. Años consultados: 1925-1926.

The Economist, Prensa británica. Años consultados: 1924.

Electrical Communication Technical Journal of International Standard Electric, editado por la International Standard Electric Corporation, New York. Años consultados: 1924-1931.

Electra, Revista técnica, Madrid. Años consultados: 1923-1926.

El Electricista, Revista General de Electricidad, editado por A. Lamas y J.M. Díaz, C/ Castelló, 7, Madrid. Años consultados: 1923-1925.

Electrón, Revista especializada, Madrid. Años consultados: 1897.

La Época, Diario de Madrid. Años consultados: 1922-1926.

Gaceta de Madrid, Madrid. Años consultados: 1882-1928.

El Globo, Prensa de Madrid. Años consultados: 1922-1926.

Heraldo de Madrid, Madrid. Años consultados: 1922-1926.

El Imparcial, Prensa española. Años consultados: 1922-1926.

La Libertad, Prensa española. Años consultados: 1922-1926.

New York Magazine, Revista del New York Herald Tribune. Años consultados: 1973.

New York Times, Diario de Nueva York. Años consultados: 1922.

El País, Diario de Madrid. Años consultados: 1982.

Revista Telefónica Española, Órgano del Personal de la Compañía Telefónica Nacional de España, Madrid. Años consultados: 1925-1926.

Siglo futuro, Prensa española. Años consultados: 1922-1926.

El Sol, Diario de Madrid. Años consultados: 1923-1928.

Telégrafos, Revista especializada, Madrid. Años consultados: 1877-1879, 1883, 1892, 1932.

La Vanguardia, Diario de Barcelona. Años consultados: 1922-1929.

La Voz, Prensa española. Años consultados: 1922-1926.

5.6. Documentos

Carta circular enviada por Lewis J. Proctor, el 7 de mayo de 1923, a todas las “fuerzas vivas” de España informando sobre el proyecto que pretendía acometer la ITT para establecer un moderno y completo sistema telefónico, requiriendo opinión sobre el mismo. Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Legajo 689, Expediente 19.

Cartas enviadas al Presidente del Directorio Militar pidiendo se incaute el Estado de la Red Telefónica Interurbana. Fondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, Dictadura de Primo de Rivera, legajo 52, expediente 496, 1923.

Escritura de constitución de la sociedad mercantil anónima “Compañía Telefónica Nacional de España”, otorgada el 19 de abril de 1924 ante el notario de la Corte D. Alejandro Roselló y Pastors. Archivo de Telefónica.

Actas de las reuniones del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica Nacional de España. Archivo de Telefónica. Años consultados: 1924-1926.

Contrato privado entre la “Compañía Telefónica Nacional de España” y la “International Telephone and Telegraph Corporation”, firmado por Julián Cifuentes Fernández, Gumersindo Rico y Sosthenes Behn, en Madrid a 19 de abril de 1924. Archivo de Telefónica.

Ponencia del general Muslera sobre la dotación de un moderno y completo servicio telefónico para España y nombrando la comisión para su estudio. Fondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, Dictadura de Primo de Rivera, caja 240/2, expediente 35, mayo 1924.

Ponencias del general Mayandía y del general Ruíz del Portal sobre el proyecto de contrato de servicios telefónicos con la CTNE. Fondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, Dictadura de Primo de Rivera, caja 223/1, expediente 6, agosto 1924.

Contratos privados entre la “Compañía Telefónica Nacional de España” y la “International Telephone and Telegraph Corporation”, firmados por Julián Cifuentes Fernández, Gumersindo Rico y Sosthenes Behn, en Madrid a 29 de agosto de 1924. Archivo de Telefónica.

Actas de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Compañía Telefónica Nacional de España. Archivo de Telefónica. Años consultados: 1924-1926.

Memorias anuales presentadas por el Consejo de Administración a la Junta general ordinaria de accionistas, Compañía Telefónica Nacional de España, Madrid. Años consultados: 1924-1926, 1935, 1945. Archivo de Telefónica.

España y el teléfono: programa de la Compañía Telefónica Nacional de España. Folleto editado por la International Telephone and Telegraph Corporation, 1925.

Ponencia del general Muslera aclarando la base 4ª del contrato con la Compañía Telefónica Nacional de España. Fondos contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, Dictadura de Primo de Rivera, caja 240/2, expediente 36, mayo 1925.

Acta de liquidación de la Mancomunidad de Cataluña, redactada por la Comisión gestora interina de los Servicios coordinados en 30 de junio de 1925. Autonomías regionales en España: traspaso de funciones y servicios, Instituto de Estudios de Administración Local, 1978.

Folleto turístico del Bureau de Información Pro-España: España (1925), Madrid (1926), Sevilla (1926), San Sebastián (1926), Barcelona (1927), Asturias (1928) y las Exposiciones Iberoamericana de Sevilla e Internacional de Barcelona (1929). Editados por la International Telephone and Telegraph Corporation, 41 Broad Street, Nueva York.

Instrucciones para el uso del teléfono automático, Compañía Telefónica Nacional de España, 1926.

5.7. Páginas web

Telefónica: <http://www.telefonica.es>

Fundación Telefónica: <http://www.fundacion.telefonica.com>

Siemens: <http://www.siemens.de>

Historia de Ericsson: <http://www.ericssonhistory.com>

Historia de AT&T: <http://www.att.com/history>

Instituto Nacional de Estadística de España: <http://www.ine.es>

Senado de España: <http://www.senado.es>

Congreso de los Diputados de España: <http://www.congreso.es>

Archivo Histórico de la Oficina de Patentes y Marcas: <http://historico.oepm.es>

Foro Histórico de las Telecomunicaciones: <http://www.coit.es/foro>